



Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social

DOCUMENTO DE TRABAJO N°37

Acta V Seminario Internacional
“Desigualdad y Movilidad Social en América Latina”

Documento actualizado el 18 de marzo de 2021

Mayo, 2019
ISSN 0719-6660

Indice

MESA 1: DETERMINANTES DE LA MOVILIDAD SOCIAL Y LOGRO DE ESTATUS.....	3
Diversas y nuevas composiciones estudiantiles de las universidades del conurbano bonaerense argentino: ¿tras las búsquedas de movilidad social en contextos complejos?	4
Carina Sandra Antón, Mara Mattioni y Pablo Granovsky.....	4
El capital social en movimiento: un análisis de procesos de logro de estatus a partir de path analysis en el Área Metropolitana de Buenos Aires	18
Joaquín Carrascosa	18
Un enfoque regional de la movilidad social intergeneracional en México: ¿importa la exposición a la apertura comercial?	42
Christian Joel González Cuatianquis.....	42
La movilidad educativa en dos ciudades uruguayas. Una aproximación descriptiva.....	62
Rafael Rey	62
MESA 2: CLASE, CONDICIONES LABORALES Y SINDICALISMO	72
Sindicatos y gobierno en la gestión de la alianza cambiamos en Argentina	73
Patricia Lecaro y Patricia Gorri.....	73
El SINAMI y los trabajadores subcontratados del cobre: desde la precariedad y la identidad	95
María Fernanda Veliz Bravo.....	95
MESA 3: CLIVAJES E INTERSECCIONALIDAD	117
La segregación ocupacional en el mercado laboral por razón de sexo. Un análisis del caso colombiano: 2007-2018	118
Nayssa Alejandra Marín y Lucy Victoria Ojeda	118
Movilidad social intergeneracional de la riqueza y de la educación de la población indígena de México. 130	
Jesús David Aban Tamayo.....	130
“Lo tuyo, lo mío y lo nuestro”: hacia una lectura feminista de los arreglos económicos en las relaciones de pareja.....	152
Lorena Pérez-Roa y Lelya Troncoso Pérez.....	152
Estratificación y desigualdad étnica en México: el caso de Yucatán.	172
Braulio Güémez	172
Perfiles de mujeres trabajadoras de la industria hidrocarburífera de la cuenca del golfo San Jorge	193
Renata Hiller, Belén Aguinaga, Natalia Barrionuevo y Paolo Paris.....	193
MESA 4: INNOVACIONES METODOLÓGICAS.....	214
Reproducción social y estrategias metodológicas: el abordaje del consumo como expresión de las desigualdades de clase en familias cordobesas.	215
Alicia Gutiérrez y Héctor Mansilla	215
El efecto de la maternidad en el salario femenino en Chile. Un análisis a partir de propensity score matching.	237
Emilia Seissus Ercilla	237
MESA 5: ACUMULACIÓN, RIQUEZA Y REPRODUCCIÓN	258
El departamento de Lavalle en el circuito económico provincial: territorialidades invisibles del noreste de Mendoza, Argentina.....	259
Carla Carabaca Videla.....	259
Desigualdad y Riquezas. Un análisis desde la categoría de Grupos de poder económico en Paraguay. Los casos del grupo Favero y A. J. Vierci.	277

Dalila Sosa Marín	277
MESA 6: DESIGUALDAD, CLASES SOCIALES, CONFLICTO Y COHESIÓN	295
Configuración del campo de las escuelas de élite chilenas. ¿Quiénes son y que dinámicas han posibilitado su acceso a posiciones de poder en el campo educativo?	296
Tomás Ilabaca y Javier Corvalán.....	296
Reconfiguración socioespacial y autoorganización en las villas 1, 11, 14 y barrio 31 ex villa 31 en la ciudad autónoma de buenos aires	315
Sandra Avalos y Rosana Espejo	315
De la desigualdad, su significación y de la clausura del estrato: una investigación de tres poblaciones en una comuna del sur de Santiago.....	326
Rodrigo Ignacio Cortés Muñoz	326
Tácticas y estrategias de integración y (auto) segregación en nuevos conjuntos de vivienda social. Reflexiones sobre las experiencias de construcción de comunidad post campamento en Chile	345
Christian Matus y Alvaro Ramoneda.	345
Estrategias de pago de deudas en jóvenes profesionales y deudores de Santiago de Chile: tipologías a partir de un análisis de clases latentes	368
Lorena Pérez-Roa y María Constanza Ayala.....	368
La segregación ocupacional en el mercado laboral por razón de sexo. Un análisis del caso colombiano: 2007-2018	383
Nayssa Alejandra Marín y Lucy Victoria Ojeda	383
MESA 8: BIENESTAR, POLÍTICA SOCIAL Y POBREZA.....	396
Entre la creciente desigualdad, el bienestar cambio de rumbo. Notas analíticas comparativas sobre políticas sociales en Argentina, Uruguay y Chile.....	397
Patricia Elizabeth Scarponetti*	397
Políticas Públicas, Exclusión y Conformación de Identidades Colectivas	421
Sandra Raquel Avalos	421
Planificación y urbanización del barrio 31 y 31 bis	437
Rosana Karina Espejo	437
Divulgación del concepto de corrupción en la coexistencia de formalidad e informalidad en un contexto de pobreza (el caso de cuatro municipios de la Araucanía).	450
Diego Márquez Ossandón	450
Efectividad de las políticas públicas para combatir la desigualdad: el caso de Bolívar, Colombia	472
Cristian Camilo Rodríguez Olaya*	472
Pobreza, seguridad alimentaria y políticas sociales en Argentina (2014-2018).....	485
María Susana Ortale y Javier A. Santos.....	485
Clase media y corrupción: intersecciones entre la identidad de clase y la corrupción política	505
Fernando Toyos	505
MESA 10: SUBJETIVIDAD Y CLASE SOCIAL.....	521
Identidades en tránsito: procesos de movilidad socio-urbana y configuración identitaria en jóvenes de barrios excluidos de Santiago de Chile.	522
Teresa Ropert, Dariela Sharim y Andrés Di Masso.....	522

**MESA 1: DETERMINANTES DE LA MOVILIDAD SOCIAL Y LOGRO DE
ESTATUS**

Diversas y nuevas composiciones estudiantiles de las universidades del conurbano bonaerense argentino: ¿tras las búsquedas de movilidad social en contextos complejos?

Carina Sandra Antón, Mara Mattioni y Pablo Granovsky

Universidad Nacional de La Matanza.

carinanton@yahoo.com.ar

maramattioni@hotmail.com

pgranovsky2004@yahoo.com.ar

Resumen

La República Argentina, en estos últimos años, como parte de sus políticas públicas, desarrolló abordajes focalizados en la finalización de la escuela secundaria y el ingreso al sistema universitario (Isacovich y Petrelli, 2016). El consecuente incremento de la accesibilidad posibilitó que la movilidad social se transforme en un anhelo de las nuevas generaciones. Así, este trabajo intenta reconstruir algunos elementos constitutivos de este proceso caracterizado por modificaciones en el acceso y la permanencia en instituciones vinculadas con la educación superior a partir de los sujetos que las habitan, recuperando la tensión entre las trayectorias estudiantiles de ingresantes a las universidades públicas argentinas y los diversos sentidos otorgados por ellos a las categorías de pertenencia de clase y movilidad social. En este sentido, la propuesta se enmarca en la metodología cualitativa, enfocándose en un diseño flexible y longitudinal de carácter biográfico. (Sautu, 1998). Epistemológicamente, la propuesta considera la construcción de conocimiento como una instancia dialogada, plural y situada; donde aquellos protagonistas de las tramas sociales sean quienes son conocidos (Vasilachis, 2006).

La ponencia se plantea considerar el entramado de subjetividades y dimensiones socioeducativas en una realidad social que genera particulares reflexiones subjetivas respecto de los procesos de movilidad social.

Palabras Claves: UNIVERSIDADES NACIONALES - CONURBANO BONAERENSE-
MOVILIDAD SOCIAL - TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES

Introducción

Durante el advenimiento del siglo XX y XXI, la educación superior se ha posicionado como una fortaleza de los estados a nivel mundial, dando cuenta de una masificación interna y continua sin antecedentes (Ezcurra, 2007, 2011). Específicamente en el ámbito regional y nacional, es posible reconocer que el incremento de ingresantes en la educación universitaria se ha sumado a cierta heterogeneidad a nivel étéreo, económico e incluso respecto de las experiencias educativas previas.

Las políticas sociales desarrolladas en Argentina durante la década de los '90, de orientación neoliberal, se expresaron en la dispersión de ingresos y el descenso del poder adquisitivo de los sectores populares, lo que repercutió directamente en los sectores laborales y sociales más desfavorecidos, representados de manera cada vez más fragmentada, generando una visibilización creciente de los “Nuevos Pobres” (Barattini, Bonaldi, del Cueto, Gentile y Luzzi, 2013)

Focalizando en el territorio argentino, en el año 1995 se sancionó la Ley Nacional de Educación Superior (24.521), la cual se constituyó en un dispositivo legal regulatorio de la totalidad del sistema universitario. Este marco normativo implementó el desarrollo de la Secretaría de políticas universitarias (SPU), como órgano de fiscalización y control, así como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), dando lugar a nuevos lineamientos, sentidos y orientaciones para la planificación e implementación de políticas sociales educativas. En esta línea, Lucardi (2018) explica la expansión del sistema universitario argentino como parte de las políticas públicas sociales orientadas a favorecer la democratización universitaria, posibilitando que un significativo conjunto de personas que hasta el momento se encontraban excluidas del ejercicio de este derecho, puedan acceder al mismo.

A lo largo de la década de 1990, en el marco de un modelo neoliberal, tuvo lugar el inicio de un proceso de transformación del sistema universitario, siendo uno de los propósitos principales la diversificación. Así, la expansión de la educación superior de la mano de lo que se han dado en llamar “Nuevas universidades de Conurbano Bonaerense” dio lugar a la creación de instituciones con una organización diferente a la tradicional, reconociendo la

educación superior como un bien público, como así lo establece el marco normativo, con propósitos enfocados en la equidad, la inclusión y la movilidad social ascendente a partir de la ampliación de oportunidades (Miguez, 2018).

Continuando este proceso, en el año 2015 se sanciona la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado (27.201) en el nivel superior, generando modificaciones específicas en el rol del Estado como garante de derechos y estableciendo regulaciones en el acceso a la educación superior que permitió abandonar la selectividad, el establecimiento de un máximo de aspirantes a través de la fijación de vacantes o cupos por carrera, así como las pruebas de aptitud o conocimiento al finalizar la escuela media como mérito de acceso a los estudios superiores.

Las transformaciones socio históricas mencionadas requieren de análisis que contemplen no solo estudios documentales y estadísticos, sino también que visibilicen la percepción de los cambios en los modos de ser, estar y atravesar de los estudiantes antiguamente contemplados desde lógicas y prácticas tradicionales, al interior de una universidad anclada históricamente en la legitimidad científica de los saberes que transmitía y en el estatus económico y social que habilitaba a aquellos que pasaban exitosamente por las aulas.

De este modo, a partir del despliegue de un estudio biográfico, se buscará reconstruir y comprender este transcurrir caracterizado por modificaciones en el acceso y la permanencia en instituciones de educación superior, integrando relatos de vida que pongan de manifiesto la pluralidad de modos en los que el proceso de subjetivación (Deleuze, 2015) que conlleva el acceso a la educación superior, impregna la propia vida y el entorno.

Aproximaciones epistemológicas y metodológicas.

A nivel epistemológico la propuesta abona al conocimiento situado posicionando como protagonistas de la construcción de saberes a los sujetos que habitan las instituciones de enseñanza superior. Esta perspectiva epistemológica permite abordar desde otras aristas a la desigualdad y como entran en juego las subjetividades a la hora de pensar, en las condiciones actuales, categorías “clásicas” de las ciencias sociales como las de clases sociales.

En este sentido, se plantea la implicancia de considerar este entramado de subjetividades y dimensiones socioeducativas estableciendo la construcción de conocimiento en una realidad social, económica y educativa cada vez más compleja (Morín, 2007; Samaja, 2006) que

genera particulares tendencias y reflexiones subjetivas respecto de los procesos de movilidad social.

Respecto de su encuadre metodológico, la propuesta se enmarca en la metodología cualitativa, enfocándose en un diseño flexible y longitudinal de carácter biográfico. (Arguello Parra, 2012; Sautu, 1998; Vasilachis, 2006). La elección del diseño metodológico radica en el posicionamiento epistemológico de este equipo de investigación (Santos, 2009; Santos, 2018; Binimelis-Espinoza y Roldán Tonioni, 2017) que considera la construcción de conocimiento como una instancia dialogada, plural y situada (Cruz, Reyes y Cornejo, 2012); donde aquellos protagonistas de las tramas sociales sean quienes son conocidos y sus propios esquemas de pensamiento y reflexión y, no avasallados por quienes los conocen con matrices que muchas veces se alejan de las subjetividades (Vasilachis, 2006)

Recuperando la tensión presentada entre la subjetividad de los nuevos actores ingresantes a las universidades públicas argentinas y los diversos sentidos otorgados por ellos a las categorías de pertenencia de clase, estatus y movilidad social a lo largo de sus vidas estudiantiles, se realizaron entrevistas de corte biográfico a estudiantes de primer año, en tramo intermedio y recientes graduados de universidades nacionales de primera y segunda generación (Mattioni, 2017), siendo dichos sujetos primera generación de estudiantes universitarios dentro de sus grupos familiares nucleares.

El abordaje metodológico asume, entonces, la forma de una búsqueda reconstructiva de la perspectiva de los actores, en una simetría entre actor e investigador. Siguiendo el planteo inicial, se adopta un enfoque metodológico cualitativo vinculándolo con la reconstrucción de las prácticas sociales de los actores, con el uso de métodos flexibles, inductivos, centrada en construir teorías fundamentadas empíricamente desde una pluralidad de enfoques (Vasilachis, 1992; 2006). Es así que este abordaje intenta colaborar en reconstruir aspectos significativos de la perspectiva del actor social en sus prácticas y representaciones. Se produce conocimiento científico en la interacción con los saberes prácticos de los actores, lo que se corresponde con gran parte de los desarrollos empíricos de los métodos de investigación cualitativos siendo los más pertinentes para abordar la mirada de los propios participantes de la acción (Rojas, 1999). También es clave el enfoque en las especificidades y elementos distintivos que caracterizan la mirada del actor sobre el fenómeno considerado (Neinman y Quaranta, 2006).

Este enfoque epistemológico implica poder reconstruir la complejidad de interacciones entre las racionalidades de distinta naturaleza que coexisten en la realidad social, siguiendo lo planteado por Dubet (2012), articulando elementos de la tradición crítica de las ciencias sociales con una sociología pragmática –vinculada a la gestión/intervención en ámbitos públicos y privados-, direccionándolos en el sentido del desarrollo de una “sociología de la intervención”, asociada a la participación del científico en el proceso de conformación de los propios sujetos sociales en un doble rol: de analista/crítico e intérprete/interventor.¹

Aquí también, la figura del investigador se asemeja a la de un mediador social que trabaja con el actor, potenciando sus saberes prácticos a partir de una reconstrucción de su experiencia. Esta reapropiación de experiencia potencia los saberes a través de distintas mediaciones epistémicas y pragmáticas –de conocimiento e intervención-, articuladas por el lenguaje ordinario en la interacción con el actor (Rojas, 2014).

Así, el investigador, mediante intercambios lingüísticos con el actor y la reconstrucción racional de su experiencia, asume una posición dual, como analista -intelectual crítico- y como intérprete –postura pragmática y de intervención-, planteando una distancia negociada y siempre reactualizada con el actor, estableciendo un contexto demandante de potenciar y ampliar los saberes de los actores.

También, nuestro abordaje epistemológico, supone un intento metódico y una acción persistente por abandonar la perspectiva del observador y entrar en el mundo de la vida de los fenómenos sociales, “hablar y actuar” en las prácticas sociales y en el mundo de la vida de los actores sabiendo que el sentido que estos adquieren no está en los fenómenos sino en la intervención en ellos. El “realismo” de este enfoque se “juzga” desde dentro de la acción no desde fuera, no hay realidad externa, no depende de algo externo; en la propia acción tiene lugar.

Se plantea, entonces, un estilo y modo de investigación donde saber es inter-saber, un particular ejercicio de interpretación, más que de “dar explicaciones”. El actor nos convoca al entendimiento no a la explicación, investigación es acción y su sentido debe ser construido. Se entiende a sí misma como comunicación, como un efecto del vínculo; y tiene pretensión de entendimiento en el mundo de la vida.

¹ En este caso adoptamos el enfoque de Alain Touraine y su sociología de la intervención retomada por François Dubet.

Entonces, siguiendo con el enfoque presentado, se busca caracterizar la investigación cualitativa vinculándola con la reconstrucción de las prácticas sociales de los actores, con el uso de métodos flexibles, inductivos, centrada en construir categorías conceptuales fundamentadas en la singularidad del “caso” considerado.

Se rescata, también, el concepto de reflexión epistemológica, acercando la epistemología a la práctica de investigación, en el marco de la discusión sobre los paradigmas diversos presentes en las ciencias sociales. Bajo esta perspectiva metodológica, la reflexión, para el investigador, implica la problematización de los supuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos del proceso de construcción de su objeto de estudio y de la coexistencia paradigmática, en tanto elementos distintivos de la práctica de investigación, este entramado implican la “convivencia” de distintas tradiciones teórico-metodológicas que son utilizadas con criterio “pragmático” por el investigador, en el marco de cada estudio, de acuerdo a sus propios objetivos (Vasilaschis, 1992).

De este modo, epistemología y metodología se articulan en el “oficio” del científico social con su *habitus* (en términos de Bourdieu), donde la especificidad de la práctica del investigador se relaciona con sus capacidades para transformar evidencia empírica específica en dispositivos conceptuales más complejos -creación de categorías conceptuales fundamentadas en los datos y en el “caso” (Bourdieu y Wacquant, 2005).

Políticas sociales y acceso a la educación superior en contextos complejos atravesados por la desigualdad.

La expansión de la educación superior argentina se inscribe en un proceso más amplio de abordaje estatal de los sectores populares, las juventudes y el crecimiento de la escolarización. En esta línea es posible dar cuenta de un conjunto de programas orientados a la terminalidad de la educación secundaria vinculados con la inclusión escolar que dieron lugar a distintas modalidades y programas² que posibilitan que los estudiantes finalicen el nivel medio ya sean adolescentes, jóvenes o adultos.

² “El Plan FinEs es una iniciativa de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación de la Nación, para la finalización de los estudios secundarios de todos aquellos que por distintos motivos no pudieron hacerlo dentro de los tiempos formales de educación. El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) está destinado a jóvenes entre los 18 y 24 años que trabajan o están desempleados pero cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo, con el objetivo de que inicien o completen estudios formales o de alguna especialidad” (Southwell, 2015).

Las autoras Feldfeber y Gluz (2011) expresan que las políticas sociales educativas para garantizar la inclusión en el sistema educativo estuvieron hasta el año 2009 centradas en transformaciones legislativas sin plasmarse en implementaciones concreta. Fue en mayo de ese año se aprobó el Plan Nacional de Educación Obligatoria en el 2010 el lanzamiento del Plan de Mejora Institucional para la Educación Secundaria, con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza y acompañar las trayectorias pedagógicas de los estudiantes. En este escenario, las propuestas de apoyo socioeducativo para estudiantes, escuelas y jurisdicciones tuvieron como objetivos promover el derecho a la educación de jóvenes y adolescentes, así como garantizar el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeducativa a través, inclusive, de programas tales como Conectar Igualdad (Ros, Cimolai y otros, 2014).

Este entramado de políticas y su implementación que impacto favorablemente dando lugar a un incremento de aquellos estudiantes que culminaron sus estudios secundarios, se dio de manera paralela al crecimiento sistemático y permanente del sistema universitario argentino, considerando el incremento de cuatro universidades nacionales a inicios del siglo XX a cuarenta y ocho universidades nacionales durante el año 2014 (Ozollo y Papparini, 2015) evidenciando la creación de universidades públicas en el todo el país y particularmente en la región del Conurbano Bonaerense³.

Las universidades de reciente creación han sido en sí mismas fundamentadas como políticas inclusivas (Marquina y Chiroleu, 2015) y de promoción de la movilidad ascendente en territorios habitados por sectores populares (Colabella y Vargas, 2014). Asimismo, fue precisamente en estas casas de estudio donde se generaron políticas específicas vinculadas con la inclusión académica tales como la oferta de becas de apoyo a estudios de grado, cursos de lectoescritura, dispositivos de tutorías e incluso ciclos de capacitación docente en pedagogía específica del nivel. De este modo, en cada contexto se fueron re significando los

3 El **Instituto Nacional de Estadísticas y Censos** (INDEC) define que el "Gran Buenos Aires", abarca la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos cercanos, que conforman el Conurbano Bonaerense, a partir de 2016, lo integran los 31 partidos de la provincia de Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Escobar y Pilar.

trayectos personales y sociales de los sujetos, e incluso modificando y diversificando la conformación de las poblaciones estudiantiles que ingresan a la universidad.

A partir del desarrollo de las nuevas universidades nacionales del Conurbano Bonaerense se constituyó un escenario con características distintivas propias de la región geográfica donde se encuentran ubicadas, de sus ofertas académicas y por la población estudiantil que asisten a estas instituciones.

Respecto de las poblaciones estudiantiles es a partir de las transformaciones mencionadas que las instituciones de enseñanza superior en la Argentina contemporánea evidencian un ingreso ampliado que diversifica la “clientela” de la educación universitaria y que incluye estudiantes con posiciones de clase sumamente diferentes de las de la base tradicional de la clientela universitaria, con oportunidades y restricciones sumamente particulares deudoras de los cambios en la estructura social de la sociedad Argentina contemporánea (Noel, 2010). Esta oferta universitaria posibilita que los jóvenes se constituyan en la primera generación en sus familias en alcanzar mayores niveles educativos, incrementando sus posibilidades para acceder a mejores ingresos, progresar y participar en el desarrollo de sus contextos locales. En este marco contextual, el investigador Gabriel Noel (2010) plantea que aparecen cada vez en mayor número estudiantes universitarios con trayectorias fuertemente divergentes de las asimilables a ese tipo ideal que hemos internalizado como modelo de estudiante universitario, coexistiendo en las aulas con los herederos de muchos de los efectos deletéreos de las profundas transformaciones sociales y culturales que la Argentina ha atravesado en las últimas décadas e interpelando la noción de movilidad social ofreciendo nuevos modos de ser y habitar la realidad social.

Trayectorias de estudiantes universitarios de primera generación: ¿tras la búsqueda de movilidad?

El ingreso de nuevas poblaciones a la vida universitaria se materializó de diversos modos en las trayectorias vitales de los estudiantes, poniendo en juego expectativas de ascenso y/o pertenencia social, y alterando las percepciones que se construyen sobre ellos mismos y su entorno.

El propósito principal de la propuesta radica en hacer foco en las transformaciones subjetivas que tuvieron lugar a partir del ingreso a la universidad, analizando los puntos de partida de

los estudiantes entrevistados intentando comprender los distintos modos de deconstruir trayectorias y escenarios a través de la noción de desigualdad.

En el “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados” Norbert Elías (1998) propone un análisis en torno a la desigualdad social vinculada con la dimensión simbólica de las relaciones sociales, presentando la figuración “establecidos-outsiders” identificando y caracterizando a dos grupos de personas que componen una población a partir de las interacciones sociales establecidas.

Este análisis nos resulta de suma pertinencia a los fines de la presente propuesta considerando que el ingreso y la permanencia en la universidad se ha materializado en las historias de vida de los estudiantes y graduados convocados para la investigación, entre otras formas, en dicotomías que polarizan un “nosotros” y un “ellos” como ser: “la UBA y la UNLaM”; “el Trabajo Social y otras carreras de las ciencias sociales”; “el grupo familiar no universitario y ellos mismos”, “el centro y el conurbano” e incluso, “cada entrevistado antes de iniciar su formación y su propia versión atravesada por la vida universitaria”.

El abordaje de la figuración de establecidos y marginados de Elías (1998) requiere, en principio, de un grupo que presente un grado más alto de cohesión que el otro. Su mayor cohesión lo capacita a reservar diferentes posiciones sociales con un alto potencial de poder para sus propios miembros, y esto por su parte refuerza la posibilidad de excluir a los miembros de otros grupos. Las diferencias en el grado de cohesión interna pueden resultar decisivas dado que los diferenciales de cohesión e integración son importantes como raíz de desigualdades de poder.

De este modo, la estigmatización, entendida como la capacidad de un grupo de colocarle a otro la marca de inferioridad humana, se plantea en clave figuracional considerando que tiene lugar a partir de pensar a los dos grupos en relación mutua. Así, este proceso es entendido como la socio dinámica de la estigmatización, es decir, las condiciones bajo las cuales un grupo puede denigrar de otro y aceptar la denigración como esperable. En relación con dichas claves figuracionales, el estudiante B refiere: *“A mi hermano más grande, el viejo, no lo veo nunca. Él trabaja, ya tiene cinco hijos y armó su vida. Él era el hermano mayor, yo lo tenía “allá arriba” pero como que ahora últimamente bajó un poco. (...) Ahora soy yo el que está arriba, “yo estoy arriba de vos, vos que te hacías el inteligente, ahora soy yo” le digo, porque*

voy a la universidad (risas). Mis hermanos me descansan, me molestan porque yo sigo siendo el más chiquito, “vos siendo universitario sos tonto igual”.

A partir de pensar la estigmatización como una categoría que atraviesa el ingreso a la universidad de determinados sectores sociales, es posible introducir el concepto de “contra estigmatización”, surgido cuando los grupos anteriormente marginados tienden a “tomar revancha”, a la figuración establecidos y marginados como un tipo de relación momentánea, mostrando que los problemas cobran relevancia sólo si se considera a la balanza de poder entre tales grupos como algo cambiante y si se trabaja en dirección hacia un modelo que muestren el permanente movimiento de grupos establecidos que se vuelven marginados cuyos representantes llegan como nuevos establecidos a posiciones que les fueron denegadas anteriormente o que, según el caso, resultan paralizados como consecuencia de alguna opresión a lo largo del tiempo. Mientras perdure esta condición, el estigma colectivo impuesto a los sujetos históricamente marginados puede persistir y en general genera movimientos de fortalecimiento de carácter endogámicos que otorgan a sus miembros cierta sensación de cohesión grupal, tal como transmite el estudiante B: *“Cuando empezamos a cursar me hice amigo de dos chicas con las que había hecho el ingreso. (...) y luego me hice amigos y ahora estoy cursando con ellos. (...) Estoy acompañado de ellos, porque está bueno que te acompañen; así no estás solo y no te bajoneás. ¿Porque la voy a estar pasando mal solo haciendo frente a lo que otros me dicen para que deje o cambie de carrera o de universidad?”.*

El problema de la distribución de oportunidades de poder (Elias, 1998), tal como fuimos describiendo al historizar el acceso a la universidad en Argentina, se halla en el centro de las tensiones y conflictos entre establecidos y marginados, y por ello se torna inevitable, en un escenario que abona a la inclusión estudiantil, preguntarse cómo y por qué unos hombres se perciben como partes del mismo grupo y se incluyen unos a otros dentro de los límites grupales que ellos mismos establecen al hablar de “nosotros”, mientras que excluyen a otros como pertenecientes a otro grupo, al que se refieren colectivamente en términos de “ellos”. Varios de los estudiantes entrevistados refieren anécdotas vinculadas al momento en el que “yo era de esos que...” incluyendo otros comentarios donde mencionan cuestiones tales como *“luego, cuando empecé a ser parte de la universidad no entendía cómo podían decir esas cosas”.*

Las historias de vida estudiantiles recuperadas en la propuesta ofrecen múltiples matices respecto de las motivaciones y expectativas puestas en el acceso y la permanencia a la educación superior, mostrando divergencia en cada relato vital.

Si bien los estudiantes refieren percibir el acceso a la universidad como una herramienta de movilidad social ascendente, dando cuenta de las credenciales y los títulos necesarios para determinadas inserciones laborales, dicha experiencia promueve especialmente un incremento del capital simbólico que en términos de Bourdieu (2004: 138) “no es otra cosa que el capital económico o cultural cuando es conocido y reconocido”. Considerando que, siguiendo al autor, las relaciones objetivas de poder tienden a reproducirse en las relaciones de poder simbólico, esta capitalización se percibe como la posibilidad de incrementar las oportunidades de acceso a más y mejores opciones laborales: *“El trabajador es muy ninguneado, muy vulnerado en sus derechos por el simple hecho de no tener estudios. Ese maltrato me hacía ruido a mí. No por el hecho de no sentirme capaz; yo siempre sentí que era capaz. Sentía que la forma de estar vestido era una portación de una clase y significaba ya estar predestinado a ese estigma: vos no pensás, vos solo te tenés que dedicar a trabajar y lo tuyo no vale, tu opinión no vale. (...) Para mantener una calidad de vida tenía que tener que trabajar mucho y se me estaba yendo la vida y no estaba viviendo. Y así decidí largarme a estudiar”* (Estudiante C)

Siguiendo el testimonio del estudiante C es posible pensar ingreso y la permanencia en la universidad como un modo de acceder (e incluso ascender) a nuevas posiciones en el espacio social, e incluso en el mundo laboral. Así, en términos de Turner (1988), el acceso a la universidad en contextos complejos podría pensarse como un rito de pasaje entendiendo la pertenencia a los sectores populares como el estigma que impulsa la separación de los sujetos de la universidad, seguida de una instancia liminal o “marginal” como puede ser la permeabilidad del acceso restrictivo a la educación superior a través de las políticas sociales mencionadas a lo largo de la propuesta y teniendo como horizonte un escenario de agregación donde aquellos estudiantes segregados y luego incorporados al sistema universitario de modo liminal se experimenten encarnando un estatus superior al inicial.

Así, la iniciación en la educación superior no solo puede ser pensada como un sin fin de atravesamientos, sino, además, como el escenario que promueva un rito de pasaje de aquellos sujetos que conforman los sectores populares con anhelo de movilidad social.

Reflexiones finales

La Universidad Nacional de La Matanza, institución donde se llevó adelante el trabajo de campo enmarcada dentro de las denominadas nuevas universidades del conurbano bonaerense, fue construyendo un proceso de conformación y consolidación en su territorio constituyéndose como la puerta de acceso a la educación superior. En este contexto, nos resultó sugerente indagar sobre el impacto que esta propuesta académica, entendida como parte del conjunto de políticas sociales enfocadas en el nivel superior, tuvo en las trayectorias educativas y vitales de sus estudiantes y recientes graduados.

Recuperando y analizando los relatos de los estudiantes entrevistados hemos podido advertir que el ingreso a la universidad conlleva expectativas de ascenso social y de ampliación de oportunidades que adquieren tantas formas de manifestarse como procesos subjetivos encarnados. En este sentido, advertimos que el ingreso a la educación superior se posiciona como una instancia que posibilita atravesar los márgenes y asumir nuevas posiciones sociales, significando una importante transformación en la subjetividad.

Un aspecto clave en función de corroborar estos procesos se relaciona con las nuevas distinciones sociales que comienzan a construirse desde el ingreso a la vida universitaria. Así, identificamos distintas dimensiones que hacen a la construcción de un nuevo “nosotros”: la identificación con un nuevo grupo de pares, las distancias con los ámbitos de socialización anteriores, la desidentificación con las ideologías y los valores de los propios familiares, la deconstrucción de las relaciones de género, entre otras.

A lo largo del trabajo de campo los estudiantes entrevistados han aludido con insistencia a la formación teórica que forjaron en la universidad, a partir de la cual han logrado problematizar la realidad social que los rodea (Karz, 2006). En este sentido, resulta especialmente distintivo el carácter de irreversibilidad que tiene este proceso, es decir en términos de Turner (1988), la imposibilidad de retornar al estadio anterior, luego de haber atravesado las distintas fases del rito de iniciación, entendiendo que el modo de comprensión de la realidad social compleja aprehendido, así como la forma de vincularse con otros y con el territorio habitado y las expectativas respecto del curso de ciclo vital se muestra más que distante de aquel bagaje portado en instancias previas al punto de bifurcación (Argüello Parra, 2012), que significa en sus vidas ingreso a la universidad.

Bibliografía.

- Argüello Parra, A. (2012) Entre el tiempo y el relato. Consideraciones epistemológicas en torno a la perspectiva biográfica en la investigación social y educativa. Revista de investigación educativa N° 15. Universidad Veracruzana. México.
- Barattini, M., Bonaldi, P., del Cueto, C., Gentile, M. F., y Luzzi, M. (2013). Más allá de las continuidades y las rupturas: herramientas para pensar la estructura social argentina hoy. Lavboratorio, (25).
- Binimelis-Espinoza, H., y Roldán Tonioni, A. (2017). Sociedad, epistemología y metodología en Boaventura de Sousa Santos. Convergencia, 24(75), 215-235.
- Bourdieu, P y Wacqant, L. (2005), Una invitación a la Sociología Reflexiva, Siglo XXI, Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (2004) Cosas dichas. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Colabella, L. y P. Vargas (2014) ““La Jauretche”. Una universidad popular en la trama del sur del Gran Buenos Aires.” En: AAVV, Avances y desafíos en políticas públicas educativas: análisis de casos en Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Buenos Aires: CLACSO.
- Cruz, M. A., Reyes, M. J. y Cornejo, M. (2012). Conocimiento situado y el problema de la subjetividad del investigador/a. Cinta de Moebio, (45), 253-274.
- Deleuze, G. (2015) La subjetivación. Curso sobre Foucault. Buenos Aires: Cactus.
- Dubet, F. (2012). Los límites de la igualdad de oportunidades. Nueva sociedad, (239), 42.
- Elias, N. (1998), “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados” en La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá: Norma.
- Ezcurra, A. M. (2007). Cuadernos de Pedagogía Universitaria N° 2. Los estudiantes de nuevo ingreso: democratización y responsabilidad de las instituciones universitarias. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Ezcurra, A. M. (2011). Igualdad en Educación Superior: un desafío mundial. 1ra Ed. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Buenos Aires: IEC – CONADU
- Feldfeber, M. y GLUZ, N. “Las políticas educativas en Argentina: herencias de los `90, contradicciones y tendencias de 'nuevo signo'”. En: Revista Educação & Sociedade vol. 32 n. 115, CEDES, Campinas, San Pablo, abril/junio de 2011.
- Karz, S. (2006); La investigación en Trabajo Social. Volumen V. Publicación de Jornadas realizadas por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Pág. 9-28.
- Ley de Educación Nacional N° 26.206. *Boletín Oficial de la República Argentina. 14/12/2006*
- Ley de Educación Superior N° 24.521. *Boletín Oficial de la República Argentina. 20/07/1995*
- Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del estado en el nivel de educación superior N° 27.204. *Boletín Oficial de la República Argentina. 28/10/2015*
- Lucardi, A. (2018). “Políticas Públicas y democratización universitaria: a propósito del centenario de la Reforma de 1918 y la CRES 2018”. En Revista Argentina de Educación Superior N°16.
- Marquina, M. y Chiroleu A. (2015) “¿Hacia un nuevo mapa universitario? La ampliación de la oferta y la inclusión como temas de agenda de gobierno en Argentina”. En: Propuesta Educativa N° 43, Año 24, Vol11, Pp. 7-16.
- Mattioni, M. (2017) Nuevas Universidades del conurbano bonaerense: Tensiones y encuentros en la educación superior a la luz de las nociones de inclusión y accesibilidad. Revista Debate Público, reflexión de Trabajo Social. Año 7, N 13 y 14, pp. 21-27
- Miguez, E. (2018), Crítica (y reivindicación) de la universidad pública. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Morín, E. (2007). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el Pensamiento. Bases para una Reforma Educativa. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

- Noel, G. (2010) "La Persistencia de la Visión Algunos Desafíos para la Política Universitaria a partir de los Cambios Sociales en la Argentina Reciente" Revista Gestión Universitaria Vol. 2, N°2.
- Ozollo, F. y Papparini, C. (2015) Calidad y derecho a la Educación Superior. Integración y Conocimiento, N° 3, pp. 102-111
- Rojas E. (1999), El saber obrero y la innovación en la empresa, OIT CINTERFOR, Montevideo.
- Rojas, E. (2014), Educación, trabajo y crisis global, en Boletín Técnico do SENAC, v. 37, n° 3, septiembre – diciembre, Río de Janeiro.
- Ros, Cimolai, S. y otros (2014). Inclusión digital y prácticas de enseñanza en el marco del Programa Conectar Igualdad para la formación docente de nivel secundario. In VIII Jornadas de Sociología de la UNLP 3 al 5 de diciembre de 2014 Ensenada, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología.
- Santos, B. D. S. (2018). Introducción a las epistemologías del sur. En Epistemologías del Sur, 25-61.
- Santos, B. D.S. (2009), Una epistemología desde el Sur, México: CLACSO y Siglo XXI.
- Sautu, R. (1998) El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores. Buenos Aires. Editorial de Belgrano.
- Southwell, M. (directora). (2015). El FinES PROGRESAR (Proyecto de extensión). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/extension/px.242/px.242.pdf>
- Turner, V. (1988) El proceso ritual. Estructura y antiestructura. España, Taurus.
- Vasilachis, I. (1992). Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Vasilachis, I. (2012) "De 'la' forma de conocer a 'las' formas de conocer", En N. K. Denzin e Y. Lincoln, Manual de Investigación Cualitativa Vol. II. Paradigmas y perspectivas en disputa. Barcelona: Gedisa.
- Vasilachis, I. (coord.) (2006) "Estrategias de investigación cualitativa" Editorial Gedisa, Buenos Aires.

El capital social en movimiento: un análisis de procesos de logro de estatus a partir de path analysis en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Joaquín Carrascosa

Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA)
joaquin.carrascosa91@gmail.com

Resumen

Los debates en torno al concepto de capital social en el campo de estudios de estratificación social y análisis de clase han tomado impulso en los últimos años. Distintos estudios se han enfocado en determinar si el acceso a redes sociales representa un factor que favorece la movilidad social ascendente o constituye un mecanismo de reproducción de las desigualdades de clase. En este marco, esta ponencia se propone analizar la influencia del capital social en el proceso de estratificación social en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el siglo XXI a partir de su asociación con factores vinculados al origen social (estatus ocupacional y nivel educativo del padre) y factores adquiridos (educación y primer empleo del encuestado) y su peso en el logro de estatus ocupacional. Para ello, se incorporará al capital social a modelos clásicos de logro de estatus basados en *path analysis*, diferenciando a su vez según distintos mecanismos de acceso al empleo utilizados por los encuestados (ligados al uso de lazos fuertes, de lazos débiles o sin uso de lazos sociales). Se definirá al capital social como recursos insertos en una estructura social a los cuales los individuos acceden y movilizan en acciones con un propósito determinado y se utilizará al *generador de posiciones* como su instrumento de medición. Los datos utilizados provienen de la encuesta del Proyecto Agencia PICT “Reproducción y movilidad social en Argentina (1992-2012): cambios estructurales, oportunidades del entorno y capacidad de agencia” (2015-2016) dirigido por la Dra. Ruth Sautu, el Dr. Pablo Dalle, la Dra. Paula Boniolo y el Dr. Rodolfo Elbert.

Palabras claves: CAPITAL SOCIAL - ESTRATIFICACIÓN SOCIAL - ARGENTINA

Los modelos clásicos de logro de estatus y la incorporación del capital social

En su obra clásica “*The American Occupational Structure*” (1967) Blau y Duncan hacen foco en la idea de proceso de estratificación social, mediante el cual las personas se ubican en las diferentes posiciones jerárquicamente ordenadas que componen a un sistema de estratificación social. Su esquema conceptual se basa en pensar la vida de los individuos como una secuencia de sucesos temporalmente ordenados para estudiar la interdependencia entre cuatro variables que influyen en el logro ocupacional, dos de ellas vinculadas a los orígenes sociales (educación y ocupación del padre) y dos referidas a las trayectorias de los individuos (educación y primera ocupación).

De esta forma, los estudios que siguen esta línea se preguntan sobre el grado en que las características adscriptas condicionan o no los logros de los individuos (educativos, de clase, de estatus, etc.) y a su vez, hacen foco en el carácter procesual de la acumulación de ventajas o desventajas sucesivas que facilitan la reproducción de la estructura de estratificación social.

Lo que se encuentra en discusión aquí es la idea de igualdad de oportunidades, según la cual los logros de un individuo dependerían únicamente de su esfuerzo individual, sin que exista condicionamiento alguno vinculado a las circunstancias de su nacimiento tales como el sexo, su año de nacimiento, la educación de sus padres, su clase social de origen, etc. Blau y Duncan hacen énfasis en la importancia de lograr la mayor igualdad de oportunidades posible, aunque la idea de un sistema puramente igualitario, fuertemente asociada a la democracia liberal, es considerada por los autores como una situación meramente hipotética. Un aspecto muchas veces ignorado del planteo de los autores es que no sólo no existirían las situaciones ideales de pura adscripción o puro logro, sino que tampoco existe un punto de equilibrio óptimo. Habría entonces una situación de tensión constante entre estos dos principios incompatibles que serían un requisito para el progreso social tal como es pensado por los autores.

Trabajos más recientes (Bukodi y Goldthorpe, 2013; Meraviglia y Buis, 2015) han buscado complejizar el estudio de los orígenes sociales focalizándose en la naturaleza multidimensional de la estructuración de la desigualdad social, mostrando que las distintas dimensiones (económica, simbólica y cultural) no son intercambiables sino que tienen efectos independientes sobre las vidas de los individuos. A su vez Kuha y Goldthorpe (2010) han desarrollado modelos de *path analysis* que permiten incluir variables categóricas para

estimar los efectos del logro educacional en la movilidad social desde una perspectiva relacional de clases sociales. Otro aporte reciente es el de Solís y Brunet (2013) que buscan avanzar hacia un modelo con “*temporalidad*” y “*contexto*”. Este incorpora a la edad como elemento estructurador de la desigualdad, el control de los efectos micro asociado a la composición demográfica de los hogares y el control de los efectos macro asociado a las circunstancias dadas por los rasgos del mercado de trabajo, influenciado por el modelo de desarrollo económico, y las políticas públicas que vive cada cohorte.

En Argentina la propuesta clásica de Blau y Duncan fue retomada recientemente por Jorrat (2016), afirmando que la educación y el estatus ocupacional del padre tienen igual influencia en los logros educacionales de los hijos. La educación de los padres, sin embargo, no tendría relevancia a la hora de analizar los logros ocupacionales de los hijos. En cambio, el estatus ocupacional de los padres influye tanto en el estatus del primer empleo como del empleo actual de los hijos mostrando un efecto continuado. También se observa para Argentina menor movilidad intergeneracional que Estados Unidos y Holanda, pero mayor movilidad intrageneracional.

Un factor clave en los procesos de logro de estatus y movilidad social es la educación; un trabajo en perspectiva comparada entre Argentina, Chile y México analizó el papel de la escolaridad en la movilidad intergeneracional de clase, mostrando que esta es un fuerte factor de mediación entre los orígenes y destinos, también cumpliría un papel equalizador que varía entre países pero no tiene un papel significativo como atenuante de las desigualdades de origen (Solís y Dalle, 2019).

Los estudios vinculados al paradigma clásico sobre estratificación y movilidad social se centran en tres procesos principales que inciden sobre la estructura de oportunidades educativas y ocupacionales: i. los cambios en la estructura económica ii. los cambios demográficos vinculados a las diferencias entre las tasas de natalidad y fecundidad y iii. los flujos migratorios (Filgueira, 2007). En este sentido, Filgueira propone una actualización que incorpore mecanismos externos al mercado, como las políticas de gobierno, en tanto tienen un impacto directo en la distribución de la riqueza, y el capital social, dado que la inserción en redes sociales provee recursos a los individuos que pueden potenciar sus capacidades y su desempeño. Recientemente, ha habido un cambio en el peso relativo de los mecanismos que

impulsan la movilidad social, los factores tradicionales (nivel educativo, ocupación e ingresos) explican parcialmente las trayectorias de las personas, mientras que crecen en importancia mecanismos ligados al capital social (Kessler y Espinoza, 2007).

Los lazos sociales, que emergen de relaciones de parentesco y socialización brindan recursos que pueden acumularse, transmitirse y movilizarse a lo largo de las trayectorias de vida, lo que los hace un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales. Estos lazos potencian las posibilidades de transmisión de información y la incorporación de saberes y modelos de comportamiento que pueden resultar fundamentales para manejarse dentro del mercado laboral. En el ámbito ocupacional, la agencia aparece empíricamente a partir de los comportamientos o acciones caracterizados por los estilos de búsqueda y el uso de fuentes de información y en las decisiones sobre el acceso y utilización de lazos y redes sociales de parentesco, amistad y grupos de pares (Sautu, 2014: 116).

Más específicamente, en su desarrollo de una teoría de redes del capital social, Lin (2001: 29) lo define como recursos “insertos” (*embedded*) en una estructura social que son accedidos y movilizados por individuos en acciones con un propósito determinado. De esta manera el capital social posee tres componentes que ligan a la estructura y la acción: a) los recursos insertos en la estructura social; b) las oportunidades que brindan el acceso a estos recursos; y c) la acción de movilizar los recursos con un objetivo determinado.

Los recursos a los que puede accederse a partir del capital social son bienes materiales o simbólicos como por ejemplo la riqueza, el poder o la reputación. El acceso a estos recursos requiere de una inversión en relaciones interpersonales y de la inserción en redes sociales y permite aumentar los beneficios de las acciones que los individuos llevan adelante en diversos ámbitos, como la esfera económica, el mercado laboral, la esfera política o la esfera comunitaria. En este planteo es fundamental la capacidad de agencia individual ya que para lograr estos beneficios es necesario movilizar los recursos a partir de una acción de tipo instrumental o expresivo¹; aprovechando así los contactos que se tienen para lograr un propósito determinado, como por ejemplo concretar una búsqueda laboral (Lin, 2001).

¹ La acción expresiva tiene como objetivo mantener los recursos que se poseen mientras que la acción instrumental consiste en aumentar los recursos disponibles.

Los recursos a los que puede accederse a partir de la movilización de lazos son muy diversos pero en lo que refiere a los beneficios en el ámbito ocupacional pueden esquematizarse de la siguiente manera: i) la *información* que se obtiene sobre la existencia de alguna búsqueda laboral, capacitación, curso etc. ii) la *influencia* en términos de recibir una recomendación para ser contratado para un trabajo o ascendido; iii) la *oportunidad* de ser contratado de manera directa para un trabajo a partir de un lazo social; iv) y el *acceso a recursos financieros* que permite realizar inversiones e iniciar emprendimientos propios a partir de un préstamo (Parks-Yancy, DiTomaso y Post, 2006: 95).

Lin (1999b) propone una ampliación de los esquemas clásicos de logro de estatus que incluye el aporte del acceso a los recursos que brinda el capital social y su movilización. De esta manera se distinguen dos procesos secuencialmente ordenados vinculados al capital social, a los que a su vez pueden incorporársele otros factores como la edad, el género, la etnia, experiencia laboral, etc. (Lin, 1999b: 471).

a) un primer proceso, ligado al *acceso* al capital social, es decir los recursos disponibles en las redes de un ego. En este, se asume que la posición de origen (estatus parental), la educación y los lazos sociales determinan los recursos sociales a los que ego puede acceder.

b) un segundo proceso, focaliza en la *movilización* del capital social para el logro de estatus a partir del uso de los recursos provistos por contactos en la búsqueda de empleo. De esta manera, el capital social movilizado consiste en el estatus del contacto utilizado y se asume que este, junto con el estatus de origen y educación de ego, tienen un efecto significativo en el estatus de la ocupación obtenida.

Más recientemente este modelo ha sido complejizado y se ha encontrado que incluso controlando por características demográficas (raza/etnia, sexo, edad), nivel educativo, características del trabajo anterior (clase ocupacional, supervisión, ingresos) el capital social (medido a partir de varias dimensiones) contribuye de manera significativa al estatus ocupacional actual (Moren Cross & Lin, 2008).

Si bien el capital social depende fuertemente de los logros educativos y ocupacionales previos, también existen procesos de reproducción intergeneracional en tanto el prestigio ocupacional del padre puede tener un fuerte efecto en el posterior acceso a recursos sociales

de los hijos (Moerbeek y Flap, 2008). A su vez, estudios de tipo longitudinal plantean la estabilidad de las redes en el tiempo y su carácter previo al logro ocupacional, aunque a su vez el proceso es interdependiente ya que la ocupación permite el acceso a redes que pueden potenciar nuevos logros ocupacionales (Flap y Völker, 2008).

Otro elemento a destacar es que el capital social no necesariamente funciona de la misma manera para todos, sino que puede brindar mayores retornos a ciertos grupos (por ejemplo, a las clases medias profesionales y a los hombres) (Parks-Yancy, DiTomaso y Post, 2006). Esta idea de interdependencia del proceso y la potenciación de nuevos logros sugiere que el acceso y movilización del capital social está integrado a los mecanismos que generan y sostienen las desigualdades sociales. Entonces, una mirada procesual permite evidenciar como su distribución desigual favorece la acumulación de ventajas y desventajas en etapas sucesivas a medida que las personas avanzan en sus trayectorias ocupacionales.

Este modelo teórico se encuentra sostenido también por la noción de *la mano invisible del capital social*, que ejerce un efecto en el mercado de trabajo (Angelusz y Tardos, 2008; Lin y Ao, 2008). Esto ocurre en base a intercambios de información de tipo cotidiano y rutinario sobre oportunidades ocupacionales al interior de las redes de relaciones, que no involucran una búsqueda de trabajo activa formal pero que puede resultar en la obtención de un mejor empleo. En este tipo de casos, el capital social puede brindar beneficios de manera indirecta, prescindiendo de una movilización intencional por parte del actor.

Otro aporte fundamental para entender el rol que cumple el capital social en el mercado de trabajo es el de Requena Santos (1991), que desde una perspectiva estructural funcionalista desarrolló un modelo teórico de la asignación ocupacional a través de redes sociales. En este esquema, las redes sociales cumplirían la función de ser el *nexo* de unión entre las instituciones primarias (familia, grupos de pertenencia, escuela) y el mercado de trabajo. La importancia de su papel en el mercado de trabajo se encuentra dada porque el aprovechamiento de las redes sociales para la inserción laboral permite reducir considerablemente los costos de búsqueda de empleo, de movilidad y desplazamiento. Estas redes se convierten así en cadenas de movilidad socialmente determinadas que procuran la asignación ocupacional en el subsistema social constituido por el mercado laboral.

Según este esquema en el mercado de trabajo habría por un lado *mecanismos formales* de acceso al empleo (convocatorias abiertas, agencias de empleo, concursos de oposición etc.) y por otro, *mecanismos informales* que se basan en el uso del *capital relacional* (recomendaciones o referencias de conocidos, amigos, familiares, etc.) (Requena Santos, 1991). El uso de estos mecanismos varía fuertemente según el origen social y las instituciones primarias o grupos de pertenencia; los mecanismos informales son de especial importancia para los jóvenes en su entrada al mercado laboral, los migrantes y la inserción en empresas pequeñas o de tipo familiar. A su vez, dado que la inserción en redes está determinada por elementos ligados a los orígenes familiares, los barrios de residencia, las escuelas y las ocupaciones, estas pueden verse como un mecanismo generador de desigualdad de oportunidades².

En América Latina existen trabajos que han analizado la importancia del capital social en relación al logro ocupacional. En un estudio comparativo entre Chile y Uruguay, Espinoza, Rey y Barozet (2017) analizaron el efecto del acceso al capital social, medido a partir del *generador de posiciones*, en el status ocupacional alcanzado. El principal hallazgo del trabajo fue que para el caso uruguayo el capital social accedido es significativo en los logros ocupacionales para ambos sexos, mientras que en Chile este efecto es bajo y se observa únicamente para los hombres. Sin embargo, los autores remarcan que los modelos utilizados no dan cuenta de los procesos e interacciones que moderan los efectos del capital social en fases intermedias de los procesos de logro de status.

En Uruguay, Boado (2008) destaca el papel que juegan mecanismos relacionales (fuertes y débiles) para el acceso al empleo, teniendo un mayor peso los lazos fuertes en el interior que en Montevideo. También nota que no existen diferencias importantes según origen social en el uso de mecanismos para el acceso a la primera ocupación, aunque hay mayor preferencia por los lazos fuertes en los hombres que en las mujeres. Por su parte, Rey (2014) relaciona al capital social con los procesos de superación de la pobreza y la movilidad social, afirmando que para quienes no logran alcanzar la educación superior el capital social puede sustituir en

2 A su vez, el peso de estos mecanismos en el mercado laboral depende de una serie de factores: i) los cambios demográficos; ii) los procesos de inflación de titulaciones universitarias; iii) la situación macro económica: en etapas de estabilidad y crecimiento operan en mayor medida los criterios universalistas de asignación de posiciones sociales, mientras que en las etapas de crisis y recesión se incrementa el peso de los criterios particularistas.

cierta medida su bajo capital humano. Sin embargo, el capital social se encuentra socialmente estratificado ya que las posiciones más altas en la estructura de clases tienen mayor volumen, variedad y calidad de capital social (Rey, 2017).

Por otra parte, Brunet (2017) analizó las posibilidades de conseguir un mejor empleo o no a partir del uso del capital social y observó que en la Ciudad de México existe una clara tendencia al uso del capital social de tipo familiar y una preferencia del uso de la influencia (en vez de la información o la herencia). A su vez, notó que quienes utilizan el capital social tienen menor escolaridad, menores ingresos y orígenes sociales desventajados pero que el uso del capital social no muestra efectos directos significativos sobre las oportunidades de acceder a un mejor trabajo.

Aspectos metodológicos y modelos utilizados

En trabajos previos se han analizado los cambios en el tiempo en el proceso de estratificación social en Argentina, observándose un menor peso del efecto directo de la educación en el logro ocupacional (junto con un aumento de su efecto indirecto a través del primer empleo) y un aumento de la importancia del primer empleo (Carrascosa y Estévez Leston, 2017).

En este sentido, en este trabajo se buscará avanzar en la introducción del capital social a los modelos clásicos de logro de estatus para analizar su influencia en el proceso de estratificación social en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el siglo XXI a partir de su asociación con factores vinculados al origen social (estatus ocupacional y nivel educativo del padre) y factores adquiridos (educación y primer empleo del encuestado) y su peso en el logro de estatus ocupacional. A su vez se diferenciará según distintos mecanismos de acceso al empleo utilizados por los encuestados (ligados al uso de lazos fuertes, de lazos débiles o sin uso de lazos sociales).

Los datos a utilizar provienen de la encuesta realizada por el Proyecto “Reproducción y movilidad social en Argentina (1992-2012): cambios estructurales, oportunidades del entorno y capacidad de agencia” dirigido por la Dra. Ruth Sautu, el Dr. Pablo Dalle participó junto a la Dra. Paula Boniolo y el Dr. Rodolfo Elbert en el diseño de la encuesta como investigadores responsables. La muestra es estratificada y multietápica con selección aleatoria en todas sus etapas y fue realizada a 1065 personas de ambos sexos de entre 25 y 65 años, en el Área Metropolitana de Buenos Aires entre 2015 y 2016.

Para el análisis de los datos se utilizará *path analysis*, un método multivariado que permite verificar el ajuste de modelos causales e identificar la contribución (directa e indirecta) que realizan un conjunto de variables independientes en la variabilidad de las variables dependientes a través de la representación de modelos hipotetizados (Pérez, Medrano y Sánchez Rosas, 2013). En el modelo, cada flecha representa un coeficiente de *path* que indica la magnitud y signo del efecto de una variable por sobre otra, pudiendo ser bruto, directo o indirecto.

Para medir los efectos brutos de cada relación se realizarán correlaciones simples entre las variables intervinientes. Cada correlación simple indicará que, al variar en una unidad a la variable independiente, la variable dependiente variará según la magnitud y el signo de la correlación. A partir de la medición de regresiones parciales (*path coefficient*) pueden medirse los efectos directos de la variable independiente por sobre la dependiente. La resta entre la correlación simple y la regresión parcial dará cuenta, entonces, de los efectos indirectos que la variable independiente imprime sobre la dependiente.

Es importante aclarar que las relaciones entre variables son construidas teóricamente y que cada modelo deja por fuera un conjunto de variables intervinientes o factores residuales, cuyo efecto puede medirse, más no así determinarlas. Esta técnica no permite descubrir leyes de causalidad, sino que nos permite realizar interpretaciones cuantitativas de los sistemas causales que se desarrollan en determinadas poblaciones (Blau y Duncan, 1967: 171-177).

Para el análisis, se utilizarán las siguientes variables:

- Y = ISEI Ocupación actual del encuestado
- S = Promedio de capital social
- W = ISEI 1ra Ocupación
- U = Años de educación del encuestado
- V = Años de educación del Padre
- X = ISEI ocupación del Padre

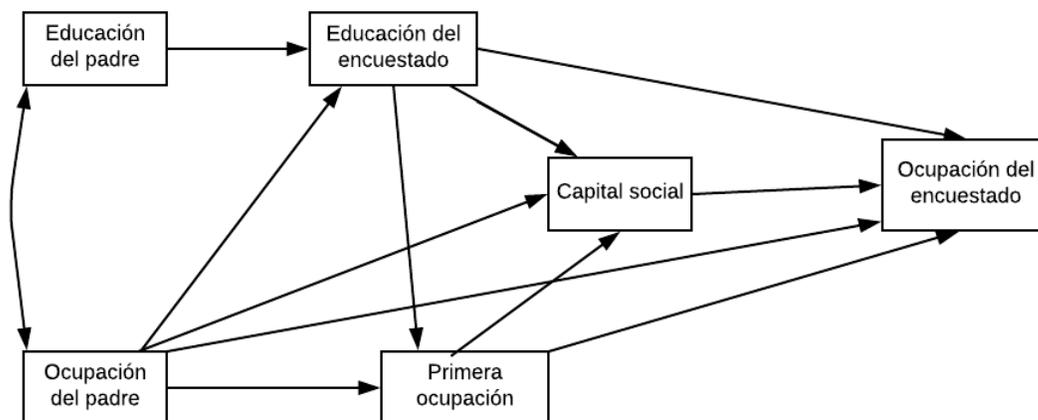
Las variables que refieren a las posiciones ocupacionales se basan en la escala ISEI (International Socio-Economic Index Of Occupational Status) elaborada por Ganzeboom, De Graaf y Treiman (1992). Dicha escala presenta un enfoque continuo sobre la estratificación ocupacional, que captura diferencias entre grupos sociales según niveles educativos y de

ingresos entre categorías ocupacionales de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) maximizando el rol de la ocupación como variable interviniente entre la educación y el ingreso. Para los propósitos de este trabajo se construyó la escala ISEI utilizando el algoritmo de Ganzeboom y Treiman (2010).

A su vez, se realizará un análisis complementario utilizando modelos de regresión *kfb* (Breen, Karlson y Holm, 2013), que permiten desglosar los efectos directos e indirectos de las variables independientes en la variable dependiente sin considerar *paths*.

Retomando los aportes teóricos de la sección anterior, el capital social depende en parte de la posición de origen (del estatus ocupacional del padre) y también de los estatus adquiridos por ego (años de educación y estatus de la primera ocupación). A su vez, el capital social se introduce como una de las variables adquiridas que tienen efecto directo en el estatus ocupacional actual. El resultado es el siguiente:

Figura 1: modelo de logro de estatus ocupacional incorporando al capital social



Fuente: elaboración propia.

Para medir el capital social, se utilizará el *generador de posiciones* propuesto originalmente por Lin y Dumin (1986). Este utiliza una muestra de posiciones ocupacionales destacadas en la estructura social y pide a los encuestados que indiquen si tienen o no contactos en ellas. Algunas preguntas adicionales son si el contacto es un familiar un amigo/conocido, su género y la frecuencia con la que se encuentran. Esta medición se focaliza en la centralidad del trabajo como organizador de la vida en las sociedades modernas. Al estar basado en una muestra de ocupaciones permite evaluar el acceso a distintos niveles de recursos poseídos

por contactos, tales como los ingresos, educación, autoridad en el trabajo, etc. Es por eso que la posición ocupacional de los contactos es un insumo clave para estimar el acceso a recursos movilizables de manera instrumental.

De esta manera, el generador de posiciones favorece la recolección de información sobre la posición social ocupada por los contactos para reconstruir el espectro de recursos accesibles a ego. En el nivel teórico, el generador de posiciones se basa en dos supuestos fundamentales. Primero, asume que la distribución de recursos en una sociedad refleja a la jerarquía piramidal de la estructura ocupacional de dicha sociedad, por lo que se apoya en principalmente en un enfoque de estratificación social basado en agregados ocupacionales. Segundo, supone que el hecho de conocer a alguien en determinada ocupación significa tener acceso a los recursos que esta provee (Verhaeghe y Li, 2015). El generador de posiciones ostenta un alto nivel de estandarización y se encuentra validado por numerosos estudios cuantitativos y cualitativos alrededor del mundo: Lin y Dumin (1986), Völker y Flap (1999), Angelusz y Tardos (1991), Erickson (1995), Van der Gaag, Snijders, & Flap (2008), entre otros.

El generador de posiciones permite reconstruir una serie de medidas de capital social (volumen de contactos, promedio accedido, máximo accedido, rango de acceso, etc.) en este trabajo se utilizará la medida de *promedio* de capital social accedido que se calculó promediando el estatus de las ocupaciones en las que el encuestado tiene contactos.

Para analizar los mecanismos por los cuales las personas acceden al empleo se utilizará la siguiente pregunta del cuestionario: “p34 - ¿Quiénes lo ayudaron a conseguir su trabajo actual / último?”. Las opciones de respuesta hacen referencia a distintos tipos de mecanismos utilizados en el mercado de trabajo (Requena Santos, 1991; Boado, 2008: 81), por un lado, se encuentran los *mecanismos relacionales*, que implican algún tipo de relación (directa o indirecta) entre quien busca trabajo y quien contrata, esto puede darse por ejemplo a través de una oferta directa de empleo, una recomendación, etc. En consonancia con Granovetter (1973), los mecanismos relacionales pueden aludir a los *lazos de tipo fuerte* (familiares) o a *lazos de tipo débil* (contactos, conocidos, amigos, etc.). A su vez, los *lazos débiles* provienen de ámbitos de socialización en los que pueden forjarse vínculos que abran oportunidades ocupacionales: el barrio, la escuela, la universidad, los trabajos anteriores, el sindicato o

partido político y los conocidos del país o provincia de origen de los migrantes. Por otro lado, para el caso de quienes no recibieron ayuda, se hallan los *mecanismos de mercado*, que implican la ausencia del uso de lazos sociales en la búsqueda de empleo.

Análisis de correlaciones simples

El análisis de correlaciones simples muestra los efectos brutos entre las variables contenidas en el modelo teórico. El capital social presenta una fuerte correlación con las variables de origen social (con el estatus ocupacional del padre $r_{xs} = 0,439$ y con la educación del padre $r_{vs} = 0,433$) y una correlación también alta con las variables adquiridas (con la educación $r_{us} = 0,574$ y con el estatus del primer empleo $r_{ws} = 0,448$). El estatus ocupacional actual del encuestado también tiene una correlación elevada con los orígenes sociales (con el estatus ocupacional del padre $r_{xy} = 0,469$ y con la educación del padre $r_{vy} = 0,461$) y con las variables adquiridas (con la educación $r_{uy} = 0,719$; con el estatus del primer empleo $r_{wy} = 0,522$ y con el capital social $r_{sy} = 0,576$).

Cuadro 1: correlaciones simples entre variables seleccionadas. Personas de 25 a 65 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (n=1065).

	ISEI Encuestado	ISEI 1ra Ocupación	Educ Encuestado	ISEI Padre	Educ Padre	Capital Social
ISEI Encuestado	-					
ISEI 1ra Ocup.	0,522***	-				
Educ Encuestado	0,719***	0,523***	-			
ISEI Padre	0,469***	0,362***	0,499***	-		
Educ Padre	0,461***	0,372***	0,527***	0,713***	-	
Capital Social	0,576***	0,448***	0,574***	0,439***	0,433***	-

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

El acceso al capital social y la importancia de su movilización para el logro ocupacional

Para evaluar al modelo propuesto puede tomarse como base de comparación el modelo clásico de Blau y Duncan aplicado a los datos del Área Metropolitana de Buenos Aires en 2015. Este presenta resultados muy similares a los marcados por Jorrat (2016) para el total del país. Se observa que para el estatus ocupacional actual tienen relevancia la primera ocupación ($p_{wy} = 0,188$) y especialmente la educación ($p_{uy} = 0,559$); el estatus de origen mantiene un efecto directo modesto en el estatus ocupacional de los hijos ($p_{xy} = 0,124$).

Cuadro 2: coeficientes de regresión parcial estandarizados para ecuaciones seleccionadas. Personas de 25 a 65 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (n=1065).

Modelo base (Blau y Duncan)	W	U	X	V	R ²	Residual	Error estándar
	ISEI 1ra Ocupación	Educ Encuestado	ISEI Padre	Educ Padre			
U – Educ Encuestado			,252***	,346***	,168	,832	,0239
W – ISEI 1ra Ocupación		,461***	,133***		,158	,842	,0252
Y- ISEI Encuestado	,188***	,559***	,124***		,337	,663	,0205

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

El modelo que introduce al capital social como factor de logro de estatus muestra que en primera instancia este depende directamente de los orígenes sociales ($p_{xs} = 0,181$); el efecto de la primera ocupación también es significativo, aunque un poco menor ($p_{wy} = 0,177$); y el efecto de la educación del encuestado es el más importante ($p_{wy} = 0,389$). Estos datos son clave en tanto muestran cierta reproducción intergeneracional en el acceso al capital social de manera directa a partir del estatus ocupacional del padre y luego indirectamente en base a los factores adquiridos.

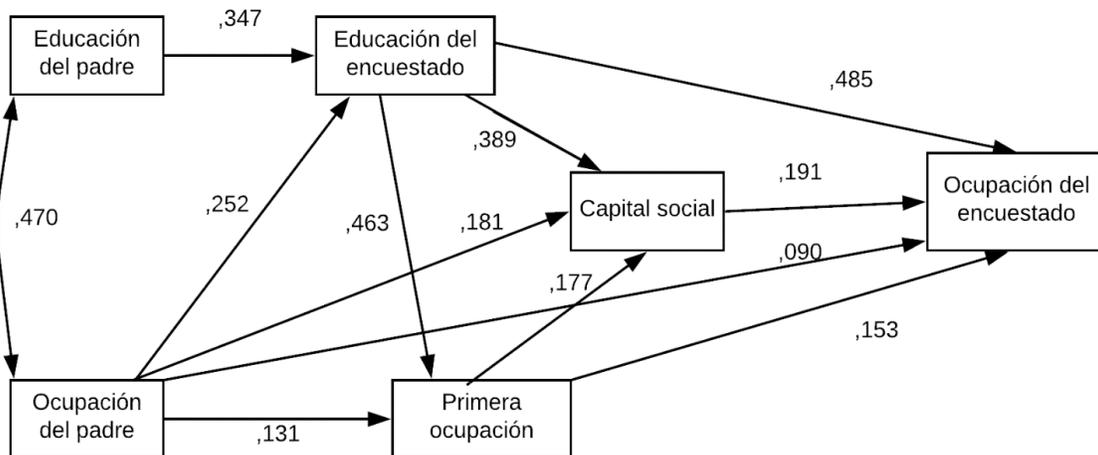
Cuadro 3: coeficientes de regresión parcial estandarizados para ecuaciones seleccionadas. Personas de 25 a 65 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (n=1065).

Modelo introduciendo al capital social	S	W	U	X	V	R ²	Residual	Error estándar
	Capital Social	ISEI 1ra Ocupación	Educ Encuestado	ISEI Padre	Educ Padre			
U – Educ Encuestado				,252***	,347***	,168	,832	,0238
W – ISEI 1ra Ocupación			,463***	,131***		,158	,842	,0251
S – Capital Social		,177***	,389***	,181***		,214	,786	,0239
Y- ISEI Encuestado	,191***	,153***	,485***	,090***		,354	,646	,0198

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

Gráfico 1: path coefficients del modelo con efectos del capital social



Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

En relación al logro de estatus ocupacional vemos que el efecto directo del origen social, los efectos de la educación y el primer empleo siguen siendo significativos, aunque levemente menores que los observados en el modelo base. Para el modelo base el efecto directo del origen social es de 26,4% del efecto total ($p_{xy} = 0,124$ sobre $r_{xy} = 0,469$), mientras que al

introducir al capital social el efecto directo del origen se reduce a 19,1% del total ($p_{xy} = 0,90$ sobre $r_{xy} = 0,469$); esto que nos indica que el capital social cumple un efecto *mediador* de las desigualdades entre orígenes y destinos. A su vez, este modelo permite destacar que el capital social tiene un efecto positivo en los logros de estatus ocupacional de las personas ($p_{sy} = 0,191$). No se busca aquí restar importancia al papel fundamental que cumple la educación como factor de mediación entre orígenes y destinos sociales, sino más bien remarcar que el aporte que realiza el capital social es relevante y significativo. En este sentido, un análisis complementario a partir de modelos de regresión *khb* (Breen, Karlson y Holm, 2013), que permiten desglosar los efectos directos e indirectos (sin considerar *paths*), mostró que del total de los efectos en el logro ocupacional de los hijos el efecto directo del status ocupacional del padre es de 18,5% (siendo los efectos indirectos el restante 81,5%), la educación alcanza al 49,9%, el capital social al 20,3% y la primera ocupación al 11,4%.

Cuadro 4: modelo de regresión *khb* con estatus ocupacional actual como variable dependiente, estatus ocupacional del padre como variable independiente y educación, primera ocupación y promedio de capital social como variables de mediación (n=842)

Estatus ocupación actual del encuestado	β estandarizado
Efecto total	0,531***
Efecto directo ocupación del padre	0,098***
Efectos indirectos	0,433***
<i>Vía educación</i>	0,265
<i>Vía capital social</i>	0,108
<i>Vía primera ocupación</i>	0,060
Medidas relativas	
Porcentaje efecto directo sobre el total	18,5%
Porcentaje de mediación sobre el total	81,5%
<i>Vía educación</i>	49,9%
<i>Vía capital social</i>	20,3%
<i>Vía primera ocupación</i>	11,4%
R^2	0,56

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

Una comparación del ajuste entre el modelo base y el modelo que introduce al capital social en los esquemas de logro de estatus clásicos arroja un aumento leve de la “*variabilidad explicada*” a partir del análisis de los valores de R^2 en el estatus ocupacional final ($R^2= 0,337$ en el modelo base y $R^2=354$ en el modelo con capital social). Esta comparación entre valores de R^2 como medida de ajuste del modelo o como fuente de explicación causal es muy habitual en los análisis de regresión, sin embargo, ha sido fuertemente cuestionada (Jorrot, 2016)³. Achen (1982: 58-64) afirma que no hay nada en el valor de R^2 que nos hable de la variabilidad explicada sino más bien nos informa sobre la forma geométrica del diagrama de dispersión, y que el error estándar de la regresión es una mejor medida en tanto nos informa sobre cuanto se aleja del valor predicho por los coeficientes de regresión la variable dependiente tal como es observada.

Diferencias en el proceso de estratificación social a partir del uso de los distintos mecanismos de acceso al empleo

En el modelo presentado anteriormente se asume teóricamente que el capital social tuvo alguna relevancia a la hora del logro ocupacional de los encuestados. Esto puede haber sido de manera directa, a partir de una oferta de empleo, un emprendimiento familiar, etc. o más bien de manera indirecta a partir de la *mano invisible del capital social* presente en la circulación de información sobre oportunidades ocupacionales, las recomendaciones, los contactos informales, etc.

En este sentido podemos avanzar con un análisis más detallado sobre la movilización del capital social si retomamos el tipo de mecanismo por el cual el encuestado accedió a su empleo actual. Se distinguirá entre quienes accedieron a su empleo a partir de un familiar (movilizando sus lazos fuertes), de un amigo, conocido o contacto (movilizando sus lazos débiles) y entre quienes no recibieron ninguna ayuda directa.

³ Otra opción para evaluar el ajuste de los modelos es el R^2 ajustado, cuyo valor es disminuido al agregar variables que no aportan a la capacidad de predicción de la variable dependiente. Esta alternativa fue evaluada pero las tendencias fueron prácticamente iguales a las que muestran los valores de R^2 .

Sin uso de lazos sociales	S	W	U	X	V	R ²	Residual	Error estándar
	Capital Social	ISEI 1ra Ocupación	Educ Encuestado	ISEI Padre	Educ Padre			
U – Educ Encuestado				,246***	,321***	,150	,850	,0374
W – ISEI 1ra Ocupación			,426***	,101*		,124	,876	,0378
S – Capital Social		,166***	,350***	,219***		,193	,807	,0381
Y- ISEI Encuestado	,202***	,164***	,473***	,095**		,346	,654	,0315

Cuadro 5: coeficientes de regresión parcial estandarizados para ecuaciones seleccionadas. Personas de 25 a 65 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (n=431).

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

El modelo para quienes no movilizaron directamente su capital social para acceder a su empleo actual arroja resultados relativamente similares a los que mostró el modelo total. Se observa, en comparación, que los efectos de los orígenes sociales en el capital social son mayores ($p_{xs} = 0,219$ contra $p_{xs} = 0,181$) mientras que el peso de la educación y el primer empleo son menores ($p_{us} = 0,350$ contra $p_{us} = 0,389$ y $p_{ws} = 0,166$ contra $p_{ws} = 0,177$ respectivamente). Por otro lado, en contra de lo que podría esperarse, el capital social tiene un efecto mayor en el estatus ocupacional para quienes no recibieron ayuda para acceder a su último empleo en comparación con quienes movilizaron sus lazos fuertes o débiles ($p_{sy} = 0,202$ contra $p_{sy} = 0,169$ para los lazos fuertes y $p_{sy} = 0,170$ para los lazos débiles). Este último dato brinda evidencia de que el capital social no funciona únicamente de manera directa, sino que realiza aportes fundamentales de forma indirecta a partir de la circulación de información de tipo informal⁴.

Cuadro 6: coeficientes de regresión parcial estandarizados para ecuaciones seleccionadas. Personas de 25 a 65 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (n=294).

⁴ Se remarca que, si bien la bibliografía, tanto en lo teórico como en lo empírico (cualitativo y cuantitativo), apunta a la importancia del funcionamiento capital social en el mercado laboral de manera informal (sin ayudas directas), dada la elaboración del cuestionario en este grupo también están incluidas personas que no han aprovechado su capital social para acceder a su empleo en ninguna instancia (búsquedas individuales, concursos de oposición, etc.)

Movilización de lazos débiles	S	W	U	X	V	R ²	Residual	Error estándar
	Capital Social	ISEI 1ra Ocupación	Educ Encuestado	ISEI Padre	Educ Padre			
U – Educ Encuestado				,169**	,432***	,169	,831	,0453
W – ISEI 1ra Ocupación			,478***	,181***		,187	,813	,0470
S – Capital Social		,169**	,444***	,158**		,237	,763	,0446
Y- ISEI Encuestado	,170***	,151***	,566***	,010		,382	,618	,0351

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

Cuadro 7: coeficientes de regresión parcial estandarizados para ecuaciones seleccionadas. Personas de 25 a 65 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (n=290).

Movilización de lazos fuertes	S	W	U	X	V	R ²	Residual	Error estándar
	Capital Social	ISEI 1ra Ocupación	Educ Encuestado	ISEI Padre	Educ Padre			
U – Educ Encuestado				,300**	,346***	,204	,796	,0455
W – ISEI 1ra Ocupación			,459***	,181***		,186	,814	,0492
S – Capital Social		,170**	,388***	,186***		,224	,776	,0452
Y- ISEI Encuestado	,169***	,116*	,357***	,263***		,329	,671	,0395

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

Si comparamos los *camino*s que recorrieron quienes accedieron a su empleo a través la ayuda de un familiar y quienes lo hicieron a partir de un amigo, conocido o contacto podemos encontrar algunas diferencias notables, incluso en las etapas anteriores a la introducción del capital social. Para quienes movilizaron sus lazos fuertes la ocupación del padre tiene un efecto importante en su logro educativo mientras que para quienes movilizaron sus lazos débiles este efecto es mucho menor ($p_{xu} = 0,300$ contra $p_{xu} = 0,169$). Por el contrario, el efecto

de la educación del padre es mucho más importante para quienes movilizan los lazos débiles que quienes movilizan sus lazos fuertes ($p_{vu} = 0,432$ contra $p_{vu} = 0,346$). También es más importante el efecto de la educación del encuestado en el primer empleo en quienes utilizan sus lazos débiles ($p_{uw} = 0,478$ contra $p_{uw} = 0,459$).

En relación al capital social vemos que quienes utilizan sus lazos familiares es más determinante el origen social del que se proviene ($p_{xs} = 0,186$ contra $p_{xs} = 0,158$), mientras que para quienes se valen de los lazos débiles es mucho más importante el efecto de su logro educativo ($p_{us} = 0,444$ contra $p_{us} = 0,388$). El efecto del primer empleo en el capital social es muy similar entre todos los grupos. Sobre el logro de estatus ocupacional vemos que para ambos grupos el capital social tiene un efecto muy similar. Los efectos de la educación y la primera ocupación en el estatus ocupacional son mayores en quienes movilizan los lazos débiles que en quienes movilizan los lazos fuertes ($p_{uy} = 0,566$ contra $p_{uy} = 0,357$ para la educación y $p_{wx} = 0,151$ contra $p_{wx} = 0,116$ para la primera ocupación). Esto puede vincularse con la importancia del establecimiento de redes en los ámbitos educativo (principalmente la universidad) y laboral para el acceso al empleo. Finalmente, se destaca el hecho de que para quienes movilizan sus lazos familiares, los efectos directos del origen social en el logro ocupacional es muy elevado ($p_{xy} = 0,263$) mientras que este efecto no está presente en quienes movilizan sus lazos débiles.

A modo complementario pueden analizarse los modelos *khh*. Como se mostró anteriormente los resultados para quienes no movilizaron ningún lazo social para acceder a su empleo actual son similares a los del total de los casos, los efectos directos de los orígenes sociales son cerca de un quinto del total (19,15%) y los indirectos los otros cuatro quintos (80,15%); siendo la educación la principal variable de mediación (49,29%) seguida del capital social (22,64%) y luego de la primera ocupación (9,11%). En cambio, se observan grandes diferencias entre quienes movilizaron sus lazos débiles y quienes movilizaron un lazo débil y quienes movilizaron un lazo fuerte. El efecto directo de la ocupación del padre para quienes movilizaron un lazo fuerte representa cerca de la mitad del total (45,05%) mientras que para quienes movilizaron un lazo fuerte el efecto directo no es estadísticamente significativo. A su vez, mientras el efecto de la educación para quienes movilizaron un lazo débil es muy importante (68,34%) este es mucho menor para quienes movilizaron un lazo fuerte (28,04%). El efecto del capital social es cerca de un quinto del total tanto para quienes no movilizaron

un lazo social como para quienes movilizaron un lazo débil (22,64% y 21,22% respectivamente) mientras que para los que movilizaron un lazo fuerte es levemente menor (15,69%).

Cuadro 8: modelos de regresión *kfb* con estatus ocupacional actual como variable dependiente, estatus ocupacional del padre como variable independiente y educación, primera ocupación y promedio de capital social como variables de mediación según movilización de lazos sociales para acceso al empleo

Estatus ocupación actual del encuestado	Sin lazos sociales	Lazos débiles	Lazos fuertes
	β estandarizado		
Efecto total	0,500***	0,488***	0,612***
Efecto directo ocupación del padre	0,095**	-0,019	0,276**
Efectos indirectos	0,404***	0,508***	0,336***
<i>Vía educación</i>	0,245	0,333	0,141
<i>Vía capital social</i>	0,113	0,103	0,096
<i>Vía primera ocupación</i>	0,045	0,07	0,068
Medidas relativas			
Porcentaje efecto directo sobre el total	19,15%	-4,06%	45,05%
Porcentaje de mediación sobre el total	80,85%	104,06%	54,95%
<i>Vía educación</i>	49,29%	68,34%	28,04%
<i>Vía capital social</i>	22,64%	21,22%	15,69%
<i>Vía primera ocupación</i>	9,11%	14,50%	11,22%
R^2	0,56	0,61	0,56

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ (indican los niveles de significancia).

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales (Pi-Clases, 2015).

El análisis de modelos de logro de estatus incluyendo al capital social para estos tres grupos compuestos por personas que utilizaron distintos mecanismos de acceso al empleo reveló algunas tendencias sumamente interesantes. Curiosamente, quienes no utilizaron ayuda para acceder a su empleo actual son quienes mayor efecto del capital social mostraron, lo que apunta a la importancia del funcionamiento del capital social de manera más informal y no como una ayuda directa. Por otro lado, quienes utilizaron sus lazos familiares presentan mayores efectos de la ocupación del padre en su capital social y en su logro ocupacional, indicando que los *camino*s seguidos por estas personas son los más cercanos a sus orígenes sociales. Por el contrario, en quienes accedieron a su ocupación actual a través de un amigo, conocido o contacto desaparece el efecto directo de la ocupación del padre en la ocupación

del hijo. Movilizar lazos débiles permite entonces introducir variación en el estatus adscripto, quienes utilizan estos lazos son quienes se alejan en mayor medida de las *huellas* de sus padres.g

Conclusiones

En esta ponencia se ha analizado el rol que cumple el capital social en el proceso de estratificación social a partir de su introducción en el modelo clásico de logro de estatus ocupacional.

En primera medida se encontró evidencia que apoya la idea de la existencia de mecanismos de reproducción intergeneracional del capital social a partir de los efectos (directos e indirectos) que tienen los orígenes sociales. El capital social también es afectado positivamente por los factores adquiridos, principalmente por la educación y en menor medida por la primera ocupación.

Un hallazgo central fue que los recursos que provee el capital social mostraron tener un efecto significativo positivo en el estatus ocupacional alcanzando y que este cumple un leve efecto *mediador* entre orígenes y destinos sociales. Esto apoya la idea de que las desigualdades sociales se estructuran a partir de múltiples dimensiones que no son intercambiables entre sí. Se justifica entonces la importancia de introducir nuevas dimensiones a los modelos clásicos que permitan avanzar en una descripción cada vez más profunda de los procesos de acumulación de ventajas y desventajas y los mecanismos específicos que sostienen las desigualdades sociales.

A su vez, partiendo de la idea de que el capital social no tiene un funcionamiento único, sino que puede operar de múltiples formas, se analizaron modelos distinguiendo según el tipo de lazo social movilizado para acceder a la ocupación actual (lazos fuertes, lazos débiles o sin uso de lazos). Este tipo de análisis es fundamental ya que permite observar al capital social *en movimiento* para conocer los resultados que tiene su uso a partir del análisis de los *caminos* que recorren personas que lo movilizaron de distintas maneras.

En relación al acceso al capital social, el análisis de quienes no utilizaron ayuda directa de nadie para acceder a su empleo actual arrojó que estas personas tienen un mayor efecto de los orígenes sociales y menores de su educación y primer empleo que el resto. El hecho que más se destaca es que el efecto del capital social en el logro de estatus ocupacional es mayor

en este grupo que en quienes realizaron una movilización directa del capital social. Este hallazgo es fundamental en tanto apoya la idea de la *mano invisible del capital social* en el mercado de trabajo que funciona de manera más bien indirecta. El capital social se manifiesta entonces no solo en las ayudas directas para conseguir trabajo, sino que tiene un papel destacado en la circulación de información sobre oportunidades ocupacionales, las recomendaciones, las referencias, etc.

Por otro lado, se observó que quienes movilizan sus lazos fuertes tienen mayores efectos directos de los orígenes sociales, tanto en su acceso al capital social como en el estatus ocupacional alcanzado que quienes utilizan sus lazos débiles. Por el contrario, en quienes movilizan sus lazos débiles desaparece el efecto directo del estatus ocupacional del padre en el estatus ocupacional de los hijos⁵.

El análisis de los *caminos* recorridos por las personas de estos tres grupos revela entonces que el capital social puede desempeñar distintos roles según como se lo movilice:

- La movilización de tipo indirecto es la que brinda mayores beneficios, remarcando la importancia de la movilización de tipo indirecto a partir de la circulación de información, contactos o recomendaciones.
- Quienes movilizaron sus *lazos fuertes*, siguieron en mayor medida las *huellas* de sus padres en tanto mostraron mayor efecto directo del estatus ocupacional de origen en el estatus ocupacional actual. Esto indica que el uso de los lazos familiares está más asociado a la reproducción social.
- En quienes accedieron a su ocupación actual a partir de la movilización de un *lazo débil* no se encuentra presente el efecto directo de los orígenes sociales en el estatus ocupacional alcanzado. Es decir, utilizar estos lazos permite introducir variación en el estatus de origen, teniendo entonces el potencial de ser un mecanismo de movilidad social intergeneracional.

⁵ Es importante remarcar que la existencia del efecto directo de la ocupación del padre en la del hijo mostraría que, incluso con las variaciones de estatus que incorporan las variables adquiridas en las etapas sucesivas de la vida, el origen social del que se provenga siempre mantiene cierta influencia. Recuperando la comparación internacional realizada por Jorrot (2016), este efecto fue observado por Blau y Duncan (1967) en Estados Unidos en el año 1962 ($p_{xy} = 0,115$), en Holanda por Ganzeboom (2012) entre 1982 y 2008 ($p_{xy} = 0,046$) y en Argentina por Jorrot ($p_{xy} = 0,120$) entre 2007 y 2010.

Bibliografía

- Achen, C. H. (1983). *Interpreting and Using Regression. Quantitative Applications in the Social Sciences* (Vol. 29). <https://doi.org/10.1057/jors.1983.228>
- Angelusz, R., & Tardos, R. (1991). The Strength and Weakness of Weak Ties. *Research Review*, 3, 7–25.
- Angelusz, R., & Tardos, R. (2008). Assessing Social Capital and Attainment Dynamics: Position Generator Applications in Hungary, 1987–2003. En N. Lin & B. H. Erickson (Eds.), *Social Capital: An International Research Program* (pp. 394–420). New York: Oxford University Press.
- Blau, P. M., & Duncan, O. D. (1967). *The American occupational structure*. New York: The Free Press.
- Boado, M. (2008). La movilidad social en el Uruguay contemporáneo. *Universidad de la República. Montevideo*, (February), 1–15.
- Breen, R., Karlson, K. B., & Holm, A. (2013). Total, Direct, and Indirect Effects in Logit and Probit Models. *Sociological Methods and Research*, 42(2), 164–191. <https://doi.org/10.1177/0049124113494572>
- Brunet, N. (2017). Estratificación ocupacional y retornos del capital social en la búsqueda de empleo. El caso de la ciudad de México. En P. Solís (Ed.), *Desigualdad, movilidad social y curso de vida en la Ciudad de México* (pp. 126–163). Ciudad de México: El Colegio de México.
- Bukodi, E., & Goldthorpe, J. H. (2013). Decomposing social origins : The Effects of Parents' Class, Status, and Education on the Educational Attainment of Their Children. *European Sociological Review*, 29(5), 1024–1039.
- Carrascosa, J., & Estévez Leston, B. (2017). *El proceso de estratificación social en Argentina a través del tiempo: cambios en la estructura social* (III Seminario Internacional de Desigualdad y Movilidad Social). Ensenada, Buenos Aires.
- Erickson, B. H. (1995). “Networks, Success, and Class Structure: A Total View”. *Sunbelt Social Networks Conference. Charleston, SC, February*.
- Espinoza, V., Rey, R., & Barozet, E. (2017). Incidencia del capital social en la explicación del logro ocupacional. En U. N. de La Plata (Ed.), *V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina*. La Plata.
- Filgueira, C. (2007). La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina. En R. Franco, A. León, & R. Atria (Eds.), *Estratificación y movilidad social en América Latina: Transformaciones estructurales de un cuarto de siglo* (pp. 103–120). Santiago de Chile: LOM Ediciones/CEPAL-GTZ.
- Flap, H., & Völker, B. (2008). Social, Cultural, and Economic Capital and Job Attainment: The Position Generator as a Measure of Cultural and Economic Resources. En N. Lin & B. H. Erickson (Eds.), *Social Capital: An International Research Program 2* (pp. 65–80). New York: Oxford University Press.
- Ganzeboom, H. B. G. (2012). *Two modern classics in stratification research*.
- Ganzeboom, H. B. G., De Graaf, P. M., & Treiman, D. J. (1992). A standard socio-economic index of occupational status. *Social Science Research*, 21(1), 1–56.
- Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (2010). *International Stratification and Mobility File: Conversion Tools*. Amsterdam: Department of Social Research Methodology.
- Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*. <https://doi.org/10.1086/225469>
- Jorrat, J. R. (2016). El proceso de estratificación social en Argentina: análisis de trayectorias (paths). En J. R. Jorrat (Ed.), *De tal padre, ¿tal hijo?: estudios sobre movilidad social y educacional en Argentina*. Buenos Aires: Dunken.
- Kessler, G., & Espinoza, V. (2007). Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Buenos Aires. En R. Franco, A. León, & R. Atria (Eds.), *Estratificación y movilidad social en América Latina: Transformaciones estructurales de un cuarto de siglo* (pp. 259–301). Santiago de Chile: LOM Ediciones/CEPAL-GTZ.
- Kuha, J., & Goldthorpe, J. H. (2010). Path analysis for discrete variables: the role of education in social

- mobility. *Journal of the Royal Statistical Society*, 173(2), 351–369.
- Lin, N. (1999). Social Networks and Status Attainment. *Annual Review of Sociology*, 25, 467–487.
- Lin, N. (2001). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lin, N., & Ao, D. (2008). The Invisible Hand of Social Capital: An Exploratory Study. En N. Lin & B. H. Erickson (Eds.), *Social Capital: An International Research Program* (pp. 107–132). New York: Oxford University Press.
- Lin, N., & Dumin, M. (1986). Access to Occupations Through Social Ties. *Social Networks*, 8, 365–385.
- Meraviglia, C., & Buis, M. L. (2015). Class, Status, and Education: The Influence of Parental Resources on IEO in Europe, 1893-1987. *International Review of Social Research*, 5(1), 35–60. <https://doi.org/10.1515/irsr-2015-0004>
- Moerbeek, H., & Flap, H. (2008). Social Resources and Their Effect on Occupational Attainment through the Life Course. En N. Lin & B. H. Erickson (Eds.), *Social Capital: An International Research Program* (pp. 133–156). New York: Oxford University Press.
- Moren Cross, J. L., & Lin, N. (2008). Access to Social Capital and Status Attainment in the United States: Racial/Ethnic and Gender Differences. En N. Lin & B. H. Erickson (Eds.), *Social Capital: An International Research Program* (pp. 364–379). Oxford: Oxford University Press.
- Parks-Yancy, R., DiTomaso, N., & Post, C. (2006). The social capital resources of gender and class groups. *Sociological Spectrum*, 26(1), 85–113. <https://doi.org/10.1080/02732170500269651>
- Pérez, E., Medrano, L., & Sánchez Rosas, J. (2013). El Path Analysis: conceptos básicos y ejemplos de aplicación. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 5(1), 52–66.
- Requena Santos, F. (1991). *Redes sociales y mercado de trabajo. Elementos para una teoría del capital relacional*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.
- Rey, R. (2008). Desigualdad socioeconómica , educación y capital social.
- Rey, R. (2017). El acceso al capital social y su distribución por clase social. En *Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina*.
- Sautu, R. (2014). Agencia y estructura en la reproducción y cambio de las clases sociales. *Revista THEOMAI: Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo*, (29), 100–120.
- Solís, P., & Dalle, P. (2019). LA PESADA MOCHILA DEL ORIGEN DE CLASE. Escolaridad y movilidad intergeneracional de clase en Argentina, Chile y México. *Revista Internacional de Sociología*, 77(1).
- Solís, P., & Nicolás, B. (2013). Estructuración por edad del proceso de estratificación social en México. *Revista Latinoamericana de población*, (13), 29–59.
- Van der Gaag, M., Snijders, T., & Flap, H. (2008). Position Generator Measures and Their Relationship to Other Social Capital Measures. En N. Lin & B. H. Erickson (Eds.), *Social Capital: An International Research Program*. Oxford: Oxford University Press.
- Verhaeghe, P.-P., & Li, Y. (2015). The position generator approach to social capital research : measurements and results. En Y. Li (Ed.), *The Handbook of Research Methods and Applications on Social Capital* (pp. 166–186). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Völker, B., & Flap, H. (1999). Getting Ahead in the GDR. *Acta Sociologica*, 42, 7–42.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Un enfoque regional de la movilidad social intergeneracional en México: ¿importa la exposición a la apertura comercial?

Christian Joel González Cuatianquis¹
Universidad de Glasgow
joel.cuatianquis@gmail.com

Resumen

Este artículo identifica una correlación entre la movilidad social y la apertura comercial, utilizando un análisis por cohortes y un enfoque regional que divide al país en tres regiones según su exposición a la apertura comercial: alta, intermedia y baja. A partir de los datos de la Encuesta de ESRU sobre Movilidad Social en México 2011 (EMOVI - 2011), elaborada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), se identifican diferentes patrones de movilidad social intergeneracional (relativa y absoluta) en tres dimensiones: educación, riqueza y ocupación. Se demuestra que la región de alta exposición presenta niveles más altos de movilidad relativa en las tres dimensiones, sin embargo, la magnitud de la movilidad tiene una variación importante, siendo la ocupación la dimensión que presenta mayor movilidad. Otro resultado interesante es el análisis de movilidad ascendente absoluta, donde no hay un patrón específico entre regiones ni entre cohortes. La conclusión principal es que la liberalización comercial parece haber tenido un impacto en la tendencia de la movilidad social.

Palabras clave: MOVILIDAD SOCIAL INTERGENERACIONAL - APERTURA COMERCIAL - ANÁLISIS DE COHORTES - REGIONES, MÉXICO

¹ Maestro en Desarrollo Económico. Actualmente labora dentro del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México.

Introducción

El debate sobre la desigualdad de oportunidades y resultados parece ser uno de los temas más importantes en las discusiones académicas y públicas, pues se considera que la primera es una fuente de inestabilidad social (Behrman *et al*, 2001) y la última porque afecta las oportunidades de la próxima generación (Roemer, 2005; Corak, 2013; Atkinson, 2015). Sin embargo, la identificación de la fuente de la desigualdad es imperativa, porque si se trata de la ausencia de oportunidades para las personas con antecedentes familiares en desventaja, es probable que la sociedad sea vista como menos justa (Behrman *et al*, 2001).

En este sentido, el concepto de movilidad social llegó al debate de este fenómeno, siendo la asociación entre el origen y el destino de los individuos, es decir, el cambio de posición de estatus dentro de un grupo social, como un fenómeno que puede reflejar el grado de desigualdad de oportunidades que enfrenta una sociedad (Beller & Hout, 2006; Vélez Grajales *et al*, 2012). Por un lado, la movilidad absoluta indica el porcentaje de aquellos que suben, bajan o permanecen en la misma posición dentro de la escala social y está influenciado por los efectos derivados de una serie de circunstancias (económicas, tecnológicas y demográficas) que se determinan de manera exógena (Miles, 1999; Erikson & Goldthorpe, 2008). Por otro lado, la movilidad relativa muestra el cambio de la posición en la categoría socioeconómica de un individuo en relación con la posición en la categoría de origen, esto es, indica el movimiento hacia arriba o hacia abajo en la escala socioeconómica en relación con su punto de partida (Isaacs *et al*, 2008; DeLeire & Lopoo, 2010).

Recientemente, la literatura económica ha aumentado sus esfuerzos para formalizar la medición y el marco teórico de la relación entre la movilidad social y otras variables como la pobreza, la desigualdad y las aspiraciones (Ray, 2003, Genicot & Ray, 2009; Stiglitz y Kanbur, 2016), redes sociales. (Chantarat & Barrett, 2011), imperfecciones del mercado crediticio (Mookherjee & Napel, 2007, D'Amato & Di Pietro, 2013), deseo de políticas redistributivas (Desdoigts & Moizeau, 2005) y localización geográfica (Mookherjee, Ray, & Napel, 2010, Chetty *et al*, 2014). Además, la mayor disponibilidad de información socioeconómica ha permitido el aumento de la investigación empírica que intenta medir este fenómeno social.

Esto es especialmente importante para México, porque su sociedad se caracteriza por una alta movilidad social y de riqueza en el sector medio y una rigidez en la parte superior e inferior de la distribución. Para la movilidad ocupacional, existen barreras para el cambio entre manual para estructura ocupacional no manual (CEEY, 2013). Además, Szekely (2015) encuentra que la movilidad educativa se ve afectada por las expectativas de los padres y, para aquellas familias donde los ingresos son más bajos, las expectativas de que sus hijos puedan lograr estudios superiores son menos. Vélez y Behrman (2015) estiman la movilidad intergeneracional absoluta y relativa de la escolarización, el estatus ocupacional y la riqueza entre los grupos, encontrando que hay diferentes patrones según el grupo que se estudia.

No obstante, estos estudios han dado explicaciones microeconómicas, sin incluir cambios estructurales en el análisis, que han afectado al país en diferentes etapas de su desarrollo. Uno de estos cambios importantes fue la crisis de 1982, que abrió el debate sobre la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, que, buscaba reemplazar las economías basadas en el proteccionismo de sus mercados por otras economías basadas en modelos de apertura al resto del mundo (Gutiérrez, 2005). En México, a comienzos de los años ochenta, se introdujo un proceso de desregulación de la economía, acompañado de la privatización de las empresas públicas. Más tarde, a mediados de la década de 1980, comenzó la apertura de los mercados nacionales a la competencia extranjera, eliminando barreras comerciales y comenzando el proceso de negociación para unirse al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) (Gutiérrez Flores, 2008). Para 1988, las restricciones a la importación se habían reducido drásticamente y los precios oficiales de los bienes importados se habían eliminado (Artecona y Cunningham, 2002).

Para complementar esta estrategia, México inició negociaciones en 1990 para un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, siendo *"el primer acuerdo de libre comercio asimétrico en términos del nivel de ingresos de los países participantes"* (Esquivel & Rodríguez, 2003). Con este acuerdo, la economía mexicana trató de atraer más Inversión Extranjera Directa (IED) y promover el crecimiento económico a través de un aumento de las exportaciones, con las expectativas de que América del Norte se convertiría en una región más competitiva en comparación con el resto del mundo, en particular con la Unión Europea, Japón y los "cuatro tigres" de Asia Oriental (Blecker, 2009).

Esta apertura económica e industrialización han afectado las estructuras de clase, los acuerdos institucionales, las aspiraciones y expectativas individuales dentro del país. Además, esta transformación tuvo un efecto diferenciado en las distintas regiones, al ser más beneficiadas macroeconómicamente las regiones globalmente competitivas: con mejor infraestructura, ubicación y capital humano. Además, y como lo han sugerido algunos estudios recientes, esta dispersión regional también se encuentra en interacciones socioeconómicas más complejas como la movilidad social.

En este sentido, la presente investigación pretende contribuir a la identificación de la interacción de la apertura económica y la movilidad social. Como proxy de esta interacción, este trabajo propondrá un análisis regional basado en la exposición a la apertura comercial. La hipótesis detrás de este análisis es que las regiones que están más expuestas a la apertura comercial muestran más movilidad social, en tres dimensiones: educación, riqueza y ocupación.

La fuente de información es la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011), construida por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en México. Para analizar la información, se utilizan las regresiones de rango-rango (rank-rank), que se aplican por región y por cohorte que permiten observar la pendiente que mide la asociación entre la posición del niño en la distribución del ingreso y la de su padre en su respectiva distribución. Además, se incluye una regresión rango-rango para el percentil 25 de la distribución, que muestra la movilidad ascendente absoluta.

Los principales resultados indican que hay un patrón diferente de movilidad social en las regiones, sin embargo, no todas las dimensiones presentan el mismo comportamiento: mientras que la región de alta exposición es, en general, más móvil que las otras regiones, la brecha entre ellas varía mucho. Por ejemplo, la movilidad relativa de la educación es muy similar (42.79 para la región de alta exposición y 46.40 para la región de baja exposición), mientras que la brecha de la movilidad relativa de la ocupación es significativa (17.28 para la región de alta exposición en comparación con la región de baja exposición que presenta una movilidad de 35.52). Además, las diferencias de comportamiento se pueden ver a nivel de cohorte, siendo más móvil la generación más joven en dimensiones como ocupación, mientras que la generación más antigua presenta más movilidad en la riqueza. Estos

resultados nos permiten inferir que la apertura comercial tiene una correlación con la movilidad social, sin embargo, su impacto varía según la dimensión, por ejemplo, la educación, que ha sido influenciada por la expansión gubernamental de este servicio.

El presente trabajo está dividido en cuatro partes, siendo la presente introducción el primer capítulo. La segunda sección presenta los detalles de la región que se utiliza en esta investigación. También, en el mismo capítulo se describe la metodología utilizada en el presente trabajo y la base de datos EMOVI-2011. En el tercer capítulo se muestran los resultados de la movilidad ascendente relativa y absoluta para la educación, la riqueza y la ocupación, por regiones y cohortes. Para concluir, el capítulo cuarto resalta los hallazgos principales, los límites del trabajo y las líneas para futuras investigaciones.

Metodología y Datos

Los cambios estructurales, como la apertura comercial, tienen efectos diferenciados a escala territorial, generando reestructuración regional y nuevas dinámicas interestatales (Sepúlveda 2001), como en México. En este caso, se ha demostrado que hay estados que, a pesar de no compartir frontera con Estados Unidos, su economía depende en gran medida del comercio internacional (Aguilera y Castro, 2016).

En el presente trabajo se utiliza la regionalización de Aguilera y Castro (2016) que delimita las tres regiones, considerando el grado de exposición que las entidades federativas presentan a los mercados internacionales, estimando los coeficientes de localización y exportación por estado, para identificar las actividades en las que cada entidad presenta una mayor especialización. Con esto, se identifica aquellos sectores económicos que tienen una relación más significativa con las exportaciones. Además, esta regionalización incluye medidas tales como a participación de la industria manufacturera en el PIB estatal, el valor agregado per cápita del sector manufacturero, el porcentaje del empleo manufacturero sobre el total del empleo estatal, el flujo de Inversión Extranjera Directa y la distancia a los Estados Unidos. Las medidas anteriores consideran el periodo entre 2005 y 2011.

Se eligió esta regionalización porque analiza un período más reciente (2005-2011), que coincide con el período de la encuesta, considerada en el presente trabajo, que fue construida en 2011. Además, esta regionalización incluye más variables que determinan la cadena de actividades económicas, lo que permite obtener una imagen más precisa del impacto reciente

y diferenciado que el proceso de globalización ha tenido en México. Como en Delajara *et al.* (2017), esta regionalización del territorio (en tres áreas) proporciona un gran número de observaciones por región. Las regiones consideradas son las siguientes (Figura 1):

1. Alta Exposición: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, México, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
2. Exposición Intermedia: Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
3. Baja Exposición: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

Dahl y DeLeire (2008) han desarrollado una medida de movilidad relativa: la correlación entre los rangos de padres e hijos, o las regresiones de rango – rango (rank-rank), las cuales nos permiten evitar problemas de tamaño de la muestra. Además, este tipo de análisis puede ser extendido a otras dimensiones, como la ocupación, la educación y la riqueza, siempre que las variables sean continuas y puedan ser clasificadas. Además, esta categoría de herramienta es útil para el análisis regional porque la misma regresión permite calcular medidas de movilidad absoluta.

Debido a la naturaleza del análisis regional de esta investigación, se decidió seguir aquí la metodología de regresión de rango para calcular la movilidad relativa y la movilidad ascendente absoluta, a través de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) ya que proporcionan especificaciones más robustas y son estadísticamente adecuadas para comparaciones entre áreas (Delajara & Graña, 2017). Para la región c y la familia i , la relación lineal se define como:

$$(1) R_{ic} = \alpha_c + \beta_c P_{ic} + \varepsilon_{ic}$$

Dónde R_{ic} es el rango percentil ocupado por el hijo de una familia i y de la región C en la distribución nacional de la generación actual, y P_{ic} es el rango de percentil ocupado por el padre de la familia i y la región c en la distribución nacional de la generación anterior. La intersección variará según la región, por lo que se entenderá que el grado de movilidad intergeneracional relativa será la diferencia entre el rango de percentil esperado (en su

respectiva distribución) de los niños nacidos en el percentil más alto y el más bajo de la distribución nacional de la generación previa: $\overline{R_{100,c}} - \overline{R_{0,c}} = 100\beta_c$

Además, nos referiremos a la "movilidad absoluta ascendente" como el rango esperado en la distribución de la generación actual de aquellos padres que estaban por debajo de la mediana de la distribución en la generación anterior, representada por el percentil 25: $\overline{R_{25,c}} = \alpha_c + \beta_c 25$. Como Chetty *et al.* (2014) mencionan en su trabajo, la relación rango-rango es aproximadamente lineal, ya que los rangos promedio de cada padre y niño es, por construcción, de 0.5 en la distribución nacional.

La Encuesta ESRU sobre Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011), utilizada en este trabajo es representativa para mujeres y hombres entre 25 y 64 años de edad, con un total de 11,001 individuos (4,990 mujeres y 6,011 hombres). Contiene información sobre las características sociodemográficas de los entrevistados, escolarización, empleo, renta y bienes del hogar. También recoge información retrospectiva por parte de los entrevistados sobre educación, empleo y bienes del hogar de sus padres, cuando el entrevistado tenía 14 años.

Además, la encuesta revela la región de origen y la región actual de residencia, que puede diferir de la región del nacimiento por migración interna. Para el presente análisis, se usa la región de residencia actual, porque supone que la estructura económica de esta ubicación tiene una influencia esencial en la vida adulta, especialmente para la elección de la ocupación y la acumulación de riqueza.

Los datos originales reportados por la encuesta, para educación, ocupación y riqueza familiar se presentan en variables categóricas, lo que no permite un análisis a través de regresiones. Por esta razón, seguimos la metodología utilizada por Vélez-Grajales & Behrman (2015) para transformar las variables discretas en variables continuas.

3. Resultados

En esta sección, se estiman los resultados de la movilidad relativa y movilidad absoluta ascendente en tres dimensiones: educación, riqueza y ocupación. Esta se calcula a nivel nacional y por regiones de interés. Después, lo mismo hace cada cohorte.

Cabe señalar que la movilidad de ocupacional se calculó solo para la población masculina, debido a que la mayoría de las mujeres tenían ocupaciones domésticas no remuneradas. El

análisis por cohorte se realiza dividiendo la muestra en dos grupos, bajo el supuesto de que los individuos ingresan al mercado laboral cuando alcanzan la mayoría de edad en México (18 años):

1. La cohorte que en el momento de la entrevista tenía entre 25 y 41 años, compuesta por individuos nacidos entre 1970 y 1986, y que ingresaron al mercado laboral entre los años 1988 y 2004. Esta cohorte corresponde a los años de liberalización y consolidación de las dinámicas del comercio internacional.
2. La cohorte que en el momento de la entrevista tenían entre 42 y 65 años de edad, compuesto por individuos que nacieron entre 1946 y 1969, y que ingresaron al mercado laboral aproximadamente en los años 1964 y 1987, antes del período de apertura comercial.

3.1 Educación

En la Tabla 1 se identifica el comportamiento de la movilidad intergeneracional de la educación. La movilidad intergeneracional relativa representa la diferencia en el rango de percentil esperado entre los niños de las familias más ricas y más pobres en la distribución nacional de la generación actual (Chetty *et al*, 2014; Delajara y Graña, 2017). A nivel nacional, se puede observar que hay una movilidad de 43.77 puntos, teniendo la menor tasa de movilidad la región de baja exposición, con una puntuación superior al nivel nacional (46.40 puntos), y siendo la región de alta exposición la que Muestra la mayor movilidad intergeneracional en educación, con una diferencia de 0,98 puntos en comparación con el nivel de país.

Cuando el análisis se realiza por cohorte, se puede observar que la generación nacida entre 1946 y 1969 presenta una movilidad intergeneracional relativa ligeramente inferior (43.99 puntos), mientras que la generación que nació entre 1970 y 1986 reporta mayor movilidad, situándose en los 37,91 puntos. Adicionalmente, para ambas cohortes, la región con la mayor movilidad es la región de alta exposición a la apertura comercial (43.02 y 36.99), ubicada sobre la puntuación. Además, se detecta que mientras para la cohorte de 42 a 65 años, la región con la menor movilidad relativa es la región de exposición intermedia (44.61 puntos), para la cohorte más joven (25 a 41 años), la región de baja exposición presenta la menor movilidad, con 39.95 puntos.

La movilidad absoluta se analiza calculando el rango de percentil esperado de aquellos hijos de padres que se ubicaron en el percentil 25 de su distribución. En este sentido, se puede encontrar un progreso de 11 percentiles para los entrevistados (36), mostrando a la región de baja exposición con la mayor movilidad absoluta ascendente (39), seguido por la región de alta exposición (36). Sin embargo, el análisis por cohorte revela resultados interesantes, porque para la cohorte más joven (de 25 a 41 años) se observa la misma movilidad absoluta ascendente en la educación en todas las regiones y en el nivel nacional, pasando del rango 25 de los padres al 39 para los hijos. Este resultado revela que hay un límite a la movilidad ascendente absoluta, con un avance de 11 percentiles, sugiriendo que el carácter obligatorio de la educación básica (primaria y secundaria) había tenido un efecto importante y homogéneo en el país, al menos a nivel estadístico.

Lo anterior no ocurre para la cohorte de 42 a 65 años. El percentil esperado para los hijos de padres que estaban en el 25 es más bajo, clasificándose en el 20 percentil a escala nacional. La única región que presentó una movilidad ascendente absoluta es la de baja exposición a la liberalización comercial, con un rango esperado de 30, mientras que las regiones de alta e intermedia exposición fueron similares al promedio nacional (20 y 21, respectivamente). Esto no significa que los hijos tienen un nivel más bajo en años de escolaridad, pues el análisis refleja el rango esperado, no los años completados. En otras palabras, aunque pueden tener un mayor número de años educativos en comparación con sus padres, su posición en la distribución dentro de su propia generación es más baja, sugiriendo que, en esta cohorte, la mayor movilidad se debió a individuos posicionados en niveles más altos de la distribución.

Expuestos estos resultados, se puede inferir que, de hecho, la región de alta exposición a la apertura comercial tiene una mayor movilidad intergeneracional relativa en la dimensión educativa, sin embargo, la diferencia con el resto de las regiones no es muy significativa. Sin embargo, la movilidad absoluta ascendente refleja resultados interesantes, porque la región con mayor movilidad es la región de baja exposición. Esta se puede explicar debido a la expansión de la educación primaria y secundaria, especialmente en los estados que tenían una brecha educativa importante, que coincide con los estados que componen la región de menor exposición al comercio internacional. El patrón de movilidad relativa seguido en la presente regionalización es similar al encontrado en el trabajo de Delajara y Graña (2017).

Tabla 1. Relación lineal entre el rango de padres e hijos: Educación, 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMOVI 2011.

*** = Significativo en el nivel 0.01 | ** = Significativo en el nivel 0.05 | * = Significativo en el nivel 0.10

3.2 Riqueza

Comparado con la educación, se puede observar en la Tabla 2, que el nivel de riqueza tiene

Región	Alpha (α)	Beta (β)	R ²	t de β	Movilidad Relativa (r100-r0)	Movilidad Absoluta Ascendente (r25)	Obs
Población entre 25 y 65 años de edad							
Nacional	25.28*** (0.384)	0.44*** (0.007)	0.27	59.25	43.77	36	9493.00
Alta	25.30*** (0.586)	0.43*** (0.010)	0.27	39.04	42.79	36	4187.00
Intermedia	25.76*** (0.645)	0.44*** (0.012)	0.28	35.75	43.59	33	3295.00
Baja	24.53*** (0.829)	0.46*** (0.018)	0.26	26.40	46.40	39	2011.00
Población entre 42 y 65 años de edad							
Nacional	20.33*** (0.550)	0.44*** (0.014)	0.23	31.57	43.99	20	3423.00
Alta	20.34*** (0.858)	0.43*** (0.021)	0.22	20.40	43.02	20	1467.00
Intermedia	22.03*** (0.914)	0.45*** (0.023)	0.24	19.47	44.61	21	1203.00
Baja	17.83*** (1.152)	0.44*** (0.032)	0.21	13.94	44.05	30	753.00
Población entre 25 y 41 años de edad							
Nacional	30.83*** (0.532)	0.38*** (0.009)	0.22	41.28	37.91	39	6070.00
Alta	30.82*** (0.801)	0.37*** (0.013)	0.22	27.39	36.99	39	2720.00
Intermedia	30.23*** (0.917)	0.39*** (0.015)	0.23	24.90	38.58	39	2092.00
Baja	31.49*** (1.135)	0.40*** (0.022)	0.21	18.49	39.95	39	1258.00

una mayor persistencia (menor movilidad relativa). A nivel nacional, la movilidad relativa es de 49.64 puntos, siendo la región de exposición intermedia la que presenta la mayor movilidad (44.71), mientras que la región de baja exposición es el que refleja menor movilidad (51.35). Esto indica un comportamiento inesperado, ya que los resultados sugieren que una mayor movilidad relativa no está directamente relacionada con la exposición a la apertura comercial, pero parece existir una asociación entre una movilidad menos relativa y una menor exposición a la apertura comercial. Sin embargo, los resultados de la región de baja exposición pueden no estar directamente vinculados con el mercado externo, pero sí

con los altos índices de pobreza y marginación que prevalecen en los estados que forman parte de esta región.

Tabla 2. Relación lineal entre el rango de padres e hijos: Riqueza, 2011

Región	Alpha (α)	Beta (β)	R^2	t de β	Movilidad Relativa (r100-r0)	Movilidad Absoluta Ascendente (r25)	Obs
Población entre 25 y 65 años de edad							
Nacional	25.15*** (0.612)	0.50*** (0.011)	0.25	47.15	49.64	56	6686.00
Alta	29.26*** (0.993)	0.46*** (0.016)	0.22	28.69	46.45	58	2963.00
Intermedia	29.44*** (1.028)	0.45*** (0.017)	0.22	25.76	44.71	50	2373.00
Baja	16.25*** (1.130)	0.51*** (0.024)	0.26	21.71	51.35	38	1350.00
Población entre 42 y 65 años de edad							
Nacional	29.65*** (0.777)	0.53*** (0.015)	0.26	34.13	52.51	63	3249.00
Alta	34.04*** (0.602)	0.49*** (0.017)	0.24	21.08	48.97	66	1406.00
Intermedia	34.72*** (1.2285)	0.46*** (0.025)	0.22	18.21	45.77	59	1162.00
Baja	18.82*** (1.436)	0.57*** (0.036)	0.27	16.01	56.86	50	681.00
Población entre 25 y 41 años de edad							
Nacional	14.48*** (0.958)	0.59*** (0.015)	0.31	39.55	58.70	56	3437.00
Alta	17.82*** (1.552)	0.56*** (0.023)	0.28	24.32	56.25	56	1557.00
Intermedia	16.69*** (1.6389)	0.57*** (0.025)	0.30	22.88	56.72	55	1211.00
Baja	9.86*** (1.792)	0.56*** (0.033)	0.30	16.83	55.61	36	669.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMOVI 2011.

*** = Significativo en el nivel 0.01 | ** = Significativo en el nivel 0.05 | * = Significativo en el nivel 0.10

Al realizar el análisis para ambas cohortes, fue evidente que, para ambas generaciones, la movilidad intergeneracional relativa es menor, con 52.51 puntos para la generación más antigua y 58.70 para la generación más joven. La menor movilidad para los encuestados de 25 a 41 años se puede explicar porque es en los primeros años de ingresar al mercado laboral

que la acumulación de bienes comienza a ocurrir, sin embargo, el índice de activos comunes que se utilizó en el presente análisis intenta disminuir este sesgo. También se puede observar que, si bien el grado de asociación es muy similar para las tres regiones en la generación más joven, con una diferencia de menos de un punto entre cada una, la generación de 42 a 65 años presenta una diferencia más marcada, donde la región de baja exposición es la de menor movilidad (56.61) y la región de exposición intermedia es la de mayor movilidad (45.77), con una diferencia de casi 10 puntos entre ellas.

En términos de movilidad absoluta, se observa que hubo un progreso importante, ya que el rango esperado es de 56 para los entrevistados que partieron de un hogar de origen ubicado en el percentil 25. La región de alta exposición a la apertura comercial es la que presenta la movilidad absoluta ascendente más alta, con un rango de percentil esperado de 58, mientras que la región de baja exposición es la que tiene menor movilidad, con un rango esperado de 38, que revela una diferencia de 20 percentiles entre regiones. El análisis por cohorte identifica que la diferencia es causada por la generación más joven, donde la región de alta exposición tiene un rango de percentil de 56 (similar al promedio nacional), mientras que la región de baja exposición está en el percentil 36. Para la cohorte más antigua, la movilidad absoluta es mayor, porque aquellos que nacieron en hogares en el percentil 25 pueden alcanzar el percentil 63. De nuevo, la región de alta exposición tiene la mayor movilidad (66, por encima de nacional) y la región de baja exposición es el que tiene menor movilidad (50), existiendo una diferencia significativa entre las dos regiones, sin embargo, esta es menor que la presentada por la generación más joven.

Estos resultados nos permiten inferir que estar en la región de alta exposición a la apertura comercial se correlaciona con una mayor movilidad ascendente absoluta, ya que la diferencia entre esta y la siguiente región en términos de movilidad (exposición intermedia) es de 8 puntos, y esto es aún más pronunciado para la cohorte de 42 a 65 años. Esto último se puede explicar debido al alto crecimiento que presentó la región de alta exposición gracias a la instalación de maquilas y más tarde al desarrollo de industrias manufactureras cuyo objetivo principal era la producción para exportación. Esto significa que, de hecho, el crecimiento permitió una movilidad ascendente absoluta, lo que benefició a los percentiles más bajos en la distribución. Sin embargo, la baja movilidad relativa indica que, si bien la población aumentó su nivel de riqueza, la posición del hogar de origen sigue definiendo de manera

importante el rango en el que los niños se encontrarán dentro de la distribución nacional, especialmente para las generaciones más jóvenes. Esto es consistente con el trabajo de Delajara y Graña (2017) y Velez- Grajales. *et al* (2017) que encuentran una movilidad relativa más baja para la región sur en riqueza, sin embargo, con la regionalización utilizada en el presente trabajo, se encuentra una diferencia menor, pero aún importante, entre las regiones.

3.3 Ocupación

Para realizar el análisis de ocupación, es necesario señalar que debido a la eliminación de las personas que no tuvieron una ocupación (entrevistados y sus padres), como aquellos que no recordaron el trabajo de sus padres, así como la concentración de esta investigación solo en la población masculina (debido a que más de la mitad de las mujeres eran amas de casa o tenían un empleo no remunerado), la muestra se reduce de manera importante, obteniendo solo 3,822 observaciones para todo el país. Sin embargo, los resultados proporcionan información interesante y permiten abrir las líneas de investigación para futuros estudios, con bases de datos más amplias.

En primer lugar (Tabla 3), en relación con la movilidad intergeneracional relativa, se puede destacar que la persistencia en esta dimensión es menor que en educación (43.77) y riqueza (49.64), siendo la asociación a nivel nacional alrededor de 26.50 puntos. Se puede observar que la región que tiene la mayor movilidad es la región de alta exposición, con solo un grado de asociación de 17.28 puntos por debajo del nivel nacional, seguida por la región de exposición intermedia (29.3) y baja exposición (35.52), en otras palabras, hay una muy baja influencia del empleo de los padres con respecto al tipo de ocupación que tendrá sus hijos en la región de alta exposición a la liberalización comercial, contrariamente a la región de baja exposición, donde la situación laboral del hogar de origen determina en mayor medida la posición ocupacional del individuo. A través del análisis por cohorte, es posible identificar que este comportamiento se deriva principalmente de la generación más reciente (25 - 41 años), donde se observa una asociación muy baja (alta movilidad intergeneracional relativa) en la región de alta exposición, con solo 13.57 puntos, con una marcada diferencia con la región más cercana (exposición intermedia) que tiene una asociación de 31.39 puntos. Para la cohorte de 42 a 65 años, la región que tuvo una mayor

movilidad (menor grado de asociación) es la exposición intermedia con 21.83 puntos en comparación con la región de alta exposición que tiene una movilidad relativa más baja (24.83 puntos) para esta generación.

Tabla 3. Relación lineal entre el rango de padres e hijos: Ocupación, 2011

Región	Alpha (α)	Beta (β)	R^2	t de β	Movilidad Relativa (r100-r0)	Movilidad Absoluta Ascendente (r25)	Obs
Población masculina entre 25 y 65 años de edad							
Nacional	34.11*** (0.778)	0.27*** (0.014)	0.08	18.34	26.50	44	3822.00
Alta	39.44*** (1.305)	0.17*** (0.023)	0.03	7.47	17.28	28	1624.00
Intermedia	32.67*** (1.310)	0.29*** (0.024)	0.10	12.03	29.03	44	1332.00
Baja	29.80*** (1.442)	0.36*** (0.030)	0.14	11.77	35.52	48	866.00
Población masculina entre 42 y 65 años de edad							
Nacional	32.41*** (1.248)	0.27*** (0.026)	0.08	10.59	27.38	36	1241.00
Alta	37.01*** (2.082)	0.25*** (0.040)	0.07	6.21	24.83	46	511.00
Intermedia	33.10*** (2.067)	0.22*** (0.0424)	0.06	5.15	21.83	30	431.00
Baja	26.97*** (2.361)	0.33*** (0.060)	0.09	5.57	32.84	31	299.00
Población masculina entre 25 y 41 años de edad							
Nacional	35.36*** (0.999)	0.25*** (0.018)	0.07	14.25	25.30	46	2581.00
Alta	40.99*** (0.136)	0.14*** (0.029)	0.02	4.71	13.57	26	1113.00
Intermedia	32.64*** (1.694)	0.31*** (0.029)	0.11	10.51	31.39	47	901.00
Baja	32.07*** (1.823)	0.35*** (0.035)	0.14	9.73	34.50	46	567.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMOVI 2011.

*** = Significativo en el nivel 0.01 | ** = Significativo en el nivel 0.05 | * = Significativo en el nivel 0.10

A pesar de que la región de alta exposición tiene mayor movilidad intergeneracional relativa, este comportamiento difiere cuando nos referimos a la movilidad ascendente absoluta. En

este caso, se puede observar que, a nivel nacional, el rango de percentil esperado es 44 para la población que tiene su hogar de origen en el percentil 25. Sin embargo, para la región de alta exposición, el rango de percentil esperado es 28, solo tres percentiles por encima. La región con la movilidad ascendente absoluta más alta es la región de baja exposición, con un rango de percentil esperado de 48, es decir, un avance de 23. Para la cohorte más antigua (42-65 años) el progreso es menor, con un rango esperado de 36 (solo 11 percentiles arriba). Aquí hay que destacar que, para la región de alta exposición, en esta generación, la mejora es importante, porque aquí el rango esperado es 46 (21 percentiles arriba) e incluso más que el promedio nacional para la cohorte, mientras que la región intermedia solo presenta un avance de 5 percentiles (rango 30). La imagen cambia cuando se realiza el análisis para la cohorte más joven, porque aquí, el progreso absoluto es mucho más bajo para la región de alta exposición, avanzando solo un percentil (26), mientras que para la región de exposición intermedia el desarrollo es sustancial, estando en el percentil 47.

El comportamiento descrito anteriormente es consistente con el cambio estructural en el empleo en México causado por la liberalización comercial, que concentró la Inversión Extranjera Directa solo en ciertos estados de la república, afectando de manera diferente a las generaciones y regiones. Los resultados en la movilidad intergeneracional relativa son congruentes con lo que se esperaba, ya que es en la región de alta exposición donde se produjeron cambios importantes en la estructura productiva, lo que abre nuevas oportunidades de empleo, sin una relación significativa con las actividades que las generaciones anteriores realizaron en esa región. Además, normalmente este tipo de industrias tienden a tener mecanismos más competitivos para la selección de recursos humanos, donde las habilidades y el conocimiento de los individuos tienen mayor peso. Contrario con lo que sucedió en la región de baja exposición, que conservó una estructura diferente en su economía, menos productiva y con menos valor agregado, así como con una mayor rigidez en el mercado laboral.

Sin embargo, se puede observar que, para la primera generación, la movilidad absoluta en la región de alta exposición a la apertura comercial fue mayor, lo que puede deberse al desarrollo de algunas industrias, sin tener tanto contacto con el mercado internacional, pero que fueron causados por la transición de las actividades agrícolas a las industriales en México durante el período de sustitución de importaciones. Una historia diferente refleja la

generación más joven, donde hay una movilidad absoluta casi nula, lo que puede reflejar dos situaciones: 1) el progreso absoluto que tuvo la generación anterior fue tal que en la última cohorte no hubo posibilidad de ir más lejos, 2) la nueva estructura laboral solo permitía una movilidad relativa, pero las posiciones disponibles no cambiaron realmente.

4. Conclusiones

El análisis de la movilidad social se refiere a la asociación entre el origen y el destino de los individuos, es decir, el cambio de posición de estatus dentro de un grupo social. Este puede ser un indicador que refleja el grado de desigualdad de oportunidades en una sociedad, siendo importante para países como México, donde la persistencia de altos niveles de desigualdad se correlaciona con diferentes problemas sociales (Esquivel, 2015).

Además, la influencia espacial de los cambios económicos estructurales que han tenido lugar en las últimas décadas debe considerarse en el momento del diseño de las políticas económicas y sociales, ya que la población puede enfrentar patrones similares de problemas (como la pobreza, la desigualdad, etc.) Sin embargo, las diferentes causas piden diferentes soluciones.

El objetivo principal de este trabajo fue identificar la interacción de la apertura económica y la movilidad social, utilizando un análisis regional que podría capturar a ambos. Específicamente, se intentó encontrar patrones heterogéneos de movilidad social intergeneracional absoluta y relativa entre regiones y cohortes de edad, que se seccionaron de acuerdo con su relación con la liberalización del comercio.

El análisis se realizó para tres dimensiones de la movilidad social: educación, riqueza y ocupación. En primer lugar, se observó que la región de alta exposición a la apertura comercial tiene una mayor movilidad intergeneracional relativa en la dimensión educativa; sin embargo, las diferencias entre las regiones no eran importantes. Además, la movilidad ascendente absoluta mostró resultados interesantes, ya que la región con mayor movilidad es la región de baja exposición. Además, para el análisis de cohorte, la generación más joven presentó una movilidad relativa ligeramente más alta. Esto se puede explicar debido a la expansión de la educación primaria y secundaria, especialmente en los estados que tenían una brecha educativa importante, que coincide con los estados que componen la región de menor exposición al comercio internacional.

Para la riqueza, se encontró una movilidad relativa ligeramente menor en la región de baja exposición, presentando mayor movilidad la región de mayor exposición. El mismo patrón se observa para la movilidad ascendente absoluta, yendo a 58 en la región de alta exposición y a 38 en la de baja exposición. El análisis de cohorte nos permite observar que el comportamiento es impulsado por la cohorte más joven, que tiene menor movilidad ascendente, en comparación con la cohorte de 42 a 65 años de edad. Esto se puede explicar debido al alto crecimiento que presentó la región de alta exposición gracias a la instalación de maquilas y más tarde al desarrollo de industrias manufactureras cuyo principal objetivo es la producción para la exportación. Esto significa que, de hecho, el crecimiento permitió una movilidad ascendente absoluta, lo que benefició a los percentiles más bajos en la distribución, en esta región. Sin embargo, la baja movilidad relativa indica que, aunque la población aumentó su nivel de riqueza, la posición del hogar de origen sigue definiendo de manera importante el rango en el que se encontrará a los niños dentro de la distribución nacional, especialmente para las generaciones más jóvenes.

Finalmente, la ocupación también presenta un patrón similar, sin embargo, la diferencia entre las regiones es más importante: por ejemplo, la región de alta exposición presenta un grado de asociación entre padres e hijos de 17 puntos, mientras que la región de baja exposición presenta una asociación de 36. Si se observa por cohortes, se puede identificar que este comportamiento es impulsado por la generación más joven. Además, para la movilidad ascendente absoluta, se puede observar que la región de alta exposición presenta menor movimiento, pasando de 25 a 28, mientras que la región de baja exposición va de 25 a 48. El comportamiento descrito anteriormente es consistente con el cambio estructural en el empleo en México provocado por la liberalización comercial, que concentró la inversión extranjera directa solo en ciertos estados de la república y que afectó de manera diferente a generaciones y regiones. Además, normalmente este tipo de industrias tienden a tener mecanismos más competitivos para la selección de recursos humanos, donde las habilidades y el conocimiento de los individuos tienen mayor peso. Contrariamente a lo que sucedió en la región de baja exposición, que continuó con una estructura diferente en su economía, menos productiva y con menos valor agregado, así como con una mayor rigidez en el mercado laboral.

Aunque este trabajo no puede determinar una relación causal, los resultados permiten identificar una importante correlación entre la apertura comercial y la movilidad social,

encontrando un patrón claro de mayor movilidad en todas las dimensiones en la región de alta exposición y también una mayor movilidad para las cohortes más jóvenes, con excepción en la dimensión de riqueza. Los resultados observados aquí son coherentes con los encontrados en el análisis regional para la movilidad social, siendo los estados del sur de México los que presentan niveles más bajos de movilidad de riqueza relativa (Delajara y Graña , 201; Vélez - Gralajes *et al.* , 2017). Sin embargo, estas regiones están más determinadas por las características geográficas, sin considerar otros factores, como su relación con la apertura comercial. Además, para el análisis de cohortes, y como destaca Yalonetzky (2015), hay un aumento monótono en la movilidad educativa para todas las cohortes, sin interrupciones, pero con diferentes dimensiones para las generaciones más jóvenes. Además, para la movilidad ocupacional, se debe tener en cuenta que incluso si hay diferentes patrones de movilidad por cohortes, será necesario incluir controles por educación para determinar si esta diferencia es solo por la estructura económica o por otras características (Toro, 2015).

Esta investigación proporciona información útil e interesante para el análisis regional y de cohortes en México, el impacto de la liberalización comercial en variables socioeconómicas distintas de la tasa de crecimiento, la pobreza y la dispersión salarial y, por último, una investigación más profunda de la movilidad social que considera la ubicación y sus características económicas. Este trabajo abre una línea de investigación que puede extender la interacción entre la movilidad social y otras variables macroeconómicas, que pueden afectar a de manera diferenciada distintas regiones. Cabe señalar que este trabajo puede estar limitado debido a la cantidad de observaciones de los datos y al problema del sesgo de memoria de los encuestados, ya que gran parte de la información de la encuesta es retrospectiva. Sin embargo, los hallazgos fomentan la producción de nuevas bases de datos, más grandes y representativas a nivel subnacional, que podrían permitir identificar una tendencia más específica a través del análisis econométrico espacial, por ejemplo, considerando interacciones más específicas en ciudades o regiones más pequeñas, que, combinadas con datos administrativos, pueden controlar otros determinantes específicos, como sectores en los que trabajaban padres e hijos.

Referencias

- Aguilera Fernandez, A. & Castro Lugo, D., 2016. La dinamica regional y el proceso de apertura comercial en Mexico. En: *Mercado Laboral en Mexico: Situacion y Desafios*. Mexico City: Universidad Autonoma de Coahuila, pp. 47-86.
- Artecona, R. & Cunningham, W., 2002. Effects of Trade Liberalization on the Gender Wage Gap in Mexico. *The World Bank. Development Research Group / Poverty Reduction and Economic Management Network*, pp. 1-28.
- Atkinson, A. B., 2015. *Inequality, What can be done?*. Boston: Harvard University Press.
- Behrman, J. R., Gaviria, A. & Szekely, M., 2001. Intergenerational Mobility in Latin America. *Economia*, 2(1), pp. 1-44.
- Beller, E. & Hout, M., 2006. Intergenerational Social Mobility: The United States in Comparative Perspective. *Future of children*, 16(2), pp. 19-36.
- Blecker, R. A., 2009. Comercio, empleo y distribución: efectos de la integración regional y global.. En: *México 2010*. México City : El Colegio de México , pp. 1 - 39.
- Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2013. *Movilidad Social en Mexico 2013: Imagina tu futuro* , Mexico City: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Chantarat, S. & Barrett, C. B., 2012. Social network capital, economic mobility and poverty traps. *The Journal of Economic Inequality*, 10(3), pp. 299-342.
- Chetty, R. 2014. Is the United States Still a Land of Opportunity? Recent Trends in Intergenerational Mobility. *The American Economic Review*, 104(5), pp. 141-147.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P. & Saez, E., 2014. Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the united states. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(4), p. 1553–1623.
- Corak, M., 2013. Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility. *The Journal of Economic Perspectives*, 27(3), pp. 79-102.
- Dahl, M. W. & DeLeire, T., 2008. *The Association between Children's Earnings and Fathers' Lifetime Earnings: Estimates Using Administrative Data*. Wisconsin-Madison: Institute for Research on Poverty .
- Delajara, M. & Graña, D., 2017. Intergenerational Social Mobility in Mexico and its Regions. *Working Paper*, pp. 1-21.
- DeLeire, T. & Lopoo, L. M., 2010. *Family Structure and the economic mobility of children*. Washington: The Pew Charitable Trusts..
- Desdoigts, A. & Moizeau, F., 2005. Community membership aspirations : the link between inequality and redistribution revisited. *International Economic Review*, 46(3), pp. 973-1007.
- Di Pietro, C. & D'Amato, M., 2013. Occupational mobility and wealth evolution in a model of educational investment with credit market imperfections. *The Journal of Economic Inequality*, 12(1), pp. 73-98.
- Erikson, R. & Goldthorpe, J. H., 2008. Trends in Class Mobility: The Post-War European Experience. En: *Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective* . New York: Routledge, pp. 437-465.
- Esquivel, G. & Rodríguez-López, J. A., 2003. Technology, Trade, and Wage Inequality in Mexico before and after NAFTA. *Journal of Development Economics* , pp. 543-565.
- Filmer, D. & Pritchett, L. H., 2001. Estimating Wealth Effects without Expenditure Data or Tears: An Application to enrollments in States of India. *Demography*, pp. 115 - 132.
- Ganzeboom, H. B., Graaf, P. M. & Treiman, D. J., 1992. A standard international socio-economic index of occupational status. *Social Science Research*, pp. 1 - 56.

- Genicot, G. & Ray, D., 2009. Aspirations, Inequality, Investment and Mobility. *Working Paper*, pp. 1-21.
- Gutiérrez, E., 2005. Impacto del Tratado de Libre Comercio en América del Norte en las Relaciones de Trabajo en México. *Papeles de Población*, pp. 9-44.
- Gutierrez Flores, L., 2008. La distribución del ingreso en México: un análisis regional, 1990 - 2004. *Problemas del Desarrollo*, pp. 139 - 163.
- Hendrickx, J., 2018. "ISKO: Stata module to recode 4 digit ISCO-88 occupational codes,". [On - Line] Available at: <https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s425802.html>
- Isaacs, J. B., Sawhill, I. V. & Haskins, R., 2008. *Economic Mobility in America*. Washington: Brookings.
- Miles, D., 1999. Modelling the Impact of Demographic Change Upon the Economy. *The Economic Journal*, pp. 1 - 35.
- Mookherjee, D. & Napel, S., 2007. Intergenerational mobility and macroeconomic history dependence. *Journal of Economic Theory*, 137(1), pp. 49-78.
- Mookherjee, D., Ray, D. & Napel, S., 2010. Aspirations, segregation, and occupation choice. *Journal of the European Economic Association*, 8(1), pp. 139-168.
- Moreno-Brid, J. C., Rivas-Valdivia, J. C. & Ruiz-Nápoles, P., 2005. La economía mexicana después del TLCAN. *Revista Gallega de Economía*, pp. 1-20.
- Pollitt, E., 1993. Early Supplementary Feeding and Cognition. Effects over Two Decades. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, pp. 1 - 118.
- Ray, D., 2003. Aspirations, poverty and economic change. *Working Paper*, pp. 1-12.
- Secretaría de Economía - Gobierno Federal México, 2018. *Secretaría de Economía - Gobierno Federal de México*. [En línea] Available at: <https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre-comercio>
- Sepúlveda Ramírez, L., 2001. *Construcción regional y desarrollo productivo en la economía de la globalidad*. Méxic: CEPAL.
- Solís, P. & Cortés, F., 2009. La movilidad ocupacional en México: rasgos generacionales, matices regionales y diferencias por sexo. En: *Tramas familiares en el México Contemporáneo: Una perspectiva sociodemográfica*. Mexico City: Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM, pp. 1-40.
- Stiglitz, J. E. & Kanbur, R., 2016. Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity. *The Journal of Economic Inequality*, pp. 419-434.
- Szekely Pardo, M., 2015. Expectativas educativas: una herencia intangible. En: *México, ¿El motor inmóvil?*. Mexico City: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pp. 95-125.
- Toro, H. J., 2015. Cohortes laborales y origen socioeconómico como determinantes del logro ocupacional. En: *México ¿El motor inmóvil?*. Mexico City: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pp. 347-391.
- Velez Grajales, V. & Behrman, J. R., 2015. Patrones de movilidad intergeneracional para escolaridad, ocupación y riqueza en el hogar: el caso de México. En: *México, ¿El motor inmóvil?*. Mexico City: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pp. 299-345.
- Velez Grajales, R., Stabridis Arana, O. & Minor Campa, E. E., 2017. Still Looking for the Land of Opportunity: The Case of Mexico. *Working Paper*, pp. 1-63.
- Velez-Grajales, R. & Monroy-Gómez Franco, L. Á., 2017. Movilidad Social en México: Hallazgos y Pendientes. *Revista de Economía Mexicana*, pp. 97 - 142.
- Yalonetzky, G., 2015. Movilidad intergeneracional de la educación en México: un análisis de cohortes filiales y sexo. En: *México, ¿El motor inmóvil?*. Mexico City: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pp. 249 - 297.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

La movilidad educativa en dos ciudades uruguayas. Una aproximación descriptiva

Rafael Rey

Universidad de la República
rafael.rey@cienciassociales.edu.uy

Introducción

El trabajo que se presentará introduce el tratamiento de la movilidad educativa en las ciudades de Salto y Maldonado, reuniendo resultados del análisis descriptivo de dos encuestas específicas de movilidad social, de los años 2000 y 2012, aplicadas a la PEA urbana. La finalidad es descriptiva e introductoria, y para ello se enmarcan los resultados dentro de las hipótesis más usuales sobre el impacto de la expansión de la educación en la movilidad educativa y en la movilidad social.

Las ciudades de Maldonado y Salto encarnan procesos de reestructuración económica y social de importancia, aunque diferenciados en sus fundamentos, son igualmente necesarios para entender los últimos veinte años de Uruguay.

En Maldonado se ha consolidado un proceso de urbanización de la población en general, y de la población activa en particular, vinculado a una tercerización de la economía de singular importancia. Este desarrollo en Maldonado está claramente imbricado al papel de la demanda externa por servicios turísticos e inversiones inmobiliarias, en grado tal, que ha trastocado completamente la estructura social departamental en los últimos 45 años. Salto, segunda ciudad del país, exhibe una concentración de la población departamental, que responde en las dos últimas décadas, al repunte del modelo agroexportador fundado en la transformación agroindustrial de frutas, a la expansión de los servicios turísticos y a la reconversión capitalista de los pequeños productores agrícolas. Esto sin dejar de lado el perfil ganadero originario del departamento. (Moreira, 2009; Boado, 2008; Veiga, Fernández, Lamschtein, & Rivoir, 2012).

Pregunta de investigación

La pregunta que orientará el trabajo es la siguiente: ¿el esfuerzo económico y la inversión en educación fueron aprovechados por los salteños y los fernandinos para ser menos desiguales entre sí?

Las desigualdades persistentes

Shavit y Blossfeld (1993), sostuvieron que, pese a la masiva inversión en educación, la desigualdad de clase social de origen persistía en el aprovechamiento de las chances educativas y en los logros ocupacionales a lo largo de las generaciones.

Su posición, conocida como “las desigualdades persistentes”, refrendó los estudios de antecedentes nacionales que sostenían ya las perspectivas de *la reproducción*, de Bourdieu (2003/1964), la de *la desigualdad de oportunidades* de Boudon (1983/1974), y la de la *teoría de la acción racional de clase* de Goldthorpe y Breen (2007/1999).

Reconocen que hay un condicionamiento del origen socio-económico y cultural -que determina calificaciones y logros-, y un condicionamiento durante el proceso educativo -que modela aspiraciones-, para el aprovechamiento de la educación.

Los resultados de Shavit y Blossfeld asimismo refrendaron una posición intermedia entre la perspectiva de la modernización y la de la reproducción, que es la de *las desigualdades máxima y eficientemente sostenidas*, impulsada por Hout (2006) y Lucas (2001). Esta teoría sostiene que los accesos a la educación para las clases media y trabajadora mejoran cuando las clases altas saturaron su demanda educativa de un determinado nivel, como ellos observaron en USA e Irlanda. Finalmente, concluyeron que, pese al incremento del tamaño de las cohortes en el acceso educativo durante medio siglo XX, el proceso selectivo del sistema educativo no se debilitó, sino que se reforzó.

Hipótesis

Siguiendo el planteamiento de Shavit y Blossfeld (1993), el trabajo se propondrá mostrar para la movilidad educativa, la incidencia del origen social y la cohorte. Estos autores

sistematizan que: 1) el efecto origen social es importante, 2) pero menor que el efecto logro educativo del jefe de hogar de origen 3) el efecto del sexo se ha debilitado sustancialmente en los últimos años, y 4) el efecto de las cohortes no es sustantivo para establecer diferencias en la movilidad educativa observable.

Metodología

El presente estudio usó dos secuencias de encuestas representativas de la población económicamente activa de ambos sexos, mayor de 18 años, de las ciudades de Maldonado y Salto. Se alcanzaron para Maldonado 512 casos en 2000 y 552 en 2012, en tanto las muestras de Salto cuentan con 515 casos en 2000 y 551 en 2010.

Las muestras fueron siempre estratificadas y polietápicas, con afijación proporcional al tamaño de población urbana de las 25 secciones censales de la ciudad.

La primera etapa implicó una muestra de 6 hogares por punto muestral con intervalos sistemáticos; y la segunda etapa la selección al azar de un mayor de 18 años activo de cualquier sexo en cada hogar. Se aplicaron en cada oleada los mismos formularios, y las preguntas que interesan a este trabajo fueron las mismas en cada relevamiento y formuladas de la misma forma.

Tendencias de la movilidad educativa

Cuadro 1: Maldonado 2000 Educación actual según educación del hogar de origen

Educación actual	Educación hogar de origen			Total
	0 a 8 años	9 a 12 años	13 y más años	
0 a 8 años	52,5%	14,2%	10,4%	40,6%
9 a 12 años	41,6%	72,6%	52,1%	49,0%
13 y más años	5,9%	13,2%	37,5%	10,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 2: Maldonado 2012 Educación actual según educación del hogar de origen

Educación actual	Educación hogar de origen			Total
	0 a 8 años	9 a 12 años	13 y más años	
0 a 8 años	46,9%	16,5%	4,8%	36,4%
9 a 12 años	43,5%	52,4%	30,2%	43,7%
13 y más años	9,6%	31,1%	65,1%	19,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 3: Salto 2000 Educación actual según educación del hogar de origen

Educación actual	Educación hogar de origen			Total
	0 a 8 años	9 a 12 años	13 y más años	
0 a 8 años	50,9%	14,7%	9,1%	40,4%
9 a 12 años	40,2%	63,5%	52,3%	45,7%
13 y más años	8,9%	21,8%	38,6%	13,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 4: Salto 2012 Educación actual según educación del hogar de origen

Educación actual	Educación hogar de origen			Total
	0 a 8 años	9 a 12 años	13 y más años	
0 a 8 años	53,2%	22,2%	7,5%	46,6%
9 a 12 años	35,9%	52,4%	40,0%	38,0%
13 y más años	10,9%	25,4%	52,5%	15,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 5: Maldonado 2000 Educación actual según clase social de origen

Educación actual	Clase de Origen				Total
	I+II+IVc+IVa	IIIab	IVb+V+VI	VIIab	
0 a 8 años	28,1%	29,9%	40,7%	57,6%	40,1%
9 a 12 años	53,3%	55,2%	50,9%	39,2%	49,2%
13 y más años	18,5%	14,9%	8,4%	3,2%	10,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 6: Maldonado 2012 Educación actual según clase social de origen

Educación actual	Clase de Origen				Total
	I+II+IVc+IVa	IIIab	IVb+V+VI	VIIab	
0 a 8 años	27,0%	7,1%	35,7%	49,7%	35,5%
9 a 12 años	39,7%	52,4%	51,8%	42,6%	44,2%
13 y más años	33,3%	40,5%	12,5%	7,7%	20,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 7: Salto 2000 Educación actual según clase social de origen

Educación actual	Clase de Origen				Total
	I+II+IVc+IVa	IIIab	IVb+V+VI	VIIab	
0 a 8 años	25,9%	28,1%	48,2%	54,3%	39,5%
9 a 12 años	42,4%	53,1%	43,6%	37,1%	42,6%
13 y más años	31,8%	18,8%	8,2%	8,6%	18,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

Cuadro 8: Salto 2012 Educación actual según clase social de origen

Educación actual	Clase de Origen				Total
	I+II+IVc+IVa	IIIab	IVb+V+VI	VIIab	
0 a 8 años	29,9%	20,8%	35,8%	67,6%	46,3%
9 a 12 años	41,3%	62,5%	47,2%	27,3%	38,3%
13 y más años	28,7%	16,7%	17,0%	5,0%	15,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EMOTE 2012

En la ciudad de Maldonado crece sustancialmente la población con al menos un año de educación terciaria, pasando del 10% al 20% en 12 años. Se amplía la reproducción, los hijos de padres con educación terciaria que logran alcanzar la educación superior pasan de un 37,5% en el 2000 a un 65% en el 2012, pero también logran acceder a la educación terciaria mayor cantidad de hijos de padres con educación media, pasando de un 13% a un 31%.

En Salto se mantiene estable el número de personas activas con algún año de enseñanza terciaria y se profundiza la reproducción, los hijos de padres con educación superior, que alcanzan la educación terciaria, pasan de 38,6% en el 2000, a 52,5% en el 2012.

En relación a la distribución de los años de educación según clases sociales de origen, en Maldonado ocurre un fenómeno muy relevante, en el 2000 la participación en la educación terciaria de la Clase de Servicios era del 18,5% y se amplía en 2012 a un 33%, pero crece aún más la presencia de hijos de las clases IIIa y IIIb en la educación superior, pasando de un 15% en 2000 a un 40% en 2012.

En tanto en Salto la proporción de personas activas que alcanzan la educación terciaria se mantiene muy estable entre 2000 y 2012. Lo mismo ocurre con la distribución por clase social de la educación alcanzada, no presenta variaciones sustantivas en el intervalo de estos 12 años.

Conclusiones

En Maldonado crece la población que accede a la educación terciaria, se duplica. Sin embargo, las oportunidades de acceso no se amplían, la clase alta se apropia en mayor medida de esas oportunidades, así como quienes provienen de hogares más educados. El efecto clase social de origen es menor que el efecto educación del hogar de origen.

En Salto decrece la cantidad de universitarios y también se amplía la reproducción según clase social, y se mantiene estable si la comparamos con la educación del hogar de origen. El efecto clase social es similar al efecto educación del hogar de origen.

Tampoco hay cambios sustantivos en el acceso a la educación media superior.

Todo esto en un contexto de aumento de la inversión y de la oferta educativa.

Tal como plantean Shavit y Blossfeld (1993), el proceso selectivo del sistema educativo no se debilitó, sino que se reforzó.

Reflexiones finales y líneas a profundizar

Observar la asociación controlando por sexo y por cohortes.

Aplicar modelos log lineares y ecuaciones estructurales. Incorporando el factor migratorio, en especial para el caso de Maldonado y los cambios en la oferta regional para ambas ciudades.

Seguir explorando la idea de Shavit y Blossfeld: si los accesos a la educación para las clases media y trabajadora mejoran cuando las clases altas saturaran su demanda educativa de un determinado nivel.

Bibliografía

- Benavides, M.; Etesse, M. (2012). Movilidad educativa intergeneracional, educación superior y movilidad social en el Perú: evidencias recientes a partir de encuestas a hogares. En: Cuenca, Ricardo (editor). Educación superior. Movilidad social e identidad. Lima: IEP.
- Blau, P.; Duncan, O. (1967). *The American occupational structure*. NY: Glencoe.
- Boado, M. (2014). Fluidez social en el Uruguay contemporáneo y progresista. En: *El Uruguay desde la Sociología 13*. Montevideo: Departamento de Sociología, FCS, UdelaR.
- Boado, M. (2013). Reproducción y movilidad social en Montevideo 1996-2010. En: *El Uruguay desde la Sociología 11*. Montevideo: Departamento de Sociología, FCS, UdelaR.
- Boado, M.; Custodio, L.; Ramírez, R. (2011). La deserción estudiantil universitaria en la UdelaR y en Uruguay: entre 1997 y 2006. Montevideo, Uruguay: Universidad de la República.
- Boudon, R. (1983). *La desigualdad de oportunidades*. Barcelona: Laia.
- Boudon, R. (1974). *Education, opportunity and social inequality*. New York: John Wiley and Sons.
- Bourdieu, P.; Passeron, J. C. (2003). *Los Herederos. Los Estudiantes y la cultura*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Bourdieu, P.; Passeron, J. C. (1996). *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. México: Ediciones Fontamara.
- Breen, R. (2004). *Social mobility in Europe*. Oxford University Press.
- Breen, R.; Jonson, J. (2005). Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. *Annual Review of Sociology*. Vol. 31: 223-43.
- Breen, R.; Luijkx, R.; Müller, W.; Pollack, R. (2009). Nonpersistent inequality in educational attainment: evidence from eight European countries. *AJS*. Vol. 114, N° 5.
- Duncan, O. (1966). Methodological issues in the analysis of social mobility. En: Smelser, N.; Lipset, S. (eds.) *Social structure and mobility in economic development*. Chicago: Aldine.
- Errandonea, G. et al. (2014). 140 años de la educación del pueblo. Aportes a la reflexión sobre la educación en Uruguay. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura.
- Fachelli, S.; López, P.; Jorrat, J. R. (2017). Análisis comparativo de movilidad intergeneracional de clases en Argentina y España. En: *IV Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina*. Instituto Gino Germani/FSOC/UBA, Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación, ULP, La Plata. ISSN 2362-4094 - web <http://seminariosms.fahce.unlp.edu.ar>

- Goldthorpe, J. (2007). *On Sociology*. Second Edition. Stanford University Press.
- Hout, M. (2006). Maximally Maintained Inequality and Essentially Maintained Inequality: Crossnational Comparisons. *Sociological Theory and Methods*. Vol. 21. N° 2: 237-252.
- Jorrat, J. R. (2016). *De tal padre... ¿tal hijo? Estudio sobre movilidad social en Argentina*. Buenos Aires: Editorial Dunken.
- Lambert, R.; Prandy, K.; Bottero, L. (2007). By Slow Degrees: Two Centuries of Social Reproduction and Mobility in Britain. *Sociological Research Online*. Volume 12, Issue 1.
- Lucas, B. (2001). Creative teaching, teaching creativity and creative learning. En: Craft, A.; Jeffrey, B. & Leibling, M. (eds.). *Creativity in education*. London: Continuum.
- Moxlad (2017). *Base de Datos de Historia Económica de América Latina* Montevideo Oxford. Disponible en: <http://moxlad.fcs.edu.uy/> - <http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es>
- Schofer, E.; Meyer, J. W. (2005). The Worldwide Expansion of Higher Education in the 20th Century. *American Sociological Review* 70: 898-920.
- Shavit, Y.; Blossfeld, H. P. (1993). Persisting Barriers: Changes in Educational Opportunities in Thirteen Countries. En: Shavit, Y. & Blossfeld H. P. (eds). *Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*. Social Inequality Series. Westview, Colorado.
- Solís, P.; Boado, M. (2016). *Y sin embargo se mueve. Estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*. México: El Colegio de México y Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Vallet, L. A. (2004). The state of the art. Current issues and prospects in comparative educational research. <https://www.researchgate.net/publication/26723190251>

MESA 2: CLASE, CONDICIONES LABORALES Y SINDICALISMO

Sindicatos y gobierno en la gestión de la alianza cambiamos en Argentina

Patricia Lecaro y Patricia Gorri.

Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Argentina.

patolecaro@yahoo.com

pgorri@gmail.com

Resumen

El presente trabajo busca ser un aporte para reflexionar sobre la conflictividad laboral de los empleados públicos de la provincia de Mendoza. Por ello, buscamos comprender los cambios políticos y culturales entre el gobierno de Cambiamos (2015-2019) y el anterior gobierno (2003-2015) para lo cual describiremos el proyecto político y el sustrato de ideas que se han desplegado en torno a la construcción de un imaginario sobre el trabajador público. Describiremos brevemente las políticas económicas, y las fracciones de clase que han propulsado el actual proyecto político. También abordaremos la especificidad que adquiere la conflictividad laboral en el Estado en la provincia de Mendoza.

Palabras claves: NEOLIBERALISMO – ESTADO – SINDICATOS – MACRI – CORNEJO - ARGENTINA

1. El “Cambio” en Mendoza

El presente trabajo es un recorte de los resultados alcanzados en un proceso de investigación interdisciplinaria sobre “Sindicatos y Gobierno: relaciones, dilemas, tensiones con el Nuevo Gobierno de Mendoza¹” desarrollada entre 2016 y 2018 en la Universidad Nacional de Cuyo. Nos interesa compartir una discusión que ha sido eje en nuestro trabajo como es la conflictividad laboral de los empleados públicos de la provincia de Mendoza en épocas del nuevo gobierno de Cambiamos en el país y Cambia Mendoza, el cual ha impreso marcas en las condiciones objetivas y en la subjetividad de los trabajadores públicos a través de diferentes políticas públicas que exaltan su sustrato neoliberal.

¹Nuevo Gobierno es el slogan que usa el gobierno de la coalición gobernante en la provincia de Mendoza, Argentina, que asumió en 2015-2019 y cuyo referente a nivel nacional es la alianza oficial PRO-Cambiamos

En cuanto a las estrategias metodológicas utilizadas han sido de corte cuantitativo y cualitativo. Recopilamos fuentes de información primaria (entrevistas, fotografías, videos, discursos, actas paritarias, leyes), y secundaria (artículos de revistas, libros, artículos periodísticos, tesis). Realizamos entrevista semiestructuradas a referentes gremiales de los principales sindicatos estatales de la provincia de Mendoza. El criterio de selección de los/as entrevistados se realizó considerando el período de estudio y quienes han sido las conducciones de los principales sindicatos estatales en nuestra provincia en los últimos quince años (Asociación Trabajadores del Estado –ATE-; Sindicato Unido Trabajadores de la Educación –SUTE-; Central Trabajadores Argentinos –CTA-; Judiciales).

1.1 Cambiemos. El retorno del neoliberalismo.

Hacer análisis del momento presente requiere de perspectivas diversas y multidisciplinarias. Al respecto, Vilas (2017) sostiene que el modelo económico que lleva adelante el Presidente Mauricio Macri es un proyecto que ni siquiera representa los intereses del capital más concentrado sino del capital especulativo, es decir, es el proyecto de los grupos que acumulan sobre la base de la renta: la renta agropecuaria, la renta minera, la renta financiera.

Esto se patentiza desde las primeras medidas que el gobierno de Cambiemos toma cuando asume el poder. Se benefician a este sector con la eliminación de las retenciones, devaluación, desregulación. Las sinuosas baterías de políticas monetarias tomadas por los diversos equipos económicos han beneficiado más al sector financiero que a la producción. La especulación vía plazos fijos, LEBAC, LELIQ, es sin duda mucho más rentable que cualquier actividad productiva, pese a que han logrado abaratar y/o licuar sustancialmente el costo laboral.

¿Cómo se pueden conceptualizar las estrategias políticas y económicas llevadas adelante por la alianza gobernante? En el trabajo vamos a tomar a Varessi (2013) como referencia, para analizar los cambios políticos y la construcción ideológica cultural de Cambiemos. Para ello recurriremos a describir el proyecto político y el sustrato de ideas que se han desplegado en torno a la construcción de un imaginario sobre el trabajador público y cómo esto va conformando una estrategia hegemónica.

(...) “Entendemos que un modelo de acumulación es un recorte espacio-temporal del proceso de reproducción ampliada del capital, que se observa en la identificación de relaciones sociales ligadas a tres núcleos constitutivos de políticas económicas,

variables económicas y fracciones de clase, las cuales presentan tanto regularidad a lo largo del período de estudio, así como un orden de prelación que evidencia las características propias del modelo en cuestión. Asimismo, abordamos la dinámica política de la política económica, conformando una mirada más integral del proceso de lucha de clases, a partir del análisis de los rasgos centrales de la construcción de hegemonía que son claves para comprender la propia gestación y desarrollo del modelo” (Varessi, 2013; 10)

En cuanto al Proyecto político lo diferenciamos, (Varessi 2013), de modelo de acumulación, por entender que en este último, es un recorte espacio-temporal, que se inscribe en periodos político-económicos más amplios a los que definiremos como regímenes de acumulación, que pueden ser analizados a partir de tres núcleos conceptuales: las políticas económicas, las variables económicas y las fracciones de clase.

El concepto nos permite arrojar luz para comprender la orientación de las medidas de política económica y financiera de Cambiemos, que son en muchos aspectos un retorno a los años noventa: la Reforma del Estado; el ajuste social renombrado con el eufemismo del sinceramiento de la economía; la estigmatización del Estado y sus empleados como origen y fuente de todos los males; la vuelta al endeudamiento y el retorno al financiamiento vía Fondo Monetario Internacional, entregando los resortes de la economía argentina a sus recetas e imposiciones. Claro ejemplo de esto es la firma de un programa stand by con una duración de 36 meses por unos U\$S 50.000 millones,² con el objetivo de trazar un puente financiero para llegar al año 2019 con metas de reducción de déficit fiscal y objetivos de política monetaria, con un apartado destinado a la protección a los más vulnerables y otro referido a la equidad de género (Informe CEPA, 2018).

(...) “El enfoque subyacente del programa y los pronósticos es el tradicional del FMI, que parte del supuesto de que los desequilibrios emanan de la sobre expansión de la demanda por efecto, principalmente, de la elevación del gasto público. Consideran a

²El monto del acuerdo adquiere relevancia en términos históricos. No solo el primer desembolso efectuado en junio (15.000 millones de dólares) fue el más importante de la historia entre el FMI y la Argentina, incluso superior al de la gran crisis de 2001, sino que el acuerdo total equivale a casi el 80% del total de los préstamos del FMI a la Argentina en las últimas cuatro décadas. (CIFRA, 2018)

la devaluación como expansiva por el aumento de la competitividad de las exportaciones, sin considerar las especificidades de las economías subdesarrolladas como la de Argentina..., consiguientemente, se produce un sobre ajuste en el consumo (caídas del consumo privado y el del público), lo cual extiende y agrava los períodos recesivos que se derivan de políticas de esta naturaleza”. (CIFRA, 2018)

En el marco del Acuerdo lo primero que se anunció desde el gobierno fue el recorte de 30.000 millones de pesos en obra pública, que mayormente estaba destinada a las provincias y el recorte de 20.400 millones de pesos³, lo que implicaría alrededor de 30.000 despidos en el sector público hasta 2019 a partir del recorte especialmente en los gastos corrientes del Estado.

En síntesis, la receta es la aplicación de un mega ajuste en el gasto público vía metas de reducción del gasto fiscal. Se definen topes de inflación. Recorte de transferencias a las Provincias y a la masa salarial de trabajadores estatales. Esto sumado al aumento de tarifas a la devaluación de la moneda –hoy con un tipo de cambio “flotante”-; reducción de los derechos de exportación de soja (del 35% al 30%) y sus derivados (del 32% al 27%) y eliminación de retenciones a cereales y productos agroindustriales; devaluación del 40/50% y eliminación de los controles cambiarios (se pueden comprar libremente por un monto que no supere los dos millones mensuales); incremento de la tasa de interés y desregulación del mercado financiero; eliminación de los controles de importación y reemplazo por licencias automáticas y no automáticas; liberalización del precio de los combustibles; incremento de tarifas en servicios como luz, agua, gas, aumento del combustible. La recesión y una inflación cercana al 50% para el 2018 son los resultados más palpables para los trabajadores argentinos del sinceramiento.

1.2 Los que ganan con el nuevo modelo de acumulación

Retomando a Varessi (2013) las fracciones de la clase dominante se pueden distinguir y agrupar según tres criterios: el tamaño, que hace referencia su peso estructural; la vinculación al mercado externo, por la importancia de la política cambiaria; y la inserción sectorial y la evolución de precios relativos. El autor distingue tres fracciones dentro de la clase dominante

³ 30 mil millones de pesos equivale a U\$S 750.00.00; y 20.400 millones de pesos equivale a US\$510.000.000

(...) “Una fracción productivo-exportadora: grandes empresas productoras de bienes transables caracterizadas por su inserción en el mercado externo, que se encuentra principalmente ligado al agro, la industria y la extracción y procesamiento de recursos naturales (como petróleo y minería). 2) Una fracción amplia de PyMEs: empresas de bienes y servicios principalmente orientadas al mercado interno (para consumo o bienes intermedios). 3) Una fracción de empresas de servicios públicos compuesta principalmente por empresas privatizadas, a las que se sumarían las nuevas empresas estatales producto de una estrategia estatal heterogénea. (...) 4) La fracción financiera: vinculada a la importancia de los conglomerados financieros, tanto a nivel estructural como fracción no productiva ligada al interés, como en relación a las políticas en torno a la deuda pública y la tasa de interés. Esta fracción se compone principalmente de conglomerados financieros privados, públicos y cooperativos, que abarcan un amplio espectro de entidades financieras (...)” (Varessi, 2013:250)

Con el ascenso de Cambiemos a los cargos de gobierno nacionales y las medidas económicas que llevan adelante, la relación entre las fracciones se modifica. La fracción financiera ha vuelto a tener una preponderancia que no tuvo en la última década a partir del pago a los holdouts y la emisión de deuda y la fracción de empresas públicas se vio beneficiadas por el aumento de las tarifas, también son favorecidos el sector de exportaciones del agro y sus derivados – particularmente el sojero-; luego el industrial y el sector minero.

Las clases subalternas, y la fracción PyMEs, son las que se llevan la peor parte, vía la innegable transferencia del excedente económico desde las clases populares y los asalariados a las fracciones del capital financiero, a los sectores de servicios, y productivo-exportador. Sumando a esto la pérdida del poder adquisitivo del salario real. Quienes ganan y quienes pierden da cuenta de la orientación del modelo de acumulación vigente.

1.3 Determinantes ideológicos-culturales del Gobierno de Cambiemos

Es indudable que Cambiemos lleva adelante un programa económico y político a favor del capital trasnacional y nacional más concentrado, visibilizado en un gabinete de ministros plagado de CEOs de corporaciones que realizan sus actividades en los agronegocios, la minería, la energía, el sistema financiero. Pero ha logrado “vender” a la gran masa de su

electorado la cultura emprendedora como la lleva mágica del cambio y el progreso personal. La sociedad argentina “compra” este discurso no por ingenuidad o simple espíritu suicida, sino más bien porque es receptiva, a su propia historia de inmigrantes, sobrevivientes a ciclos económicos que dinamitan sectores completos de la economía, a procesos inflacionarios eternos e indomables. Una sociedad con más del 35% de su masa laboral que trabaja en negro, con más trabajadores en la economía informal que insertos en la industria, es claramente una sociedad acostumbrada y adaptada a vivir en la incertidumbre y la auto explotación. A esta sociedad le habla el discurso macrista.

Cambiamos impone una concepción del mundo empresarial y en este sentido ejerce una dirección ideológica y cultural promoviendo el sustrato de ideas que permean el sentido común no sólo en el nivel político, sino en la sociedad generando una unidad de objetivos en torno a su proyecto político económico y alrededor del cual se busca el consenso con diferentes facciones del capital. Compartimos la tensión que señala Vommaro:

“(…) entre el proyecto socioeconómico del Pro y la necesidad de constituirse como un partido de poder y sus señalamientos sobre el “cambio cultural” que intenta llevar adelante el gobierno como base de sus políticas (...). La ruptura en términos de «cambio cultural» da cuenta de la amplitud de la transformación buscada y, al mismo tiempo, vuelve impreciso su alcance. Pareciera ser que el gobierno normalizador se propone, en cierta medida, cambiar la cultura de los argentinos, es decir, el modo en que estos hacen las cosas, en especial en su actividad económica y en su vínculo con el Estado. Este cambio podría verse como la transformación de un ethos estadocéntrico y militante en otro emprendedor y asociado al voluntariado, dos marcas del Pro.” (Vommaro, 2017:2).

En esta construcción se diferencia claramente del Kirchnerismo. Como dice Gotelli (2017:11) el proyecto político-económico y la cultura política que consolidó el kirchnerismo durante sus tres periodos de gobierno son reformulados a partir de la emergencia como fuerza de gobierno de la alianza Cambiemos.

La cultura política del kirchnerismo apostaba a la construcción del neoliberalismo como adversario político, la recuperación del Estado como mediación y armonización de intereses

y la restitución de la promesa de un futuro de plenitud a partir de la recomposición de las condiciones de vida de las clases subalternas (Varessi, 2013).

El proyecto político-económico que se construye en ese marco planteaba una alianza de clases con los sectores productivos, desplazando del centro de la escena a los sectores financieros locales e internacionales. Aspectos como el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la creación de empleos y la integración latinoamericana se volvieron elementos centrales de la construcción hegemónica del kirchnerismo; con impactos desiguales sobre el modelo de acumulación.

En tanto Cambiemos plantea como adversario político al populismo, lo cual se expresa tímidamente en los primeros discursos del presidente y abiertamente en dichos de uno de sus socios políticos.

(...) “Nosotros creemos que hemos hecho bien en estar en este frente, creo que es lo que necesitaba la Argentina (...). Nos unimos en pos de un interés general que es terminar con el populismo”, insistió, pero destacó que “no están superadas las lacras, los problemas que trajo el populismo”. (Alfredo Cornejo, declaración como presidente de la UCR, 2018)

En el relato de Cambiemos, el populismo aparece como la noción que definiría al gobierno anterior, y se vincula a una larga tradición de impugnación de la cultura política popular vinculada al peronismo. Es responsable un déficit fiscal alto, una política de aislamiento del mundo y un alto grado de corrupción estatal que devino en malas condiciones de vida de la población. Estos rasgos pasan a formar parte de una herencia contra la cual el gobierno de Cambiemos no tuvo más alternativa que implementar una serie de reformas en las políticas, para corregir el rumbo político y económico del país y se autoproclama como los únicos con capacidad de modificarlos.

Para modificar los aspectos de las políticas que el gobierno considera “populistas” inició una serie de políticas entre las cuales encontramos los despidos en el sector público y en el sector privado (Varela, 2017; D’Urso, 2017), que generaron como respuesta una masiva con movilización de los trabajadores y paros en 2017 y 2018.

Otra diferencia con respecto al gobierno anterior es que el gobierno de Cambiemos no confronta contra su adversario, apuesta y llama al `diálogo` como eje de la democracia argentina.

El rol del Estado como armonizador de intereses es mutado por otro donde Estado debe modernizarse, mejorar la gestión pública con criterios de eficacia, eficiencia y que sea productivo para todos, lo cual implica responsabilidad y empoderamiento. Se apela así a una retórica empresarial exhortando a los argentinos a confiar y poner el hombro, ser parte de la productividad del Estado para obtener la felicidad.

La construcción del relato macrista posee pocos y simples ejes, muy alejados del lenguaje y la épica kirchnerista. Uno de sus constructos más emblemáticos es la noción del emprendedor. De la figura del emprendedor el gobierno pretende extraer un patrón de comportamiento individual e incluso colectivo, una especie de ética social. Ser creativos, capaces de vivir en la incertidumbre. Es una apuesta a una construcción ideológica apoyada en el Individualismo exacerbado, donde la movilidad social es posible por el esfuerzo propio, no por acciones colectivas o un modelo o proyecto de país.

1.4 La conflictividad laboral como respuesta al ajuste

Como señala Paula Lenguita (2017:28) el cambio de rumbo económico adoptado por la coalición conservadora que gobierna el país provoca cada vez más descontento popular. Dicho escenario de conflictividad creciente impone el interrogante sobre el rol sindical en la orientación de ese descontento popular. La autora reflexiona sobre el papel sindical en la configuración de un frente opositor y de resistencia al actual modelo.

El movimiento sindical argentino posee una significativa densidad y capacidad de organización. Etchemendy y Collier (2008) afirman que la conflictividad laboral es presentada como uno de los principales factores de revitalización sindical, ya que las organizaciones de trabajadores recuperan su capacidad para la movilización y la confrontación. Ello ha sido así desde finales de 1990, marcado por un aumento cuantitativo de los conflictos laborales. Es decir, que el movimiento obrero posee una capacidad de desplegar una multitud de herramientas para organizar una acción colectiva desafiante (Gómez, 2009:100), que busca resistir y modificar medidas gubernamentales que puedan afectar sus intereses.

En contextos de conflictividad sociolaboral es necesario que las organizaciones de trabajadores pongan funcionamiento su capacidad de poder sindical, en tanto “capacidad de intervención de los sindicatos sobre la definición del orden social y sus reglas, las cuales son siempre conflictivas: se oponen o enfrentan intervenciones y prácticas de otras fuerzas sociales”. (Gómez, 2009:100)

Ante el aumento de la conflictividad laboral la acción colectiva desafiante los diferentes gobiernos también despliegan un abanico de medidas y acciones para doblegar a los sindicatos e imponer los cambios que desean llevar adelante

(...) La respuesta estatal a la organización y la acción colectiva disruptiva puede ser estudiada en dos dimensiones analíticas inseparables: las formas de reconocimiento o rechazo a los movimientos y sus acciones, y las formas de concesión o negación a sus demandas e intereses. (Gómez, 2009:102)

Ante la capacidad del poder sindical de promover acciones colectivas desafiantes el del Estado intentará disciplinar, doblegar y /o desarticular al movimiento sindical, su posibilidad de lograrlo estará dada por la fuerza o debilidad que posea en el momento de la disputa. Gómez (2006) señala que en distintos períodos, el Estado puede también llevar adelante una estrategia oblicua o sinuosa con formas de inclusión/exclusión selectivas que apuntan a fragmentar los movimientos, y también puede combinar concesiones unilaterales a las demandas manteniendo estrategias de no reconocimiento (persecución o represión) o, al revés, rechazar los reclamos sin realizar concesiones, pero ofreciendo una inclusión formal y un fuerte reconocimiento simbólico.

El mismo autor indica que la respuesta estatal, estará limitada o no, según la coyuntura política económica que en un determinado momento atraviesa el país, la que posibilita o limita la disponibilidad de recursos para satisfacer las concesiones (momento ascendente o descendente de las finanzas) y el nivel de apoyo o consenso que tiene el gobierno (apoyo electoral, de la opinión pública y de los factores de poder y grupos de interés dominantes) en un momento determinado.

El resultado de la puja entre Estado y sindicatos se juega en el despliegue de múltiples estrategias que produzcan victorias y derrotas en la distribución del excedente social.

1.5 La conflictividad laboral en el empleo público

En el ámbito del empleo público la conflictividad, al igual que en el ámbito privado, está dada por la relación capital-trabajo, existe una especificidad dada porque el Estado se convierte en autoridad de aplicación de las legislaciones laborales, pero también negocia y entra en conflicto con los trabajadores, a lo que se suma la supuesta imparcialidad que debe mantener ante conflictos colectivos. Es decir, en el caso del empleo público el Estado es juez y parte.

Barraza (2015:3) sostiene que el empleado estatal tiene con sus empleadores la misma relación social que con cualquier otro capitalista. Existe un plusvalor porque el empleado público trabaja no sólo el tiempo necesario para reproducción sino un tiempo mayor que alguien se apropia, sea el propio Estado o quien recibe ese trabajo.

(...) “Los conflictos laborales en el sector público estallan tempranamente cuando, hacia fines del año 2015, el gobierno decide no renovar los contratos de miles de trabajadores, hecho que desencadenó múltiples acciones de lucha a lo largo y a lo ancho del país. La ebullición y resistencia de las bases derivó en un paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el 24 de febrero de 2016 que confluyó en una masiva movilización a la Plaza de Mayo. El reclamo fue no sólo la reincorporación de los trabajadores despedidos sino también un incremento salarial, el 82% móvil y la derogación del “protocolo antipiquetes”. Con posterioridad, continuaron los conflictos, destacándose una tendencia a la articulación de las luchas entre trabajadores de distintos puntos del país. Al analizar la dinámica que presentan los conflictos laborales del sector vemos que en el año 2016 se llevaron a cabo 502 acciones de lucha. Este número no evidencia un crecimiento de la conflictividad laboral en el sector respecto a los años previos, al menos si consideramos la tendencia vigente desde el año 2013” (D’Urso, 2017:39).

Si pensamos en la conflictividad sociolaboral en nuestro país, según el informe del Centro de Economía Argentina (CEPA) en 2017, y siguiendo la tendencia de 2016, se registraron 2.265 protestas laborales⁴.

⁴ Desde el 1 de enero de 2016 hasta el mes de noviembre de 2017 se registraron 111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales. Los datos relevados dan cuenta que en estos hechos se detuvo a 354 manifestantes, y resultaron heridos

(...) “El 55,9% de las mismas representan las protestas protagonizadas por los trabajadores y trabajadoras del sector público, y el 44,1% del sector privado. En el ámbito público el 91,7% de los conflictos se produjeron en el rubro Servicios, el cual involucra los servicios esenciales de educación, salud, administración pública en general, etc. Las protestas por salarios (paritarias, reducción, atraso de pagos, incumplimiento de acuerdos) constituyen alrededor del 40% de los reclamos; luego le sigue los reclamos por despidos o suspensiones y en menor medida refiere a situaciones de lucha referidas a las condiciones en la que se ejerce el trabajo”. (CEPA, 2017)

En el caso de Mendoza el relevamiento que realizamos desde enero de 2017 a agosto de 2018, registramos trece conflictos que logran nuclear a los sindicatos estatales en su conjunto, sin considerar los reclamos sectoriales (por ejemplo, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación alrededor de ítem aula⁵, cierre de cursos en escuelas secundarias, etc.) en reclamos en primer lugar de mejoras salariales y luego en torno a reclamos por cierre de áreas del Estado o tercerización de servicios.

2. El conflicto sindical en Mendoza

Los sindicatos en nuestro país, y en Mendoza en particular, tiene una estructura organizativa con cúpulas sindicales fuertes, muy personalistas que se eternizan, en general, en sus mandatos. Los gremios estatales son parte y se (re)constituyen a partir de las centrales sindicales nacionales en las cuales cada uno de ellos se inserta. Tanto la Central de Trabajadores Argentino (CTA) como Asociación Trabajadores del Estado (ATE) son uno de los fundamentos de la conflictividad entre diferentes grupos de los gremios en nuestra Provincia, como la relación con el actual gobierno y con las diferentes líneas del partido justicialista.

alrededor de 328. El promedio indica: un caso cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos días. En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de noviembre totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes. (CEPA, 2017)

⁵ Ítem aula: un decreto del gobernador Alfredo Cornejo establece un índice de productividad a los docentes de la Provincia. Este, según el gobernador Cornejo, promueve que el docente este siempre frente a los alumnos en el aula. El mismo ha llevado diversas instancias de enfrentamiento entre gobierno, sindicatos y educadores de la Provincia

Nos interesa describir brevemente cómo se ha dado la dinámica interna de los sindicatos estatales frente a los procesos de ajuste del empleo público y señalar aquellos nudos conflictivos que son expresión de tensiones hacia adentro y hacia afuera. Serán las tensiones en el espacio de la negociación paritaria en nuestra Provincia el primer factor que va a desestabilizar la relegitimación institucional de los sindicatos representantes de los/las trabajadores estatales.

En 2016, con el Nuevo Gobierno comienzan las paritarias en el mes de enero siendo las mismas acompañadas por diversos reclamos y un alto nivel de conflictividad. El Gobernador Cornejo (2016) sostuvo “la paritaria tiene que servirle al empleado estatal pero fundamentalmente al servicio público educativo. Hemos hecho una propuesta que atiende a mejorar la educación y a atacar los problemas de la educación, que no está bien en Mendoza. Es nuestro objetivo y prioridad mejorar la calidad”. (...)

Con el gremio de los docentes el comienzo de discusiones paritarias estuvo marcada por la decisión de implementar un ítem salarial de productividad conocido como “ítem aula” (Decreto provincial 228/16) para mejorar la calidad educativa.

“Buscamos que el maestro tenga un incentivo, un premio. Queremos que el docente esté frente al grado participando activamente. Estamos convencidos de que es la mejor propuesta que podemos hacer para mejorar el servicio educativo y que eso se vea reflejado en el aprendizaje de los alumnos.

(...) Nos olvidamos que esto no es un problema del gremio, es un problema del conjunto de la ciudadanía, tener una buena educación y tener a los alumnos y docentes en clases y cumplir con esa estándar internacional de los 180 días de clase, que no se cumplen desde hace mucho tiempo en Mendoza. Somos todos servidores públicos, incluidos los docentes” (Cornejo, 2016 Mendoza.gov.ar)

Sin embargo, desde el sindicato y en la voz y movilización de los/las docentes, quienes se congregaron la primer semana de marzo de 2016 en una multitudinaria marcha, señalan que las políticas públicas de calidad de la educación involucran otros aspectos que no son sólo salariales, por lo cual la decisión de aplicar el ítem aula constituye una estrategia del premio, el incentivo, para la motivación a dar clases vs. un castigo por no cumplir efectivamente con su función.

Durante 2016, diversas situaciones se dieron alrededor de este “ítem aula”. Docentes con enfermedades terminales, con problemática de violencia de género en sus familias, con cuidado de sus hijos, que debían ausentarse más de dos días dejaban de percibir cerca de \$2.000 al mes. Algunas situaciones fueron contemplándose recién a fines de 2016, pero el castigo (disfrazado de premio) ya había calado profundo en el descontento docente.

Del trabajo de campo realizado, observamos que los reclamos salariales pasan a un segundo plano en torno al reclamo generalizado de reconocimiento y respeto a la dignidad docente, a no equiparar, en función del “orden y calidad en educación”, a los/las docentes con un empleado público, con un empleado público ñoqui⁶, con alguien a quien se lo disciplina con un castigo/premio sin contemplar diversidad de causas del ausentismo docente.

Otro factor está relacionado con la negociación colectiva en mesas paritarias como un derecho. No sólo el Gobierno ha cerrado la paritaria 2016, 2017 sin oír el reclamo salarial, sino que lo ha hecho por decreto dando un aumento salarial del 17%, inferior a la proyección inflacionaria de la economía provincial y nacional y según los mismos datos recabados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia (DEIE).

Durante 2016 y 2017, en relación a los empleados públicos afiliados a ATE la situación de aumento salarial fue diferente. En primer lugar, el gobierno intentó imponer un “ítem” y este no prosperó. Por otro lado, la paritaria no se cerró por decreto, sino que dos de los tres sectores que convocan a los afiliados del área salud, acordó el aumento con el gobierno, por lo cual ATE debió acatar dicho aumento, manifestando su rechazo.

En diciembre de 2017, se fijó el techo para la paritaria provincial 2018 al firmar dos gremios de la salud como ATE Salud y Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA), quienes acordaron un aumento en cuotas del 17%. Esto desató un conflicto al interior de ATE ya que la oposición a quienes conducen el gremio rechazó este aumento.

2.1 En la voz de los/las protagonistas: la historia contada desde los/as conductores de los sindicatos estatales

⁶ El término ñoqui se utiliza en Argentina para la persona que tiene un contrato, que recibe un sueldo por ello, pero que no trabaja. Una figura generalmente relacionado con el aparato público

El análisis de las entrevistas a cuatro de los dirigentes sindicales estatales más importantes de la Provincia nos ha permitido ir reconstruyendo algunas trayectorias comunes entre ellos/as y ciertos momentos claves de restructuración, fortalecimiento, alianzas, luchas y derrotas del sindicalismo en la Provincia.

2.1.1 Mendoza crisis y conflictos sindicales

En 1999 llega al Gobierno de la Provincia de Mendoza, Roberto Iglesias como candidato representante de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario. Llega después de doce años de gobiernos justicialistas en Mendoza (1987-1999)- Mendoza enfrentaba una grave crisis económica similar a la que atravesaba que el país.

El Gobierno Provincial afrontó la crisis con el lanzamiento de los Petrom (bonos de la tesorería provincial garantizados por los recursos provenientes de las regalías petrolíferas), el recorte del 7,5% a los empleados de la administración pública y la restricción del gasto público. Se prosiguió, a pesar de las serias dificultades, con la negociación del Bono Aconcagua, que concentraba la mayor parte de la deuda provincial.

Terminado su mandato, Iglesias logró entregar el mando en diciembre de 2003 a su candidato, el ingeniero Julio Cobos, quien se impuso en las elecciones celebradas en Mendoza el 26 de octubre de ese año. En el triunfo de Cobos fue clave el apoyo de Iglesias, quien refrendó su gestión. Cobos asume en el 2003 al 2007.

Respecto a los gobiernos peronistas de Celso Jaque (2007-2011) y Francisco Paco Pérez (2011-2015) despliegan respecto a las demandas de los gremios estatales una estrategia oblicua. En lo referido a las paritarias los resultados eran buenos en cuanto al incremento salarial, la concesión en las demandas por condiciones de trabajo, negociación en cuanto al blanqueo y pase a planta de trabajadores/as. Sin embargo, estos gobiernos, especialmente el de Francisco Pérez, llevaron adelante una política de criminalización de la protesta sindical, focalizada particularmente, en las denuncias y judicialización de los líderes sindicales.

Los datos respecto a la cantidad de personal del Estado en la planta de personal del Gobierno Provincial tienen una importante evolución, los datos expuestos se desprende de un sondeo de Diarios Los Andes (18-2-2018) en base a todas las leyes de presupuesto desde 1983 a 2018.

(...) “En el último año de la dictadura trabajaban en la administración pública 34.398 agentes; de ellos, 32.782 lo hacían en planta permanente y 2.156 en planta temporaria. En 2018, el total de estatales llega a 83.190, con 80.524 en planta permanente y 2.666 en temporaria.

Quien más estatales incorporó fue Julio Cobos, que recibió la provincia con 60.854 trabajadores (según presupuesto 2004) y la entregó con 73.173 (presupuesto 2007), un 20% más. Le siguen los justicialistas Bordón (15%) y Gabrielli (11,9%). Luego aparecen Lafalla (6,9%), Iglesias (5,1%) y Llaver (4,7%). Pérez con 4,5% de aumento de planta y Jaque con un saldo negativo de -1,5%. En esta medición aparece con resultado negativo Alfredo Cornejo, que inició su primer año efectivo de gobierno, 2016, con 83.421 empleados, y en 2018 ya tiene 83.190, es decir -0,3%. En muchos casos el crecimiento se basa en el cumplimiento de acuerdos paritarios

Los números reales, tomando promedios de la gestión indican que Cobos sigue al tope, con 13,7%. Bordón 11,9% y Gabrielli 8,1%. Pérez (6,1%), Iglesias (7,2%) y Lafalla (8,4%) Jaque. A Cornejo se le computan sólo 2017 y 2018 y su medición también se torna positiva (1,2%)”.

2.1.2 Los años kirchneristas de 2003 a 2011

En el período 2003-2011 se produjo un proceso de reactivación económica, baja en los niveles de desempleo, aumento en el empleo y la formalidad, como también incrementos del salario real por vía de paritarias libres. Todo esto benefició a las organizaciones sindicales en cuanto al aumento de afiliados, mayores ingresos, menor conflictividad. Algunos datos revelan que el desempleo en el país paso del 20.4% en el 1er trimestre de 2003 a 7.1% (1er trimestre de 2015) y a 9,2% en el mismo trimestre de 2018. En Mendoza para el mismo periodo descendió del 16.9%, 3.5% y creció al 4,7% en 2017, 4,2% en 2018. (INDEC)

Los cambios y los logros no evitaron un fuerte proceso de fragmentación y conflicto al interior del movimiento sindical. La fuerte política de premios para los aliados y castigos para los más críticos a las medidas de gobierno- que fue un sello de los doce años de gobiernos kirchneristas- fue resquebrajando alianzas y generando divisiones y críticas por las cercanías o no al gobierno. Desde el interior de dirigentes sindicales de raigambre peronista el conflicto y la ruptura fue por la escasa participación que se le brinda en las listas de

diputados y senadores nacionales, el movimiento sindical pierde escaños a mano de otras organizaciones como la Cámpora.

Otro motivo de división sindical fue las visiones más autonomistas o puristas respecto a la participación y adhesión al proyecto político del kirchnerismo. Estas críticas en general, provenían de las fracciones más clasistas, que cuestionaban la existencia de un nuevo modelo.

Para fines del 2015, el kirchnerismo entregaba el Gobierno Nacional en el marco de un sindicalismo con cinco centrales obreras: CGT oficial que encabeza el metalúrgico Antonio Caló y la CTA que lidera el docente Hugo Yasky. La CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo. La construcción Kirchnerista acentuó la pluralidad y heterogeneidad del mundo sindical. La tasa de sindicalización mostró un leve incremento desde la salida de la crisis de 2001, que en un contexto de importante creación de empleo registrado y caída de los puestos no registrados. Esa dinámica se verifica en el porcentaje de afiliados sindicales sobre el total de asalariados, que entre 2003 y 2010 creció del 19% al 24%, según estimaciones del Ministerio de Trabajo. De esta forma, uno de cada dos nuevos empleos asalariados fue captado por los sindicatos.

La tasa de afiliación durante los '90 mostró una tendencia a la baja. Adriana Marshall y Fernando Groisman, en *Sindicalización en la Argentina: análisis desde la perspectiva de los determinantes de la afiliación individual*, indican que en el período 1990-2001 la proporción de sindicalizados sobre el total de asalariados en el GBA cayó un 14 por ciento por la destrucción de empleo “en blanco”, caída de la participación del empleo en la industria, privatización de servicios públicos y precarización laboral. Sin embargo, al medir afiliados sobre la población sindicalizable (los registrados), la tasa se redujo sólo marginalmente.

2.1.3 Las épocas de Cambiemos 2015-2018

Las características de la relación con el Gobierno de Cambiemos es sintetizada muy claramente por la anterior conductora de ATE

(...) “Este gobierno, en la actualidad, marca una bisagra, grave para el conjunto de los trabajadores. En primer lugar, llega con una fuerza numérica muy importante. Lógicamente el Estado no puede estar bien, porque hay un proyecto para disminuir notoriamente la fortaleza del Estado en todos los ámbitos”

“Cornejo dice: he cerrado nueve mil cargos, viste que dice, he disminuido la planta del Estado, a ver, sí, ha disminuido la planta del personal en blanco del Estado, lo que hay es un ejército de prestadores, prestadores y facturados.... Cornejo tiró dos cosas: los derechos de los docentes y la Empresa Provincial de Troles Mendoza. Pero eso no es lo único, llega también de la mano, tristemente, de haber podido de alguna manera cooptar la voluntad de la dirigencia de ATE esto ha sido una crisis muy grande adentro de ATE que al día de hoy está haciendo mucha mella. Esto hace que de golpe se convierta en el Sindicato con el que el Poder pacta techos salariales... no era previsible que ATE firmara un acuerdo en cuotas, menos en un momento tan grave como este”.

(...) “Entonces, entre eso, el problema que tienen los Judiciales donde hay toda una serie de impugnaciones...casi con la intervención y que de alguna manera el Poder Ejecutivo en función de reconocer a la conducción de Ordoñez, le exige (entre comillas) que firme el acuerdo del 15% en cuotas, cosa que el Sindicato hace y eso provoca un estado de movilización porque tampoco era un Sindicato... recordemos, el Sindicato de Judiciales era un Sindicato que en algún momento resolvía con asambleas conjuntas en cada circunscripción...”

(...) “Creo que este fue el escenario que se le presenta a Cornejo, que construye Cornejo... los estatales, específicamente, sumamente debilitado, y si faltaba algo a todo esto, lo que pasa con el ítem aula. La pelea por el ítem aula, fue una pelea que quizá habría que haberla dado de una manera mucho más contundente, cuando estaba todavía la conducción del SUTE era Mateluna... Incluso en aquel momento, todavía, recién asumía Cornejo. El que tiene alguna experiencia, veía venir que esto

del ítem aula iba a ser una bisagra. Bueno efectivamente esto fue así, pero recién se puedo construir la Intersindical como espacio de aglutinar a todos, después que la Legislatura había sancionado el ítem aula.

Se apostó mucho, también, durante bastante tiempo, a que la Corte declarara inconstitucional esto y también fue una mala apuesta porque en realidad vos siempre tenés que hacer el reclamo judicial, pero las Cortes y las Justicias van al ritmo, habitualmente del ritmo político, no es al revés... no es que generan instancias (...)

(...) “Entramos en una dinámica de decretazos, de o firmás lo que yo quiero o te pongo un decreto. Entramos en una dinámica de firmas en baja, de hecho, tristemente y esto yo lo digo con mucho dolor, ATE es el primer sindicato del país que firma el 15,7% en cuotas en diciembre, en diciembre que es un mes donde todo el mundo sabes que no se negocia y no se firma porque nuestros compañeros empiezan con sus licencias anuales ordinarias, es una negociación funcional a la patronal”.

El relato pone en palabras las estrategias que lleva adelante el Gobierno en su relación con los grandes gremios desde que asume como gobernador Alfredo Cornejo. El primer mandatario provincial lleva adelante de una gestión de estado muy dura respecto a los empleados públicos. Puede aplicar medidas inflexibles porque posee consenso y capacidad de disciplinar al poder sindical. Las formas autoritarias y represivas con las cuales ha conducido la Provincia se encontraron con un movimiento sindical debilitado.

Algunos resultados para la discusión

Las políticas económicas, sociales y de fuerte impacto en los trabajadores estatales se han basado en la expresión más cruda del neoliberalismo proponiendo desde que asumió Mauricio Macri una modernización del Estado en pos de la eficiencia y la mayor productividad. Para lo cual, comenzó un proceso de construcción subjetiva y simbólica a nivel nacional y provincial. Se construye con éxito una visión discriminadora de empleado público como un ñoqui, vago, poco competitivo, son constantes las comparaciones con la mayor capacidad que requiere un empleo en el sector privado, adjudicando mediocridad a todo aquel que se desempeña en el Estado.

En Mendoza, una de las señales más fuertes, al igual que en el gobierno nacional, fue tomar medidas relacionadas con la modernización y el orden en el Estado materializado en dos ejes fundamentales: reducción de la planta de personal, jubilaciones anticipadas y vulneración de los derechos de los trabajadores.

Del trabajo de campo realizado, observamos que lo que prima en las situaciones de conflictividad laboral y que se expresan en la calle, no son los reclamos salariales como la principal demanda, sino el reclamo generalizado de reconocimiento y respeto a la dignidad de los trabajadores públicos. En especial se reclama no asimilar de una forma directa al orden y calidad del servicio público con un empleado público ñoqui, con alguien a quien se lo disciplina con un castigo/premio relacionado con la productividad.

Si bien el gobierno de Cambiemos en Mendoza convocó a negociaciones en el ámbito paritario, no todos los sectores obtuvieron sus aumentos salariales y respuestas a otros reclamos, de tipo no salarial, en una mesa de negociación, sino que fueron otorgados por decreto y con cierre de paritarias por parte del gobierno.

Es la relegitimación institucional de los sindicatos lo que se ha visto menoscabado en el primer año de gobierno, modificándose las diferentes estrategias de los gremios en el segundo año de negociación paritaria, lo que a nuestro entender se convierte en un nudo conflictivo al interior de los mismos sindicatos.

Frente al segundo año de paritarias, dos de los cuatros gremios analizados por nosotros en esta primera aproximación, acuerdan con el Gobierno el incremento salarial del 17% sin el acuerdo de la totalidad de trabajadores, de las bases. Los otros dos gremios resisten y obtienen aumento por decreto y uno de ellos termina siendo intervenido.

Las relaciones gobiernos-gremios estatales ante momentos de crisis revelan aspectos que tensionan la relación hacia el interior de los gremios y en su relación con otros gremios, con partidos políticos, con intendentes y con las cúpulas gremiales nacionales. Al mismo tiempo hacen visible el descontento, la sensación de pérdida de dignidad de los trabajadores públicos ante la demonización y deslegitimación que de ellos se realiza en pos de la implementación de políticas públicas eficientes y de calidad.

Esto se conjuga con la simpatía política por Cambiemos de buena parte de los/as empleado/as estatales que han dado un período de gracia para “dejarlos gobernar” con la esperanza que el tan ansiado cambio se materialice.

Los empleados estatales pueden ser claramente estratificados como pertenecientes a la clase media. La formación y puesto que ocupen los hará parte de alguno de sus segmentos. En el caso de los empleados judiciales en su gran mayoría de estrato alto y medio, en tanto que los trabajadores de SUTE o ATE pueden ser encuadrados en los segmentos medios/bajos según el cargo y jerarquía obtenido.

Las encuestas coinciden que Cambiemos logra una parte importantes de sus votantes en los sectores medios con estudios terciarios y universitarios. En los centros urbanos y en los segmentos de clase media y media baja afectada, en el gobierno de Cristina Fernández, por el pago del impuesto a las ganancias y un perfil de trabajador meritocrático (Natanson, 2018). Claramente la descripción del votante típico de Cambiemos, describe el perfil de gran parte de los/as empleadas/os públicos en la nación y provincia.

Por lo cual es razonable hipotetizar que también los trabajadores representados por los sindicatos estatales, no se han mostrado de manera masiva interesados en participar en las diversas acciones sindicales. Es decir que el acuerdo de los gobernados con Cambiemos, ha también minado las bases de su representatividad. La descripción es una foto de un momento. La dinámica social probablemente modifique la situación.

Bibliografía

- Abal Medina, Paula (2018). *Movilización y Reunificación*. Agencia Paco Urondo. Buenos Aires: Ciudad Autónoma Buenos Aires
- Abal Medina, Paula (2016). Las formas políticas del trabajo. En *Revista Anfibia*. Buenos Aires. Recuperado de <http://revistaanfibia.com/ensayo/las-formas-politicas-del-trabajo/>
- Abal Medina, Paula (2016). Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas. En *Revista Nueva Sociedad*.
- Abal Medina, Paula y Diana Menéndez, Nicolás (2011). *Colectivos Resistentes. Procesos de politización de trabajadores/as en la Argentina Reciente*. Editorial Buenos Aires: Imago Mundi.
- Aspiazu, Eliana (2015). Participación de las mujeres e institucionalidad de la problemática de género en el sindicalismo argentino. En Comunicación presentada en 12 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires.
- Barraza, A (2015), Conflictos colectivos en la relación de empleo público. En *Revista de Derecho del Trabajo de Cuyo*. Recuperado de <http://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/1398-conflictos-colectivos-relacion-empleo-publico>
- CIFRA (2018). Documento análisis acuerdo con FMI
- CTA (2016). Informe prácticas antisindicales. Primer informe de coyuntura sobre el accionar estatal y empresarial, contra las organizaciones de trabajadores. En *Observatorio de derecho social*. Recuperado de: <http://www.fsld.org.uy/assets/observatorio-del-derecho-social-cta-autonoma.pdf>

- Gómez, Marcelo (2006). Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004. Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482006000100007 2006
- Gómez, Marcelo (2006). Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva. En *Revista Argentina de Sociología*. Año 4, N° 6
- Gómez, Marcelo (2009). Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo durante los '90 en la Argentina. En *Revista Conflicto Social*. Año 2, N° 2.
- González, Cecilia y D'urso, Lucila (2018). Relações laborais na Argentina logo após o Kirchnerismo (2003-2015): entre a participação e o retrocesso sindical. En *Revista Tempo Social*, Vol. 30. São Paulo
- Gotelli, Agustín (2017). Proyecto político-económico y modelo de acumulación en la Argentina reciente. Los primeros años del gobierno de Cambiemos. Recuperado de <http://centrocepa.com.ar/informes/37-la-conflictividad-socio-laboral-en-argentina-informe-2017>
- Lenguita Paula (2017), Apuntes actuales del sindicalismo argentino. En *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales / UBA*. Recuperado de: <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2017/05/REVISTA-93-028-LENGUITA.pdf>
- Lucca, J. B. (2012). El vínculo partido-sindicato en el Brasil de Lula y la Argentina de Kirchner. En *International Journal of Latin American Studies*. Year 2, Vol 2, N°1.
- Man, Laura y Dávila, Paula (2009). Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente: Historia del movimiento obrero y del sindicalismo en Argentina Historia del movimiento obrero y del sindicalismo en Argentina. Buenos Aires: Confederación de Educadores Argentinos Confederación de Educadores.
- Marticorena, C. (2015). Revitalización sindical y negociación colectiva en Argentina (2003-2011). En *Revista Perfiles latinoamericanos*. N° 46. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede México.
- Medina, P. A. (2015). Dilemas y desafíos del sindicalismo argentino: Las voces de dirigentes sindicales sobre la historia política reciente. En *Trabajo y Sociedad Sociología del trabajo – Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias NB - Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas*. Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, N° 24. Santiago del Estero. Recuperado de: <http://www.unse.edu.ar/trabajosociedad/24%20ABAL%20MEDINA%20forma%20sindical%20tipo%20de%20sujeto%20trabajador%20%20.pdf>
- Murillo, María V. (2013). Cambio y continuidad del sindicalismo en democracia. En *Revista SAAP*, N° 7
- Natalucci, A. (2013). Revitalización sindical y sindicalismo peronista: encrucijadas entre el corporativismo y la política (Argentina, 2003-2012). En *Amérique Latine Histoire et Mémoire*. Les Cahiers ALHIM.
- Natanson, Jose (2018), Los NUDOS de la economía ¿Cuáles son las tensiones económicas que le esperan al próximo gobierno? Un análisis de sus principales desafíos en un contexto de crisis global. En *El Diplon line*. Recuperado de <https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2018/files/7914/4113/0920/LMD-195.pdf>
- Palomino, Héctor (2005). Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales. En J. Suriano (dir). *Dictadura y Democracia (1976-2001)*. Tomo X, Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
- Varela, Paula (2017). ¿Quién resiste? La conflictividad laboral durante el primer año de Macri? En *Revista Ciencias Sociales UBA*. Buenos Aires
- Varesi, Gastón (2013). El análisis regional en la Argentina: enfoque teórico-metodológico y aportes para su profundización. En *Revista de estudios regionales y mercado de trabajo*, N°9. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6295/pr.6295.pdf

Varesi, Gastón (2016). Neo-desarrollismo y kirchnerismo. Aportes para un análisis conjunto del modelo de acumulación y la hegemonía en Argentina, 2002-2008. En Cuadernos del CENDES. Venezuela: Caracas

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

El SINAMI y los trabajadores subcontratados del cobre: desde la precariedad y la identidad

María Fernanda Veliz Bravo.

Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile.
mariafernanda.veliz@gmail.com

Resumen

Es una investigación sobre el sindicalismo entre trabajadores subcontratados, específicamente en la minería del cobre. Es decir, se analiza cómo las transformaciones en el mundo del trabajo permitieron una mutación en su forma de organización. En otras palabras, cómo estas mutaciones han incidido en la modificación de su identidad laboral, dando paso a la emergencia de las identidades de precariedad laboral, que se nutre de la precariedad laboral y de la solidaridad de los trabajadores.

De esta forma, el objeto de estudio será el Sindicato interempresa nacional de trabajadores de montaje industrial, obras civiles y actividades anexas: SINAMI. Ya que este sindicato fue el primero en formarse (primera mitad de la década del 80') en la modalidad interempresa en faenas mineras, alejándose del carácter del sindicalismo tradicional que existía, acaparando gran cantidad de adherentes y socios, se estima que son aproximadamente 15.500 afiliados.

Metodológicamente la investigación será de carácter cualitativo y se aplicará la técnica de la historia oral para la recopilación de la información. La muestra será elegida por medio de un muestreo teórico, donde se seleccionarán a dirigentes y exdirigentes del sindicato.

Palabras clave: identidad, precariedad laboral, posición estratégica y solidaridad

Introducción

El movimiento obrero, ha sido parte importante de los movimientos sociales de nuestro país, configurándose así en un actor social histórico de gran relevancia. Su historia toma fuerza desde principios de siglo XX, con importantes movilizaciones y masacres por parte del Estado chileno (por ejemplo, la masacre de la escuela Santa María de Iquique en 1907). Los trabajadores se han organizado en distintos grupos, se pueden reconocer claramente tres grupos: “El anarcosindicalismo, el mutualismo y el sindicalismo. La primera tendencia se identificó con las Sociedades de Resistencia, la segunda con las Uniones y Sociedades de Socorros Mutuos, y la tercera con los Sindicatos.” (Ulloa, 2003, pág. 6). Las sociedades de socorros mutuos son organizaciones de ayuda entre los trabajadores, es decir, se reúnen en torno a objetivos específicos para ayudarse entre ellos cuando sea necesario. Mientras que las sociedades en resistencia son grupos de trabajadores organizados no solo para ayuda mutua, sino que también crear conciencia de clase, entre otras cosas. Finalmente, el sindicalismo viene a aparecer en la escena nacional institucionalmente con la promulgación del código del trabajo en 1931, esta organización de obreros vela por los derechos de los trabajadores y es reconocida por el Estado; utiliza un abanico de recursos para luchar por sus derechos, haciendo de la acción colectiva su mejor arma, como por ejemplo, la paralización de las labores, la toma de fábricas, huelgas, etc. No obstante, con la dictadura cívico-militar el movimiento sindical se ve desarticulado por la represión, luego con el retorno de la democracia los niveles de sindicalización que existieron no volvieron a ser los mismos. De acuerdo con los datos de la Fundación Sol, al año 1973 existían 6502 sindicatos.

Gráfico 1

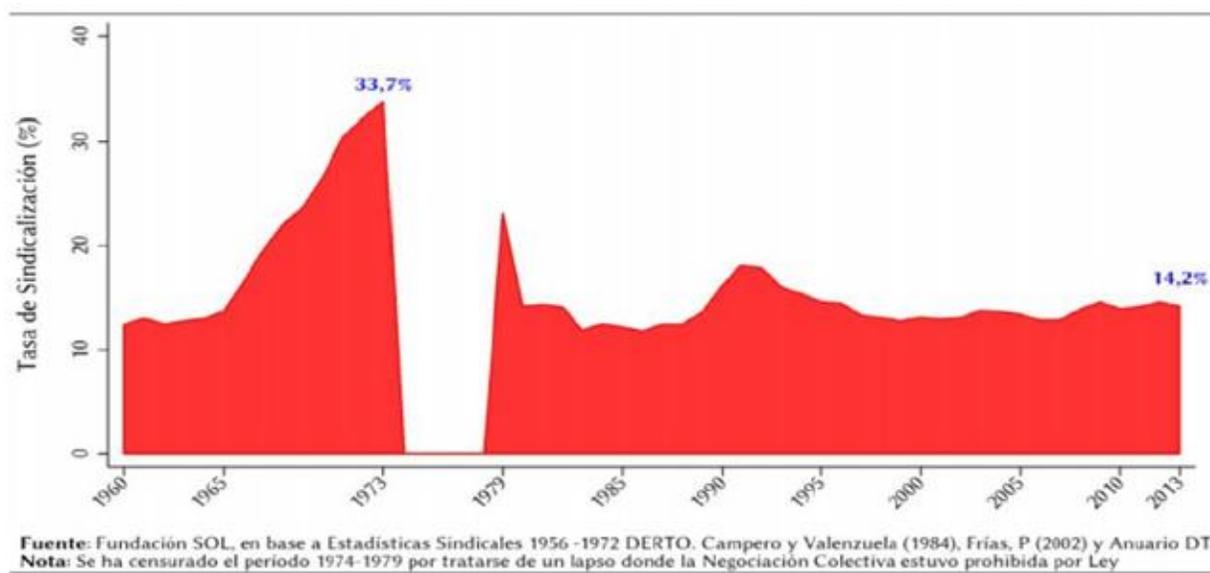


Fuente: Fundación Sol

Siguiendo esta línea, la tasa de sindicalización que muestra el siguiente gráfico nos dice que, después del periodo que ha sido omitido por una prohibición legal, baja la tasa considerablemente de un 33,7% a poco más de un 20% en el año 1979, llegando al año 2013 con un 14,2%.

Gráfico 2

Evolución de las tasas de sindicalización



Fuente: Fundación Sol

Según los datos del departamento de estudios de la dirección del trabajo, en la última encuesta ENCLA 2014 podemos ver que, en el 81,8% de las empresas nunca ha existido un sindicato, lo que nos corrobora la baja tasa de sindicalización mostrada en el gráfico anterior con los datos entregados por la Fundación Sol.

Gráfico 3



Nota:
(1) Unión de casos entre la base trabajadores (empresas sin sindicatos) y la base de dirigentes sindicales
Fuente: Encla 2014, Trabajadores, Dirigentes sindicales

Fuente: ENCLA 2014

A pesar de esto, en el siglo XXI el movimiento obrero sigue vigente, no solo en la lucha, sino que también en su organización. Es por esto que los trabajadores se han tenido que agrupar en formas “ajustadas” de sindicatos, por los cambios ocurridos con la implementación del neoliberalismo, el caso de América Latina por medio de dictaduras militares (De la Garza, 1997). En otras palabras “Es así como los nuevos trabajadores subcontratados se han agrupado en nuevas organizaciones sindicales, distintas de las tradicionales, que han sido llamadas por la literatura “nuevo sindicalismo”” (Leiva & Campos, 2013).

En este contexto de cambio en la forma del sindicalismo que, ya no tiene las mismas características que el sindicalismo tradicional, sino que más bien ha mutado por las transformaciones que se han producido en el sistema de trabajo. La imagen tradicional de miles de obreros en un solo centro fabril aglutinados en un gran y poderoso sindicato ha ido quedando en el pasado, así como también la estabilidad laboral existente en el Estado de Bienestar europeo o el Estado benefactor latinoamericano. Ahora el trabajo no es estable, se terceriza, los derechos laborales también se pierden, entre otros aspectos, lo que ha redefinido el sistema laboral. Entonces, es en este escenario que también se articulan nuevas identidades,

marcadas por la precariedad y la flexibilidad laboral (producto de los cambios que se generaron en el trabajo). En otros términos “la emergencia de nuevas identidades precarias” (Julián, 2018), se van entrelazado con la solidaridad, que serán instrumentos claves para el fortalecimiento del sindicalismo no tradicional.

No obstante, desde las ciencias sociales se han abordado desde distintos ángulos este proceso. Es decir, por una parte, se plantea que se ha estudiado de alguna manera el conflicto dentro de los sindicatos subcontratistas de CODELCO (Nuñez, 2009), sin embargo, se han abordado escasamente los conflictos dentro de la minería privada (Leiva & Campos, 2013). Por otra parte, también existe una falta de interés en los estudios de sindicalismo por el área científica, Gutiérrez Crocco nos dice que este objeto de estudio está “fuera de campo”, aludiendo a que entre los años 2003 y 2014 en el catálogo SCIELO registra sólo 12 artículos sobre sindicatos o sindicalismo chileno, mientras que hay más de 522 artículos sobre movimiento estudiantil (Gutiérrez Crocco, 2016, pág. 551). De esta manera, es que resulta relevante plantearse estudiar el sindicalismo en su forma no tradicional, porque a pesar de las condiciones adversas, los trabajadores y trabajadoras se han organizado para luchar por sus derechos y mejores condiciones laborales.

Cabe destacar que en Chile no hay un registro sobre las empresas subcontratistas, no obstante, la entidad SERNAGEOMIN es la única que mantiene un registro oficial de las empresas mandantes y subcontratistas del rubro de la minería. Así podemos saber que en el año 1997 existían 403 empresas mandantes y 919 empresas contratistas, mientras que en el año 2006 había 471 empresas mandantes, es decir, en un periodo de nueve años aumentaron en un 16% este tipo de empresas, mientras que para el año 2006 existían 3157 empresas contratistas, en otras palabras, las empresas contratistas aumentaron en un 343% (Leiva, 2009).

Así, el objeto de estudio de este proyecto es el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Obras Civiles y Actividades Anexas; que de ahora en adelante llamaremos SINAMI.

El SINAMI se caracteriza por ser un sindicato que aglutina a trabajadores de empresas subcontratadas en diferentes áreas: gaseoductos (líneas de cañería), forestales, portuario (construcción de puertos), termoeléctricas, hidroeléctricas, energía geotérmica, energía fotovoltaica, faenas mineras. Para efectos de esta investigación, solo se abordará la realidad

enfrentada por los trabajadores del SINAMI en las faenas mineras, lo que entenderemos por: Conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria minera, tales como minas, plantas de beneficio, fundiciones, refinerías, maestranzas, casas de fuerza, talleres, lugares de embarque y despacho y, en general, la totalidad de las instalaciones de apoyo necesarias para asegurar el funcionamiento de la industria minera. (SERNAGEOMIN, 2002)

Si bien la ley de subcontratación se promulga en enero de 2007, desde 1975 con la ley número 1.263 se da pie a la subcontratación con algunas limitaciones (solo reparación y mantención), que fueron ampliadas en el año 1979 dando paso a la subcontratación para todas las áreas productivas de una empresa (Leiva, 2009). Lo que da paso a trabajadores de primera y segunda categoría; mientras los trabajadores de la empresa mandante tienen beneficios y protecciones sociales establecidas en la legislación laboral, los trabajadores subcontratados carecen de estos beneficios, quedando en la línea de la precariedad y la vulnerabilidad, ya que estos se desempeñan en labores específicas, es decir, la empresa subcontratista es contratada para desarrollar una tarea focalizada y termina su contrato, por lo que los trabajadores no cuentan con estabilidad.

En este contexto, durante la primera mitad de la década de los 80' surgió el SINAMI como el primer sindicato de trabajadores subcontratistas. Si bien su origen data de 1971 con el nombre de Sindicato Nacional de Mecánicos, Soldadores, Electricistas y Ramos similares de Montaje Industrial; al cambiar el modelo económico en el país, implantándose el neoliberalismo y la flexibilización del trabajo, se modificó su nombre a Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Obras Civiles y Actividades Anexas.

Así mismo, otra de las características importantes del SIMANI son el tipo de trabajadores que alberga, principalmente obreros calificados. En otros términos, las bases del SINAMI son trabajadores especializados, de alta calificación, ocupados en empresas que realizan grandes obras de infraestructura y montajes (Echeverría, 2010, pág. 23). Cabe mencionar también que todos se desempeñan en labores distintas, es decir, no se agrupan en torno a una labor específica.

Como se indicó anteriormente, para efectos de esta investigación se tomará como muestra a la presencia del SINAMI en faenas mineras pues representa un rubro importante para la

economía nacional, siendo esto de conocimiento de los trabajadores su posición estratégica (Leiva & Campos, 2013; Núñez, 2009; Womack, 2007).

Así las características geográficas adversas representan una de las luchas históricas del SINAMI para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Las faenas mineras se encuentran muy alejadas de centros urbanos y localidades, están en la cordillera a gran altura (por sobre el nivel del mar) siendo las faenas más altas Nevada (4800 msnm) y Maricunga (4600msnm) (SERNAGEOMIN, 2002). Lo que genera que el trabajo se desarrolle en base a turnos rotativos, por ejemplo, trabajan 20 días para retornar a sus hogares por 10 días, este turno es conocido como 20 x 10. El SINAMI entrega beneficios para todos sus adherentes que se enmarcan en un contexto de solidaridad entre los trabajadores, lo que vamos a reconocer formas de acción cristalizada (los beneficios) de solidaridad.

Marco metodológico

El diseño metodológico es de carácter cualitativo, se refiere a recoger los significados y al sentido que le otorgan los actores sociales involucrados en la situación a sus relaciones sociales. Son interpretaciones de los significados que le entregan los agentes a sus conductas, significados, significaciones etc. (Flick, 2004, pág. 20).

La fuente de la información que se usará será de carácter mixto, es decir, la información se recogerá de forma directa por la investigadora (primaria) por medio de la entrevista en profundidad, de acuerdo con el carácter de esta entrevista que será la historia oral, debemos mencionar que predominará el uso de la fuente primaria. Como uso de fuentes secundarias se hará revisión de lo que el mismo sindicato expone en su página web.

El muestreo será en primera instancia un muestreo teórico o intencionado. Se definen a priori las características del sujeto que será entrevistado. Los parámetros que definen la composición estructural de la muestra se basan en criterios teóricos (Navarrete, 2000, pág. 169). De esta forma, al tomar el muestreo teórico, es que se hace apropiado utilizar como estrategia de muestreo la avalancha o bola de nieve.

Visto el tipo de muestreo, finalmente la muestra estará definida por la saturación de la información. Se tomarán a directores, exdirectores, delegados y adherentes y/o socios del SINAMI, que sean miembros activos o que hayan pertenecido al sindicato.

La precariedad generada por la experiencia de vida del trabajador adherente al sinami.

Para comprender la precariedad laboral es menester ajustarnos a una propuesta teórica, así es como vemos que el autor Dasten Julián (Julián, 2018) nos presenta cinco dimensiones para comprender la precariedad laboral:

1. Inestabilidad laboral: de este punto se puede derivar tres cosas, por una parte la falta de contrato de trabajo, por otro lado puede ser un contrato de trabajo por obra o faena (que generalmente tienen un término incierto); además, también implica que el empleador pueda cursar despidos en cualquier momento.
2. Inseguridad laboral: esta dimensión se relaciona con los temas de protección social y seguridad; es decir la falta de protección frente a la cesantía, o accidentes laborales, en general la prestación de toda seguridad al empleo y al trabajador (esto implica también las vacaciones, posnatal, etc.)
3. Insuficiencia salarial: los salarios bajos se pueden ver en los costos de la vida, es decir en la generación de la vida familiar para satisfacer todas sus necesidades de servicios básicos, y que esto implica también una dependencia a estos ingresos.
4. Condiciones riesgosas de trabajo: condiciones de seguridad, higiene, acoso, hostigamiento, etc. Se incluye el riesgo de accidente, de muerte y de exposición a enfermedades, considerando la accidentabilidad por ocupación, la infraccionalidad y la caracterización de los lugares de trabajo.
5. Cronopiedad o tiempo de trabajo: la cantidad de horas de trabajo, la flexibilidad del uso del tiempo, sobre jornadas, horas extras. (Julián, 2018)

Con estas dimensiones el autor propone una forma de definir la precariedad laboral desde un punto de vista más práctico para poder entender el concepto y aplicarlo a los fenómenos que están ocurriendo en el mundo del trabajo en la relación capital/trabajo, con la imposición en nuestro país de las políticas neoliberales lo que ha llevado a la institucionalización de la precarización laboral (Julián, 2018). En otras palabras, la precariedad laboral se inscribe en un modo de dominación de nuevo cuño, basado en la institución de un estado generalizado y permanente de inseguridad que tiende a obligar a los trabajadores a la sumisión, a la aceptación de la explotación (Julián, 2013, pág. 415).

Por otra parte, el autor Guy Standing señala que, desde el proceso de la flexibilización laboral (que se opone férreamente a la rigidez) comienza a tomar forma en el sistema laboral cambios profundos, donde los trabajadores se ven profundamente perjudicados, es decir, los gobiernos debían fomentar la flexibilidad del mercado laboral, lo que equivalía a un programa para transferir los riesgos y la inseguridad a los trabajadores y sus familias (Standing, 2011, pág. 18). Y no solo eso, sino que también exhorta a los trabajadores a ser adaptable y asumir los riesgos.

De esta forma, hemos identificado 5 categorías de análisis para los trabajadores del SINAMI, por una parte, está la legislación adversa, cotidianeidad en la faena, listas negras y salud.

Legislación adversa

La legislación chilena hasta antes de la reforma del 2017 solo permitía la existencia de estos sindicatos interempresa, no obstante, no tenían derecho ni a negociación colectiva ni a huelga; este escenario poco favorable para los trabajadores hace que tengan que generar estrategias para poder luchar por sus derechos.

Es así como una acción tomada por SINAMI fue la presentación de un proyecto de ley que les garantice el pago de un finiquito, ya que ellos no tienen derecho al pago de éste porque tienen contratos por obra o faena y generalmente no trabajan un año completo. Encontraron una fórmula para poder calcular de manera distinta a la tradicional el finiquito, ellos piden el pago de 2.5 días trabajados por cada mes trabajado; ellos llegan a esta cifra al dividir los 30 días del mes trabajado por los 12 meses del año, así pueden calcular el monto a pagar del finiquito. La aplicación de esta fórmula se realiza a pesar de no ser una ley promulgada aun¹, lo exigen a las empresas al momento de realizar las negociaciones colectivas.

Estas negociaciones que no están normadas en la ley, pero que de igual manera las realizan, a criterio de los trabajadores ellos lo hacen “jugando a orilla de cancha” es decir, amparándose en el fuero sindical para protegerse legalmente *dentro de la cancha*, y salir de la cancha para realizar actividades como la negociación colectiva o huelgas, en otras palabras, ellos realizan negociaciones de hecho y no derecho. Esto a pesar de que muchos de sus

¹ Ya paso el trámite legislativo en la cámara de diputados, actualmente se encuentra

delegados no tienen este fuero, pero siguen actuando porque la labor del directorio los apoya y abala en sus acciones.

Cotidianidad en la faena

La cotidianidad en la faena la hemos en tres subcategorías: aislamiento geográfico, habitabilidad y recreación. El aislamiento geográfico afecta a los trabajadores principalmente en lo relacionado con la altura geográfica y la falta de servicios básicos, así como también para el sindicato representa una dificultad para llevar a cabo sus elecciones. Este aislamiento es el que motiva al sindicato a exigir a las empresas turnos de trabajo, que sean acorde a los tiempos de trabajo y que permitan al trabajador tener los suficientes días de descanso para estar con su familia.

Para la habitabilidad, es importante los campamentos, las condiciones en las que viven en estos, ya que antiguamente estos no existían y muchas veces los trabajadores dormían a orillas de ríos o en las playas. Es por esto que cuando el sindicato logra reunir el dinero suficiente compra una propiedad que sirva de sede y al mismo tiempo como albergue para los trabajadores que no tengan hospedaje. Esta bandera de lucha es importante, ya que en los años 90' fue una de las exigencias principales de a las empresas la creación de campamentos para todos los trabajadores.

En cuanto a la recreación, esta ha sido una demanda a las empresas que entreguen a los trabajadores espacios de recreación, para que la vida en el campamento sea más amigable, no tan monótono, y que los trabajadores tengan distracciones. Es así como también la religión tienen un espacio en las faenas, los evangélicos son los que tienen mayor presencia y se les propicia un espacio para que ellos puedan llevar a cabo sus ceremonias y asistan todos aquellos trabajadores que se sientan identificados.

Listas negras

Las listas negras, si bien no se puede comprobar su veracidad, para los trabajadores estas existen y son reales; hay variedad de situaciones por las que pueden ingresar a un trabajador a una lista negra, por ejemplo, por droga, alcohol, robo, sindicalista, etc. Indistintamente de la causa, quedan todos dentro de una sola lista negra; el SINAMI trata, negociando la salida de trabajadores de la lista, con dificultad logran sacar a obreros cuando es por razones sindicales, sin embargo, se encuentran de brazos cruzados cuando es por otras razones.

Salud

Dentro del área de salud, tenemos la salud psicológica ya que, al trabajar por turnos en un ambiente aislado de su familia, les afecta mucho emocionalmente a los trabajadores, es por esto que el sindicato opta por exigir recreación a las empresas y ellos mismo también entregan facilidades a los trabajadores para que puedan generar espacios y actividades de recreación.

Por otra parte, el trabajo en altura geográfica también afecta a los trabajadores, dentro de las consecuencias más frecuentes son la cefalea y el insomnio. Es importante tener en cuenta que los trabajadores al tener el sistema de turnos nunca logran naturalizar por completo ambas situaciones a las que se exponen trabajando en altura. Es decir, oscilan entre ambos extremos, sin estar bien en alguno de estos. Es por esto, que también experimentan cansancio cuando vuelven al nivel del mar, posiblemente por la falta de sueño experimentada en el periodo en el campamento (Ramos, 2019).

La posición estratégica en el proceso de construcción identitaria en el SINAMI

Para abordar el concepto de identidad, tomaremos primeramente lo que nos plantea Rolando Álvarez que se plantea desde la perspectiva de la identidad precaria, que según el autor sería un tipo de identidad forjada desde, por una parte, la subcontratación, es decir, desde las diferencias entre los trabajadores de planta y los subcontratados, y otra parte, desde la necesidad, es decir, tener un trabajo duro pero que es mejor remunerado a que si está en otro trabajo. Es así como las características de esta identidad son: rotación en el empleo, altos grados de tolerancia a los abusos laborales y despolitización (Álvarez, 2006). Nos obstante, esta identidad precaria, a pesar de ser muy tolerante, cuando la situación es extremadamente injusta posibilita la creación de lazos de solidaridad.

Como veíamos anteriormente con la precariedad laboral y la falta de certidumbre (por los tipos de contratos, etc.), el trabajo pierde centralidad al momento de formar identidad, según Álvarez autores como Bauman consideran que esta situación es suficiente como para limitar o restringir la acción colectiva, sin embargo, él considera que la identidad que emerge desde la precariedad es justa y suficiente para generar acción colectiva en los trabajadores.

En esta misma línea, las autoras Constanza Araya y Rocío Guajardo plantean que la subcontratación fragmenta a los trabajadores, por lo que el subcontratista se construiría

identitariamente desde la oposición/negación al otro, es decir al trabajador de planta. Por tanto, esto se forjaría desde una doble explotación (Araya & Guajardo, 2016).

En otro punto, Maristella Svampa nos propone un análisis de la identidad desde otra arista, la generacional, es decir, separa generacionalmente a los trabajadores de acuerdo a ciertas características: el vínculo con el sindicato, militancia política y cultural. Encontrando que los más adultos tienen una identidad laboral desde el sindicato muy arraigada, pero con el paso del tiempo y los cambios que se han ido produciendo en el trabajo, han llevado que los jóvenes ya no se reconozcan desde el trabajo, sino desde elementos culturales (Svampa, 2000).

En síntesis, para abordar la identidad, tomaremos lo planteado por Constanza Araya junto con Rocío Guajardo y Rolando Álvarez, la identidad precaria es una identidad que emerge en una situación laboral muy adversa, generada desde la oposición y diferenciación entre los dos tipos de trabajadores (contratados de planta por la empresa mandante y los subcontratados) y, desde la necesidad frente a la injusticia de organizarse para luchar por sus derechos.

Para adentrarnos en la posición estratégica, tomaremos la propuesta de John Womack sobre el concepto de posición estratégica en el trabajo. Resulta de gran relevancia para la tesis este concepto ya que el SINAMI se cuadra dentro de la actividad minera, que para el país representa la mayor fuente de ingresos (Chile se ha caracterizado por ser un país exportador materias primas), además el cobre propiamente tal ha pasado por diferentes procesos políticos y económicos a lo largo de la historia, mostrando el auge entre los años 60 y 80 (con el proceso de chilenización, y posterior nacionalización).

Entonces la posición estratégica que ocupan estos trabajadores es importante, pues es la clave de las relaciones dentro de la organización y de esta con su entorno, pues plantea que: “sus posiciones estratégicas eran cualesquiera que les permitieran a algunos obreros detener la producción de muchos otros, ya sea dentro de una compañía o en toda una economía...” (Womack: 2007, 50). Podemos ver en la cita, que trabajadores que pertenecen a una industria vertebral dentro de la economía del país, pueden generar y verse a sí mismo desde otra perspectiva, mucho más influyente por las consecuencias que genera un conflicto. En otras

palabras: sin conocimiento de las posiciones estratégicas, no hay estrategia (Womack: 2007, 50).

Experiencia frente al otro

Como hemos visto, los trabajadores del SINAMI son subcontratados, es más hasta hay empresas sub-subcontratistas, lo que genera trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. El SINAMI busca negociar con las empresas sub-subcontratistas para igualar las condiciones de trabajo con los subcontratistas, no obstante, difícilmente podrían igualar las condiciones con los trabajadores de la empresa mandante, ya que estos hasta casinos y habitaciones distintas tienen. Pese a esto, los trabajadores sub-subcontratados sienten que su situación puede mejorar, por lo tanto, no hay rivalidades, no así con los trabajadores de la mandante, ya que estos no pueden igualar sus condiciones en la totalidad, si se ha conseguido en los acuerdos marco es que la entrega de ciertos bonos sea lo mismo para todos los trabajadores

Vivencia como subcontratado

La principal experiencia del trabajador subcontratado es la cesantía, ya que ellos trabajan bajo la modalidad de contratos por obra o faena, las sombras del mañana, la incertidumbre del empleo futuro son un fantasma constante en la vida laboral de estos trabajadores. Esta situación resulta dolorosa e injusta para los trabajadores, ya que los periodos de cesantía pueden o no ser largos, pero el dinero no siempre les alcanza para sobrevivir, esta es una de las razones por las que el sindicato pelea por el finiquito, ya que entrega a los trabajadores un colchón económico para poder sobrellevar la cesantía, ya que el seguro de cesantía (AFC) se entrega cuando hay 6 meses de cotizaciones pagadas cuando el contrato es a plazo fijo, por lo tanto, no siempre está la posibilidad de poder acceder al seguro de cesantía por los tiempos establecidos para su condición contractual

Sentirse parte de

Hemos identificado dos formas por las que los trabajadores logran (a pesar de la situación de temporalidad) sentirse parte de SINAMI, por una parte, está la historia del sindicato es reconocida por los trabajadores, por sus luchas (incluyendo el reconocimiento de sus mártires) y conquistas en pro de los faeneros y su bienestar tanto laboral como social.

Por otro lado, por la labor desempeñada por los delegados en la faena, ya que estos son los que están en el cotidiano con los trabajadores. Así una labor de un delegado considerada positiva por los trabajadores genera la sensación de que el sindicato en general funciona de forma adecuada y humana.

Delegados

La labor de los delegados es la más importante para las bases, ya que como dijimos, son los que están en contacto permanente, día a día con los trabajadores en la faena, son ellos los que resuelven los problemas que estos puedan tener, declaran ejercer variedad de labores a parte de las propias del delegado, por ejemplo, cuando un trabajador tiene problemas personales (es muy común que los trabajadores tengan problemas de divorcios por ejemplo) muchas veces el delegado del sindicato es quien lo escucha y los aconseja, aunque declaran que muchas veces al trabajador solo le basta con ser escuchado, desahogarse; también les toca resolver problemas propios de la faena, así como también desarrollar todas las gestiones pertinentes si es que un trabajador necesita permiso, bajar de la faena, etc.

Por otra parte, el delegado para el sindicato es quien *pone el pecho a las balas* con los trabajadores en la faena, son la cara visible del sindicato, es decir, cualquier descontento que sienta el trabajador será manifestado a los delegados (muchas veces de formas no muy amigables), cuando se buscan explicaciones se les pide a los delegados, sobre todo cuando se les pide rendir cuentas de los recursos del sindicato, son el puente entre las bases y el directorio de SINAMI.

Es por esto que su labor es gran responsabilidad, ya que ellos perciben que al realizar su labor con vocación y convicción pueden apoyar a los trabajadores a los que representan y aportar con su granito al movimiento sindical.

Las acciones de solidaridad en forma de beneficio que entrega el SINAMI

La solidaridad es un elemento fundamental en la organización de estos trabajadores faeneros, para tomar esas acciones las veremos bajo la lupa de algunos componente que nos entrega la teoría de los movimientos sociales, en especial la teoría de la movilización de recursos, pues nos propone que la movilización es el proceso por el cual se asegura el control colectivo de los recursos necesarios para llevar a cabo la acción colectiva (Craig Jenkins J. , 1994).

Que pondremos en discusión con lo que expone Tilly con respecto a la acción colectiva, que para él autor se desarrolla desde la movilización de recursos y el éxito de la acción colectiva a partir de este módulo de la movilización de recursos (Tilly, 2009). En otras palabras, el autor pone énfasis en la persecución de intereses comunes y la efectividad de la toma de decisiones tácticas en las distintas acciones colectivas (Jiménez, 2007). Es decir, para el autor primero se reúnen en torno a intereses comunes y desde ahí se define la acción colectiva. Así es como el autor nos entrega elementos claves para el desarrollo de la acción colectiva: intereses comunes, organización, movilización, oportunidad y acción colectiva (Gonzalez, 2012).

Por otra parte, se tomará el concepto de acción colectiva contenciosa de Sidney Tarrow. La acción colectiva contenciosa es para el autor, inherente a los movimientos sociales, por lo que puede tomar varias formas: institucionalizada, monótona, breve o persistente. Se produce en grupos que actúan en base a objetivos comunes. Esta acción colectiva se transforma en contenciosa cuando los grupos no tienen acceso a instituciones, pero buscan nuevas reivindicaciones que de pronto, pueden ser leídas como amenazas para otros (TARROW; 1997)

También podemos ver lo que plantea Mario Garcés (2012), que toma lo planteado por Melucci que dice que la acción colectiva está compuesta por solidaridad, rompe los límites del sistema y conduce a un conflicto; de esta forma la solidaridad sería un pilar fundamental para la acción colectiva. Son estos elementos de la teoría de movimientos sociales que tomaremos para el desarrollo de este análisis.

Recursos económicos

Este sindicato cuenta con muchos recursos económicos, es poderoso este ítem, en lo declarado por los entrevistados, en el último balance del tesorero, se entrega la cifra de 5.000 millones aproximadamente con los que cuenta el sindicato para este año. Estos dineros son recaudados de acuerdo a la ley, por la cuota sindical de cada socio, está la determina cada asamblea de acuerdo con los ingresos de cada trabajador, estos valores van desde los \$3.000 hasta los \$6.000.

La administración de estos recursos cae en manos del tesorero y el presidente del sindicato, en algunos casos cuando se requiere invertir grandes sumas de dinero, como para adquirir un

bien raíz, se le consulta a la asamblea de directores, pero en general son el tesorero y el presidente quienes tienen en sus manos la labor de administrar estos recursos. Esta situación es la más criticada por cada entrevistado, ya que en primera instancia el tesorero no entrega más cifras que el valor aproximado de los recursos que hay, no hay desglose donde se muestre los ingresos y egresos, esto le valió al sindicato una demanda en el primer juzgado de letras laboral de Santiago, de parte de sus propios delegados para que transparentaran el uso de los recursos económicos (entre otras cosas), no obstante, el resultado no fue favorable para quienes realizaron la demanda, ya que el juez de la causa dictaminó que de acuerdo a los mismos estatutos del sindicato no había forma legal de exigir a los dirigentes una rendición de cuentas detallada. Este fue un duro golpe para los delegados, que trajo como consecuencia la fragmentación del sindicato.

Contactos y redes

El SINAMI no mantiene contacto con ninguna otra organización de trabajadores, ya sea otros sindicatos, federaciones, confederaciones, etc. Tampoco se relacionan con partidos políticos, ni con otras organizaciones sociales como NO+AFP por ejemplo. La directiva del sindicato prefiere mantenerse aislada y declararse “apolíticos”, pues a su juicio no *necesitan* buscar aliados, ni acoplarse a demandas de otros movimientos sociales. Este punto también genera fuertes críticas de parte de sus socios y delegados, ya que consideran que es menester que los trabajadores junten fuerzas para luchar por sus derechos, atomizar aún más el movimiento sindical no contribuirá en la lucha por sus derechos. No obstante, el fuerte poder económico (junto con la cantidad de socios) con el que cuenta el sindicato lo convierte en un sindicato poderoso, que nos lleva a pensar, de acuerdo a los relatos de las entrevistas, que se bastan a sí mismos con eso, es decir, no se considera necesario generar redes con otros sindicatos, agrupaciones, federaciones, movimientos sociales, etc.

Por otra parte, el SINAMI no tienen como política ayudar a los trabajadores cuando cesantes, la entrega de datos de trabajo se da solo entre amigos, es decir, entre los grupos cercanos de supervisores o directores es que se traspasan los datos de trabajos cuando quedan cesantes.

Beneficios y conquistas: acciones de solidaridad (entre trabajadores), emergencia de los beneficios (del sindicato).

Las acciones de solidaridad son un punto importante dentro de la cotidianeidad de los trabajadores, ya que esta comienza desde el momento en que deciden organizarse para hacer frente a las injusticias y las desigualdades. Otro punto de solidaridad más doméstico es cuando hay alguna desgracia, cuando un trabajador tiene un inconveniente, un problema todos se juntan entre ellos para poder ayudarlo, a parte de las propias ayudas que entrega el sindicato. El SINAMI hace entrega de donaciones a los trabajadores que lo necesiten, así como también a pedido de los delegados, hacen entrega de los insumos necesarios para generar actividades de recreación.

Los beneficios que entrega el SINAMI han sido consecuencia de arduas luchas, en una ocasión con consecuencias fatales, donde murieron 9 trabajadores en la toma de la faena de El Abra: *Nueve mineros murieron y cerca de 40 resultaron heridos al chocar frontalmente dos buses que trasladaban trabajadores desde el yacimiento de cobre El Abra a Calama. Este accidente vino a coronar trágicamente el término de la ocupación del mineral, protagonizada por más de dos mil trabajadores e iniciada 24 horas antes como consecuencia del finiquito a 70 empleados de la contratista BSK y el anuncio de despido para otros 2.000. La protesta derivó en pleitos entre los trabajadores, surgiendo una segunda organización sindical. Las negociaciones con la parte empresarial culminaron con un principio de acuerdo suscrito ante representantes de la Dirección del Trabajo. Tras ese entendimiento se produjo la evacuación de la mina en los buses y en ese momento ocurrió el fatal accidente.*²

Este fatal accidente, ocurrido en diciembre de 1995, marca un antes y un después en las negociaciones del sindicato, pues la entrega del finiquito del 2.5 se instaura y deciden comenzar a buscar acuerdos por medio del diálogo con las empresas mandantes para evitar fatales accidentes como el recién relatado.

Otros beneficios que ofrece el sindicato son la negociación de los convenios colectivos que aseguran ciertas cláusulas que se detallaran en la siguiente tabla, donde también se mencionan las conquistas, beneficios adicionales y los convenios vigentes.

Tabla 1

Negociación con la empresa	Beneficios adicionales del sindicato	Convenios	Conquistas
----------------------------	--------------------------------------	-----------	------------

² Ver: https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-62192_recurso_1.pdf pág. 44

Viáticos	Pasajes aéreos	Atención dental	Sueldos líquido piso
Seguros de vida	Cuota mortuoria	Nutricionista	Finiquito 2.5
Capacitación	Alojamiento, casas habilitadas para tal efecto	Psicóloga	Jornadas de trabajo (turnos)
Movilización	Asesoría laboral	Abogado	Pago horas extras
Aguinaldo			
Cuota mortuoria			
Escolaridad			
Asignación natalidad			
Asignación de matrimonio			

Fuente: elaboración propia en base a la página web del sindicato

En la tabla 1 podemos ver que hay variedad de convenios y beneficios para los trabajadores, y sea en el ámbito laboral, como en el ámbito personal, como lo son los convenios dentales (el sindicato cuenta con una clínica dental propia) o de psicología. Los trabajadores pueden acceder a estos beneficios mientras son socios, no obstante, el sindicato extiende estos beneficios a los trabajadores aun cuando están cesantes, durante 3 meses desde la firma del finiquito.

CONCLUSIONES

En términos generales, una primera conclusión dice relación con la precariedad de estos trabajadores socios del SINAMI. Se pudo observar que tal como lo plantea tanto Dasten Julián como Guy Standing, son trabajadores en un sistema distinto de trabajo, ya no están en la fábrica y en un sindicato de empresa, ya no tienen protección legal de sus derechos sociales, pues es la misma ley la que los desampara, restringiéndoles el derecho de negociación o de huelga; es así como los trabajadores han tenido que buscar estrategias para burlar estos obstáculos, eso es lo que ellos denominan *jugar a orilla de cancha*. Por otra parte, una consecuencia de esto son las listas negras, que, si bien no son comprobables, los trabajadores quedan en listas de “no son contratables”, por diferentes razones, precarizando su labor, tanto como trabajador como la sindical, ya que la existencia de estas listas genera miedo en los obreros al momento de organizarse, pues sienten que, al quedar enclaustrados en esas listas, perjudican sus carreras en faenas y se condenan a no volver a trabajar.

Las condiciones laborales en el aislamiento geográfico donde se encuentran las faenas y los campamentos aumentan su condición de precariedad, ya que es perjudicial para la salud emocional y física de los trabajadores. Los campamentos también han sido un gran desafío, pues cuando no acceden a estos y están en pensiones/hostales en ciudad, representa riesgos para los trabajadores y una carga aun mayor de trabajo para los delegados, pues son ellos quienes deben responder cuando por ejemplo, un trabajador se “pierde” o “desaparece”, teniendo que ir a poner denuncias por presunta desgracias, y visitar hospitales para buscarlos, cuando en la mayoría de las ocasiones los trabajadores perdieron la noción del tiempo consumiendo drogas.

Así, de acuerdo con lo planteado por el autor Dasten Julián, estos trabajadores efectivamente se encuentran en un sistema de trabajo basado en la inestabilidad laboral e inseguridad social que, como se ve con Guy Standing, esto proviene desde el complejo proceso de cambio en el sistema laboral que genera este tipo de trabajadores y esta nueva forma de organización.

Por otra parte, la identidad precaria que hemos planteado desde los autores revisados, que proviene desde las malas condiciones laborales en las que se encuentran, a pesar de buscarlas estos trabajos porque son mejor remunerados, lo que constituye la principal razón por la que aceptan los trabajadores estas condiciones de trabajo. El ser subcontratado involucra la cesantía, las sombras del mañana, periodos dolorosos para los trabajadores, a los que pueden hacer frente con el pago del finiquito, ya que muchas veces no logran acceder al seguro de cesantía. Esta situación es asumida por los trabajadores como parte de su trabajo (naturalizada), y que, por tanto, la incertidumbre de volver a encontrar trabajo se asume y no se cuestiona.

El SINAMI para lograr adherencia de los trabajadores optan por dos vías: por el trabajo de los delegados y por otro, su historia. Los delegados juegan un rol importante ya que son los que están en contacto directo con las bases, son la cara visible del sindicato en la faena. La historia del sindicato genera adherencia ya que se le reconocen sus luchas a lo largo del tiempo, junto con todas las conquistas, los beneficios que entrega el sindicato y los favorables convenios colectivos que firman con las empresas, los acuerdos marco y las garantías como los turnos y los viajes en avión (para tomar sus períodos de descanso).

La posición estratégica del sector económico para el cual se trabajan no resulto ser de importancia, ya que conocen la diferencia entre ser faenero y ser minero, saben que su labor al estar presente antes de la extracción del mineral no tiene un efecto negativo en la economía nacional cuando se movilizan, lo único que pueden afectar es que la empresa contratista se atrase y la mandante le quite el contrato por incumplimiento y por no lograr llegar a acuerdos con los trabajadores; lo que también los deja en una posición desventajosa ya que si la empresa queda sin el contrato y ellos también quedarán sin trabajo, es por esto que la movilización ha dejado de ser un recurso utilizado y se prefiere la estrategia de la conversación y el dialogo con las empresas, tanto contratistas como mandantes, para evitar despidos masivos y cualquier otra consecuencia negativa que pueda tener una movilización.

Las acciones de solidaridad desde el punto de vista de la administración de recursos económicos han sido profundamente cuestionadas, ya que cuenta con bastante dinero que no es transparentado, tanto en sus ingresos y egresos, como también en las decisiones de administración. Este punto marca una inflexión para el sindicato ya que ha generado uno de los quiebres más importante dentro del sindicato, el 2014 con la demanda realizada a la propia directiva. Son los propios trabajadores los que cuestionan la gestión de los recursos económicos y los que cuestionan el destino de los dineros que ellos aportan mensualmente cuando trabajan. También cuestionan la falta de una postura frente a diversas problemáticas que afectan al país, a los movimientos sociales y a la política partidista.

Lo que destacan por su parte es la solidaridad que se genera entre los trabajadores en la cotidianeidad de la faena, que entre ellos se apoyan y mueven sus propias redes para dar soluciones a problemas.

De esta forma podemos decir que el sindicato SINAMI alberga trabajadores precarizados en sus labores, pero que, a pesar de eso, las remuneraciones son mayores a las que podrían acceder si trabajaran en una ciudad, asumiendo todas las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, de este trabajo.

Dada sus características particulares de trabajo, y del sistema de trabajo en sí, a pesar de que muchos autores (Standing, 2011; Leiva, 2013; Núñez, 2009) han afirmado que el trabajo ya no es un referente para la generación de identidad, podemos decir que el trabajo lo sigue siendo hasta en sus particularidad más precarias, ya que estos trabajadores logran

identificarse entre sí desde la precariedad de su trabajo, siendo este el motor para poder organizarse en un sindicato que pueda representarlos y mantenerse vigente en el tiempo.

Bibliografía

- Álvarez, R. (2006). La identidad precaria: Sumisión y resistencia laboral en Chile, el caso de los trabajadores precarios del salmón. *Alternativa*, 66-109.
- Araya, C., & Guajardo, R. (2007). Identidad minera, subcontratación y nuevas estrategias sindicales: el caso de la huelga de los trabajadores contratistas de CODELCO. *Grupo de estudios interdisciplinarios del trabajo*, 37-49.
- Arellano, K., Baccarelli, D., De Gennaro, L., Giradles, S., Sadier, E., Dellacia, C., . . . Arancibia, I. (2009). Construcción del sujeto de trabajo en la condición de precariedad. En J. C. Neffa, E. de la Garza, & L. Muñiz, *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales* (págs. 193 - 203). Buenos Aires: CLACSO.
- Craig Jenkins, J. (1994). La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales. *Zona abierta*, 5-22.
- Diana Menéndez, N. (2009). Precariedad laboral en el Estado: hacia una categoría multidimensional. *XXVII congreso de la asociación Latinoamericana de sociología* (págs. 1-11). Buenos Aires: Asociación latinoamericana de sociología.
- Echeverría, M. (2010). Surge un ¿nuevo sindical? En M. Echeverría, *La historia inconclusa de la subcontratación y el relato de los trabajadores* (págs. 149-180). Santiago: Dirección del trabajo.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Garza, E. d. (2018). identidad y proceso de trabajo. En D. Julian, & A. Galliorio, *estudios del trabajo desde el sur* (págs. 17-33). Santiago: Ariadna.
- Guadarrama, R., Hualde, A., & López, S. (2012). Precariedad laboral y heterogeneidad ocupacional: una propuesta teórico-metodológica. *Revista mexicana de sociología*, 213-243.
- Jimenez, C. (2007). Acción colectiva y movimientos sociales. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos. *XXVI Congreso de la asociación latinoamericana de sociología* (págs. 1-24). Guadalajara: Asociación latinoamericana de sociología.
- Julián, D. (2013). contribuciones al estudio de identidades e identificaciones precarias en Chile. *Polis*, 1-20.
- Julián, D. (2018). Precariedad laboral y estrategias sindicales en el neoliberalismo: cambios en la politización del trabajo en Chile. *Psicoperspectivas*, 1 - 13.
- Leiva, S. (2009). La subcontratación en la minería en Chile: elementos teóricos para el análisis. *Polis*, 111-131.
- Leiva, S., & Alí, C. (2013). Movimiento social de trabajadores subcontratados en la minería privada del cobre en Chile. *Psicoperspectivas*, 51-61.
- Nuñez, D. (2009). El movimiento de los trabajadores contratistas de CODELCO: una experiencia innovadora de negociación colectiva. En A. Aravena, & D. Nuñez, *El renacer de la huelga obrera. El movimiento sindical en la primera década del siglo XXI* (págs. 37-74). Santiago: ICAL.
- Ramos, M. (14 de Febrero de 2019). *Instituto de Salud Pública de Chile*. Obtenido de Instituto de Salud Pública de Chile:
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_19_Trabajo_en_Altura_Geografica_en_Chile.pdf
- Standing, G. (2011). *El precariado. Una nueva clase social*. Barcelona: Pasado & Presente.

- Svampa, M. (2000). Identidades Astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal. En M. Svampa, *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales* (págs. 106-136). Biblos: Buenos aires.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento*. Madrid: Alianza.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: PAIDOS.
- Tilly, C. (2009). *Los movimientos sociales 1768-2008*. Barcelona: Critica.
- Vejar, D. (2012). Tendencias de un sindicalismo fracturado. Sindicalismo autoritario v/s sindicalismo movimientista. *Actual Marx*, 95-113.

MESA 3: CLIVAJES E INTERSECCIONALIDAD

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

La segregación ocupacional en el mercado laboral por razón de sexo. Un análisis del caso colombiano: 2007-2018

Nayssa Alejandra Marín y Lucy Victoria Ojeda

Universidad de Chile.
Uniciencia Bucaramanga.
nlmarin@uc.cl
lucyvictoria@outlook.com

Resumen

La ponencia se propone analizar la segregación ocupacional por sexo en el mercado laboral en Colombia con base en una comprensión teórico-conceptual del desarrollo humano, la segregación sexual del trabajo y la feminización del mercado laboral. Para ello, se utilizó la estadística descriptiva, a partir del procesamiento de los datos de personas ocupadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en los años que van del 2007 al 2018, y se aplicó el Índice de Disimilitud de Duncan, para mostrar el grado de segregación y, a su vez, el avance o retroceso que ha tenido lugar con el paso de los años. Entre los resultados principales se evidencia que el índice de Duncan llega a ser superior a 0,7 en algunos años, lo que representa una alta segregación; lo cual significa que en Colombia existen actividades económicas caracterizadas por mayor participación de las mujeres y actividades con mayor participación de los hombres. Adicionado a lo anterior, las actividades en las que la concentración de mujeres es mayor, tienen un promedio de ingresos laborales inferior a las actividades con concentración mayoritaria de hombres.

Palabras clave: MUJER - DISCRIMINACIÓN LABORAL - SEGREGACIÓN
OCUPACIONAL - ÍNDICE DE DISIMILITUD - DESIGUALDAD DE GÉNERO.

INTRODUCCIÓN

Las mujeres enfrentan un conjunto de desigualdades y obstáculos a su desarrollo en todas las esferas de la sociedad. En el mercado laboral, específicamente, debe enfrentar la segregación sexual, las barreras de acceso e inserción a los puestos de trabajo, la diferencia de oportunidades y recursos, la discriminación, la violencia, el desempleo, la poca representación en el diálogo social dentro de las empresas y los desequilibrios de poder que caracterizan las relaciones entre hombres y mujeres bajo un sistema heteropatriarcal sexista.

Así pues, la ponencia tiene como propósito principal analizar la segregación ocupacional por sexo en el mercado laboral en Colombia. Se parte desde la hipótesis de que existe desigualdad de género en el mercado laboral y que ésta se ve evidenciada en las áreas de ocupaciones en las que se desempeñan las mujeres en el país.

Tal objetivo implicó una comprensión teórico-conceptual del desarrollo humano, la segregación sexual del trabajo y la feminización del mercado laboral. Haciendo referencia a los derechos, libertades y oportunidades civiles básicas, enfocados en la discusión sobre el principio de la no-discriminación, los debates contemporáneos sobre la economía feminista y la forma en que la cultura impacta las actividades productivas y reproductivas de la sociedad.

Por otra parte, lo metodológico se extiende a una aproximación cuantitativa, en donde se utilizó la estadística descriptiva a partir del procesamiento de los datos de personas ocupadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en los años que van del 2007 al 2018. De esta forma, se aplicó el Índice de Disimilitud de Duncan, para mostrar el grado de segregación y, a su vez, el avance o retroceso que ha tenido lugar con el paso de los años. Para ello, se utilizó la actividad que declara el/la respondiente respecto a su trabajo principal. Las ramas de actividad económica que se utilizaron son establecidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) por secciones.

Por último, se presentan unas conclusiones que traen a colación los resultados obtenidos a la luz de la teoría expuesta en la primera sección, entendiendo que las construcciones sociales

de roles de género impactan en la estructura económica de Colombia, manteniendo inequidades y segregación ocupacional.

LA ECONOMÍA FEMINISTA Y LA SEGREGACIÓN SEXUAL EN EL TRABAJO

La segregación ocupacional se define como la existencia de ocupaciones, oficios o actividades que concentran trabajadores (as) de uno u otro sexo, y/o la casi inexistencia de hombres y mujeres ejecutando la misma labor y, por lo tanto, que no están en competición entre sí por los mismos empleos. (Hakim, 1991)

Hombres y mujeres se distribuyen consciente o inconscientemente las ocupaciones de desigual nivel, desempeñando tareas diferentes que usualmente confinan a las labores femeninas a los rangos más bajos del empleo, en cuanto a cualificación, prestigio y remuneración, lo cual repercute en las oportunidades de movilidad social, impidiendo que las mujeres alcancen los escalones más altos de la estructura social y ocupacional, reforzando así estereotipos de género que tienen como efecto la reproducción permanente de la misma problemática. (Bello & Sepúlveda, 2016, p. 16)

Esta distribución de ocupaciones no es algo que se realiza al azar, sino que obedece a un reparto sistémico de los trabajos basadas en estructuras socioeconómicas y políticas de roles de género. De esta forma, entre los trabajos masculinizados, cuanto mayor sea la recompensa económica, más será valorado; sin embargo, para el caso de los trabajos feminizados, el reconocimiento social es mayor cuanto menor sea el valor económico, pues bajo los parámetros de la feminidad, es más valioso si las labores son realizadas gratuitamente, por amor –por ejemplo, las labores del hogar o el sexo-.

Esta diferencia en las percepciones es uno de los tópicos que debate el feminismo, que es un movimiento de mujeres que enfatiza en la libertad, la agencia individual y colectiva, mas también es una posición teórica, ética y política que pretende desarmar las construcciones sociales de género que ligan a las mujeres con posiciones desventajosas frente a los hombres.

Así como los feminismos -que son muchos y han evolucionado a través de los años-, la economía feminista tampoco es una sola. Aunque existen diversos enfoques, es posible clasificarla mediante dos perspectivas: la ortodoxa, que trata de mantener el discurso

neoclásico modificando la inclusión de las mujeres dentro de sus metodologías de análisis, y la heterodoxa, que considera que hay un problema de fondo que hay que solucionar desde el foco de la equidad social.

Entre las ortodoxas, el enfoque de la economía de género o de igualdad de oportunidades, considera que el problema es la aplicación de un método científico de corte machista, el cual permite la exclusión de las mujeres de los análisis del conjunto de datos, en otras palabras, lo que sugiere es desagregar los datos por sexo para así poder percibir las diferencias en el reparto de los trabajos y los recursos que requieran explicación.

Estos enfoques son los más utilizados, pues al ser más simples de incorporar, han sido incorporados en el discurso de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y son justificadas en términos de eficiencia, ya que una mayor utilización de recursos –en este caso, de la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo-, favorecería la producción y, por ende, aumentaría el bienestar de la sociedad. (Pérez, 2014)

La carencia de este enfoque radica en que se le otorga nula o poca importancia a los aspectos culturales, históricos y psicológicos de las relaciones humanas. En consecuencia, se aprecia la incorporación de aquellos asuntos en las estrategias, pero sin una transformación en las relaciones de poder, lo que termina siendo paños de agua tibia que no solucionan el problema de la discriminación. (Bello & Sepúlveda, 2016, p. 14)

Es por ello que es necesario “ponerse las gafas de género” y analizar la situación desde una posición sensible a las desigualdades, comprendiendo las relaciones económicas significativas que surgen en la producción y reproducción del ser humano y analizando los posibles paradigmas sexistas que sesgan las interrelaciones de las problemáticas con su verdadero origen.

METODOLOGÍA

Para comprobar la hipótesis que se planteó este documento (la existencia de desigualdad en el mercado laboral colombiano por sexo, la cual puede ser explicada por la existencia de especialización por sexo en ciertos sectores de la economía), se tomaron los datos de la

actividad que declara el/la respondiente respecto a su trabajo principal en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde el 2008 hasta el 2018 y con ellos se construyó el Índice de Disimilitud de Duncan.

El índice de Disimilitud de Duncan (Duncan & Duncan, 1955) se obtiene de la expresión:

$$ID_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left| \frac{m_i}{M} - \frac{h_i}{H} \right|$$

En donde:

$\frac{m_i}{M}$ Es la proporción de mujeres ocupadas en el sector económico i respecto al total de mujeres ocupadas en el año k .

$\frac{h_i}{H}$ Es la proporción de hombres ocupados en el sector económico i respecto al total de hombres ocupados en el año k .

i = Sectores económicos de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) -adaptadas para Colombia por el DANE- a un nivel de desagregación 2. Tomando valores entre el 01 y el 99 de acuerdo a la categorización hecha por el DANE.

k = años incluidos en este estudio. Tomando valores entre el 2008 y el 2018.

El ID se moverá entre 0 y 1, siendo 0 ninguna disimilitud y 1 segregación total. Aunque en algunos estudios se ha establecido que un índice entre 0 y 0,3 se considera baja segregación; entre 0,3 y 0,6 moderada, y de 0,7 y más, alta (Ministerio de Educación (Chile), 2012).

Sin embargo, existen algunas críticas a este indicador. Una de esas es su sensibilidad cuando se analizan muchas categorías, como en este caso, en donde se analizan 60 categorías relacionadas con la actividad económica, por eso, se aplicó el indicador para las 60 categorías y para los 17 macro sectores económicos que establece el CIIU.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentará un breve contexto de la segregación ocupacional por sexo en Colombia, acompañado del índice de Duncan.

3.1 Contexto

En Colombia existe brecha entre la participación en el mercado laboral productivo entre los hombres y las mujeres. De acuerdo con el DANE, En el último trimestre móvil del año 2018, la brecha entre ambos sexos fue del 22.37%. No obstante, es notorio que este comportamiento entre el 2008 y el 2018, sólo ha variado en -3,24 puntos porcentuales.

Sumado a lo anterior, según estadísticas de la CEPAL expuestas en el Gráfico 1, la relación entre los salarios de los hombres y las mujeres que se insertan en el mercado laboral, es desventajosa, pues no existe una paridad del 100%. Aunque se observa que, en los últimos años, a mayor cantidad de años de instrucción de las mujeres, mejor relación de ingresos con los hombres, la cifra sigue estando entre 28 y 36 puntos porcentuales por debajo.

Gráfico 2

Relación del ingreso medio entre los sexos por años de instrucción

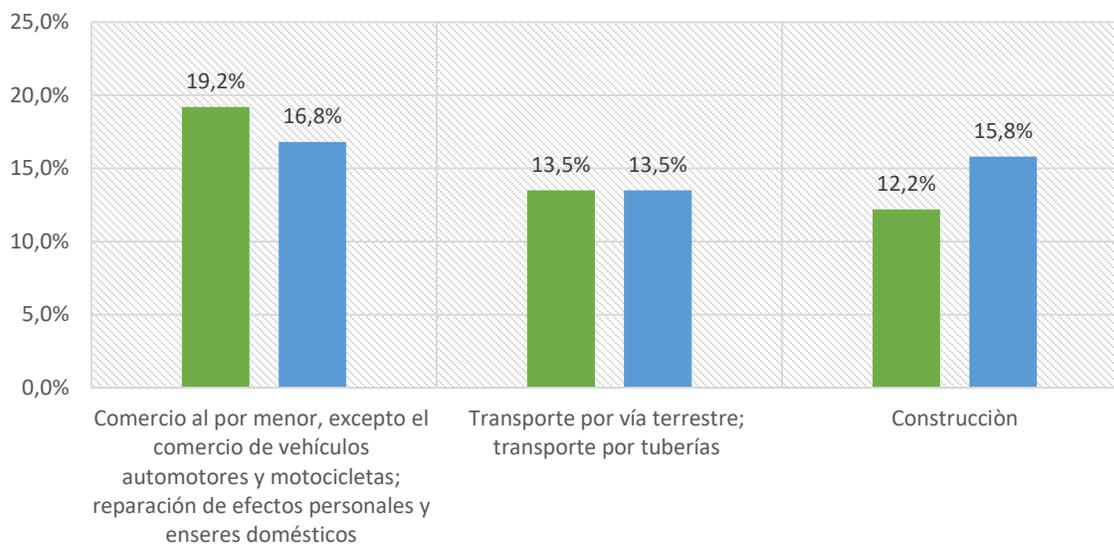


Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL

De acuerdo a los datos de la GEIH, las actividades en las que más se concentraban los hombres (respecto al total de hombres) en el 2008 eran: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos (19,2%), Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías (13,5%) y Construcción (12,2%). En el 2018 se mantuvieron las mismas actividades económicas, pero con porcentajes distintos.

Gráfico 3

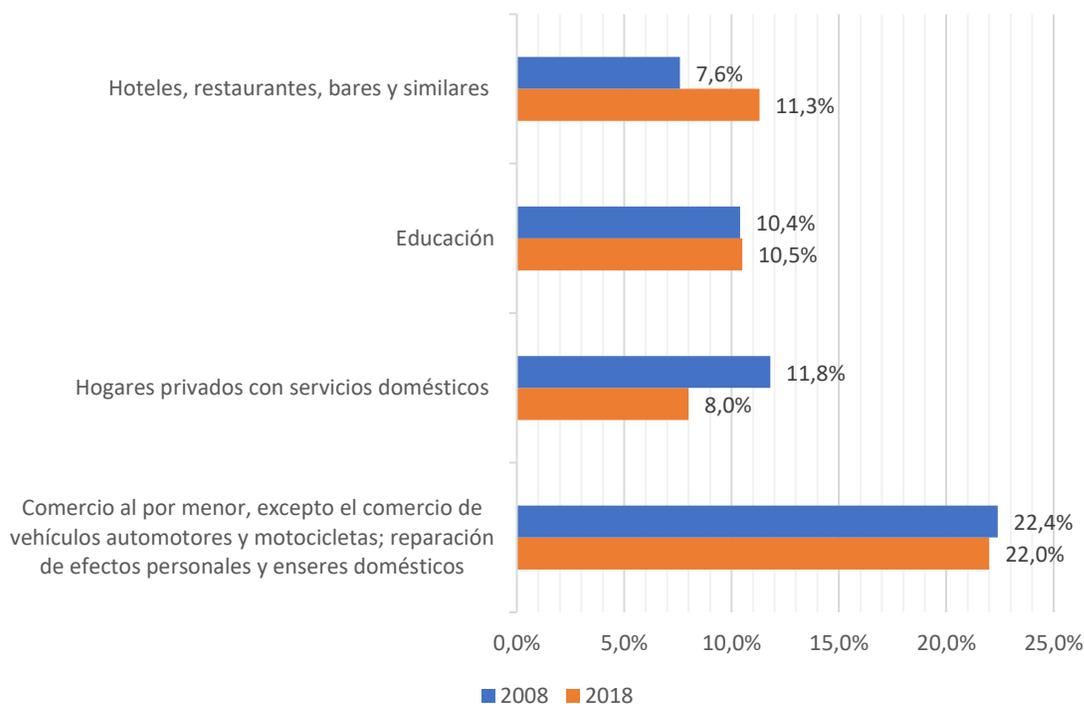
Actividades con mayor concentración de hombres en el 2008 y 2018



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

Con respecto a las mujeres, en el Gráfico 3 se puede apreciar que las actividades en las que más se concentraban las mujeres (respecto al total de mujeres) en el 2008 y 2018 eran: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos; Hogares privados con servicios domésticos; Educación; Hoteles, restaurantes, bares y similares.

Gráfico 4
Actividades con mayor concentración de mujeres en el 2008 y 2018



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

Los Gráficos 2 y 3 nos muestran que, primero, en Colombia el comercio al por menor es la actividad en la que más trabajan los (as) colombianos (as), indistintamente de su sexo, sin embargo, esta es una de las actividades económicas que más contribuye a engruesar las cifras de informalidad laboral del país, dadas las condiciones precarias de su ejecución.

Por otro lado, es posible discernir que las actividades como cocinar, educar y las labores domésticas son comúnmente asociadas a las mujeres, dadas unas construcciones culturales de género en las que se cree que las mujeres están predispuestas genéticamente a realizar este tipo de actividades. De la misma forma, la construcción y el transporte son labores asociadas a la fuerza, resistencia y orientación, características usualmente asignadas a los hombres.

Estos imaginarios colectivos de roles de género son evidenciados nuevamente al constatar las actividades en las que existe mayor diferencia entre sexos; para los hombres se encuentran las siguientes:

- Extracción de carbón, carbón lignífico y Turba
- Explotación de minerales no metálicos
- Fabricación de productos elaborados de Metal, excepto maquinaria y equipo
- Construcción
- transporte por vía terrestre; transporte por Tuberías

- A la inversa, las actividades mayoritariamente femeninas fueron:
- Fabricación de productos textiles
- Fabricación de prendas de vestir; preparado Y teñido de pieles
- Servicios sociales y de salud
- Hogares privados con servicio doméstico
- Otras actividades de servicios¹

3.2 Índice de Duncan

Para Colombia entre el 2008 y el 2018 el índice de Duncan fue superior al 0,6 para las secciones enunciadas a continuación: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y Comunicaciones; Intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Servicios sociales y de salud; Otras actividades de servicios Comunitarios, sociales y personales; Hogares privados con servicio doméstico; Organizaciones y órganos Extraterritoriales.

¹Incluye actividades económicas relacionadas con: Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco; peluquería y otros tratamientos de belleza; Pompas fúnebres y actividades conexas; otras actividades de servicios ncp.

Gráfico 5

Índice de Duncan por secciones del CIU



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

El índice de Duncan fue incluso superior a 0,7 en algunos años, lo que representa una alta segregación y es coherente con lo presentado anteriormente, en la medida que existen en Colombia actividades económicas caracterizadas por mayor participación de las mujeres y actividades con mayor participación de los hombres.

Lo anterior es importante si se tiene en cuenta que las actividades en las que la concentración de mujeres es mayor, tienen de forma comparativa, un promedio de ingresos laborales inferior a las actividades con concentración mayoritaria de hombres, tal como se observa en la Tabla 1, pues mientras que una de las actividades masculinas llega a tener un promedio cercano a los mil dólares², la mayoritariamente femenina es apenas cercana a los 500³.

Tabla 1

Promedio de ingreso laboral por actividad económica predominante por sexo⁴

Hombres	Mujeres
---------	---------

² El Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia para el 2019 (sin contar auxilio de transporte) es de USD 276

³ La conversión a dólar utilizada de aquí en adelante, se obtuvo asumiendo una tasa de cambio de 3.000 pesos colombianos por cada dólar.

Extracción de carbón, carbón lignífico y Turba	USD 947	Servicios sociales y de salud	USD 470
Explotación de minerales no metálicos	USD 373	Hogares privados con servicio doméstico	USD 201
Construcción	USD 279	Otras actividades y servicios	USD 169
Transporte por vía terrestre; transporte por Tuberías	USD 261	Fabricación de prendas de vestir; preparado Y teñido de pieles	USD 165
Fabricación de productos elaborados de Metal, excepto maquinaria y equipo	USD 225	Fabricación de productos textiles	USD 117

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

CONCLUSIONES

Es claro que existe una alta segregación por sexo en Colombia, en donde por actividades económicas se tienen diferencias significativas entre la participación de los hombres y las mujeres, tal y como lo mostró el Índice de Disimilitud de Duncan, entre el 2008 y el 2018 la segregación no ha sido inferior a 0,6.

La segregación por actividades económicas por sexo, puede influir en las desigualdades de ingresos por sexo latentes en el mercado de trabajo, pues mientras las actividades económicas con mayor participación de hombres perciben ingresos laborales promedio altas en comparación con el Salario Mínimo Legal Vigente colombiano, las de las mujeres sólo llegan a duplicarle en el mejor de los casos.

Así pues, entre las recomendaciones es posible argüir que el Estado colombiano no puede conformarse sólo con aumentar las tasas de participación de las mujeres, pues existen problemas de fondo que siguen incidiendo en la desigualdad de la mujer y, por consiguiente, en su segregación laboral por razón de su género. La existencia de segregación y desigualdad por género en el mercado laboral refuerza estereotipos sexuales (algunas ocupaciones son hechas en su mayoría por mujeres y por ende hay un estereotipo); también contribuye a la menor remuneración salarial femenina (dado a que las áreas de actividad en la que se ocupan generalmente tiene promedios de salario más bajos respecto a las áreas en las que se ocupan

los hombres), y a la instauración de barreras de entrada a las mujeres que desean ejercer una profesión diferente a las estereotipadas como femeninas (por ejemplo: los hombres en la explotación de minas y canteras, y las mujeres en la educación).

A su vez, todo ello desencadena efectos adversos para las mujeres en cuanto a movilidad social, pues debido a la reproducción de estos problemas estructurales de desigualdad de género, la posibilidad de ascenso social dentro de la misma generación y futuras es más difícil, aumentando la brecha social existente entre sexos.

La tarea pendiente entonces, está en buscar políticas que incentiven a la población femenina a especializarse en ocupaciones con mejores condiciones laborales, así como en procurar iniciativas gubernamentales que logren reducir el esfuerzo de la mujer en el trabajo no pagado y equilibren las responsabilidades entre hombres y mujeres en el hogar, la revisión a las normativas vigentes que promuevan la desigualdad en la inserción, por ejemplo, las licencias de maternidad y paternidad, así como en actividades culturales y pedagógicas que incidan en el cambio de paradigmas con respecto a las construcciones de género imperantes en la sociedad colombiana.

BIBLIOGRAFÍA

- Bello, M., & Sepúlveda, P. (2016). *Monografía para optar por el título de Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo. Segregación laboral por sexo en las grandes ramas de la actividad económica en Colombia 2008-2013*. Bogotá: Universidad de la Salle.
- Duncan, O., & Duncan, B. (1955). A Methodological Analysis of Segregation Indexes. *American Sociological Review*, 2010-217.
- Esquivel, V. (2016). La economía feminista en América Latina. *Nueva Sociedad No. 265* , 103-116.
- Hakim, C. (1991). etul slaves and self made women: Fact an fantasy in women´s work orientations. *European Sociological Review*. 7 (2), 101-121. Obtenido de <http://esr.oxfordjournals.org/content/7/2/101>
- Ministerio de Educación (Chile). (2012). *Medidas de segregación escolar: discusión del caso chileno*. Santiago de Chile: Ministerio de Educación. Obtenido de https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/A1N12_Segregacion.pdf
- Pérez, A. (2014). *Subversión feminista de la economía*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Vásconez Rodríguez, A. (2017). Crecimiento económico y desigualdad de género: Análisis de panel para cinco países de América Latina. *Revista de la Cepal No.122*, 85-113.

Movilidad social intergeneracional de la riqueza y de la educación de la población indígena de México.

Jesús David Aban Tamayo⁵.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias
david_aban@hotmail.com

Resumen

La población indígena es uno de los grupos más vulnerables y marginados de México. El estudio de las problemáticas que enfrentan es muy generalizado y amplio, centrándose en el análisis de la pobreza y desigualdad de estas minorías. En el caso del estudio sobre su movilidad social, este es muy limitado. Por tal motivo este trabajo, tomando los datos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI), se centra en este sector de la población y estudia la movilidad intergeneracional de la educación y la riqueza en una primera parte, y después estima con una Regresión Logit Ordenada la probabilidad de presentar movilidad social tomando en cuenta los diferentes factores sociales, económicos y demográficos tanto individuales como intergeneracionales que lo explican. Los resultados sugieren que la población indígena presenta grados de inmovilidad y movilidad descendente mayores que la población no indígena y sus probabilidades de movilidad ascendente son limitados, tanto para movilidad educativa como para movilidad de la riqueza.

Palabras clave: POBLACIÓN INDÍGENA - MÉXICO – EDUCACIÓN – RIQUEZA - MOVILIDAD SOCIAL.

⁵ Para la elaboración de esta investigación, el autor contó con el apoyo de la Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) a través del Programa de Becarios CEEY.

I. Introducción

En todo el mundo e incluso en los países más desarrollados, los pueblos indígenas permanecen al margen de la sociedad: son más pobres, menos educados, su esperanza de vida es menor, y, en general, están en peor estado de salud que el resto de la población no indígena (IWGIA, 2006). En el caso de México, el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza, fue en 2014 de 78.4% y en 2016 de 77.6% mientras que el porcentaje de la población no indígena en situación de pobreza pasó de 43.6% a 41.0% entre 2014 y 2016 (CONEVAL, 2017), su esperanza de vida es menor (Torres *et al*, 2003), su nivel educativo es limitado (INEGI, 2016) y los niños indígenas son más propensos a tener talla baja (Leyva-Flores *et al*, 2013).

En vista de estos resultados, existe una vasta literatura que se concentra mayormente en el estudio de los problemas de pobreza y desigualdad que enfrena esta minoría de la población. Incluso en 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI) con el fin de impulsar la investigación sobre los problemas que enfrenta esta población y proponer medidas de solución⁶. No obstante, el estudio de su movilidad social es muy limitado y ninguna de estas iniciativas de investigaciones académicas y tampoco las instituciones públicas han realizado una investigación sobre la movilidad social que se centre específicamente en la población indígena.

Entre los trabajos sobre movilidad social que incluyen una variable de control de indígenas en su análisis, se encuentran a Torche & Seymour(2010) quienes encuentran que pertenecer a un grupo indígena tiene una asociación negativa considerable con los logros educativos, mientras que Behrman & Velez Grajales (2015) encuentran que los indígenas tienen movilidad ocupacional intergeneracional relativa que baja significativamente para las generaciones de mayor edad y existe una movilidad absoluta ascendente de la riqueza para la generación de más edad y movilidad descendente para las generaciones más jóvenes.

La única investigación que se centra solamente en la población indígena es la de Pérez Sandoval (2014) que, dividiendo la población nacional en indígenas y no indígenas,

⁶ En el 2003 se reformó su estructura funcional, se le cambia el nombre a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y se le encarga funciones más activas en el combate a la pobreza de su población objetivo.

encuentra que a pesar de que una persona con orígenes étnicos posea características de logro y contextuales similares a las de una persona no indígena, sus posibilidades de alcanzar un nivel educativo profesional o un trabajo de alta calificación son menores.

La movilidad social es el cambio de estatus social, económico o de ocupación de una persona a lo largo de la trayectoria de su vida o comparado con su hogar de origen. El primero se define como movilidad intrageneracional y el segundo como movilidad intergeneracional (Vélez Grajales et al, 2012; Beller & Hout, 2006). En el marco de esta investigación se estudiará la movilidad intergeneracional de la educación y de la riqueza y se medirá la movilidad relativa. Esta última se refiere al cambio de posición en la categoría socioeconómica de un individuo en relación con el puesto en la categoría de origen (Erikson & Goldthorpe, 2008).

Por los motivos ya expuestos, este trabajo de investigación se propone estudiar la movilidad social específica de los indígenas comparado con los no indígenas. De igual forma, analiza no solo la movilidad social, sino también los factores sociales, económicos y demográficos tanto individuales como intergeneracionales que lo explican. Para llevarlo a cabo se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es la posibilidad de un indígena de tener un mejor nivel de educación o de riqueza que sus padres? ¿Cuáles son los factores que limitan o impulsan la movilidad social de esta población?

Para responder a las preguntas de investigación se utiliza la *EMOVI-2011*, con esto datos se construyen variables de educación y de riqueza las cuales se cruzan en una matriz de transición que permitirá observar la movilidad relativa y por último se emplea un Modelo Probit Ordenado y sus efectos marginales para medir las probabilidades de persistencia o de ascenso social de los entrevistados y los factores socioeconómicos que lo favorecen o lo obstaculizan.

En el caso de la de la movilidad de la riqueza, primero se construye un índice de riqueza basada en activos, empleando el método le Método de Correspondencias Múltiples y replicando la misma estrategia empleada por Vélez Grajales y Stabridis (2013).

II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

2.1 Datos

Para responder a las preguntas de investigación se utiliza la *Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011(EMOVI-2011)* con representatividad a nivel nacional. La muestra está constituida de 11, 001 individuos de entre 25 y 64 años que fueron entrevistados sobre su situación actual y la situación de su hogar de origen cuando tenían 14 años. Esta encuesta tiene información sobre el nivel educativo, situación laboral y activos en el hogar, tanto de los entrevistados como de sus padres.

2.2 Medición de la Movilidad Social Relativa

El simple hecho de que una persona estudie la misma cantidad de años o más que sus padres no necesariamente quiere decir que estén en una situación igual o mejor, si toda la sociedad experimentó el mismo o mayor cambio. Por ello, para tomar en cuenta estos cambios estructurales se necesita medir la movilidad social relativa (Beltrán, 2012).

La forma que más se utiliza y la cual se emplea en esta investigación es la matriz de transición que cruza las categorías de padres e hijos y reporta las proporciones en líneas, es decir la suma de las proporciones en cada renglón debe ser igual al 100%. Con esta especificación, las casillas donde se cruzan una misma categoría (diagonal principal de la matriz) representa la inmovilidad, es decir donde los hijos alcanzaron el mismo nivel educativo o de riqueza que sus padres. A partir de esta referencia distinguimos la movilidad relativa ascendente que se encuentra por encima y la movilidad relativa descendente que se encuentra por debajo de las casillas de inmovilidad.

3.2 Modelo econométrico

Los grados de educación alcanzados y la riqueza de los hijos son las variables que se quieren explicar, dado que las categorías de grados de educación y los quintiles de riqueza tienen un orden, de menor a mayor, se utilizará un modelo para datos ordenados. Para su estimación se puede utilizar un modelo Logit o un modelo Probit, en este caso se utiliza el último.

Este tipo de modelo asume que la variable observada y (nivel de estudios o el quintil de riqueza) es función de una variable latente continua y^* , que no se puede observar y que cruza

progresivamente umbrales más altos τ (Cameron & trivedi, 2010). Entonces para nuestro caso, el modelo estructural es el siguiente:

$$y^* = x_i' \beta + u_i \quad (1)$$

Donde y^* es la variable latente que representa el nivel educativo (o quintil de riqueza) del hijo; x_i' es una vector de características del hogar de origen y de variables de control de las características del hijo; y u_i es el término de error el cual se asume que tiene una distribución normal.

En la ecuación del modelo se puede observar que no hay un intercepto ya que la variable latente (y^*) no es medible y solo se observan sus categorías. Entonces la categoría (m) que asume Y está definida por los $m - 1$ umbrales (τ) de la variable latente. Es decir, cuando la variable latente y^* cruza un umbral (τ), la categoría observada cambia. Los parámetros de la regresión (β) y los ($m - 1$) umbrales o Cutpoints son estimados por el método de máxima verosimilitud. Para que los resultados de la regresión puedan ser interpretados más fácilmente, se deben de calcular los efectos marginales para cada categoría de la variable dependiente.

VI. RESULTADOS

Este apartado se divide en dos secciones, en la primera (4.1) se presenta el análisis de la movilidad intergeneracional de la educación y en la segunda sección (4.2) se presenta el análisis de la movilidad intergeneracional de la riqueza.

4.1 Movilidad intergeneracional de la educación

En esta sección primero se presenta las matrices de movilidad social y después el análisis con las regresiones Probit Ordenadas.

4.1.2 Movilidad intergeneracional relativa de la educación

El grado de educación alcanzado se utiliza como proxy del estatus socioeconómico de los individuos, ya que aumenta el valor del capital humano y aumenta las posibilidades de tener un empleo mejor remunerado.

La Tabla I presenta de las matrices de transición separando la población en dos grupos, indígenas y no indígenas. Referente a la inmovilidad, en la población no indígena se puede constatar que aumenta en los extremos superiores. Si se compara con la población indígena, ellos tienen proporciones mayores de inmovilidad, esto es positivo para las personas cuyos padres tienen educación universitaria y negativo para las personas cuyos padres no tienen o tienen bajos niveles de educación. Para los padres indígenas con educación universitaria, el 70% de sus hijos tienen estudios universitarios, mientras que solo 58% de los no indígenas con padres en esa misma situación alcanzan a tener estudios universitarios. No obstante, la proporción de indígenas que se quedan sin educación cuando sus padres tampoco tienen educación es mayor a la proporción de no indígenas en la misma situación. En términos de movilidad ascendente, 6 de cada 100 no indígenas con padres sin educación o que tienen menos de primaria alcanzan a completar sus estudios universitarios, mientras que solo 3 de cada 100 indígenas en la misma situación estudian la universidad. En términos de movilidad descendente, la proporción de indígenas que tiene un menor nivel de instrucción que sus padres es mayor que la proporción de no indígenas.

Tabla I. Matrices de movilidad social educativa

<i>Educación del padre</i>	<i>Educación de los hijos No-indígenas</i>					Total
	Sin	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Universidad	
Sin/Menos de primaria	21.3%	32.8%	24.0%	15.7%	6.1%	100 %
Primaria	4.1%	18.9%	37.4%	27.9%	11.7%	100 %
Secundaria	1.5%	6.8%	27.3%	43.5%	21.0%	100 %
Preparatoria	1.7%	0.6%	17.4%	43.9%	36.4%	100 %
Universidad	0.1%	0.1%	2.9%	38.9%	58 %	100 %
<i>Educación del padre</i>	<i>Educación de los hijos indígenas</i>					Total
	Sin	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Universidad	
Sin/Menos de primaria	34.2%	30.2%	22.9%	9.5%	3.2%	100 %
Primaria	9.1%	28.1%	29.8%	22.8%	10.3%	100 %
Secundaria	2.3%	11.6%	23.3%	54.4%	8.5%	100 %
Preparatoria	15%	4.4%	13.3%	44.4%	23 %	100 %
Universidad	0.0%	0.0%	3.6%	26.9%	70 %	100 %

Notas: Se aplicó el ponderador de la muestra para que los resultados sean representativos de la población de entre 25 y 64 años. Los resultados pueden no sumar 100% debido al redondeo. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

4.1.3 Modelo Probit Ordenado de la movilidad intergeneracional de la educación

Las matrices de movilidad intergeneracional relativa permitieron observar que hay una diferencia de movilidad entre la población indígena y no indígena. Con el objetivo de analizar cuáles son los determinantes de la movilidad social entre los dos grupos, se corre un modelo de Regresión Probit Ordenado para cada uno y dado que no los resultados no son directamente interpretables, se calculan los efectos marginales.

Tabla II. Modelo Probit ordenado del nivel de educación

Variable dependiente: <i>Nivel de educación de los hijos</i>	No-indígenas		Indígenas	
<i>Características de los hijos</i>				
Sexo (Ref: Mujer)	0.130***	(0.027)	0.176***	(0.059)
Edad	0.092***	(0.009)	0.053***	(0.020)
Edad al cuadrado	-0.001***	(0.000)	-0.001***	(0.000)
Rural	-0.135***	(0.034)	0.014	(0.069)
Control para Regiones	Si		Si	
<i>Características hogar de origen</i>				
Madre con empleo	0.042	(0.037)	-0.123	(0.085)
Padre con empleo	0.050	(0.047)	0.163	(0.100)
Educación del padre (Ref: Sin educación)				
Primaria	0.256***	(0.042)	0.155	(0.103)
Secundaria	0.505***	(0.056)	0.356**	(0.155)
Preparatoria	0.805***	(0.080)	0.654***	(0.189)
Universidad	1.199***	(0.105)	1.399***	(0.337)
Educación de la madre (Ref: sin educación)				
Primaria	0.231***	(0.042)	0.465***	(0.108)
Secundaria	0.353***	(0.057)	0.449***	(0.154)
Preparatoria	0.523***	(0.085)	0.844***	(0.224)
Universidad	0.781***	(0.148)	0.530	(0.420)
Quintil del hogar de origen (Ref: Q1)				
Quintil 2	0.330***	(0.048)	0.276***	(0.079)
Quintil 3	0.487***	(0.050)	0.452***	(0.097)
Quintil 4	0.573***	(0.052)	0.601***	(0.109)
Quintil 5	0.691***	(0.056)	0.594***	(0.135)
Número de hermanos	-0.018***	(0.005)	-0.005	(0.011)
Número de cuartos	0.078***	(0.009)	0.069***	(0.022)
Número de vehículos	0.052***	(0.018)	0.021	(0.056)
Propiedad de la casa	0.081***	(0.030)	0.094	(0.071)
Rural	-0.174***	(0.030)	-0.385***	(0.068)
Corte 1				
Constante	0.955***	(0.197)	0.294	(0.424)
Corte 2				
Constante	1.917***	(0.198)	1.209***	(0.425)
Corte 3				
Constante	3.029***	(0.199)	2.278***	(0.426)
Corte 4				
Constante	4.179***	(0.200)	3.320***	(0.429)
Observaciones	6791		1413	
Pseudo R ²	0.163		0.166	
LR statistics	3356.5		701.3	
Prob (LR statistics)	0.000		0.000	
Log-likelihood	-8646.3		-1764.4	

Notas: Los valores entre paréntesis son los errores estándar; ***, ** y * indican la significatividad al 1%, 5%, y 10%, respectivamente. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

De manera general se observa que los efectos positivos son mayores para la población no indígena y los efectos negativos son mayores para la población indígena. Si embargo, esto se estudiará con más a detalle con los efectos marginales en los apartados siguientes.

a) Población no indígena

Los resultados de los efectos marginales de la Tabla III se interpretan de la siguiente forma: si el parámetro de la variable es positivo, significa que un cambio o aumento de la variable aumenta las probabilidades de estar en esa categoría; y los parámetros negativos significan que un aumento o cambio en la variable disminuye las probabilidades de estar en esa categoría. Utilizando este criterio se procede a analizar los resultados.

En primer lugar, se observa que un mayor nivel de educación del padre aumenta las probabilidades de que los hijos tengan un mayor nivel de educación. En efecto, se puede constatar que cuando el padre tiene un grado de educación completo, los hijos tienen menores probabilidades de estar en las tres categorías más bajas de educación, que los hijos de padres que no tienen educación o no completaron la primaria. En segundo lugar, las variables de control referentes al hogar de origen muestran resultados interesantes. Por ejemplo, las variables de riqueza del hogar de origen como el quintil de procedencia, número de cuartos y vehículos son indicadores de movilidad social ascendente ya que presentan probabilidades negativas de estar en los niveles de escolaridad bajos (sin educación, primaria y secundaria) y hay probabilidades positivas de estar en los niveles altos de educación, principalmente en bachillerato donde las probabilidades que se observan son más altas. Por el contrario, el número de hermanos y la residencia en zona rural de los padres limita el ascenso educativo ya que refuerzan la estancia en los niveles de educación bajos.

En tercer lugar, las variables de control referentes a las características de los entrevistados revelan que los hombres tienen 1.4 puntos porcentuales menos probabilidad de quedarse sin educación que las mujeres, lo cual quiere decir los hombres tienen mayores probabilidades de tener niveles de estudios más altos. Un año adicional de edad disminuye la probabilidad de que los individuos tengan un nivel educación universitario en 0.1 puntos porcentuales y

favorece que tenga niveles de educación bajos, las probabilidades son positivas en esos niveles, lo cual infiere que las generaciones más recientes tienen mayor probabilidad de ascenso.

Por último, los entrevistados que viven en zona rural refuerza las probabilidades de quedarse en los tres niveles más bajos de educación, de 1.5 puntos porcentuales de mayor probabilidad de no tener educación, de 2.9 puntos porcentuales de tener educación primaria y 0.4 la de tener secundaria. Se observan los mismos efectos cuando el hogar de origen es de una zona rural, pero con probabilidades superiores.

b) Indígenas

En la Tabla II los resultados del modelo de la población indígena muestran, a diferencia de los no indígenas, que la categoría de educación primaria del padre no es significativa y la educación universitaria en el caso de la educación de la madre. A diferencia del resto de la población no indígena, la zona de residencia rural de los hijos indígenas, así como algunas de las características del hogar de origen como el número de hermanos, el número de vehículos y el contar con casa propia no son significativos, es decir, no afecta la probabilidad de tener un mayor nivel educativo.

La Tabla IV presenta los efectos marginales de los niveles de educación de los entrevistados indígenas. En primer lugar, se observa que si el padre tiene educación secundaria los hijos tienen 7.6 puntos porcentuales menor probabilidad de no tener educación que los hijos de padres que no tiene educación o que solo tienen primaria. En el caso de los padres con educación universitaria, la probabilidad de que sus hijos tengan el mismo nivel es 22.7 puntos porcentuales mayor que los hijos de padres sin educación o con educación primaria, ligeramente inferior a sus homólogos no indígenas. En general para los entrevistados de padres indígenas, sus probabilidades de tener un nivel de estudios elevado son menores que los hijos de padres no indígenas. En el caso de la educación de la madre, también es un factor de movilidad social ascendente, aunque las probabilidades son menores comparadas con los no indígenas. En segundo lugar, los indígenas hombres tienen mayor probabilidad de tener nivel secundario, bachillerato y universidad que las mujeres indígenas, mientras que para los hombres no indígenas tienen mayor probabilidad de tener bachillerato y universidad (3.2 y 1.5 punto porcentuales) que las mujeres no indígenas. En los dos casos las mujeres tienen

mayores probabilidades de estar en los niveles de educación más bajos que sus homólogos hombres.

En tercer lugar, en el caso de la riqueza del hogar de origen, pertenecer a un quintil superior al quintil más pobre (quintil 1) favorece la posibilidad de tener una mejor categoría de educación, al igual que la cantidad de cuartos en el hogar de origen que es otra variable de control utilizada como indicador de riqueza. Los indígenas cuyos hogares de origen pertenecen a zonas rurales tienen 8.6 puntos porcentuales de mayor probabilidad de no tener educación, 6.4 puntos porcentuales de mayor probabilidad de tener solo educación primaria y tienen menores probabilidades de alcanzar los niveles superiores comparado con los indígenas que viven en zonas urbanas.

Tabla III. Probabilidades de movilidad educativa de la población No-indígena

Variables	Efectos marginales											
	Sin/Menos primaria		que		Primaria		Secundaria		Preparatoria		Universidad	
<i>Características de los hijos</i>												
Sexo (Ref: Mujer)	-	(0.003)	-	(0.006)	-0.006***	(0.002)	0.032***	(0.007)	0.015***	(0.003)		
Edad	0.014***	(0.000)	0.028***	(0.000)	0.0003***	(0.000)	-	(0.000)	-	(0.000)		
Rural	0.015***	(0.004)	0.029***	(0.007)	0.004***	(0.001)	-	(0.008)	-	(0.003)		
Control para Regiones	SI		SI		SI		SI		SI			
<i>Características hogar de origen</i>												
Madre con empleo	-0.004	(0.004)	-0.009	(0.008)	-0.002	(0.002)	0.010	(0.009)	0.005	(0.004)		
Padre con empleo	-0.005	(0.005)	-0.011	(0.010)	-0.002	(0.002)	0.012	(0.012)	0.005	(0.005)		
Quintil del hogar de origen (Ref: Q1)												
Quintil 2	-	(0.009)	-	(0.010)	0.021***	(0.005)	0.078***	(0.011)	0.023***	(0.003)		
Quintil 3	0.053***	(0.009)	0.069***	(0.010)	0.016***	(0.006)	0.117***	(0.012)	0.040***	(0.004)		
Quintil 4	-	(0.009)	-	(0.011)	0.010	(0.006)	0.138***	(0.012)	0.051***	(0.005)		
Quintil 5	0.079***	(0.009)	0.120***	(0.011)	-0.003	(0.007)	0.166***	(0.013)	0.068***	(0.006)		
Educación del padre (Ref: sin educación)												
Primaria	-	(0.005)	-	(0.009)	-0.004	(0.002)	0.064***	(0.010)	0.026***	(0.005)		
Secundaria	0.030***	(0.005)	0.055***	(0.011)	-0.030***	(0.007)	0.123***	(0.013)	0.062***	(0.009)		
Preparatoria	-	(0.005)	-	(0.013)	-0.086***	(0.016)	0.179***	(0.014)	0.125***	(0.018)		
Universidad	0.050***	(0.005)	0.105***	(0.011)	-0.179***	(0.024)	0.211***	(0.009)	0.239***	(0.033)		
Educación de la madre (Ref: sin educación)												
Primaria	-	(0.005)	-	(0.009)	-0.008***	(0.003)	0.057***	(0.010)	0.025***	(0.005)		
Secundaria	0.025***	(0.005)	0.049***	(0.012)	-0.021***	(0.006)	0.087***	(0.014)	0.043***	(0.008)		
Preparatoria	-	(0.006)	-	(0.015)	-0.046***	(0.013)	0.124***	(0.018)	0.072***	(0.015)		
Universidad	0.035***	(0.006)	0.074***	(0.021)	-0.097***	(0.032)	0.169***	(0.021)	0.130***	(0.037)		
Número de hermanos	0.045***	(0.001)	0.106***	(0.001)	0.001***	(0.000)	-	(0.001)	-	(0.001)		
Número de cuartos	0.056***	(0.001)	0.146***	(0.001)	-0.004***	(0.001)	0.019***	(0.002)	0.009***	(0.001)		
Número de vehículos	0.002***	(0.001)	0.004***	(0.002)	-	(0.001)	0.013***	(0.005)	0.006***	(0.002)		
Propiedad de la casa	-	(0.002)	-	(0.004)	-0.002***	(0.001)	0.020***	(0.008)	0.009***	(0.003)		
Rural	0.009**	(0.003)	0.017***	(0.007)	0.007***	(0.002)	-	(0.008)	-	(0.003)		
	0.019***	(0.003)	0.037***	(0.007)			0.043***		0.019***			

Notas: Los valores entre paréntesis son los errores estándar; ***, ** y * indican la significatividad al 1%, 5%, y 10%, respectivamente. Los efectos marginales están calculados con las medias de los regresores. La edad al cuadrado es una función de otra variable (edad), por lo tanto, no tiene efectos marginales Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

Asimismo, los indígenas tienen menores probabilidades de tener niveles educativos superiores: 7.8 puntos porcentuales de menor probabilidad de alcanzar el nivel bachillerato y 2.3 puntos

porcentuales de menor probabilidad de alcanzar la universidad comparado con sus homólogos con padres que provienen de zonas urbanas.

En conclusión, las características del hogar de origen de la población indígena son muy importantes para alcanzar un nivel de educación elevado, principalmente el nivel de educación del padre. Las otras características como la riqueza, la cantidad de cuartos como proxy del nivel de riqueza del hogar de origen y las demás variables de control favorecen un mayor nivel de educación. No obstante, aun si los indígenas y su hogar de origen reúnen todas las características que favorecen la movilidad social educativa ascendente, sus probabilidades son menores comparadas con las probabilidades (coeficientes) de los no indígenas.

4.2 Movilidad intergeneracional de la riqueza

4.2.1 Movilidad intergeneracional relativa de la riqueza

Los resultados de las matrices de movilidad de la Tabla V muestran que la mayor inmovilidad se concentra en los extremos de los niveles de riqueza. En el grupo de no indígenas, el 29.8% de los que provienen del quintil más bajo permanece en esa misma posición y el 56.5% de los que provienen del quintil más alto permanecen ahí. En el caso de los indígenas su permanencia en los niveles extremos es superior al de la población no indígena, ya que más del 50% de los que provienen del quintil más pobre permanecen ahí y el 63.4% de los que pertenecen al quintil más rico permanecen en ese mismo nivel.

Tabla V. Matriz de movilidad social relativa de la riqueza

<i>Riqueza del hogar de origen</i>	<i>Nivel de riqueza de los hijos No indígenas</i>					<i>Total</i>
	<i>Quintil 1</i>	<i>Quintil 2</i>	<i>Quintil 3</i>	<i>Quintil 4</i>	<i>Quintil 5</i>	
Quintil 1	29.8%	26.5%	20.8%	14.5%	8.5%	100 %
Quintil 2	24.3%	27.7%	16.3%	19.7%	11.9%	100 %
Quintil 3	13.2%	19.6%	19.2%	24.9%	23.1%	100 %
Quintil 4	5.9%	15.1%	19.2%	29.1%	30.7%	100 %
Quintil 5	2.2%	3.9%	12.9%	24.6%	56.5%	100 %

<i>Riqueza del hogar de origen</i>	<i>Nivel de riqueza de los hijos Indígenas</i>					<i>Total</i>
	<i>Quintil 1</i>	<i>Quintil 2</i>	<i>Quintil 3</i>	<i>Quintil 4</i>	<i>Quintil 5</i>	
Quintil 1	51.2%	23.7%	14.9%	8.1%	2.1%	100 %
Quintil 2	43.6%	23.1%	17.4%	10.7%	5.2%	100 %
Quintil 3	12.3%	23.8%	29.2%	18.3%	16.4%	100 %
Quintil 4	6.3%	18.8%	26.9%	19.8%	28.3%	100 %
Quintil 5	0.7%	2.8%	16.9%	16.3%	63.4%	100 %

Notas: Se aplicó el ponderador de la muestra para que los resultados sean representativos de la población de entre 25 y 64 años. Los resultados pueden no sumar 100% debido al redondeo. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

Si observamos la movilidad ascendente podemos contrastar que para los dos grupos las oportunidades de llegar al quintil más alto aumentan conforme aumenta el nivel de riqueza del hogar de origen. Sin embargo, los indígenas tienen menores posibilidades de movilidad ascendente, por ejemplo, de los indígenas que proviene del quintil 1 solamente el 2.1% alcanzan el quintil superior, mientras que del grupo de no indígenas el 8.5% logra llegar a este nivel. En términos de movilidad descendente a excepción del quintil superior los indígenas tienen mayores niveles de movilidad descendente que los no indígenas, por ejemplo 43.6% de los indígenas que provienen del quintil 2 caen al quintil más pobre. En el caso de los indígenas que pertenecen al quintil más rico, el 0.7 % desciende al quintil más bajo, mientras que el 2.2% de los no indígenas del mismo origen caen al quintil más pobre.

Estos resultados sugieren que los no indígenas más pobres tienen mayores oportunidades de movilidad ascendente que la población indígena. Sin embargo, la población indígena que proviene del quintil superior tiene menor movilidad descendente que el resto de la población.

Tabla IV. Probabilidades de movilidad educativa de la población indígena

Variables	Efectos marginales									
	Sin/ menos de primaria		Primaria		Secundaria		Preparatoria		Universidad	
<i>Características del hijo</i>										
Sexo (Ref: Mujer)	-0.042***	(0.014)	-0.028***	(0.010)	0.026***	(0.009)	0.035***	(0.012)	0.009***	(0.003)
Edad	0.005***	(0.001)	0.003***	(0.000)	-0.003***	(0.001)	-0.004***	(0.001)	-0.001***	(0.000)
Rural	-0.003	(0.016)	-0.002	(0.011)	0.002	(0.010)	0.003	(0.014)	0.001	(0.004)
Control para Regiones	SI		SI		SI		SI		SI	
<i>Características del hogar de origen</i>										
Madre con empleo	0.030	(0.022)	0.019	(0.012)	-0.019	(0.014)	-0.024	(0.016)	-0.006	(0.004)
Padre con empleo	-0.041	(0.027)	-0.024*	(0.013)	0.026	(0.018)	0.031*	(0.018)	0.008*	(0.004)
Quintil del hogar de origen (Bo: Q1)										
Quintil 2	-0.076***	(0.022)	-0.034***	(0.010)	0.051***	(0.015)	0.048***	(0.014)	0.011***	(0.004)
Quintil 3	-0.114***	(0.025)	-0.064***	(0.016)	0.072***	(0.016)	0.084***	(0.019)	0.022***	(0.006)
Quintil 4	-0.141***	(0.025)	-0.093***	(0.019)	0.083***	(0.016)	0.118***	(0.023)	0.034***	(0.009)
Quintil 5	-0.140***	(0.029)	-0.092***	(0.024)	0.083***	(0.017)	0.116***	(0.029)	0.033***	(0.011)
Educación del padre (Ref: sin educación)										
Primaria	-0.037	(0.024)	-0.025	(0.017)	0.023	(0.014)	0.031	(0.021)	0.008	(0.006)
Secundaria	-0.076***	(0.028)	-0.062**	(0.030)	0.041***	(0.012)	0.074**	(0.034)	0.023*	(0.013)
Preparatoria	-0.118***	(0.024)	-0.123***	(0.039)	0.042***	(0.014)	0.142***	(0.043)	0.057**	(0.026)
Universidad	-0.164***	(0.018)	-0.249***	(0.042)	-0.077	(0.076)	0.263***	(0.029)	0.227**	(0.104)
Educación de la madre (Ref: sin educación)										
Primaria	-0.098***	(0.020)	-0.082***	(0.021)	0.050***	(0.010)	0.097***	(0.024)	0.032***	(0.010)
Secundaria	-0.095***	(0.027)	-0.079**	(0.031)	0.050***	(0.011)	0.094***	(0.035)	0.030**	(0.015)
Preparatoria	-0.143***	(0.024)	-0.159***	(0.044)	0.035	(0.025)	0.183***	(0.048)	0.084**	(0.039)
Universidad	-0.107*	(0.061)	-0.095	(0.086)	0.051***	(0.010)	0.112	(0.097)	0.039	(0.047)
Número de hermanos	0.001	(0.003)	0.001	(0.002)	-0.001	(0.002)	-0.001	(0.002)	-0.000	(0.001)
Número de cuartos	-0.016***	(0.005)	-0.011***	(0.004)	0.010***	(0.003)	0.014***	(0.005)	0.004***	(0.001)
Número de vehículos	-0.005	(0.013)	-0.003	(0.009)	0.003	(0.008)	0.004	(0.011)	0.001	(0.003)
Propiedad de la casa	-0.023	(0.018)	-0.015	(0.011)	0.014	(0.011)	0.018	(0.014)	0.005	(0.004)
Rural	0.086***	(0.015)	0.064***	(0.013)	-0.049***	(0.010)	-0.078***	(0.015)	-0.023***	(0.006)

Notas: Los valores entre paréntesis son los errores estándar; ***, ** y * indican la significatividad al 1%, 5%, y 10%, respectivamente. Los efectos marginales están calculados con las medias de los regresores. La edad al cuadrado es una función de otra variable (edad), por lo tanto, no tiene efectos marginales. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-201).

4.2.2 Modelo Probit Ordenado de la movilidad intergeneracional de la riqueza

En este apartado se presentan los resultados del modelo Probit Ordenado de la movilidad de la riqueza. Como ya se mencionó antes, ni los signos ni las magnitudes de los coeficientes son directamente interpretables en el modelo de elección ordenada, por tal motivo solo se interpretan la significatividad y después se interpretan los efectos marginales que permitirán conocer la magnitud y el signo adecuado en cada categoría de riqueza.

Tabla VI. Modelos Probit Ordenado del nivel de riqueza

Variable dependiente:	No-indígenas		Indígenas	
<i>Quintil de riqueza del hijo</i>				
<i>Características del hijo</i>				
Con empleo	0.018	(0.031)	-0.005	(0.070)
Años de educación	0.037***	(0.012)	0.077***	(0.023)
Cuadrado de educación	0.004***	(0.001)	0.001	(0.001)
En pareja	0.062**	(0.029)	0.116*	(0.065)
Sexo (Ref: Mujer)	0.026	(0.030)	-0.013	(0.068)
Edad	0.053***	(0.010)	0.025***	(0.003)
Cuadrado de edad	-0.0003***	(0.000)		
Rural	-0.288***	(0.035)	-0.170**	(0.073)
Casa propia	0.304***	(0.029)	0.208***	(0.069)
Control para Regiones	SI		SI	
<i>Características del hogar de origen</i>				
Madre con empleo	0.105***	(0.039)	0.129	(0.087)
Padre con empleo	-0.027	(0.048)	0.050	(0.107)
Quintil del hogar de origen (Ref: Q1)				
Quintil 2	0.157***	(0.048)	0.080	(0.084)
Quintil 3	0.307***	(0.051)	0.485***	(0.102)
Quintil 4	0.578***	(0.053)	0.735***	(0.115)
Quintil 5	1.039***	(0.059)	0.974***	(0.141)
Educación del padre (años)	0.015**	(0.006)	0.008	(0.013)
Educación de la madre (años)	0.024***	(0.006)	0.017	(0.014)
Número de miembros	0.002	(0.006)	0.003	(0.013)
Número de cuartos	0.057***	(0.010)	0.143***	(0.024)
Número de vehículos	0.140***	(0.019)	0.181***	(0.061)
Rural	-0.294***	(0.031)	-0.424***	(0.070)
<i>Corte 1</i>				
Constante	1.618***	(0.208)	1.491***	(0.251)
<i>Corte 2</i>				
Constante	2.491***	(0.208)	2.279***	(0.254)
<i>Corte 3</i>				
Constante	3.207***	(0.209)	3.026***	(0.257)
<i>Corte 4</i>				
Constante	4.084***	(0.211)	3.950***	(0.264)
Observaciones	6671		1381	
Pseudo R ²	0.184		0.195	
LR statistics	3946.3		823.9	
Prob (LR statistics)	0.0000		0.0000	
Log-likelihood	- 8730		-1704	

Notas: Los valores entre paréntesis son los errores estándar; ***, ** y * indican la significatividad al 1%, 5%, y 10%, respectivamente. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

a) Población No-indígena

Los resultados del modelo para la población no-indígena de la Tabla VI muestran que la situación de empleo del entrevistado al igual que su sexo no influyen en las posibilidades de tener un mejor nivel de riqueza. La educación y la edad influyen sobre las posibilidades de alcanzar niveles de riqueza altos, también se añadieron sus cuadrados para captar la existencia de no linealidades. Por otra parte, la residencia en zona rural también afecta estas posibilidades.

En la Tabla VII se presentan los resultados de los efectos marginales para la población no indígena, de los cuales se puede observar lo siguiente:

En primer lugar, podemos constatar que la educación favorece las probabilidades de estar en los dos quintiles más altos, y hay menores probabilidades de caer en los quintiles más bajos. Otras variables de control como a la edad y tener casa propia también afectan en el mismo sentido las probabilidades de estar en un quintil más alto. También se puede constatar que los entrevistados que viven en zonas rurales tiene mayores probabilidades de estar en los quintiles más pobres.

En segundo lugar, haciendo referencia a la característica del hogar de origen, el nivel de riqueza de los padres aumenta de manera significativa las posibilidades de tener un nivel alto de riqueza: los entrevistados cuyo hogar de origen es del quintil más alto, tienen 23.7 puntos porcentuales de mayor probabilidad de alcanzar ese mismo quintil que los entrevistados que provienen del quintil más pobre. Otras variables que denotan la riqueza del hogar de origen como el número de cuartos y el número de vehículos también disminuyen las probabilidades de estar en los quintiles más bajos y aumentan la probabilidad de permanecer en los quintiles más ricos. Por último, se observa que otras variables de control del hogar de origen como la situación de empleo de la madre y la educación de los dos padres tienen efectos positivos sobre las probabilidades de llegar a los dos quintiles superiores.

Tabla VII. Probabilidades de movilidad de riqueza de la población No indígena

Variables	Efectos marginales									
	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
<i>Características de los Hijos</i>										
Con empleo	-0.003	(0.005)	-0.003	(0.006)	-0.001	(0.001)	0.003	(0.005)	0.004	(0.007)
Años de Educación	-	(0.001)	-	(0.001)	-	(0.001)	0.020***	(0.001)	0.025***	(0.001)
Casado	0.018***		0.022***		0.004***					
	-	(0.005)	-	(0.006)	-0.002*	(0.001)	0.011**	(0.005)	0.013**	(0.006)
Sexo (Ref: Mujer)	0.010**		0.012**							
	-0.004	(0.005)	-0.005	(0.006)	-0.001	(0.001)	0.005	(0.005)	0.006	(0.007)
Edad	-	(0.000)	-	(0.000)	-	(0.000)	0.005***	(0.000)	0.006***	(0.000)
	0.004***		0.005***		0.001***					
Rural	0.051***	(0.007)	0.055***	(0.006)	0.004**	(0.002)	-	(0.007)	-	(0.006)
							0.052***		0.057***	
Casa Propia	-	(0.006)	-	(0.006)	-	(0.002)	0.054***	(0.006)	0.063***	(0.006)
	0.051***		0.058***		0.007***					
Control para Regiones	SI		SI		SI		SI		SI	
<i>Características del hogar de origen</i>										
Madre con empleo	-	(0.006)	-	(0.008)	-	(0.002)	0.017***	(0.006)	0.024***	(0.009)
	0.016***		0.021***		0.005**					
Padre con empleo	0.004	(0.007)	0.005	(0.010)	0.001	(0.002)	-0.005	(0.008)	-0.006	(0.011)
Quintil del hogar de origen (Ref: Quintil 1)										
Quintil 2	-	(0.012)	-	(0.007)	0.011***	(0.004)	0.031***	(0.010)	0.020***	(0.006)
	0.039***		0.023***							
Quintil 3	-	(0.013)	-	(0.008)	0.015***	(0.004)	0.061***	(0.010)	0.045***	(0.007)
	0.071***		0.049***							
Quintil 4	-	(0.013)	-	(0.009)	0.008	(0.005)	0.108***	(0.010)	0.101***	(0.009)
	0.116***		0.101***							
Quintil 5	-	(0.013)	-	(0.010)	-	(0.008)	0.153***	(0.010)	0.237***	(0.014)
	0.160***		0.188***		0.042***					
Educación del padre (años)	-	(0.001)	-	(0.001)	-	(0.000)	0.003**	(0.001)	0.003**	(0.001)
	0.002**		0.003**		0.001**					
Educación de la madre (años)	-	(0.001)	-	(0.001)	-	(0.000)	0.004***	(0.001)	0.005***	(0.001)
	0.004***		0.005***		0.001***					
Número de miembros	-0.000	(0.001)	-0.000	(0.001)	-0.000	(0.000)	0.000	(0.001)	0.000	(0.001)
Número de cuartos	-	(0.002)	-	(0.002)	-	(0.000)	0.010***	(0.002)	0.012***	(0.002)
	0.009***		0.011***		0.002***					
Número de vehículos	-	(0.003)	-	(0.004)	-	(0.001)	0.024***	(0.003)	0.030***	(0.004)
	0.022***		0.028***		0.005***					
Rural	0.049***	(0.006)	0.057***	(0.006)	0.008***	(0.002)	-	(0.006)	-	(0.006)
							0.051***		0.061***	

Notas: Los valores entre paréntesis son los errores estándar; ***, ** y * indican la significatividad al 1%, 5%, y 10%, respectivamente. Los efectos marginales están calculados con las medias de los regresores. La edad al cuadrado es una función de otra variable (edad), por lo tanto, no tiene efectos marginales y solo los efectos marginales de la variable de origen fueron calculados. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

b) Población indígena

En el caso de la población indígena, los resultados del modelo Probit ordenado de la Tabla VI muestran que, del grupo de variables de las características del entrevistado, solamente la educación, la región donde vive, la edad, posesión de casa propia y la zona de residencia rural o urbana son significativos.

Del lado de las características del hogar de origen, solamente la zona de residencia rural y las variables que denotan riqueza son estadísticamente significativas, excepto el segundo quintil de riqueza cuyos efectos sobre las posibilidades de alcanza un mejor nivel de riqueza no es

estadísticamente diferente a los niveles de riqueza alcanzados por los indígenas que provienen del primer quintil.

Para medir los efectos y magnitud de estas variables en la siguiente tabla se presentan los efectos marginales de cada quintil de riqueza del entrevistado. En primer lugar, de las características del entrevistados podemos notar que un año más de educación y de edad permiten tener mayores probabilidades de estar en los dos quintiles más altos al igual que la variable de la posesión de una casa propia.

En segundo lugar, para los indígenas los efectos marginales del segundo quintil de riqueza del hogar de origen no son estadísticamente diferente al de los indígenas provenientes del quintil más pobre, contrario al caso de los no indígenas. Es a partir de tercer quintil de riqueza de los padres comparados con el quintil más pobre donde las probabilidades de alcanzar los quintiles de riqueza más altos aumentan. Sin embargo, las probabilidades de alcanzar el quintil 4 son mayores que las probabilidades de alcanzar el quintil 5, esto no sucede para la población no indígena, para ellos sus probabilidades de mantenerse en el último quintil son superiores a las del quintil 4. No obstante, las probabilidades de los indígenas que provienen del quintil 5 de no caer en el quintil más bajo son mayores que las probabilidades de los no indígenas con el mismo origen. Estos resultados confirman los hallazgos de las matrices de movilidad, y permite concluir que las probabilidades de movilidad ascendente de los indígenas son inferiores a los de la población no indígena, y en el caso de los indígenas de origen socioeconómico alto tienen menor probabilidad de estar en el quintil más bajo, pero es más probable que alcancen el quintil 4 que el quintil más rico.

Por último, los indígenas cuyo hogar de origen es rural, tiene 13.7 puntos porcentuales de mayor probabilidad de quedarse en el primer quintil, mientras que los no indígenas que provienen de zonas rurales solo tienen 4.9 puntos porcentuales de mayor probabilidad de quedarse en el quintil más pobre. Por otra parte, mientras que los no indígenas que viven o provienen de zonas rurales tienen menores probabilidades de estar en los 2 quintiles más altos, para los indígenas se extiende a los 3 últimos quintiles más dotados.

Tabla VIII. Probabilidades de movilidad de la riqueza de la población indígena

Variables	Efectos marginales									
	Quintil 1		Quintil 2		Quintil 3		Quintil 4		Quintil 5	
<i>Características de los Hijos</i>										
Con empleo	0.002	(0.023)	0.000	(0.004)	-0.001	(0.009)	-0.001	(0.013)	-0.000	(0.005)
Años de Educación	-	(0.003)	-	(0.001)	0.013***	(0.002)	0.019***	(0.002)	0.007***	(0.001)
Casado	0.033***	(0.003)	0.006***	(0.001)	0.016*	(0.009)	0.022*	(0.012)	0.008*	(0.004)
Sexo (Ref: Mujer)	-0.039*	(0.022)	-0.007*	(0.004)	-0.002	(0.009)	-0.003	(0.013)	-0.001	(0.005)
Edad	0.004	(0.022)	0.001	(0.004)	0.003***	(0.000)	0.005***	(0.001)	0.002***	(0.000)
Rural	-	(0.001)	-	(0.000)	-	(0.011)	-	(0.013)	-	(0.005)
Casa Propia	0.008***	(0.001)	0.001***	(0.000)	0.024**	(0.011)	0.031**	(0.013)	0.011**	(0.005)
Control para Regiones	0.058**	(0.025)	0.008**	(0.003)	0.029***	(0.010)	0.038***	(0.012)	0.014***	(0.005)
	-	(0.024)	-	(0.003)	SI		SI		SI	
<i>Características del hogar de origen</i>										
Madre con empleo	-0.042	(0.027)	-0.009	(0.008)	0.016	(0.010)	0.025	(0.017)	0.010	(0.008)
Padre con empleo	-0.017	(0.037)	-0.003	(0.005)	0.007	(0.015)	0.009	(0.020)	0.003	(0.007)
Quintil del hogar de origen (Ref: Quintil 1)										
Quintil 2	-0.030	(0.032)	0.001	(0.002)	0.013	(0.014)	0.012	(0.013)	0.003	(0.004)
Quintil 3	-	(0.034)	-	(0.008)	0.068***	(0.015)	0.086***	(0.019)	0.031***	(0.008)
Quintil 4	0.166***	(0.035)	0.020**	(0.014)	0.085***	(0.014)	0.138***	(0.022)	0.061***	(0.014)
Quintil 5	-	(0.035)	-	(0.021)	0.232***	(0.035)	0.052***	(0.027)	0.186***	(0.024)
Educación del padre (años)	-	(0.035)	-	(0.021)	0.282***	(0.004)	0.092***	(0.002)	0.102***	(0.001)
Educación de la madre (años)	-0.003	(0.004)	-0.000	(0.001)	0.001	(0.002)	0.002	(0.002)	0.001	(0.001)
Número de miembros	-0.006	(0.005)	-0.001	(0.001)	0.002	(0.002)	0.003	(0.003)	0.001	(0.001)
Número de cuartos	-0.001	(0.004)	-0.000	(0.001)	0.000	(0.002)	0.001	(0.002)	0.000	(0.001)
Número de vehículos	-	(0.008)	-	(0.002)	0.019***	(0.004)	0.027***	(0.005)	0.010***	(0.002)
Rural	0.048***	(0.020)	0.009***	(0.004)	0.024***	(0.008)	0.034***	(0.012)	0.013***	(0.005)
	-	(0.020)	-	(0.004)	0.060***	(0.009)	0.081***	(0.014)	0.034***	(0.007)
	0.137***	(0.022)	0.030***	(0.008)	-	(0.009)	-	(0.014)	-	(0.007)
					0.052***		0.081***		0.034***	

Notas: Los valores entre paréntesis son los errores estándar; ***, ** y * indican la significatividad al 1%, 5%, y 10%, respectivamente. Los efectos marginales están calculados con las medias de los regresores. La edad al cuadrado es una función de otra variable (edad), por lo tanto, no tiene efectos marginales. Fuente: Cálculos del autor usando la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI-2011).

V. Conclusión

El principal motivo de esta investigación es estudiar la movilidad social intergeneracional de la población indígena en México y su eventual diferencia comparada con la movilidad del resto de la población.

En primer lugar, los resultados de las matrices de movilidad relativa de la educación muestran que la población indígena tiene mayor inmovilidad y menor movilidad intergeneracional ascendente; solamente 3 de cada 100 indígenas con padres sin instrucción alcanza a completar sus estudios universitarios, mientras que 6 de cada 100 no indígenas con la misma situación logran completar algún grado universitario. En el caso de la riqueza, la movilidad intergeneracional ascendente de la también es menor para los indígenas. Por un lado, la mayor parte los hogares de origen y los hogares actuales se concentran en los dos quintiles más pobres: el 51% de los indígenas con origen en el quintil más pobre (quintil 1) se quedan en esa misma situación y solamente 2.1 % alcanza el quintil más rico. Mientras que los no indígenas en ese mismo origen, solamente 29.8 % se queda en quintil más pobre y 8.5% escala al quintil más alto.

En segundo lugar, los resultados de los modelos Probit Ordenados sugieren en el caso de la educación, las características del hogar de origen son importantes para tener mayores probabilidades de moverse a los grados de educación más elevados, principalmente la educación del padre. A diferencia de la población no indígena, la educación primaria de los padres indígenas no tiene efectos sobre sus probabilidades de movilidad educativa. Se concluye que, a pesar de reunir características que favorecen la posibilidad de tener un mayor nivel de educación, los indígenas tienen menores probabilidades que los no indígenas de alcanzarlo y es más probable que tengan estudios de bachillerato que estudios universitarios. En el caso de la riqueza de los indígenas y debido a que la mayoría de ellos se encuentran en los dos primeros quintiles de riqueza, los efectos positivos sobre la riqueza de los hijos solo son significativos a partir del tercer quintil de riqueza. El nivel de educación de los hijos y el nivel de riqueza de los padres (a partir del tercer quintil) favorecen la movilidad hacia los quintiles de riqueza más elevados, sin embargo, con estas mismas características la probabilidad de estar en el nivel más rico es mayor para la población no indígena.

El resultado de la movilidad educativa de los indígenas es consistente con lo encontrado por Pérez Sandoval (2014) y en conjunto con los resultados de la movilidad de la riqueza, se puede inferir que la situación de desventaja y vulnerabilidad que tienen los indígenas influye en sus posibilidades de movilidad social educativa y de riqueza.

Bibliografía

- Behrman, J., & Velez Grajales, V. (2015). Patrones de movilidad intergeneracional para escolaridad, ocupacion y riqueza en el hogar: el caso de Mexico. En R. Velez Grajales, J. Huerta Wong, & R. Campos Vaz, *¿El motor inmóvil?* (pp. 299-345). Mexico: CEEY.
- Beller, E., & Hout, M. (2006). Intergenerational Social Mobility: The United States in Comparative Perspective. *The Future of Children*, 16, 19-36.
- Beltran, B. (2012). Implicaciones de la movilidad social en las preferencias políticas y el apoyo a las políticas redistributivas en México. En R. M. Campos Vazquez, J. Huerta Wong, & R. Velez Grajales, *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad* (pp. 213-264). Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Buchmann, C., & Hannum, E. (2001). Education and stratification in developing countries: a review of theories and research. *Annual review of sociology*, 27, 77-102.
- Cameron, A. C., & trivedi, P. K. (2010). *Microeconometrics Using Stata*. College Station, Texas: Stata press.
- Centro de Estudios Espinosa Yglesias. (2013). *Informe Movilidad Social en México 2013: Imagina tu futuro*. Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- CONEVAL (2017). *La evolución de la pobreza 2010-2016*. Ciudad de México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. (2015). *Indicadores socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015*. Ciudad de México.
- Erikson, R., & Goldthorpe, J. H. (2008). Trends in Class Mobility - The Post-War European Experience. Dans D. B. Grusky, & D. B. Grusky (Éd.), *Social stratification : class, race, and gender in sociological perspective* (éd. 3rd, pp. 437- 465.). Boulder, CO: Westview Press.
- Flamand, L., & Moreno Jaimes, C. (2014). *Seguro popular y federalismo en México. Un análisis de política pública*. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
- Greene, W. H., & Hensher, D. A. (2010). *Modeling ordered choices: A primer*. Cambridge University Press.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). (2014). Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2016). *Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas*. Ciudad de México.
- International Work Group for Indigenous Affairs IWGIA (2016). *The Indigenous World 2006*. Copenhagen: IWGIA.
- Leyva-Flores, R., Infante-Xibille, C., Gutiérrez, J. P., & Quintino-Pérez, F. (2013). Inequidad persistente en salud y acceso a los servicios para los pueblos indígenas de México, 2006-2012. *Salud Pública de México*, 55, 123-128.
- Long, S. j., & Freese, j. (2006). *Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables Using Stata, Second Edition*. Texas: Stata Press.
- López-Calva, L., & Macías, A. (2010). ¿Estudias o trabajas? Deserción escolar, trabajo temprano y movilidad en México. En J. Serrano, & F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México. Población, desarrollo y crecimiento* (pp. 164-187). Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

- Merllié, D. (2013). La movilidad social. En R. Castel, L. Chauvel, D. Merllié, E. Neveu, & T. Piketty, *Les mutations de la société française : Les grandes questions économiques et sociales II* (pp. 6-32). Paris: La Découverte.
- Olvera, A. (2013). Las últimas cinco décadas del sistema educativo mexicano. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 18, 73-97.
- Patrinos, H. A. (1994). The Costs of Ethnicity: An International Review. En G. Psacharopoulos, & H. A. Patrinos, *Indigenous people and poverty in Latin America: an empirical analysis* (pp. 5-20). Washington, D.C.: World Bank regional and sectoral studies.
- Perez Sandoval, M. U. (2014). *Movilidad social de la población indígena en México*. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia económicas, A.C.
- PNUD. (2010). *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad*. New York: United Nations Programme for Development.
- Snyder, S. (2008). The Roots and Repercussions of Educational Inequality on the Indigenous Populations of Peru. *Stanford Journal of International Relations*, 10, 52-59.
- Torche, F. (2010). Cambio y persistencia de la movilidad intergeneracional en México. En J. Serrano Espinosa, & F. Torche (Éds.), *Movilidad social en México: Población, desarrollo y crecimiento* (pp. 71 -134). Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Torche, F., & Seymour, S. (2010). Influencias intergeracionales de la riqueza en México. En J. S. Espinosa, & F. Torche, *Movilidad social en México: Población, desarrollo y crecimiento* (pp. 229-2074). Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Torres, J. L., Villoro, R., Ramírez, T., Zurita, B., Hernández, P., Lozano, R., & Franco, F. (2003). La salud de la población indígena en México. En F. M. Salud, F. M. Knaul, & G. Nigenda (Edits.), *Caleidoscopio de la salud. De la investigación a las políticas y de las políticas a la acción* (pp. 41-55). Ciudad de México: Fundación Mexicana para la Salud.
- Vélez Grajales, R., Campos Vazquez, R. M., & Fonseca Godinez, C. E. (2012). El concepto de movilidad social: dimensiones, medidas y estudios en México. En R. M. Campos Vazquez, J. E. Huerta Won, & R. (. Vélez Grajales, *Movilidad social en México: constantes de la desigualdad*, (pp. 27-75). Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias (ceey).
- Vélez Grajales, R., & Stabridis, O. (2013). Empleados, auto-empleados y empresarios: análisis comparado sobre movilidad social intergeneracional en México. *mimeo*.
- Vélez Grajales, R., Vélez Grajales, V., & Stabridis, O. (2012). Contruccion de un indice de riqueza intergeneracional a partir de la encuesta ESRU de movilidad social en México. En R. M. Campos Vázquez, J. Huerta Wong, & R. Vélez Grajales, *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad* (pp. 353-374). Ciudad de México : Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

“Lo tuyo, lo mío y lo nuestro”: hacia una lectura feminista de los arreglos económicos en las relaciones de pareja

Lorena Pérez-Roa y Lelya Troncoso Pérez.
Universidad de Chile
loper@uchile.cl
lelyatroncoso@uchile.cl

Resumen

En esta ponencia desarrollaremos un análisis de los arreglos económicos de parejas jóvenes y deudas de Santiago de Chile. Nuestro objetivo es explorar cómo en los discursos de las parejas establecen los límites entre los ingresos propios y los colectivos. Lo anterior, en tanto reconocemos que los modelos de gestión del dinero en el hogar se han transformado producto de la entrada masiva de las mujeres al mundo laboral, la masificación del dinero plástico y los cambios en las estructuras familiares. Desde ahí y a partir de una aproximación feminista hemos buscado profundizar en dos modelos de arreglos financieros: la división de los gastos en función de los ingresos y la colectivización de los ingresos.

Palabras claves: arreglos económicos; relaciones de pareja; teorías feminista; estudios sociales de la moneda

Introducción

Hablar de dinero es incómodo, sobre todo en las relaciones de pareja, ya que supone otorgar un valor económico a diversas prácticas de reproducción cotidianas, que automáticamente situamos fuera de las relaciones de mercado. Más aún, para muchos el amor es un tipo de vínculo que puede incluso corromperse con el dinero. De hecho, el amor romántico tradicional se asume como un vínculo afectivo desinteresado, espontáneo, físico e irracional (Illouz, 2007), que debe protegerse de la racionalidad y frialdad del mundo mercantil. Sin embargo, y como numerosos trabajos han mostrado (Pahl, 2002, 2008; Zelizer 2011, Belleau 2017) las transacciones económicas son inherentes a las relaciones de intimidad, y configuran, por tanto, la propia relación de intimidad. Las transacciones económicas son parte constitutiva de la intimidad, y “los repertorios culturales basados en el mercado configuran e informan las relaciones emocionales e interpersonales, mientras que las relaciones interpersonales se encuentran en el epicentro de las relaciones económicas” (Illouz, 2007, p. 20).

En esta ponencia se propone dar cuenta de las nuevas formas en que la deuda y la gestión de los recursos económicos es atendida por las parejas de jóvenes deudores profesionales en Santiago de Chile desde una perspectiva feminista. Buscamos observar los modelos de gestión del dinero y la deuda en parejas entre 25 y 40 años, donde al menos uno de sus miembros haya accedido a la educación universitaria y este inserto en el mercado laboral. Nuestra idea es abrir la “caja negra” (Elson y Cagatay, 2000) de la economía doméstica y observar un punto ciego dentro del análisis estructural de la economía (Montgomerie, J., & Tepe-Belfrage, D, 2017) y de los análisis feministas de las relaciones de poder: las formas en que la deuda se traduce en arreglos económicos concretos al interior de las parejas. Para ello esta ponencia se articula en tres tiempos. Primero haremos un recorrido conceptual por las principales ideas que sostienen el proyecto a saber: moneda e intimidad y gestión del dinero al interior de las parejas. Luego presentaremos, brevemente, el proyecto de investigación desde el cual se desprende este trabajo. Finalizaremos con el análisis de los arreglos financieros al interior de las parejas presentado los dos modelos de gestión del dinero y las deudas que exploramos en nuestras entrevistas: el modelo de división por gastos o “*prorata*” y el modelo colaborativo de gestión.

Monedas, deudas e intimidad: resituando la vida económica al interior de las parejas

Popularmente las actividades económicas se entienden como elementos que corrompen las relaciones de intimidad. El dinero, las deudas y la “vida económica” representan el “mundo hostil”, frío y racional. Por el contrario, las relaciones de pareja parecen ser el espacio del afecto, la protección y los cuidados. Desde esta lectura la intromisión de la economía en la intimidad erosiona el contenido emotivo y el altruismo desinteresado que se supone debería caracterizar las relaciones de amor. Sin embargo, en la vida cotidiana en general, y en las relaciones de cuidado en particular, economía y afecto se entrecruzan contantemente: las parejas comparten los gastos del hogar y los costos asociados al cuidado de los hijos, los padres le prestan dinero a sus hijos, los hijos son avales de los padres, etc. En esta intersección entre economía e intimidad se encuentran los trabajos de Viviana Zelizer (2009) y Arlie Russel (2008), ambas buscan conectar esferas de la vida que, desde las ciencias sociales, la economía y el derecho se han tratado históricamente como esferas separadas.

Los trabajos de Zelizer (2009, 2011) se inscriben a contracorriente de las teorías económicas clásicas que plantean que el dinero es esencialmente neutro y cuyos usos son racionales incluso en la esfera de la intimidad. Para ella, el dinero no es neutro: según su fuente (ingresos laborales, ayuda del Estado, transferencia de familiares, herencias, etc.) su destinatario y la relación en la que circula (entre conyugues, parientes, familiares, amigos, etc.) el dinero toma significados distintos. De esta manera, existen distintos tipos de dinero y para comprenderlos deben tomarse en cuenta los aspectos “no económicos” del dinero.

En este sentido, los trabajos de Zelizer entienden que en los espacios de intimidad se establecen transacciones económicas donde las personas “cotidianamente diferencian las relaciones sociales y usan distintos sistemas de pago para crear, definir, afirmar, desafiar o anular dichas distinciones (...) en una amplia gama de relaciones íntimas, las personas se las ingenian para integrar las transferencias monetarias en redes más vastas de obligaciones recíprocas sin destruir los lazos sociales involucrados. El dinero cohabita regularmente con la intimidad, e incluso la sustenta” (Zelizer, 2009: 51). Dicho de otra manera, el dinero intercambiado en la esfera doméstica no es neutro ni impersonal. Sus sentidos están socialmente construidos en función del espacio social en el cual circula y en función del género y la pertenencia de clase de aquellos que la manipulen. Un espacio social que está a

su vez configurado por relaciones de poder en las cuales el género y la clase operan como categorías de diferenciación que se materializan en dinámicas y formas de relación generizadas concretas.

En su trabajo sobre la negociación de la intimidad, Zelizer (2009) analiza tres áreas de intimidad: las relaciones de pareja, las relaciones de cuidado y las relaciones de la vida doméstica (Zelizer, 2010). En cada una de estas áreas es posible encontrar “circuitos económicos”, es decir, intersecciones particulares entre la actividad económica y la vida íntima observables en: los modos de relación que vinculan a las personas; las transacciones que en ella se realizan, los medios de intercambio y las fronteras que los individuos designan de cada circuito. Cada lazo social tiene una cualidad especial, y por lo tanto requiere formas y ritos económicos distintos. Esta diferencia no tiene que ver con la cantidad de dinero que circula, sino con el significado que cada relación social le asigna a la transacción económica. Según quien entrega el dinero, a quién, cuándo y con qué motivo, la misma suma de dinero puede considerarse un regalo, un préstamo, un pago o una coima (Zelizer, 2009 pág. 96).

En el espacio de la relación de pareja heterosexual, los trabajos de Zelizer muestran como los dineros se encuentran marcados por el género: el dinero femenino se etiqueta como un dinero “accesorio”, en contraste con el dinero más fundamental aportado por el marido, a pesar de que en la cotidianidad ambos aportes sean equivalentes y necesarios para el mantenimiento del hogar (Zelizer, 1994). Por otro lado, la relación entre los salarios y la distribución de los trabajos domésticos se comporta de manera paradójica: cuando la mujer empieza a trabajar, el hombre colabora con las tareas domésticas. Sin embargo, cuando la mujer gana más que el hombre, en vez de incrementar las labores domésticas las disminuye, puesto que se siente amenazado en su “virilidad” y para demostrar su “hombría”. Las mujeres, por el contrario, cuando ganan más que los hombres asumen más tareas domésticas para demostrar que no han faltado a su rol femenino. Los estudios de masculinidades hegemónicas (Connell y Messerschmidt, 2005) se han interesado a su vez por comprender los modos en los cuales muchos hombres se ajustan y desafían las expectativas tradicionales asociadas a la figura del “hombre proveedor”, especialmente en contextos de crisis económica y a la luz de las transformaciones en las relaciones de pareja, existiendo un mayor rechazo en generaciones jóvenes a relaciones sociales patriarcales y una apertura a construir relaciones más “pragmáticamente igualitarias”.

Desde los estudios feministas y la sociología de las emociones Arlie Russell (2008) analiza la mercantilización de la vida íntima. A diferencia de la aproximación cultural a las transacciones económicas que propone Zelizer, Russell se enfoca en como las fronteras mercantiles se han desdibujado entre los espacios de mercado, capitalista y patriarcales, hacia la esfera de la familia, los roles de género y las emociones. En sus trabajos Russell analiza como en las familias contemporáneas, la mercantilización de la vida íntima es observable en dos situaciones: primero, en la externalización de las tareas de cuidado que antes se realizaban al interior del núcleo familiar tales como el cuidado de niños, de adultos mayores y de enfermos, entre otros. Segundo, en la explosión de literatura de desarrollo personal desde los años 90 que le promete al lector -principalmente mujeres- aprender a gestionar sus emociones para tener éxito en sus relaciones íntimas. De esta manera, el análisis de la autora busca dar cuenta como consumimos cuidado familiar y compramos modelos de gestión de las emociones que nos permitan llevar con éxito nuestras relaciones de intimidad.

En su ensayo sobre “la economía de la gratitud” Ariel Russell Hochschild (2008) presenta los resultados de un estudio sobre parejas heterosexuales casadas sobre lo que ella llama la economía de la gratitud. Esta idea busca dar cuenta de las relaciones de gratitud, es decir, de agradecimiento y de deseo de devolver el favor que se dan al interior de las parejas: ¿Qué se espera del/la cónyuge?, ¿Qué cosas se deben agradecer en una pareja?, ¿es el regalo el/la cónyuge recibe el que quería recibir? Las respuestas a estas preguntas hablan de las relaciones de gratitud al interior de las parejas, las que dependen tanto de los significados personales atribuidos como de los patrones culturales que rigen las relaciones de género.

En su trabajo, la autora reagrupa las parejas entrevistadas según lo que ella denomina “código de honor”, es decir, según las posiciones y valorizaciones que las parejas le atribuyen al “lugar” de las mujeres y de los hombres dentro de una sociedad. La autora reconoce dos códigos morales de atribuciones de honor: los tradicionales y los igualitarios. El código tradicional atribuye el honor de un hombre al éxito en su trabajo mientras el honor de la mujer -independientemente de si ella trabaja fuera del hogar o no- se atribuye al hogar. Según este código, el honor alcanzado por los hombres se refleja en su esposa: cuando un hombre asciende en el trabajo, ella también lo hace mejorando así estatus familiar. Ahora bien, si la mujer asciende laboralmente no puede traspasarle el ascenso a su pareja, muy por el contrario, su ascenso le sustrae el honor en su rol masculino. En el código igualitario, por el

contrario, el honor femenino y masculino se basan equitativamente en los roles que los cónyuges desempeñan en la esfera pública y privada. Las mujeres transfieren su honor a los hombres de la misma manera en que los hombres transfieren el suyo a las mujeres. Ambos códigos se observan de diversas maneras: en las expresiones del amor, en el rol de los regalos, en las negociaciones, valorizaciones y tiempos destinados a las relaciones de cuidado, entre otras escenas de la vida cotidiana. Estos códigos tienen, a su vez, marcos de referencia pragmáticos que derivan de los marcos de referencia históricos. Los marcos de referencia pragmáticos se invocan para referirse a la frecuencia o rareza con que una actitud deseable se inserta en el mercado de ideas y acciones (173). Es decir, se refieren a los puntos de comparación que las parejas utilizan para describir la conducta del otro. La idea de que una mujer pueda sentirse “afortunada” por los roles domésticos que su pareja asuma, tienen que ver tanto con su percepción como con la comparación que establezca con otros hombres. Esas comparaciones o “tasas vigentes” tiene patrones históricos: las mujeres en la actualidad pueden sentirse afortunadas, en comparación con sus madres y abuelas, mientras algunos hombres se sienten en desventaja en comparación con la situación de los hombres de antaño. Desde esta perspectiva, lo importante de entender es que las relaciones de poder, en los espacios de intimidad pasan a través de los vínculos de gratitud: “mediante el establecimiento de los marcos de referencia morales, pragmáticos e históricos que bajan las expectativas de las mujeres y elevan la de los hombres” (175).

Gestión del dinero en pareja: hacia una lectura feminista

A pesar de que no todas las parejas decidan organizar sus finanzas de manera consciente, en todas ellas hay un sistema de manejo del dinero describable (Pahl, 2000). La manera en que las parejas manejan su dinero refleja un amplio rango de variables: el acceso al trabajo remunerado y a los ingresos, los tiempos destinados al trabajo doméstico y de cuidado (Belleau, 2017), los valores y significados del dinero y las normas sociales, particularmente de género, de cada sociedad. Esta diversidad de temas abre un abanico de preguntas para interrogar la gestión del dinero en el hogar: ¿cómo las parejas gestionan el dinero? ¿Cómo las parejas comparten los recursos financieros que tienen a su disposición? ¿Cómo el dinero circula en la esfera íntima? (Belleau y Hechoz, 2008) ¿Cómo las relaciones de género

influyen en estas transacciones? En esta última pregunta, nos detendremos con mayor atención.

Los trabajos de Jean Pahl (2000, 2008) muestran como los patrones de gasto están altamente diferenciados por género. Las mujeres gastan más que los hombres en comida, ropa para mujeres y niños, cuidados médicos y cursos educacionales. Por su parte los hombres gastan más que las mujeres en alcohol, vehículos de motor, reparaciones de la casa, comida fuera del hogar, en juego y vacaciones. En general, los hombres tienden a tener mayores gastos personales que las mujeres, especialmente cuando ellos tienen el control de las finanzas del hogar. Las mujeres son más propensas a privarse de gastos personales particularmente en hogares de ingresos bajos. Desde una lectura feminista podemos abordar el gasto como un acto performativo del orden tradicional del género, de manera que las prácticas de uso del dinero re/producen estereotipos y expectativas sociales asociadas al género.

Siguiendo a Pahl (2008) la división de género en el gasto no sería relevante si todo el dinero del hogar fuera puesto en un pozo común y ambos miembros de la pareja tuviera igual acceso. Sin embargo, cuando las finanzas del hogar son manejadas de modo independiente, ambos asumen un sentido de autonomía y libertad personal, tan amplia como el equivalente a sus ingresos. Las aspiraciones de autonomía se construyen a base de desigualdades de ingreso que, por lo general, perjudican a las mujeres. En este sentido, la gestión del dinero está marcada por diferencias de género. Los trabajos de Pahl ejemplifican estas diferencias: cuando hay poco dinero y es difícil llegar a fin de mes, la mujer maneja normalmente las finanzas. Si solo el hombre está empleado tiende a controlar el dinero, delegando la administración de una parte a su pareja. Es la mujer quien, comúnmente, tiene el control y el poder de las decisiones financieras. Cuando en las parejas hay hijos comunes, es más probable que la mujer gaste en los hijos o en gastos colectivos para el hogar que los hombres (Pahl, 2000). Estas diferencias también las observa en el uso de las tarjetas de crédito y el dinero plástico: a pesar de que las tarjetas de crédito son instrumentos esencialmente individualizados, cuando estas se comparten para fines colectivos, siempre hay uno que controla el gasto del otro, y en general ese control es detentado principalmente por los hombres (Pahl, 2008).

Hélele Belleau, socióloga canadiense, ha desarrollado una serie de trabajos sobre los modelos de gestión del dinero en las parejas. Para ella, los hombres y las mujeres no comparten la misma percepción del dinero, lo que es observable, particularmente, en las dinámicas conyugales. Un elemento interesante que los trabajos de Belleau son las inconsistencias que las parejas muestran cuando hablan sobre la igualdad entre hombre y mujer en las relaciones conyugales y sus arreglos financieros cotidianos. Sus trabajos situados en la provincia de Quebec muestran como los modelos de gestión del dinero dependen, principalmente del sexo de la persona que recibe un salario mayor. Cuando los hombres ganan más es la lógica de la distribución de gastos la que prevalece, mientras que cuando las mujeres reciben un salario más elevado es la lógica de distribución de activos la que se impone. Por otro lado, y a pesar de la fuerza del discurso igualitario presente en la sociedad quebeca, las investigaciones de Belleau muestran como en el plano financiero las parejas conservan, mayoritariamente, relaciones de género tradicionales (Belleau, 2017). De esta manera, observar las transacciones y circuitos económicos al interior de las parejas, permite explorar la persistente reproducción de una normativa patriarcal en los espacios económicos de intimidad.

Metodológicamente, los trabajos de Belleau (2017 a y 2017 b) propone un modelo de cuatro dimensiones para analizar los arreglos económicos al interior de las parejas. Estas dimensiones, que toman forma de pregunta, buscan dar cuenta de las diferencias entre accesos, usos y controles del dinero: ¿Quién tiene el dinero? Busca preguntar por las fuentes de ingreso y las diferencias salariales al interior de la pareja; ¿Quién tiene acceso al dinero? Apunta a reconocer los modos de acceso al dinero en pareja ¿es que uno le debe “pedir” el dinero al otro? O en un defecto ¿ambos tienen igual acceso a los recursos financieros del hogar?; ¿Quién controla el dinero? Propone preguntar por la legitimidad del gasto incurrido al interior de la pareja. Interrogando si la persona que accede a menos recursos económicos tiene igual poder de decisión sobre el destino de los recursos que el otro; ¿Quién realiza el *moneywork* (trabajo financiero)? Esta dimensión busca reconocer quien paga las cuentas, planifica los gastos y se asegurara de que haya fondos suficientes para los gastos familiares. Las múltiples dimensiones que cruzan la gestión del dinero en pareja muestran como los hogares no son “naturalmente” equitativos en la distribución, ni es naturalmente esperable que los dineros individuales sirvan para financiar proyectos colectivos. Abrir la caja negra

de la economía doméstica, implica complejizar la idea de que “naturalmente” en pareja el dinero no cuenta (Belleau, 2017).

“Lo tuyo, lo mío y lo nuestro”: gestión del dinero y deudas en parejas jóvenes, profesionales y deudoras de Santiago de Chile

El presente trabajo se enmarca dentro de los resultados de “la odisea de llegar a fin de mes: estrategias de pago de deudas de familias jóvenes de clases medias en Santiago y Concepción”, financiado por el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica de Chile - FONDECYT de iniciación N°11150161, el cual tiene por objetivo estudiar las estrategias que las familias jóvenes de clases medias utilizan para responder a una experiencia de endeudamiento problemático.

Para este trabajo, se presentan los casos de las parejas de Santiago de Chile. En ese marco, y a partir de una estrategia metodológica cualitativa, se llevaron a cabo 20 entrevistas semi-estructuradas a parejas jóvenes profesionales y deudoras, entre los meses de marzo y septiembre del año 2017, las cuales tuvieron una duración promedio de 60 minutos, y se desarrollaron a partir de una pauta de preguntas abiertas. A través de las entrevistas cualitativas, se buscó reconstruir su trayectoria educacional y laboral, indagar en la gestión del dinero y los pagos por parte de la pareja, así como también su experiencia de endeudamiento. El objetivo, en particular, era que ambos participantes temporalizaran su trayectoria de endeudamiento en función de ciertos hitos que marcaron bifurcaciones (Bidart, 2006). Dichos hitos o bifurcaciones fueron construidas a partir de lo que la literatura en la materia reconoce como el “ciclo del endeudamiento” (Duhaime, 2001, 2003), cuyos momentos son los siguientes: “entrada al endeudamiento” - caracterización de las condición socioeconómica familiar, características del proyecto de estudios, proceso de acceso al crédito, etc. — “punto de quiebre” (Duhaime, 2003) o momento en que la deuda se transforma en un problema (llegada de hijos, cambios laborales, cambio en la estructura familiar, etc.) y “estrategias de salida” que describen como se proyecta la salida de la situación de endeudamiento. Las entrevistas se realizaron a ambos miembros de la pareja de manera simultánea, en tanto permite observar las interacciones conyugales, destacar la construcción común de la pareja, y del discurso que tienen como pareja. Sin embargo, presentan el riesgo de provocar o de presentar conflictos entre los cónyuges (Henchoz, 2007).

Estos riesgos fueron presentados a los participantes en el consentimiento ético que cada uno de los participantes firmó antes de dar inicio a las entrevistas.

Para los fines de este trabajo, nos centraremos en los modelos de gestión del dinero y de las deudas al interior de las parejas. Nos interesa profundizar en la demarcación de los límites que cada pareja establece para definir aquello que es individual y común. La idea es poder analizar las justificaciones que cada pareja moviliza para definir estas demarcaciones. Nos centramos en parejas puesto que nos interesa observar y analizar la dinámica que se establecía entre sus miembros respecto a sus estrategias, priorizaciones y decisiones en torno al dinero y las deudas. En ese sentido, asumimos la existencia de diferencias de género en la gestión del dinero y deudas (Valentine, 1999). La selección de las parejas se hizo a través de tres medios principales: 1) se contactaron individuos a partir de la realización previa de una encuesta online, a quienes se les invitó a dejar su contacto si les interesaba participar en las entrevistas; 2) a través de una invitación lanzada en redes sociales y 3) a través de las propias parejas entrevistadas quienes nos referenciaron a parejas conocidas. Cabe señalar que el requisito era ser pareja, vivir bajo el mismo techo y compartir gastos. Dependiendo de la comodidad de la pareja, algunas de las entrevistas a las parejas se realizaron en espacios públicos (plazas, cafés), mientras que otras fueron realizadas en los propios hogares de las parejas. Previo a cada entrevista, se le informó a cada una de las parejas acerca de los objetivos de la investigación, y luego se les pidió firmaran un consentimiento para su participación. Finalmente, las entrevistas fueron transcritas y analizadas a partir de la técnica de análisis temático (Paillé y Mucchielli, 2008), en la cual la información es tematizada de forma secuencial, de modo de reagrupar y examinar los discursos de los temas abordados en el corpus de la investigación.

Cabe precisar que, en virtud del consentimiento informado que cada uno de los participantes suscribió en el momento de la entrevista, y de los cánones éticos a los cuales esta investigación adhiere, los nombres de los participantes fueron cambiados por nombres de fantasía.

Lo tuyo y lo mío: colectivizar los gastos en función de los ingresos

La mayoría de las parejas entrevistadas declararon manejar separadamente sus cuentas y colectivizar los gastos. Todos estaban insertos en el mercado del trabajo por ende contaban con ingresos y cuentas bancarias propias. Ahora bien, independientemente de las responsabilidades económicas comunes -hijos, bienes inmuebles, autos, etc.- las parejas justificaban los aportes individuales desde distintos lugares. Para la gran mayoría este sistema de repartición de gastos se acuerda en función de las diferencias de ingresos al interior de la pareja. Este modelo gestión conocido como “*prorata*” (Belleau, 2017) supone que las parejas prorratean los aportes en función de los ingresos de cada miembro. Aquellas parejas que declararon usarlo lo percibían como el modelo más justo: “*el gana más que yo así que obviamente pone más plata que yo*” Macarena (40 años administradora pública).

En los discursos de estas parejas, en general la responsabilidad por los gastos fijos o sólidos recaía en quien aportaba más. Es decir, el que aporta más asume los gastos considerados como más “importantes”: “*con mi sueldo pago el arriendo, los gastos comunes, la nana y el colegio de nuestro hijo. Todo lo demás lo ve Leticia*” (David 40 años, ingeniero); “*Yo cubro la mayoría de los gastos básicos de la casa y Rubén me aporta con lo que puede*” (Gloria 30 años, ingeniera); “*como yo gano más usamos esa plata para las cosas importantes, la plata de Antonio la farriamos, la usamos para salir, comer y esas cosas*” (Florencia, técnico en prevención de riesgos); “*con mi sueldo mantenemos la casa, la comida y eso. Luna se hace cargo de los gastos de la niña*” (Roberto 30 años, sociólogo). Estas diferencias o “marcajes” del dinero aportado pueden entenderse como el resultado de las diferencias en las condiciones de trabajo. En el caso de Roberto y Luna, ella es trabajadora autónoma y asume gran parte de las tareas del cuidado de su hija, mientras Roberto trabajaba con contrato y estudiaba por las noches. Florencia, ha trabajado siempre con contrato y no así Antonio, quien, además, en el momento de la entrevista se encontraba desempleado. David al igual que Gloria, perciben casi el doble de ingresos que sus respectivas parejas. Desde estas diferencias salariales las diferencias en los aportes se explican. Pagar los gastos básicos con el dinero que se reciben sagradamente mes a mes parece lógico. Sin embargo, estos arreglos aparentemente justos tienden a minimizar los aportes del otro. Por ejemplo, dentro de los gastos que asume Luna está el pago del seguro de salud de su hija y una tarjeta comercial que según cuenta la usa exclusivamente para los gastos de la niña: ropa, médicos,

materiales, etc. Luna y Roberto viven en el departamento de la mamá de ella quien solo les pide un pequeño aporte para las cuentas. Ese es el dinero que aporta mensualmente Roberto. En términos de cantidad de dinero los aportes de Luna y Roberto son relativamente similares, a pesar de que los “gastos fijos” de la casa son asumidos por Roberto. Sin embargo, las condiciones para asumir estos gastos no son las mismas: mientras Roberto recibía un sueldo fijo, Luna se endeuda para responder con esos gastos: *“yo le digo a veces Roberto: tú también tienes que aportar con la deuda porque ahí hay cosas que son de la niña y del supermercado porque no son solo cosas mías que yo fui a comprar, ni todo del médico, también hay cosas que son de la casa. Yo soy como la que tengo la deuda”*.

En el caso de Roberto y Luna dos elementos se cruzan. Por un lado, la tendencia de las mujeres madres de asumir los costos de los hijos como si fueran propios y distintos a los del hogar y por otro lado, las dificultades que, en un contexto altamente financierizado como el chileno, se presentan para poder materializar en cifras concretas los costos y aportes de cada uno. En general la mayoría de las parejas que ocupaban este sistema sabían que cuenta pagaban cada uno, pero desconocían la fluctuación en los valores de cada cuenta y de donde provenía el dinero que era utilizado para pagarla. De todas las parejas que entrevistamos sólo Alejandra (31 años, Trabajadora Social) y Enrique (35 años, Agrónomo) hacían el ejercicio de calcular mes a mes las cuentas y dividirlos proporcionalmente en función de los ingresos del mes. Enrique había construido una planilla para dividir los gastos y planificar el ahorro. Así lograban aportar de manera proporcional y cuidar el ahorro de ambos.

La masificación de los créditos y la naturalización de su uso hace que la proveniencia de los dineros se vuelva más opaca: algunos acceden a sus tarjetas de crédito o líneas de sobre giro para poder responder a sus compromisos. El sistema de “prorrata” puede más equitativo, solo si se lleva a cabo con el control requerido y se analizan críticamente los gastos que cada conyugue hace, sino se corre el riesgo de promover el empobrecimiento del que aporta menos.

Otras parejas como Catalina (36 años. Trabajadora Social) y Bastián (37 años. Ingeniero); Laura (24 años. Musicóloga) y Danae (30 años. Diseñadora); Pedro (31 años, junior) y Loreto (29 años, egresada de derecho) y Maite (38 años. profesora de educación física) y Sebastián (29 años, profesor de educación física) prefieren dividirse los gastos mitad y mitad

independientemente las diferencias de ingreso. Laura dice sentir que es “*más justo*”, que ella se siente “*más cómoda*” aportando lo mismo que Danae. A pesar de que Danae insiste en que debieran repartirse los gastos en función de los ingresos. Laura lo prefiere así. Los gastos de ambas no superan sus ingresos y a pesar de la inestabilidad laboral de Laura siempre le alcanza para poner “su parte”. En el caso de Catalina y Bastián, la situación es más compleja. Casados hace más de 10 años, con dos hijos. Bastián gana cuatro veces más que ella. Catalina arrastra tres deudas universitarias, con el Estado, con la banca privada y con la Universidad donde estudio. Bastián tiene a su nombre los dos créditos hipotecarios del departamento en el que viven y de otro que tienen en arriendo. Sin embargo y pesar de sus diferencias salariales asumen los gastos en partes iguales: “*actualmente tenemos varios tipos de gastos. Los gastos que generan los niños. Esos los dividimos en dos. Yo pago las luz y el agua y las cosas del supermercado y Bastián paga gas, teléfono e internet y la hipoteca*” Los costos fijos que paga Catalina más sus deudas universitarias le permiten llegar con muchas dificultades a fin de mes, por eso decidió realizar una consultoría fuera de su jornada laboral para poder pagar su crédito universitario y estar más tranquila. Sin embargo, le implico un esfuerzo muy grande: “*fue terrible, porque no dormía. Claro, me pagaban bien, pero yo trabajo 44 horas, llego a la casa, mi hijo más chico usaba pañales, es chico igual.... Llegaba a revisar cuadernos a planchar, a cocinar. No dormí, de verdad*” (Catalina, 36 años). Si bien ambos parecen conocer la situación financiera de cada uno y las dificultades que ambos presentan Catalina mostró su molestia al saber que Bastián tiene dos cuentas de ahorro a libre disposición y que ella, había asumido un nuevo crédito de consumo para pagar su deuda universitaria. En el caso de Maite y Sebastián todo los costos de la casa lo dividen por la mitad a pesar de que Maite trabaja en una farmacia por el sueldo mínimo: “*Ahora estoy bien complicada, porque tuvimos un hijo, tiene un año, entonces con es posnatal, el beneficio que tengo yo de fuero maternal, entre comillas beneficio, porque en el trabajo igual, como yo trabajo por ventas, el horario que me hacen es muy corto. Entonces, en ese horario yo no alcanzo a vender mucho, entonces no llego a la meta, entonces estoy sacando sueldo mínimo. Eso no me alcanza para pagar entre crédito, arriendo, gastos de la casa, además deuda que tuve del parto, cosas que van saliendo todos los días, el pañal, la leche. Siempre termino sobregirada todos los meses*”. A pesar de lo precario de sus condiciones laborales, Maite paga el crédito que pidió para el parto de su hijo y Sebastián paga la cuota del crédito

hipotecario del departamento donde ambos viven -que está a su nombre- y los gastos de un auto que se había comprado recientemente. Mientras Maite se endeuda para responder con el 50% de los gastos del hogar y con los gastos de su hijo, Sebastián paga aquellas deudas que tradicionalmente se consideran “inversiones”. Maite lo prefiere así, dice ser “orgullosa” y que prefiere que “cada uno se haga cargo de lo suyo”. Su plan es “salir de las deudas” y empezar a ahorrar: “si él tiene su casa, yo quiero la mía”, dice.

Los discursos de las parejas entrevistadas dan cuenta como la definición del modelo de gestión del dinero no es sólo una decisión racional. Involucra una negociación de moralidades (Zelizer, 2012). Pagar lo mismo, independiente de las condiciones económicas, es para muchas mujeres una manera de proteger su independencia o equilibrar las relaciones de poder al interior de la pareja. Sin embargo, pagar lo mismo, obliga a las mujeres que ganan menores ingresos a cargar con las responsabilidades económicas invisibilizadas al interior de la pareja, que se suman a los trabajos de cuidado y que las llevan a explotar sus recursos laborales y/o financieros, sin por ello conseguir mayores ganancias económicas. En este sentido, el caso de las mujeres-madres era aún más delicado. Las cargas de cuidado que afectan particularmente a las mujeres están normalizadas e invisibilizadas, por ende, en la división de gastos no se consideran los tiempos destinados. La carga moral de la maternidad es tan fuerte, que para algunas mujeres-madres los hijos son responsabilidad tanto económica como afectiva propia. Sigue fuertemente arraigada la idea que las madres son las únicas y principales responsables por el cuidado de los hijos, lo cual se vincula tanto a sentimientos de culpa por parte de las madres que sienten que no cumplen con su “deber”, como discursos de responsabilización de las madres de todo tipo de problemas que pueden tener sus hijos (Tronto, 2013). Tronto identifica requerimientos de maternidad intensivos que operan como imperativos de invertir muchos recursos para asegurar que sus hijos tengan ventajas competitivas sobre otros hijos. Estos requerimientos de cuidados forman parte de dinámicas de mantención de desigualdades sociales, ya que salen aventajados hijos de familias más acomodadas y se recurre a cadenas de cuidado en las cuales estos servicios cuentan con condiciones salariales precarias y cuidar bien a los “míos” implica muchas veces explotar a las madres de “otros”. Como lo dice Zelizer (2010) las transacciones íntimas tienen el poder de sostener las desigualdades que se presentan a gran escala.

“Lo nuestro”: cuando lo tuyo es mío y lo mío es tuyo.

“La plata es de los dos, los gastos son de los dos” afirma Jaime (26 años, diseñador). Él y su pareja Sandra (26 años, diseñadora) tienen un sistema de administración del dinero donde ambos tienen acceso a las cuentas bancarias personales. Tienen un excel donde anotan sus gastos y deudas. Jaime se encarga de pagarlas, desde su cuenta bancaria, y cuando le falta plata saca directamente de la cuenta de Sandra. La cuenta de ella la destinan al “ahorro”. Para ellos lo importante es que ambos tengan plata en su cuenta y que ninguno quede en peor situación que el otro: “Nosotros no tenemos un control estricto de los gastos de cada uno. No es que gastaste esto, entonces yo voy a tener que gastar en esto... no. O yo me voy a sacar plata pa’ mí. Porque yo también voy y me compro juegos, o voy y me compro ropa” dice Jaime. Sin embargo, durante el desarrollo de la entrevista, Sandra le reitera a Jaime que ella gasta más que él. Frente a esta insistencia Jaime responde *¡Sí, pero tú hacís más plata, así que es justo que gastes más!* Una de las dificultades del sistema de puesta en común de ingresos es que la fuente del dinero nunca se olvida (Belleau, 2017). Por lo general, cuando los ingresos se comparten quien aporta menos ingresos se siente con menos derecho a usar los ingresos comunes. Sandra aporta más ingresos que Jaime, lo que la legitima -a ojos de Jaime- a incurrir con más gastos. Es Jaime quien enfatiza en el carácter de lo “justo”. Sandra por su parte, no se cuestiona sobre su “derecho” a gastar más, solo enfatiza en que ella siente que gasta más que él.

Carolina (30 años, profesora) y Diego (33 años, antropólogo) viven juntos hace dos años en un pequeño departamento de una comuna pericéntrica de Santiago. Carolina tiene una deuda de estudios con el Estado y con la Universidad donde en la actualidad hace un Magister. A pesar de que sólo por concepto de créditos paga un 30% de su sueldo, paga sagradamente su deuda todos los meses. Diego, por su parte no ha podido titularse por la deuda que acarrea en su Universidad. El no acceder al título, le ha dificultado acceder a trabajos formales en su profesión. Hoy arrastra una deuda de más de \$11.000 millones de pesos [22.000 USD\$], que no paga desde hace más de tres años. Su inestabilidad laboral lo arrastró hacia un estado depresivo. El 2016, luego de muchos intentos fallidos por encontrar un trabajo estable, Carolina le pidió a Diego que se desentendiera de la búsqueda de trabajo y que tratara su depresión. Durante ese año Carolina asumió gran parte de los gastos de la casa y se encarga de la administración: “mi sueldo es el que sustenta la casa porque el de él va y viene (...) lo que gana él lo ocupamos para comprar cosas específicas, pero no contamos con esa plata

de manera regular”. Tienen un cuaderno para sus gastos, Carolina es quien se encarga de anotar los gastos, las fechas de pago y las deudas que quedan pendiente. Ella es la “ordenada” dice Diego. Ellos dicen vivir siempre con lo justo, las deudas universitarias que acarrear, les impiden asumir otros proyectos económicos: “*sufrimos con las deudas, porque los ingresos son de los dos tenemos una vida compartida, y no nos alcanza*” dice Carolina. En el momento de la entrevista Diego había comenzado a buscar un trabajo: “*tenemos un proyecto juntos, no puedo dejar que Carolina me arrastre todo el tiempo*”. En efecto, Carolina llevaba arrastrando económicamente a Diego durante el último año. Durante toda la entrevista, Carolina enfatiza en las dificultades de contexto que ha tenido Diego para encontrar trabajo: la deuda de estudios, no poder titularse, las dificultades del mercado laboral de los antropólogos, etc. Sin embargo, e independientemente de dichas dificultades, el peso económico de su situación ha sido sobrellevado principalmente por ella. La “vida compartida” que ellos llevan le ha exigido postergar proyectos individuales y de pareja y racionalizar sus comportamientos de consumo y gastos. La tarea de “llevar las cuentas” también es sobrellevada por Carolina. Por ende, no sólo es quien aporta la mayoría de los ingresos, sino que también se encarga del trabajo financiero (*moneywork*), a pesar de tener menos tiempo, puesto que Carolina trabaja jornada completa y estudia en las noches. Para ella, las cosas deberían mejorar cuando Diego pueda aportar un sueldo regularmente todos los meses. Sin embargo, durante el tiempo que llevan de relación, los aportes económicos de Carolina son los que le han permitido llevar “una vida compartida”.

Los trabajos de Belleau (2017) muestran que los regímenes colectivos, son implementados con más frecuencia en el caso de las parejas donde las mujeres ganan más que los hombres. En general, las mujeres colectivizan sus ingresos, mientras los hombres resguardan parte de sus ingresos para los gastos personales. En el caso de Sandra y Jaime y de Carolina y Diego, ambos declararon hacer un uso compartido de los ingresos y de tener accesos libremente a ellos. En el caso de Sandra y Jaime, ella recibe mayores ingresos que él y en el de Carolina y Diego, es el sueldo de ella el que paga todos los gastos fijos del hogar. Para ambas parejas, la vida en común implica una vida financiera común.

Ana (29 año, diseñadora) y Ricardo (30 años, ingeniero químico) viven juntos hace 5 meses en un departamento arrendado por ambos. Ricardo gana aproximadamente 3 veces más que Ana. Ana trabaja jornada completa en una empresa y en las noches estudia otra carrera. Ella

dice “querer superarse” y tener mayores posibilidades laborales. El dinero que gana se lo pasa a Ricardo, él es quien se encarga de pagar las deudas. Ana no tiene cuenta bancaria, porque está en DICOM -sistema nacional de registro de deudores- por una deuda de estudios atrasada. Por eso es Ricardo quien se encarga de las cuentas, explican. La tarjeta de crédito, que está a nombre de Ricardo, la ocupan ambos para gastos comunes como individuales: “*por ejemplo si yo me quiero comprar unas zapatillas, que puede ser en cuotas. Se paga con la tarjeta entre los dos*” señala Ana. De ese fondo común pagan los servicios, ahorran para las vacaciones y pagan los estudios de Ana. Ricardo explica que ayudarla con el pago de sus estudios es una inversión para los dos: “*si, tenía que estudiar. Uno ve a la pareja triste, sabes que tienes que tomar alguna medida para cambiar. Te vas a quedar estancada en eso mismo y si tení que ponerte a estudiar, eso es un bien común para los dos y un capital común para los dos, una inversión común para los dos. Todo para los dos*”. Ana y Ricardo desarrollan múltiples estrategias para que el dinero común les alcance: cocinan todos los días para llevar almuerzo al trabajo, cuando el dinero no les alcanza para comprar algo intentan no comprarlo para no endeudarse, compran las cosas de segunda mano, compran en la feria y llevan el dinero justo para no gastar más, etc. Para ellos, la apuesta por colectivizar los ingresos les ha implicado un esfuerzo por racionalizar todos sus comportamientos de consumo. Su proyecto es que luego que Ana se titule de su nueva carrera y consiga otro empleo puedan comprarse un departamento. Si bien para ellos, colectivizar los ingresos y los gastos es parte de la “vida en común”, esta decisión la tomaron producto de los impedimentos que Ana tiene para ingresar al sistema financiero. Ana decidió no pagar una deuda universitaria, por ende, entro al registro económico de deudores. Ana y Ricardo hablan de su vida conjunta, utilizando una serie de palabras provenientes del “mundo económico”: la decisión de Ana de volver a estudiar es entendida como una “inversión” futura, al igual que el proyecto de comprarse un departamento, el dinero común es un “capital” y el ahorro es para “invertir”. Para ellos, la idea de que “todo es para los dos” implica una apuesta por un mejor futuro económico. Es decir, su intimidad se configura a partir de relaciones económicas. En palabras de Belleau (2017) la “ficción del amor” de Ana y Ricardo sostienen sus decisiones económicas en proyectos a largo plazo que les permiten pensarse como una unidad económica en el futuro. Por ende, lo “nuestro” se proyecta desde su potencial crecimiento económico.

Colectivizar los ingresos no es una ecuación económica simple, implica ajustar expectativas económicas. ¿Qué pasa si Diego no encuentra trabajo? O ¿Qué pasa si Diego decide gestionar sus ingresos de otra manera? ¿Cuáles son las expectativas de Carolina al apoyar económicamente a Diego? o pensando en el caso de Ana y Ricardo ¿Qué pasa si la relación se acaba mientras Ana está estudiando? ¿Qué pasa con la “inversión” que Ricardo hizo con sus estudios? En un mundo con distintos futuros posibles, colectivizar los ingresos en función de una expectativa futura siempre instala la pregunta sobre qué pasa si esa expectativa no se cumple.

Algunas consideraciones finales

En la división de los gastos, observamos como era percibido por la mayoría de las parejas como el modelo “más justo”. Sin embargo, esta división suele invisibilizar los aportes de quien aporta menos. Además, en un contexto altamente financiarizado, cada vez es más difícil objetivizar los gastos, por ende, dividir los gastos “equitativamente” se vuelve una tarea difícil de cumplir. Por otro lado, observamos como en algunos casos las mujeres cargaban con los gastos de los hijos como si fueran propios. En definitiva, dimos cuenta como dividir los gastos implica una negociación de significados, que va mucho más allá del valor moneda del objeto pagado. Por su parte, la colectivización de los ingresos también presenta dificultades. Por un lado, “nunca se olvida de donde viene el dinero” en tanto quien aporta menos no suele sentirse con la misma libertad para tomar decisiones de gasto que quien aporta más. En segundo lugar, observamos como la colectivización de los gastos está asociada a una proyección futura del aporte que deberá realizar quien aporta menos. Es decir, aportar más se entiende como algo transitorio, una “inversión”, que debería equilibrarse en algún momento.

Para terminar, merece la pena preguntarnos sobre los aportes de las teorías feministas para entender el peso de las finanzas en las relaciones de intimidad y como estas pueden ser entendidas como formas de opresión que profundizan las desigualdades ya existentes. La división mundo económico/vida íntima se materializa en el seno de dinámicas heteropatriarcales de vivir y entender la división mundo productivo/reproductivo. Se trata de una división ficticia que reproduce, de manera tensionada y siempre inacabada, un orden

tradicional del género, dificultando la implementación de lógicas de dinámicas y prácticas más equitativas en el manejo de los recursos.

Una perspectiva feminista para el análisis de los arreglos económicos en los espacios de pareja debe ayudar a conectar la vida financiera con otros ámbitos de los cuales ha permanecido analíticamente aislados. Debe valorar, visibilizar y promover una “ética del cuidado” que reconozca tanto las labores que han sido denominadas productivas como las reproductivas (Tronto, 2013). Esta división generizada de las labores sigue normalizando y naturalizando desigualdades de género, invisibilizando la sobre explotación del género femenino y limitando aquello que se reconoce como parte de la esfera económica en las interacciones humanas. Esto implica también poner en práctica un enfoque interseccional que no promueva una mirada reduccionista del género, ya que las diferencias de clase, etnicidad y “raza” son inseparables y no deben ser invisibilizadas desde una mirada feminista. En ello descansa su potencial crítico y transformador.

Bibliografía

- Belleau, H (2017) *L'amour et l'argent*. Les éditions du remue-ménage. Québec, Canada
- Belleau, Hélène & Henchoz, Caroline. (2008). Introduction. L'usage de l'argent dans le couple, pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale. Publisher: L'Harmattan, coll. Questions sociologiques, Editors: Hélène Belleau, Caroline Henchoz, pp.7-29.
- Connell, R. W y Messerschmidt, J. (2005). Hegemonic Masculinity: rethinking the concept, *Gender Society*, 19(6), pp 820-859.
- Duhaime, G., (2001), *Le cycle du surendettement*, *Recherches Sociographiques*, 42(3), p. 455-488, doi:10.7202/057472ar.
- Duhaime, G., (2003), *La vie à crédit : consommation et crise*, Presses de l'Université Laval, Québec.
- Elson D and Cagatay N (2000) The social content of macroeconomic policies. *World Development* 28(7):1347–1364. Available (accessed 14 August 2016) at: <https://csde.washington.edu/~scurran/files/readings/May19/Elson.%20Social%20Content%20of%20Macroeconomic%20Policies.pdf>
- Esteban, Mari Luz (2011). Crítica del pensamiento amoroso. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Hill Collins, Patricia (1998). It's all in the family. *Intersections of gender, Race and Nation*, en *Revista Hypatia*, 13 (3), pp. 62-82.
- Hill Collins, Patricia (1998). It's all in the family. *Intersections of gender, Race and Nation*, en *Revista Hypatia*, 13 (3), pp. 62-82.
- Illouz, Eva (2007). *Intimididades congeladas. Las emociones en al capitalismo*. Buenos Aires y Madrid: Katz Editores.
- Montgomerie, J., & Tepe-Belfrage, D. (2016). Caring for debts: how the household economy exposes the limits of financialisation. *Critical Sociology*, 43(4-5), 653-668.
- Pahl, J. (2000). Couples and their money: Patterns of accounting and accountability in the domestic economy. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(4), 502-517.
- Pahl, J. (2008). Family finances, individualisation, spending patterns and access to credit. *The Journal of Socio-Economics*, 37(2), 577-591.
- Paillé, P., e Mucchielli, A. (2008), *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (3e éd.), Armand Colin, Paris.

- Russell Hochschild, Arlie (2008) *La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo*, Katz editores, madrid, 2008. 386 páginas.
- Silva-Segovia, J., & Lay-Lisboa, S. (2017). The Power of Money in Gender Relations From a Chilean Mining Culture. *Affilia*, 32(3), 344-358.
- Tronto, Joan (2013). *Caring Democracy. Markets, Equality and Justice*, New York: New York University Press.
- Valentine, G., (1999), *Doing Household Research: Interviewing Couples Together and Apart*, *Area*, 31(1), 67-74, retrieved on may 12th 2018 from <http://www.jstor.org/stable/20003952>
- Yuval-Davis, Nira (2004). *Género y Nación*. Lima: Centro de la mujer peruana Flora Tristán.
- Zelizer, V (2009) *La negociación de la intimidad*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina
- Zelizer, V (2010) Conferencia catedra Nobert Lechner,. Universidad Diego Portales, 24 de Noviembre, Santiago, Chile. <http://www.catedranobertlechner.udp.cl/wp-content/uploads/2016/04/Viviana-Zelizer.pdf>
- Zelizer, V (2011) *El significado social del dinero*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Estratificación y desigualdad étnica en México: el caso de Yucatán.

Braulio Güémez ¹.

Centro de Estudios Sociológicos, Colegio de México.

bguemez@colmex.mx

Resumen

Se analiza la relación entre la adscripción étnica-lingüística (“indígena”, “no-indígena” y “mestizo”), y la desigualdad de oportunidades socioeconómicas en el estado de Yucatán. La aproximación metodológica que se adopta va en dos direcciones complementarias. La primera evalúa en qué medida la adscripción étnica y lingüística está asociada a la desigualdad de oportunidades en tres dominios clave de la estratificación: ocupación, educación y riqueza. La segunda examina cómo la posición socioeconómica y el origen lingüístico influye sobre las probabilidades de adscribirse como “mestizo” o “indígena”. Para ello se utilizaron datos de la EIC (2015) y del MMSI (2016) y se ajustaron modelos de regresión logística multinomial y binomial. Los resultados indican, por un lado, que en Yucatán existen desigualdades significativas entre quienes no se consideran indígenas ni hablan maya, y entre los que son mayahablantes o se consideran indígenas, y por otro, que prevalece un sentido de pertenencia más fuerte hacia lo “mestizo” que hacia lo “indígena”, independientemente del origen lingüístico de la persona. Se señala que estas tendencias están vinculadas a procesos históricos particulares de la región como la Guerra de Castas, la política indigenista y las prácticas discriminatorias hacia los mayahablantes.

Palabras clave: DESIGUALDAD ÉTNICO-RACIAL, MESTIZAJE, YUCATÁN, MÉXICO, RACISMO ESTRUCTURAL

¹ Estudiante de la licenciatura en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es colaborador del proyecto de investigación “Midiendo la desigualdad racial y socioeconómica de México”.

Introducción

En lo que a las relaciones interétnicas se refiere, el proyecto fundacional de las instituciones en México durante la formación del Estado-nación en el siglo XX fue el del mestizaje. Encabezado por las élites criollas y mestizas, dicho proyecto consistió en promover el mestizaje o la mezcla étnica como solución al ‘problema indígena’ — la idea de que una mayoría significativa de la población era indígena en condiciones de pobreza y en un estado de “retraso cultural”. El objetivo de esta política buscaba “asimilar” al indígena a la cultura nacional por medio de una campaña de educación ‘civilizadora’ que le permitiera salir del atraso e incorporarse a las recién creadas instituciones sociales, políticas y económicas del país. Esta política, acompañada de otros mecanismos y relaciones de poder, ha tenido efectos importantes en la configuración actual de la desigualdad étnica y socioeconómica.

Teniendo en cuenta ese contexto histórico, en el presente trabajo se busca analizar la relación entre la adscripción étnica y lingüística, y la desigualdad de oportunidades socioeconómicas en el estado de Yucatán. Como Oaxaca y Chiapas, esta entidad federativa se distingue por tener una cantidad significativa de población que habla o entiende alguna lengua indígena (49%) y que vive en condiciones de precariedad socioeconómica.

Asimismo, existen tres situaciones que le dan al proyecto del mestizaje desarrollado en este estado una particular importancia:

- 1) La primera es que, a diferencia de las otras dos, donde hay importante diversidad étnica y lingüística, en Yucatán, el 98% de las personas que hablan alguna lengua indígena, habla maya yucateco.
- 2) La segunda es que según la evidencia etnográfica no hay una clara conciencia grupal de lo maya o lo indígena, sino que, por el contrario, existe fuerte estigma hacia lo indígena y una reivindicación inusual de lo mestizo.
- 3) La tercera es que existe una fuerte identidad regional en comparación con las otras dos.

Para evaluar la relación entre desigualdad y pertenencia étnica/lingüística, se propone una estrategia metodológica de doble dirección que evalúe, por un lado, el efecto de los rasgos adscriptivos sobre la desigualdad de oportunidades y por otro, la influencia de la posición socioeconómica en la adscripción étnica de las personas. A partir de esta aproximación y con datos de la Encuesta Intercensal (EIC) 2015 para Yucatán y el Módulo de Movilidad Social

Intergeneracional (MMSI) se ajustaron modelos de regresión logística multinomial y binomial.

El trabajo se divide en cinco apartados. En el primero se esboza en términos generales el contexto histórico del proyecto del mestizaje en México a principios del siglo XX, así como los rasgos distintivos y procesos históricos clave de las relaciones interétnicas en Yucatán. En el segundo, se discute la propuesta teórica para el estudio de la desigualdad étnico-racial y en el tercero la estrategia metodológica adoptada. En la penúltima sección se presentan los resultados de los análisis y en la última la discusión de los mismos, así como las conclusiones.

El proyecto del mestizaje en México

Para poder entender las dinámicas del racismo y la etnicidad en México es clave retomar algunas líneas generales del proceso histórico de construcción nacional posrevolucionario durante el siglo XX, cuando se empezó a reformular (ya que había estado presente desde la Conquista) “el asunto indígena” desde las recién fundadas instituciones del Estado.

Después de más de 300 años de colonia y un periodo de guerra de independencia, de lucha contra invasiones extranjeras durante el siglo XIX y de un periodo de revolución, para los criollos y mestizos que tomaron las riendas para la formación del Estado-nacional mexicano era indispensable, y tomando como referencia a Europa, contar con un proyecto de unificación nacional en términos políticos, sociales y económicos. El México posrevolucionario se constituía en términos poblacionales, por una parte, de una mayoría significativa de indígenas en condiciones de pobreza y analfabetismo, y por otra, de una élite criolla, blanca o mestiza que tenía el control político y económico del país. Para estas élites, por lo tanto, la vía para integrar a los indígenas en el proyecto nacional era el mestizaje. La estrategia para llevar a cabo esta empresa se le conoció desde el aparato estatal como *indigenismo* y, como dice Knight (1990), fue una política cuyos implementadores eran esencialmente no-indígenas y que por tanto implicó la imposición de ideas, categorías y decisiones institucionales desde fuera. En ese sentido, los indígenas, que no estaban constituidos como parte proyecto identitario identificable en México, eran objetos y no autores del indigenismo (Knight, 1990, p.77). Desde su fundación, por lo tanto, el Estado Mexicano no buscaba la inclusión de los indígenas contemporáneos (pues de los prehispánicos se hablaba como de héroes nacionales) sino su transformación para poder ser

integrados y asimilados a las emergentes instituciones económicas (como fuerza de trabajos) y sociales nacionales (como ciudadanos mexicanos).

La mestizofilia tenía como sustento la idea de que la mala calidad étnica de los indígenas se podía mejorar a partir de un proceso de blanqueamiento que diluyera sus rasgos negativos, y donde lo blanco europeo actuaría como elemento regenerador (Pérez Vejo, 2017, p. 86). El blanqueamiento tendría lugar principalmente a partir de la asimilación del indio a la cultura occidental mediante las instituciones educativas del Estado. Por lo tanto, se trataba de una “mezcla” donde los componentes de la ecuación tenían distinto peso simbólico en el resultado final: lo occidental, lo europeo era visto como el ingrediente superior que contrarrestaría lo atrasado del otro componente indígena inferior, aunque necesario. Así, durante casi toda la primera mitad del siglo XX, con este sustento ideológico se emprendieron campañas de castellanización dirigidas hacia las personas indígenas que vivían en comunidades principalmente rurales.

En el discurso de las instituciones y a nivel formal-constitucional, esta política de civilización del “bárbaro” fue cambiando a finales del siglo pasado, como resultado tanto de los movimientos indígenas, y en particular el levantamiento del EZLN en México, así como del discurso de los derechos humanos y el reconocimiento de la pluralidad étnica de los Estados nación. Tuvo lugar un proceso de tránsito de un indigenismo integracionista a uno de “participación” donde se reconocía a los indígenas como personas portadoras de derechos. Sin embargo, como señala Barabas (2000), en la práctica dichas políticas responden más a los intereses políticos regionales y locales que a verdaderamente atender los proyectos de las comunidades indígenas (p. 17-18). Adicionalmente, en el discurso de varios segmentos poblacionales en México aún predomina la idea de que la asimilación de los indígenas por medio de la educación es clave para eliminar las desigualdades sociales e integrarlos a “nuestra sociedad” (Castellanos Guerrero, 1994, p. 117).

En síntesis, el proyecto de unificación nacional a través del mestizaje cultural fue una política pensada y dirigida desde las instituciones oficiales dirigidas por la élite criolla y mestiza ganadora de la contienda revolucionaria que tenía como principal objetivo generar *la idea* de un cuerpo nacional “homogéneo” en términos sociales y políticos. Por ello, la diversidad cultural indígena y la pobreza asociada a ella, era vista como un obstáculo para cumplir con

este objetivo, por lo que se optó como política la asimilación cultural de los indígenas a través de la castellanización y la educación. El mestizaje, por lo tanto, no era una ideología que expresara la comunión horizontal de dos etnias o razas, sino el mejoramiento de lo indígena por medio de lo europeo o lo occidental; era fundamentalmente una promesa de movilidad social ascendente por medio de la asimilación. Aunque con las nuevas demandas interculturales y la revitalización de lo indígena de finales del siglo pasado la tendencia se ha contrarrestado, la ideología del mestizaje ha permeado de forma importante en el país, de ahí que tanto a nivel de las instituciones como en la práctica haya al mismo tiempo tres ideas íntimamente ligadas: la de lo mestizo como el denominador común de lo mexicano, pero con una preferencia por lo blanco o lo europeo y una asociación de lo indígena como atrasado pobre.

Relaciones interétnicas en Yucatán

La distribución actual en México de la población adscrita como indígena o hablante de lenguas indígenas (HLI) está concentrada en tres entidades federativas que se encuentran en la parte sur y sureste del territorio: Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Esta última merece especial atención por tres motivos: La primera es que, a diferencia de las otras dos, donde hay importante diversidad etnolingüística, en Yucatán, el 98% de las personas que hablan alguna lengua indígena, habla maya yucateco. La segunda es que según la evidencia etnográfica no hay una clara conciencia grupal de lo maya o lo indígena, sino que, por el contrario, existe fuerte estigma hacia lo indígena y una reivindicación inusual de lo mestizo y la tercera es que por existe una fuerte identidad regional en comparación con las otras dos.

Según los datos de la Encuesta Intercensal (EIC) levantada por el INEGI en 2015 para Yucatán, del total de la población mayor a 24 años, casi la mitad (46 %) declaró hablar o entender maya y adscribirse como indígena. La población restante se divide entre los que se identifican como indígena sin hablar o entender maya (27 %) y quienes no hablan ni entienden maya ni se autoidentifican como indígena (27 %). La composición cuasi binaria de la población en términos étnicos, entre mayas y no mayas, indígenas y no indígenas, ha estado atravesada históricamente por relaciones de poder basadas en la subordinación y en la explotación económica y social, que se refleja en las condiciones de desigualdad y segregación actual. Varios estudiosos de la región han constatado (Bracamonte y Sosa &

Quijano Lizama, 2003; Cf. Ramírez Carillo, 2015) que, tal como en otras regiones del sureste con fuerte presencia indígena, Yucatán es uno de los estados donde los índices de pobreza y marginación son elevados en los municipios donde habita la población mayahablante. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2010, de los 106 municipios del Estado, tan sólo en 4 de ellos se reporta un Índice de Marginación “bajo”, y solo en uno, Mérida, la capital (que concentra la mayor cantidad de no-indígenas en el estado), se reportan índices “muy bajos”.

Sin embargo, a pesar de que existen profundas diferencias socioeconómicas entre quienes se identifican como indígenas y quienes no en los datos de las encuestas, así como entre quienes son mayahablantes y quienes no, la evidencia antropológica e histórica (Castañeda, 2004; Gabbert, 2001, 2004; Llanes Salazar, 2017; Loewe, 2011; Restall, 2004) apunta a que si bien los grupos no-mayas, incluidas las instituciones estatales, identifican a las personas que comparten ciertas características étnico-raciales² indígenas como “mayas”, “gente de pueblo” o “indios”, muy pocos miembros de este grupo se autoadscriben con esas categorías. Existe, pues, en categorías de Wimmer (2008, p. 1000) un consenso *asimétrico* sobre los límites de las fronteras de los grupos étnicos. Las razones sociológicas que podrían explicar este fenómeno de falta de cohesión indígena o de identidad maya tendrían que rastrearse en la trayectoria histórica particular de esta región. En ese sentido, aquí se plantean como procesos históricos claves la llamada Guerra de Castas del siglo XIX y el indigenismo posrevolucionario del siglo XX.

La Guerra de Castas (1847-1876) fue un conflicto que ha sido usualmente representado en la historiografía como el confrontamiento de grupos rebeldes indígenas o mayas, contra el gobierno hispanohablante de Yucatán (Quezada, 2010, Capítulo 9). Esta visión dicotómica del conflicto ha sido cuestionada pues se ha documentado (Gabbert, 2004) que los grupos en conflicto no tenían una composición o una consciencia étnica homogénea. Por un lado, debido a que los mayahablantes representaban la mayoría de la población, el gobierno en turno, con el objetivo de engrosar las filas de su ejército, exentó a los indígenas de algunos impuestos importantes además de nombrar con el título de *hidalgos* a los que unieran como soldados. Por otro, el bando rebelde necesitaba aliarse con personas no mayahablantes

²Lo ‘étnico-racial’ se refiere tanto a elementos de identificación racializados (tono de piel, estatura, rasgos físicos) y por lo tanto visibles, como a elementos de pertenencia étnica (el acento, la lengua, el apellido).

(negros y chinos de Belice, por ejemplo) para poder integrarlos a su facción política, por lo que no apelaron a un sentido de identidad étnico, sino más bien a uno religioso (Gabbert, 2004, p. 105). Sin embargo, a pesar de que la composición étnica de los bandos no era homogénea, los líderes que representaban la facción gubernamental, utilizaban despectivamente términos como “indios”, “salvajes”, “bárbaros” para referirse a sus enemigos (Gabbert, 2001, p. 471).

De ese evento histórico, se pueden destacar dos consecuencias importantes. La primera es que durante los años posteriores se impuso a nivel institucional la visión de la facción victoriosa, la gubernamental, que vinculaba la categoría de indígena o de indio al atraso, a lo ‘bárbaro’, o a lo no civilizado. La segunda es que la fragmentación de la población mayahablante en bandos distintos excluyó la posibilidad de generar una identidad étnica o lingüística alrededor de lo “indígena” en contraposición a lo “no-indígena”.

Las consecuencias de estos procesos históricos van a verse reforzados con la política indigenista posrevolucionaria en Yucatán que buscaba “educar, elevar moralmente y ‘mexicanizar’ a los indígenas Yucatecos” (Fallaw, 1997, p. 554). Como la política indigenista a nivel nacional durante la primera mitad del siglo XX en Yucatán la estrategia para integrar a los indígenas fueron las campañas de castellanización en las comunidades rurales (Barabas, 2000). Esta “regeneración” por medio de la educación, promovida tanto por los dueños de las haciendas como por las instituciones estatales, tenía como objetivo la “regeneración” de los indios a partir de una campaña que enseñara tanto el uso del “buen” lenguaje, costumbres, vestido y moralidad (Eiss, 2004, p. 120).

En la actualidad, la generación de una identidad indígena o maya también se ve limitada tanto por la discriminación que aún prevalece hacia las personas indígenas y por otro, como por el fuerte regionalismo que prevalece en el Estado. Los estudios más contemporáneos sobre la región confirman la presencia de prejuicios y estereotipos racistas asociados a la población mayahablante entre distintos segmentos de la población, como los jóvenes (Echeverría Echeverría, 2016), los miembros de las clases más altas de la ciudad o las élites (Iturriaga, 2011), así como de las personas de la capital –Mérida- en general (Barabas, 1979; López Santillán, 2011). Este ambiente de discriminación se traduce en prácticas orientadas hacia el auto-despojo de aquello que pueda ser estigmatizado: cambio de apellidos mayas a

castellano, pérdida del idioma maya y cambio de vestimenta. Al mismo tiempo que existen prácticas de discriminación hacia lo maya, en el estado prevalece un fuerte sentido de pertenencia regional que simboliza el mestizaje particular ocurrido en la región (combinación de español y maya)³ a partir de distintos elementos, como gustos culinarios en común, un tipo de vestimenta, prácticas culturales y forma de hablar el castellano (Loewe, 2011). En un análisis cuantitativo del fenómeno, Magaña Figueroa (2013, p. 530) encontró que el 76% de los entrevistados en este estado prefieren ser llamados yucatecos en lugar de mexicanos (n=400), siendo los individuos menos educados, de bajos ingresos y de herencia étnica “maya” los más propensos a dar esa respuesta.

Así, el elemento negativo del estigma, al complementarse con la ideología del mestizaje en una versión particularista puede influir en la dinámica de categorización social caracterizada por el énfasis en la adscripción de lo “Yucateco” o lo “mestizo” sobre lo “maya” o lo “indígena”.

1. Perspectivas teóricas sobre el racismo

En la literatura sobre el racismo, desarrollada especialmente en Estados Unidos y Europa, predominan al menos tres tendencias teóricas-metodológicas desarrolladas en los últimos años. La primera, cercana a la idea más generalizada en la cultura popular sobre el racismo, que podríamos denominar como “culturalista”, pone el énfasis en la importancia de las creencias u opiniones materializadas en prejuicios, estereotipos y discursos racistas, así como las instituciones encargadas de difundirlas (el Estado, la familia, la escuela, medios de comunicación) en la reproducción de un orden racial (Taguieff, 2001, p. 4; Wade, 1997, p. 11; Wieviorka, 2006, 2009, p. 24). La segunda, entiende al racismo como una estructura política, social y económica que organiza desigualmente a los individuos en el espacio social sobre la base de criterios étnicos o raciales (Bonilla-Silva, 1997; Feagin & Elias, 2013; Golash-Boza, 2016; Solís, 2017). Por último, la postura constructivista o relacional entiende la formación de fronteras étnicas y/o raciales como parte de un proceso que resulta de las

³ Sobre este punto Magaña Figueroa (2013) señala que: “Donde el discurso oficial retrata al mestizaje como una combinación de elementos aztecas y españoles, muchos yucatecos entienden estos conceptos como una mezcla de maya y español. De similar manera, muchos yucatecos podrían rechazar la elevación del mexicano como la etnia nacional azteca. La tradición maya, no la azteca, es la fundación de la sociedad yucateca” p.530

disputas y negociaciones propias de momentos históricos específicos (Brubaker, 2004; Cornell & Hartmann, 1998; Wacquant, 1997; Wimmer, 2008).

El racismo como fenómeno en México ha sido usualmente estudiado desde la óptica de la primera tendencia, atendiendo a sus manifestaciones ideológicas o discursivas y poniendo énfasis en conceptos como la identidad/otredad, prejuicios o estereotipos. Desde esta perspectiva el racismo se entiende como una “construcción social basada en una noción específica de la diferenciación cultural” (Gall, 2004, p. 230); es decir, como una serie de nociones subjetivas que se ubican principalmente en el plano de las ideas o de la cultura, y que consisten en asociar ciertos rasgos físicos a atributos morales, cognitivos o intelectuales (Castellanos Guerrero, 1994, p. 104)

A pesar de que estudiar el fenómeno desde esa perspectiva nos ofrece un punto de partida importante, enfoques como el de Feagin y Elias (2013) y Bonilla-Silva (1997), desarrollados principalmente en Estados Unidos (y recientemente en México Cf. Solís, 2017; Solís, Lorenzo Holm, & Güémez Graniel, 2019), insisten en que si bien el racismo tiene un componente ideológico fundamental, es tan sólo una de las múltiples dimensiones que conforman una realidad sistémica y fundacional o histórica de la estructura de un sistema social. Con la noción de sistemas sociales racializados se quiere dar cuenta de sociedades en donde “lo económico, lo político, lo social y lo ideológicos son niveles estructurados parcialmente la colocación de actores en categorías raciales o razas” (Bonilla-Silva, 1997, p.469). Las jerarquías entre las distintas categorías raciales se traducen en desigualdades materiales como las expresadas en el mercado de trabajo, las oportunidades laborales y las inequidades económicas.

Bajo esta perspectiva, el análisis de la distribución de los individuos según sus características étnico-raciales en la inserción ocupacional, educativa y el logro económico de determinada sociedad sería aproximarse a alguna de las dimensiones que pueden adquirir los sistemas racializados. En este contexto, la tradición conceptual y metodológica de la perspectiva (Breen & Jonsson, 2005) de la desigualdad de oportunidades puede ser de gran utilidad. Este enfoque tiene como uno de sus principales objetivos entender cómo ciertas características adscriptivas, como la raza o etnia, se asocian con una serie de resultados como los educativos, económicos u ocupacionales. Analizar la asociación entre estas variables adscriptivas y el

nivel de logro socioeconómico de los individuos, sería una forma de aproximarnos y dar validez empírica a una de las dimensiones de un sistema social racializado.

Al mismo tiempo, un análisis de este partiría necesariamente del supuesto de que la etnicidad es un criterio fijo de adscripción a lo largo de la historia de vida de las personas. Supuesto que es cuestionable desde el punto de vista de que las categorías étnicas o raciales son construidas socialmente y por tanto *variables* según los distintos momentos históricos o biográficos que se tome en cuenta en el análisis⁴. Desde un punto de vista constructivista el análisis de la raza, la nación y la etnicidad, tendría que tomar en cuenta el proceso y las estrategias mediante el cual se forman y actualizan las categorías que utilizan los actores para referirse a otros grupos (negros, blancos, indígenas, no-indígenas, etc.) y para sí mismos, así como las consecuencias en términos de acceso y distribución a recursos sociales valorados (Wimmer, 2008).

Por lo tanto, tal como en la discusión sobre la perspectiva del análisis de clases (Bottero, 2005, p. 85), para el estudio de la intersección de la etnicidad o la raza con la desigualdad no sólo es importante entender en qué medida las características adscriptivas influyen en el acceso a oportunidades desde una perspectiva multidimensional (eticidad como variable independiente), sino también indagar cómo y en qué medida la posición estructural de las personas influye en el modo en que los individuos definen su adscripción étnica (eticidad como variable dependiente). Una aproximación de este tipo prevendría adoptar una perspectiva esencialista, estática o reificadora de lo étnico/racial (Loveman, 1999; Wacquant, 1997), al mismo tiempo que tomaría en cuenta la desigualdad de oportunidades a nivel poblacional, que a su vez, previene contra una visión puramente circunstancial o situacionista de la etnicidad.

Una perspectiva en esta dirección atendería la complejidad característica del proyecto del mestizaje en México que consiste en la mutua interdependencia entre categorías étnicas/raciales y posiciones estructurales.

3. Estrategia Metodológica

⁴ Como señalan Saperstein y Penner (2012) para el caso de Estados Unidos: “mientras la posición consensuada entre los sociólogos contemporáneos es que la raza es socialmente construida, en la práctica, la fluidez racial n se toma en cuenta en los análisis empíricos de la desigualdad...” (p.677)

En este trabajo se buscan evaluar de modo general dos elementos para el caso de Yucatán: 1) la asociación entre la adscripción indígena y el dominio de algún idioma indígena y la desigualdad de oportunidades en la dimensión ocupacional, educativa y económica y 2) el grado de fluidez étnica intergeneracional entre lo indígena y lo mestizo.

Para llevar a cabo lo primero se estimaron los riesgos relativos que tienen las personas de insertarse en tres dominios ocupacionales clave (educación, ocupación y riqueza) de acuerdo a su adscripción étnica y lingüística, a partir del ajuste de tres modelos de regresión logística multinomiales.

Para lo segundo, a partir de modelos de regresión logística binomial, se estimaron las probabilidades de que las personas se autoadscriban como mestizo o como indígena según su dominio de lenguas indígenas y el de sus padres, así como su nivel de escolaridad. Para fines comparativos, se calcularon también los porcentajes para nivel nacional y para Chiapas, donde también existe una cantidad significativa de población indígena. Por la naturaleza de los datos (tamaño de muestra y tipo de preguntas), este punto sólo puede ser evaluado de forma indirecta y por lo tanto los resultados son sólo aproximados.

3.1. Datos y mediciones

Para el primer punto se utilizó la submuestra de personas mayores de 24 años ($n=330$, 124) de la Encuesta Intercensal (EIC) levantada en Yucatán en el año de 2015 por el INEGI. La variable de adscripción étnica y lingüística cuenta con las siguientes opciones: 1) No adscritos indígenas, no entienden maya, 2) Adscritos indígenas, no entienden maya, 3) No adscritos indígenas que entienden o hablan maya y 4) Adscritos indígenas que entienden o hablan maya. La variable de escolaridad se construyó con base en la información sobre el nivel y el grado de escolaridad y tiene las siguientes opciones: 1) Primaria completa o menos, 2) Secundaria, 3) Bachillerato o equivalente y 4) Educación superior completa o más. Para construir la variable de ocupación se ajustó la clasificación de ocupaciones más general, separada por divisiones, propuesta por INEGI (2011) que las ordena según niveles de calificación formal y experiencia (p. 13). La variable ordinal contiene las siguientes categorías: 1) Funcionarios, profesionistas y técnicos, 2) Trabajadores auxiliares, comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas, 3) Trabajadores en servicios personales, vigilancia y operadores de maquinaria industrial, 4) Trabajadores artesanales

(plomeros, albañiles, electricistas, etc.) y agrícolas. Para estimar la posición económica del entrevistado se construyó un índice por medio de un análisis de correspondencias múltiples policórico (Cf. Kolenikov & Angeles, 2004) utilizando los datos de acceso a bienes y servicios de la vivienda. Finalmente, se utilizó el tamaño de localidad, el sexo y la edad como variables de control en los modelos.

Para el segundo punto, se utilizaron los datos del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 (MMSI), levantado por INEGI para personas entre 25 y 64 años de edad. La muestra nacional cuenta con poco más de 25,000 casos, y la submuestra para Yucatán y Chiapas, con 835 y 837 casos respectivamente. A diferencia de la EIC, el MMSI tiene la ventaja de contar con una pregunta sobre la adscripción racial de los entrevistados que tiene las siguientes opciones: 1) Negro o mulato, 2) indígena, 3) Mestiza, 4) blanca, 5) Otra. Asimismo, tiene una pregunta sobre el dominio de lenguas indígenas de los padres del entrevistado. Con base en esta información se construyeron variables dicotómicas que indican si el entrevistado se declaró o no mestizo o indígena. La variable independiente sobre el dominio de lenguas indígenas se construyó con las siguientes opciones: 1) No hablante, con padres no hablantes, 2) No hablante, con alguno de los padres hablantes y 3) Hablante de lenguas indígenas. Como variables de control se utilizaron la edad, el sexo, la escolaridad, el nivel de riqueza y un Índice de Orígenes Sociales (Cf. Solís et al., 2019) que sintetiza la posición socioeconómica de la persona que era el Principal Proveedor del Hogar a los 14 años de la persona entrevistada.

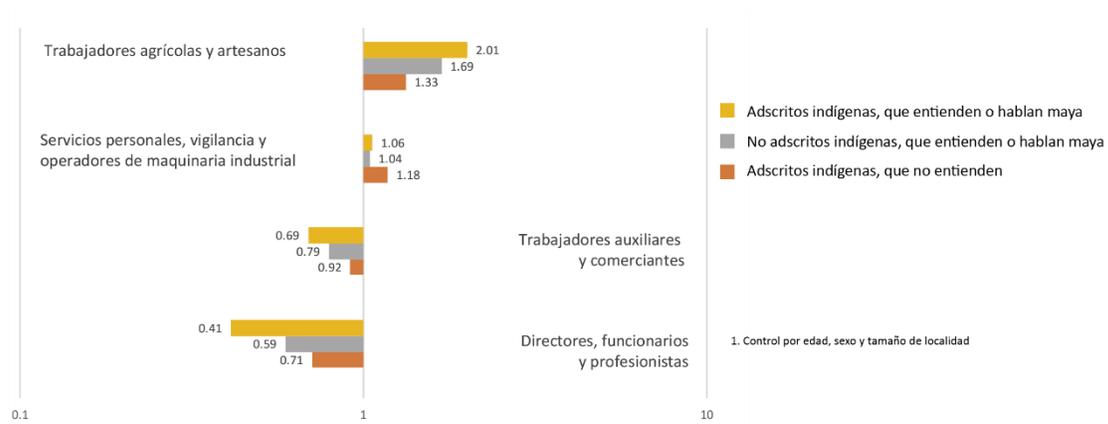
4. Resultados

En la Gráfica 1 se resumen los hallazgos vinculados a los efectos que tienen la adscripción étnico-lingüística en el acceso a distintos niveles ocupacionales, educativos y económicos. Para facilitar la exposición se presentan en forma de riesgos relativos, obtenidos a partir de las probabilidades estimadas de los modelos logísticos. Se asumió como grupo de referencia a la categoría de no adscritos como indígenas, ni hablantes de lenguas indígenas -la categoría *residual* de la EIC- ya que se espera que sea la que tiene mayores privilegios socioeconómicos. El hecho de que sea la categoría residual de algún modo refleja el proyecto del mestizaje que asume lo “normal”, “estándar” o lo “mexicano” como lo no-indígena o lo no-castellanizado y a lo diferente como su contrario.

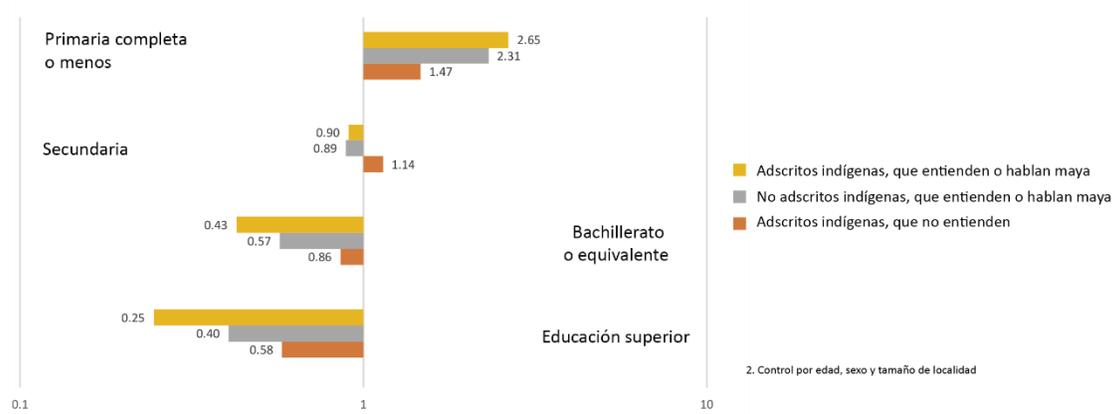
De modo general, se pueden señalar tres tendencias. La primera es que para todas las dimensiones de la estratificación y en el extremo superior de las jerarquías, encontramos que sistemáticamente los adscritos como no indígenas se encuentran en una situación de considerable ventaja frente a sus contrapartes no indígenas o hablantes indígenas. Por ejemplo, independientemente del sexo, el tamaño de la localidad y el estrato ocupacional, los adscritos como indígenas y hablantes tienen 61% menores probabilidades de acceder al quintil más aventajado de riqueza en comparación con sus contrapartes no indígenas, no hablantes. En el acceso a la educación superior las brechas entre estas categorías son de mayor magnitud, ya que los indígenas hablantes tienen 75% menores probabilidades de contar con este nivel educativo en comparación con la categoría de referencia.

Gráfica 1. Riesgos relativos de acceso a puestos ocupacionales, niveles educativos y quintiles de riqueza (Referencia = No adscritos indígenas, que no entienden maya)*

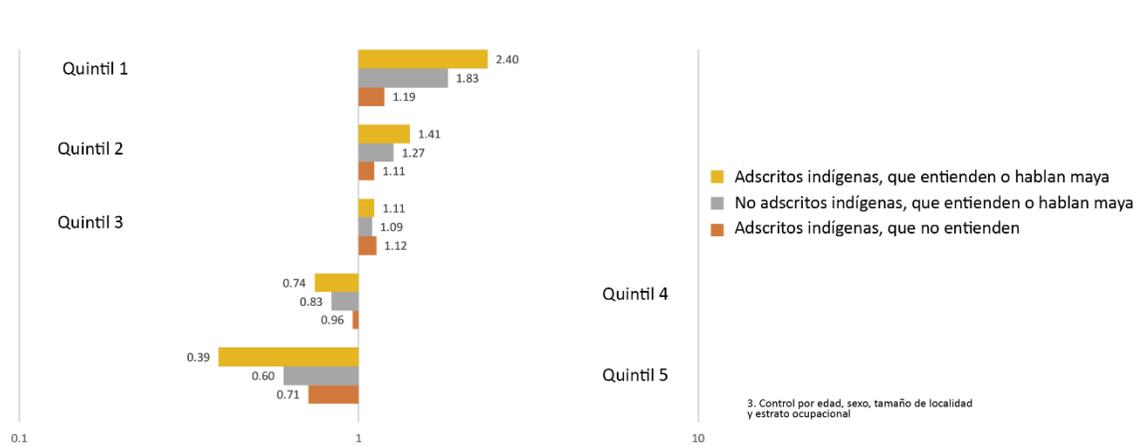
a) Acceso a ocupaciones¹



b) Acceso a niveles educativos²



c) Acceso a quintiles de riqueza³



Fuente: Estimaciones propias a partir de modelos logísticos multinomiales. Datos de la EIC para Yucatán (2015), INEGI.

La segunda es que no sólo las personas adscritas como indígenas o hablantes de lenguas indígenas se encuentran en una situación de desventaja frente a los no indígenas en las posiciones de alta jerarquía, sino que se encuentran sobrerrepresentados también en las que son de baja jerarquía. Los indígenas hablantes por ejemplo tienen 140% mayores probabilidades de estar en el quintil más pobre y 101% mayores probabilidades de estar en ocupaciones de baja jerarquía en comparación con la categoría de referencia.

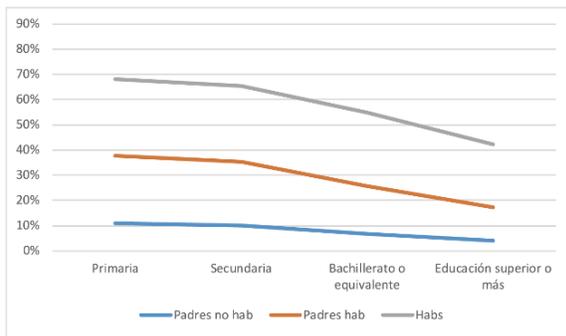
La tercera es que la maximización de la desigualdad ocurre cuando se sobrepone la lengua y la etnicidad, y se reduce progresivamente cuando se va removiendo el primer y el segundo factor sucesivamente. Así, en comparación con la categoría de referencia, las probabilidades de acceso a la educación superior son 75% menores para los adscritos y hablantes; sin embargo, estas se reducen a 60% para los que son mayahablantes, pero *no* se adscriben como indígenas, y a 42% para quienes se adscriben como indígenas, pero *no* son mayahablantes (Panel b). Esta tendencia se repite para las dimensiones ocupacionales y económicas.

Como se mencionó más arriba, los datos de la EIC únicamente permiten hacer un análisis transversal por lo que no es posible evaluar directamente en qué medida se transmite intergeneracionalmente la etnicidad o la pertenencia indígena, así como los factores estructurales asociados a esta transmisión. Por el contrario, la información sobre la adscripción lingüística de los padres disponible en el MMSI puede ser utilizada de forma *indirecta* (ya que se pregunta sobre la competencia lingüística y no sobre la etnicidad de los padres) para entender este fenómeno longitudinal. En la Gráfica 2 y 3 se presentan los resultados de una aproximación que comparan el estado de Yucatán con el de Chiapas y con los datos a nivel nacional.

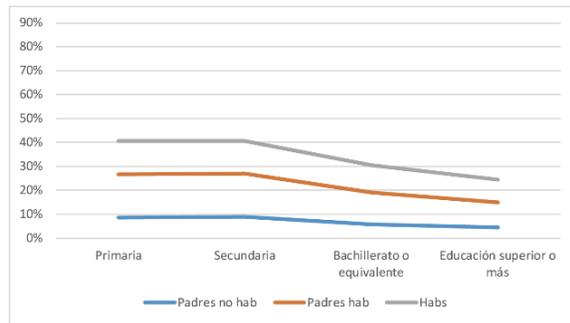
Con respecto a la información de las gráficas, se pueden señalar cuatro tendencias. La primera es que las probabilidades de adscripción indígena aumentan según el grado de acercamiento que el entrevistado tenga con las lenguas indígenas. Así, para las tres comparaciones regionales se puede observar que quienes tienen mayores probabilidades de adscribirse como indígenas en orden descendente son los hablantes de lenguas indígenas, quienes tienen padres hablantes (pero no hablan) y los que no tuvieron padres hablantes y tampoco hablan. Sin embargo, entre las regiones hay importantes diferencias en la magnitud de las probabilidades:

Gráfica 2. Probabilidades calculadas de adscribirse como indígena, según nivel educativo y adscripción lingüística a nivel nacional, en Yucatán y en Chiapas¹

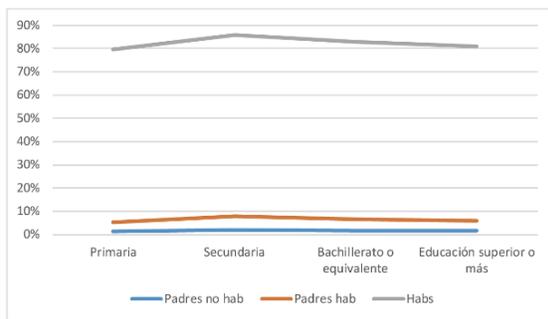
a) Nacional



b) Yucatán



c) Chiapas



Simbología

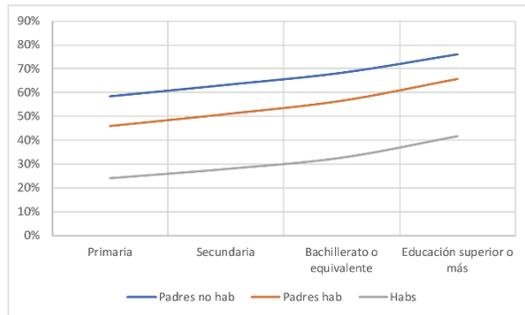
- No hablantes, con padres no hablantes de lenguas indígenas
- No hablantes, con algún padre hablante de lenguas indígenas
- Hablantes de lenguas indígenas

1. En el modelo se controla por nivel de riqueza, orígenes socioeconómicos, edad y sexo

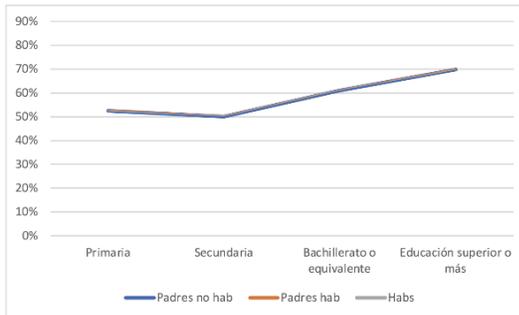
Fuente: Estimaciones propias a partir de modelos logísticos binomiales. Datos del MMSI (2015), INEGI.

Gráfica 3. Probabilidades calculadas de adscribirse como mestizo, según nivel educativo y adscripción lingüística a nivel nacional, en Yucatán y en Chiapas¹

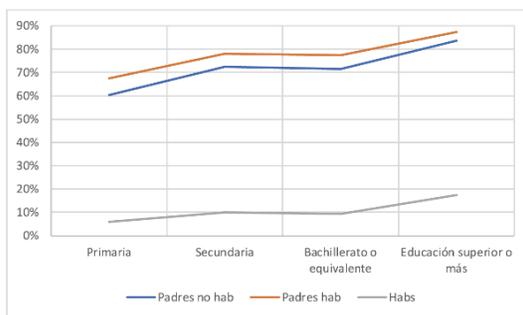
a) Nacional



b) Yucatán



c) Chiapas



Simbología

- No hablantes, con padres no hablantes de lenguas indígenas
- No hablantes, con algún padre hablante de lenguas indígenas
- Hablantes de lenguas indígenas

1. En el modelo se controla por nivel de riqueza, orígenes socioeconómicos, edad y sexo

Fuente: Estimaciones propias a partir de modelos logísticos binomiales. Datos del MMSI (2015), INEGI.

mientras que en Chiapas las probabilidades son del 80% para las personas hablantes, en el caso de Yucatán estas descienden a 40%.

La segunda tendencia importante es que la adscripción indígena, salvo para el caso de Chiapas donde es estable, tiende a disminuir en la medida en que aumenta el nivel de escolaridad para el caso de los hablantes de lenguas indígenas y los no hablantes con padres hablantes. Así, a nivel nacional la probabilidad de los hablantes de lenguas indígenas de adscribirse como indígena disminuye 30% cuando se compara las diferencias entre quienes tienen primaria y educación superior. Por el contrario, en las tres regiones las diferencias en las probabilidades de adscribirse como indígenas son mínimas entre quienes son no hablantes.

La tercera tendencia importante con respecto a las probabilidades de adscribirse como mestizo es que a diferencia de lo que ocurre con la adscripción indígena, esta aumenta en la medida en que incrementa el nivel educativo de las personas⁵. Por ejemplo, en Chiapas la probabilidad de que una persona hablante de lenguas indígenas se adscriba como mestiza incrementa casi 15% cuando se contrasta el nivel educativo más bajo y más alto.

Por último, también de forma inversa a lo que ocurre para la adscripción indígena, las probabilidades de adscribirse como mestizo en Chiapas y a nivel nacional son mayores para las personas más alejadas o distantes de las lenguas indígenas. En este sentido Chiapas y Yucatán son dos casos contrastantes, pues mientras que en el primer estado las diferencias entre los hablantes y los no hablantes de adscribirse mestizo son contrastantes, en el segundo no hay diferencias significativas entre quienes dominan de forma distinta la lengua maya.

5. Discusión y conclusiones

En el presente trabajo se explora la relación de mutua interdependencia que existe entre tres dimensiones estructurales de la desigualdad y el continuo étnico-lingüístico indígena-no indígena (para los datos de la EIC) e indígena-mestizo (para los datos del MMSI). Se ha insistido que, tanto por motivos teóricos-metodológicos concernientes a la naturaleza de la etnicidad y la raza en general, como por las características históricas particulares de la

⁵ Estos resultados coinciden con los encontrados por Casas Martínez, Saldívar, Flores, & Sue, 2014.

conformación del Estado mexicano y de Yucatán en particular, es importante considerar, por un lado, la incidencia de los rasgos étnico-lingüísticos en la desigualdad de oportunidades y por otro, la influencia de la posición estructural en la adscripción étnica de las personas.

Con respecto al primer foco analítico, se puede concluir que en las tres dimensiones de la estratificación aquí examinadas persiste la desigualdad de oportunidades para las personas mayahablantes y adscritas como indígenas, lo que puede ser resultado tanto de la discriminación actual que enfrentan las personas adscritas con estas categorías, como por la acumulación histórica de desventajas que han tenido las personas indígenas a lo largo de la historia (Solís et al., 2019). El hecho de que, desde su fundación, los ámbitos institucionales se hayan establecido en castellano y se haya excluido a las personas pertenecientes a las comunidades indígenas se traduce en una discriminación institucional que perpetúa las lógicas del sistema social racializado en Yucatán. Así, en circunstancias profundamente hostiles contra las personas indígenas, el dejar de hablar maya o de adscribirse como parte de una colectividad indígena está vinculado al acceso mejores oportunidades socioeconómicas.

Con respecto al segundo foco analítico cabe concluir que el proyecto fundacional del mestizaje sigue teniendo efectos importantes. En primer lugar, resalta que a nivel nacional (el 8.34% de la población) y en Chiapas aquellos hijos de padres hablantes tengan mayores probabilidades de adscribirse como mestizos que los hablantes. Es decir, una vez que se pierde la herencia de la lengua indígena, es muy probable que la adscripción también cambie. Ello podría expresar cómo la ausencia de transmisión intergeneracional de la lengua indígena se puede traducir en un progresivo “amestizamiento” del individuo, sobre todo en la medida en que adquiere mayor escolaridad. En segundo lugar, los mayores niveles de escolaridad asociados a probabilidades más altas de adscribirse como mestizo, incluso para personas hablantes de lenguas indígenas (aunque en menor medida), puede estar relacionado a dos factores relacionados entre sí. El primero es que, el conocimiento sobre el concepto de mestizaje está vinculado al aprendizaje de la historia de México en el sistema educativo mexicano. El segundo es que en el entorno social e institucional del sistema educativo se reproduce la idea de indígena como atrasado o como algo inferior, haciendo incompatible la posibilidad mantener una identidad indígena al mismo tiempo que tener altos niveles de escolaridad.

Para el caso de Yucatán se sigue esta tendencia general pero su particularidad radica en que no hay diferencias significativas según la adscripción lingüística del entrevistado o de sus padres. El hecho de que exista una mayoría de “mestizos” en una entidad federativa como Yucatán, donde hay una cantidad importante de personas mayahablantes, puede ser resultado tanto del estigma que carga el vocablo “indígena” para la población en esta región, como la influencia de la cultura regional y de las políticas de amestizamiento durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, dado que en los datos de la EIC el porcentaje de personas adscritas como indígenas es elevado, es posible que la segunda alternativa tenga mayor incidencia. Así, cuando las personas en Yucatán se enfrentan a una pregunta donde están tanto la opción “mestiza” como “indígena”, optarán de forma mayoritaria por la primera, lo que reafirma la falta de una identidad “indígena” o “maya” documentada en la literatura antropológica. En este sentido, Chiapas representa un buen contraste pues representa su opuesto: no sólo hay diferencias importantes en la influencia que tiene el origen lingüístico en la adscripción mestiza, sino que ésta última es mucho más estable en la medida en que se avanza por los niveles educativos, lo que podría ser indicativo de un estado donde la identidad indígena está fuertemente consolidada como resultado de otros procesos históricos (como el levantamiento del EZLN a finales del siglo XX).

Otro de los datos (no expuesto en el texto, obtenido del MMSI 2015) que sostienen el argumento de que en Chiapas existe una mayor identidad indígena y por lo tanto una mayor estabilidad étnica intergeneracional, a diferencia de Yucatán donde esta identidad es débil y por lo tanto susceptible de ser confundida o sustituida por la cultura regional o mestiza, es que mientras que en el primero el número de personas que no habla lenguas indígenas pero que es hijo de hablantes es sólo 8%, en Yucatán este porcentaje representa el 31.95% (el más elevado de todos los estados de la república).

Bibliografía

- Barabas, A. M. (1979). Colonialismo y racismo en Yucatán: una aproximación histórica y contemporánea. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, (97), 105–139.
- Barabas, A. M. (2000). La construcción del indio como bárbaro: de la etnografía al indigenismo. *Alteridades*, 10(19), 9–20.
- Bonilla-Silva, E. (1997). Rethinking Racism: Toward a Structural Interpretation. *American Sociological Review*, 62(3), 465. <https://doi.org/10.2307/2657316>
- Bottero, W. (2005). *Stratification. Social division and inequality*. Nueva York: Routledge.

- Bracamonte y Sosa, P., & Quijano Lizama, J. (2003). Marginalidad indígena: una perspectiva histórica de Yucatán. *Desacatos*, (13), 83–98.
- Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. *Annual Review of Sociology*, 31(1), 223–243. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122232>
- Brubaker, R. (2004). *Ethnicity without Groups*. Cambridge: Harvard University Press.
- Casas Martínez, R., Saldívar, E., Flores, R., & Sue, C. (2014). The Different Faces of Mestizaje: Ethnicity and Race in Mexico. En *Pigmentocracies. Ethnicity, Race, and Color in Latin America*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Castañeda, Q. E. (2004). “We Are Not Indigenous!” An Introduction to the Maya Identity of Yucatan. *The Journal of Latin American Anthropology*, 9(1), 36–63. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/10/6/063009>
- Castellanos Guerrero, A. (1994). Asimilación y diferenciación de los indios. *Estudios Sociológicos*, 12(34), 101–119.
- Cornell, S., & Hartmann, D. (1998). A Constructionist Approach. En *Ethnicity and Race. Making Identities in a Changing World*. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Echeverría Echeverría, R. (2016). Estereotipos y discriminación hacia personas indígenas mayas: su expresión en las narraciones de jóvenes de Mérida Yucatán. *Aposta Revista de Ciencias Sociales*, 71, 95–127.
- Eiss, P. K. (2004). Deconstructing Indians, Reconstructing Patria: Indigenous Education in Yucatan from the Porfiriato to the Mexican Revolution. *Journal of Latin American Anthropology*, 9(1), 119–150. <https://doi.org/10.1525/jlca.2004.9.1.119>
- Fallow, B. W. (1997). Cárdenas and the Caste War that Wasn't: State Power and Indigenismo in Post-Revolutionary Yucatán. *The Americas*, 53(04), 551–577. <https://doi.org/10.2307/1008148>
- Feagin, J., & Elias, S. (2013). Rethinking racial formation theory: A systemic racism critique. *Ethnic and Racial Studies*, 36(6), 931–960. <https://doi.org/10.1080/01419870.2012.669839>
- Gabbert, W. (2001). Social Categories, Ethnicity and the State in Yucatán, Mexico. *Journal of Latin American Studies*, 33(3), 155–173.
- Gabbert, W. (2004). Of Friends and Foes: The Caste War and Ethnicity in Yucatan. *Journal of Latin American Anthropology*, 9(1), 90–118. <https://doi.org/10.1525/jlca.2004.9.1.90>
- Gall, O. (2004). Identidad , exclusión y racismo : reflexiones teóricas y sobre México. *Revista Mexicana de Sociología*, 66(2), 221–259. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/3541457>
- Golash-Boza, T. (2016). A Critical and Comprehensive Sociological Theory of Race and Racism. *Sociology of Race and Ethnicity*, 2(2), 129–141. <https://doi.org/10.1177/2332649216632242>
- INEGI. (2011). *Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011 SINCO*. Ciudad de México: INEGI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Iturriaga, E. (2011). *Las élites de la ciudad blanca. Racismo, prácticas y discriminación étnica en Mérida, Yucatán*. Tesis de doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Knight, A. (1990). Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico, 1910-1940. En R. Graham (Ed.), *The Idea of Race in Latin America, 1870–1940*. University of Texas Press.
- Kolenikov, S., & Angeles, G. (2004). The Use of Discrete Data in PCA: Theory, Simulations, and Applications to Socioeconomic Indices. *Chapel Hill: Carolina Population Center, University of North Carolina.*, 1–59. <https://doi.org/10.1093/annonc/mds205>
- Llanes Salazar, R. (2017). Etnicidad maya en Yucatán: balances y nuevas rutas de investigación. *Estudios de Cultura Maya*, 51, 257. <https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.2018.51.858>
- Loewe, R. (2011). Making Maya into Mestizo. Identity, Difference, and Cultura Regional Mestiza. En *Maya or Mestizo? Nationalism, Modernity, and its Discontents*. Toronto: University of Toronto Press.

- López Santillán, R. (2011). *Etnicidad y clase media. Los profesionistas mayas residentes en Mérida*. Mérida: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Cultura de Yucatán.
- Loveman, M. (1999). Is “Race” Essential? *American Sociological Review*, 64(6), 891–898.
- Magaña Figueroa, J. E. (2013). El país como ningún otro: un análisis empírico del regionalismo yucateco. *Estudios Sociológicos*, XXXI(92).
- Pérez Vejo, T. (2017). Raza y construcción nacional. México, 1810-1910. En T. Pérez Vejo & P. Yankelevich (Eds.), *Raza y política en Hispanoamérica*. Ciudad de México: Bonilla Artias / El Colegio de México / Iberoamericana Vervuert.
- Quezada, S. (2010). *Historia breve de Yucatán*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Ramírez Carillo, L. A. (2015). *Pobres pero globales. Desarrollo y desigualdad social en el sureste de México*. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
- Restall, M. (2004). Maya Ethnogenesis. *Journal of Latin American Anthropology*, 9(1), 64–89. <https://doi.org/10.1525/jlat.2004.9.1.64>
- Solís, P. (2017). *Discriminación estructural y desigualdad social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad*. Ciudad de México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
- Solís, P., Lorenzo Holm, V., & Güémez Graniel, B. (2019). *Por mi raza hablará la desigualdad. Efectos de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México*. Ciudad de México.
- Taguieff, P. A. (2001). El racismo. *Debate Feminista*, 12(24).
- Wacquant, L. (1997). For an Analytic of Racial Domination. *Political Power and Social Theory*, 11, 221–234.
- Wade, P. (1997). *Race and Ethnicity in Latin America*. Londres: Pluto Press.
- Wieviorka, M. (2006). La mutación del racismo. *Perspectivas Teóricas*, 13–23.
- Wieviorka, M. (2009). *El racismo: una introducción*. Barcelona: Gedisa.
- Wimmer, A. (2008). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries: A Multivel Process Theory. *American Journal of Sociology*, 113(4), 970–1022.

Perfiles de mujeres trabajadoras de la industria hidrocarburífera de la cuenca del golfo San Jorge ¹

Renata Hiller, Belén Aguinaga, Natalia Barrionuevo y Paolo Paris.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB, Chubut, Argentina)
renhiller@gmail.com,
belenaguinaga2015@gmail.com
barrionuevonatalia.s@gmail.com
ppaolo_84@hotmail.com

Resumen

La presentación comparte los avances de un Proyecto de Investigación que se propone abordar el complejo mundo del trabajo petrolero que se desarrolla en la Cuenca del Golfo San Jorge en la Patagonia argentina, desde una perspectiva de género. Para ello, se presenta el trabajo de campo desarrollado en 2018 en que entrevistamos unas cuarenta trabajadoras vinculadas a la industria hidrocarburífera de la Cuenca. Nos interesa comunicar una serie de decisiones teórico metodológicas en relación a la elaboración de la muestra, cuestiones vinculadas a la reflexividad y finalmente, presentar una serie de “perfiles” típicos que identificamos entre nuestras entrevistadas en los que confluyen varios clivajes (de clase, migratorios, etcétera). Pretendemos interrogar acerca de su *representatividad* en una investigación de corte cualitativo y sobre su *provisoriedad*, en tanto el análisis en profundidad nos orienta a descubrir “lo común” entre aquellas que, a priori, parecen muy diferentes.

Palabras clave: PETRÓLEO – GÉNERO – ESTUDIOS CUALITATIVO

¹ Proyecto de Investigación 1365 “Economía hidrocarburífera extractiva y relaciones de género. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge” de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB, Chubut, Argentina) dirigido por Renata Hiller, quien se desempeña como Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el CIT Golfo San Jorge (CONICET/UNPSJB)

Introducción

Desde 2017 llevamos adelante en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Argentina) un proyecto de investigación que indaga sobre las relaciones de género en la economía hidrocarburífera de la Cuenca del Golfo San Jorge², atendiendo al presente y pasado reciente. Como parte de sus objetivos, nos interesa conocer la experiencia de trabajadoras vinculadas a la industria hidrocarburífera que se desarrolla en la Cuenca. Para ello, entre mayo y agosto de 2018 desarrollamos un intenso trabajo de campo en el que buscamos reconstruir las trayectorias laborales de mujeres vinculadas de unas u otras maneras al petróleo, indagando sobre su formación, experiencias y relaciones laborales, así como sobre las representaciones acerca del trabajo que realizan. También, y en sintonía con la perspectiva feminista materialista en que entendemos el trabajo (Piccio, 1994; Carrasco, 2003; Caloz-Tschopp y Veloso Bermedo, 2012; Esquivel, 2012), nos interesó la articulación con otros órdenes de la vida, como el familiar, el tiempo dedicado al ocio y las experiencias de participación social o política, y cómo estos asuntos atraviesan aquellas trayectorias laborales.

Encontrándonos en pleno análisis del material producido y teniendo en cuenta los objetivos de estos Seminarios sobre Movilidad y Desigualdad Social, compartimos reflexiones y decisiones del trabajo de campo, asumiendo con Coffey y Atkinson (2003) que -especialmente en los abordajes cualitativos- el diseño y la recolección de datos no se encuentran escindidos de su análisis, sino que configuran parte de la estrategia y definición del problema de investigación. Así, nos interesa comunicar una serie de desafíos teórico metodológicos en relación a la definición del universo de análisis, la elaboración de la muestra y cuestiones vinculadas a la reflexividad del trabajo de campo. Luego, desplegamos algunas “recurrencias” encontradas en dicha muestra intencionalmente heterogénea y

² El Observatorio en Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur (2011) define al espacio conformado por la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) como una región socioproductiva de explotación hidrocarburífera que abarca la zona sur de Chubut (Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer) y Norte de Santa Cruz (Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Koluel Kaike y Las Heras). El aglomerado conformado por las localidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (distante apenas 15 km) es la ciudad cabecera de la región, manteniendo vínculos estrechos con las anteriores, a la vez que ejerce influencia y es a su vez influenciado por la actividad desarrollada en ciudades no petroleras de la Cuenca (como Pto. Deseado, Río Senguer, Perito Moreno, Los Antiguos y Camarones).

construimos una serie de perfiles o “trayectorias tipo” que identificamos entre nuestras entrevistadas en los que confluyen una variedad de clivajes: de clase, generación, nivel educativo, trayectoria familiar, entre otros. Interrogamos acerca de su *representatividad* en una investigación de corte cualitativo, a la vez que pretendemos cuestionarlos en su *provisoriedad*, por cuanto el análisis en profundidad nos orienta a descubrir “lo común” entre aquellas que, en principio, puedan ser vistas como muy diferentes.

Definir el universo de “petroleras”

Comodoro Rivadavia es una ciudad costera de la Patagonia argentina, centro de las actividades sociales y económicas que se desarrollan en el Golfo San Jorge, región comprendida entre el sur de la provincia del Chubut y norte de Santa Cruz (ver nota 1). La dinámica de la ciudad y la región, a partir del descubrimiento del petróleo en los primeros años del siglo pasado, ha estado ligada casi exclusivamente a esa actividad productiva. “Quien dice Comodoro, piensa petróleo” indica Peters (2016) para señalar que pocas otras ciudades argentinas tienen una relación tan estrecha con su principal actividad económica, en este caso, la extracción hidrocarburífera.

A su vez, la bibliografía local refiere a una “economía de enclave” para indicar “un espacio económico-social relativamente aislado en lo geográfico, aunque interconectado a la economía nacional mediante la presencia del Estado, en su papel de impulsor del desarrollo de un área productiva estratégica y de garante de la integración territorial. A estos aspectos deben agregarse la no diversificación productiva del sistema económico y la significativa composición migratoria de su estructura poblacional” (Cicciari, 2005: 6). La noción de “economía de enclave” también remite a la imbricación entre la realidad económica (la estructura sectorial, las relaciones sociales y técnicas de producción y los vínculos con el Estado y la economía nacional y mundial) y el sistema de relaciones sociales (la estructura social del trabajo, la organización política y gremial, las diferencias y jerarquías sociales, la vida comunitaria) (Cicciari, 2012). Partimos entonces de la presunción de que toda la Cuenca es petrolera, su base productiva, el motor de su economía son los hidrocarburos, entonces todos los que vivimos en esta tierra dependemos en alguna medida de esa materialidad.

Sin embargo y a la vez, el mundo del trabajo petrolero ha sido históricamente caracterizado como un universo masculino. Los estudios historiográficos locales encuentran a las mujeres

destinadas a lugares y tareas que constituyeran una prolongación del ámbito doméstico (la cocina, la oficina o la escuela), siendo su rol como madres y esposas el que era privilegiado. Sus empleos eran o bien una fase transicional entre el trabajo doméstico en casa de sus padres y el matrimonio, o bien una necesidad contemplada por las empresas ante casos de viudez (Ciselli, 2002; Marques, 2008). Así, quienes han estudiado las relaciones sociolaborales de la primera mitad del siglo XX en la Cuenca sostienen una fuerte división sexual del trabajo, donde las mujeres habrían estado confinadas al espacio doméstico. No encontramos antecedentes que hayan intentado mensurar aquella contribución femenina a la economía hidrocarburífera, considerando el aporte de valor de los trabajos no remunerados (Picchio, 2001).

Más cerca en el tiempo, Muñiz Terra indica que “en los años 70 y 80 solo un puñado de mujeres, principalmente profesionales, pudieron ingresar a la compañía (YPF)” (Muñiz Terra, 2016: 70), pero no hay todavía investigaciones que recuperen sus experiencias. Sí es gracias a su investigación en la refinería de La Plata que podemos comenzar a adentrarnos en aquellas narrativas femeninas en la industria hidrocarburífera en la actualidad. Otro tanto analiza Alejandra Boschetti para el caso neuquino, donde la incorporación de mujeres profesionales en empresas petroleras realizando tareas tradicionalmente masculinas es un fenómeno novedoso (Boschetti 2015). En el caso específico de nuestro universo de investigación, tuvimos que preguntarnos entonces ¿Quiénes son las “petroleras”? El sentido común local habla de “petroleros” y con esto se refiere casi exclusivamente a los trabajadores de boca de pozo (Baeza, 2010). ¿Existían trabajadoras de boca de pozo? ¿A qué distancia de ese hoyo puede haber mujeres trabajando? ¿A mayor distancia, se pierde el título de trabajadorx del petróleo? ¿O es que, tal como nuestras orientaciones teóricas invitan, debiéramos considerar como “petroleras” también por ejemplo a las mujeres que trabajan en la reposición de la fuerza de trabajo de sus maridos empleados en el sector?

Aun acotándonos a mujeres que estuvieran vinculadas a través del mercado laboral formal, los límites seguían sin ser sencillos: el universo hidrocarburífera de la Cuenca del Golfo San Jorge involucra una heterogeneidad de empresas, actores e instituciones. Comprende también una diversidad de tareas sumamente heterogéneas, requeridas por la exploración y explotación del recurso. Las mismas son llevadas a cabo por actores diversos: en la región convive un pequeño número de empresas Operadoras (YPF S.A., pero también Pan American

Energy, Capsa, Tecpetrol y hasta hace poco tiempo, Enap Sipetrol y Sinopec) junto con una cantidad de empresas de Servicios Especiales (muchas de ellas, multinacionales) y un sinnúmero de PyMes locales. La deslocalización de procesos completos del proceso productivo en diversas empresas proveedoras que funcionan como prestadoras de servicios con equipamiento específico propio es una de las características del complejo. A esto se añade la concentración (por tratarse de una actividad capital intensiva que requiere de grandes inversiones) y la heterogeneidad tecnológica (Masilla, 2013). Ello redundará en una multiplicidad de condiciones laborales disímiles, muchas veces alimentadas por conflictos de encuadramiento gremial.

Los criterios usualmente utilizados para estudiar el mercado de trabajo podían ser considerados, pero solo en su articulación y combinación: no todas las mujeres vinculadas al complejo universo petrolero son contabilizadas dentro de la rama de “Explotación de minas y canteras”, así como tampoco lo son las empresas para las que trabajan. Este es el caso de laboratoristas, por ejemplo, que en otras ciudades pueden trabajar para empresas que ofrecen servicios a distintas industrias, pero en nuestro caso los servicios son exclusivos o predominantemente para el petróleo. Y lo mismo sucede con cocineras y personal de limpieza, cuya labor se desarrolla en la base de las empresas petroleras o en los yacimientos. También consideramos la situación de trabajadoras informales que venden comida de manera ambulante en la zona de establecimientos industriales en la periferia urbana, que no serían fácilmente identificables como petroleras, pero cuya subsistencia no depende de otro movimiento económico. Todo ello, sumado al hecho de que la mayor parte de los datos estadísticos disponibles no consideran sistemáticamente la variable de sexo, dificulta aún más aventurar el número de mujeres vinculadas a la industria hidrocarburífera en la región.

Nuestro programa de investigación procuró invertir entonces los términos: a partir de un abordaje cualitativo nos propusimos reconstruir las trayectorias laborales de mujeres vinculadas de unas y otras maneras a la industria hidrocarburífera. A partir de los aportes del Centro de Estudios de la Mujer, y específicamente su trabajo sobre trayectorias laborales en Chile, entendemos por trayectoria laboral:

Los itinerarios visibles, los cursos de acción y las orientaciones que toma la vida de los individuos en el campo del trabajo, y que son el resultado de acciones y

prácticas desplegadas por las personas en situaciones específicas a través del tiempo. Estas acciones y prácticas se desarrollan en condiciones materiales y sociales y en contextos institucionales definidos. Se constituyen en el interjuego de diferentes ámbitos sociales e institucionales donde los sujetos sexuados ocupan una posición particular, condicionada por factores estructurales (la organización y división social y sexual del trabajo), prescripciones sociales e imágenes y representaciones de género que circulan y regulan las relaciones sociales (Todaro y Yañez, 2004:198).

Nos acercamos a mujeres vinculadas a la industria hidrocarburífera en pos de conocer aquel complejo universo petrolero desde sus perspectivas y experiencias, a sabiendas que en sus trayectorias laborales encontraríamos la imbricación de elementos subjetivos con otros que nos informaran sobre las oportunidades y condicionantes estructurales en que se desarrolla su trabajo. Así, una parte de nuestros propósitos se orientó a identificar la *posición* de nuestras entrevistadas en ese *campo* del complejo petrolero de la Cuenca, entendiendo sus trayectorias como desplazamientos en ese espacio dinámico que intentamos reconstruir (Bourdieu, 1997: 82). La elección por las mujeres estuvo orientada por un propósito de corte político académico, en pos de visibilizar la realidad de estas trabajadoras, generalmente desestimada por la mirada social (pero también muchas veces académica) sobre la industria hidrocarburífera de la región. Así, la perspectiva de trayectorias laborales adoptada nos permite avanzar en el conocimiento de las relaciones laborales y de género que se desarrollan en la zona.

Claro que ir en búsqueda de las “petroleras” no resultó una tarea sencilla. En lo que respecta al establecimiento de contactos y la bola de nieve, iniciamos la búsqueda a través de conocidxs, fueran potenciales entrevistadas u otros que trabajando o teniendo contacto con gente que trabaje en el petróleo, nos pudiera orientar. La misma cuestión de establecer quiénes eran nuestras posibles entrevistadas se mostró como un asunto poco transparente, por cuanto cada una de las categorías (mujeres-trabajadoras-petroleras) fue puesta en cuestión en algún momento del trabajo de campo. Así, trabajadores de los yacimientos (los famosos “petroleros”, integrantes de equipos de *upstream*) se mostraban sorprendidos ante la consulta, como si estuviésemos preguntándoles por fantasmas. Luego, al ejemplificar: “mujeres que realicen tareas de limpieza, cocina, seguridad...” muchos se asombraban al

corroborar que, efectivamente, había mujeres en sus espacios de trabajo a las que hasta entonces “no veían”. “De mameluco, ninguna” nos dijo P. informando la valoración del trabajo femenino en su empresa; sin esfuerzo físico, “desgaste” ni “mameluco”, no serían trabajadoras³. “Petrolera es la que estuvo en el campo” nos increpó M. cuando le indicamos que nuestra búsqueda era exhaustiva y podía incluir oficinistas o agentes de laboratorio. Para ella, en cambio, el trabajo petrolero requeriría de la intemperie, las largas distancias y la vida en el yacimiento. Incluso las “mujeres” y lo femenino se pusieron en tensión al acercarnos a mujeres trans y lesbianas. Sobre todo, en las dificultades para “dar” con las segundas (que suponíamos, existen). Nos vimos sorprendidos con que no siempre eran percibidas como “mujeres” por ser lesbianas masculinas. ¿Y si éramos nosotrxs quienes estábamos violentando su identidad de género, volviéndolas al molde de lo femenino del que querían despegar?

Priorizamos captar la heterogeneidad y para ello adoptamos un criterio amplio de quiénes definir como “petroleras”. Así, desde la selección de nuestras primeras entrevistadas ya dábamos cuenta de estas reflexiones, acercándonos a trabajadoras pertenecientes a distintas empresas, que desarrollaban tareas diferentes. Eventualmente, por la bola de nieve, tuvimos el problema de empezar a perder esa diversidad porque las entrevistadas nos remitían a otras trabajadoras que ocupaban lugares (laborales, profesionales, espaciales, etarios, sociales, etc.) muy similares a los de ellas mismas. Entonces empezamos a afinar la selección y rechazar entrevistas que podrían asemejarse demasiado a las que ya teníamos. Esto igualmente sucedió mucho más entre las profesionales. En cambio, la llegada a las trabajadoras no calificadas se dio por otras vías: en algunos casos, por sus empleadores y/o los sindicatos. Desenmadejando los hilos de nuestra bola de nieve encontramos que hubo un único caso en que llegamos a una trabajadora manual (en este caso, una cocinera) a través de una entrevistada de perfil profesional. Las dificultades de las trabajadoras de rangos más bajos para remitirnos a otras compañeras (por la ausencia de trabajo en grupo, no tener contacto entre ellas, o por relaciones conflictivas o de desconfianza), así como la escisión entre profesionales y trabajadoras manuales, pasó de ser un obstáculo en el trabajo de campo,

³ Que los trabajos realizados por mujeres no impliquen “desgaste” o esfuerzo físico es también un prejuicio. Nuestra investigación da cuenta de tareas manuales que éstas realizan y que implican un importante insumo corporal, tanto como de otras tareas en las que también el cuerpo y la salud de las trabajadoras está involucrado.

a convertirse en un insumo que informa sobre el asunto en cuestión.

Teniendo en cuenta las modalidades de contratación vigentes en el sector, consideramos como “trabajadoras petroleras” tanto aquellas directamente empleadas por las Empresas Operadoras a cargo de los yacimientos, o por las empresas de servicios especiales, como también mujeres empleadas para tareas “subsidiarias” como la limpieza, cocina y transporte de personal en PyMES o empresas locales. Privilegiamos aquellas que estuvieran más directamente ligadas a la producción, antes que a tareas de gestión o administración. Estuvimos atentos a la edad, la orientación sexual, el estado civil, la maternidad, la adscripción empresarial y sindical, la condición migratoria, el nivel educativo y el status laboral. La muestra fue, entonces, intencional, orientada a la diversidad. Por esto, y por la mentada falta de investigaciones al respecto, no sabemos en qué grado esta muestra puede llegar a ser representativa del conjunto de mujeres presentes hoy en la industria de la región. Sí en cambio podemos afirmar que intencionadamente procuramos recoger experiencias laborales que dan cuenta de las variadas configuraciones etarias, de etnicidad, migraciones, orientación sexual, situación familiar, estatus laboral, militancia social y otras que conviven al interior del universo de las “petroleras”.

Clase, género, edad: de cercanías y distancias en el trabajo de campo

La perspectiva propuesta considera la imbricación de elementos subjetivos y estructurales en cada trayectoria, así como supone al momento de entrevista como una instancia de elaboración de la misma, a partir de la interrelación y las condiciones del trabajo de campo. Reflexionar sobre nuestra propia posición como entrevistadorxs en el espacio social nos permite considerar las relaciones de distancia y cercanía entre nuestras entrevistadas, y entre nosotrxs y ellas. El momento y las circunstancias en que dichas entrevistas fueron realizadas inciden sobre la información producida. Finalmente, las desavenencias y azares del trabajo de campo también resultan un insumo para comprender las características de las mujeres petroleras y con ello, del complejo universo del trabajo petrolero.

Entre mayo y agosto de 2018 desarrollamos un intenso trabajo de campo en el que entrevistamos cuarenta y dos mujeres vinculadas a la industria hidrocarburífera de la región. Desde el comienzo, el campo con sus dificultades, facilidades y peculiaridades nos fue

informando sobre las características del mundo del trabajo petrolero en la zona, y sobre cómo lo viven las mujeres ligadas a él. Comprendimos tempranamente que en las condiciones de dicha tarea había signos que debíamos incorporar al registro para el análisis. Ineludiblemente, nuestro propio trabajo (como docentes-investigadorxs de la Universidad pública local) y las condiciones en que éste se desarrolla, también estaba involucrado. De modo que el vértigo de la construcción de los datos (en el crudo invierno, atravesado entre otras cosas por la Copa Mundial de Fútbol y el debate parlamentario sobre la posible despenalización del aborto) requería simultáneamente del análisis (y especialmente, del autoanálisis) para no despistarnos.

Los instrumentos diseñados para el trabajo de campo fueron varios. En primer lugar, formulamos una carta de presentación en la que informamos sobre el proyecto, nuestros objetivos y la pertenencia institucional, haciendo saber sobre qué indagaríamos, las características de la entrevista, su duración, el registro del audio y la confidencialidad. Esta carta servía como *speech* de presentación al momento de establecer el contacto telefónico y en varios casos fue remitida por correo electrónico a las potenciales entrevistadas o a los contactos que nos acercaban a ellas. Luego, trabajamos con una carta de consentimiento informado que volvía a detallar el marco institucional del proyecto y los objetivos de trabajo. Aun cuando hubiéramos explicitado los mismos en la presentación, leíamos este escrito al iniciar los encuentros para establecer con claridad los lineamientos de la entrevista. El mismo era firmado por lxs entrevistadores y conservado por la entrevistada.

Segundamente, ofrecíamos una hoja en blanco y lapiceras para que la entrevistada tuviese la oportunidad de graficar su trayectoria vital y laboral en una línea de tiempo. La misma ayudó a la memoria de las entrevistadas, y propició una actitud reflexiva (al observar la propia trayectoria objetivada en esa línea). También sirvió para identificar vacíos o plasmar fechas importantes. Algunas entrevistadas hicieron suya la herramienta, aprovechando la hoja en blanco para graficar mapas, recorridos, o la distribución espacial del lugar de trabajo.

La guía de entrevista implementada consistió en 38 preguntas agrupadas en cinco bloques temáticos. El primero indagaba sobre las ocupaciones de los progenitores y la trayectoria formativa de la entrevistada, su ingreso al mundo laboral y los trabajos remunerados realizados en el pasado. Con él procuramos reconstruir algunos factores del contexto (como

la organización de la producción y del empleo, niveles de desempleo, políticas educacionales, orden de género vigente) y factores familiares, como el estrato socioeconómico de pertenencia y los modelos masculinos y femeninos transmitidos por la familia de origen, que intervienen en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado (Guzman y Mauro, 2004: 207). En el segundo bloque sobre las características del trabajo desempeñado en la industria hidrocarburífera en la actualidad, indagamos sobre las tareas realizadas, relaciones laborales (con pares, con jefes/as, con subordinados/as, interrogando especialmente sobre la variable de género) y acerca de las características del espacio de trabajo. En muchos casos, esto requirió recorrer diacrónicamente la trayectoria laboral identificando distintas posiciones, ocupaciones y jerarquías atravesadas dentro de la industria. Inquirimos sobre las modalidades de contratación, prestamos atención a cuestiones vinculadas con la maternidad, el salario promedio (y otros beneficios no remunerativos, como vivienda o acceso a créditos) y si estaban sindicalizadas. En la tercera parte inquirimos sobre la vida extra laboral o mejor dicho, extra-empleo. Allí nos interesaba conocer con quiénes vivía, cómo era una jornada habitual, qué tareas domésticas, organizativas o de cuidado debía afrontar o delegar, los tiempos de traslado propios o de otras personas en vínculo; si tenía hijxs u otras personas a cargo, si estaba en pareja; si desarrollaba actividades recreativas, políticas o comunitarias. En cuarto lugar, sondeamos sobre las representaciones del trabajo petrolero y específicamente sobre su condición masculinizada. Indagamos sobre posibles conflictos que hubieran vivido en su trayectoria laboral y en particular sobre situaciones de acoso laboral que hubieran sufrido o conocido en la industria. Buscamos conocer las perspectivas a futuro de las entrevistadas a fin de identificar la “pendiente de la trayectoria” (Gutiérrez, 2007), desde la mirada de las propias sujetxs. Finalmente, se proponía repasar algunos momentos históricos significativos para la región (la privatización de YPF, la reactivación económica a partir de 2003, entre otros) y conocer las resonancias que hubieran tenido en sus vidas. La inclusión de este último bloque procuró colocar, de manera explícita y dialógica, las trayectorias personales de nuestras entrevistadas en el tiempo social e histórico en que se desarrollan.

El cuarto instrumento elaborado para el trabajo de campo, y que es el que en este texto nos interesa compartir especialmente, es nuestra grilla de datos sociodemográficos (ver gráfico I). Su función era sistematizar rápidamente algunos datos que nos permitieran comparar las

entrevistas, identificar sesgos en la muestra y plasmar información objetiva sobre nuestras entrevistadas. Algunos ítems tuvieron que ser revisados después de las primeras entrevistas (por ejemplo, el rango de salarios tuvo que ser elevado). En general, procuramos que fueran dos las personas entrevistadoras. Mientras una llevaba adelante la entrevista, la otra introducía algunas preguntas si era necesario y estaba atenta a esta grilla, que de todas maneras siempre era repasada al final con la entrevistada. Entonces preguntábamos si nos podía facilitar un contacto con otra trabajadora que pudiésemos entrevistar para continuar la bola de nieve.

Gráfico I: Grilla de datos sociodemográficos

Edad
Lugar y año de nacimiento
Tiempo de residencia en la ciudad de Comodoro Rivadavia
Barrio
Máximo nivel educativo (Primaria completa o incompleta; Secundaria incompleta, . Secundaria completa, Terciario o Universitario incompleto, Terciario o universitario completo, Posgrado)
(Para terciario y universitario) Carrera e institución
Máximo nivel educativo (Primaria completa o incompleta; Secundaria incompleta, . Secundaria completa, Terciario o Universitario incompleto, Terciario o universitario completo) y ocupación del padre y de la madre (tal como fuera referido)
Edad de hijxs (en caso de tenerlos),
Situación conyugal (Soltera; casada o en convivencia; separada o divorciada; viuda)
Autonominación sexual* (homosexual, heterosexual, bisexual; otro)
Ocupación del/la cónyuge (en caso de estar en pareja) (tal como fuera referido)
Empresa empleadora (Operadora, Servicios Especiales Internacional; PyME)
lugar de trabajo**
jerarquía ocupacional***

edad de inicio de la trayectoria laboral,
edad de ingreso a la industria hidrocarburífera,
sindicalización SÍ/NO
Sindicato de referencia
Vinculación (trabajadora actual; jubilada; desafectada)
Modalidad de contratación (en negro; en blanco y por convenio; en blanco y por fuera de convenio; contrato de servicios)
Monto salarial (hasta \$15.000; hasta \$50.000; Hasta 100.000; hasta 150.000; mas de 150.000)
* leíamos las opciones
** comenzamos con una batería de opciones acotada. Finalmente, consignamos diez lugares de trabajo: Comodoro Centro; Barrio Industrial; Barrio Gral. Mosconi; Playa de Tanques de YPF; Yacimiento El Trébol; Yacimiento El Tordillo; Yacimiento Km. 20; Diadema; Las Heras; Yacimiento Cerro Dragón.
*** De acuerdo al Clasificador de Ocupaciones (CNO-2001) consideramos la jerarquía (dirección; cuenta propia; jefe/a; Asalariado/a) y la Calificación (profesional; técnico; operativo; no calificado)

La heterogeneidad de nuestras entrevistadas se constató en los variados modos de llegar a ellas y establecer la comunicación inicial, y también al momento de concertar la entrevista. Mientras algunas entrevistadas podían pautar el momento de encuentro con una semana de antelación, en otros casos las confirmaciones dependieron del último minuto (en general, trabajadoras manuales afectadas por cambios de turno y reemplazos). Nos encontramos con mujeres con un uso del tiempo muy desigual. Si en las entrevistas con las profesionales nos asombraba la cantidad de actividades y la productividad de su tiempo (al punto de autoexplotarse muchas de ellas), en las demás en cambio era sorprendente la poca disposición sobre los propios tiempos. De unas maneras u otras, las encontramos ligadas exhaustivamente a sus trabajos.

Los encuentros fueron realizados en los domicilios de las entrevistadas, en la Universidad, o en bares y estaciones de servicio (explícitamente sugeríamos no realizarla en los lugares de trabajo, para generar un clima de mayor confidencialidad, aunque luego en algunos casos debimos flexibilizar este criterio). Ahí donde la realizamos en la casa, en algún caso hijxs pequeños estaban en ese momento al cuidado de nuestra entrevistada y, salvo algún berrinche, eso no generó mayores inconvenientes durante la entrevista. En dos casos estuvieron presentes otros integrantes de la familia. Esas entrevistas (en ambos casos, de mujeres que trabajan en Cerro Dragón, a setenta kilómetros de la ciudad) suscitaron el interés de toda la familia, que permaneció escuchando la conversación. En un caso, los padres, las hermanas (jóvenes como nuestra entrevistada) y una hija de unos diez años (silenciosamente atenta a nuestra charla, mientras sorbía su té con leche). En el otro, la pareja (mujer) y las hijas veinteañeras.

Así como nuestras entrevistadas nos iban marcando sus localizaciones en el gran mapa de la Cuenca del Golfo San Jorge, y nosotrxs íbamos componiendo a través de sus relatos el complejo universo petrolero en que se desenvuelven; de la misma manera íbamos reconociendo nuestro propio lugar en la relación de entrevista. Dice Bourdieu parafraseando a Pascal “el espacio social me engulle como un punto. Pero este punto es un *punto de vista*, el principio de una visión tomada a partir de un punto situado en el espacio social” (Bourdieu, 1997: 25). Aquella perspectiva definida en que nos encontrábamos, más o menos evidente para nuestras entrevistadas, debía ser también considerada por nosotrxs en el análisis.

En términos socioeconómicos, entrevistamos mujeres mucho más aventajadas económicamente que nosotrxs, algunas más cercanas a nuestro nivel y otras de menores recursos. En principio, esto nos colocó a lo largo del trabajo de campo en la oscilación de transitar en las mismas semanas o incluso en los mismos días, barrios populares, zonas selectas de la ciudad, suburbios más o menos pujantes. Estos tránsitos no hacían más que exacerbar la presunción de que las petroleras están efectivamente en todos lados, diseminadas por el tejido social y urbano de la ciudad. El paro de docentes (de Primaria, nivel Medio e Inicial) que atravesó la provincia de Chubut durante los meses del trabajo de campo, generó tensiones con algunas de nuestras entrevistadas. Preocupadas y alteradas las rutinas por la ausencia de escuela durante semanas enteras, nuestra adscripción como docentes (así fuéramos de la Universidad) convocó que en algún caso fuéramos interpeladxs como una

“minoría privilegiada”.

Luego, entre las distancias, asimetrías y relaciones de semejanza o desigualdad con nuestras entrevistadas cabe consignar la cuestión etaria: la mayoría de nuestras entrevistadas se encuentra entre los 35 y 45 años de edad. Es decir, contemporáneas o un poco mayores que nosotrxs. Las más grandes (mayores de cincuenta) en algunos casos intentaron imponer su edad ante una situación de entrevista que las colocaba ante la asimetría de ser entrevistadas (por ejemplo, solicitando pagar lo consumido en el bar o increpando(nos) sobre “la juventud perdida de estos días”). Luego, en términos de género, creemos que el hecho de haber sido tres entrevistadoras mujeres y un “varón” (así entre comillas porque no responde a los estereotipos tradicionales de la masculinidad) facilitaron el *rapport*.

Sin embargo, extrañas coincidencias del trabajo de campo y la fortuna política hicieron que sobre todo en el último tramo de las entrevistas, el debate sobre la posible despenalización del aborto estuviera en el candelero. Justo en ese tiempo se desarrollaron también las entrevistas con las mujeres más movilizadas políticamente (sindicalizadas, de afiliación partidaria) y por lo general, “en contra del aborto”. La cuestión del debate parlamentario no apareció en las entrevistas, pero sí nos requirió a nosotrxs ejercicios de “ocultamiento”. Dadas las condiciones materiales en que hoy se desarrolla nuestro trabajo como investigadores sociales, el teléfono celular personal es asimismo el laboral y el WhatsApp era una vía de contacto con nuestras entrevistadas, por lo que preferimos quedar al margen de la disputa de perfiles verdes o celestes de aquellos días.

Finalmente, y pese a nuestra deliberada ignorancia frente al trabajo petrolero (que indicábamos no conocer, solicitando que nos lo expliquen detalladamente) hubo por parte de nuestras entrevistadas el reconocimiento de tratarse de una investigación “desde y para la Patagonia”. La pertenencia a la universidad local y ciertos tránsitos comunes colaboraron al clima de confianza. En síntesis, si bien identificamos distancias sociales con algunas de nuestras entrevistadas (por edad, nivel económico o socioeducativo), en general compartimos posiciones más o menos próximas. Por eso en ocasiones en las que algúnx entrevistadorx conocía a la entrevistada, derivábamos ese encuentro a otrx integrante del equipo. Aunque la cercanía no oblitera el intentar colocarse en el lugar del otrx (que no deja de ser tal por el solo hecho de ser “similar”).

Perfiles heterogéneos en el universo de trabajadoras petroleras

La muestra que obtuvimos arroja varios datos que, aun manteniendo bajo interrogación su representatividad, merecen ser compartidos. El análisis cualitativo ulterior aportará otro tipo de información acerca de la industria hidrocarburífera de la región y las trayectorias, experiencias y representaciones de las mujeres que trabajan allí. Interesa a los propósitos de esta presentación resaltar la heterogeneidad que anida en este universo, a la vez que la recurrencia de ciertos clivajes, lo que nos permite avanzar en la propuesta de “perfiles típicos” entre estas trabajadoras del petróleo.

Entrevistamos mujeres entre veintitrés y setenta y un años de edad⁴. La mitad, se concentra entre los treinta y cinco, y cuarenta y cuatro años. En promedio, llevan trece años en la industria, pero coherentemente con su edad y con el “boom petrolero” de 2003-2013, la mayoría ingresó en esos años (once entre 2003 y 2008; trece entre 2008 y 2013; en los años previos, de 1998 a 2003, apenas seis entrevistadas; luego del 2013, solo tres). La mitad de nuestras entrevistadas nació fuera de Comodoro Rivadavia. Si bien registramos casos de migración temprana con la familia de origen, la mayoría migró siendo adulta y “motor” de la migración. En general, lo hicieron en la década del 2000 y en algunos casos, tras su instalación en la ciudad, otros integrantes de la familia (padres, hermanos/as) también lo hicieron. Sus lugares de origen son diversos: una entrevistada bielorusa llegó a fines de los noventa con el traslado de sus padres; otras lo hicieron desde el noroeste del país (Ing. Ledesma en Salta, Salvador Masa en Jujuy) o desde otras localidades en la Patagonia (Sierra Grande, Trelew). Varias provienen de la llamada “zona núcleo” (Buenos Aires, Córdoba, Rosario).

Respecto de la conformación de sus familias, la gran mayoría tiene hijos/as. Más del 40% no

⁴ Entrevistamos mujeres vinculadas en la actualidad a la industria y también otras que hubieran trabajado en el pasado, al menos durante tres años. La decisión de incluir trabajadoras desvinculadas tenía que ver sobre todo con los recientes procesos de achicamiento en el sector (en proceso de retracción desde 2015) y la posibilidad de entrevistar mujeres que, habiendo participado del último “boom petrolero” (2003-2013) estuvieran ahora fuera de la industria. Este fue el caso de tres jubiladas/desafectadas entre 2015 y 2016 que tenían más de treinta años en el sector. En el campo no dimos con casos de trabajadoras más jóvenes que hubieran sido desvinculadas, aunque sí varias entrevistadas nos refirieron compañeras relocalizadas en otros enclaves petroleros, fuera del país o fundamentalmente, en la Cuenca neuquina. La mayor y la menor de nuestras entrevistadas no cumplen alguno de los requisitos de selección: la mayor es una ex empleada de YPF despedida en 1994. La menor lleva menos de tres años en la industria. Pese a ello, y por la riqueza de las entrevistas, decidimos incluirlas.

está en pareja y excepto una, todas se autodenominaron heterosexuales. En relación a sus familias de origen, la gran mayoría representa un punto ascendente en el itinerario familiar, mejorando el nivel educativo y la calificación laboral de sus progenitores.

Las trabajadoras actuales son todas trabajadoras formales que se encuentran en relación de dependencia⁵, excepto en el caso de dos monotributistas que realizan trabajos de consultoría de manera independiente. Más de la mitad (al menos veinticinco entrevistadas) es el principal sostén del hogar⁶. En general, el empleo en la industria es su único trabajo, aunque tres entrevistadas también son docentes universitarias. Sus salarios son sumamente disímiles: varían entre los veinte mil y los ciento ochenta mil pesos al mes.

En esta línea, corresponde avanzar ya no en los rasgos comunes y extendidos a lo largo de la muestra, sino profundizando en las recurrencias y concentraciones que encontramos. Las mismas nos inspiran a proponer la existencia de *perfiles*, tres específicamente. Las concentraciones a las que aludimos responden a cierta superposición de características que se repiten “estructuralmente”. Como las correspondencias que encontramos entre el tipo de empresas para el que trabajan, el máximo nivel educativo alcanzado, la edad de inicio de la trayectoria laboral, entre otras. Asimismo, se conforman en base al contraste con los otros perfiles. Si bien iniciamos el recorte de acuerdo al tipo de empresa empleadora, son el resultado de varios filtrados y cruces que arrojaban la misma segmentación y concurrencia. También, en tanto perfiles típicos, hay entrevistadas que no se ajustan por completo a los perfiles elaborados.

⁵ Como anticipamos, nuestra amplia definición de “petroleras” abarcaba también trabajadoras informales, como las que realizan venta ambulante de viandas en inmediaciones del barrio industrial, o aquellas que cosen uniformes para las empresas, también de manera informal. Sin embargo, no accedimos a ellas.

⁶ Este dato no fue consultado expresamente, sino que lo reconstruimos a partir de comparar con los empleos de la pareja u otros integrantes del hogar. De ahí que veinticinco sea el número de mínima, ya que en los casos que no pudimos identificarlo, consignamos que no lo era. Asimismo, vale volver sobre la cuestión de la temporalidad: en dos casos nuestras entrevistadas eran nóveles jefaturas de hogar, siendo sus parejas recientes desempleados de la industria.

Gráfico II: Perfiles de trabajadoras vinculadas a la industria hidrocarburífera

	Perfil A	Perfil B	Perfil C
Edad	Mayores de 30		La mayoría mayores de 40 y la menor de las entrevistadas
Lugar de nacimiento	Migrantes	las mayores, migrantes. Las más jóvenes, locales	
Tipo de Empresa	Operadoras	Servicios Especiales Multinacional y Servicios Básicos PyMe Nacional	Limpieza, cocina, seguridad y transporte
Lugar de trabajo	Oficinas con algunas salidas al campo	Barrio Industrial	Itinerante
Salario	U\$s 3000 y beneficios	u\$s 2000	U\$s 1000
Jerarquía ocupacional	Dirección	Asalariadas y cuentapropistas	Asalariadas
Uso de Tecnología	Operación de sistemas y equipos informatizados	Con operación de máquinas y equipos	Sin operación de máquina ó con operación de máquinas y equipos
Calificación	Profesional	Profesional y técnica	Operativa y no calificada
Max. Nivel educativo y Carreras	Geología, Ingenierías y Posgrados	Tec. y Lic. en Recursos Humanos, Higiene y Seguridad, Ambiente. UNPSJB	Entre las mayores, primaria. Las más jóvenes, sec. Completo
Edad inicio trayectoria laboral	entre 18 y 24 (en paralelo al estudio)		Entre los 10 y los 18 años
Edad ingreso a la 4ind. Hidrocarburífera	Larga trayectoria para ingresar en operadoras	Las más jóvenes se inician laboralmente en la industria. ,	Después de los 30 la gran mayoría
Hijxs	Mayoría con hijx	Mayoría sin hijxs	Todas tienen hijx
Edad del primer parto	entre los 27 y los 33 años		entre los 15 y los 25 años
Situación conyugal	mayoría en pareja	mayoría soltera	
Trayectoria de largo plazo	Madres trabajadoras no manuales o profesionales, algunas con posición superior a los padres	Padres trabajadores manuales y ambxs, con menores credenciales educativas	Madres trabajadoras manuales o amas de casa, todas con primaria c/i.
Vinculación a la industria hidrocarburos	a través del padre o pareja	a través de la pareja	
Sindicalización	Fuera de convenio	Mitad y mitad. En distintos sindicatos	sindicalizadas

El primer perfil identificado (perfil A en el Gráfico II) corresponde a las trabajadoras

empleadas de las empresas Operadoras de Yacimientos. Más de la mitad de este grupo no nació en Comodoro Rivadavia y migraron siendo jóvenes o adultas, varias desde la zona núcleo. Son hijas de madres trabajadoras no manuales o profesionales, algunas de ellas con posiciones ocupacionales superiores a las de los padres. En este sentido podemos decir que mantienen o superan la situación ocupacional de sus madres y definitivamente la de sus padres. Aunque todas son profesionales, comenzaron su vida laboral entre los dieciocho y los veinticuatro años, es decir, mientras cursaban o finalizaban sus estudios universitarios. Son predominantemente Ingenieras y Geólogas, algunas con estudios de posgrado finalizados o en curso. Actualmente las encontramos trabajando para compañías operadoras (YPF, PAE, Capsa, TecPetrol) en sus oficinas en la ciudad (y yendo solo ocasionalmente al campo). Sin embargo, aunque la mayoría comenzó su actividad laboral ya en la industria hidrocarburífera, debieron atravesar una larga trayectoria para llegar allí, por lo que en general también han trabajado en los yacimientos. Esto también explica que, si bien se encuentran dispersas en términos etarios, todas son mayores de treinta años. En sus trayectorias, la vinculación con la industria hidrocarburífera también se da por allegados, sean los padres o las parejas. En general, están en pareja y tienen hijos/as, habiéndose convertido en madres alrededor de los treinta años. La gran mayoría está contratada “fuera de convenio”, sin afiliación sindical. Sus salarios rondan los US\$ 3.000⁷ y tienen otros beneficios, como bonificaciones de fin de año o por productividad, pago del alquiler o de servicios (guardería) y acceso a créditos dentro de la empresa. En nuestra muestra, identificamos 18 entrevistadas que se ajustan a este perfil.

En el extremo opuesto del Complejo encontramos el Perfil C (cuarta columna del Gráfico II). Son trabajadoras manuales que desarrollan su actividad para pequeñas o medianas empresas que brindan servicios de limpieza, cocina, seguridad y/o transporte. Las más jóvenes del grupo tienen estudios secundarios completos, pero las mayores solo cursaron estudios primarios. Generalmente son mujeres mayores de cuarenta años (aunque en este grupo también está la menor de nuestras entrevistadas) y que han ingresado a la industria petrolera después de los treinta años de edad. En general, comenzaron a trabajar siendo adolescentes.

⁷ Realizamos el cálculo de acuerdo a los salarios en pesos consignados, tomando la cotización del dólar a julio de 2018, equivalente a unos 28 pesos. Cabe señalar que por la devaluación, estos salarios (nominalmente similares en pesos) eran mucho más altos en dólares dos o tres años antes.

Sus madres son o han sido trabajadoras domésticas o amas de casa, con educación primaria. En general, tienen hijos/as y han sido madres jóvenes (entre los 15 y los 25 años). Trabajan de manera itinerante, sea porque trasladan personal o materiales para distintos equipos, o porque realizan tareas de limpieza en varias locaciones que pueden ir rotando. Sus salarios también varían de acuerdo a los días trabajados, pero rondan los US\$ 1.000 (entre las camioneras, puede llegar a duplicarse). Están encuadradas sindicalmente, en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut o en el Sindicato de Camioneros, de acuerdo a las tareas que realizan. En nuestra muestra, identificamos 10 entrevistadas que se ajustan a este perfil.

Finalmente, identificamos un tercer perfil (Perfil B) dado por técnicas o licenciadas en las áreas de Recursos Humanos, Seguridad, Higiene, Química, Ambiente que trabajan para empresas de servicios petroleros internacionales o locales, generalmente en el Barrio Industrial. Las mayores son migrantes, mientras que las más jóvenes son locales y es importante la presencia de graduadas de la Universidad pública local. Las más jóvenes iniciaron su trayectoria laboral directamente vinculadas a la industria, alrededor de los veinticinco años, esto es: recién graduadas o cercanas a graduarse. Las mayores en cambio se incorporaron después de los treinta (a partir de la reactivación del sector en los primeros dos mil). No tienen vinculación familiar con la industria, sus padres en general son o han sido trabajadores manuales, mientras que entre sus madres encontramos trabajadoras calificadas, y otras amas de casa. Sí, quienes están en pareja, suelen hacerlo con trabajadores de la industria. Sin embargo, la mayoría en este perfil no tiene pareja ni hijos/as. Sus salarios rondan los US\$ 2.000 y la mitad de ellas está sindicalizada en distintos gremios (Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Sindicato del Personal Jerárquico de la Patagonia Austral, SUPeH). En nuestra muestra, identificamos 14 entrevistadas que se ajustan a este perfil.

Reflexiones finales

Nos adentramos en la industria hidrocarburífera de la Cuenca del Golfo San Jorge procurando conocer aquel mundo desde la perspectiva de sus trabajadoras. Para ello, a partir de un abordaje cualitativo, reconstruimos las trayectorias laborales de unas cuarenta mujeres vinculadas a la industria hidrocarburífera de la región. Y aunque el sentido común local sigue

sindicando el trabajo petrolero como un trabajo masculino, las encontramos a lo largo y ancho de este extenso espacio geográfico y social. Así, vimos que entre nuestras entrevistadas pueden distinguirse tres perfiles o trayectorias “tipo” que dan cuenta de la heterogeneidad del Complejo petrolero, a la vez que informan sobre la multiplicidad de variables (contextuales, familiares, personales) que configuran las trayectorias laborales. Nos preguntamos, ¿hasta qué punto y de qué maneras estos perfiles pueden pensarse como representativos del conjunto de mujeres que se desempeñan en el mundo de los hidrocarburos en nuestra región? Luego, otras preguntas: ¿estos distintos perfiles son compartimentos estancos o pueden conformar distintos momentos en una misma trayectoria? ¿Cómo se dan, si existen, las relaciones entre mujeres que trabajan en la industria, pero con distinto perfil? Este último interrogante abre las puertas a la elaboración de lo que provisoriamente denominamos “perfiles cualitativos”. Esto es: a partir del análisis en profundidad de las entrevistas realizadas es posible comenzar a identificar rasgos comunes, experiencias compartidas, representaciones análogas en esta variedad de mujeres y sobre todo, entre aquellas que en un primer momento podrían parecer inconmensurables. Nuestro proyecto aspira así a visibilizar la participación femenina en la industria hidrocarburífera y a identificar obstáculos y potencialidades comunes que permitan la formulación de políticas tendientes a la mayor equidad de género en el sector y, con ello, en la región.

Bibliografía

- BAEZA, Brígida (2010). “‘Andá a tirar la caña...!’ Desigualdades económicas y desigualdades simbólicas: el caso de los trabajadores petroleros en Comodoro Rivadavia, Chubut”. *IV Jornadas de Historia Social de la Patagonia, Universidad Nacional de La Pampa*. Santa Rosa, septiembre, (paper).
- BOURDIEU, Pierre (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.
- BOSCHETTI, Alejandra (2015). “El impacto de la implementación de políticas de género en la industria petrolera. El caso neuquino”. *La Aljaba. Segunda Época*. Vol. XIX. Págs. 135-151.
- CALOZ-TSCHOPP, Marie Claire y VELOSO BERMEDO, Teresa. (Co-dirs.) (2012). *Tres feministas materialistas. Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, Paola Tabet (Vols. I y II)*. Santiago de Chile: Escaparate Ediciones.
- CARRASCO, Cristina (2003). “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”. *Mujeres y Trabajo: cambios impostergables*. Porto Alegre: Veraz Comunicação.
- CICCIARI, María Rosa (2005). “Indicadores laborales y percepciones sobre los mercados de trabajo desde un enfoque regional. Análisis de la situación ocupacional de los aglomerados urbanos de la región

- patagónica, 2001-2004". *Séptimo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo* (paper).
- CICCIARI, María Rosa (2012). "Por el amorcito que le tenemos a YPF. Una etnografía sobre el significado de ser ypefiano en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz". Universidad Nacional de Misiones, tesis de maestría en Antropología Social (inédita).
- CISELLI, Graciela (2002). "Trabajo femenino en la industria petrolera de Chubut (1919- 1962)". *Andes. Revista de la Universidad Nacional de Salta*. N° 13.
- COFFEY, Amanda y ATKINSON, Paul (2003). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- ESQUIVEL, Valeria (Ed.) (2012). *La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región*. Santo Domingo: ONU Mujeres.
- GUTIERREZ, Alicia (2007). "Herramientas teórico-metodológicas de un análisis relacional para los estudios de la pobreza". *Ciencia, docencia y tecnología*. No. 35. Pág 15-33.
- GUZMAN, Virginia y MAURO, Amalia (2004). "Las trayectorias laborales de mujeres de tres generaciones: coacción y autonomía". Todaro, Rosalba y Yáñez, Sonia. *El trabajo se transforma: relaciones de producción y relaciones de género* (Págs. 209-245). Santiago de Chile: Centro de Estudios de la Mujer.
- MANSILLA, Diego (2013). *Análisis de Diagnóstico Tecnológico Sectorial Petróleo y Gas*. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación.
- MARQUES, Daniel Cabral (2008). "La constitución de una 'gran familia': Trabajadores e identidades sociolaborales en las empresas extractivas estatales de la Patagonia Austral". *Actas de las III Jornadas de Historia de la Patagonia*. Bariloche, Río Negro (paper).
- MUÑIZ TERRA, Leticia (2016). "Narrativas femeninas sobre el mundo del trabajo: reflexiones en torno al trabajo de las mujeres en sectores masculinizados del mercado laboral". *Papeles de Trabajo*, Nro 31. Pp. 65-78. Disponible en: <https://rehip.unr.edu.ar/handle/2133/12785>.
- Observatorio en Economía de los Recursos Naturales en Patagonia Sur (2011) Estado de situación del aglomerado Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. [On Line]. Disponible: <http://es.slideshare.net/cesarvicenteherrera/comodoro-rivadavia-yradatilly-final>
- PETERS, Stephan (2016). "Petróleo, política y sociedad en Chubut Reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo". En: *Revista Identidades*, Dossier 3, Año 6, Septiembre, Págs. 144-164.
- PICCHIO, Antonella (1994). "El trabajo de reproducción", en Borderías, C.; Carrasco, C. y Alemany, C. *Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales*. Madrid: Fuhem- Icaria. Págs. 453-490.
- PICCHIO, Antonella (2001). "Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida", documento presentado en la Conferencia Inaugural de las Jornadas "Tiempos, trabajos y género", Barcelona, Universidad de Barcelona.
- TODARO, Rosalba y YÁÑEZ, Sonia (2004). *El trabajo se transforma: relaciones de producción y relaciones de género*. Santiago de Chile: Centro de Estudios de la Mujer.

MESA 4: INNOVACIONES METODOLÓGICAS

Reproducción social y estrategias metodológicas: el abordaje del consumo como expresión de las desigualdades de clase en familias cordobesas.

Alicia Gutiérrez y Héctor Mansilla
IDH – UNC – CONICET
FCC – FCS – UNC
gutierre@ffyh.unc.edu.ar
homansil@hotmail.com

Resumen

En esta ponencia haremos referencia a una investigación en marcha sobre las desigualdades en el consumo de las familias cordobesas, especialmente en la estructura de sus gastos como parte de sus estrategias de reproducción social, focalizando especialmente en nuestra estrategia metodológica. En la dimensión cuantitativa, apelamos a un Análisis de Correspondencias Múltiples y una Clasificación Jerárquica Ascendente, tomando como base la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2012/2013 para el aglomerado Gran Córdoba. En este sentido, haremos hincapié en nuestros primeros resultados, para proponer un modo de articular esta estrategia metodológica con la selección de casos típicos y el diseño de una etapa cualitativa.

Palabras clave: CONSUMO - DESIGUALDAD - CLASES - REPRODUCCION SOCIAL
ESTRATEGIA METODOLOGICA

1. Introducción

En esta ponencia haremos referencia a una investigación en marcha sobre las desigualdades en el consumo de las familias cordobesas, especialmente en la estructura de sus gastos como parte de sus estrategias de reproducción social, focalizando especialmente en nuestra estrategia metodológica.

Dicha estrategia es complementaria de otras que venimos utilizando para el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina. Y en ese sentido, planteamos esta investigación a la vez como continuidad y complemento de una más general, que analiza el conjunto de las estrategias de reproducción social de las distintas familias que pertenecen a diferentes clases

y fracciones de clase, según la estructura que conforman el espacio social cordobés, en el sentido bourdieusiano (Bourdieu, 1990), y que combina un abordaje articulado de dimensiones cuantitativas y cualitativas (Gutiérrez y Mansilla, 2015 y 2016). Como primera etapa, propusimos una construcción relacional de las clases y fracciones del Gran Córdoba a partir del conjunto de recursos -fundamentalmente económicos y culturales- que disponen las familias para su reproducción, apelando a la utilización de métodos de estadística descriptiva multidimensional. Tomamos como base la información captada por la "Encuesta Permanente de Hogares" (EPH) en los terceros trimestres de los años 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013, y planteamos complementarla con informaciones derivadas de otras fuentes, tales como la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC, 2011) y la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (2012-2013). A partir de estos resultados, en la segunda etapa analizamos las prácticas, interacciones y representaciones (sentidos vividos) concretas de las estrategias y del modo como se articulan con las diferentes posibilidades y límites relativos a las condiciones de existencia de cada clase y fracciones de clase. Apelamos fundamentalmente a estrategias metodológicas tales como entrevistas, observación e historias de vida, a partir de las cuales reconstruimos trayectorias individuales y familiares que son representativas de cada clase y fracción de clase.

Focalizar ahora en el consumo de bienes y servicios como parte constitutiva de la reproducción de la desigualdad social entre esas familias, implica considerar un conjunto de prácticas específicas que, por un lado, sólo pueden explicarse y comprenderse en el marco general de los sistemas de estrategias de reproducción social familiares (Bourdieu, 2011; Gutiérrez, 2004 y 2007). Por otro lado, pueden ser analizadas desde la conformación de diferentes "estilos de vida" y por ello, complementar la idea de relaciones de clase objetivas que venimos trabajando, y agregar una nueva dimensión a los sentidos vividos que hemos reconstruido.

Problematizando estos aspectos en el mismo marco general metodológico que contempla la articulación de momentos objetivistas y subjetivistas, abordamos el consumo como una práctica enclasada y enclasante (Mansilla, 2011 y 2017). La propuesta asume así, que el consumo constituye una práctica social donde los modos de acceso y apropiación diferenciales de bienes y servicios conforman un elemento central en la constitución de las

clases sociales y en las condiciones de existencia social: lugar donde se juega relacionamente la reproducción de la posición social, los principios de clasificación y visión ligados a ella y, con esto, la propia estructura social con sus mecanismos de dominación.

En la dimensión cuantitativa, apelamos ahora también a un Análisis de Correspondencias Múltiples y una Clasificación Jerárquica Ascendente, tomando como base la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2012/2013 para el aglomerado Gran Córdoba. En esta ponencia haremos hincapié en nuestros primeros resultados, para proponer un modo de articular esta estrategia metodológica con la selección de casos típicos y el diseño de una etapa cualitativa.

En efecto, en primer lugar, señalaremos diferentes aspectos implicados en nuestro trabajo: preparación de la base, selección de variables y minería de datos; el estudio relacional del consumo a partir de un análisis de correspondencias múltiples junto al armado de clases de gastos. Esto es las tipologías de consumo de los hogares y sus condicionamientos asociados.

Finalmente, los resultados de esta estrategia metodológica para la descripción de los gastos de los hogares como un componente central de la reproducción social, nos permitirá plantear líneas de continuidad a fin de enriquecer este estudio y articular estrategias cualitativas tendiente a captar los sentidos vividos de estas prácticas.

2. Primeros pasos: preparación de la base, selección de variables y minería de datos

En términos metodológicos la forma en que estamos trabajando el análisis de los datos que provee la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2012 /2013 para el aglomerado Gran Córdoba implicó:

1. Trabajar con una única base unificada y sobre una única unidad de análisis. Y esto porque desde nuestra perspectiva teórica el agente de las estrategias de reproducción y de consumo, es la familia (como unidad doméstica –hogar– como así también si consideramos imputar a esta unidad los gastos realizados por cada uno de sus miembros) por lo que tomamos la “base hogares” como aquella que articularía nuestro análisis y a ella apareamos variables específicas de las otras bases. En particular, fueron anexadas variables que remiten a su equipamiento como así también a características sociales, laborales y educativas de su referente (RH)¹.

2. La producción de nuevas variables: la base original nos proveía el dato en torno al “gasto total del hogar” y también información sobre la cantidad de adultos equivalentes que componen dicha unidad. Con ellas generamos el gasto total por adulto equivalente en tercios (bajo, medio y alto gasto del hogar por adulto equivalente). Del mismo modo procedimos en cada dominio que caracterizan y componen el consumo total de los hogares (“alimentos y bebidas”, “indumentaria y calzado”, “vivienda”, “equipamiento y funcionamiento del hogar”, “atención médica y gastos para la salud”, “transporte y comunicaciones”, “esparcimiento y cultura”, “educación” y “bienes y servicios varios”).

3. Estos nueve dominios fueron ponderados de una doble manera: con relación al número de adultos equivalentes del hogar y, a la vez, en función del consumo total del hogar considerado también según los adultos equivalentes que lo conforman. Sobre el comportamiento de estas variables se establecieron los rangos correspondientes a un alto, medio o bajo gasto por adulto equivalente.

¹ La selección de un Referente de Hogar tiene por finalidad unificar los diversos criterios utilizados por los miembros de un hogar para designar a quien consideran el Jefe. Para ver los criterios de selección de los referentes de hogar como así también las características seleccionadas como recursos o capitales que éste transmite al grupo familiar, ver Gutiérrez y Mansilla (2015).

4. Búsqueda de asociaciones significativas entre los diferentes rubros y entre cada dominio y los tramos del gasto total. Para ello realizamos una minería de datos² que permitió caracterizar cada grupo conformado por los niveles del gasto total por adulto equivalente y los de cada rubro junto al “ingreso total de hogar” (medido en quintiles). Todo indicó la pertinencia de realizar un análisis factorial de correspondencias múltiples (ACM) para evaluar cómo aquellas asociaciones se distribuían de manera relacional y qué tipologías podían inscribirse en ese sistema de relaciones.

3. De la minería al análisis relacional: Una tipología de los gastos

Asumimos que las modalidades que adoptan las prácticas de consumo de los hogares o bien la estructura de sus gastos sólo pueden ser comprendidos en su dinámica relacional. Así, cada consumo, a modo de toma de posición, puede ser explicado y comprendido dentro del sistema de relaciones que lo contiene, integra y define.

A fin de dar cuenta de esta estructura, nuestra propuesta se orientó a construir el sistema de relaciones definido a partir de un conjunto de variables activas relativas a los gastos realizados por los hogares del Gran Córdoba conforme los nueve rubros en los que ordena su relevamiento la ENGHo, ponderados por el número de adultos equivalentes de cada hogar y a la vez según el gasto total por adulto equivalente. Todas estas variables activas se encuentran estructuradas en base a tres categorías que remiten a un Alto, Medio o Bajo consumo proporcional en cada ítem de referencia. A ellas se sumó el gasto total del hogar por adulto equivalente. El resto de las variables fueron consideradas como ilustrativas. La información que proveen remiten, en general, a las condiciones de posibilidad que habilitan a la vez que limitan los gastos de las familias: las más significativas resultaron ser aquellas que aluden a características del referente del hogar como su sexo, edad, tipo de cobertura médica, su condición y categoría ocupacional de la ocupación principal y su nivel de Instrucción. Otras refieren al hogar, entre ellas su decil de Ingreso per cápita (promedio), el

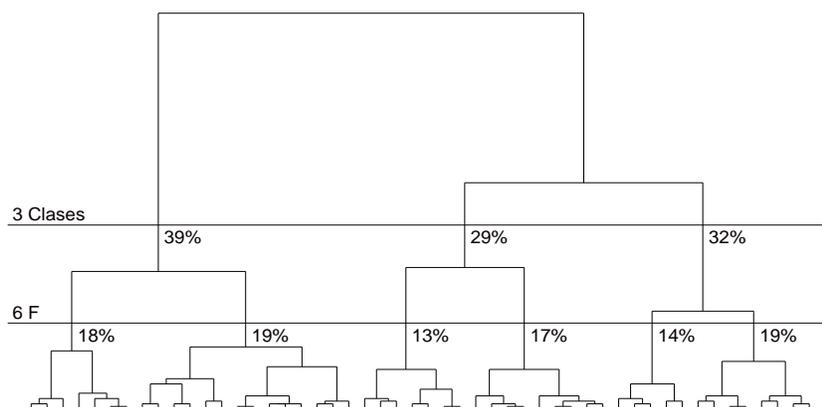
² Esta técnica permite la caracterización de cada categoría de una variable, en este caso los tres valores que conforman el Gasto total por adulto equivalente (Alto, Medio Y Bajo), a partir de las categorías de una o varias variables. El algoritmo realiza pruebas estadísticas y presenta las asociaciones significativas de estos grupos de hogares con las categorías de variables seleccionadas a fin de evaluar su asociación a partir del análisis de diferencias entre proporciones entre cada subgrupo y la muestra global.

ingreso total por adulto equivalente, el tipo de hogar y la cantidad de miembros; otras, a la vivienda (como el régimen de tenencia) y otras a su equipamiento.

El análisis del comportamiento de la distribución de la inercia en los primeros factores nos llevó a tomar los 4 primeros –estos acumulan un 32,92% del total de la inercia, o bien el 95,28% según la fórmula de corrección de valores propios de Benzécri–. Sobre estos factores realizamos una Clasificación Jerárquica Ascendente (CJA) cuyo dendrograma resultante dio un corte óptimo para tres grandes clases o tipos de consumos y una segunda partición conformada por seis clases que se corresponden a fracciones de las tres anteriores (ver gráfico N° 1).

Como puede observarse, la partición inicial muestra tres grandes clases compuestas por un 39%, 29% y 32% respectivamente. A su vez permite suponer, al interior de estos agrupamientos constituidos por las principales diferencias, la existencia de grupos o fracciones conformados por diferencias secundarias. Así, una segunda partición posibilita explorar el número y composición de cada una de ellas.

Gráfico N° 1: Dendrograma de la CJA para los primeros 4 factores (95,28% de inercia). Particiones para 3 clases y 6 fracciones.

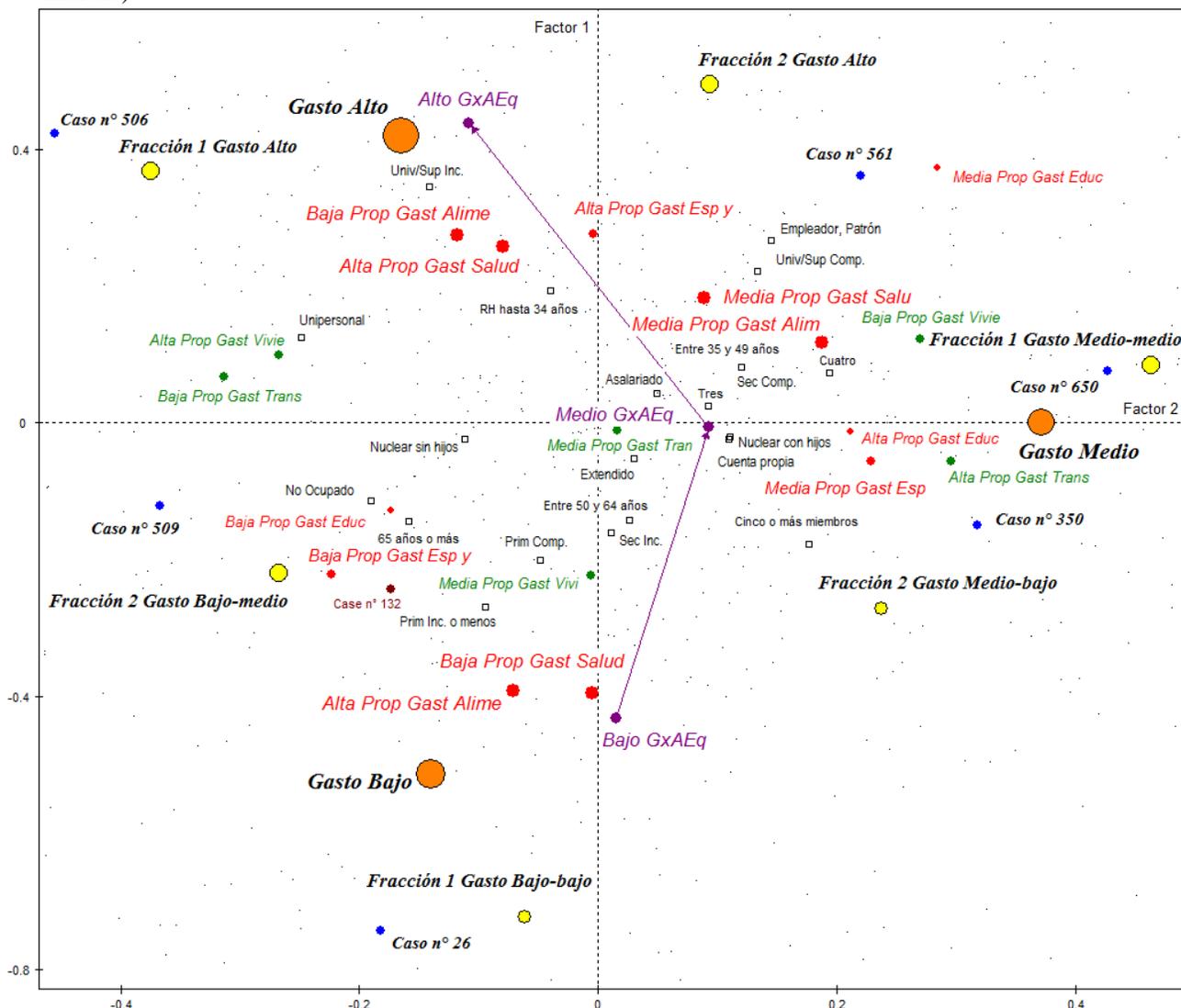


Las clases y fracciones se encuentran proyectadas, a partir de la ubicación del baricentro de la nube que conforma cada agrupamiento, en el Diagrama 1.

4. Estructura del gasto: Tipologías del consumo

Una lectura del Diagrama 1.1 muestra al primer factor (representado en sentido vertical) oponiendo las familias que realizan el mayor gasto considerado en términos de adulto equivalente (Gasto Alto) a aquellas con el menor gasto (Gasto Bajo). Sobre el centro del primer factor, pero desplazadas hacia la derecha, se encuentran aquellas que erogan un gasto medio por adulto equivalente.

Diagrama 1: La estructura del gasto de los hogares cordobeses. 1° y 2° factor (79,3% de inercia)



Todo parece indicar que este primer factor se ordena conforme al volumen del gasto total y así decidimos mostrarlo en el diagrama a través de la línea que une las categorías de esa variable. Expresando el 63,3% de la inercia total (siempre a partir de la corrección de los

valores propios), se encuentra conformado principalmente por las contribuciones de las variables que remiten al Gasto total (26,9), al gasto en Atención Médica del RH (18,8) y el gasto en Alimentos y Bebidas (17,1). También contribuyen, pero en menor medida, los gastos en Esparcimiento y Cultura y Educación que, como veremos inmediatamente, poseen una mayor incidencia en el segundo factor.

En el sentido vertical del plano y como si se tratara de un reflejo invertido, a la asociación con el alto gasto en la parte superior le corresponde una asociación con el bajo gasto en la región inferior del plano. Quienes realizan las mayores erogaciones, ubicados en la región superior del plano y asociados al Alto Gasto General por adulto equivalente, poseen una baja proporción de gastos en Alimentos y Bebidas, mientras que este rubro es el que más peso proporcional posee en la estructura del gasto de quienes realizan un menor gasto por adulto equivalente. Se trata de familias ubicadas en la región inferior y asociadas a un Bajo Gasto General por adulto equivalente. La misma oposición se marca con el peso proporcional que obtiene el gasto en Salud, los Consumos en Esparcimiento y Cultura y el gasto en Educación.

Por otra parte, el segundo factor expresa el 15,97% de la inercia total y a su conformación contribuyen centralmente el gasto en Transporte y Comunicación (24,6), Vivienda (19,2), Educación (17,3) y Esparcimiento y Cultura (13,5). Esta segunda dimensión –desplegada en el sentido horizontal del diagrama– muestra diferencias secundarias que permiten observar desigualdades entre aquellas familias que poseen un Gasto General por adulto equivalente de nivel medio. El análisis muestra que este factor opone a familias con un gasto en vivienda (alquileres, expensas, etc.) con un mayor peso relativo sobre sus consumos y con gasto en transportes y comunicación de escasa relevancia, a aquellas familias para quienes estos pesos relativos se invierten. Todo parece indicar que una diferente conformación familiar, en tipo de hogares y número de miembros, afecta de manera determinante su estructura de gastos. Lo mismo sucede con el peso relativo de los gastos en educación: hogares unipersonales o nucleares sin hijos se diferencian de aquellas familias numerosas para quienes la educación posee un alto peso relativo en la composición de sus gastos generales.

Si bien el análisis de correspondencias se muestra como un método apropiado para poner de manifiesto diferentes conformaciones del gasto de los hogares y expresarlas en términos relacionales, no siempre resulta fácil su visualización a partir de un plano factorial. La

necesidad de resumir visualmente a sus dos primeras dimensiones la naturaleza multidimensional del fenómeno, termina por dificultar aún más la posibilidad de presentar a simple vista aquella estructura subyacente. Sin embargo, es posible dar cuenta analíticamente de la composición del gasto total de las familias, estableciendo tipologías o “clases” de estructuras del gasto total, y de sus condicionamientos sociales asociados, a partir de las proximidades o ubicaciones relativas en aquel espacio.

5. Tipologías y condicionamientos asociados

Los métodos de clasificación brindan estadísticos complementarios que permiten la caracterización de cada clase presentadas en tablas que contienen las variables y modalidades asociadas significativamente a las y fracciones de clase y ordenadas conforme su valor de asociación³.

5. 1. Familias de Gasto Alto

El grupo de familias asociado con una alta capacidad de gasto por adulto equivalente está conformado por un 39% de casos y su baricentro se ubica en la región superior izquierda del diagrama. Se trata de una clase de familias que presenta asociaciones significativas con un alto gasto e ingresos por adulto equivalente; se asocia a hogares unipersonales, referentes femeninos de hasta 34 años y estudios superiores. La estructura del gasto asociada a esta clase muestra altos gastos en esparcimiento y cultura como así también en atención médica (prepaga), gastos en vivienda (departamentos bajo régimen de alquiler) y altos gastos en equipamiento y funcionamiento del hogar (a modo de ejemplo se ilustra con la posesión de pc y conectividad). Como correlato la clase se encuentra asociada a un bajo gasto en alimentos y transporte y un gasto medio en educación.

Este grupo mostró dos claras fracciones de aproximadamente un 19% de hogares. Las tablas 1 y 2 describen la estructura de sus gastos y las características asociadas que las describen.

³ Se presentan las características influyentes ordenadas por el p-valor asociado a la prueba estadística y su valor-test. Este estadístico se distribuye según una normal estandarizada, por lo que cuando sea superior a 2 se considera que una característica es influyente, con un nivel de significación asociado de 0,05.

Tabla 1: Fracción 1 de Gasto Alto - 18.62%

Variable y Categoría Asociada		Valor-test	Descripción
Gasto C1 Alimentos y bebidas x AE	Baja	12,16	Fracción de la clase de hogares con alto gasto que, con un 18,6% de los casos, se ubica en el cuadrante superior izquierdo del diagrama. Se diferencian de la segunda fracción por estar asociados a hogares unipersonales, con altos ingresos y formación universitaria de un referente joven y asociado significativamente al género femenino. Alquilan departamentos de uno a dos ambientes y poseen una estructura de gastos que se orienta a la vivienda (alquiler, expensas, etc.), la salud (prepaga), los gastos en esparcimiento y cultura y servicios varios. A su vez realizan gastos medios en equipamiento del hogar y gastos bajos en educación y transporte
Gasto C3 Vivienda x AE	Alta	11,73	
Régimen de tenencia	Inquilino	10,69	
Tipo de vivienda	Departamento	9,53	
Gasto total x AE	Alto	9,36	
Tipo de hogar	Unipersonal	6,22	
m2 de la vivienda	Hasta 50m2	5,48	
Cobertura médica del RH	Prepaga	5,45	
Edad del RH	Hasta 34 años	5,42	
Gasto C8 Educación x AE	Baja	5,39	
Nivel de Instrucción del RH	Univ/Sup Inc.	5,37	
Gasto C5 Atención médica x AE	Alta Salud	4,84	
Gasto C6 Transp. y com. x AE	Baja	4,71	
Computadora	Posee	4,05	
Nivel de Instrucción del RH	Univ/Sup Comp.	3,91	
Automóvil	No posee	3,71	
Cantidad perceptores de ingreso	Uno	3,69	
Gasto C7 Esparc y cultura x AE	Alta	3,25	
Quintil de Ing total hogar x AE	5°Q Ing xAEq	2,97	
Sexo del jefe del hogar	Mujer	2,74	
Gasto C4 Equip. y func. hogar x AE	Media	2,64	
Gasto C9 Bs y Ss varios x AE	Alta	2,51	
Ambientes de la vivienda	Dos	2,35	

Tabla 2: Fracción 2 del Gasto Alto - 18.69%

Variable y Categoría Asociada		Valor-test	Descripción
Gasto total x AE	Alto	11,68	La segunda fracción de la clase de gasto alto se ubica desplazada hacia la zona del cuadrante superior derecho del diagrama. Representa posiciones que se diferencian de la otra fracción fundamentalmente por el tipo de hogar, que funciona como condicionamiento de la estructura de sus gastos que continúan siendo altos. Así referentes de mayor edad que los de la otra fracción, conformaciones de hogares nucleares con hijos, de unos cuatro miembros y poseedores de viviendas de entre 100 a 200 metros cuadrados; estas familias difieren en la estructura de sus gastos principalmente por el peso diferencial que ocupa la educación, la indumentaria y los alimentos y bebidas. A su vez, bajan los gastos en vivienda y comienzan a tener mayor importancia relativa los gastos destinados al transporte.
Gasto C2 Indum. y calzado x AE	Media	9,69	
Gasto C7 Esparc. y cultura x AE	Alta	8,74	
Decil de Gasto Gral x AE	10° Decil	8,26	
Gasto C3 Vivienda x AE	Baja	7,27	
Conexión a Internet	Posee	7,15	
Gasto C5 Atención médica x AE	Alta	6,87	
Computadora	Posee	6,02	
Gasto C8 Educación x AE	Alta	5,72	
Ing total hogar x AE	Alto	5,53	
Edad del RH	35 y 49 años	5,41	
Camioneta	Posee	5,39	
Gasto C8 Educación x AE	Media	5,12	
Gasto C4 Equip. y func. hogar	Alta	4,67	
Quintil de Ing total hogar x AE	5°Q Ing xAEq	4,35	
¿Dispone de cochera?	Sí	4,27	
Gasto C6 Transp y com x AE	Media	4,26	
Cobertura médica del RH	Sólo obra social	4,23	
Propietario de auto	Propietario	3,98	
Propietario de auto 2	Propietario	3,90	
Tipo de hogar	Nuclear/ hijos	3,66	
Gasto C1 Alimentos y bebidas	Media	3,05	
Cond. y Cat. de la Ocup. Princ.	Empleador, Pat.	3,03	
Cantidad de miembros del hogar	Cuatro	3,02	
Gasto C9 Bs y Ss varios x AE	Media	3,00	
m2 cubiertos de la vivienda	De 101 a 200	2,99	
Tenencia de la vivienda	No inquilino	2,75	

Con la intención de mostrar un caso particular entre los posibles de cada fracción, seleccionamos aquellos que presentan una menor distancia a la posición más representativa de cada una (baricentro de la nube de puntos). A partir de la identificación de los casos, se hizo un retorno a las diferentes bases que conforman el relevamiento, donde se encuentra la

información detallada de los gastos (rubros, artículos, tipo de comercio y forma de pago, etc.).

Como representativo de la Fracción 1, seleccionamos para la caracterización nuestro caso N° 506. Se trata de un hogar unipersonal, con referente mujer de 25 años de edad, ocupada, asalariada en un único empleo no registrado, en una empresa familiar, con una carga de 15 hs. semanales. Este trabajo constituye su único ingreso (no percibe cuota alimentaria, ni alquileres, ni transferencias, ni asignaciones o subsidios) de 2833\$ (638 dólares, segundo trimestre de 2012). Posee estudios de nivel superior no universitario incompletos: en el momento del relevamiento asistía a un establecimiento educativo estatal. Es soltera, tiene obra social y prepaga por contratación voluntaria. Vive en esa vivienda desde hacía más de 6 meses; es un departamento alquilado, de un grupo de cuatro viviendas. Tiene un ingreso per cápita ubicado en el 8° decil, mientras que sus gastos por adulto equivalente corresponden al 9° decil del aglomerado.

En su estructura de gastos, adquiere el mayor peso relativo (aproximadamente un 48% de su gasto total) el gasto en vivienda (alquiler, gastos comunes, servicios); luego le siguen en importancia el gasto en esparcimiento y cultura (25%). El rubro “alimentos y bebidas” ocupa el tercer lugar (18%); en Equipamiento y funcionamiento del hogar (adquisición de artículos y reparaciones y servicio doméstico) eroga poco menos del 10% de sus ingresos, quedando el resto para transporte, educación e indumentaria.

Como representativo de la Fracción 2, seleccionamos para la caracterización nuestro caso N°561. Se trata de un hogar nuclear con hijos, de tres miembros, con referente varón de 43 años de edad, ocupado, abogado asalariado en dos empleos, con una carga horaria de más de 50 hs. semanales, con un ingreso total de 18666, 67\$ (4100 dólares, tercer trimestre de 2012). Posee estudios de nivel universitario completos y de posgrado en curso. La cónyuge es una mujer de 43 años, profesional cuentapropista, trabaja 25 hs. semanales, con ingresos de 4000\$ (896 dólares, en el mismo período). Posee estudios universitarios de posgrado completos. La familia tiene obra social y vivía en esa vivienda desde hacía más de 6 meses; es propietaria de una casa totalmente equipada, de tres habitaciones, de aproximadamente 100m². Tiene un ingreso per cápita y gastos por adulto equivalente ubicados en el 10° decil del aglomerado.

En su estructura de gastos, adquiere el mayor peso relativo (aproximadamente un 24% de su gasto total) el gasto en “alimentos y bebidas”, le sigue el gasto en transporte (18%), le sigue en importancia el gasto en indumentaria (15%) y luego el rubro Equipamiento y funcionamiento del hogar (adquisición de artículos y reparaciones y servicio doméstico) (12%) y gastos de vivienda (alquiler, gastos comunes, servicios) (10%). En gastos de educación y esparcimiento y cultura, erogan un 5% y 7% respectivamente. Tienen una capacidad de ahorro de alrededor del 10% de sus ingresos.

5. 2. Familias de Bajo Gasto

Señalamos anteriormente que, como una especie de reflejo invertido, el primer factor opone a este primer grupo de gasto alto, aquellas familias que realizan un bajo nivel de gasto total por adulto equivalente. Esta clase está compuesta por aproximadamente un 32% de casos ubicados en su mayoría en la zona inferior del diagrama y su baricentro, proyectado como “Gasto Bajo”, se encuentra desplazado hacia la región inferior izquierda del diagrama. A diferencia de las familias con un alto gasto por adulto equivalente, esta clase presenta asociaciones significativas con un bajo gasto al igual que con un bajo ingreso por adulto equivalente. La clase se asocia a hogares con referentes de más de 50 años y una baja escolarización. Sus bajos niveles de ingreso, sumado a viviendas con un bajo nivel de equipamiento, funcionan como condicionantes de una estructura de gastos que se encuentra asociada a un alto peso proporcional de los alimentos y bebidas junto a bajos recursos destinados a la atención médica, al esparcimiento, la educación y la indumentaria. Posee una estructura de gastos ligada a una economía de subsistencia donde el mayor peso relativo lo posee la alimentación y el pago de los servicios correspondiente a la vivienda.

Este grupo mostró dos fracciones. La primera, con un 14% de hogares aproximadamente, está asociada familias numerosas y a los valores más bajos en gastos e ingresos y se desplaza hacia la zona inferior del diagrama. La segunda fracción, con aproximadamente el 19% de casos se encuentra asociada a hogares unipersonales de bajos recursos y con referentes femeninos de edad avanzada. Se aproxima más a las zonas centrales del diagrama, aunque marca una fuerte oposición con típicas familias con un gasto de nivel medio –expresado por

las distancias en el sentido del segundo factor-. Las tablas 3 y 4 describen la estructura del gasto y las características asociadas que describen ambas fracciones

Tabla 3: Fracción 1 del Gasto Bajo (Bajo – bajo) - 13.63%

Variable y Categorías Asociadas		Valor-test	Descripción
Gasto total x AE	Bajo	14,20	Familias asociadas a un bajo gasto total por adulto equivalente fruto de los condicionamientos presentes en esta clase: un bajo ingreso por adulto equivalente ligado al alto número de miembros de estos hogares y referentes con bajo nivel de instrucción y edades superiores a los 50 años. Esta fracción posee una estructura de gastos que, coincidente con su clase de origen, posee un alto peso relativo de los alimentos y bebidas. Bajo peso para los gastos en salud y referentes sin cobertura médica, indican una fuerte dependencia del sistema público. Bajo gasto en esparcimiento como así también en la vivienda y su equipamiento. Completan el cuadro, asociaciones con categorías bajas en gastos de indumentaria, bienes y servicios y educación. Se destaca el bajo equipamiento presente en los hogares de esta clase (no poseen heladeras con freezer ni lavarropas automático, como así tampoco automóvil, extractor o televisor entre otros elementos del hogar) y la importancia relativa que adquieren los gastos en transporte.
Gasto C1 Alimentos y bebidas	Alta	12,70	
Gasto C5 Atención médica	Baja	10,51	
Horno a microondas	No posee	7,83	
Lavarropa no automático	Posee	7,31	
Conexión a Internet	No posee	7,30	
Gasto C7 Esparc. y cultura	Baja	6,97	
Computadora	No posee	6,94	
Gasto C3 Vivienda	Media	6,58	
Aire Acondicionado	No posee	6,31	
Tenencia de la vivienda	No inquilino	5,80	
Gasto C4 Eq. y fun.c hogar	Baja	5,39	
Ing total hogar x AE	Bajo	4,75	
Gasto C2 Indument. y calzado	Baja	4,74	
Cobertura médica del RH	Sin cobertura	4,26	
Edad del RH	Entre 50 y 64 años	3,87	
Ocupación del jefe del hogar	No ocupado	3,61	
Miembros del hogar	Cinco o más	3,61	
Extractor de aire/purificador	No posee	3,43	
Estufa a gas tiro balanceado	No posee	3,33	
Gasto C6 Transp. y com. x AE	Media	3,29	
Tipo de vivienda	Casa	3,29	
Nivel de Instrucción del RH	Prim Comp.	3,26	
Habitaciones de la vivienda	Uno	3,15	
Nivel de Instrucción del RH	Sec. Inc.	3,09	
Gasto C9 Bs. y Ss. varios	Baja	2,87	
Televisor	No posee	2,81	
Heladera sin freezer	Posee	2,59	
Gasto C8 Educación	Baja	2,52	
Automóvil	No posee	2,50	
Cantidad percep. de ingreso	Tres	2,47	

Tabla 4: Fracción 2 del Gasto Bajo (Bajo – Medio) – 18,80%

Variable y Categorías asociadas		Valor-test	Descripción
Gasto C8 Educación	Baja	9,00	<p>La segunda fracción de la clase de bajo gasto se ubica en la zona central izquierda del diagrama y representa posiciones donde, a diferencia de los hogares numerosos de la fracción anterior, prevalecen hogares unipersonales, con referentes mujeres y asociados a edades superiores a los 65 años. Estos condicionantes conforman un gasto general cercano al nivel medio y una estructura donde las características de la clase de origen se modifican en intensidad. Así, si bien la alta proporción que ocupa el gasto en alimentos y bebidas se mantiene, aumenta la asociación con un bajo gasto en educación y transporte. El gasto en atención médica continúa siendo bajo pero ahora la asociación es menos significativa y pasan a ser altos los gastos en bienes y servicios y en el equipamiento del hogar</p>
Gasto C6 Transp. y com.	Baja	8,90	
Gasto C1 Alimentos y bebidas	Alta	8,28	
Computadora	No posee	8,03	
Conexión a Internet	No posee	7,55	
Gasto total x Ad Eq	Medio	6,41	
Automóvil	No posee	5,89	
Gasto C5 Atención médica	Baja	4,94	
Nivel de Instrucción del RH	Prim Inc.	4,88	
Edad del RH	65 años o más	4,76	
Ocupación principal	No Ocupado	4,08	
superficie de la vivienda	Más de 200 m2	3,48	
Estufa a gas tiro balanceado	No posee	3,30	
Horno a microondas	No posee	3,18	
Gasto C7 Esparc. y cultura	Baja	3,17	
Tipo de vivienda	Casa	3,06	
Gasto C9 Bs. y Ss. varios	Alta	3,05	
Gasto C4 Eq. y func. hogar	Alta	2,97	
Ingreso per cápita (prom.)	1° Decil	2,93	
Extractor de aire/purificador	No posee	2,71	
Tipo de hogar	Unipersonal	2,67	
Aire Acondicionado	No posee	2,65	
Lavarropa automático	No posee	2,62	
Cobertura médica	No	2,59	
Sexo del RH	Mujer	2,46	

Procediendo de igual modo que en las familias de Gasto Alto, seleccionamos para las de Bajo Gasto, los siguientes casos:

Como representativo de la Fracción 1, para la caracterización tomamos nuestro caso N°26. Se trata de un hogar extendido, de cuatro miembros, con referente varón de 79 años de edad, inactivo, jubilado, con un ingreso total de 1517\$ (253 dólares, cuarto trimestre de 2013). Posee estudios de nivel primario incompleto. La cónyuge es una mujer de 82 años, inactiva, jubilada, con iguales ingresos y nivel educativo que su esposo. Vive en el hogar un hijo varón del matrimonio, de 40 años, separado, desocupado, con estudios secundarios completos y un

nieto de 15 no ocupado, estudios primarios incompletos. Sólo ambos cónyuges tienen obra social. Vivían en esa vivienda desde hacía más de 6 meses; son propietarios de una casa, de tres habitaciones, de aproximadamente 70m². Tienen un ingreso per cápita del 2° decil y gastos por adulto equivalente ubicados en el 1° decil del aglomerado.

En su estructura de gastos, adquiere el mayor peso relativo (aproximadamente un 93,6 % de su gasto total) el gasto en “alimentos y bebidas”, le sigue en importancia el gasto en indumentaria (2,39%) y luego el rubro y gastos de vivienda (alquiler, gastos comunes, servicios) (2,33%). El gasto en transporte es ínfimo (poco más del 1%), mientras los gastos en equipamiento y funcionamiento del hogar llegan apenas al 0,5%. No se registran gastos en otros rubros (esparcimiento y cultura; educación; bienes y servicios varios y atención médica).

Como representativo de la Fracción 2, seleccionamos para la caracterización nuestro caso N°509. Se trata de un hogar unipersonal, con referente mujer de 59 años de edad, soltera, ocupada, asalariada en ocupación privada, con trabajo registrado y un ingreso total de 1765,72\$ (405,91 dólares, primer trimestre de 2012). No percibe otros ingresos monetarios. Posee estudios de nivel secundario completo. Tiene obra social. Vivía en esa vivienda desde hacía más de 6 meses; es propietaria de una casa, de tres habitaciones, de aproximadamente 200 m². Tienen un ingreso per cápita del 5° decil y gastos por adulto equivalente ubicados en el 7° decil del aglomerado.

En su estructura de gastos, adquiere el mayor peso relativo el consumo de atención médica y gastos en salud (aproximadamente un 57% de su gasto total), le sigue en importancia el gasto en alimentos y bebidas (28%), luego el gasto en transporte (5%) y luego el rubro gastos de vivienda (alquiler, gastos comunes, servicios) (4,2). Los gastos menores corresponden a bienes y servicios varios (2,8%) y gastos en equipamiento y funcionamiento del hogar (2,3%). No se registran gastos en otros rubros (esparcimiento y cultura; educación e indumentaria).

5. 3. Familias de Gasto Medio

Por último, sobre la zona central del diagrama, se encuentra un tercer grupo conformado por familias que se caracterizan por disponer de un nivel medio de gasto total por adulto equivalente. Representan alrededor del 29% de los casos, su baricentro se ubica sobre el centro del diagrama con un marcado desplazamiento hacia la región derecha de este y se identifica como “Gasto medio”. Con un gasto total por adulto equivalente de nivel medio, esta clase se ubica sobre el centro del diagrama con un claro desplazamiento hacia la derecha. La conforman hogares nucleares con hijos y un elevado número de miembros (cinco o más), con ingresos por adulto equivalente medios bajos y referentes asociados al cuentapropismo. Estas características asociadas, se muestran como condicionantes de una estrategia de gasto familiar con un fuerte peso proporcional en los rubros vinculados a la indumentaria y al transporte. A su vez, la posesión de vivienda propia –casa– se traduce en un bajo gasto destinado a este ítem. Por otra parte, la alimentación –en consonancia con el equipamiento del hogar–, los gastos en salud, educación y esparcimiento ocupan un peso medio en la proporción del gasto total.

Tabla 5: Fracción 1 del Gasto Medio (Medio-medio) - 17.22%

Variable y Categorías Asociadas		Valor-test	Descripción
Gasto total x AE	Medio	9,31	<p>Con un 17% de los casos, esta fracción de la clase de gastos de nivel medio mantiene las características asociadas a su clase de origen. Se ubica desplazada hacia la zona del cuadrante superior derecho del diagrama y representa posiciones con el perfil típico de familias con un nivel medio de gasto total.</p>
Gasto C2 Indum. y calzado	Alta	8,29	
Gasto C7 Esparc. y cultura	Media	8,12	
Gasto C3 Vivienda	Baja	7,57	
Gasto C8 Educación	Media	7,53	
Gasto C6 Transp. y com.	Alta	7,23	
Gasto C5 Atención médica	Media	6,50	
Gasto C4 Eq. y func. hogar	Media	5,93	
Gasto C1 Alimentos y bebidas	Media	5,51	
Propietario de auto 2	Propietario	5,40	
Perceptores de ingreso	Cuatro	4,86	
Motocicleta, cuatriciclo	Posee	4,83	
Lavarropa automático	Posee	4,57	
Tenencia de la vivienda	No inquilino	4,49	
Tipo de vivienda	Casa	4,29	
Miembros del hogar	Cinco o más	3,97	
Conexión a Internet	Posee	3,96	
Tipo de hogar	Nuclear con hijos	3,40	
Horno a microondas	Posee	3,37	
Sexo del RH	Varón	3,10	
Ocupación principal	Cuenta propia	2,97	
Computadora	Posee	2,65	
Edad del jefe del hogar	50 a 64 años	2,38	

Tabla 6: Fracción 2 del Gasto Medio (Medio-bajo) - 13.04%

Variable y Categorías Asociadas		Valor-test	Descripción
Gasto C9 Bs y Ss. varios	Baja	11,45	A diferencia de la fracción anterior, este grupo pierde las características asociadas al nivel medio de gasto para presentar un perfil con niveles medios bajos de ingresos, donde los gastos en transporte y educación adquieren mayor relevancia. Poco peso muestran los gastos referidos a bienes y servicios, como así también al equipamiento del hogar y a alimentos y bebidas.
Gasto C4 Eq y func hogar	Baja	8,90	
Gasto C6 Transp y com	Alta	7,45	
Gasto total x AE	Bajo	4,63	
Cantidad perceptores de ingreso	Tres	3,89	
Gasto C8 Educación	Alta	3,82	
Ingreso (promedio)	3° Decil IPCH	3,61	
Sexo del RH	Varón	3,53	
Gasto C7 Esparc y cultura	Media	3,50	
Propietario de auto	Propietario	3,27	
Propietario de auto 2	Propietario	3,20	
Gasto C1 Alimentos y bebidas	Baja	3,00	
Multiprocesadora	No posee	2,84	

Como representativo de la Fracción 1, para la caracterización seleccionamos nuestro caso N°650. Se trata de un hogar extendido, de siete miembros, con referente varón de 38 años de edad, ocupado, asalariado en empleo privado registrado de 40 hs. semanales, con un ingreso total de 7583,33\$ (1266 dólares, cuarto trimestre de 2013). Posee estudios de nivel universitario incompleto. Está casado, su cónyuge es una mujer de 37 años, ocupada, asalariada en empresa privada, como empleada registrada, con 25 hs. semanales, con ingresos de 1796, 58\$ (300 dólares, cuarto trimestre de 2013) y estudios superiores no universitarios completos. Conviven con ellos los padres de la mujer, una pareja de más de 65 años, perceptores de ingresos (de 2270, 68\$ el hombre y 1550\$ la mujer, lo que equivale a alrededor de 640 dólares en el momento del relevamiento, entre ambos); completan el hogar tres hijos menores de 14 años. Todos tienen cobertura médica prepaga. Vivían en esa vivienda desde hacía más de 6 meses; son propietarios de una casa, de cuatro habitaciones, de entre 101 y 200 m². Tienen un ingreso per cápita del 5° decil y gastos por adulto equivalente ubicados en el 6° decil del aglomerado.

En su estructura de gastos, adquiere el mayor peso relativo (aproximadamente un 37,3% % de su gasto total) el gasto en transportes y comunicaciones, le sigue en importancia el rubro alimentos y bebidas (31,7%) y luego los gastos en educación (15,6%), el gasto en bienes y

servicios varios (6%). Luego le siguen en proporciones similares los gastos de equipamiento y funcionamiento del hogar, gastos en vivienda, y, en menor medida aún, esparcimiento y cultura, atención médica e indumentaria.

Como representativo de la Fracción 2, para la caracterización seleccionamos nuestro caso N°350. Se trata de un hogar nuclear con hijos, de cinco miembros, con referente varón de 45 años de edad, ocupado, asalariado en empleo privado registrado en su ocupación principal y cuentapropista en su ocupación secundaria, con un ingreso total de 6666,66\$ (1449,27 dólares, tercer trimestre de 2012). Posee estudios de nivel secundario incompleto. Está casado; su cónyuge es una mujer de 42 años, ocupada, cuentapropista en negocio privado, con ingresos de 2, 983,33\$ (648,55 dólares, tercer trimestre de 2012) y estudios secundarios completos. No perciben otros ingresos. Completan el hogar tres hijos: un varón de 20 años, una mujer de 16 y otro varón de 12 que están estudiando actualmente (estudios universitarios, secundarios y primarios, respectivamente). Todos tienen cobertura médica, a través de la obra social obligatoria. Vivían en esa vivienda desde hacía más de 6 meses; alquilan una casa, de cuatro habitaciones, de entre 101 y 2076 y 100 m². Tienen un ingreso per cápita del 5° decil y gastos por adulto equivalente ubicados en el 4° decil del aglomerado.

En su estructura de gastos, adquiere el mayor peso relativo (aproximadamente un 28,46% % de su gasto total) el gasto en transportes y comunicaciones, con un porcentaje similar, le sigue en importancia el rubro consumos de vivienda (27,37%), luego alimentos y bebidas (23,35%) y luego los gastos en educación (11,20%). Luego, con proporciones bastante menores respecto al gasto total, le siguen los rubros: esparcimiento y cultura (4,33%), bienes y servicios varios (3,16%), equipamiento y funcionamiento del hogar (1,46%) y, en menor medida aún, atención médica y gastos en salud (0,51%) e indumentaria y calzado, que no registra ningún dato en el momento del relevamiento.

6. Reflexiones finales

En esta ponencia presentamos una primera aproximación que pretende no quedarse en la mera descripción de la estructura global de los gastos. Y esto porque, si bien esta descripción nos permitió posicionar a los hogares en un sistema de relaciones y agruparlos en tipologías de gastos comunes, el análisis de dicha estructura echa luz sobre los modos en que las clases

y fracciones de clase conforman diferentes estilos de vida. Nos habilita a mostrar prácticas diferenciales y múltiples maneras particulares con las que estas familias dinamizan su propia reproducción biológica y social y, con ello, la del sistema en su conjunto. En consecuencia, en un primer momento de la construcción y análisis de esos estilos, hemos dado cuenta de las relaciones objetivas identificables en un espacio social concreto: el de los consumos como tomas de posiciones derivadas de las condiciones asociadas a la posición de cada familia y a su conformación particular. De lo que se trata ahora, a modo de avance en un segundo momento analítico, es de dar cuenta de cómo estos estilos conforman un conjunto de relaciones simbólicas que las clases y fracciones mantienen entre sí: formas de percibir la disponibilidad y el uso diferencial de sus recursos y que duplican de ese modo las relaciones de fuerza y de lucha que están en su mismo origen.

Teniendo en cuenta ambos sistemas de relaciones, subrayamos que analizar la dinámica de la reproducción social, supone, por un lado, captar su “sentido objetivo”, es decir, la construcción del espacio pluridimensional de las tomas de posición ajustadas por relaciones de homología estructural a las posiciones donde se insertan las distintas clases de agentes (en el sentido estadístico y como una estructura de relaciones objetivas) y, por otro, dar cuenta de los “sentidos vividos”, de las significaciones asociadas a los estilos de vida en tanto resultantes de las prácticas concretas de consumos que esos agentes ponen en marcha en sus estrategias de reproducción social (Gutiérrez, 2011).

Así, el análisis relacional de la estructura que conforman los gastos de las familias cordobesas, como parte de sus estrategias de reproducción, nos ha permitido una primera descripción de las grandes clases y fracciones que se constituyen como perfiles diferenciados. Esto implica dar un primer paso, que exige ser revisado y profundizado. Su continuidad articula diferentes momentos analíticos: en primer lugar, la selección de los casos típicos de cada clase y fracción de clase como una sub-muestra, que permita ver en detalle los artículos, los montos, las formas de pago y los tipos de negocios utilizados, que componen el gasto en cada rubro. También será pertinente discriminar los gastos realizados a nivel individual, de los que forman parte del hogar de referencia del grupo familiar. A su vez, esta selección de una sub-muestra, a partir de los “parangones” de cada clase y fracción de clase, permitirá avanzar en una etapa cualitativa de la investigación que, fundamentalmente a través de

entrevistas en profundidad, nos habilitará a dar cuenta de los sentidos vividos y su articulación con los sentidos objetivos.

Además, esta primera exploración permitirá ir desarrollando un conjunto de instrumentos teórico-metodológicos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios en su implementación, sobre una base tan compleja, para el estudio comparativo de la estructura de los gastos de las familias cordobesas, a partir de la disponibilidad de las fuentes del relevamiento de la ENGHo 2017/2018, de reciente realización e incorporando los relevamientos de los períodos 1997/1998 y 2004/2005. En suma, de lo que se trata es de dar cuenta de los cambios en la estructura de gastos de los últimos 20 años, analizando cómo los diferentes momentos político-económicos de ese período se ven manifestados en las estrategias de reproducción de las familias y en la conformación de diferentes estilos de vida.

Bibliografía

- Bourdieu, P. (1988). *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus.
- Bourdieu, P. (1990) "Espacio social y génesis de las 'clases'", en: *Sociología y Cultura*, México, Grijalbo, pp. 281-310.
- Bourdieu, P. (2011). "Estrategias de reproducción y modos de dominación". en *Las estrategias de reproducción social*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 31-50.
- Gutiérrez, A. (2004). *Pobre', como siempre: estrategias de reproducción social en la pobreza*, Córdoba, Ferreyra Editor.
- Gutiérrez, A. (2007), "Herramientas teórico-metodológicas de un análisis relacional para los estudios de la pobreza". En: *Ciencia, Docencia y Tecnología*, n° 35, pp.15-33.
- Gutiérrez, A. y Mansilla, H. (2015). "Clases y reproducción social: el espacio social cordobés en la primera década del siglo XXI". En *Política y Sociedad*, vol. 52, n°. 2, pp. 409 – 452.
- Gutiérrez, A. y Mansilla, H. (Compiladores) (2016), *El espacio social de las clases y los instrumentos de reproducción social*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2016.
- Mansilla, H. (2011), *Nuevos consumos culturales. Tecnologías y bienes simbólicos. Aportes teórico-metodológicos*, Villa María, EDUVIM.
- Mansilla, H. (2017), *El consumo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las estrategias de reproducción social de los hogares cordobeses*. Tesis de Doctorado, UBA.

Fuentes:

- INDEC, Base usuaria de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/2013, Región Gran Córdoba, <https://www.indec.gob.ar>

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

El efecto de la maternidad en el salario femenino en Chile. Un análisis a partir de propensity score matching.

Emilia Seissus Ercilla
Pontificia Universidad Católica de Chile
eseissus@uc.cl

Resumen

En Chile se encuentra bien documentada la brecha en el salario que hay entre hombres y mujeres, pero, existe una segunda desigualdad que no ha sido analizada aún por la literatura nacional: la brecha en el salario asociada a la maternidad. La presente investigación tiene por objetivo determinar el efecto de la maternidad sobre los salarios obtenidos por las mujeres trabajadoras en Chile. Para ello se diferencia el efecto en dos márgenes de medición: el extensivo (tener hijos frente a no tener) y el intensivo (tener dos hijos frente a tener uno). Se utiliza una metodología de inferencia causal a partir de Propensity Score Full Matching para definir los efectos de tratamiento, buscando eliminar los posibles sesgos de selección. Se encuentran resultados heterogéneos. Para el margen extensivo, efectivamente existe una disminución del salario hora promedio para las madres de un hijo en relación a las mujeres embarazadas. Sin embargo, para el margen intensivo, las madres de dos hijos obtienen una bonificación por este hijo extra frente a las madres de uno. Además, se confirma la existencia de heterogeneidad individual en la medición del efecto de la maternidad en el salario y de considerarla en la medición.

Palabras clave: SALARIO FEMENINO – MATERNIDAD - INFERENCIA CAUSAL - HETEROGENEIDAD INDIVIDUAL.

Introducción

En Chile se encuentra bien documentada la brecha en el salario que hay entre hombres y mujeres (Brega, Durán & Sáez, 2015; Cruz, 2014; Meller, Valdés & Lara, 2011; Novella, Rucci & Vazquez, 2015; Sepúlveda, Poblete & Yachan, 2015; Thompson, 2012). Sin embargo, existe una segunda desigualdad que ha sido analizada poco por la literatura Latinoamérica y nacional, el hecho de que en casi todos los mercados de trabajo, las mujeres trabajadoras que son madres ganan un menor salario que las mujeres sin hijos (Lundborg, Plug, & Rasmussen, 2016).

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la maternidad sobre los salarios obtenidos por las mujeres trabajadoras en Chile, tanto en el margen intensivo como en el extensivo. Esto último para poder diferenciar entre tener un hijo frente a mujeres sin hijos (margen extensivo) y la diversidad de efectos entre mujeres que ya son madres (margen intensivo). Los datos utilizados provienen de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, del año 2015.

En la literatura se observan cinco perspectivas teóricas relevantes para explicar el efecto de los hijos en el salario femenino. Estas explicaciones son la Teoría del Capital Humano, Hipótesis del Esfuerzo, Características del Trabajo, Hipótesis de la Discriminación Empleador y, finalmente, la Existencia de Heterogeneidad Individual (Gough & Noonan, 2013; Jacobsen Kleven, Landais, & Egholt Sogaard, 2017; Waldfogel, 1995).

El efecto estimado se encuentra controlado principalmente por la existencia de heterogeneidad debido a las características de los grupos de control tanto en el margen intensivo como extensivo. Esta teoría plantea que las mujeres que son madres no tienen en las mujeres sin hijos contrafactuales válidos a la hora de realizar inferencia, debido a que puede existir un efecto de auto selección por motivaciones previas entre las mujeres que quieren y que no quieren ser madres. Además, se plantea que el efecto de los hijos en la maternidad puede ser endógeno al salario, ya que las mujeres pueden optar por tener hijos en momentos específicos de su carrera laboral.

Diseño metodológico

Se utiliza un diseño de inferencia causal en base al propuesto por Neyman-Rubin (Neyman, 1990; Rubin, 2006) con controles estadísticos a partir de la técnica de Propensity Score Full Matching (PSM)⁴, para determinar y analizar las diferencias entre mujeres que solo difieren en su maternidad. Así, se busca demostrar que efectivamente existe un efecto de la maternidad en el salario cuando el modelo estadístico utilizado se encuentra bien especificado.

Se realizaron tres tipos de PSM, PSM por sí mismo, PSM con distancia de Mahalanobis y PSM con un caliper de 2; para los cuales se realiza un test de diferencias estandarizadas⁵ y un ómnibus test a partir del cual se determinó que PSM obtenía mejores balances. Para medir el efecto de tratamiento promedio (ATE) se utiliza IPW (Inverse Probability Weight). Además, se realiza una regresión lineal (OLS) con las mismas covariables para determinar la existencia de diferencias en la medición.

Los grupos se definen de la siguiente manera, en el margen extensivo (tener hijos v/s no tenerlos) el grupo de tratamiento son las mujeres⁶ trabajadoras que tienen un hijo de hasta 10 años de edad⁷ y el de control son las mujeres que se encuentran embarazadas y no poseen hijos previos. En el margen intensivo (cantidad de hijos), el grupo de tratamiento son las mujeres que poseen dos hijos donde el mayor posee hasta 10 años, mientras que el de control las madres de un hijo con el mismo límite etario.

Además, el PSM en su construcción considera elementos de la Hipótesis de las Características del Trabajo y de la Teoría del Capital Humano que no son de carácter longitudinal por la disponibilidad de los datos. Los elementos considerados son educación y

⁴ Técnica semi paramétrica que genera la probabilidad de selección al tratamiento a partir de una regresión logit, el emparejamiento se realiza con uno o más controles a la vez buscando considerar toda la heterogeneidad de la muestra analizada.

⁵ El test de diferencias estandarizadas mide el balance de los grupos donde la hipótesis nula es que el tratamiento (maternidad) es independiente de las covariantes dado el bloque al que pertenezca. El ómnibus test mide si el tratamiento es independiente de las covariantes de los bloques como un todo. Dichas pruebas se estimaron en base a inferencia aleatorizada.

⁶ Se considera a las mujeres de 23 a 49 años.

⁷ Se especificó dicha edad debido a que en la literatura se observó que el efecto de la maternidad en el salario tiende a disminuir en el largo plazo a medida que los hijos crecen (Lundborg et al., 2016; Miller, 2011). Así mismo, Cuando el hijo tiene entre 9 y 10 años el salario de sus madres se recupera (Fernández-Kranz et al., 2010, 2013; Lundborg et al., 2016).

estatus actual del trabajo (puntaje ISEI) en la Teoría del Capital Humano; horas trabajadas, ocupación, formalidad y localización en Características del Trabajo y la Existencia de Heterogeneidad Individual a partir de la formación de los tratamientos. Por otro lado, también se incluyen en la formación de los grupos los siguientes indicadores: edad, vivir en pareja, etnia, chilena, estado de salud y región. Por lo tanto, el efecto a encontrar podría deberse a elementos longitudinales, a la Hipótesis del Esfuerzo o a la Hipótesis de Discriminación del Empleador. La variable resultado es el logaritmo natural del salario hora del trabajo principal, considerando tanto las trabajadoras dependientes como independientes.

Resultados

En la siguiente sección se presentan los resultados para ambos márgenes y la conformación de los grupos, además, de las pruebas de robustez del estudio.

Margen extensivo

Los análisis a continuación se enfocan en el margen extensivo de maternidad, donde el grupo de control son mujeres sin hijos que se encuentran embarazadas y el grupo de tratamiento mujeres que tienen un hijo de máximo 10 años de edad.

En la Tabla 1 se observa el balance de las distintas covariables relevantes para realizar el PSM. Las diferencias más importantes entre ambos grupos se encuentran en la edad, vivir en pareja y el nivel educativo. Donde las mujeres embarazadas son más jóvenes (en promedio 2 años) y viven en pareja en mayor medida que las madres de un hijo (66% y 49% respectivamente). A esto se le suma el hecho de que las mujeres embarazadas poseen una mejor educación que las madres de un hijo, mientras que un 43% de las primeras tiene educación universitaria completa solo un 24% del segundo. Además, las mujeres con un hijo tienen en mayor medida una educación media humanista completa duplicando a las mujeres embarazadas (26% y 13% respectivamente), tendencia que se repite en la categoría educación media o menos.

En relación a las características del trabajo, se observa que las mujeres embarazadas trabajan en mayor medida de manera dependiente, poseen en mayor medida afiliación previsional y se desempeñan en ocupaciones de mayor prestigio social. Por último, existen diferencias en la autopercepción de la salud dónde la media es levemente mayor para las mujeres embarazadas que las madres.

Tabla 1: Balance tratamiento 1

	Trat1=0	Trat1=1	Dif. Aj.	Dif. Null. Aj. Est.	Dif. Est.	Z	
Edad	28,65	30,12	1,47	0,37	0,27	4,02	***
Vive en pareja	0,66	0,49	-0,17	0,03	-0,34	-5,11	***
Etnia	0,08	0,11	0,02	0,02	0,08	1,17	
Chilena	0,96	0,97	0,01	0,01	0,05	0,73	
Estado salud	6,1	5,97	-0,12	-0,12	-0,12	-1,76	
Jornada completa	0,92	0,95	0,03	0,06	0,06	0,90	
Minutos al trabajo	18,65	17,76	-0,89	-0,07	-0,07	-1,01	
Trab. dependiente	0,94	0,89	-0,05	-0,17	-0,17	-2,63	***
ISEI	50,44	43,8	-6,64	-0,4	-0,4	-6,02	***
Na	0,01	0,00	-0,01	-0,1	-0,1	-1,56	
Afiliación previsional	0,97	0,92	-0,06	-0,22	-0,22	-3,26	***
Na	0,01	0,01	0,00	-0,04	-0,04	-0,64	
Educación							
Media inc o menos	0,03	0,08	0,05	0,2	0,2	3,01	***
Media hum comp	0,13	0,26	0,13	0,29	0,29	4,43	***
Media tec com o tec sup inc	0,18	0,19	0,01	0,02	0,02	0,31	
Técnico sup. comp. o univ inc	0,23	0,22	0,00	-0,01	-0,01	-0,17	
Universitaria comp.	0,43	0,24	-0,18	-0,43	-0,43	-6,39	***
Asiste educación	0,09	0,07	-0,02	0,07	-0,07	-0,99	
Macrozona							
Norte	0,12	0,16	0,04	0,1	0,1	1,52	
Centro	0,28	0,25	-0,03	-0,07	-0,07	-1,10	
Sur	0,3	0,33	0,03	0,06	0,06	0,96	
RM	0,29	0,26	-0,03	-0,08	0,08	-1,20	
Urbano	0,84	0,85	0,01	0,03	0,03	0,41	

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015. *sig a un 90% de nivel de confianza, ** sig a un 95% de nivel de confianza y *** sig a un 99% de nivel de confianza

La Tabla 2 muestra las diferencias estandarizadas y la significancia de cada una de las covariables introducidas en el PSM una vez realizados los emparejamientos y creados los grupos. A partir de ella se observa que el Propensity Score más caliper no es la mejor opción a la hora de generar los grupos, ya que nueve de las catorce variables introducidas no presentan un buen balance al tener una diferencia estadísticamente significativa a distintos niveles de confianza y diferencias estandarizadas mayores a 0,25 puntos absolutos en algunos casos.

Sin embargo, tanto el PS como PS el con distancia de Mahalanobis presentan un balance óptimo, sin diferencias estadísticamente significativas a ningún nivel de confianza convencional. Además, de valores muy cercanos a cero en las diferencias estandarizadas, encontrándose la mayor diferencia entre ambos grupos en el porcentaje de urbano/rural con -0,04 y la zona Centro con 0,03 desviaciones estándar. Estas diferencias son muy bajas, por lo que se considera que el balance de cada una de las covariables está bien.

Tabla 2: Balance post matching tratamiento 1⁸

	(1) Pre Match Dif. Est.	(2) PS Dif. Est.	(3) PS + Mah Dif. Est.	(4) PS+ Cal Dif. Est.	
Edad	0,27	*** 0	0	0,26	***
Vive en pareja	-0,34	*** 0	0	-0,44	***
Etnia	0,08	0,01	0,01	-0,03	
Chilena	0,05	0,02	0,02	0,09	
Estado salud	-0,12	-0,02	-0,02	0,01	
Jornada completa	0,06	0,02	0,02	0	
Minutos al trabajo	-0,07	0,01	0,01	0,02	
Trab. dependiente	-0,17	*** -0,01	-0,01	-0,09	
ISEI	-0,4	*** -0,01	-0,01	-0,14	**
NA	-0,1	0,02	0,02	-0,05	
Afiliación previsional	-0,22	*** 0,01	0,01	-0,41	***
NA	-0,04	0,00	0,00	-0,15	
Educación					
Media inc o menos	0,2	*** 0,00	0,00	0,17	**
Media hum comp	0,29	*** 0,01	0,01	0,42	***
Media tec com o tec sup Inc	0,02	0,00	0,00	0	
Tec sup comp o univ inc	-0,01	0,02	0,02	-0,04	
Universitaria comp	-0,43	*** 0,00	0,00	-0,48	***
Asiste educación	-0,07	-0,01	-0,01	-0,2	**
Macrozona					
Norte	0,1	0,01	0,01	-0,04	
Centro	-0,07	0,03	0,03	1,32	***
Sur	0,06	-0,01	-0,01	-0,58	***
RM	0,08	0,02	0,02	-0,65	***
Urbano	0,03	-0,04	-0,04	-0,33	***

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015. *sig a un 90% de nivel de confianza, ** sig a un 95% de nivel de confianza y *** sig a un 99% de nivel de confianza

⁸ (1) Pre match son los valores previos a la conformación de los grupos, (2) PS matching realizado a partir de Propensity Score, (3) PS+Mah Propensity Score más distancia de Mahalanobis y (4) PS + Cal Propensity Score con un caliper de 2.

Ahora bien, el ómnibus test presentado en la Tabla 3 confirma lo anteriormente planteado. El PSM que incluye el caliper tiene una significancia de un 99% de nivel de confianza a la hora de analizar en conjunto todas sus covariables. Además, tanto el PS como el PS + Mahalanobis presentan un valor-p muy cercano a 1, siendo ambos de 0,967. Debido a que estas dos maneras de generar el emparejamiento presentan el mismo balance se prefirió quedarse con el PSM sin Mahalanobis.

Tabla 3: Omnibus test para el tratamiento 1

	X ²	Valor-p	Significancia
Pre matching		0	***
PS	8,2869	0,967	
PS + Mahalanobis		0,967	
PS+ Caliper		0	***

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015.

En la Tabla 4 se observa el emparejamiento efectivo del PSM del tratamiento 1. Se generaron 185 parejas donde se utilizaron 5 o más tratados por cada grupo de tratamiento. Cabe destacar que no se perdió ningún caso a la hora de realizar el emparejamiento.

Tabla 4: Emparejamiento efectivo PSM tratamiento 1 (tratados: controles)

	5+:1	4:1	3:1	2:1	1:1	Total
Número de parejas	185	9	11	15	18	238

Fuente: Elaboración propia.

Margen intensivo

El siguiente apartado se enfoca en el margen intensivo de maternidad, donde el grupo de tratamiento son madres de dos hijos y el de control madres de uno.

En la Tabla 5 se observa el balance para ambos grupos de manera previa al emparejamiento, las mayores diferencias se encuentran nuevamente en el convivir con la pareja y la edad. Las madres de un hijo se encuentran en menor medida viviendo con su pareja con 15 puntos porcentuales de diferencia y son en promedio 1,3 años menores que las madres de dos hijos.

En cuanto a la educación, las madres de un hijo poseen una mejor educación que las madres de dos, solo un 8% de las primeras presenta una educación media incompleta o inferior,

mientras que este porcentaje aumenta a 12% en las segundas. Además, las madres de un hijo tienen en mayor medida una educación técnica superior completa o universitaria incompleta que las madres de dos (7% y 4% respectivamente).

Las características del trabajo presentan diferencias importantes entre ambos grupos; pareciera ser que efectivamente las madres que tienen una mayor cantidad de hijos optan por modificarlas o se encuentran en mayor medida en estos grupos como planteaba la teoría (Gough & Noonan, 2013). Así, las mujeres con dos hijos trabajan en mayor medida de manera no dependiente y en lugares más cercanos al hogar en términos de tiempo. Sin embargo, trabajan en mayor medida en un régimen de jornada completa.

Por otro lado, llama la atención el que existen diferencias contextuales. Las más importantes son un mayor porcentaje de madres de dos hijos de la zona norte del país y de las madres de un hijo en la zona sur. Además, pareciera ser que las mujeres con dos hijos tienden a ser en mayor medida de la zona urbana.

Tabla 5: Balance tratamiento 2

	Trat2=0	Trat2=1	Dif. Aj.	Dif. Null. Aj. Est.	Dif. Est.	Z	
Edad	30,12	31,42	1,3	0,15	0,23	8,85	***
Vive en pareja	0,49	0,65	0,16	0,01	0,33	12,34	***
Etnia	0,11	0,13	0,02	0,01	0,05	2,03	***
Chilena	0,97	0,96	0,00	0	-0,01	-0,37	
Estado de salud	5,97	5,99	0,02	0,03	0,02	0,63	
Jornada completa	0,95	1,01	0,06	0,01	0,12	4,42	***
Minuto al trabajo	17,76	17,06	-0,70	0,35	-0,05	-2	**
Trab. dependiente	0,89	0,83	0,06	0,01	-0,17	-6,36	***
ISEI	43,8	43,6	0,2	0,44	-0,01	-0,45	
NA	0,00	0,00	0,00	0	0	1	
Afiliación previsional	0,92	0,91	0,00	0,01	-0,02	-0,62	
Na	0,01	0,00	0,00	0	0	-0,21	
Educación							
Media inc o menos	0,08	0,12	0,05	0,01	0,16	6,05	***
Media hum comp	0,26	0,26	0,00	0,01	0,00	-0,05	
Media tec com o tec sup Inc	0,19	0,19	-0,1	0,01	0,01	-0,49	
Tec sup comp o univ inc	0,22	0,17	-0,05	0,01	-0,13	-4,93	***
Universitaria comp	0,24	0,26	0,01	0,01	0,03	1,06	
Asiste educación	0,07	0,04	-0,03	0,01	-0,14	-5,17	***
Macrozona							
Norte	0,16	0,19	0,03	0,01	0,08	2,84	***
Centro	0,25	0,24	-0,01	0,01	0,03	-1,08	
Sur	0,33	0,30	-0,03	0,01	0,07	-2,76	***
RM	0,26	0,28	0,02	0,01	0,04	1,57	
Urbano	0,85	0,87	0,02	0,01	0,05	1,94	*

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015. *sig a un 90% de nivel de confianza, ** sig a un 95% de nivel de confianza y *** sig a un 99% de nivel de confianza

La Tabla 6 muestra las diferencias estandarizadas y la significancia de cada una de las covariables introducidas en el PSM una vez realizados los emparejamientos. Aquí se observa que realizar el emparejamiento a partir de un PSM con un caliper de 2 no es la mejor opción debido a que la significancia entre siete de las covariables se mantiene luego del match. Sin embargo, tanto el PS solo con el PS con distancia de Mahalanobis presentan un balance óptimo de cada una de sus covariables, ya que ninguna presenta diferencias estadísticamente significativas ni diferencias estandarizadas mayores de 0,25 desviaciones estándar. Es más, las mayores diferencias encontradas son de -0,03 desviaciones estándar entre ambos grupos en los valores perdidos de la autopercepción de salud y la región metropolitana. Sin embargo, estas diferencias no eran significativas incluso antes de realizar el emparejamiento.

Tabla 6: Balance post matching tratamiento 2⁹

	(1)		(2)		(3)		(4)	
	Pre Match		PS		PS + Mah		PS+ Cal	
	Dif. Est.		Dif. Est.		Dif. Est.		Dif. Est.	
Edad	0,23	***	0,00		0,00		0,21	***
Vive pareja	0,33	***	-0,01		-0,01		0,27	***
Etnia	0,05	***	-0,01		-0,01		-0,02	
Chilena	-0,01		0,01		0,01		0,04	
Estado salud	0,02		0,01		0,01		0,03	
Jornada completa	0,12	***	0,01		0,01		0,08	***
Minutos al trabajo	-0,05	**	0,00		0,00		-0,03	
Trab. dependiente	-0,17	***	-0,01		-0,01		-0,14	***
ISEI	-0,01		0,00		0,00		-0,05	
NA	0		-0,01		-0,01		-0,04	
Afiliación previsional	-0,02		0,00		0,00		0	
NA	0		0,00		0,00		-0,01	
Educación								
Media inc o menos	0,16	***	0,01		0,01		0,14	***
Media hum comp	0,00		-0,01		-0,01		0,04	
Media tec com o tec sup Inc	0,01		0,02		0,02		-0,04	
Tec sup comp o univ inc	-0,13	***	-0,01		-0,01		-0,12	***
Universitaria comp	0,03		0,00		0,00		0,01	
Asiste educación	-0,14	***	0,01		0,01		-0,17	***
Macrozona								
Norte	0,08	***	0,01		0,01		0,44	***
Centro	0,03		0,01		0,01		0,54	***
Sur	0,07	***	0,01		0,01		-0,17	***
RM	0,04		-0,03		-0,03		-0,73	***
Urbano	0,05	*	0,00		0,00		-0,09	***

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015. *sig a un 90% de nivel de confianza, ** sig a un 95% de nivel de confianza y *** sig a un 99% de nivel de confianza

Además, al observar la Tabla 7 con los valores del ómnibus test se confirma el buen balance tanto del PS solo como del PS más Mahalanobis. A la hora de analizar en conjunto el balance de las covariables este da un valor-p de 0,87, lo que es bastante cercano a 1 y no presenta significancia a niveles convencionales. Se decide utilizar el PS solo, al igual que con el tratamiento 1.

Tabla 7: Omnibus test para el tratamiento 2

⁹ 1) Pre match son los valores previos a la conformación de los grupos, (2) PS matching realizado a partir de Propensity Score, (3) PS+Mah Propensity Score más distancia de Mahalanobis y (4) PS + Cal Propensity Score con un caliper de 2.

	X ²	Valor-p	Sig
Pre matching		0	***
PS	22,9392	0,87	
PS + Mahalanobis		0,87	
PS+ caliper		1	

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015.

En la Tabla 8 se muestra el emparejamiento efectivo para el PSM, nuevamente no se pierden casos en el emparejamiento, sumado a que existe una mayor cantidad de casos para el grupo de control que de tratamiento.

Tabla 8: Emparejamiento efectivo PSM tratamiento 2 (tratados: controles)

	5+:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5+	Total
Número de parejas	6	9	20	83	870	279	194	122	289	1872

Fuente: Elaboración propia.

Efecto Causal

Esta sección muestra las estimaciones del efecto tratamiento (maternidad) para el logaritmo del salario hora en dos los márgenes analizados, el extensivo (tratamiento 1) y el intensivo (tratamiento 2). En la Tabla 9 se observa la estimación del efecto tratamiento promedio (ATE) para el tratamiento 1 (mujeres embarazadas v/s mujeres con 1 hijo) y 2 (mujeres con 1 hijo v/s mujeres con 2 hijos) a partir de una regresión OLS y el estimador de IPW a partir del PSM.

Tabla 9: Estimación del efecto de la maternidad en el salario en ambos márgenes

		ATE	N	Error Est.	Valor-P	Sig
Tratamiento 1	OLS	0,065	4914	0,037		*
	IPW	-0,1450	4984	0,0203	0,0000	***
	Coeftest	-0,1415	4984	0,0481	0,0026	***
	independence_test		4984		0,2732	
Tratamiento 2	OLS	0,0490	6705	0,0150		***
	IPW	0,0710	6800	0,0182	0,0001	***
	Coeftest	0,0710	6800	0,0202	0,0005	***
	independence_test		6800		0,0399	**

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015. * Sig a un 90% de nivel de confianza, ** Sig a un 95% y *** Sig a un 99%.

En el margen extensivo, se observa que al medir el efecto de la maternidad en el salario femenino a partir de una regresión OLS¹⁰ las diferencias son significativas, sin embargo, tan sólo a un 90% de nivel de confianza. Es interesante observar aquí que el efecto encontrado es positivo, es decir, según la regresión OLS las mujeres madres de un hijo ganan un 6,5% por hora más que las mujeres embarazadas. Lo que se contradice con la experiencia internacional, donde se observa en mayor medida un efecto negativo y, en el mejor de los casos, la ausencia de este efecto. Si uno sólo se queda con este resultado, la conclusión evidente es el hecho de que en realidad en Chile no existe una penalización de la maternidad al salario femenino, sino un efecto positivo de premio a esta.

Sin embargo, al analizar el efecto tratamiento promedio (ATE) medido a partir de un IPW con PSM, las conclusiones cambian sustantivamente. En este caso se confirma la existencia de una brecha, pero no en la dirección antes encontrada. El efecto de tener un hijo frente a estar embarazada es de una disminución de un 14,5% del salario hora femenino en promedio, significativo a un 99% de nivel de confianza. Además, este resultado se mantiene al realizar el Test de Neyman¹¹ de medias en base a una distribución normal (debido a la cantidad de casos) con una significancia del 99%.

Al realizar el Test Exacto de Fisher¹², el tratamiento pierde significancia estadística a niveles convencionales. No obstante, este test es bastante estricto a la hora de definir su hipótesis nula $H^0: Y_i(1) - Y_i(0) = 0$, esto plantea que el resultado bajo la condición de tratamiento es igual al resultado bajo la condición de control para cada unidad i . Ahora bien, en muestras grandes el Test de Neyman y el Test de Fisher convergen, por lo que puede ser que este no sea significativo debido a un problema de tamaño muestral. Ya que se calcula el test estadístico a partir de permutaciones de todas las combinaciones posibles de los grupos de emparejamiento que para el tratamiento 2 son 238. En ese sentido, se considera que el efecto de un 14,5% menos en el salario es relevante.

¹⁰ La regresión OLS cuenta como controles todas las covariables incluidas en la formación de los grupos del PSM (Edad, Vive pareja, Etnia, Chilena, Estado salud, Jornada completa, Minutos al trabajo, Trab. dependiente, ISEI, Afiliación previsional, Nivel educacional, Asiste educación, Macrozona y Urbano). En este caso se estarían perdiendo casos, debido a que se eliminan todos los casos en los que alguna de las covariables tiene casos perdidos.

¹¹ Estimado a partir de la librería Ri de R (Aronow & Samii, 2015).

¹² Test exacto de Fisher o test de permutación. Se utiliza la librería Coin de R para medir este test (Hothorn, Hornik, Van de Wiel, Winell & Zeileis, 2017).

En relación al tratamiento 2, esto es tener dos hijos frente a tener un hijo se observa que la regresión OLS entrega un resultado de un aumento de 4,9% en el salario hora para el grupo de tratamiento en relación al de control, significativo a un 99% de nivel de confianza. Sin embargo, este valor aumenta a la hora de medir el efecto a partir del PSM con un estimador ATE de IPW. Donde las mujeres que tienen dos hijos experimentan un aumento de un 7,1% en el salario en relación a las mujeres que tienen tan solo uno, significativo a un 99% de nivel de confianza. Lo que se mantiene al realizar el test de medias de Neyman y el test de Fisher, pero en este último, baja su significancia a un 95% de nivel de confianza. En este caso las permutaciones se realizan con un total de 1872 casos. Este es un hallazgo interesante debido a que la experiencia internacional a la hora de medir el efecto de la maternidad en el margen intensivo plantea un aumento de la penalización y no un aumento en el salario (Angelov & Karimi, 2012; Cruces & Galiani, 2007; Lundborg et al., 2016).

Es clave comparar ambos márgenes; efectivamente hay un efecto negativo de la maternidad en el salario femenino de un 14,5% menos en las mujeres con un hijo en relación a las mujeres embarazadas. No obstante, al comparar a estas mujeres con un hijo con las mujeres que tienen dos hijos se encuentra un aumento de un 7,1% en el salario. Así, parece ser que las mujeres que tienen uno y dos hijos son grupos distintos, esto es, tipologías diferentes de mujeres en tanto a su situación en el mercado del trabajo¹³.

Por otro lado, se observa la existencia de heterogeneidad a la hora de medir el efecto de la maternidad en el salario, tanto en el margen extensivo como intensivo, debido a que cambiaron los resultados del estimador OLS al de IPW a partir de PSM. Donde, incluso en el caso del tratamiento 1, el efecto modificó su sentido al considerar la existencia de heterogeneidad individual en la medición¹⁴. Lo que confirma el sesgo de autoselección existente en la maternidad y el problema de medición del cual este estudio busca hacerse

¹³ Esto se confirma al considerar el efecto de la maternidad del tratamiento 3 (no incluido en este artículo) donde se compara a las mujeres embarazadas sin hijos previos (grupo de control del tratamiento 1) con las madres de dos hijos (grupo de tratamiento del tratamiento 2). Aquí se observa que existe una penalización asociada a la maternidad en este caso también de una disminución del salario femenino en un 7,4%, significativo a un 95% de nivel de confianza. En ese sentido, el grupo en mayor desventaja en relación al salario son las mujeres madres de un hijo de hasta 10 años. No obstante, este efecto no presenta una gran robustez al dejar de ser significativo tanto en los test de medias de Neyman y de Fisher.

¹⁴ Al medir el efecto del tratamiento 3, se observa que el efecto también modifica su sentido a la hora de considerar la heterogeneidad individual presente en la medición. Pasando de un efecto positivo de un 11% a una disminución de un 7,4% de las madres de dos hijos frente a las mujeres embarazadas.

cargo. Las mujeres tienen entonces un efecto previo de fertilidad anticipada, en tanto motivación y compromiso con el trabajo, que las lleva a tener trayectorias distintas en el salario cuando desean de ante mano ser madres en un futuro y cuando no es así.

Conclusiones

La presente investigación tenía como objetivo determinar el efecto de la maternidad sobre los salarios obtenidos por las mujeres trabajadoras en Chile, tanto en el margen intensivo como en el extensivo. Es decir, diferenciar entre tener un hijo frente a mujeres sin hijos y la diversidad de efectos entre mujeres que ya son madres. Para ello se utilizó una metodología de PSM con dos tratamientos complementarios, cada uno en uno de los márgenes explicitados anteriormente, con los datos de la encuesta CASEN 2015.

Dentro de las cinco perspectivas teóricas relevantes para definir el efecto de los hijos en el salario femenino¹⁵ la más relevante para este estudio fue la Existencia de Heterogeneidad Individual en cuanto a definición del diseño metodológico. Principalmente porque se buscó demostrar que efectivamente existe un efecto de la maternidad en el salario si es que el modelo estadístico utilizado se encuentra bien especificado considerando todas las covariantes relevantes según la teoría.

El efecto estimado se encuentra controlado principalmente por la existencia de heterogeneidad debido a las características de los grupos de control tanto en el margen intensivo como extensivo. Además, dentro de las siete variables relevantes a la hora de medir la Hipótesis de las Características del Trabajo, cuatro de ellas (horas trabajadas, ocupación, formalidad y localización del trabajo) se encuentran consideradas y su efecto está incluido en la formación del PSM, es decir, de los grupos. En relación a la Teoría del Capital Humano, los dos indicadores que no necesitan datos de panel como son la educación y el estatus actual del trabajo se encuentran medidos también. Por lo tanto, lo que estaría faltando en este estudio es el hecho de que no se pudo controlar la Hipótesis del Esfuerzo y la Hipótesis de Discriminación del Empleador.

La investigación tiene un carácter novedoso en el estudio de las características del mercado laboral femenino en Chile, en tanto la mayoría de los análisis hasta el momento se enfocan

¹⁵ Teoría del Capital Humano, Hipótesis del Esfuerzo, Características del Trabajo, Hipótesis de la Discriminación Empleador y Existencia de Heterogeneidad Individual.

en explicar la llamada “excepcionalidad chilena” de la baja tasa de participación laboral femenina en relación a la masculina a pesar de los altos índices de escolaridad (Contreras, De Mello, & Puentes, 2011; Contreras, Hurtado, & Sara, 2012; Novella et al., 2015). O, en la brecha existente, y ya bien documentada, entre los salarios femeninos y masculinos (Brega et al., 2015; Meller et al., 2011; Novella et al., 2015; Sepúlveda et al., 2015; Thompson, 2012). Así, el investigar una posible segunda discriminación, como es la brecha por maternidad en el salario, llena un vacío teórico para el caso chileno.

Se buscó utilizar una metodología cercana a las características de los experimentos naturales para determinar el efecto causal de la maternidad en el salario, de tal manera que se puede plantear que el efecto aquí encontrado se trata casi en su totalidad de discriminación por parte del empleador, diferencias de esfuerzo o elementos a medir en el largo plazo, laborales y/o educativos.

En primer lugar, se observa una diferencia a la hora de medir el efecto del tratamiento en la variable resultado a partir de una regresión OLS e IPW con PSM tanto en el margen extensivo como en el intensivo. En ese sentido, se confirman las deficiencias que presenta OLS para estimar relaciones casuales en esta temática (B. D. J. Anderson, Binder, & Krause, 2002; D. J. Anderson, Binder, & Krause, 2003; Angrist & Evans, 1998; Livermore, Rodgers, & Siminski, 2011; Molina & Montuenga, 2009; Nizalova, Sliusarenko, & Shpak, 2016). Se puede afirmar que efectivamente el efecto de la maternidad en el salario no sería de carácter exógeno sino endógeno, tal y cómo plantean Fernández-Kranz, Lacuesta y Rodríguez-Planas (2013)

Es interesante cómo en el margen extensivo, al estimar el efecto de la maternidad en el salario con OLS, el efecto es de carácter positivo y muy significativo, pero a la hora de estimarlo con un modelo más complejo –a partir de un estimador de PSM- este efecto pasa a ser negativo. Esto es similar a lo encontrado por Molina y Montuenga (2009) en España, ellos a la hora de analizar el efecto de la maternidad sobre el salario femenino no encuentran un efecto significativo con OLS, pero al utilizar un modelo de efectos fijos que controle por heterogeneidad el efecto de la maternidad verifican que es negativo. En ese sentido, se confirma la necesidad de utilizar este tipo de estrategias metodológicas.

En el presente estudio se encontró que el efecto de la maternidad en el margen extensivo en Chile, esto es tener un hijo de máximo 10 años frente a estar embarazada, registra una disminución de un 14,5% del salario hora por el hecho de tener este hijo. Esto contradice lo planteado por Uribe-Echevarría (2008) acerca de que no existe una penalización salarial del efecto de tener hijos en Chile. Y, más bien se alinea con los hallazgos en Dinamarca, dónde en el mediano plazo (6 a 10 años) el efecto de la maternidad en el margen extensivo es de un 11-12% (Lundborg et al., 2016). Aunque es menor a lo encontrado para el caso alemán, donde la brecha es de un 19% (Gangl & Ziefle, 2009). Sin embargo, esta última estimación no es del todo comparable al ser realizada con un matching dentro del mismo establecimiento laboral.

En relación a los hallazgos para América Latina, si se toman como acertados los análisis realizados por Olarte y Peña (2009) con un estimador con corrección de Heckman para Colombia, la brecha en Chile sería mayor que la encontrada en este país donde es de 9,4% en el salario hora por concepto de maternidad. Sin embargo, Gamboa y Zuluaga (2013), quienes realizan un análisis de matching transversal, encuentran que las madres ganan solo 1,73% menos que las demás mujeres en Colombia. Aun así, con cualquiera de los dos efectos lo encontrado para el caso chileno es mayor en términos de tamaño de la brecha salarial en ambos segmentos de mujeres.

La literatura internacional acerca del margen intensivo, en general plantea la existencia de una brecha dentro de la maternidad, es decir, aquellas mujeres que tienen más hijos tendrían un menor salario que las que poseen tan sólo uno (Angelov & Karimi, 2012; Cruces & Galiani, 2007; Lundborg et al., 2016). Lo encontrado en este análisis es que efectivamente hay una brecha entre ambos grupos (mujeres con un hijo y mujeres con dos). No obstante, este efecto es positivo, es decir, las mujeres que son madres de dos hijos ganan un 7,1% más de salario por hora que las madres de tan sólo un hijo. Queda a futuras investigaciones analizar el por qué puede darse este efecto. Es posible que luego del segundo hijo los empleadores no esperen que las mujeres tengan un tercer hijo, por lo que les suban el sueldo; en ese sentido, se recomienda realizar un estudio acerca de la discriminación del empleador a las mujeres que son madres.

Ahora bien, esto tiene relación con lo encontrado para el caso de Suecia donde el tercer hijo está asociado significativamente a una disminución del trabajo de sus madres pero solo en los primeros años luego de dar a luz, cuando el hijo tiene cerca de dos años el efecto desaparece (Angelov & Karimi, 2012). Es posible que el hecho de medir la maternidad en ambos márgenes a partir de la restricción de que el hijo mayor tenga máximo 10 años esté sesgando los resultados y ocultando un efecto más cercano al nacimiento del último hijo.

Una de las grandes limitaciones es que no se cuenta con datos longitudinales para poder medir variables laborales, tal como cambios en las características del trabajo debido a la maternidad o la experiencia laboral efectiva. Estas variables aparecen como relevantes en la literatura (Simonsen & Skipper, 2006). Existen datos longitudinales de encuestas de empleos en Chile, pero estos no consideran la pregunta de si la mujer se encuentra actualmente embarazada que es clave para medir el tratamiento en el margen extensivo. La utilización de este tipo de datos se justifica también debido a que Blagrove y Santoro (2017) muestran que la participación femenina es significativamente pro cíclica, esto es que cambia mucho según el periodo económico observado. Por ello, sería relevante analizar un efecto que no dependa de un año específico.

Además, Vere (2011) para Estados Unidos, plantea que el efecto causal de la fertilidad disminuye notoriamente con la paridad en las horas trabajadas, luego es posible que exista un efecto de cantidad de horas trabajadas que no se observe claramente en la medida de jornada laboral (completa o no) que se utilizó a falta de mejores variables.

No es posible comparar este hallazgo con datos para América Latina, ya que hasta donde se ha podido revisar a la fecha no se han realizados estudios del efecto de la maternidad en el margen intensivo en el salario hora. Así, tan solo existe un estudio en Argentina y México realizado por Cruces y Galiani (2007), pero este se enfoca en la oferta laboral, donde efectivamente existe una disminución con la paridad. En ese sentido, se reitera la idea que es posible que esta diferencia entre los resultados encontrados para el margen extensivo e intensivo- y la diferencia en el sentido de sus efectos- se deba a que se trata de tipologías distintas de mujeres. Esto es que las barreras de entrada al mercado laboral para aquellas mujeres con dos hijos son lo suficientemente fuertes para que estas decidan no trabajar a no ser que tenga una retribución económica importante, debido probablemente a la dificultad de

conseguir como cuidar a los hijos. Además, considerando que son las mujeres jefas de hogar quienes tienen una mayor probabilidad de participación (Contreras et al., 2011) y el aumento sostenido en los hogares monoparentales con este tipo de jefatura (Ministerio de Desarrollo Social, 2011).

En ese sentido, si en un foco de políticas públicas se deseara aumentar la tasa de participación femenina debe tomarse en cuenta una posible barrera de entrada a participar en el mercado laboral por las pocas retribuciones salariales.

El presente estudio buscó identificar el efecto de la maternidad en el salario femenino, principalmente porque en Chile se observa una gran brecha de género (hombres y mujeres) en el mercado laboral. Tanto en la participación laboral como en los salarios, por lo tanto, la existencia de una brecha extra por maternidad ayuda a dilucidar las barreras y desventajas que presentan las mujeres en el mundo del trabajo. En términos de políticas públicas se vuelve relevante proponerse cómo mejorar las condiciones salariales de las madres de un hijo, grupo que fue identificado como el más desventajado según los resultados de este estudio.

Bibliografía

- Anderson, B. D. J., Binder, M., & Krause, K. (2002). American Economic Association The Motherhood Wage Penalty : Which Mothers Pay It and Why ? *The American Economic Review*, 92(2), 354–358.
- Anderson, D. J., Binder, M., & Krause, K. (2003). The Motherhood Wage Penalty Revisited : Experience , Heterogeneity , Work Effort , and Work-Schedule Flexibility. *ILR Review*, 56(2), 273–294.
- Angelov, N., & Karimi, A. (2012). *Mothers ' Income Recovery after Childbearing* (ISSN 1651-1166 No. 20). Uppsala.
- Angrist, J., & Evans, W. (1998). *Children and Their Parent's Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size* (NBER working paper series No. 5778). Cambridge.
- Aronow, P. M., & Samii, C. (2015). Package “ri.” Retrieved from <https://cran.r-project.org/web/packages/ri/ri.pdf>
- Blagrave, P., & Santoro, M. (2017). *Labor Force Participation in Chile : Recent Trends, Drivers and Prospects* (No. J08, J11, J21).
- Brega, C., Durán, G., & Sáez, B. (2015). *Mujeres Trabajando. Una exploración al valor del trabajo y la calidad del empleo en Chile. Estudios de la Fundación Sol* (Vol. Marzo).
- Contreras, D., De Mello, L., & Puentes, E. (2011). The determinants of labour force participation and employment in Chile. *Applied Economics*, 43(August), 2765–2776. <https://doi.org/10.1080/00036840903373303>
- Contreras, D., Hurtado, A., & Sara, M. (2012). *La Excepción Chilena y las Percepciones de Género en la Participación Laboral Femenina. Santiago*. Retrieved from <http://new.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/5e8f5415ba0473be8f2a9502dd497e288bde2bd8.pdf>
- Cruces, G., & Galiani, S. (2007). Fertility and female labor supply in Latin America: New causal evidence. *Labour Economics*, 14(3), 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2005.10.006>
- Cruz, G. (2014). *Poder de Negociación y Brecha Salarial de Género: Caso Chileno*.
- Fernández-Kranz, D., Lacuesta, A., & Rodríguez-Planas, N. (2013). The Motherhood Earnings Dip Evidence from Administrative Records. *The Journal of Human Resources*, 48(1).

- <https://doi.org/10.1353/jhr.2013.0007>
- Gamboa, L. F., & Zuluaga, B. (2013). Is There a Motherhood Penalty? Decomposing the Family Wage Gap in Colombia. *Journal of Family and Economic Issues*, 34(4), 421–434. <https://doi.org/10.1007/s10834-012-9343-y>
- Gangl, M., & Ziefle, A. (2009). Motherhood , Labor Force Behavior , and Women ’ s Careers : An Empirical Assessment of the Wage Penalty for Motherhood in Britain , Germany , and the United States All use subject to JSTOR Terms and Conditions MOTHERHOOD , LABOR FORCE BEHAVIOR , AND WOMEN. *Demography*, 46(2), 341–369.
- Gough, M., & Noonan, M. (2013). A review of the motherhood wage penalty in the United States. *Sociology Compass*, 7(4), 328–342. <https://doi.org/10.1111/soc4.12031>
- Hothorn, T., Hornik, K., van de Wiel, M. A., Winell, H., & Zeileis, A. (2017). Package ‘ coin .’
- Jacobsen Kleven, H., Landais, C., & Egholt Søgaaard, J. (2017). *Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark. Working Paper.*
- Livemore, T., Rodgers, J., & Siminski, P. (2011). The Effect of Motherhood on Wages and Wage Growth: Evidence for Australia. *Economic Record*, 87(SUPPL. 1), 80–91. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00745.x>
- Lundborg, P., Plug, E., & Rasmussen, A. W. (2016). Can women have children and a career? IV evidence from IVF treatments. *American Economic Review*, 107(6), 1611–1637. <https://doi.org/10.1257/aer.20141467>
- Meller, P., Valdés, G., & Lara, B. (2011). Female discrimination at the professional level in Chile. *Interciencia*, 36(11), 823–830.
- Ministerio de Desarrollo Social, G. de C. (2011). CASEN 2011: Mujer y Familia.
- Molina, J. A., & Montuenga, V. M. (2009). The motherhood wage penalty in Spain. *Journal of Family and Economic Issues*, 30(3), 237–251. <https://doi.org/10.1007/s10834-009-9153-z>
- Neyman, J. (1990). On the Application of Probability Theory to Agricultural Experiments. Essay on Principles. Section 9. *Statistical Science*, 5(4), 465–472.
- Nizalova, O. Y., Sliusarenko, T., & Shpak, S. (2016). The motherhood wage penalty in times of transition. *Journal of Comparative Economics*, 44(1), 56–75. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.10.009>
- Novella, R., Rucci, G., & Vazquez, C. (2015). Porque No Quiero o Porque No Puedo. *Banco Interamericano de Desarrollo*, 41.
- Olarte, L., & Peña, X. (2009). El efecto de la maternidad sobre los salarios femeninos. *Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico*, 1980–2007. <https://doi.org/10.2139>
- Rubin, D. (2006). *Matched Samplig for Causal Effects*. University Press.
- Sepúlveda, A. (Comunidad M., Poblete, P. (Comunidad M., & Yachan, C. (Comunidad M. (2015). Mujer y trabajo: Brecha salarial, la gran deuda con las trabajadoras en Chile. *Comunidad Mujer, Junio*(32).
- Simonsen, M., & Skipper, L. (2006). The costs of motherhood: An analysis using matching estimators. *Journal of Applied Econometrics*, 21(7), 919–934. <https://doi.org/10.1002/jae.893>
- Thompson, K. E. (2012). La Brecha Salarial Entre Hombres y Mujeres : La Situación y los Factores que Influyen en la Brecha en los Altos Cargos de Trabajo en Chile. *Independent Study Project (ISP) Collection*.
- Uribe-Echevarría, V. (Dirección del T.-D. de E. (2008). *Inequidades de género en el mercado laboral: El rol de la división sexual del trabajo*. Santiago: Gobierno de Chile Dirección del Trabajo.
- Vere, J. P. (2011). Fertility and parents ’ labour supply : new evidence from US census data Winner of the OEP prize for best paper on Women and Work. *Oxford Economic Papers*, 63, 211–231. <https://doi.org/10.1093/oep/gpr003>
- Waldfogel, J. (1995). The Price of Motherhood : Family Status and Women ’ s Pay in Young British Cohort. *Oxford Economic Papers*, 47(4), 584–610.
- Anderson, B. D. J., Binder, M., & Krause, K. (2002). American Economic Association The Motherhood Wage Penalty : Which Mothers Pay It and Why ? *The American Economic Review*, 92(2), 354–358.
- Anderson, D. J., Binder, M., & Krause, K. (2003). The Motherhood Wage Penalty Revisited : Experience , Heterogeneity , Work Effort , and Work-Schedule Flexibility. *ILR Review*, 56(2), 273–294.
- Angelov, N., & Karimi, A. (2012). *Mothers ’ Income Recovery after Childbearing* (ISSN 1651-1166 No. 20). Uppsala.
- Angrist, J., & Evans, W. (1998). *Children and Their Parent’s Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size* (NBER working paper series No. 5778). Cambridge.
- Aronow, P. M., & Samii, C. (2015). Package “ri.” Retrieved from <https://cran.r-project.org/web/packages/ri/ri.pdf>

- Blagrave, P., & Santoro, M. (2017). *Labor Force Participation in Chile : Recent Trends, Drivers and Prospects* (No. J08, J11, J21).
- Brega, C., Durán, G., & Sáez, B. (2015). *Mujeres Trabajando. Una exploración al valor del trabajo y la calidad del empleo en Chile. Estudios de la Fundación Sol* (Vol. Marzo).
- Contreras, D., De Mello, L., & Puentes, E. (2011). The determinants of labour force participation and employment in Chile. *Applied Economics*, 43(August), 2765–2776. <https://doi.org/10.1080/00036840903373303>
- Contreras, D., Hurtado, A., & Sara, M. (2012). *La Excepción Chilena y las Percepciones de Género en la Participación Laboral Femenina. Santiago*. Retrieved from <http://new.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/5e8f5415ba0473be8f2a9502dd497e288bde2bd8.pdf>
- Cruces, G., & Galiani, S. (2007). Fertility and female labor supply in Latin America: New causal evidence. *Labour Economics*, 14(3), 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2005.10.006>
- Cruz, G. (2014). *Poder de Negociación y Brecha Salarial de Género: Caso Chileno*.
- Fernández-Kranz, D., Lacuesta, A., & Rodríguez-Planas, N. (2013). The Motherhood Earnings Dip Evidence from Administrative Records. *The Journal of Human Resources*, 48(1). <https://doi.org/10.1353/jhr.2013.0007>
- Gamboa, L. F., & Zuluaga, B. (2013). Is There a Motherhood Penalty? Decomposing the Family Wage Gap in Colombia. *Journal of Family and Economic Issues*, 34(4), 421–434. <https://doi.org/10.1007/s10834-012-9343-y>
- Gangl, M., & Ziefle, A. (2009). Motherhood , Labor Force Behavior , and Women ’ s Careers : An Empirical Assessment of the Wage Penalty for Motherhood in Britain , Germany , and the United States All use subject to JSTOR Terms and Conditions MOTHERHOOD , LABOR FORCE BEHAVIOR , AND WOMEN. *Demography*, 46(2), 341–369.
- Gough, M., & Noonan, M. (2013). A review of the motherhood wage penalty in the United States. *Sociology Compass*, 7(4), 328–342. <https://doi.org/10.1111/soc4.12031>
- Hothorn, T., Hornik, K., van de Wiel, M. A., Winell, H., & Zeileis, A. (2017). Package ‘ coin.’
- Jacobsen Kleven, H., Landais, C., & Egholt Sjøgaard, J. (2017). *Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark. Working Paper*.
- Livemore, T., Rodgers, J., & Siminski, P. (2011). The Effect of Motherhood on Wages and Wage Growth: Evidence for Australia. *Economic Record*, 87(SUPPL. 1), 80–91. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00745.x>
- Lundborg, P., Plug, E., & Rasmussen, A. W. (2016). Can women have children and a career? IV evidence from IVF treatments. *American Economic Review*, 107(6), 1611–1637. <https://doi.org/10.1257/aer.20141467>
- Meller, P., Valdés, G., & Lara, B. (2011). Female discrimination at the professional level in Chile. *Interciencia*, 36(11), 823–830.
- Ministerio de Desarrollo Social, G. de C. (2011). *CASEN 2011: Mujer y Familia*.
- Molina, J. A., & Montuenga, V. M. (2009). The motherhood wage penalty in Spain. *Journal of Family and Economic Issues*, 30(3), 237–251. <https://doi.org/10.1007/s10834-009-9153-z>
- Neyman, J. (1990). On the Application of Probability Theory to Agricultural Experiments. Essay on Principles. Section 9. *Statistical Science*, 5(4), 465–472.
- Nizalova, O. Y., Sliusarenko, T., & Shpak, S. (2016). The motherhood wage penalty in times of transition. *Journal of Comparative Economics*, 44(1), 56–75. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.10.009>
- Novella, R., Rucci, G., & Vazquez, C. (2015). Porque No Quiero o Porque No Puedo. *Banco Interamericano de Desarrollo*, 41.
- Olarte, L., & Peña, X. (2009). El efecto de la maternidad sobre los salarios femeninos. *Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico*, 1980–2007. <https://doi.org/10.2139>
- Rubin, D. (2006). *Matched Samplig for Causal Effects*. University Press.
- Sepúlveda, A. (Comunidad M., Poblete, P. (Comunidad M., & Yachan, C. (Comunidad M. (2015). Mujer y trabajo: Brecha salarial, la gran deuda con las trabajadoras en Chile. *Comunidad Mujer*, Junio(32).
- Simonsen, M., & Skipper, L. (2006). The costs of motherhood: An analysis using matching estimators. *Journal of Applied Econometrics*, 21(7), 919–934. <https://doi.org/10.1002/jae.893>
- Thompson, K. E. (2012). La Brecha Salarial Entre Hombres y Mujeres : La Situación y los Factores que Influyen en la Brecha en los Altos Cargos de Trabajo en Chile. *Independent Study Project (ISP) Collection*.
- Uribe-Echevarría, V. (Dirección del T.-D. de E. (2008). *Inequidades de género en el mercado laboral: El rol de la división sexual del trabajo*. Santiago: Gobierno de Chile Dirección del Trabajo.

- Vere, J. P. (2011). Fertility and parents' labour supply : new evidence from US census data Winner of the OEP prize for best paper on Women and Work. *Oxford Economic Papers*, 63, 211–231. <https://doi.org/10.1093/oep/gpr003>
- Waldfogel, J. (1995). The Price of Motherhood : Family Status and Women's Pay in Young British Cohort. *Oxford Economic Papers*, 47(4), 584–610.

MESA 5: ACUMULACIÓN, RIQUEZA Y REPRODUCCIÓN

El departamento de Lavalle en el circuito económico provincial:
territorialidades invisibles del noreste de Mendoza, Argentina.

Carla Carabaca Videla

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo
damitadecarmin@gmail.com

Resumen:

El presente trabajo se encuentra enmarcado en el campo de los estudios socioeconómicos de la provincia de Mendoza, Argentina. Para ello se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Sobre el estado de conocimiento actual, es posible avanzar sobre algunas conclusiones: la población rural de Lavalle (cercana al 80%) está constituida, en gran parte, por trabajadores/as rurales y pequeños/as productores/as agropecuarios/as. Hacia el interior del departamento preexiste también una importante desigualdad entre los territorios que tienen derecho a riego y aquellos que corresponden al secano. A las características mencionadas, se suman los graves procesos de desertificación, que se combinan con la situación de marginalidad que afecta a las zonas no irrigadas respecto del circuito económico provincial orientado a la agroindustria vitivinícola. Siguiendo las pistas de lo antes dicho, podríamos comenzar a delinear un primer acercamiento a la estructura de clases del departamento. En relación a ello nos referimos a un sujeto agrario semi proletarizado y pluriactivo que en las zonas áridas se encuentra compuesto por puesteros y familiares dedicados principalmente a la crianza de caprinos. Por otro lado, entre la población rural aglomerada se encuentran otros tipos ocupaciones cuentapropistas y asalariadas, en donde la superficie cultivada se destina a la producción hortícola y vitícola. En este contexto, el dato emergente que plantea una importante reconfiguración territorial de Lavalle es la proyección de los organismos oficiales en el marco del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT). Ordenar *¿en función de que intereses?* La respuesta por el momento está abierta.

Palabras claves: ESTRUCTURA ECONÓMICO SOCIAL – DESIGUALDADES TERRITORIALES – CONDICIONES DE TRABAJO – LAVALLE, MENDOZA, ARGENTINA

Un poco más que una mera descripción geográfica: primeras pistas

El departamento de Lavalle se encuentra ubicado al noreste de Mendoza. Su superficie asciende a 10.242 Km², representando el 6,8% de la superficie provincial.¹

El terreno del departamento presenta una amplia llanura con pendiente hacia el noreste. El suelo de la zona beneficiada con riego artificial es fértil y rico en nutrientes que lo hacen especialmente apto para el desarrollo de la actividad agropecuaria. No obstante, sobre el total de la superficie departamental representa una pequeña parte. Según datos provistos por el Censo Nacional Agropecuario 2008, sobre el total de las hectáreas de superficie del departamento, el 97% se encontraba en las zonas rurales. De ese total, 188.995,9 Ha. (el 18,5% sobre el total de Ha. en disposición) eran destinadas a la actividad agropecuaria. El resto de la superficie correspondía a la zona del secano lavallino.²

La zona más extensa del territorio departamental también presenta características de llanura con médanos y terrenos salinos, árida y desértica, con predominio de vegetación xerófila (adaptada a la ambientes secos o medios secos) siendo apta para la explotación ganadera caprina y desarrollo de la apicultura ecológica.

El departamento se ubica dentro de la *Planicie de la Travesía*. Dentro de la misma pueden visualizarse dos unidades:

- ∴ Planicie aluvial de transición o *Planicie de Tulumaya*: constituye un importante sector de cultivos del oasis de Lavalle.
- ∴ Planicie fluvio–aluvional o *Planicie del Rosario*: ubicada al norte de la Planicie Tulumaya, se caracteriza por la presencia de materiales muy finos, que provienen de la erosión pluvial sobre los afloramientos del Terciario, especialmente de la Formación Mariño (Inchauspe y Marzo, 1967: 280).

¹ En cuanto a su división política, Lavalle se encuentra dividida en 22 distritos, 3 parajes y un distrito cabecero (Ciudad Tulumaya). Entre los distritos se cuentan los siguientes: Villa Costa de Araujo, El Chilcal, El Plumero, El Vergel, El Carmen, Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, San Miguel de Los Sauces, El Paramillo, Villa Tres de Mayo, La Asunción, La Holanda, La Bajada, La Palmera, La Pega, Las Violetas, Lagunas del Rosario, Óscar Mendoza, Paramillo, San Francisco y San José. Los parajes más importantes son: Alto del Olvido, Colonia Italia y La Colmena.

² Para este mismo año censal, el total de las explotaciones agropecuarias (EAPs). era de 1.798; de las cuales 1.319 tenían límites definidos. De acuerdo al número de parcelas que las componen, las EAPs que más proliferan son la que poseen solo una parcela de tierra. Igual que para el total provincial, el promedio de parcelas por EAP es de 1,3.

La actual topografía de la Planicie de la Travesía presenta, en algunos amplios sectores, campos y cordones medanosos, que pueden alcanzar entre veinte y veinticinco metros de altura. Estas áreas son zonas deprimidas topográficamente y están ocupadas por bañados y lagunas de corta vida. En los cordones medanosos se encuentran playas salitrosas conocidas con el nombre de *ramblones*.³

La evaporación en el área de la travesía está regida por la intensidad de la insolación, la diafanidad atmosférica y la cubierta vegetal xerófila, que se empobreció a partir de la tala del monte. Los cursos autóctonos de los ríos Mendoza y San Juan ya no llegan a destino. El paisaje hidrográfico muerto acentúa el rasgo de aridez de las travesías. Sólo en contadas épocas de crecientes lluvias estivales, los ríos mencionados alcanzan sus niveles locales de base, luego de limpiar los cauces obliterados por las acumulaciones arenosas resultantes de la acción eólica. En el pasado, la tala del algarrobo, la utilización de chañares, alpatacos y jarillas como leña acrecentaron la desnudez edáfica; al no ser controlada aumentó los procesos de deflación y lixiviado de suelos (De Simón, 2013).

Lavalle se caracteriza por poseer un complejo lacustre muy importante cuyo nombre genérico es *Huanacache*⁴. En la actualidad, estas lagunas sólo contienen agua en años hidrológicamente ricos. Se trata de verdaderos humedales que, por razones de orden climático, tectónico y de acción antrópica sobre sus tributarios, han visto peligrar su existencia (Polori, 2000: 14).

El río Mendoza tiene su origen a 2.700 metros sobre el nivel del mar a partir de la confluencia de los tributarios Tupungato, Cuevas y Vacas (Inchauspe y Marzo, Óp. Cit.: 189 y ss.). Sigue su curso natural hacia el este hasta dar con el Cerro Tabolango, el cual le hace describir una amplia curva al sud–este. Conserva esta dirección hasta pasar por Cacheuta, donde a poco

³ Son cuencas cerradas desprovistas de vegetación, en parte por la elevada concentración salina del terreno y/o por la asfixia radicular producida por el agua acumulada esporádicamente (Inchauspe y Marzo, 1967: 55 y ss.).

⁴ El complejo lagunero de Huanacache constituye un sistema de numerosas cuencas, independientes entre sí, o escasamente unidas a través de canales en época de abundancia hídrica, alimentadas por el río Mendoza y antiguamente por los desagües del Bermejo. En el sector compartido con la Provincia de San Juan, las lagunas son alimentadas por el sistema denominado Los Patos–San Juan, formado por los ríos Castaño, Calingasta, Blanco y Los Patos. El nombre genérico de *Huanacache* abarca a toda la comarca lagunera cuya altura sobre el nivel del mar es entre 490 y 550 metros. Constituye un sistema exorreico que tiene su descarga por el río Desaguadero (Inchauspe y Marzo, Óp. Cit.: 238)

andar abandona los cerros y sigue al este por su cono de deyección. Con ese rumbo llega a Palmira, de donde, sin una causa aparente que lo justifique, dobla al norte hasta ir a perderse en las Lagunas de Huanacache, por el antiguo cauce del Río Tunuyán (De Simón, Óp. Cit.). El lecho del río Mendoza, de estrechez variable entre las sierras, se amplía notablemente al llegar a la planicie. Cuando pasa el puente de la Ruta Nacional 7, las barrancas arenosas se desdibujan hasta hacerse casi imperceptibles en las proximidades de la cuenca lagunera. Allí llegan esporádicos caudales por lechos ramificados que se unen en la laguna temporaria del Rosario o Huanacache (Inchauspe y Marzo, Óp. Cit.: 188). El escaso caudal en esta zona se debe a la captación del agua para riego del oasis agroindustrial del Gran Mendoza.

Las 30.000 hectáreas de superficie cultivada del Departamento de Lavalle están irrigadas con las aguas del río Mendoza. Las aguas se reparten mediante un sistema de canales que llegan a dos sectores bien diferenciados. La zona oeste es abastecida por el canal Cacique Guaymallén, proveniente del dique Cipoletti, mediante los canales Tulumaya y Jocolí. La zona centro está regada por tomas directas del río Mendoza y por canales provenientes del dique derivador Gustavo André (De Simón, Óp. Cit.).

A estas características de la geografía del departamento, se combinan características climáticas particulares, el cual se define como templado, seco y predominantemente árido (Álvarez y Cortelezzi, 1997).

Hasta este momento, lo que hemos hecho es dar una descripción general de la geografía lavallina. No obstante, es imprescindible hacer un breve recorrido histórico para comprender el porqué de la situación de marginalidad o “*invisibilidad*” en el que se encuentra Lavalle, en relación al desacoplamiento que sufre respecto del circuito productivo provincial.

Con claridad, hasta mediados del siglo XIX la forma de acumulación regional se circunscribía a la explotación y comercialización ganadera (bajo la forma de ‘*invernada*’), debido a ventajas que la región presentaba en su articulación con dos mercados en expansión: el incipiente mercado ‘nacional’ y el trasandino, vinculado a las ciudades chilenas de Santiago y Valparaíso. Las ganancias extraordinarias percibidas por el comercio ganadero de este momento servirían en el eclipse de la etapa ganadera, para sentar las bases del modelo de desarrollo vitivinícola.

Las características territoriales de la provincia, mayoritariamente desértica, hicieron que la tenencia de la tierra estuviera asociada a la disponibilidad del agua.

Los grandes terratenientes locales, provenientes de familias encumbradas de la época colonial, eran propietarios de las más extensas porciones de tierras irrigadas, las que se destinaban fundamentalmente al engorde de ganado. Este grupo articulaba las ventajas del comercio con la disponibilidad y tenencia de las tierras más aptas del oasis y de mayor cercanía a los pasos cordilleranos, las que destinaban en gran parte al cultivo de alfalfares; dominaban también el tráfico comercial, a partir de la propiedad de medios de transporte, y, gracias a la disponibilidad de metálico proveniente de las transacciones con el Pacífico (Chile), se constituyeron en prestamistas (Collado, 2006).

Entre las décadas de 1880 y 1890 este grupo dominaba el sistema económico a través del comercio ganadero. En este período, las suculentas ganancias obtenidas por el grupo dominante en la provincia encuentran su base en la rentabilidad de la ‘invernada’ ya que la misma posibilitó la diversificación de actividades y la percepción combinada de renta y ganancia como pilares fundamentales de la maximización de beneficios. Esta relativa autonomía, desde la revolución de 1810, impulsó las actividades económicas hacia el Pacífico generando un importante excedente y la adhesión de la elite local al librecambismo (Halperin Dongui, 1975).

Desde el punto de vista económico, la burguesía local seguía los pasos de la nacional, en cuanto a su perfil ganadero orientado hacia el mercado externo y su adaptación rápida a los cambios en el mercado internacional, con la diferencia de que el lugar de colocación del mismo estaba enfocado, en la provincia, prioritariamente hacia el país trasandino (Chile).

Sin embargo, el paraíso especulador–ganadero va a presentar un final no abrupto, aunque sí definitivo, debido a la combinación de una multiplicidad de factores, entre los que se destacan la crisis internacional de 1873, la gran sequía chilena de 1886, la devaluación de la moneda chilena a partir de 1881 y la irrupción del ferrocarril a la provincia en 1885. La caracterización de la ‘etapa de crisis’ y transición hacia una nueva forma de acumulación se extiende desde 1870 hasta principios del siglo XX. Debido a su dependencia con Chile, será la situación de este país la que dominará el escenario provincial.

Por otra parte, tanto el Estado Nacional como el provincial favorecerán desde la década del ‘70 a la incipiente actividad vitivinícola, la cual dejará importantes ingresos para el erario.

La ganadería en pie, exenta de imposiciones arancelarias, no correrá la misma suerte (Collado, Óp. Cit.).

El desarrollo vitivinícola implicó el aumento de la demanda cada vez mayor del recurso hídrico, lo cual tuvo consecuencias regresivas para las zonas semidesérticas. Hacia fines del siglo XIX, el caudal de agua de Lagunas de Guanacache y redes fluviales adyacentes comenzaron a sentir esta carga, disminuyendo sustancialmente. Esta situación tuvo un impacto trascendental en la dinámica económica del departamento que, hasta ese momento, se abocaba mayoritariamente a los cultivos agronómicos y a la pesca. Como afirma Montaña (et. al., 2004), a partir de este momento la producción en las zonas no irrigadas se volcaron a la crianza de ganado de menor, particularmente caprino. Acompañando este proceso, las actividades extractivas, como la tala de algarrobos, se profundizaron a comienzos de siglo XX.

Desde la década del '80, el dinamismo de la actividad vitivinícola tras la reconversión productiva se abocó a la ampliación de la frontera agrícola en zonas con mejores condiciones agroecológicas (como es el caso del Valle de Uco), en detrimento de las zonas de bajo riego y de secano, las cuales no fueron beneficiadas con el grueso de las inversiones extranjeras. Primeras aproximaciones a la comprensión de la estructura económico-social del departamento de LaValle

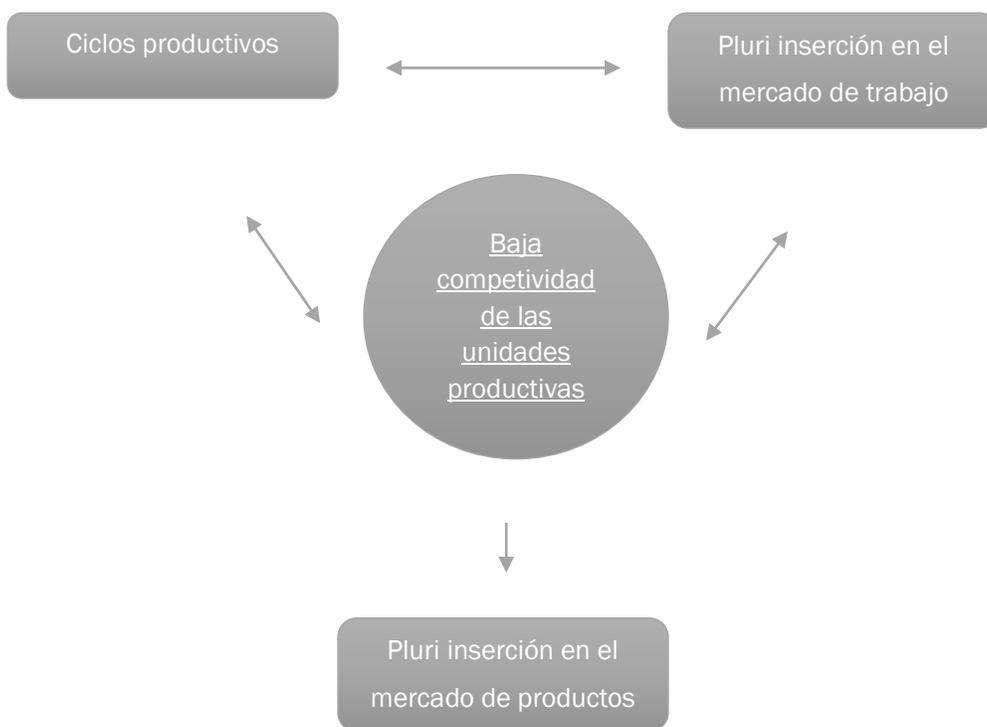
Como señalamos líneas arriba, la población rural de Lavalle (cerca al 80%) está constituida, en gran parte, por asalariados/as rurales y pequeños/as productores/as agropecuarios/as. Hacia el interior del departamento preexiste también una importante desigualdad entre los territorios que tienen derecho a riego y aquellos que corresponden al secano. A las características mencionadas, se suman los graves procesos de desertificación, que se combinan con la situación de marginalidad que afecta a las zonas no irrigadas respecto del circuito económico provincial orientado a la agroindustria vitivinícola (caso de Valle de Uco, por ejemplo).

Obligados a la pluriactividad, los/las asalariados/as rurales logran a cuenta gotas alcanzar un ingreso que les permita la subsistencia. Como observamos anteriormente, para 2010 el índice de NBI positivo (Necesidades Básicas Insatisfechas) se remontaba por encima del 20% de

los hogares (INDEC–CNPhyV, 2010), mientras que para 2012 (INDEC–ECV) las cifras de empleo no registrado duplicaban la media provincial (61% sobre el total de asalariados). Siguiendo las pistas de lo antes dicho, podríamos comenzar a delinear un primer acercamiento a la estructura de clases del departamento. En relación a ello estaríamos hablando de un sujeto agrario *semi proletarizado* y *pluriactivo* que en las zonas áridas se encuentra compuesto por puesteros y familiares dedicados principalmente –aunque no solamente– a la crianza de caprinos. Por otro lado, entre la población rural aglomerada se encuentran otros tipos ocupaciones cuentapropistas y asalariadas (artesanos, cosechadores, contratistas, etc.), en donde la superficie cultivada se destina a la producción hortícola y vitícola.

Esquema:

Pluri inserción en el mercado de trabajo y de productos en el agro lavallino.



Fuente: Elaboración propia.

Una de las hipótesis de trabajo sostiene la presencia de una alta influencia de la *pluri inserción en el mercado de trabajo* entre los obreros rurales y los contratistas de viña, frutales y hortalizas como consecuencia de la baja productividad de las explotaciones agropecuarias. Dicho fenómeno estaría relacionado a las características de los ciclos productivos –con mayor dinamismo en el primer trimestre del año, particularmente en la vendimia–, la escasa articulación y organización de los productores, el desarrollo de técnicas agronómicas y de sistemas de riego inadecuados, entre otros. Huelga mencionar que todo esto se ve condicionado a las características naturales del departamento afectado por importantes procesos de desertificación, que han relegado a Lavalle respecto del circuito productivo provincial. En relación a las unidades productivas, se percibe también la presencia de una tendencia a la *pluri inserción en el mercado de productos*, como consecuencia de los bajos dividendos obtenidos de la actividad agropecuaria, situación que obliga a los pequeños y medianos productores a diversificar su producción ello con el fin de complementar sus ingresos.

No obstante, es común que estos no se reconozcan “obreros”, sino “campesinos sin tierra”; en ocasiones, sobre todo en los distritos de mayor concentración poblacional como Jocolí, se encuentran nucleados en organizaciones como UST (Unión de Trabajadores Sin Tierra/Vía Campesina) y OTRAL (Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle), disputando en el campo político el control del territorio. Este panorama se complejiza si tenemos en cuenta que en Lavalle reside la comunidad Huarpe más grande del país. Es decir, en ocasiones el componente indigenista se combina a la del campesino, que resiste la proletarización reclamando el derecho colectivo sobre la tierra, que más que un mero factor de producción es entendido como una entidad sagrada.

En el caso de los/las trabajadores/as rurales (obreros/as propiamente dichos) de las zonas productivas se percibe también un amplio sentido de arraigo. Nadie quiere irse de Lavalle, a menos que las condiciones económicas lo obliguen. En una investigación colectiva (Cortese et. al., 2016) de la que soy partícipe, en 2015 llevamos a cabo un *focus group* en un distrito del departamento –Costa de Araujo– a jóvenes trabajadores/as del agro, del cual pueden extraerse algunas consideraciones significativas que reafirman esta idea. De generación en generación, sus familias se han dedicado al trabajo de la tierra. Desean un pasar mejor, por

ello siguen cursando sus estudios secundarios en la escuela nocturna, pero siempre pensando en Lavalle.

Desde ya, todo lo dicho plantea un espectro interesantísimo que merece ser estudiado: ¿Cuáles son los sujetos de clase que se encuentran presentes en la estructura económico-social del departamento? ¿Proletarios, semi proletarios, campesinos sin tierra, campesinos e indígenas...? A lo largo de este estudio, se espera encontrar alguna certeza ante tantos interrogantes. Todo esto amerita un estudio que trascienda el análisis estadístico y descriptivo, para avanzar sobre un marco de comprensión más profundo que se sumerja en la complejidad de las relaciones de fuerza entre las clases del olvido norte mendocino, que remiten no solo a relaciones de propiedad sino también a estructuras de sentimiento que motorizan las luchas territoriales de vieja data.

Pero este panorama se complejiza cuando nos interrogamos respecto de la situación de los pobladores del secano lavallino, invisibles entre los invisibles.

Retomemos un dato otorgado al principio de esta presentación: el oasis bajo riego comprende 237 km², representa el 3% de la superficie del departamento y abarca cerca del 43% de la población urbana y rural concentrada. La zona de secano o sin riego, abarca el 97% restante de la superficie del departamento (aproximadamente 10.107 km²), donde habita el resto de la población rural, pero bajo un importante patrón de dispersión. Todo esto tiene su correlato histórico, como afirma Torres (2008: 201):

Si antes de los años noventa algunos autores habían descrito a estas poblaciones y territorios como marginales, periféricos o subordinados, la profundización de las condiciones de dependencia inauguradas hacia la década del 90 y la progresiva pauperización de los espacios rurales que se ha documentado en distintos países de América Latina, podría haber significado, para los desiertos de Mendoza, la profundización de las condiciones de integración subordinada del pasado, quizá visible en un aumento en los niveles de pluriactividad en el presente.

Además de presentar una estructura productiva “desacoplada” de la dinámica de acumulación de la provincia y la región, las zonas no irrigadas de Lavalle no logran forjarse como centro de atención de las políticas públicas.

En las décadas del '70 y del '80 la población del secano se dedicaba ante todo a la crianza de ganado menor (venta de cabritos), complementariamente a la explotación de ganado mayor,

en algunas zonas a la recolección y venta de junquillo, a la recolección y venta de leña y frutos de algarrobo y a la confección y venta de artesanías (Triviño, 1980; Triviño *et al.*, 1981, citado por Torres, *Óp. Cit.*).

En base a un estudio realizado a mediados de la década pasado, Laura M. Torres (*Ibid.*) afirma que la pluriactividad es fenómeno que extiende a las unidades productivas del secano, combinándose esto con rasgos de pluri-inserción en el mercado de productos y de trabajo. Para su investigación, se tomó como caso testigo el distrito de La Asunción.

Los datos arrojados por el estudio (Torres 2006, 2007) indicaban que el 54% de las unidades de producción desarrollaban actividades ligadas a la cría de caprinos, el 50% extraía y vendía guano, el 44% producía artesanías, el 42% de las unidades era beneficiaria de algún plan social, el 34% desarrollaba actividades extra-prediales (en particular bajo la forma de contratación temporaria en la cosecha de vid), el 18% reportaba algún tipo de actividad ligada con la venta de bovinos, el 16% desarrollaba actividades ligadas con el turismo y el 14% presentaba empleos en relación de dependencia (el 100% de ellos con el Estado), el 10% producía miel, el 8% otros tipos de ganado (equinos y ovinos) y, para terminar, el 4% era beneficiario de pensiones (otros ingresos).

Si se valora la significación que tiene cada una de estas actividades económicas a nivel del ingreso absoluto que alcanzaba el distrito de La Asunción en aquel entonces, los datos señalaban que la actividad que reporta mayores ingresos es la extracción y venta de guano (20,8%), seguida de los subsidios directos a la pobreza (19,10%), de los empleos en relación de dependencia (15,7%) y luego, de la actividad caprina para venta de carne (14,3%). Finalmente, si se analizan los ingresos promedio que aportaban estas actividades a las unidades domésticas se obtuvo que los empleos en relación de dependencia presentan los promedios de ingresos anuales más altos, seguidos de los subsidios a la pobreza, de los que se producen por la venta de guano y otras formas de ingreso (pensiones), ubicándose la actividad caprina en sexto lugar (Torres, 2008: 206 y ss.).

Comparado con el panorama documentado en los años '70 y '80, se observa que en el presente se ha modificado sustancialmente la centralidad de unas y otras actividades económicas. Mientras algunas se mantienen (caso de la ganadería menor), otras han desaparecido (la venta de leña y de frutos del algarrobo) y otras nuevas se han hecho presentes (producción y venta de miel y de servicios turísticos, por ejemplo).

Un análisis más detallado de estos puntos permite reconocer que no todas las unidades de producción han seguido los mismos caminos. Torres (Ibid.), sugiere diferenciar las unidades de producción en dos subgrupos, en virtud del tipo de actividades económicas que registraban:

∴ *Puestos pecuarios*: aquellos que contaban con producción pecuaria y que adicionaban otras actividades económicas (34 unidades de producción).

∴ *Puestos no pecuarios*: aquellos que no desarrollaban actividades pecuarias e integraban otras varias actividades económicas (16 unidades de producción).

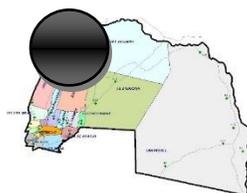
De acuerdo con los datos obtenidos, los subgrupos identificados reflejaban distintas orientaciones productivas.⁵

Sobre lo dicho, se presentan las primeras categorías de análisis para el abordaje empírico de la problemática, de corte cualitativo en una etapa de investigación futura.

Estas primeras categorías de análisis son apenas tentativas a los fines de un abordaje ulterior, y que, como tal, no configura un estudio en términos de estructura de clases propiamente dicho.

Planicie Tulumaya:

ZONAS DE BAJO RIEGO



⁵ Mientras los ingresos más importantes de los *puestos no pecuarios* provenían de subsidios directos a la pobreza (35%), seguidos de los derivados de la venta de artesanías (28%) y de empleos públicos (26%), en los *puestos pecuarios* la situación es diferente. Los ingresos más importantes se vinculan con la actividad pecuaria, pero llamativamente no con la venta de carne caprina o bovina, sino con la venta de un subproducto de la primera (guano, 33%). En segundo lugar, se ubican los subsidios a la pobreza (14%) y luego, los empleos en relación de dependencia (12,5%), los derivados de la venta de cabritos (11%) y de fuerza de trabajo en los oasis (9,6%). Si luego se analizaba el número de unidades de producción que incorporaban unas y otras actividades, se obtenía el siguiente cuadro de situación: las actividades económicas/formas de ingreso de mayor presencia en los puestos no pecuarios eran la venta de artesanías y subsidios directos a la pobreza y, en tercer lugar, las actividades extra-prediales. En el caso de los puestos pecuarios las mayores presencias se repartían entre la venta de caprinos y guano, seguidas de las actividades extra-prediales y la venta de artesanías. Finalmente, si se analizaba el número de actividades económicas que combinaban las unidades domésticas se señala que en su mayoría, los puestos sumaban entre dos, tres y cuatro actividades económicas y que, comparativamente, los puestos que sobrepasaban o se ubicaban por debajo de estos valores, eran relativamente menores (Torres, 2008: 209 y ss.).

Cuadro 1. Estructura de clases en las zonas de bajo riego. Departamento de Lavalle.

Clases	Fracciones de clase	
Propietarios (medianos y pequeños productores agrarios) <i>¿Campesinado?</i>	Propietarios de finca/s y bodega/s	Más de 20 Ha.
		Entre 11 y 20 Ha.
		Entre 5 y 10 Ha.
		Menos de 5 Ha.
	Propietarios de bodega/s	Más de 20 Ha.
		Entre 11 y 20 Ha.
		Entre 5 y 10 Ha.
		Menos de 5 Ha.
	Propietarios de finca/s (explotaciones vitivinícolas exclusivamente)	Más de 20 Ha.
		Entre 11 y 20 Ha.
		Entre 5 y 10 Ha.
		Menos de 5 Ha.
	Propietarios de finca/s (explotaciones vitivinícolas más otras)	Más de 20 Ha.
		Entre 11 y 20 Ha.
		Entre 5 y 10 Ha.
		Menos de 5 Ha.
	Propietarios de finca/s (explotaciones agrícolas)	Más de 20 Ha.
		Entre 11 y 20 Ha.
		Entre 5 y 10 Ha.
		Menos de 5 Ha.
	Propietarios de finca/s (explotaciones ganaderas y/o caprinas)	Más de 20 Ha.
		Entre 11 y 20 Ha.
		Entre 5 y 10 Ha.
		Menos de 5 Ha.
Otros	Productores apícolas	
	Productores forestales	Algarrobo
		Junquillo
		Otros
	Productores de animales	Bovino
		Porcino
		Caprinos
		Otros
Otros		

Cuadro 2. Estructura de clases en las zonas no irrigadas o de secano. Departamento de Lavalle.

Clases	Fracciones de clase		
Propietarios (medianos y pequeños productores agrarios) <i>¿Campesinado?</i>	Propietarios de puestos caprinos	Con límites definidos	Más de 20 Ha.
			Entre 11 y 20 Ha.
			Entre 5 y 10 Ha.
			Menos de 5 Ha.
		Sin límites definidos	Más de 20 Ha.
			Entre 11 y 20 Ha.
			Entre 5 y 10 Ha.
			Menos de 5 Ha.
	Propietarios de puestos no caprinos	Con límites definidos	Más de 20 Ha.
			Entre 11 y 20 Ha.
			Entre 5 y 10 Ha.
			Menos de 5 Ha.
		Sin límites definidos	Más de 20 Ha.
			Entre 11 y 20 Ha.
			Entre 5 y 10 Ha.
			Menos de 5 Ha.
Otros	Productores apícolas		
	Productores forestales	Algarrobo	
		Junquillo	
		Otros	
	Productores de animales	Bovino	
		Porcino	
		Caprinos	
Otros			
Otros			
Campesinado “sin tierra”			
Campesinado indígena			
Obreros/empleados	Obreros rurales transitorios	De viña, frutales y hortalizas	
		De viña	
		De frutales y/u hortalizas	
	Empleados del sector público	Operarios y personal de maestranza	

Fuente: Elaboración propia.

Algunos interrogantes a futuro: el plan provincial de ordenamiento territorial

A lo largo de este apartado hemos avanzado sobre la idea de que el departamento de Lavalle se avista como un “*espacio invisible*”, desacoplado de la dinámica económico productiva de la provincia; como afirmamos, esta situación puede ser explicada no sólo por los condicionantes naturales del territorio, sino ante todo por factores sociales e históricos. En consonancia, consideramos necesario avanzar en el análisis de las desigualdades territoriales en relación al contraste *oasis–secano* también hacia el interior del departamento.

En este sentido, uno de los sucesos que plantea una importante reconfiguración territorial de Lavalle es la proyección de los organismos oficiales en el marco del *Plan Provincial de Ordenamiento Territorial* (PPOT). Como señala el informe del CIFOT (2013), la creciente concentración de actividades y recursos en los oasis produce desequilibrios territoriales, falta de conectividad y accesibilidad y la existencia de un dualismo productivo, impide un crecimiento equitativo y sustentable. Esta propuesta que propone corregir “el desatino” en la producción del espacio, pretende –entre otros objetivos– incorporar plenamente a las zonas irrigadas del departamento norteño al *cordón verde* de Gran Mendoza. Pero la pregunta que siempre subyace ante este tipo de planteos es ¿quiénes ordenan, para quiénes ordenan y para qué lo hacen? Como señala Jurado (et. al. 2018),

(...) las ideas de orden/desorden insertas en las políticas públicas bajo los marcos socio–económicos actuales, conllevan una altísima carga ideológica, entendiéndose por “buen orden”, el orden social y espacial predominante, hegemónico. En otras palabras, consiste en el orden de los grandes capitales con influencia local.

La expansión del capitalismo desterritorializa algunas relaciones sociales y tiende a exterminar las relaciones no capitalistas a través de lo que Harvey (2004) define como *acumulación por desposesión*, comprendida por la destrucción de puestos de trabajo, la precariedad de las relaciones laborales y la destrucción de los territorios campesinos e indígenas. Este tipo de acumulación significa un estado avanzado de relaciones capitalistas que necesitan cada vez menos de la recreación de relaciones no capitalistas. Es decir, que territorialidades sobre los cuales el capital no había avanzado, pasan a ser valoradas por él. Como dijera Lenin (1974: 174), el capital no está interesado sólo en las materias primas ya

descubiertas, sino también en las posibles fuentes, “pues el desarrollo de la técnica moderna es en extremo rápido, y la tierra hoy inservible puede ser transformada en útil mañana (...)”. Los proyectos de siembra de soja de bajo consumo de agua, de cluster ganadero–caprino y la producción de biocombustible con estiércol de cabra son algunas señales que dan cuenta de ello.

En gran medida el PPOT apunta a la resignificación de los espacios rurales en el entramado territorial, como espacios de garantía de la seguridad hídrica, energética y alimentaria. En este último eslabón se coloca Lavalle que, como tal, se proyecta como nuevo cinturón verde hortícola del conglomerado urbano de Mendoza, ante la avanzada de emprendimientos inmobiliarios sobre las zonas productivas de Guaymallén y Maipú que, conjuntamente con los distritos lavallinos de Las Violetas y La Pega, constituyen en la actualidad los mayores proveedores de productos hortícolas para las zonas urbanas del oasis norte.

Es de suponer que la implementación de un plan de estas características generará (y genera ya) diferentes conflictualidades. Como afirma Fernandes (2010), las clases sociales y el Estado producen trayectorias divergentes y diferentes estrategias de reproducción socioterritorial.

El capital necesita de una estrategia de organización territorial y para ello necesita del Estado. En este sentido, el PPOT es gran medida una proyección del modelo de desarrollo deseado por los sectores dominantes. Ante este panorama cabe preguntarse si el plan oficial apunta realmente a consensuar su mirada con los proyectos de desarrollo de las comunidades. Aunque el PPOT hace hincapié en la generación de espacios de construcción colectiva, los mecanismos de participación abarcan a ciertos sectores sociales, dejando fuera de la discusión a otros. Al respecto, Sales (2016: 71) sostiene que “las políticas gubernamentales de ordenamiento territorial plasmadas en el PPOT invisibilizan las particularidades de los territorios rurales y más específicamente, de territorios ganaderos.” Esta apreciación acerca de las tierras áridas contribuye aún más a complejizar el cuadro de situación. Entonces, el interrogante queda planteado: ordenar ¿en función de que intereses? La respuesta por el momento está abierta.

Bibliografía

- ALVAREZ, A. y CORTELLEZI, N. (1997). “Geografía de Mendoza. Los departamentos de la provincia y su organización espacial”. Mendoza: *Diario Los Andes*.
- ANDRADE, L. (2005). *Sociología de la desertificación. Los productores ovino extensivos de la Patagonia austral*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- CEPAL (2005). *Pobreza, desertificación y de los recursos naturales*. Buenos Aires.
- CIFOT (2013). *Modelo territorial actual*. Mendoza: Proyecto de Investigación y Desarrollo PID 08/2009, CIFOT, MOT, FFyL–UNCuyo.
- COLLADO, P. (2006). “Desarrollo vitivinícola en Mendoza–Argentina. Apuntes sobre su origen”. Santiago del Estero: CAICYT–CONICET. *Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas*. VII (8). Otoño.
- CORTESE, C., et. al. (2016). *Trabajadores privados no registrados y trabajadores públicos precarios. Dos caras de la inclusión en la explotación laboral*. Mendoza: Informe Final de Resultados, SEPTyP/UNCuyo.
- DE SIMÓN, C. (2013). “Planificación turística sustentable en el departamento de Lavalle, Mendoza, Argentina”. *Revista Virtual de Investigación en Turismo y Desarrollo Local*. 6 (15), diciembre. Disponible en: www.eumed.net/rev/turydes/
- DEIE–INDEC (2004). *Encuesta de Condiciones de Vida de Hogares Rurales. Distritos rurales de la provincia de Mendoza*. Mendoza: DEIE. Subsecretaría de Programación Económica. Ministerio de Economía. Gobierno de Mendoza, octubre.
- DEIE–Municipio de Lavalle (2013), *Sistema Estadístico Municipal. Primera parte*, Lavalle: DEIE. Dirección de Promoción Económica.
- DEIE–Municipio de Lavalle (2013), *Sistema Estadístico Municipal. Segunda parte*, Lavalle: DEIE. Dirección de Promoción Económica.
- DOMINGUEZ, O. (2001, 29 de marzo). “El renacimiento de las Lagunas de Guanacache”. Mendoza: *Diario El Sol*. Sección “Turismo”.
- FERNANDES, B. M. (2010). “Acerca de la tipología de los territorios”. En *Defensa comunitaria del territorio en la zona central de México: enfoques teóricos y análisis de experiencias*. Coyoacán: Juan Pablos, p. 57/76.
- GARCÍA LLORCA, J. y CAHIZA, P. A. (2007). “Aprovechamiento de recursos faunísticos en las Lagunas de Guanacache (Mendoza, Argentina). Análisis zoo arqueológico de La Empozada y Altos de Melián II”, Chungara: *Revista de Antropología Chilena*, 39 (1), Pág. 117–133, junio.
- HALPERIN DONGHI, T. (1975). “La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810–1852)”. En: Di Tella, T. y Halperin Dongui, T. *Fragmentos de Poder. De la oligarquía a la poliarquía en Argentina*. Buenos Aires: Jorge Alvarez,
- HARVEY, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.
- INCHAUSPE, O. y MARZO, M. (1967). *Geografía de Mendoza*. Mendoza: Spadoni.
- Instituto de Desarrollo Rural (2012). *Estimación de la superficie cultivada con hortalizas en Mendoza. Temporada 2011/2012*. Mendoza: Programa de Relevamiento Hortícola Provincial. Instituto de Desarrollo Rural.
- Instituto de Desarrollo Rural (2014). *Estimación de la superficie cultivada con hortalizas en Mendoza. Temporada 2013/2014*. Mendoza: Programa de Relevamiento Hortícola Provincial. Instituto de Desarrollo Rural.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Glosario*. Buenos Aires: INDEC.
- JURADO, E. et. al. (2018). “¿Quién ordena y para quién? Apuntes sobre el Ordenamiento Territorial en Mendoza. Parte I”. *La izquierda Diario*. 22 de septiembre. Disponible en: <https://www.laizquierdadiario.com/Quien-ordena-y-para-quien-Apuntes-sobre-el-Ordenamiento-Territorial-en-Mendoza-Parte-I>
- LENIN, V. I. (1974). *Imperialismo, etapa superior del capitalismo*. Buenos Aires: Polémica.
- LÓPEZ BERMÚDEZ, F. (2002). *Erosión y desertificación*. Buenos Aires: Nívola.
- Material de Apicultura–Equipo Agropecuario (2012). *Manual de Agricultura. Glosario de apicultura*. Pahuatlán: Alcatraz Sierra Mágica SC de RL de CV.

- MONTAÑA, E. et. al. (2004), “Los espacios invisibles. Subordinación, marginalidad y exclusión de los territorios no irrigados en las tierras secas de Mendoza, Argentina”, México: *Región y Sociedad*. 17 (32).
- MPTeI (2009). *Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario–EPSA 2009*, Mendoza: Resolución del Ministerio de Producción. Tecnología e Innovación N° 186/09. Gobierno de Mendoza y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca–Presidencia de la Nación. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).
- Observatorio de la Deuda Social (2012). *Serie ODSA de tasas de indigencia y pobreza: 2006–2011. Totales urbanos*. Córdoba: Universidad Católica Argentina Pontificia.
- PASTOR, G., ABRAHAM, E. M. y TORRES, M. L. (2005). “Desarrollo local en el desierto de Lavalle. Estrategia para pequeños productores caprinos (Argentina)”. Buenos Aires: CONICET. *Cuadernos de Desarrollo Rural* (54). Pág. 131/149.
- POLORI, C. (2000, 13 de mayo). “Protegerán desde hoy las lagunas de Guanacache”, Mendoza: *Diario Los Andes*.
- SALES, R. (2016). “Herramientas conceptuales y operativas para el ordenamiento territorial: paisajes rurales en tierras secas desde la percepción de bienes comunes naturales y la conformación de redes sociales”. En: Lettelier, D. et. al. (Comp.). *Primeras Jornadas de Estudios y Experiencias en los Territorios de Interfaz*. Mendoza: SECTyP–UNCuyo.
- TORRES, M. L. (2008). “Nueva ruralidad en territorios periféricos: los productores caprinos del noreste de Mendoza (Argentina)”. Bogotá: *Universitas Humanistica*. 66. Julio–diciembre.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Desigualdad y Riquezas. Un análisis desde la categoría de Grupos de poder económico en Paraguay. Los casos del grupo Favero y A. J. Vierci.

Dalila Sosa Marín¹
Universidad de Buenos Aires
dcsm.lila2@gmail.com

Resumen

El estudio de la desigualdad desde arriba en Paraguay en un campo poco explorado, por tanto, se presenta múltiples desafíos. Sin embargo, al hacer una revisión a nivel regional es posible encontrar que el análisis de las riquezas, los grupos económicos y la desigualdad han sido ampliamente abordado. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar desde la categoría de Grupos de poder económicos o GPE (Durand, 2017), las características que tienen los grupos económicos en Paraguay.

En el trabajo se plantea, en primer lugar, exponer los trabajos que en relación al tema se han en Paragua, así como también investigaciones realizadas a nivel regional. Luego se retoman elementos que explican las características de los GPE y a partir de dichos elementos se presenta una breve composición de los grupos económicos Favero y Vierci. Finalmente se presentan las reflexiones preliminares.

Palabras Claves: GRUPOS DE PODER ECONÓMICO – RIQUEZAS - DESIGUALDAD - PARAGUAY

Introducción

¹ Psicóloga Comunitaria por la Universidad Nacional de Asunción. Maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos por la UBA.

Lejos de las miradas que consideran la desigualdad como el producto de las diferencias entre individuos, habilidades y capacidades, en esta investigación se considera a la desigualdad como un proceso social, producto de las relaciones sociales (de dominación, de despojo, discriminación, explotación, expulsión) o dicho de otro modo, “construcciones sociales que se desarrollan y consolidan a partir de estructuras, agentes y procesos que les dan una forma histórica concreta” (Cimadamore y Cattani, 2008, p. 9).

En este sentido, el objetivo de esta ponencia es analizar desde la categoría de Grupos de poder económicos, las características que tienen los grupos económicos en Paraguay. Se tomarán como casos de estudios los grupos Favero y grupo A.J. Vierci. La ponencia se reconstruye especialmente a partir de la revisión documental y bibliográfica sobre el tema, fuentes secundarias y datos oficiales, uno de ellos es el registro de mayores contribuyentes al fisco, de allí parten los casos seleccionados para el análisis –el ranking de mayores contribuyentes declarados ante el Ministerio de Hacienda en Paraguay- pues dichos grupos se encuentran entre los mayores aportantes al fisco en los últimos años.

Acerca de la selección de los casos, el grupo Favero concentra sus actividades en el sector de agronegocio y ha logrado un importante nivel de crecimiento en los últimos años. Por su parte el grupo A. J. Vierci, tiene un papel destacado en relación a la adquisición de medios de comunicación y sobre este tema existen varios estudios, no obstante, el grupo ha logrado diversificarse con la inversión en diversas áreas de la economía local y con la expansión de sus negocios en países de la región.

En Paraguay, la mayor concentración se basa en la tenencia de tierra y la actividad vinculada al agronegocio, estos constituyen los rasgos esenciales que definen la producción del país. Sin embargo, el contexto de crecimiento económico experimentó el país en los últimos años, ha generado que, otras actividades, tales como el sector servicios, haya generado nuevas dinámicas en la economía que ha posibilitado el poder y la acumulación de riquezas de determinados grupos locales

Los estudios sobre desigualdad en el caso paraguayo, desde la producción académica han estado vinculados a la medición de ingresos, desigualdades; de género, educativas. Predominan estudios relacionados con la pobreza, siendo poco abordado académicamente el tema de la riqueza, concentración económica, existe una vacancia sobre las clases altas. A

raíz de lo expuesto en la ponencia se pretende ahondar en las características de estos grupos de poder económico, como una aproximación que posibilite posteriormente ahondar en el tema de élites económicas.

La importancia de esta investigación radica en el aporte que puede realizar para la discusión sobre la desigualdad poniendo énfasis en el “polo de la riqueza”, atendiendo a que la mayor parte de las riquezas se producen y circulan en contextos sociales. En otras palabras, este es un análisis de las estrategias de los grupos o sectores dominantes, enmarcando un enfoque relacional que destaca el funcionamiento de las estructuras y los procesos sociales que operan en la reproducción de desigualdad de nuestro tiempo.

El trabajo se estructura de la siguiente manera, en un primer apartado se exponen antecedentes el tema, luego se retoma la categoría de grupos económicos desde los aportes de Wilson y Peres (1998) y Durand (2017). A partir de allí se presentan los dos grupos económicos en estudio Favero y Vierci. Finalmente, las reflexiones preliminares dan cuenta de los múltiples desafíos que subsisten para el abordaje del tema

La desigualdad y la riqueza. Estudios previos

El sociólogo norteamericano Charles Tilly, (2000) señalaba que, los vínculos entre los dueños del poder y determinadas instancias del Estado refuerzan lazos y privilegios a favor de los primeros. Cattani (2006), señala que se ha producido un desplazamiento semántico en el pensamiento crítico radical latinoamericano entre los conceptos referidos a las desigualdades:

Los análisis de las clases pobres en las Ciencias Sociales latinoamericanas se preocupan por describir con crudeza en la adjetivación sus características, mientras sucede lo contrario para las clases ricas. Estas son ignoradas o consideradas abstracciones deslocalizadas de la realidad inmediata, o se refieren a ellas en forma mediada por las relaciones de poder e ignoran el análisis de su capacidad para influir sobre las decisiones políticas y económicas que afectan a millones de personas. (pp. 29-30)

Los estudios sobre las elites y/o las clases altas recibieron por su parte una menor atención, pues las producciones que abordan las problemáticas de estas clases han sido escasas (De Imaz, 1965; Heredia, 2010; Luci, 2009). Las investigaciones recientes instalaron la discusión

acerca de la concentración de la riqueza (Piketty, 2014; Alvaredo y Piketty, 2016), la concentración de ingresos, la necesidad de revisar el sistema impositivo y las altas rentas (CEPAL, 2015).

En la misma línea se encuentra el trabajo de Sánchez, (2016) quien sostiene que los estudios sobre riqueza y acumulación de recursos y capitales vinculados al análisis de la estructura Social han sido menores o invisibilizado “como consecuencia sobre todo del enfoque de los OID² que obliteran los procesos de acumulación de riqueza y ponen el énfasis en la pobreza” (p. 43-44)

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, hizo hincapié en la necesidad de abordar la desigualdad más allá de la identificación y caracterización de sectores vulnerables, prestando atención al tema de la distribución, puesto que “la desigualdad hace referencia a las asimetrías en la capacidad de apropiación de los recursos y activos productivos (ingresos, bienes, servicios, entre otros) que constituyen o generan bienestar entre distintos grupos sociales” (CEPAL, 2016, p.18)

Sin lugar a duda, estos temas abrieron la posibilidad de plantear estudios que retomen el aspecto relacional, multidimensional y complejo de la desigualdad (Kessler, 2016). Es decir, si existe pobreza y desigualdad es porque a la vez coexisten grupos o sectores de la población que acaparan, concentran, excluyen y hasta cierto punto imponen sus valores y preferencias al resto de la sociedad.

Si bien la idea de desigualdad y riquezas se ha abordado ampliamente desde la categoría de élites económicas. Aquí reunimos el tercer grupo de estudios, más recientes, muchos de ellos promovidos desde los grupos de trabajos de CLACSO-OXFAM, entre otros intelectuales.

Los mismos abordan los temas sobre élites económicas, evasión fiscal, capturas políticas, puertas giratorias, ponen el énfasis en la captura del Estado por parte de grandes grupos corporativos y los riesgos que esto supone para los procesos democráticos de los países en la región (Durand, 2017; Castellani, 2018). Es sabido que el estudio sobre los grandes empresarios, las grandes ganancias o las élites no está exento de dificultades en ningún país

² El autor hace referencia al tratamiento que hacen de estos temas los Organismos Internacionales de Desarrollo

de la región. (Atria, Castillo, Amenábar, Sánchez, Cociña 2017; Rojas, 2017; Heredia, 2016; Benza, 2016; Jiménez, 2016;).

Si bien, la desigualdad no es un tema nuevo, lo novedoso es poder indagar en la existencia o no de nuevas dinámicas que contribuyen a la reproducción de la desigualdad, tener en cuenta las dinámicas de apropiación y expropiación, es decir los procesos de explotación y acaparamiento de oportunidades que amplían las brechas de desigualdad y a la vez prestar atención a procesos que se desarrollan e incorporar el análisis en tres niveles: los individuos, sus interacciones y las estructuras sociales Tilly (2000; Reygadas, 2004; y D'Amico, 2013), Los últimos años de la década del noventa, fueron, según los economistas de la CEPAL, momentos de profundos cambios para la economía mundial los países industrializados de la región y aquellos en desarrollo. Un ejemplo de esto es el modelo del agronegocio implica la configuración de nuevas escalas de productividad, donde resulta necesario aumentar el tamaño de la explotación para que ésta sea rentable (Gras y Valeria Hernández, 2008 en Córdoba 2014; Fogel 2013, 2018). En caso de Paraguay, Fogel (2013)

“Los sojeros no son los únicos que acumulan grandes fortunas, ya que, entre los dueños de grandes fortunas, mayores a treinta millones de dólares, que llegan a 175 en el 2014, existen quienes se hicieron de mucho dinero a partir de otra inserción en la estructura socioeconómica; entre éstos se destaca el empresariado que controla el capital financiero y los empresarios de frontera. La cantidad de multimillonarios se multiplicó en un 10% en el último año. Estos multimillonarios controlan la quinta parte del PIB del país” (p. 109)

Sin embargo, los estudios acerca de la composición de los grupos, evolución, sobre todo, el capital financiero, es un tema, que no ha sido abordado en extenso por las ciencias sociales paraguayas, existen si, diversos estudios sobre el papel del empresariado. (Caballero y Masi, 1989; Borda, 1993; Masi, 2015). No obstante, como mencionábamos al inicio, ha constituido un aporte fundamental el desarrollo que realiza Rojas (2009; 2017) concibiéndoles como actores sociales con un destocado papel en el desarrollo del país y que más adelante veremos, pueden contribuir u obstaculizar los procesos de gestión de políticas públicas de desigualdad. Esto ha dado origen a una línea de investigación abocada a analizar la extrema riqueza, poniendo énfasis en el patrimonio de los grupos económicos nacionales y los modos por los

cuales aprovechan su posición dominante en los mercados (Lagos, 1962, Dahse, 1979; Fazio, 1997, 2000). En Paraguay existen varios trabajos sobre el tema de la desigualdad desde el punto de vista económico, de género, educativo, estructura social (Borda y Masi, 2001; Borda 2009; Serafini 2008, 2016; Rodríguez y Galeano, 2008; Rodríguez y Sosa, 2016; Elías, Denis y Molinas, 2006; Ortiz, 2014a, 2016b). Sin embargo, existe una vacancia en temas que aborden la desigualdad desde clases sociales, clases altas (Ortiz, 2016) o riquezas.

Aun así, destaca el aporte de Borda (1993) sobre el empresariado en época de transición. Sobre grupos económicos, el aporte más destacado constituye el trabajo de Aníbal Miranda (2000), él mismo autor señalaba que, sobre el extremo de los ingresos altos la literatura sobre estos temas en Paraguay es escasa. A esto podemos agregar los trabajos de Rojas (2009; 2016) el primero sobre los actores del agronegocio en Paraguay y el segundo, análisis de los dueños de la tierra y la extrema desigualdad.

Como se dijo, existen escasos trabajos que den cuenta de estudios en primer lugar, que caractericen a la clase alta, más se resalta la necesidad de generar estudios en esa línea (Ortiz, 2016). Referirnos a estos grupos como élites económicas se torna complicado pues es un tema escasamente tematizado en las ciencias sociales paraguayas, como actores significativos a nivel nacional.

No obstante, hay que destacar que recientemente han surgido estudio que arrojan luz sobre este tema, sobre todo por que presentan a estos grupos como actores (Rojas, 2009) actores económicos (Soler y Nicoklajczuc, 2018) cúpulas empresariales o elites económicas (Nicoklajczuc, 2018). Es por esta razón que surge la necesidad de caracterizarlos, conocer su estructura, de a modo a que más adelante se pueda conjeturar y determinar en qué medida poseen características singulares y en qué aspectos se pueden comparar a los grupos económicos de otros países de la región.

Aportes teóricos. Grupos de Poder económico. Breves características

Desde la perspectiva de Durand (2017) un rasgo de lo que lo él denomina Grupo de poder económico –en adelante también será denominado GPE – es que la empresa madre se constituya con el apellido del fundador, y a partir de ésta gradualmente se van conformando las demás empresas. También es usual que al crear nuevas empresas pasen a conformar conglomerados, especializándose internamente y ampliando mercados en nuevas regiones.

“Los GPE por lo tanto son grandes organizaciones complejas y profesionales, de carácter multiempresarial y con presencia multiespacial” (p.47).

Así, una característica de los grandes grupos consiste en “imitar a las grandes corporaciones, incorporando a su modo y conveniencia innovaciones tecnológicas, gerenciales y filosóficas empresariales de los países más avanzados” (Durand, 2017: 48). Vale la pena destacar lo que sería como un elemento clave en la construcción teórica respecto a los GPE, ya sea que se trate de empresas europeas, norteamericanas o latinoamericanas, todas ellas comparten un elemento común, y es que “se constituyen como grandes agentes económicos cuando aumentan la escala y el ámbito de sus operaciones gracias a que generan o incorporan innovaciones tecnológicas y nuevas formas de organización que rebajan los costos y permiten generar enormes ganancias”. (Durand, 2017: 49)

Según lo señalado por Durand (2017), estos grupos pueden contar con muchas ventajas. Tienen acceso a recursos naturales, por lo general se valen de mano de obra a bajo costo, comprenden la dinámica del mercado y al contar con este conocimiento, se especializan en determinados tipos de consumidores. También suelen tener una visión de largo plazo, pues se tratan de propiedades familiares, así de las decisiones que tomen depende la suerte de la familia y los amigos, por lo que tienen menos propensión a ganancias rápidas y, por lo tanto, al riesgo (Durand, 2017: 55). Se puede añadir el siguiente aspecto fundamental de los GPE:

Mientras más grande sea una empresa del GPE o subsidiaria o filial de una corporación multinacional, mayor la influencia directa e indirecta en la vida social donde se ubican las plantas. Mientras más pequeña y pobre la región o localidad donde se inserta, más determinante es esa influencia. Este último escenario es crítico en el caso de los enclaves extractivo-exportadores. (Durand, 2017, p. 70)

Entre los factores que caracterizan a los Grupos de poder económicos señalados por Durand, se encuentran:

Diversificación

Respecto a la diversificación, la conglomeración indica que las empresas pueden tener varias unidades productivas y de servicios, al mismo tiempo, puede ser que estas empresas intervengan en cualquier sector de la económica. El objetivo de la diversificación que el

grupo en su conjunto obtenga a través de la diversificación una alta tasa de ganancia en general y no precisamente por cada una de las empresas (Durand, 2017)

La entrada a nuevas actividades a través de empresas ligadas entre sí indica una integración, al articular empresas en torno a la empresa madre, holding companies (empresa que es dueña de la empresa madre, y puede estar ubicada en el exterior, en un paraíso tributario) o subconglomerados. Las empresas integradas económicamente en grupos o subgrupos realizan transacciones entre sí, apoyándose mutuamente para bajar costos de transacción. El concepto de integración, que es inicialmente la forma principal de conglomeración, es particularmente útil para explicar la historia de acumulación y diversificación de los GPE. La integración vertical ocurre cuando un GPE tiene empresas en varios puntos de la cadena productiva (p. 58)

En este sentido el mencionado autor revela que en general, los casos la acumulación de capitales se da a partir de la empresa madre, es decir la empresa que empezó el negocio. Actualmente la diversificación ha posibilitado que los grupos económicos excedan los rubros en los que realizaron sus primeras inversiones y apuestan por la inversión en diversos sectores.

Propiedad y gestión

En cuanto a la propiedad, por lo general, pertenecen, sea manera directa o indirecta a un individuo o grupo que puede conformarse por una o varias familias (Durand, 2017). La gestión y coordinación recae en un jefe cuyo mandato, por lo general se da forma similar en las demás empresas.

Suelen estar manejados directamente por el miembro mayor de la familia, es decir el fundador, mientras que existen casos donde las representaciones están dadas por directos y altos gerentes de confianza con alto grado de formación, competitivo y experimentados. Aun cuando quienes gestionan las grandes empresas se trate de

Según el especialista peruano “La evidencia empírica en América Latina indica que una mayoría de GPE antiguos mantiene todavía este rasgo familista, pero que poco a poco comienzan a aparecer grupos dirigidos por gerentes y aparecen con fuerza más gerentes en

los grupos”. (Durand, 2017, p.68). En este sentido, aun cuando los altos gerentes sean o no del grupo familiar, todavía se trata de una élite, es decir, de un pequeño y selecto grupo de personas quienes comandan las empresas conglomeradas.

Centralización del capital y sede corporativa

Generalmente un GPE, cuenta con una sede central que se ubica en la ciudad de cabecera, donde además operan los principales bancos, la bolsa de valores y las redes de comunicación. Otro hecho señalado por Duran (2017) y que está vinculado a la localización de estos grupos es que llegan a un nivel de diversificación y crecimiento a nivel nacional. Es decir, se diversifican nacionalmente y/o se multinacionalizan.

La imagen / la calidad institucional

Duran (2017) explica que estos GPE, además de lo económico, disputan el prestigio, el espacio mediático y las influencias en lo político. Lo mediático se relaciona, por un lado, con la exposición mediática que puedan tener los referentes empresariales, y por otro lado las influencias, ya por el poder económico que detentan o porque en ocasiones los medios de comunicación forman parte de sus negocios. Lo que en términos de Bourdieu (1976) es conocido como capital simbólico o cultural es señalado también como parte de las características de los GPE.

La preeminencia que exhiben al ser presentados como modelos de éxito, pero también por contar con recursos para distribuir o donar bienes y dinero a entidades o personas. Obviamente, para conseguir y desarrollar estas manifestaciones extraeconómicas de poder deben aprender a proyectar sus recursos materiales en otras esferas (Durand, 2017, p. 20).

Hasta aquí señalamos algunas características desarrolladas por el sociólogo peruano Duran (2017). En el siguiente apartado, con base a los elementos desarrollados anteriormente se presenta la composición de los grupos económicos Vierci y Favero en Paraguay.

Composición de los grupos económicos en Paraguay

Inicios, evolución y expansión del Grupo Favero

En Paraguay el sector del agronegocio está conformado por una cadena de procesos que van desde la provisión de insumos y maquinarias para la producción agrícola, pasando por la producción propiamente dicha, por el acopio y la comercialización de materias primas, por

la industrialización de las mismas y, finalmente, la distribución al consumidor final de los productos derivados del sector. (Rojas, 2009, p.36). El economista paraguayo Rojas (2009) da cuenta de que las transnacionales del agronegocio se concentran en la provisión de insumos, el acopio y la comercialización de las materias agrícolas, y la industrialización de parte de dicha materia prima o importación de productos elaborados. “En los sectores de la producción directa en el campo y la distribución final, no se han instalado empresas transnacionales”. (p. 37)

El grupo Favero está al mando del empresario de origen brasilero Tranquilino Favero, quien se instala en Paraguay en las últimas décadas del siglo XX. Es considerado hoy como uno de los mayores referentes de producción y comercialización de la soja³. El origen del grupo podemos situarlo históricamente en la conocida marcha hacia Este, proyecto desarrollado durante el régimen Stronista en el marco de la modernización conservadora (Galeano, 2002; Soler, 2012). El propio Favero, en una entrevista a medios de comunicación, comentaba acerca de su llegada al país y la gran utilidad del nuevo puente que acaba de ser construido⁴ y unía a Paraguay con Brasil y Argentina.

En palabras de Rojas (2016) se dedica a “la producción, procesamiento y exportación de soja, así como a la importación de producción de agroquímicos, maquinarias y combustible” (p. 86). Actualmente, el grupo posee aproximadamente 129.817 ha. sumado a la posibilidad de que existan propiedades no contabilizadas, donde en total se contabilizarían aproximadamente 140.000 has. En la tabla 3 elaborada por el mencionado autor (2016) se puede visualizar líneas del negocio del mencionado grupo

³ https://elpais.com/economia/2018/05/24/actualidad/1527176301_447075.html

⁴ Entrevista con el periodo ABC Color en el año 2008.

Tabla 1 Empresas y negocios del Grupo Favero

Producción, almacenamiento y comercialización de soja, maíz, trigo, canola y girasol.	Agro silo Santa Catalina
Compra- venta de agroquímicos, maquinarias, venta y alquiler de tierras	Agrotoro
Producción y distribución de agroquímicos	Akra
Desarrollo de variedades de soja	Semillas Verónica Ganadera Campobello
Ganadería (El Chaco)	Agroganadería San Liberato Ganadera Forestal Santa Catalina
Importación de maquinaria agrícola New Holland y lubricantes de Petrobras	Trafa
Transporte fluvial (puerto privado)	Totemsa

Fuente: Rojas, 2016. Informe Yvy Jara

Sin embargo, como se puede observar, además de la producción de soja, posee 19 silos para el almacenamiento de datos. Del total de tierras distribuidas en los 17 departamentos del país 45.000 se ocupan en la producción de soja y como la soja no es la única línea de negocios del grupo, también se dedica a la producción ganadera.

A esto se debe sumar puertos privados, planta industrial de agroquímicos y una flota de camiones de carga (Rojas, 2016). Actualmente tal como señala su página web, el grupo Favero está compuesto por empresas que trabajan en el desarrollo de la agricultura, agro industrias y la ganadería en el Paraguay. Inició sus actividades hace más de 30 años, y cuya misión corporativa es la del desarrollo económico y social de sus clientes, de sus equipos de colaboradores y el bienestar de las comunidades (Favero, 2018).

“El boom de los commodities de los años 2000, antes que simplemente fortalecer el sector primario de la economía, ha dado lugar también a un empuje sin precedentes de la agroindustria en el país. Tanto el sector agroalimentario como el de los productos manufacturados más puros tienen hoy una presencia creciente en la actividad económica como en las ventas externas” (Masi, p. 250)

Cabe señalar que la introducción de la soja supuso un “(...) nuevo paisaje físico de producción, de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital y de

penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas.” (Harvey, 2004, p.102). Dentro de ese orden de ideas, el acaparamiento de tierras, según los registros de Fogel (2013) estuvo vinculado los sojeros brasileños:

Estrechamente asociado con la concentración del ingreso; en ese sentido, solo en el primer semestre del 2014 el ingreso que generó el enclave sojero fue aproximadamente de tres mil millones de dólares; conforme al informe del Banco Central del Paraguay, gran parte de este ingreso fue canalizado por los empresarios brasileños, confirmando que la economía agraria liderada por la sojización responde a la lógica de un enclave que opera como una prolongación de la dinámica brasileña. (p. 108)

En el caso del grupo Favero, es interesante constatar la forma en la que ha crecido exponencialmente. Dos décadas después de instalarse en el país la producción de soja, es uno de los grupos más importantes a nivel nacional y cuya característica principal es referenciarse a partir de su noble nacionalidad.

AJ. Vierci. Un grupo en franco crecimiento.

El grupo pertenece a Vierci, pertenece a Antonio Vierci, paraguayo de origen italiano cuya familia se instala en el país en la primera década del siglo XX. Vierci se inicia a partir del año 1967 dedicándose principalmente a la importación y distribución de productos (Rojas, 2009). Según el economista paraguayo, los medios de comunicación y cadena alimentaria le confieren gran poder, sus principales inversiones que le hicieron diversificarse (Rojas, 2009)

Como señalábamos en Paraguay, si bien el Estado multiplica empresas públicas o privadas, no se llegó a generar el proceso de “Industrialización por sustitución de importaciones” que caracteriza a Argentina, Brasil (Rivarola, 2018) y en menor medida Chile. A raíz de este hecho lo que se dio es un crecimiento de la gran empresa ligadas a las construcciones de Itaipú (Borda, 1993, Herken, 1989, Rivarola, 2018). La construcción de la represa de Itaipú, fue un impulso que alentó el crecimiento de la economía, y a la vez la conformación de grupos económicos locales, lo que Herken (1975) denominó “la burguesía fraudulenta”, o también conocidos como Barones de Itaipú (Borda, 1993).

Como afirmara Miranda (2000) para inicios del nuevo siglo, ya se presentaba como “un conglomerado que se proyecta al siglo XXI como altamente dinámico, parecido en su crecimiento y extensión a una moderna transnacional” (p. 296). Es posible afirmar que el

grupo Vierci posee determinadas características en su composición que no lo aleja de la dinámica de los grandes grupos empresariales de la región.

Un periódico, dos canales de televisión y tres canales de radio, se suman a las más importantes empresas de la importación y representación, procesamiento de alimentos, centros de compra, supermercados, juegos de azar, además de una inmobiliaria, producción agropecuaria, una fundación, empresas de transporte, etcétera (Segovia, 2010). Sin lugar a dudas se trata hoy de uno de los grupos que más ha crecido durante la primera década del siglo XXI.

Tabla 2: Estructura de propiedad y control Grupo Vierci

Matriz	Fundación
Importadora	Aj Boston Aj Boston SA AV S. A. Centro de Distribución San Antonio Laser Import.
Industrias	Embutidos Franz Planta De Pastas, Cafés, Cañas, y Jugos Yerbatera Campesino
Inmobiliarias y Agropecuarias	Compañía de Desarrollo Agropecuario Inmobiliaria Nacional
Internacional	AJ Boston Uruguay AJ Vierci Bolivia AJ Vierci Chile LTDA
Medios	Central de Ventas TV Radio Estación 40 Radio Monumental 1080 A. M. Servicios digitales Talismán Telefuturo Última Hora
Retail. S.A.	Burger King ® Champs Elysées Delimarket Domino's Pizza® Paraguay Forever 21 Mango O Boticário Springfield Supermercado Stock Superseis Women Secret
Marcas	AJV Café Belén Pastas Anita Midas Yerba mate campesino

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la página web de A. J. Vierci

La expansión del grupo Vierci

La diversificación y la integración son características de este grupo paraguayo, la tabla 4 da cuenta de los diferentes sectores de la economía y las empresas que conforman el grupo. Tiempo ha pasado desde la incursión del grupo en el negocio de la importación, actualmente, inmobiliarias, franquicias, supermercados, medios de comunicación, así como empresas a nivel internacional conforman hoy la estructura del grupo Vierci.

Tal como registra, Nicolakjuc, (2018) en la década del setenta Vierci, inicia la empresa dedicada a bienes e inmuebles, crea Inmobiliaria Nacional. Una década después, apuesta al sector agricolaganadero, en el sector de cría y engorde de ganado y a la producción de soja, bajo la Compañía del Desarrollo Agropecuario. De igual modo, “inicia sus actividades en el ámbito agroindustrial a través de la planta A.J. S.A”. (Nicolakjuc, 2018, p.101). Así como señala Rojas, (2009) Vierci es el mayor grupo con vinculación con el agronegocio.

Actualmente el grupo funciona como una gran empresa transnacional, con sólidos tentáculos en distintos sectores de la economía, y prácticas que en mucho se asemejan a las de transnacionales de países desarrollados explotación laboral, políticas predatorias contra la competencia, extorsión a proveedores de bienes y servicios, serían algunas de las estrategias que estas empresas han aplicado para crecer incesantemente. (Segovia, 2010, p. 58)

Según los datos de la página oficial, el grupo posee 48 empresas. Una filial de AJ Boston en Uruguay, la empresa AJ Vierci en la zona de Franca de Iquique en Chile y sumado a estas se encuentra AJ Vierci SRL en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. (Grupo AJ Vierci, 2018). En Uruguay, comercializa productos de marcas de perfumería y cosméticos, mientras que, en Chile asentados de 1993, AJ Vierci Chile apuestan a la venta de productos manejando 6 tiendas, con formato boutique. En tanto en Santa cruz, se dedican a la distribución y comercialización de bebidas, licores y productos de consumo masivo.

Es interesante, la forma en la que se expresa, pues en su página oficial señalan las expectativas que tienen de convertirse en un grupo empresarial reconocido y con presencia regional. En esta línea y desde hace años, este grupo, “cubre segmentos del mercado local y le MERCOSUR en los que la innovación es clave”. (Rojas, 2009, p. 298).

En cuanto al grupo Vierci; diversificación, integración, administración familiar entrelazados a un destacado manejo gerencial, son algunas características de ambos actores. Han sabido combinar la inversión en el sector servicios, sin dejar de lado aquellos sectores primarios más tradicional, como la ganadería y, es más, en el caso del Grupo Vierci, tal como señalábamos más arriba, según el economista paraguayo Rojas (2009) en estrecho vínculo con el agronegocio.

Reflexiones preliminares

A raíz de lo expuesto, la finalidad del presente trabajo consistía en realizar un esbozo del perfil de dos de los grupos económicos más grandes de Paraguay y pensarlos a la luz de los aportes que recientemente hemos señalado que en varios países medianos y, sobre todo, pequeños, el proceso de industrialización se instaló sobre lo que siguió siendo en lo fundamental un modelo primario-exportador. En este sentido, nos aproximamos a identificar actores que en un periodo de crecimiento económico han sabido actuar, no solo para defender sus intereses sino también para sacar ventajas y beneficios

Los Grupos de Poder Económico, se formaron en distintos momentos históricos del desarrollo y, pareciera como si se tratara de un fenómeno que se extendió en varios países de América Latina, ni siquiera los países chicos escapaban a la “forma más avanzada de organización empresarial” (Durand, 1997, p. 5). Con relación a la diversificación, de los grupos señalados el grupo Vierci es el que ha logrado mayor diversificación, se inicia en el sector importador, ampliándose luego al sector servicios. Es actualmente reconocidos principalmente por ser dueños de grandes medios de comunicación. En este sentido, Kaltmeier (2018) desde la categoría y análisis acerca de la refeudalización en América Latina, señala que los medios de comunicación se constituyen hoy en uno de los elementos claves para los grandes grupos de poder. Como señala Segovia (2010) el grupo Vierci, uno de los mayores accionistas de medios de comunicación se presenta como imparcial, además los medios que pertenecen a este grupo no dejan de ser conservadores.

Por su parte el Grupo Favero, se ha expandido considerablemente en el ámbito agropecuario, posee varias empresas del sector agrícola, cárnico, incluso es representante de maquinarias, pero aun opera dentro del sector agropecuario.

Con relación a la propiedad y la gestión es posible encontrar rasgos de gestión familiar. Tanto Antonio Vierci como Tranquilino Favero además de propietarios dirigen sus respectivos económicos. Los datos empíricos demuestran, el capitalismo familiar continua, pues estamos hablando de GPE, donde la propiedad y el control en mayor medida se reparte entre miembros de las familias “los propietarios originales no dejan de ser los principales accionistas ni de operar como familia (...)”. (Durand, 2017, p. 63).

En relación a la localización de sedes y empresas de estos grupos, se encuentra que el grupo Vierci es el que mantiene gran parte de sus empresas en la capital Asunción y zonas del departamento central. Sin embargo, el grupo Favero, cuenta con oficinas y departamentos en Asunción, pero las empresas dedicadas al acopio, hectáreas de tierras dedicadas al cultivo de soja para exportación se encuentra en gran medida en el departamento de Alto Paraná. Un dato no menor, puesto que en este departamento se encuentran ciudades como Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias que además de constituirse en zonas limítrofes, constituyen la zona comercial conocida como la triple frontera.

¿Se puede sostener que la composición de los actuales grupos económicos, específicamente los que tomamos como casos de estudios posee rasgos similares a grupos económicos de otros países de la región? ¿debemos seguir pensando en Paraguay como la excepción de la región del cono sur? o a pesar de tratarse de uno de los países más pequeños de este bloque, sigue pautas regionales.

Sin duda los aportes de sociólogos y economistas (Segovia, 2010; Rojas 2014, 2017; Nickolajzuch, 2018) se convierten en compendios fundamentales cuando la temática es retomada, de allí el desafío de colocar junto con los datos empíricos muchas más categorías conceptuales que colaboren en la comprensión de papel fundamental que juegan estos grupos de poder en el desarrollo del país y sobre todo la forma en la que las estructuras del Estado capturadas por estos grupos privilegian a unos pocos en detrimento de otros sectores de la población.

Bibliografía

- Alvaredo y Piketty (2011). La dinámica de la concentración del ingreso en países desarrollados y en desarrollo. Una perspectiva desde los altos ingresos. En L.C., L. F., & Lustig, N. (2011). La disminución de la desigualdad en América Latina: Cambio tecnológico, educación y democracia. En La disminución de la desigualdad en América Latina. ¿Un decenio de progreso? (págs. 11-42). México: FCE.
- Atria, Jorge, Amenábar, Josefina, Sánchez, Javiera, Castillo, Juan Carlos, & Cociña, Matías. (2017). Investigando a la élite económica: Lecciones y desafíos a partir del caso de Chile. *Cultura-hombre-sociedad*, 27(2), 5-36. <https://dx.doi.org/10.7770/cuhso-v27n2-art1244>
- Borda, D. (1993). La estatización de la economía y la privatización del Estado en el Paraguay (1954-1989). *Estudios Paraguayos*, 17 (1-2), 37-89.
- Borda, D. (2009). Crecimiento, inclusión social y gasto público. CADEP, Asunción. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/cadep/20160707112622/1.pdf>
- Borda, D., Masi, F. (eds.) (2001). Pobreza, desigualdad y política social en América Latina, CADEP, Asunción.
- Cattani, A. D. (2008). Riqueza sustantiva y relacional: un enfoque diferenciado para el análisis de las desigualdades en América Latina. En CLACSO, Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre CLACSO. pp. 205-231
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2015), Panorama Social de América Latina, 2014 (LC/G.2635-P), Santiago de Chile.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2015). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). La Matriz de la desigualdad social. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Durand, F. (2017). Los Doce Apóstoles de la economía peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos. Lima: PUCP - Instituto de Democracia y Derechos Humanos
- D'Amico, M. V. (2016). La definición de la desigualdad en las agendas recientes de los organismos internacionales para América Latina. *Rev. Co. Soc.*, 39(1), pp. 221-240.
- Elías, R., Denis, M. y Molinas, M. (2006). Desigualdades en Paraguay—un análisis cuantitativo, PNUD, Asunción.
- Fogel, R. (2005). Soja transgénica y producción de pobreza: el caso de Paraguay. En Á. L.S (2005). Trabajo y producción de la pobreza en latinoamérica y El Caribe: estructuras, discursos y actores pp. 435-459. Buenos Aires: CLACSO
- Herken, J.; Arce, L y Ovando, F. (2011). “La Economía del Paraguay entre 1940-2008. Crecimiento, convergencia regional e incertidumbres”, en Borda, D. y Masi, F. (eds.) Estado y economía en Paraguay (1870-2010). Asunción: CADEP.
- Kalmeier, O. (2018) Refeudalización. Desigualdad social, economía y cultura política en América Latina en el temprano siglo XXI. CALAS
- Kessler, G. (2016). Controversias sobre la Desigualdad. Argentina 2003-2013. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura de Económica.
- Miranda, A. (2000). Dossier Paraguay. Los dueños de las grandes fortunas. Asunción: Miranda & Asociados.
- Nikolajczuk, M. (2018). Élités económicas, poder político y medios de comunicación en Paraguay. *Novapolis*, 93-109
- Ortiz, L. (2016). Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Buenos Aires: CEADUC/CLACSO /ICSO.
- Piketty, T. (2015) La economía de las desigualdades. Siglo XXI.

- Reygadas, L. (2004) Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional. Política y Cultura Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Distrito Federal, México. pp. 7-25.
- Reygadas, L. (2008) La apropiación destejendo las redes de la desigualdad. Anthoropos.
- Rodríguez, J. C., Sosa Marín, D. (2016). Formas y tendencias de la Desigualdad en Paraguay. Novapolis, 89-114.
- Rojas, L. (2009) Actores del agronegocio. Asunción: Bases IS
- Rojas, L. (2014) La metamorfosis del Paraguay. Del esplendor inicial a su traumática descomposición. Asunción: Bases IS
- Rojas, L. (2016) Yvy jara. Los dueños de la tierra en Paraguay. Asunción: OXFAM Internacional
- Segovia, D. (2010). Comunicación y democracia. El rol de los medios en la construcción del discurso político ciudadano. Asunción: BASE IS.
- Serafini, V. (2008). Conclusiones. En S.V. (2008), La liberalización económica en Paraguay y su efecto sobre las mujeres (pp. 165-174). Buenos Aires: CLACSO
- Serafini, V. (2016). Clase, género y pobreza. Algunas ideas para el debate. En O. L. (2016). Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. (pp.207-225). Buenos Aires: CEADUC/CLACSO /ICSO.
- Soler, L. (2015) Golpes de estado en el siglo XXI. Un ejercicio comparado Haití (2004), Honduras (2009) y Paraguay (2012). CADERNOS PROLAM/USP. Sao Paulo. p. 79 - 91
- Soler, L. y Nikolajczuk, M. (2018). Actores económicos y medios de comunicación. El golpe parlamentario a Fernando Lugo (2012). Chasqui 136: 261-277
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/handle/10469/14865?mode=full>
- Tilly, Ch. (2000). La desigualdad Persistente. Buenos Aires: Manantial

MESA 6: DESIGUALDAD, CLASES SOCIALES, CONFLICTO Y COHESIÓN

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Configuración del campo de las escuelas de élite chilenas. ¿Quiénes son y que dinámicas han posibilitado su acceso a posiciones de poder en el campo educativo?

Tomás Ilabaca y Javier Corvalán
Universidad Alberto Hurtado
tomas.ilabaca@student.uclouvain.be
jcorvala@uahurtado.cl

Resumen.

La presente ponencia es un análisis sobre el proceso constitutivo-legitimador de un grupo de colegios chilenos que han sido sindicados como los (re)productores de las élites, es decir, los llamados “colegios de élite”. Sostenemos que este proceso se debe en gran parte por una serie de dinámicas internas y externas al campo educativo. Por las primeras entendemos lo que Bourdieu denominaba por *reglas del juego*, mientras que las segundas responden a las transformaciones y dinámicas que experimentan las élites fuera del campo educativo mismo. Ambas dinámicas dan cuenta de cómo han emergido –y los cambios en el tiempo–, legítimamente un grupo de colegios que ocupan posiciones de dominación. Todo esto paradójicamente envuelto en el último tiempo por un clima político y social caracterizado por el ideario de reducción de desigualdades escolares y sociales.

PALABRAS CLAVES: COLEGIOS DE ÉLITE - CAMPO EDUCATIVO - ÉLITES CHILENAS - DESIGUALDAD.

INTRODUCCIÓN.

En el informe “Desiguales” el PNUD (2017) se identifican 16 establecimientos de élite. De este grupo 2 son públicos y 14 privados. Dentro de este selecto grupo de colegios y liceos, 9 son los que concentran un mayor peso en la élite; todos ellos privados (PNUD, 2017, p. 398). Cuando hablamos de “mayor peso” se hace referencia al porcentaje de sus egresados que ocupan puestos de ejercicio del poder y de influencia en la estructura social, principalmente en decisiones en el campo político y económico. Por otra parte, el hecho de ser solamente 2 los establecimientos de élite de carácter público también responde a una tendencia que viene desde la segunda mitad del siglo XX, bajo la cual las élites prefieren matricular a sus hijos en establecimientos privados, dinámica que llamamos “privatización de las opciones educativas en las élites”.

En términos socio-educativos, la participación de este grupo de colegios en la generación de segmentación, estratificación y desigualdad educativa y social es considerable. En Chile, un alumno egresado de uno de estos 14 colegios privados de élite tiene al menos 7 veces más la probabilidad de acceder a alguna carrera de élite en las dos universidades de élite que un alumno egresado de un liceo Bicentenario y 3 veces más que uno egresado de uno emblemático (Rivera y Guevara, 2017). De manera complementaria, el egresar de una carrera de élite (derecho, medicina, ingeniería comercial e ingeniería civil) impartidas por las universidades de élite (Universidad de Chile y Universidad Católica) no tiene el mismo resultado a la hora de ingresar al 0,1% más rico si vienes de uno de los 9 colegios de élite como si no fuese este el caso. Zimmerman (2013, 2018) muestra que los egresados de colegios de élite y que se matricularon en estas carreras tienen una probabilidad 6 veces mayor de ejercer un cargo directivo que uno que viene de liceos emblemáticos.

En sociedades que poseen pretensiones de mayores niveles de democratización o en las cuales existe un contexto de movimientos sociales y demandas cuyas característica principal apunta hacia un aumento en el nivel de inclusión, y donde en las últimas décadas el sistema educativo ha asumido un rol normativo en la contribución en la movilidad social y reducción de las desigualdades, la presencia de instituciones escolares de estas características es al menos contradictoria y problemática (Kenway and Kho, 2015). Entonces, más allá de su rol en la reproducción de las desigualdades, cabe preguntarse por los factores que posibilitan su

existencia: ¿Por qué ciertos colegios privados hoy en día gozan de un capital simbólico poderoso que les permite ser sindicados como “colegios de élite?”, ¿Qué elementos estructurales, históricos y contextuales han posibilitado la configuración de este sub-campo educativo?, ¿Han tenido lugar procesos de diferenciación interna y externa en este sub-campo o estamos en presencia de una homogeneidad escolar?

Este artículo pretende abordar estas preguntas a partir de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu (2007). Para esto, dividimos el análisis en dos grandes dimensiones, a saber, las dinámicas endógenas del campo educativo en general, y por otra parte las de tipo exógenas al campo. Dentro de las primeras dinámicas se encuentra la configuración histórica de la oferta educativa chilena objetivada en el principio de libertad de enseñanza y libre elección de escuelas. Eso se complementa con una legislación educativa desregulada con respecto a la oferta privada, dinámica que trae como consecuencia un amplio margen de acción para el sector privado.

Otra de las dinámicas endógenas tiene que ver con la segregación y desigualdad educativa al interior del campo educativo. La primera ha operado en dos etapas: 1) acceso a la educación previo a que esta fuese obligatoria (1921) y posteriormente, 2) en el ingreso a la educación secundaria. En ambas etapas, las clases desfavorecidas no podían acceder a ambos niveles por motivos de tipo material fundamentalmente. En cuanto a la desigualdad, esta se consolida a partir de la masificación del sistema escolar durante el siglo XX, a partir de la constatación de las diferencias en el logro de aprendizajes según el tipo de establecimiento, correlacionado con el origen socioeconómico de los alumnos.

Por último, las políticas de mercado implementadas durante la dictadura militar en el sistema educativo chileno también han jugado un rol en la configuración de las posiciones en el sub campo de las escuelas de élite. Estas han permitido generar procesos de diferenciación en el campo, ya no solo entre sectores (público-privado) sino que al interior de este sector. A su vez, al estar en contexto de competencia, esta opera en un sentido legitimador de este subsector.

En lo que respecta a las variables exógenas, encontramos las que tienen que ver con la diferenciación interna de las élites chilenas, caracterizada en su clivaje conservador-liberal, y que se observa en sus preferencias educativas. Por otra parte, los movimientos de las élites

a partir de su quiebre interno, quiebre con ciertas congregaciones religiosas a partir de la reforma agraria y también frente a procesos de democratización también impactan en sus opciones educativas, generándose un paso hacia el proceso de privatización de las elecciones escolares.

TEORÍA DE LOS CAMPOS EN BOURDIEU.

Para comprender sociológicamente lo presentado utilizaremos el análisis relacional de los fenómenos sociales a partir de la teoría de los campos de Bourdieu. En base a los postulados de esta teoría es posible ver que la identidad de los establecimientos (identidad de élite en este caso) se encuentra determinada tanto a partir de fenómenos o dinámicas internas como también de características externas al campo.

Bourdieu (2007) concibe la sociedad a partir de diferentes espacios sociales, cada uno con su lógica propia, donde los agentes libran sus luchas por acceder y controlar las posiciones de dominación y privilegio, a partir de un capital simbólico que les permite distinguirse y ejercer el dominio. Este capital simbólico no solo entregaría una legitimidad y prestigio al interior del campo, sino que también –en algunos casos- trascender e influenciar otros campos (Hilgers y Mangez, 2014).

Para los agentes, poseer capitales que les permiten acceder a posiciones de dominación resulta fundamental. El volumen o peso de los capitales es relativo en relación a las lógicas del campo y la cantidad de capital que otros agentes posean. Por consiguiente, tanto la identidad como la posición de los agentes se estructuran a partir de las relaciones de oposición y alianza con otros actores a partir del lugar que ocupan.

“Conjunto de posiciones distintas y co-existentes, externas unas a otras, definidas en relación las unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento y asimismo por relaciones de orden, como por encima, por debajo y entre” (Bourdieu 2007: 16).

Estas relaciones a su vez se encuentran posibilitadas y determinadas por las reglas que posee cada campo. Ellas fijan los límites y posibilitan a los agentes a desarrollar diversas estrategias con el fin de diferenciarse, reproducirse y conservar posiciones. La estrategia entonces se

articula con los capitales que cada individuo posee y las reglas y sentido del juego de cada campo (Bourdieu, 1987).

De esta manera, presentamos una de las formas en cómo es posible analizar la configuración de las posiciones al interior de un campo social, que es desde una aproximación estructural. En ella se analizan las reglas del juego del campo que permiten la agencia de los agentes. Un ejemplo de aquello es la lógica de competencias entre establecimientos escolares vía SIMCE. A partir de una política pública como el SIMCE, se observa como los agentes lucha por obtener un buen puntaje y así diferenciarse y tomar posiciones en una estructura jerárquica (Corvalán, 2013). Ello incluso ha implicado estrategias como la selección de alumnos, prácticas de preparación y entrenamiento, etc.

A partir de estos postulados entonces, podemos des-esencializar las posiciones de los agentes (instituciones escolares) al interior del campo, dejando de lado así las explicaciones que tienden a observar y describir estos colegios desde elementos objetivos como podrías ser el rendimiento académico de sus alumnos, para pasar a un análisis relacional donde la categoría o identidad es descrita a partir de la oposición que los agentes tienen en el espacio social.

COLEGIOS DE ÉLITE EN CHILE. ¿Quiénes son y por qué lo son?

Está la creencia que cuando se hace referencia a las escuelas privadas se está hablando de las escuelas de élite. Esto porque en ciertos países es tan reducido el número de escuelas como la población que accede que finalmente tiene cierta coherencia, como en el caso de USA, Inglaterra o Bélgica.

Pero el caso chileno presenta una particularidad. En efecto, en Chile es posible establecer una diferencia entre los colegios privados y los colegios de élite (CE). Para el año 2017 había en el país 617 colegios privados¹ en un total de 11.749 establecimientos (5,2% de la oferta educativa), y representando el 8,3% de la matrícula. Este sector, si bien concentra preferentemente a los estudiantes de clases acomodada, no necesariamente equivale a decir

¹ Para esta presentación utilizaremos el concepto colegio privado en alusión a los establecimientos cuyo financiamiento depende exclusivamente de los aportes de las familias. Si bien existen otros establecimientos de carácter privado, conocidos como Particulares Subvencionados, en ellos su financiamiento es en gran medida otorgado por el Estado a partir de una subvención.

que toda esa población se encuentran en colegios de élite, dado que dicha denominación implica mucho más que solo el carácter del establecimiento, tal como la literatura especializada ha señalado (Khan, 2015; Kenway and Kho, 2015; Gaztambide-Fernandez, 2009; Van Zanten, 2009).

En el estudio “Desiguales” del PNUD (2017) se identifican 16 escuelas de élite, 14 de ellas privadas y 2 públicas. Para una caracterización más detallada, cruzamos ese listado con la tipología de CE de Thumala (2007).

Tabla N°1. Escuelas de élite en Chile.

Establecimiento escolar de élite	Carácter	Tipología según Thumala (2007)
Instituto Nacional	Público	
Liceo José Victorino Lastarria	Público	
Alianza Francesa	Privado	Formado por comunidad de inmigrantes
Colegio Alemán de Santiago	Privado	Formado por comunidad de inmigrantes
Liceo Alemán de Santiago	Privado	Formado por comunidad de inmigrantes
Cordillera	Privado	Nuevos movimientos católicos (post 80's)
Craighause	Privado	Formado por comunidad de inmigrantes
Saint George's College	Privado	Católico Tradicional
San Ignacio del Bosque	Privado	Católico Tradicional
Tabancura	Privado	Nuevos movimientos católicos (post 80's)
Verbo Divino	Privado	Católico Tradicional
Instituto Luis Campino	Privado	Católico Tradicional
Sagrados Corazones de Manquehue	Privado	Católico Tradicional
Santiago College	Privado	Católico Tradicional
Scoula Italiana	Privado	Formado por comunidad de inmigrantes
The Grange School	Privado	Formado por comunidad de inmigrantes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos PNUD (2017) y Thumala (2007)

La literatura sociológica chilena sobre estos establecimientos ha mostrado como estas instituciones son uno de los eslabones más importantes en el cierre social de las élites para lograr su reproducción. Moya y Hernández (2014) señalan que estos colegios por medio de sus procesos de selección, socialización y el traspaso de capital social buscan asegurar la reproducción intergeneracional de la élite. Por otra parte, otros trabajos muestran la formación de masculinidades hegemónicas en su interior, y también la diversidad interna dentro de la homogeneidad que existe en estos establecimientos (Madrid, 2016; 2013). Finalmente, Thumala (2007) y Giesen (2010) muestran el traspaso de valores y una moral propia de la élite que se lleva a cabo en estas instituciones.

En un estudio realizado por el Rivera y Guevara (2017), tomando alumnos de la cohorte del año 2016, se observa que en los CE el grupo socioeconómico que accede es solamente el alto, en el cual el 90,7% obtiene remuneraciones mayores a 1.900.000 pesos. También se muestra como el porcentaje de alumnos que se inscribe, rinde y accede a la universidad vía PSU es significativamente mayor que en los liceos emblemáticos, Bicentenarios y otros con buen rendimiento (Rivera y Guevara, 2017, p. 21). Así, el egresar de uno de estos 14 colegios privados de élite entrega 7 veces más posibilidades que un estudiante de un liceo Bicentenario de acceder a educación universitaria (Rivera y Guevara, 2017), logrando generar una compleja y exclusiva ecuación que garantiza el acceso y reproducción de las élites.

Este cierre social que forman los colegios de élite tiene por consecuencia el aseguramiento de posiciones de poder en los distintos campos. En el ya citado informe del PNUD (2017) se muestra como, por ejemplo, de los 8.025 alumnos que estudiaron en carreras de élite en las dos universidades de élite entre 1982 y 1988, 345 llegaron a ser gerentes y directores; de estos, el 46,4% había salido de alguno de los 16 colegios de élite.

En relación al campo político, entre los ministros de Estado que ejercieron entre 1990 y 2016, el 42% egresó de alguno de los CE; en el caso de los senadores y diputados es el 35% y 26% respectivamente.

Por otra parte, tal como ya fue mencionado, existe un proceso de privatización de las elecciones educativas en la élite, dinámica que es cada vez más intensa. En el año 2004, tan solo el 16% de los padres de las élites había estudiando en un colegio particular pagado, lo que subía a un 39% para las élites de ese entonces y en un 65% para sus hijos (PNUD, 2004).

En síntesis, la evidencia nos permite señalar que el hecho de egresar de uno de estos 14 CE (complementado con acceder a carreras y universidades de élite) es un predictor fuerte (casi determinante) respecto a la posibilidad de acceder y permanecer en los espacios de poder y toma de decisiones de la sociedad chilena, lo que reafirma el rol de reproductores de estos establecimientos (Moya y Hernández, 2014). Así, surgen las preguntas sobre los factores estructurales que han permitido que estos 14 colegios sean preferidos por la élite, junto por las dinámicas del mismo campo.

DINÁMICAS ENDÓGENAS.

Tres son las dinámicas internas al campo educativo que han favorecido en el caso chileno la emergencia y constitución de CE: (a) la oferta educativa mixta presente desde los orígenes del sistema y objetivada en el principio de libertad de enseñanza, (b) la desigualdad educativa en sus diferentes formas y, (c) las reformas llevadas a cabo en dictadura que introdujeron lógicas de mercado.

Conflicto Estado docente y oferta privada. Entre la libertad de mercado y la regulación.

Desde la constitución del Estado chileno, una parte importante de la educación que se impartía en el país era privada y estaba fundamentalmente en manos de congregaciones religiosas (a ellas se sumaron las oleadas migratorias que colonizaron parte del país donde no había presencia del Estado, creando consigo escuelas privadas). La fuerte presencia de ambos grupos hace que el Estado conciba la oferta privada como colaboradora de la acción estatal. Al mismo tiempo, este sector adquirió una fuerte legitimidad en la sociedad.

Un ejemplo característico del peso simbólico en aquella época de la oferta privada es la creación de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) en 1856, la cual creó escuelas para sectores vulnerables y que perdura hasta la actualidad. Junto con ella, durante la primera mitad del siglo XX el Estado chileno funda el Instituto Nacional (1813), la Universidad de Chile (1842) y la Escuela Normal de Preceptores (1843). Junto a la obligación con la Ley de Instrucción Primaria de construir una escuela para poblaciones con más de 2000 habitantes

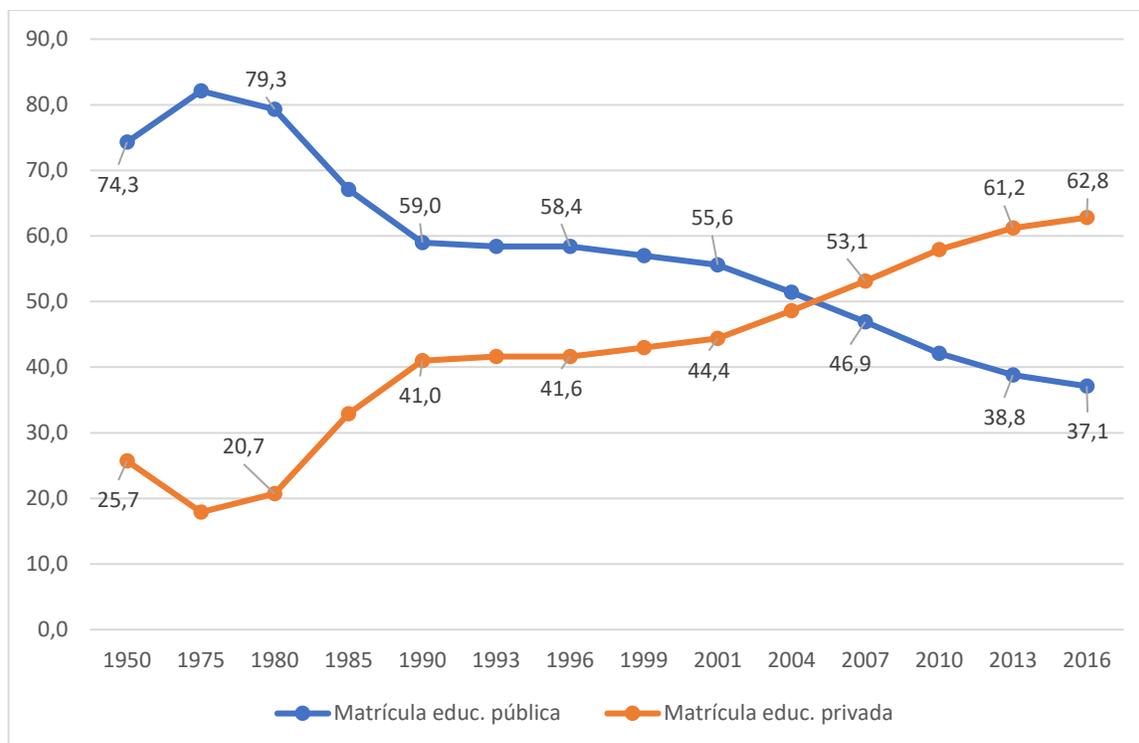
se fue configurando la oferta pública y el rol que el Estado comenzó a asumir en la provisión de la educación.

Así, se comienza a graficar una de las principales características del sistema educativo a lo largo de su historia: la existencia de una oferta mixta se traduce en un principio estructurante del sistema: la libertad de enseñanza. Dicho principio refiere a aspectos institucionales y familiares: por un lado toda persona u organización puede formar una escuela, la cual funciona de manera paralela a la red de escuelas y liceos públicos, y por otra parte el derecho de las familias a escoger la escuela de preferencia. De esta manera, se quita el monopolio educativo al estado y al mismo tiempo actúa como principio legitimador de la educación privada.

En una primera etapa de la coexistencia entre la oferta estatal y la privada es el Estado quien obtiene el dominio y legitimidad en el campo, lo que se traduce que la educación privada a jugar un rol de complementariedad y de colaboración con el Estado (Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2013, p. 31). El Estado entonces ejerció una regulación sobre la educación privada aunque de carácter pedagógico (currículum nacional, evaluación de estudiantes de colegios privados por escuelas públicas). Esta regulación fue de baja intensidad, en consonancia con los imaginarios educativos de la época donde la escolarización no era concebida como vehículo de igualdad o justicia social, sino que preferentemente como formadora de ciudadanos y del Estado.

Otra de las formas de observar el predominio simbólico –y objetivo- del Estado en educación es en la matrícula por dependencia. Es a partir de las reformas de dictadura (mercado, competencia y exacerbación del principio de libertad de enseñanza) cuando se produce un giro hacia la educación privada, lo que no solo ocurre en el sector de la educación de la élite, sino que también en los otros sectores.

Gráfico n°1: Evolución matrícula escolar según dependencia (1950-2014), en porcentaje de la matrícula total.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc e INE

Estos cambios en las preferencias educativas han sido (y son) posibles a partir de la posibilidad de elección de escuela que poseen las familias. La evidencia al respecto tiende a mostrar diferencias socioeconómicas en los criterios a la hora de elegir una escuela (Corvalán, 2013), limitaciones socioeconómicas (Córdoba, 2014), y la búsqueda de escuelas con población homogénea en términos de nivel socioeconómico (Hernández y Raczynki, 2010). Criterios similares (exceptuando la limitante socioeconómica) se pueden extender a las preferencias de la élite, las cuales optan por determinados colegios que garanticen tanto su reproducción como también una clausura social (Stabili, 2003; Aguilar, 2011; Huneus, 2013). El concepto de clausura social es fundamental a la hora de comprender ciertas dinámicas de las élites, y particularmente a la hora de analizar las opciones de escolarización de estas, así como los procesos de selección de los establecimientos. Se trata de un concepto que refiere a la existencia de fronteras simbólicas y sociales, más o menos porosas según el contexto, que marcan la exclusión e inclusión de quienes pertenecen a grupos sociales (Lamont et Molnár, 2002).

Cómo último elemento respecto a la libertad de enseñanza y oferta mixta tiene que ver con la ley de inclusión aprobada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Esta ley busca eliminar ciertas distorsiones existentes en la real capacidad de elección de

escuela por parte de las familias (cobro a apoderados y selección por parte de los establecimientos). El principio que trae consigo tiene que ver con una búsqueda de mayor heterogeneidad social y movilidad, lo que se traduce en una de los pocos esfuerzos por generar una regulación sobre la oferta privada cuyo horizonte es la justicia social y no solo de tipo pedagógico. El problema en la ley es que, específicamente no regula el sector privado (sector en el cual se encuentran los CE), manteniendo en dicho sector ciertos privilegios a la hora de auto-fijar criterios de selección; práctica que va en contra del espíritu de la ley.

Desigualdad estructural en el campo educativo.

Es posible observar la desigualdad en el campo educativo chileno a partir de dos dimensiones. Por un lado la que operó en lógica de inclusión/exclusión al sistema. Serrano, Ponce de León y Rengifo (2012, 2013) dan cuenta como la escuela pública fue soporte y construcción de dos estamentos sociales ligados a dos instituciones. De una parte, las escuelas de las primeras letras destinadas a la alfabetización y formación del ciudadano, a la cual preferentemente asistían las clases populares (sobre todo antes de la obligatoriedad), mientras que por otra parte estaba el liceo, institución cuya misión era la formación de la futura élite gobernante, y de características masculinas. Masculina dado que los liceos estaban separados por género y a los que iban las mujeres “se sustituiría a la enseñanza del dibujo lineal y Constitución política del Estado, la de la economía doméstica, costura, bordado y demás labores de aguja” (Artículo 3, Ley de Instrucción 1860), es decir, una formación orientada a las labores del hogar. Esta división por clases que se daba entre escuela y liceo (y colegios privados) no operaba de manera evidente ni planificada, sino más bien respondió a limitantes de la política educativa: los niños y jóvenes de las clases populares representaban un ingreso importante en la economía familiar, lo que se cruzaba con una ausencia de visión de la escuela como institución de movilidad social. Paralelamente, no es hasta 1965 que el paso por la básica no es obligatoria para acceder al liceo, y la enseñanza media no es obligatoria hasta el año 2003. Además, los liceos replicaban el modelo francés, donde previo a acceder a estos, los estudiantes debían cursar clases preparatorias y luego hacer pruebas (Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2013, p. 368).

Con los diversos procesos de democratización en el sistema educativo chileno y la implementación de lógicas de mercado, la desigualdad se reconfigura, ya no en el acceso,

sino que una desigualdad en la horizontalidad (Draelants, 2018) donde el tipo de institución (capital simbólico, recursos, capital social) es la que contribuye en la desigualdad; Merle (2002) denomina este proceso como democratización segregativa. Con ello, los CE han reorganizado su funcionamiento en torno a la competencia, para poder mantener el control sobre el campo y sub-campo. Esto se puede constatar en que estos establecimientos tienden a obtener mejores resultados en pruebas estandarizadas o, por medio de los recursos culturales, materiales y sociales, garantizar una trayectoria educativa exitosa. Dichas garantías se complementan con la capacidad de articular –por medio de mecanismos de selección- el proyecto educativo con una determinada clase social.

Junto a la competencia, la legitimación continúa apoyándose en el principio de libertad de enseñanza. De esta manera, las libertades y des-regulación que entrega dicho principio les permite seleccionar un tipo de alumnado particular, lo que garantiza también el cierre y reproducción de la élite, lo que apoyado en los recursos materiales que poseen, lograr los primeros lugares en mediciones estandarizadas y pruebas de acceso a universidades de élite, dominando así el campo educativo.

Mercado educativo y competitividad: nueva forma de legitimación.

Las lógicas de mercado introducidas durante la dictadura militar tienen un impacto en los establecimientos de élite en dos dimensiones. En primer lugar ellas generan o dinamizan la diversificación de proyectos privados, lo que permite una oferta diversificada para los distintos tipos de élite chilena. La segunda dimensión, mencionada en la sección anterior, tiene que ver con una nueva dimensión en la legitimación de estos colegios. Esta nueva forma opera en la calidad educativa; los mercados educativos, al igual que cualquier mercado, genera una distribución desigual de la calidad lo que significa que ciertos establecimientos ofrecerían una mejor calidad que otros. Los test estandarizados y rankings en base al ingreso a la universidad (y los tipos de universidades) serían el “comprobante” de la calidad. Por consiguiente, la competencia entre escuelas terminaría por legitimar las desigualdades debido a que –al igual que en cualquier mercado- el que ofrece el mejor producto “es el mejor”. Así, tal como señala Dubet (2005), la desigualdad de resultados, debido a la interpretación meritocrática y de los mercados educativos, termina siendo legitimada.

Previo a la ley de Inclusión de Michelle Bachelet, el mercado educativo chileno generó la posibilidad de lucro en los colegios privados subvencionados. Este elemento dinamizó la oferta educativa mediante la creación de establecimientos, los cuales fueron rápidamente poblados por las clases medias o emergentes. Dicha dinámica también tuvo lugar en el caso de los colegios privados, entregando nuevos tipos de proyectos (neo-católicos, bilingües o de alta exigencia académica). Este proceso de diversificación de la oferta se vio acompañado también por la emigración de la élite laica o masona que se encontraba en los liceos emblemáticos hacia la educación privada con la democratización de estos.

DINÁMICAS EXÓGENAS.

En su libro “La nobleza de Estado”, Pierre Bourdieu expone su estudio sobre las Grandes Écoles francesas. Dichas instituciones, formadoras de élite, tienen la capacidad de seleccionar los alumnos laureados (cuyas capacidades responden al capital cultural heredado) y a la vez, la educación que imparten, que es orientada hacia el ejercicio del poder, está en concordancia con el *habitus* de las élites. De esta manera, señala Bourdieu, estas escuelas transmiten y consolidan capitales y un *habitus* particular. En ese sentido, existe una relación cultural entre el *habitus* y el campo de poder francés con las Grandes Écoles (Bourdieu, 1989, p. 228-229).

En una línea similar, Kenway y Kho (2013) realizaron un trabajo similar en las escuelas de élite en Singapur. En él, constataron que estas instituciones no solo poseen una alta selectividad y con discursos de auto-celebración similares a las Grandes Écoles, sino que poseen una coordinación con las necesidades de la élite de poder del país, coordinación que opera fundamentalmente mediante la transmisión y reforzamiento de valores como el del mérito y el nacionalismo postcolonial, junto con disposiciones particulares hacia el poder. En ese sentido las escuelas de élite servirían como plataforma de legitimación de la élite de poder, mientras que esta a su vez refuerza el carácter de élite de ciertas instituciones al traspasar fondos producto de ser los “productores de excelencia” (Kenway and Koh, 2013, p. 282).

Ambos ejemplos muestran que la constitución de escuelas de élite no solo depende de elementos estructurantes de los campos educativos o los esfuerzos de los actores de estos

campos por constituirse como tales, sino que también tienen que ver con el impacto que generan movimientos, fuerzas externas al campo mismo. Continuando con este razonamiento, en esta segunda sección daremos cuenta de ciertas variables exógenas al campo de las escuelas de élite y como ellas impactan en la configuración de este. Específicamente abordaremos las características distintivas de las élites chilenas junto con algunos procesos de quiebre o ruptura que han experimentado en el siglo XX.

División interna en la élite chilena: Conservadores y liberales.

Dentro de los campos con mayor poder al interior de las sociedades contemporáneas –tales como el político y el económico–, es posible observar que en ellos convergen diferentes élites. Stabili (2003) señala que las élites han tenido diversas preocupaciones e intereses en las diversas esferas sociales. Esta diversidad de intereses y orientaciones políticas, religiosas, sociales, etc., la literatura especializada se ha encargado de categorizarlas en un clivaje ordenado entre conservadores y liberales (Stabili, 2003; Correa, 2004; Fischer, 2017).

“Existe en Chile, según mi opinión, al interior de la élite, un grupo más preocupado de la cuestión social, otro que se juega por completo en el terreno político, un tercero que parece hacer sólo negocios y otro que aún prefiere preocuparse de la cultura, del arte y la educación. Sobre la base de éstas, que pueden ser las tendencias individuales o de grupos familiares, quien observa desde fuera puede hacerse la idea que en Chile existen diferentes élites: la política, la social, la económica, la intelectual... Luego, piensa que la élite política se dividió entre los liberales y conservadores durante el siglo XIX; o entre conservadores y revolucionarios en el siglo XX. Y, además, en el grupo conservador existe una facción muy religiosa, la que se ha interesado por la cuestión social más que todos los otros” (Stabili, 2003: 81).

Acerca de esta división de las élites chilenas, algunos autores podría trascender un campo en particular o incluso encontrarse en una misma familia; Sofía Correa (2004) entrega el caso de Arturo Matte, quien durante mediados del siglo XX era un importante dirigente empresarial, pero que también participaba del mundo político en partidos políticos de corte conservador, mientras algunos de sus familiares se identificaban con partidos más de izquierda (Sofía Correa, 2004).

Esta distinción entre conservadores y liberales en el mundo de la élite no solo ha organizado visiones de mundo y proyectos de sociedad (en ocasiones antagónicos), sino que también se ha reflejado en las elecciones educativas.

“durante todo el ochocientos, cuando las diferencias políticas internas de la élite se jugaban esencialmente en torno al tema de la laicización del Estado, los Padres Franceses y el San Ignacio (para hombres) y Las Monjas Francesas de los Sagrados Corazones (para niñas) eran los colegios más frecuentados por los hijos de la élite católica; mientras que los liberales enviaban a sus hijos al glorioso Instituto Nacional, fundado en 1812, y a las hijas a los Liceo N° 1 y N° 7” (Stabili 2003: 114)

Cómo muestra Stabili, los conservadores católicos escogían (y aún lo hacen) escuelas privadas católicas para educar a sus hijos, mientras que la élite liberal escogía algunos colegios privados, aunque preferentemente se dirigía al Instituto Nacional y otros liceos. Esto último no significaba en lo absoluto que existirá un proceso de mixtura entre clases sociales de diferente origen ya que como se mostró en las secciones preferentes, los alumnos de las clases medias y bajas que accedían a este tipo de liceos y a la educación secundaria eran muy pocos.

Esta distinción también operó a lo largo de la trayectoria educativa, como en la elección de las casas de estudios universitarias. Durante el siglo XIX fue la Universidad de Chile (UCH) la que dominó el campo de la formación superior de las élites, dado que se encontraba en una situación de carácter casi monopolístico. Debido a ciertos cambios internacionales como el debilitamiento de ciertas corrientes de pensamiento a las cuales adscribía la UCH, así como la renovación del pensamiento católico a partir de la encíclica *Rerum Novarum*, algunos intelectuales franceses², junto con cambios en el sistema de reclutamiento, la Universidad Católica (PUC) se comienza a posicionar rápidamente como el oponente intelectual en la formación universitaria de la élite (Gazmuri, 2003), estableciendo un patrón de elección familiar en concordancia con las dinámicas externas e internas al campo escolar.

Hoy en día, existen nuevos integrantes en la élite: las élites intelectuales y los technopols desde la década de los 90 han hecho ingreso a los circuitos de las élites (Joignante y Guell,

² Algunos de estos filósofos y literatos franceses eran Leon Bloy, Jacques Maritain, Charles Péguy, Paul Claudel, entre otros (Gazmuri, 2003, p.1).

2011). Si bien no existen datos que permitan saber hacia dónde orientan sus preferencias educativas, la diversificación de proyectos de élite generada por el mercado educativo junto a sus disposiciones político-ideológicas, podrían entregar algunas señales.

Quiebre interno en la élite.

Ya hemos señalado que existe la división entre conservadores y liberales (progresistas llamados hoy en día) que orienta las elecciones escolares en las familias de élite, pero ¿Por qué la élite libera comienza a abandonar los liceos públicos y dirigirse hacia la educación privada (PNUD, 2004)?, ¿matricula la élite conservadora hoy en día a sus hijos en los mismos establecimientos que hace 40-50 años?

Una primera respuesta a estas dinámicas de cambio que han tenido lugar en la élite a partir de la segunda mitad del siglo XX tiene que ver con el proceso de democratización del acceso a educación secundaria, el cual adquiere un mayor impulso con la reforma educativa de Eduardo Frei Montalva. Esta democratización generó una “fuga” de las élites laicas hacia el sector privado a modo de seguir circulando por espacios homogéneos (asegurando el cierre social).

Este proceso también se complementó con el quiebre de los sectores conservadores de la élite con ciertas congregaciones religiosas con las cuales anteriormente tenían una relación, debido a que ellas tomaron caminos “de izquierda”. El impacto de la encíclica *Rerum Novarum*, el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación junto al apoyo de la reforma agraria marcaron un quiebre entre la élite conservadora con congregaciones como los Sagrados Corazones y los Jesuitas. Este quiebre fue con ellas, no así con el catolicismo.

“Al masificarse la educación se produjo también una devaluación del valor simbólico asociado a ella, derivado de esta suerte de democratización en su acceso. La élite siempre recurrió a la educación como mecanismo de cierre social, pero lo que parece haber ocurrido en las últimas décadas es que la educación pública dejó de ser una alternativa para la élite en términos de educación para sus hijos (...) El cambio más significativo en términos de la formación de la élite es la aparición de algunos colegios de congregaciones religiosas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. En ambos casos, se trata de congregaciones que tiene hoy una importante presencia en la clase alta chilena y cuya visión del mundo es de marcado carácter conservador” (Aguilar 2011: 229)

Entonces, tal como describe Aguilar, las élites que antiguamente se encontraban en la educación pública, en el momento de la democratización de esta emigraron hacia cierta oferta privada (católica más progresista o colegios laicos), la cual se había diversificado en su oferta. Las familias conservadoras que habían roto relaciones con ciertos sectores de la iglesia, encontraron en nuevas o antiguas congregaciones de orientación más conservadora (Colegios Opus Dei, Legionarios de Cristo dentro de las nuevas, Verbo Divino de las antiguas) espacio para matricular a sus hijos. De esta manera, la educación particular pagada se consagró, especialmente desde finales del siglo XX, como el espacio de protección y reproducción (cierre social) de las élites. En otras palabras, estas dinámicas nos permiten hipotetizar que los CE son aquellos que garantizan (en mayor o menor medida) una homogeneidad social a las élites.

CONCLUSIONES.

Los diversos trabajos que han abordado las élites en Chile (e internacionalmente también) tienden a dar cuenta de las diferentes prácticas que estos grupos realizan para diferenciarse del resto de la sociedad y poder reproducirse internamente. La educación, y particularmente el tipo de establecimiento que frecuentan son parte importante del entramado que configura las fronteras sociales y simbólicas de su cierre social. Por lo mismo, los procesos históricos y sincrónicos que configuran a estos grupos redundan en el tipo de preferencia, las cuales a su vez, como vimos a lo largo del artículo, siempre buscan la circulación en espacios que garanticen su homogeneidad social y la exclusión.

Al mismo tiempo, existen una serie de complejas reglas del campo educativo, la mayoría de las cuales se encuentran desde la constitución del campo, que han posibilitado y legitimado la emergencia de un número reducido de instituciones donde se forma las élites de país. Estas mismas dinámicas del campo han también posibilitado que los CE sean homogéneos, en base a una des-regulación del sector, junto con la ausencia de una regulación del sistema educativo orientada hacia la búsqueda de justicia educativa.

Dentro de las dinámicas internas al interior del campo educativo, la que más llama la atención por su ortodoxia es la de la libertad de enseñanza. Ella ha logrado (complementada por el

habitus de las élites) configurar un habitus al interior del sub-campo de los colegios de élite, el cual se orienta hacia la búsqueda de la distinción, exclusión y cierre social de las élites (y en general de las clases sociales). Por consiguiente, la privatización en la formación educativa de las élites, es decir, que los C.E. sean mayormente privados (14 de 16), se explicaría por como las condiciones estructurales que hemos analizado en este artículo, han generado un habitus que se orienta en la búsqueda de distinción y cierre social de las élites.

El desafío que queda entonces apunta hacia la necesidad que la política educativa regule este sub-sector. Los colegios particulares pagados, y por consiguiente los 14 colegios de élite no poseen ningún tipo de regulación a pesar de su contribución en la desigualdad educativa y social. Todo esto es aún más contradictorio en el marco de la implementación de la ley de Inclusión y debate sobre el mérito en el país.

Bibliografía.

- Aguilar, O. (2011). Dinero, educación y moral: El cierre social de la élite tradicional chilena. En Guell, Pedro y Joignant, Alfredo (eds) *Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de una sociología de las élites en Chile (1990-2010)* Santiago de Chile, UDP.
- Bourdieu, P. (1987). *Cosas dichas*. Gedisa, Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (1989). *La noblesse d'État: Grands corps et grandes écoles*. París, Editions de Minuit.
- Bourdieu, P. (2005). *El sentido práctico*. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (2007). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Anagrama. Barcelona
- Correa Sutil, S. (2004). *Con las riendas del poder: la derecha en el siglo XX*. Santiago, Chile: Editorial Sudamericana.
- Córdoba, C. (2014). La elección de escuela en sectores pobres: Resultados de un estudio cualitativo. *Psicoperspectivas*, 13(1), 56-67.
- Corvalán, J. (2013). Las dimensiones relacionales y simbólicas de los sistemas educativos: Hipótesis para el caso chileno. *Atenea (Concepción)*, (508), 121-133.
- Draelants H. (2018). *Comment l'école reste inégalitaire? Comprendre pour mieux reformer*. Ed : PUL Presses Universitaires de Louvain
- Dubet, F. (2005). *La escuela de la igualdad de oportunidades. ¿Qué es una escuela justa?*. Buenos Aires, Ed. Siglo XXI.
- Fischer, K. (2017). *Clase dominante y desarrollo desigual en Chile. Chile entre 1830 y 2010*. Santiago, Chile: Editorial Alberto Hurtado.
- Gazmuri, C. (2003). Notas sobre las élites en Chile, 1930-1999. *Movimiento Bicentenario*, 2(1), 53-74.
- Gaztambide-Fernández, Ruben. (2009). "What is an elite boarding school?" *Review of Educational Research* 79 (3): 1090-1128.
- Guiesen, E. (2010). Sobre la élite chilena y sus prácticas de cierre social. *Tesis de pregrado, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile*.
- Hernández, M., & Raczynski, D. (2010). ¿Cómo eligen escuela las familias chilenas de estratos medios y bajos? Información, representaciones sociales y segregación. In Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación (Vol. 1, p. 13).
- Hilgers, M., & Mangez, E. (2014). Introduction to Pierre Bourdieu's theory of. *Bourdieu's theory of social fields: Concepts and applications*, En Hilgers, M., & Mangez, E. (Eds.). (2014). *Bourdieu's theory of social fields: concepts and applications*. Routledge.

- Howard, A. (2010). Elite visions: Privileged perceptions of self and others. *Teachers College Record*, 112(8), 1971-1992.
- Huneus, S. (2013). *Matrimonio y patrimonio: estrategias matrimoniales de la elite chilena en el siglo XXI*. Uqbar Editores.
- Ossa, J.L. (2007). "El Estado y los particulares en la educación chilena, 1888-1920", en *Estudios públicos*, núm. 106, Chile, Centro de Estudios Públicos (CEP), pp. 23-96.
- Joignant, A. (2012). Habitus, campo y capital: Elementos para una teoría general del capital político. *Revista mexicana de sociología*, 74(4), 587-618
- Khan, S. R. (2015). Changes in elite education in the United States. In Agnès van Zanten, Stephen Ball and Brigitte Darchy-Koechlin (eds.), *Elites, privilege and excellence. The national and global redefinition of educational advantage*. Routledge.
- Kenway, J., & Koh, A. (2013). The elite school as 'cognitive machine' and 'social paradise': Developing transnational capitals for the national 'field of power'. *Journal of Sociology*, 49(2-3), 272-290.
- Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. *Annual review of sociology*, 28(1), 167-195.
- Madrid, S. (2016). La formación de masculinidades hegemónicas en la clase dominante: el caso de la sexualidad en los colegios privados de elite en Chile. *Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana*, (22).
- Madrid, S. (2016b). "Diversidad sin diversidad: Los colegios particulares pagados de élite y la formación de la clase dominante en una sociedad de mercado", Javier Corvalán, Alejandro Carrasco y Juan Eduardo García-Huidobro (eds.), *Mercado escolar y oportunidad educativa. Libertad, diversidad e igualdad*. Santiago, Ediciones UC.
- Ministerio de Educación (2017). *Estadísticas de la educación 2017*. Agosto.
- Moya, E. and J. Hernández (2014). "El rol de los colegios de elite en la reproducción intergeneracional de la elite chilena." *Rev. austral cienc. soc*(26): 59-82.
- PNUD (2004). *¿El poder para qué y para quién?* Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo.
- PNUD (2017). *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo.
- Rovira, C. (2011). Hacia una sociología histórica sobre las élites en América Latina: Un diálogo crítico con la teoría de Pierre Bourdieu. En Alfredo Joignant & Pedro Güell (Eds.), *Notables, tecnócratas y mandarines: Elementos de sociología de las elites en Chile (1990-2010)*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Rivera, M. y Guevara, J. (2017). *Selección en la educación secundaria y acceso a las universidades de élite por tipos de establecimientos en Chile. Análisis de la cohorte 2016*. Documento de trabajo N°8, Centro de Estudios MINEDUC. Recuperado el 08/04/2019 de <http://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/DctoTrabajo8-MRivera.pdf>
- Serrano, S., Ponce de León, M., y Rengifo, F. (2012). *Historia de la Educación en Chile (1810-2010), Tomo I Aprender a leer y escribir (1810-1880)*. Santiago, Chile: Taurus.
- Serrano, S., Ponce de León, M., Rengifo, F., Mayorga, R. (2013). *Historia de la Educación en Chile (1810-2010): Tomo II. La educación nacional (1880-1930)*. Santiago, Chile: Taurus.
- Stabili, M. R. (2003). *El sentimiento aristocrático: élites chilenas frente al espejo (1860-1960)*. Editorial Andrés Bello.
- Thumala, M. A. (2007). *Riqueza y piedad. El catolicismo de la élite chilena*. Santiago, Debate.
- Van Zanten, A. (2009). The sociology of elite education. *The Routledge international handbook of the sociology of education*, 329-339.
- Villalobos, C., & Valenzuela, J. P. (2012). Polarización y cohesión social del sistema escolar chileno. *Revista de análisis económico*, 27(2), 145-172.
- Zimmerman, S. D. (2013). Making top managers: The role of elite universities and elite peers. *Unpublished manuscript, Yale University*.
- Zimmerman, S. D. (2018). Elite Colleges and Upward Mobility to Top Jobs and Top Incomes. *American Economic Review*.

Reconfiguración socioespacial y autoorganización en las villas 1, 11, 14 y barrio 31 ex villa 31 en la ciudad autónoma de buenos aires

Sandra Avalos y Rosana Espejo
Universidad Nacional de Quilmes
penelopeav19662gmail.com
rosanaespejo.re@gmail.com

Resumen

El proceso de evolución del espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario de reconfiguraciones que intentaron dar respuesta a las permanentes reestructuraciones que, en ocasiones surgen como respuesta a la aplicación de políticas neoliberales que afectan al tejido social y por consiguiente las relaciones espaciales tal como plantea Sousa Santos. Esto lleva a sectores populares a buscar una manera de habitar el espacio de la ciudad para poder situarse cerca de los centros laborales y abaratar los costos de transporte. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en general, y de las urbanizaciones en Villa 1, 11, 14 y el Barrio 31, nos permiten considerar la importancia que adquieren los procesos de urbanización en los barrios populares y cómo a través de ellos se modifica la ciudad y las vidas de las personas. Ahora bien, estos procesos nos van a permitir pensar las ciudades como sistemas, que nacen crecen y se extienden. Es a partir de estos conceptos iniciales de la teoría del caos que nos permitimos abordar el desorden en la ciudad de buenos Aires, entendiendo por desorden los asentamientos irregulares y algunas fenómenos y comportamientos que son diversos.

Palabras Clave: TERRITORIO – SISTEMAS – URBANIZACIÓN – FRAGMENTACIÓN
- TEORÍA DEL CAOS, CIUDADANÍA.

Introducción

El proceso de evolución del espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario de reconfiguraciones que intentaron dar respuesta a las permanentes reestructuraciones que, en ocasiones surgen como respuesta a la aplicación de políticas neoliberales que afectan al tejido social y por consiguiente las relaciones espaciales tal como plantea Sousa Santos.

Esto lleva a sectores populares a buscar una manera de habitar el espacio de la ciudad para poder situarse cerca de los centros laborales y abaratar los costos de transporte. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en general, y de las urbanizaciones en Villa 1, 11, 14 y el Barrio 31, nos permiten considerar la importancia que adquieren los procesos de urbanización en los barrios populares y cómo a través de ellos se modifica la ciudad y las vidas de las personas. Ahora bien, estos procesos nos van a permitir pensar las ciudades como sistemas, que nacen crecen y se extienden. Es a partir de estos conceptos iniciales de la teoría del caos que nos permitimos abordar el desorden en la ciudad de Buenos Aires, entendiendo por desorden los asentamientos irregulares y algunas fenómenos y comportamientos que son diversos.

Aun así, es importante en este punto considerar el concepto de autoorganización, que nos permite explicar los cambios que van teniendo lugar en la ciudad. Podemos decir que se produce un fenómeno de integración de zonas centrales y asentamientos informales provocando de esta forma una mejora de los espacios y brindando una solución a los problemas de acceso a los servicios básicos. Esta urbanización de las villas y la transformación de los guetos fracturados en base al trabajo de integración de barrios llevado adelante por las autoridades en el siglo XXI cambia el perfil sociodemográfico de la ciudad y reestructura el sistema de fuerzas y tensiones en la misma, generando una mejora sustancial en la vida de los habitantes de estos enclaves y sus alrededores. Se llega de esta forma, a un equilibrio dinámico que nos permite pensar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va encontrando una lógica propia que los procesos en la misma.

Pensar la ciudad desde la complejidad nos permite integrar todas las realidades que constituyen la misma y avanzar hacia soluciones superadoras de sus problemas, entender sus

procesos multidimensionales, los conflictos y las realidades solidarias y encontrar en esta diversidad la identidad local.

Es posible así dar una nueva dimensión al contexto de lucha social, el territorio entonces se configura como un espacio de tensiones y redefiniciones de actores. A través de la dinámica de la teoría es posible comprender cómo los ciudadanos se van empoderando y encontrando soluciones propias, generando así que el gobierno modifique algunas políticas que afectaban seriamente la vida de los habitantes de las Villas en estudio. El mensaje subyacente de nuestro trabajo es que el reciente paradigma que considera que las ciudades pueden funcionar como organismos vivos bajo las reglas de los sistemas complejos³ (Batty, 2007) parece válido.

Descripción del lugar objeto de estudio

El barrio de Villa Soldati está localizado en el sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Linda con el Riachuelo, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Toda ella es la zona más pobre de la ciudad.

Hasta 1887, la zona que hoy es el barrio de Villa Soldati formaba parte del partido provincial San José de Flores, que bajo la intendencia del Dr. Eduardo Crespo, a través de la ley 2.089 de 1887, fue anexado junto con el de Belgrano al territorio de la ciudad. Gran parte de los terrenos formaban parte del "bañado del bajo Flores".

Se trata de un enclave localizado estratégicamente en la ciudad a poca distancia del centro metropolitano. La implantación en el lugar de complejos habitacionales por parte del Estado, lejos de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, favoreció la atracción de asentamientos informales en los espacios vacantes alrededor. En este punto creo que los habitantes aceptaron la situación tal como plantea Rincón⁴ (Rincón, 2006) "Los primeros habitantes desplegaron prácticas de organización y jerarquización del espacio, autorizando la ocupación de los recién llegados y permitiendo la emergencia de racionalidades normativas tácitas-sociales sustentadas en prácticas regulatorias comunitarias".

³ Batty, M (2006). "Hierarchy in cities and city systems". En: in *Hierarchy in Natural and Social Sciences*. Ed. por D. Pumain. Springer.

⁴ Rincón Patiño, A. 2006 "Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: entre el territorio de la ley y la territorialidad de las legalidades" en revista *Economía, sociedad y territorio* (México: El Colegio Mexiquense S.A.)

El caso del Barrio 31 y 31 Bis es distinto El barrio 31 surge en la década de 1930. En el contexto de la crisis mundial donde llegan a la Capital Federal migrantes tanto desde el exterior, predominantemente europeos y con la sustitución de importaciones argentinos de las provincias en busca de trabajo. Estos grupos se asientan en tierras cercanas a dos grandes fuentes de trabajo de la época: el puerto y las terminales ferroviarias.

Desde este punto de vista entonces, podemos decir que los procesos de urbanización de estos territorios no se desarrollan de acuerdo a una estricta planificación, sino más bien son caóticos y aleatorios llevados adelante por la necesidad de las personas de estar cerca de centros urbanos importantes que les van a brindar posibilidades de desarrollo personal. Dado que estos procesos son caóticos sin responder a lógicas estructuradas, el desorden es una característica que se imprime en los espacios. Si la ciudad es, en verdad, el título de un conjunto de fenómenos, comportamientos y procesos que se caracterizan por asimetría, no-localidad, fraccionamiento, diversificación y paralelismo, conjuntamente con dinámicas multinivel, híbridas y no centralizadas ni rígidas entonces, al estudiar estos espacios asimétricos, con viviendas todas diferenciadas por su estructura, diversas en sus territorios de informalidad y básicamente que no responden a la lógica de la estructura centralizadora del estado. Porque quizás el sistema sea diferente al sistema que caracterizamos en la ciudad.



Figura 1. Barrio 31 y 31 bis. Fuente: GCBA



Figura 2: Plano de Villa Soldati. Fuente: GCBA

Análisis del Sistema: Sistema abierto y subsistemas y Recursividad.

En este punto me parece necesario considerar las Villas de Soldati y 31 y 31 bis como un sistema complejo. Para poder comenzar a delinearlo me parece fundamental establecer una distinción inicial: el perímetro de la ciudad es el que va a definir la identidad de la misma ya que permite comprender que está dentro y que no. La pregunta necesaria es ¿cuál es el adentro? Siempre que pensamos la ciudad pensamos en el centro y estas periferias, pero desde la teoría del sistema hay un todo que comprende el orden y el desorden. Esto en caso de que quisiéramos considerar a la Villa como el desorden, aunque al final de este trabajo quizás se constituya en un nuevo orden urbanizante.

El estudio de sistemas de ciudades se relaciona con trabajos de diferentes disciplinas, por ejemplo, la economía, las matemáticas y la geografía. La economía brinda las ideas y

conceptos fundamentales para entender los componentes del sistema y los procesos de interacción, las matemáticas ofrecen las herramientas para modelar dicha estructura y la geografía establece sus atributos espaciales. Entre ellos para comenzar encontramos el concepto de fractal en los claros formatos de los polígonos de sus límites.

Es así como se puede establecer claramente la distinción entre lo urbano y lo no urbanizado, entre territorios de acumulación (ciudad) y producción. Entre los fenómenos que afectan al sistema ciudad voy a considerar los políticos, sociales y culturales que me permitirán analizar el sistema. Como todo sistema complejo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Villas en estudio deberían ser recursivos, adaptados a los territorios y contener canales de comunicación (redes) tanto internos como con el entorno por donde debe fluir la materia, la energía, la información y el conocimiento y, con ellos, encontraremos un subsistema de implementación donde se elaboran los productos y residuos.

En estos territorios, encontramos los siguientes subsistemas (o unidades de administración): identidad(cultural), desarrollo sin planificación(evolución), decisión(dirección), comunicación, control y coordinación. La identidad cultural de las villas trasciende a través del canal de Televisión Mundo Villa. La evolución es constante y cambiante, el hoy es solo parte de lo que será ese lugar mañana, distinto pero singular. Es claro que la función más importante hoy es la comunicacional, estas Villas hoy trascienden sus propios espacios, la Villa 31 y 31 bis comunica gastronomía y cultura local y la Villa Soldati resignifica su historia y la comunica.

Para el buen funcionamiento de todo el sistema, todas estas unidades deben ser recursivas, es decir debería existir una permanente relación entre las partes y el todo (ciudad) y, así al considerar las Villas de Soldati y 31 y 31 estudiamos una parte y el todo. En el caso de esta ciudad, las villas son una constante, que se presenta en todo el sistema ciudad y que presenta incertidumbre al sistema (no es posible conocer toda la información ni el comportamiento).

En el caso de los espacios de las Villas en estudio, aunque el flujo de información sea óptimo, la infraestructura urbana debe no presenta apertura a las periferias de la ciudad, por lo cual el desarrollo se encuentra estancado⁵. (Miramontes, Lugo, Sosa 2017), De que hablamos

⁵ Miramontes, Lugo, Sosa Complejidad Y Urbanismo: Del Organismo A La Ciudad, CopIt-arXives. México. 2017.

cuando pensamos en esto, estamos refiriéndonos claramente a las condiciones de vida de los habitantes del lugar que se ven privados de servicios básicos indispensables, tales como servicios básicos de agua potable, sufren por la contaminación de los espacios que habitan y la seguridad no es un derecho que los acompañe en sus vidas cotidianas.

Es posible construir la perspectiva de la complejidad de estas Villas entendiendo la simultaneidad y la compleja interrelación de las dimensiones social, económica, política y espacial, así como la diversidad entre actores, recursos y flujos de intercambio. Queda en claro que hay más de una escala de análisis respecto de las interrelaciones, en la que fenómenos de escala micro tienen incidencia en fenómenos desencadenados en la macro escala, y viceversa. Esto me permite considerar al sistema Villa Soldati y 31 y 31 bis como un sistema abierto adaptativo. Esto queda claro a la luz de los cambios que el sistema experimenta en estos últimos años.

El desorden en las Villas o el surgimiento de nuevos ordenes urbanos

La teoría del caos en biología nos explica que los organismos pasan por estadios y las ciudades pueden ser vistas al mismo tiempo como organismos que se desarrollan y exhiben exactamente todas las propiedades y características de los demás sistemas: nacen, se desarrollan y en ocasiones mueren o se reestructuran dando origen a un nuevo organismo. En el caso del estudio del territorio específico abordado podemos analizarlo de la misma forma. El nacimiento de ambos sectores de la ciudad es a causa de una función específica: la búsqueda de un lugar para habitar. Estos espacios son sistemas emergentes en tanto que cristalizaciones de una geometría social en permanente redefinición, aquí queda claro que estos espacios en la actualidad son protagonistas de cambios a partir de políticas públicas: el parqueizado de las calles, instituciones públicas que se asientan en sus espacios rompiendo la lógica del subsistema y llevando al barrio 31 y 31 bis a ser parte del todo. En ambos casos el producto de una interacción diaria de múltiples individuos que no se reduce a lo material, y que depende del mundo de las ideas es lo que impulsa los cambios del proceso de autoorganización de las Villas en Soldati.

La ciudad como sistema complejo auto-organizador, cuyas cualidades principales son su adaptación y la emergencia desplegadas a través de comportamientos, tales como la búsqueda

de soluciones a sus problemas cotidianos de trabajo: la lógica del cartoneo en ambas villas sería un caso concreto. De esta forma logran resolver problemas sin recurrir a una estructura centralizada o jerarquizada descendente, y partiendo de la base, en este caso social urbana, de la que puede emerger espontáneamente un comportamiento colectivo plausible, pero quizás que no sea aceptable desde los cánones sociales. Para comprender la ciudad se toma en cuenta aquello no controlado, no planeado, y sobre todo considerando esas características poco estudiadas tales como de qué manera resuelven las personas que allí viven las condiciones de habitar. Es a traves de estos rasgos junto con las formas de transitar los espacios, los lugares de encuentro entre habitantes que podemos describir la adaptabilidad del sistema. En nuestro caso, la Villa 31 ty 31 bis está abriendo su sistema de comunicación y estableciendo nuevas relaciones con el sistema, hay nuevas autopistas pensadas para transitar cerca de ella y de hecho, la estación de Ómnibus ya tiene una convivencia amplia con la Villa ya que los micros entran a ella en camino a sus destinos. El caso de Soldati es complejo aun las comunicaciones no fluyen solo rodean al sistema aún se transita por los viejos caminos que unían centro y periferia en el pasado.

La ciudad de Buenos Aires es un sistema complejo adaptativo y dinámico y sus subsistemas de Villas también lo son. Como tal genera procesos en los cuales adquiere importancia la autoproducción, la autoorganización y la autorregulación, así como refleja la relevancia de la comunicación y la información para el desarrollo de los sistemas sociales. Las ciudades son sistemas sociales compuestos de elementos y actores que se interrelacionan que, a su vez, estructuralmente presentan cinco dimensiones (físico-territorial, económica, social, cultural e institucional) que se encuentran presentes en sus componentes en menor o mayor medida.

Así para poder hablar de este aspecto, considero que, hay que explicar que la ciudad a través de componentes tales como paisaje urbano y estructura urbana va a poder adquirir identidad propia. En este proceso identitario, la ciudad se encuentra en un equilibrio dinámico. Es decir, hay formas de relación que se modifican permanentemente en intensidad, en escalas entre grupos sociales hegemónicos y subalternos que, en el caso de las villas en estudio viene dado en un punto inicial por alto nivel de segregación social que va definiendo múltiples relaciones económicas y sociales dinámicas. Es así como el sistema va a reaccionar ante perturbaciones o sea cambios en el entorno y va a dar lugar a *procesos de cambio*, entre ellos algunos *adaptativos* y otros de *transformación*. adaptación se puede entender como las alteraciones

de las relaciones sociales y de la sociedad con la esfera ecológica, pero manteniendo su estructura. Este es el caso de la contaminación urbana creciente en estos espacios que no procesan sus desechos de forma correcta. Los desechos urbanos de producción industrial, la producción de residuos y la falta de planificación de cómo tratarlos es un problema difícil de resolver.

Este permanente crecimiento urbano genera procesos de segregación, que se corresponden con lo que Duhau⁶ (Duhau 2013) denomina división social del espacio residencial, en el caso de Bombay. Tal nivel de crecimiento urbano genera problemas de habitabilidad, en el caso particular de las Villas que tomamos como caso de estudio las viviendas precarias se son un conjunto de viviendas donde se encuentra un alto porcentaje de la población de la ciudad. La autoorganización es un proceso que surge del equilibrio dinámico ante las perturbaciones como el problema de la contaminación creciente, el sistema busca una solución a través de atractores que surgen como patrones que vienen dados por procesos de autoorganización que almacenan la información de la ciudad, la almacenan y la transmiten: son grupos autoorganizados que se encargan de buscar una solución creativa los problemas que acarrear las políticas de Estado. Esto es claro en el caso de Villa Soldati donde los habitantes se organizan para intentar impedir el asentamiento de una planta de Reciclado de basura y en lugar de combatir con violencia buscan una solución creativa: se organizan con talleres de arte” Soldati recicla”⁷ (Pura Ciudad 2018). Este proceso genera incertidumbre ya que no se trata de un fenómeno conocido. La incertidumbre se encuentra ligada a la sociedad de la información y de conocimiento, no podemos garantizar que lo que sabemos hoy nos servirá para mañana. Este es un *punto de bifurcación*, cuando surge un proceso de *autoorganización* y se genera un trabajo colectivo en varios sectores.

La ciudad busca resolver sus problemas a través de una nueva organización de la movilidad y la integración del transporte público como forma de desplazamiento uniando ambos lugares con el Metrobús. Ha sido instaurado en CABA con visión estratégica para el desarrollo sostenible de la ciudad, pero en cambio, es uno de los puntos más críticos. Las densidades inusuales dan lugar a patrones de desplazamiento atípicos. Ahora bien, esta es una propuesta,

⁶ Duhau (2013). La división social del espacio metropolitano. Una propuesta de análisis. Nueva Sociedad.

⁷ Pura Ciudad, Vecinos se organizan con arte y música contra la termo valorización en el sur. 1/08/2018

pero es una fuente de incertidumbre, a nivel del modelo económico y financiero no es posible predecir si los resultados serán los esperados.

El Nacimiento de una nueva ciudad

Los procesos de cambio impulsados por las autoridades en la Villa 31 y 31 bis han reconfigurado un espacio de la ciudad que antes era inexpugnable. Es a través de la construcción de institucionalidad con sedes de gobierno en territorio de la Villa que, el sistema complejo cerrado se abrió y se transformó en un nuevo sistema. Esta transformación no deja fuera a sus habitantes: de desplazados a ciudadanos es una transformación de la cual aún no podemos medir el impacto. Esta reconfiguración no solo modifica las funciones del espacio, sino que además lo que hace es cambiar la morfología del mismo. Cambian las formas de transitar el lugar, donde antes había pasillos ahora hay veredas, donde antes había miedo, ahora hay restaurantes y un polo gastronómico: La Florida.

En Villa Soldati los cambios son menos perceptibles, ya que, si bien hay cambios, los mismos no transforman la vida cotidiana: hay mejoras en el transporte, hay centros de salud, en lugares centrales del lugar, pero el camino de transformar al habitante en ciudadano es un punto en común. Fomentar simbiosis entre los componentes o individuos da mejores resultados para el sistema.

Dado que a ciudad no es un sistema estático se producen cambios casi permanentes, continuos y a veces incluso catastrófica." Algunos de estos cambios suponen, de manera específica, transformaciones de la propia organización, orden o estructura urbana. La concepción elemental necesaria para el entendimiento de un orden puede vincularse a las parcelas urbanas y al contenido de las mismas: es entonces que comprensible que las Villas sean centros de desorden, la parcela como tal ha sido redefinida. Para poder mantener el orden y subsistir los sistemas agrandan su superficie y esto es lo que ha ocurrido paulatinamente con los barrios que hemos estudiado.

Quedan aún por observar cómo evolucionan los cambios de la ciudad para poder analizar las transformaciones.

A modo de Conclusión

Las formas de habitar nos aportan datos sobre las maneras de reestructurar las funciones de la ciudad y los flujos de personas e información. La visión de la ciudad desde el paradigma de la complejidad nos permite abordar el estudio de la ciudad desde una dimensión espacio - tiempo más completa e integral. Es por ello que ante posturas que ven a los asentamientos informales como peligrosos esta visión le antepone una mirada estratégica y creativa. Es la propia ciudad y sus habitantes los que van a encontrar nuevas formas de solucionar los problemas del hábitat.

Bibliografía

- Alonso, L. E. (2005) "El estructuralismo genético y los estilos de vida: consumo, distinción y capital simbólico en la obra de Pierre Bourdieu". http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/LM-Alonso-consumo.PDF.
- Batty, M (2006). "Hierarchy in cities and city systems". En: in Hierarchy in Natural and Social Sciences. Ed. por D. Pumain. Springer.
- Borja, Jordi, La Ciudad Conquistada, Alianza Ed., Barcelona, 2003
- Bourdieu, P. "Efectos de lugar". En Bourdieu, P. (director); La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2000.
- Diario La Nación, Villa 31 desviarán un tramo de la Illia, 6 de Agosto de 2016.
- Duhau (2013). La división social del espacio metropolitano. Una propuesta de análisis. Nueva Sociedad
- Grimson, A. (2009); "Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización en la política de Buenos Aires". En Alejandro Grimson, M. Cecilia Ferraudi Curto y Ramiro Segura (Comps.) La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Buenos Aires. Prometeo.
- Jorge Arzate Salgado Alicia B. Gutiérrez Josefina Huamán (coord.) "Reproducción de la pobreza en América Latina. Relaciones sociales, poder y estructuras económicas." CLACSO, Buenos Aires, 2011.
- Merklen, D. Pobres ciudadanos. Buenos Aires, Gorla (2005)
- Pura Ciudad, Vecinos se organizan con arte y música contra la termo valorización en el sur. 1/08/2018
- Rincón Patiño, A. 2006 "Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: entre el territorio de la ley y la territorialidad de las legalidades" en revista Economía, sociedad y territorio (México: El Colegio Mexiquense S.A.)
- Rodríguez, C. y Di Virgilio, M. (2011); "El caleidoscopio de las políticas habitacionales-territoriales". En María Carla Rodríguez y María Mercedes Di Virgilio (org.); Producción social del hábitat, políticas públicas y desarrollo de organizaciones sociopolíticas. Buenos Aires, Prometeo.
- Miramontes, Lugo, Sosa Complejidad Y Urbanismo: Del Organismo A La Ciudad, CopIt-arXives. México. 2017.

De la desigualdad, su significación y de la clausura del estrato: una investigación de tres poblaciones en una comuna del sur de Santiago

Rodrigo Ignacio Cortés Muñoz
Pontificia Universidad Católica de Chile
rcortes@uc.cl

Resumen

A partir de las observaciones obtenidas en una investigación participante realizada durante catorce años en tres poblaciones de la comuna de Puente Alto (la “Población”) se propone existiría un desfase entre la manera en cómo se construye realidad social en la Población y cómo tal es observada desde fuera de ella. Se avanzan razones que justifican ese desfase, que se propone intencionado desde quienes son observados (marcándose, de esa forma, la distinción observador/observado). Del mismo modo, se describen externalidades comunicativas al interior de la Población seguidas del proceso de clausura, ilustrándose lo anterior en la carga significativa que tiene la semántica utilizada en la Población. Finalmente, debido a que el destiempo anterior implica reconocer que conceptos como cohesión, conflicto y desigualdad no resultan ya aplicables, se sugiere e interroga por el desarrollo de una sociología normativa que sea capaz de hacerse cargo del fenómeno descrito.

Palabras claves: DESIGUALDAD - COHESIÓN – CONFLICTO - MOVILIDAD - POBLACIÓN CÁRCEL

Introducción y situación del problema

En lo que sigue se intenta dar cuenta de las siguientes hipótesis participantes:

(i) Que existiría, en relación a la Población, un desfase referencial (Frege, 1892) entre la sociología que aborda la desigualdad desde el dato estadístico¹ y la alusión fáctica al que ese dato signa. La desigualdad tendría una entidad que es diferente de la narrativa que se construye a partir del dato estadístico, máxime, sobre todo, cuando desde el sustrato fáctico existe la intención decidida por distorsionar de manera funcional esa respuesta. Ello implica que cualquier conclusión estadística, no sólo debiera exponer su forma, sino los mecanismos de aseguramiento y garantía que permiten construir, sobre ese dato, cualquier tipo de diagnóstico. No se trata tanto de un problema epistemológico, pero de estrategia investigativa. De igual forma, la empresa etnográfica debe aceptar que las categorías de aprehensión originarias de quien interviene difieren de aquellas efectivamente utilizadas en la dinámica comunicativa al interior de la Población, consistiendo el esfuerzo de dicha empresa en volver inteligible no sólo el modo específico de percepción de la realidad sino, más radicalmente, la forma de su construcción (Berger & Luckmann, 1968).

(ii) Que la desigualdad y la estratificación (Tumin, 1968) producida, sobre todo, como externalidad de las condiciones laborales han producido —en este caso— una clausura (Luhmann, 2007) de las relaciones de comunicación y significación. De tal modo, que ya no es posible horizontalizar el concepto de “poblador”, ni de aseverar una continuidad semántica entre las aserciones dentro/fuera de la Población. Ello ha significado no sólo una ruptura en la dimensión laboral (trabajador/empleador), sino que la autarquía del sistema de comunicaciones de/en la Población que ahora resulta —como sistema (Luhmann, 2007)— omnicomprendiva de todas las relaciones societales de sus integrantes. Lo anterior produce que toda comunicación desde “fuera de la población” sea una irritación (Luhmann, 2007); y por regla general, que toda comunicación hacia fuera de la Población esté funcionalizada de manera utilitaria.

¹ Véase, por ejemplo, Universidad Diego Portales, 11 de agosto de 2017, “Presentación del libro “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?V=e7ode3xirxe&t=5804s>

(iii) La clausura (Luhmann, 2007) de la Población implica muy especialmente el adensamiento de comportamientos que en ese proceso de institucionalización (Berger & Luckmann, 1968) afincan normatividad. Ello implica que la ruptura primera se profundiza, de modo tal, que a los individuos-Población no les resulta ya asequible los códigos legalidad/ilegalidad del sistema punitivo. Ello ha significado, en la Población, que la retribución penal —como fin de la pena— ha perdido su sentido, y ha sido incorporada como una variable biográfica cuyo disvalor no resulta ya un factor, y, por el contrario, su acontecimiento motiva, en la Población, condiciones de sobrevivencia y vinculación: como por ejemplo, se menciona el sistema de financiamiento de encomiendas y conyugales.

(iv) Entendida la Población, hoy, como un sistema de comunicaciones (Luhmann, 2007) externalidad de de las condiciones y políticas laborales existentes fuera de la Población, ello exige la elaboración de una sociología normativa que dé cuenta de forma crítica de ese fenómeno.

Ejemplo del desfase al que se alude es lo que sucede en el artículo “Experience: Being policed as condition of life” de Clara Han, ensayo que se encuentra en el libro “Writing the world of policing: the difference Ethnography makes”, editado por Didier Fassin, en el que se lee en el párrafo que abre la exposición lo siguiente:

“On a warm day, men and women sit outside in plastic chairs taking in the sun, watching and chitchatting, children playing in the street, and women sell anticuchos (kebabs) in front of their houses [...] I am in the low-income neighbourhood in Santiago, Chile, that has been under police occupation for several years [...] I conducted then months of continuous fieldwork in this setting. By springtime, I’ve become accustomed to sitting in the storefront belonging to my friend Martita”. (Han, 2017).

El libro es editado por la Universidad de Chicago y data del año 2017. La publicación se puede comprar libremente en Amazon. En el artículo, Clara Han haría referencia a cómo es que el fin de la pena, como práctica punitiva, adquiere significación en contextos poblacionales, entendiendo, ella, desde su investigación etnográfica, que habría un desfase, y que ese destiempo generaría externalidades, a su vez, significativas.

En el texto, de hecho, ella afirma:

“In Chile, such clear dividing categories also mean that those from “poblaciones” (low-income neighbourhoods) who are injured, humiliated, and killed by police are rarely given a hearing”. (Han, 2017).

No es que lo que se sigue se erija en una suerte de diálogo con el ensayo antes citado. Sin embargo, lo utiliza como punto de partida desde el error que ese gesto importaría. Un anticucho no es un kebab, y más allá de la posibilidad significativa (I.e. un anticucho como kebab), la alusión refleja una relación que bajo respecto alguno se daría desde “Martita” (el sujeto a partir del cual se trabaja en esa descripción). En algún sentido, pareciera que el desfase indicara, entonces, que se escribe para otro que nada tiene que ver con el individuo desde quien se teoriza. En esa misma posibilidad, entonces, se aprehende desde una perspectiva ajena a la de quien se *etnografía*. En términos epistemológicos, la significación que se elucida se gestualiza fuera de la práctica que constituye ese sentido, y así cabe preguntar si resulta legítima esa instanciación.

Se sostendrá que no. Y el esfuerzo que sigue busca justificar ese no.

De la cuestión metodológica

Durante catorce años (de manera más o menos ininterrumpida) he trabajado en tres poblaciones de la comuna de Puente Alto (en adelante la “Población”). Antes, lo había hecho, haciendo clases en el internado de la Sociedad Protectora de la Infancia situado en la misma comuna. Específicamente, comencé como voluntario del movimiento de Schönstatt, sin embargo, ese alero no fue muy feliz y al poco andar decidí aventurarme solo en las poblaciones, haciendo trabajo de noche. El eje siempre ha sido la posibilidad cierta de generar condiciones que permitan la contención de adictos al tolueno, neoprén y bencina.

El “más o menos ininterrumpida” dice relación con que durante este tiempo he pasado períodos estudiando y trabajando en Europa y en Medio Oriente. Ello no ha impedido que la relación existente se mantenga. No sólo por la ayuda que brinda la tecnología, sino porque muchos de los jóvenes que he conocido son *europesos*, y a muchos de ellos, los he ido a ver a la cárcel en Alemania e Inglaterra; y con algunos me he encontrado caminando por Copenhague o La Haya. Soy, de hecho, padrino de bautismo de dos niñas. He participado como apoderado escolar de varios niños. He asistido a innumerables audiencias de formalización y procedimientos penales. He apoderado causas civiles, he visto morir

personas desagradadas en medio de una calle a las cuatro de la tarde, he estado en medio de *mexicanas, quitadas*, asaltos. Atiendo un puesto de feria los días sábado en un *colero*, soy socio de un negocio de completos y papas fritas: la enumeración anterior no intenta generar un halo, sino justificar la cercanía que se asevera. Yo jamás diría “kebab” por “anticucho”.

Mis notas siempre han tenido que ver con el punto epistemológico que entiendo crucial en el modo cómo se aprehende la realidad social, sobre todo, porque en poblaciones esa realidad que se asume como intersubjetiva es por definición ajena.

La cuestión estadística: el anticucho como kebab

En estos catorce años no he conocido a nadie que haya salido del colegio de manera formal. Nunca he sabido de alguien que haya votado. Muchos de los jóvenes que conozco, o casi todos, tienen en su extracto de filiación más de una anotación. No tienen octavo básico, y todos cuentan con licencia de conducir. Actualmente, muchos de ellos trafican drogas y sustancias ilegales, y han generado mecanismos sofisticados de lavado de activos, en los que las instituciones bancarias formales hacen de justificación. Muchos de ellos, hoy, tienen autos cuyo valor superan los veinte millones de pesos, y todos ellos, pueden mantener una conversación más o menos informal y superficial en sueco. Todos son titulares, de manera directa o indirecta, de viviendas sociales, y muchos de ellos, además, son dueños de un inmueble situado fuera de la población. Todas las familias de las que forman parte tienen un buen puntaje en la *ficha CAS*, y de preguntárseles, todos dirían que *están muy agradecidos del gobierno* de manera emotiva y mecánica. No conozco a nadie de sexo masculino que no sea reincidente, y pese a ser deportados de Europa, lo vuelven a intentar, y muchas veces con éxito. Algunos de ellos han emprendido negocios formales, que financian de manera irregular.

Desde la estadística: todos tienen un certificado de cuarto medio cuando no lo tienen. Todos aparecen con un ingreso familiar inferior que permite la calificación de indigencia (Viz. FONASA A), cuando tienen, de hecho, un ingreso muy superior al correspondiente a la clase media de Santiago. Hay algunos que debiendo hacer cinco años de cárcel, terminan haciendo dos. Porque, en algún momento, alguien tiene que digitar cinco, y ese cinco se puede digitar en cualquier momento. Muchos de ellos, en esta población, son amigos de los carabineros

que los vigilan. Muchos de quienes conozco tienen un segundo inmueble en la playa. Un terreno comprado en una toma, en el que erigen una segunda vivienda.

Todos los jóvenes que he conocido son padres, y su paternidad se instancia, entre ellos, de manera coincidente. El año 2015 murió un niño recién nacido en la maternidad del Sótero del Río, hijo de una pareja conocida de una de las poblaciones. El médico culpó a la madre. Lo hizo delante de mí. Con su madre llorando y su hijo muerto en brazos. Hubo una pelea, amenazas ciertas de muerte en la maternidad. A partir de entonces, las madres se *mejoran* en clínicas privadas, y si bien son clínicas privadas, la expresión *mejorarse* no ha perdido densidad.

Y una ilustración final. En un primer momento los *europeos* viajaban a Fiumicino o Heathrow, jamás a Barajas o Charles de Gaulle ni menos a Rhein-Main-Flughafen. Y la manera cómo adquirían los pasajes era la siguiente: existía un grupo del que nadie tenía más referencias que un email. Se pensaba que eran brasileños y que tenían asiento en España. Se les escribía un mensaje, se transfería un monto equivalente a la mitad del pasaje por Western Union. Luego, ese grupo dentro de dos o tres horas enviaba el pasaje, el código de reserva y su confirmación. En tal sentido, el primer mensaje era siempre remitido desde el Aeropuerto de Pudahuel y uno podía ver a las familias y al *europeo* expectantes paseándose y esperando el visto bueno. El pasaje era en primera clase. Fácticamente, el procedimiento consistía en que, contra el depósito, ese grupo robaba tarjetas de crédito y contra ella se debitaba el precio de compra. De ahí, que no existía mucho tiempo para viajar, y toda la operatoria debía verificarse de manera rápida. Todos los jóvenes que conozco de las poblaciones han ido a Europa muchas más veces que el promedio de las personas que conozco que viven fuera de la población.

La consistencia, en definitiva, del dato estadístico, en este caso, no puede agotar su valor de verdad en la logicidad aislada de un guarismo, sin que existan, explicitados, mecanismos de garantía y referencia entre ese dato y la realidad a la que se alude: Viz. ¿Cuál es el monto de su ingreso familiar? ¿Qué nivel educacional tienen? ¿Cuántas personas viven en esta casa? Desde la población, la pregunta es siempre advertida como una amenaza. De ahí, que se responda lo que se quiere escuchar, y que ello implique que la sociología que se hace resulte más próxima con las categorías de quien analiza que con la realidad que se identifica. El

punto, sin embargo, es más complejo que el solo desfase. Hay una intención decidida por manipular las respuestas y funcionalizarlas en pos de un interés que intenciona mantener a raya o lejos al aparato estadual y su andamiaje asistencial. En ese sentido, es muy probable que a Clara Han —la investigadora del trabajo citado más arriba— los habitantes de la población *etnografiada* le hayan dicho que sí, que así se dice, cuando ella preguntaba qué era eso aludiendo a los anticuchos y comparándolos con Kebabs. Y es muy probable que así haya sido respecto de todas las preguntas que ella formulaba. Si en todos esos meses no fue capaz de entender que un anticucho no es un kebab, ello permite justificar la inducción.

De la cohesión, la desigualdad y su condición semántica

Un primer ejemplo: la expresión *doméstico*

En un primer momento, la fuerza normativa de la expresión *doméstico* era transversal en las tres poblaciones. Ladrones, traficantes, *angustiados* y *hueones* no robaban en la población. La *domesticidad* se erigía no ya solo en una norma de trato social con base más o menos heterónoma, sino en una máxima convencional cuya sanción era siempre cursada de manera colectiva: *con palos y fierros*. Y, por su revés, quien así procedía en La Pintana o hacia el oriente o en las villas nuevas colindantes no recibía ningún tipo de reproche.

Eso cambia con el explosivo aumento del tráfico. Y la modificación cultural resulta funcional al traficante. Él, ahora, es quien establece los límites. Quien roba en la población no lo hace ya en territorios delimitados, y quienes son *cogoteados*, en la mayoría de los casos por adictos a la pasta base, recurren al traficante para recuperar sus especies con éxito. El tráfico ha transformado a la población en un mundo *Austiniano* (Austin, 1879) por definición, en el que la regla solo es regla si emana del soberano siendo retórico añadir que, si tiene tal origen, lleva ínsita una sanción corporal que comienza con disparos en las extremidades inferiores.

El ejemplo pretende ilustrar un elemento determinante en la forma como la normatividad afinca su fuerza representativa en la Población, y ello evidenciaría el valor de verdad de tres tesis que se avanzan; las primeras dos, descriptivas, y la tercera, normativa. Primero. El concepto de conflicto y cohesión social son fijados desde fuera de la Población y funcionales a lo “fuera” de la Población. Segundo. La estratificación social (Tumin 1948) y económica padecida por las personas de la Población fue traducida a comunicación interna, de modo tal que la suerte de brecha que antes era intencionada desde fuera ahora es reforzada desde

dentro. En tal sentido, la estratificación social causó una clausura (Luhmann, 2007) del sistema de comunicaciones y dinámicas comunitarias al interior de la Población que actualmente solo resulta irritable (Luhmann, 2007). Tercero. Se hace necesario cuasi-ontologizar un concepto de desigualdad ligado a la dignidad y al bloque de constitucionalidad sedimentado (Berger & Luckmann, 1968) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trabajar la sociología de la iniquidad desde allí.

De la primera tesis: sobre el conflicto y la cohesión social

Resulta un lugar común bastante enojoso —en lo personal— la importancia que se sostiene habrían tenido las poblaciones y los pobladores al tiempo de resistir a la dictadura. En muchas de esas veces, se traen a colación citas de pobladores como si en ellas eclosionara la filosofía política y el sindicalismo. Lo que se resiste tiene que ver con la importancia atribuida y su abrupta relegación a lugares como las casas Copeva, Bajos de Mena o la creación de Tiempo Joven y Santiago Uno en el contexto democrático. Ello demuestra, en definitiva, que más que importancia, las poblaciones y los pobladores resultaron funcionales a la transición y sus operadores, verdad que obliga a repensar el interés que existe en quien avanza o defiende conceptos como cohesión social.

En lo *doméstico* se asoma la relatividad del concepto de conflicto y cohesión. En lo *doméstico*, la Población no recurre —nunca lo he visto— al sistema de policía ni de adjudicación estadual para erigir y efectuar decisiones coactivas. Lo *doméstico*, en tal sentido, importa una ruptura con el contrato social (Rousseau, 1762) por el que se entrega al Estado el monopolio de la fuerza; y a su vez, implica una clausura, de forma tal, que las justificaciones en las que esas reacciones hincan tienen que ver con significaciones exclusivamente comunitarias. I.e. robar en La Pintana (pese a que queda a 350 metros) es una cuestión legítima. En ese contexto, cualquier intento por acoplar estructuralmente (Luhmann, 2007) la gramática y relaciones societales de la Población a un todo colindante falla. Desde dentro, la frontera geográfica (dada por la carretera a tajo abierto al sur, y por un conjunto de pilares de hormigón armado que sostienen el metro) escinde a la Población del resto de Santiago. Lo *doméstico*, por ejemplo, fractura la retribución penal, y erosiona las bases que justifican cualquier otro fin de la pena. Si la política pública exige intersubjetividad para su legitimación y despliegue, con mayor razón la punitiva, sin que la misma, en la

Población tenga racionalidad. De ahí, por ejemplo, que en la Población el reproche penal sancionatorio sea traducido como una eventualidad que no mancha la moralidad del sujeto, y que, por el contrario, genera despliegues abnegados y empáticos en la Población. Así, por ejemplo, resulta un hecho cierto, como las familias hacen *pollas* y *números* para comprar las encomiendas de los familiares presos por robos con intimidación, u homicidios calificados.

Lo *doméstico* signa no solo una praxis diferente, sino que da cuenta de una dimensión epistémica clausurada. Es decir, la población ha generado un sistema de justificaciones cuyo contenido no se construye en coherencia con los sistemas de significaciones no sistémicos. En ese sentido, las nociones de cohesión social y conflicto no pueden ser construidas desde dentro, porque no resultan significativas. No hay ninguna intención por alcanzar algún tipo de cohesión, y lo que es observado como conflictivo desde fuera, se encuentra internalizado en la Población como una variable más de la que no se sigue reproche. Por lo tanto, la política pública *cohesiva* es siempre unilateral. La noción de conflicto, por lo mismo, resulta funcional a esa posibilidad e intención unilateral. En catorce años trabajando en la Población nunca he escuchado a alguien hablar de los hermanos Vergara Toledo, o que alguien pueda discernir efectivamente si Palma Salamanca trabaja o no en Megavisión animando un matinal. Incluso, el trazado de la carretera al sur no fue un punto que haya generado resistencia. Sin duda que desde el sistema estadual, por ejemplo, el tráfico de drogas es observado como una conducta cuya justificación estribaría en situaciones de conflicto social. Sin embargo, desde la Población, la retribución penal es internalizada como una variable e incorporada en la biografía. De ahí, por ejemplo, que *el hacer años* no se viva ni perciba como una interrupción en la vida de los condenados: ello justificaría, me parece, la puntualidad de las *conyugales* y las *encomiendas* (tres veces a la semana).

Se podría argumentar que lo anterior aún de ser cierto quedaría circunscrito a la dimensión punitiva. Que sí existirían otras dimensiones en el que la Población de manera intensiva se relaciona con el Derecho, el Estado, y su política y un sinnúmero de sistemas de comunicaciones “fuera-de-la-Población”. Y que esa dinámica societal requiere ser construida o revisada desde una gramática cohesiva.

Me parece que no. Ese sinnúmero aludido es más una ilusión percibida desde el lado de afuera de la Población. Otro ejemplo, para reforzar el punto: los colegios particulares

subvencionados. En la Población, durante este tiempo, he tenido estrecha relación con dos colegios particulares subvencionados, que aglutinan a la mayor cantidad de alumnos en la Población. Existen padres que envían a sus hijos a instituciones que están fuera de la Población, sin embargo, son los menos. Todos los miércoles de manera más o menos regular, organizo y desarrollo un taller de reforzamiento educacional. En varias oportunidades he tenido que ir a uno de estos colegios a fin de intermediar por algún alumno suspendido (porque las expulsiones al estar indexadas a subvenciones rara vez ocurren), o al que hay que inscribir; o acompañe a don Raúl —antiguo habitante de la población— a fin de saber de las circunstancias de algún robo acaecido y así intuir quién en la Población pudiera estar ligado al hecho, no ya para denunciarlo sino para instarlo a devolver el material robado: a veces funciona.

A casi un kilómetro y medio de uno de estos colegios existe otro, particular, que recibe a los hijos de los matrimonios y familias que han adquirido casas en loteos colindantes. Se trata de conjuntos habitacionales visiblemente mejores. Condominios cerrados, con servicios de guardia las veinticuatro horas del día. La distancia, de nuevo, entre ambos colegios no debe ser más allá de un kilómetro y medio. Es cierto que se trata de alumnos totalmente diferentes, y sí, los resultados son diametralmente opuestos. Mientras en el de la Población hay alumnos que en la PSU ni siquiera alcanzan los trescientos puntos, y en el SIMCE alcanzan puntajes muy inferiores al promedio de Puente Alto, en el particular, hay quienes obtienen ochocientos puntos (Demre, 2018). La pregunta es por qué. Y esa respuesta se logra elucidar cuando se entiende que la Población rompió con el sistema de comunicaciones global. Y esa fractura es total. Desde la Población el sistema educativo entendido como uno que posibilita movilidad social es juzgado como irrelevante. El problema no gira en torno a las variables que determinan los procesos de aprendizaje (I.e. si los profesores en una u otra institución están más o menos motivados o si reciben un sueldo mejor o peor, o si las condiciones de infraestructuras son adecuadas o no), sino al conjunto de justificaciones que permiten aprehender la realidad. Esa sería la razón del desempeño escolar. El punto es aseverado asertivamente en la Población. *¿Para qué ir a la universidad? ¿Para qué terminar el colegio?* Y esa pregunta se formula a bordo de un BMW de más de veinte millones de pesos por alguien cuya edad no supera los veinticinco años.

Ahora bien, si la descripción anterior se juzga normativamente, el punto resulta ser estructural. Pero solo en ese caso.

De la segunda tesis: La estratificación social y económica padecida por las personas de la Población generó en los hijos una clausura (Luhmann, 2007) de sus sistemas de comunicación y significaciones (Luhmann, 2007).

En un comienzo, mi trabajo en la Población se centró en tres familias. Una de ellas era la de la Sra. Paloma. Ella es viuda, egresada de cuarto medio, tiene siete hijos, y es dueña de una casa en la población adquirida a través de una política social. Su casa no tenía piso, las ventanas no tenían vidrio, y sus hijos dormían en el suelo en colchones y frazadas. La Sra. Paloma trabajaba limpiando y haciendo aseo en la Clínica Santa María. Dos turnos diarios para poder obtener ciento ochenta mil pesos mensuales. Ni siquiera hacía el mínimo, porque los turnos estaban estructurados de tal forma, que ninguno de ellos alcanzaba las ocho horas. Laboraba de lunes a sábado. Ninguno de sus hijos alcanzó séptimo básico. Hubo veces, en que la comida que compartimos (y que yo compraba) fue la única que habían tenido en el día. La Sra. Paloma llegaba todos los días cansada y se quejaba del horario. En su casa había hambre. *El hambre era alguien que no se iba.* Y la plata no alcanzaba. Uno de sus hijos mayores comenzó a robar. Él asumió la tarea de proveedor. A su vez, comenzó con una adicción al neoprén que se mantiene hasta el día de hoy. Hace un par de meses, la Sra. Paloma fue a Buenos Aires. Se quedó por un mes en la casa de una amiga. Todos los gastos pagados. Sus hijos financiaron el traslado. No hay en ninguno de ellos la intención de desarrollar un oficio asalariado, pese a que algunos de ellos son distintivamente capaces en carpintería y albañilería. Uno de ellos viaja de manera frecuente al lago Rapel. Tiene una moto de agua, una SUV y un BMW cabriolet. Algunos de ellos hablan sueco e inglés, y esos mismos, son deudores de créditos hipotecarios que sirven de manera puntual. Su nivel de endeudamiento es varias veces infraccional de las reglas de Basilea (Basel Committee, 2017), y aun así, los créditos fueron aprobados y signados los respectivos contratos de mutuo.

En esa descripción, más allá de la narrativa de Manuel Rojas o Carlos Droguett que pudiera resultar evocada, el punto sobre el que se llama la atención es la dimensión epistémica que incide en la representación de correctitud/incorrectitud (Luhmann, 2007). Lo anterior debe ser entendido en consistencia con la paradoja del parágrafo 201 de las Investigaciones

Filosóficas de Wittgenstein (Wittgenstein, 1953). Si toda regla se construye desde una conducta que la funda y que determina su correctitud, la misma conducta puede desplegarse en el sentido inverso. En último término, la regla justifica su normatividad en la praxis que la funda. Y esa práctica es contingente al sistema de significaciones en el que ella se origina. La estratificación social que desplaza a la Sra. Paloma a condiciones de explotación bajo sistemas nominalmente legales difumina y vuelve absurda la distinción correctitud/incorrectitud. Ello justificaría cómo es que la infaccionalidad del proceder de los hijos se verifica sin mayores ambages ni mimetizaciones, y que tal sea imposible de reconducir normativamente a estándares extra-sistémicos, imponiéndose en la representación de ellos la utilidad como criterio de validez. Trabajar, en todos ellos, simboliza una dramática que traspasa el hecho material de la subyugación. Ese punto es transversal en todos los hermanos.

Son ellos los que organizan los fuegos artificiales en la Población para año nuevo. O quienes contratan un DJ para fiestas patrias. O quienes financian desde su erario los gastos mortuorios de algún habitante de la Población cuando sus familiares no disponen de los fondos necesarios. Uno de ellos, de hecho, lleva dos veces al año, a parte importante de la Población al lago Rapel, de paseo. Acampan durante un fin de semana, y de vuelta. Él además, siendo bien perito en realizar construcciones menores, es dueño de una batería de herramientas de pequeño y gran talle, que presta a otros habitantes de la población cuando ello es necesario.

El tráfico se ha vuelto la mejor política pública estadual. Nunca, en estos catorce años, el poder adquisitivo había sido mejor. Yo ya no sé de personas que pasan hambre —antes era recurrente—, nunca más he apoderado a habitantes de la Población en causas laborales por juicios seguidos en contra de empleadores. El modo cómo el Estado reacciona frente al tráfico ilícito puede ser descrito, de hecho, como una omisión impropia (Mañalich, 2014) —desde la dogmática penal—. La externalidad de ese “dejar hacer” ha sido el desplazamiento de cualquier expectativa “correcta”; y a un costo elevado. Los ajustes de cuenta son recurrentes. Hace menos de dos semanas (de la fecha de escritura de este ensayo) a plena luz de día, dos autos, percutieron veinte o treinta disparos en contra de un block. Una banda rival de una población vecina. En ese edificio había niños jugando. Se trata una omisión dolosa, porque la lógica del intercambio ilícito se despliega, de nuevo, sin ningún tipo de mimetizaciones. Al contrario, la ostentación en la Población pareciera ser un gesto que no tiene ya al *patrón*

o al “fuera-de-la-Población” como destinatario, sino al vecino, de modo, que ese gesto estructura y coloca a quien así procede en un segmento dentro de la pirámide comunitaria.

Si lo que importa es la utilidad como estándar normativo, se rompe cualquier expectativa relacional (Luhmann, 2007) entre la Población y los demás sistemas de significados y comunicaciones (Luhmann, 2007), y ello como un corolario natural. Así, por ejemplo, los nietos y nietas de la Sra. Paloma, normalizan condiciones que son “fuera-de-la-población” inexplicables, limitando de esa manera su socialización. Un ejemplo: intentando aperturar el mundo y sus significaciones, propuse a uno de los hijos de la Sra. Paloma y a su pareja, matricular a la hija de ellos, quien tenía en ese tiempo, ocho años, en una escuela de ballet situada en el sector oriente de Santiago. En un primer momento, la idea fue un éxito. La niña disfrutaba de las clases, la ropa, el tutú rosado y las zapatillas de ejercicio generaron en el block algo así como una neurosis por imitar el gesto. Las niñas de edad equivalente bailaban intuyendo secuencias técnicas. Sin embargo, al mes de clases se impuso un obstáculo. X — así llamaremos a la hija— no quería sacarse los aros al realizar la clase. La profesora insistía sobre el particular, sobre todo, porque teniendo el cabello largo, y habiendo otras niñas con cabello largo, ello podría generar algún tipo de accidente. Los aros son de oro, y su uso es característico entre todas las nietas de la Sra. Paloma, así como en las nueras de la Sra. Paloma. Estarían hechos de oro traído de Europa —y no precisamente, importado—. La madre de X que la acompañaba a clases no era capaz de zanjar la discusión de un modo ligero. La negativa despertó en la profesora cierta curiosidad y resistencia por el contexto de X y su madre, cuestiones que en ese momento tuve que revelar, forzándose la desvinculación.

Lo anterior se ve confirmado por la institucionalización que ha adquirido la voz *hueón* en la Población. Sobre este punto, me parece, tuve la oportunidad de vivir su sedimentación (Berger & Luckmann, 1968) en alguien que me era y sigue siendo muy cercano. Yo soy padrino de bautismo de su hija, y somos muy amigos. Cuando nos conocimos, él vivía en una caleta en el centro de Puente Alto, y de las primeras cosas que me preguntó fue qué se necesitaba para hacer el servicio militar. Me llamó la atención que él no consumía neoprén, y tampoco daba la impresión de *mechear* en el supermercado cercano. Él es el hermano mayor de otros cuatro. En esa oportunidad no medié para su ingreso a la institución armada, pero pude conseguirle un oficio más o menos estable. Con el tiempo, se especializó en la factura e instalación de rejas y mallas en balcones. Intentó asociarse con un tercero quien lo

estafó y a quien demandamos en sede laboral. En ese procedimiento asistí como testigo. Posteriormente, él consiguió otro trabajo, y estaba a cargo de una bodega de una empresa proveedora de suministros de construcción. Sus hermanos comenzaron a traficar en la población, y él se mantuvo fuera por un tiempo. Con su pareja tuvieron una hija y una segunda hija —yo soy padrino de la segunda—. Ellos aún viven en un block de la Población, y un día pude asistir a una discusión entre ellos. Ella lo trataba de *entero hueón*. Y él intentaba defenderse argumentalmente. Ella desde un segundo piso, y él en la vereda. Como si hubiese sido un ágora. Los vecinos, todos escuchando desde las ventanas, sin necesariamente asomarse a ellas. Ella, *soi entero hueón*. Y él, entonces, toma una piedra y se la lanza. Nada sucede o nada muy significativo. A los meses, él ya traficaba, y luego pasó temporadas en Europa. La honradez se encuentra estrechamente asociada con la subyugación. Con el salir de la Población a las seis de la mañana y *volver con el lomo partido a las ocho de la noche*. Y así por cinco días o seis en la semana, haciendo un sueldo mensual que puede llegar a ser la octava parte de lo que gana un traficante. Optar por la honradez —utilizando la expresión en su sentido descriptivo más que axiológico— es ser *entero hueón*. Sobre todo, porque las hijas de él tendrían hoy, al menos evaluativamente, una mucho mejor vida que la que él les daba siendo un asalariado, y porque el riesgo de sanción estadual se encuentra muy desplazado.

En ese contexto, tiene total asidero la forma en cómo Kripke reinterpreta al segundo Wittgenstein (Kripke, 1982). Un individuo solo puede seguir una regla y entender su contenido en tanto miembro de una comunidad, desde el momento que es esa socialización la que determina la manera en cómo esa regla se instancia.

Lo que se observa y he podido percibir es que sobre todo las condiciones laborales forzaron, en un primer momento, una ruptura con el sentido compartido. Que luego es incorporada, por sus externalidades, en la biografía de los hijos de la Sra. Paloma. Y esa ruptura que ahora es total, refuerza la autonomía de la Población. Hoy, a diferencia de lo que sucedía hace diez años, es muy difícil encontrar a mujeres que trabajen en empresas *tercerizadoras* de servicios de limpieza. Y por el contrario, existe un sesgo respecto de quienes así laboran.

Y un paréntesis. La clausura (Luhmann, 2007) de la Población como sistema de significaciones y comunicaciones (Luhmann, 2007), se sostiene, es total. No hay mayores

dinámicas sociales entre Poblaciones. Y lo que se describe adquiere formas y maneras diversas, por ejemplo, en poblaciones del norte de Santiago. Es decir, no resultaría posible construir un concepto de “poblador”, ni se puede entender que la común denominación de “población” bastaría para horizontalizar la categoría.

Un ejemplo.

En diciembre de 2016 yo vivía en La Haya, Holanda. Recibí un audio de Whatsapp en el que se me contaba que A había sido aprehendida junto a su pareja y a otras dos personas que conozco, en las *Bodegas de Quilicura*. Luego me remitieron un vídeo en el que se podía ver una pelea de proporciones entre carabineros, guardias del lugar, vendedores de la tienda Nike y quienes me contactaban. Esa pelea terminó con la aprehensión de las personas a quienes conozco, en una audiencia de control de detención y formalización. Los imputados obtuvieron una suspensión condicional de la pena. El punto es que carabineros de Quilicura, al tiempo de detener, requisó de estas personas las llaves de los autos en que se movilizaban. Hurtaron todo lo que había en los vehículos y utilizaron uno de ellos chocándolo y depositándolo en ese estado en el corral municipal, y luego, denunciaban cada tres o cuatro semanas, a estas personas por infracciones leves, como por ejemplo, beber alcohol en la vía pública en Quilicura (siendo ellos de Puente Alto). Entendiendo que la situación era claramente atentatoria de normas fundamentales, abrí un procedimiento infraccional en el Juzgado de Policía Local de Quilicura y tuve una audiencia con el magistrado. A ese proceso concurrió carabineros, quien en una audiencia de cinco minutos se contradijeron al menos siete veces, mal identificaron a los infractores, y se notaba, en sus declaraciones, haber sido instruidos para hacerlo. Resulta un hecho conocido que los carabineros de Quilicura tienen un comportamiento abiertamente infraccional, en el que el aparato judicial -al menos, de Policía Local- les resulta funcional. Prueba de ello, por ejemplo, es que, datando el juicio del año 2016, aún no se notifique la sentencia a esta parte.

Lo anterior implica que, en Quilicura, en sectores como *la Parinacota*, Pascual Gambino o El Mañío, carabineros ha institucionalizado un rol que difiere de manera ostensible de aquél que tiene en la Población, y en otros sectores de Santiago. Y esa imagen adensada (Berger & Luckmann, 1968) dice directa relación con la manera como lo *poblador* se instancia en diferentes sectores de Santiago. No es lo mismo, la manera en cómo se es *poblador* en

sectores de Puente Alto que en Quilicura. En ese sentido, se podría hipotetizar, que ya no es posible hablar propiamente tal de *pobladores* sin adjetivar su situación. Ello rompe, además, con cualquier intento por generar un concepto de clase en oposición a sistemas dominantes, o por relación a los propietarios de los medios de producción (Marx, 1883). La clausura (Luhmann, 2007) de la Población implica entender que las relaciones y significaciones de ésta no buscan consistencia con las que se proponen desde fuera (Luhmann, 2007).

Tercera tesis. La desigualdad exige una sociología normativa²

Es cierto que la propuesta pareciera un oxímoron, y que su desarrollo escaparía al tema de la presente conferencia. Sin embargo, todo trabajo participativo en poblaciones y en contextos de desigualdad, generaría un desobedecimiento —al menos como interrogación en quien así procede— al mandato de neutralidad teórica. Ello implica en el participante una comprensión y justificación de las bases normativas de lo que sería la correcta socialidad sin incurrir en ontologizaciones fanáticas e irracionales. Y aseverar, entonces, que ese contenido, resulta más o menos, inamovible. La empiria indica que, de aceptarse su movilidad, ese movimiento es siempre *contra el pobre*, de ahí de la necesidad de su quasi-ontologización, en un sentido parecido a lo que a hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Un ejemplo de ese gesto es la sentencia dictada en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (CIDH, 2009), en el que, a partir del sistema de protección interamericano, se fractura, desde fuera de las relaciones y significaciones de una comunidad, ese conjunto de contenidos.

Un ejemplo: El venustero y su práctica se encuentra regulada en Chile a través de un decreto supremo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En él, se establecen una serie de condiciones y requisitos, así como de exigencias para que tales tengan lugar. Sin embargo, su praxis difiere de manera radical de la descripción legal. La *conyugal* se erige en la Población en una suerte de prueba y condición de posibilidad para la mujer. La relación sexual, generalmente, tiene lugar, dependiendo del penal, en colchones o *camaros*, aislados con frazadas, en un rincón del gimnasio o del espacio destinado a la visita. Ese lugar es utilizado por los internos alternada y secuencialmente. Gendarmería lo sabe. En Valparaíso,

² Sobre la posibilidad normativa en el contexto de la teoría de sistemas, véase: Miranda Rebeco, P. (2012). *La precomprensión de lo humano en la sociología de Luhmann: Raíces antropológicas del antihumanismo luhmaniano*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

de hecho, hubo un campeonato de fútbol cuyo premio era la conyugal (ANIN, 2015). Que la Población imponga a una mujer, como condición para ser mujer de esa Población, el cumplimiento estricto de ciertas formalidades, como la conyugal, puede ser un hecho observado de manera neutral; sin embargo, el que el Estado utilice a la mujer pobre como un medio de pacificación carcelaria demanda una sociología normativa que describa el horror como horror.

De la clausura (Luhmann, 2007) del estrato y el rol de la cárcel y Tiempo Joven

Contradiciéndome de manera flagrante con lo expuesto, si he podido anotar cómo es que la experiencia de la cárcel y, entre los centros penitenciarios para menores, de Tiempo Joven generan una conciencia de grupo que podría sostenerse es horizontal, y que tal, además, se erige en oposición a un otro abstracto y externo: esa tensión implica conflicto y podría ser abordada desde una pretensión cohesiva.

La dinámica carcelaria, además, implica de manera intensiva una relación entre el Derecho (como sistema de comunicaciones), y la Población. Habría una especie de juridificación (Teubner, 1987) del sistema poblacional por parte de lo jurídico, sin que en esa dimensión la adjetivación de la Población sea relevante. Al menos, así fue hasta hace algunos años, en que el tráfico, nuevamente permeó las relaciones de los internos. En un primer momento, ello significó una división profunda en los penales, entre quienes habían sido condenados por delitos de tráfico, y los que lo habían sido por infracciones contra la propiedad o la vida. La escisión era profunda e insalvable.

Muchas veces fui a visita a la expenitenciaría, y quien conocía me contaba que había tenido que *ponerse la corbata*. Que las relaciones al interior eran muy complejas, y estando solo, la única vía *era servir al Señor*.

La experiencia de la cárcel y de Tiempo Joven incide de manera determinante en el grupo afectivo de la persona afectada por la medida de privación de libertad. Marca los tiempos, el vocabulario, la tensión de los días, el *fiado* en el negocio de la esquina. Es muy común que las cuentas de *fiado* aumenten en el día anterior a la visita. Ello ordena las relaciones de los propios comerciantes y sus obligaciones de pago y provisión.

Hasta ahí, me parece, el concepto de cohesión y conflicto resultan útiles. Sin embargo, la profundización de la influencia que ha tenido el tráfico en las poblaciones, también se ha

traslado a los recintos carcelarios. Y éstos, ahora se encuentran divididos. Es muy difícil encontrar a alguien de Puente Alto en Colina II, y así, es muy difícil que alguien de Quilicura esté en San Miguel o Puente Alto. Hay internos que piden su traslado, o que son castigados, sin embargo, en la mayoría de los casos, el rematado elige “su” cárcel, y no ya por razones de cercanía con sus familiares, sino porque el tráfico ha vuelto antagonistas a quienes antes no tenían ningún tipo de relación. Se debe considerar, además, que, en muchos casos, los traficantes presos, controlan desde los penales la dinámica de intercambio que sucede en las Poblaciones, y toman decisiones que otros ejecutan.

Esa realidad, es simplemente tolerada por el Estado.

Lo anterior ha significado que allí donde era posible construir un sujeto plural, ahora ya resulta imposible, favoreciendo esa dinámica, la fuerza centrípeta de la Población.

Finalmente, sobre la desigualdad

¿Existe entonces menos desigualdad? ¿Cómo igualar/desigualar comunidades entre las que no existe ningún elemento en común salvo la intención por cotejarlas? ¿Qué es hoy la desigualdad? ¿Cómo definirla? ¿Qué vereda normativa utilizar? ¿Cómo abordar teóricamente el aumento explosivo del ingreso en la Población? ¿Qué significa socialmente que el ingreso familiar de un núcleo familiar y de una comunidad aumente exponencialmente de manera relativa? ¿Resulta legítima la pregunta por la desigualdad? ¿Qué funcionaliza su exploración? Si la desigualdad hoy supone cuestionar y eventualmente instar por penalizar la actividad ilícita de las Poblaciones asociada al tráfico, ¿no se vuelve la desigualdad función de la intención solapada por hacer de la Sra. Paloma un alguien invisible a quien explotar? ¿Para qué desigualar/igualar? ¿Quién podría desigualar/igualar en términos descriptivos? Y, ¿por qué desigualar/igualar?

Conclusión.

A partir del trabajo participante en tres poblaciones de una comuna del sur de Santiago se ha intentado avanzar tres tesis acerca de la forma en cómo se debe instanciar una investigación sobre la realidad poblacional, ejemplificando cómo, incluso etnografía intentada desplegar de manera correcta, adopta una perspectiva equivocada al no desplazar, en ese trabajo, una

forma de entender la realidad “fuera-de-la-población”. Del mismo modo, se ha intentado evidenciar, cómo es que la Población, por sus dinámicas, y por la externalidad social, se ha autonomizado como un sistema de relaciones y significaciones, sin que la posibilidad cierta de trabajar conceptos como cohesión y conflicto resulten ya coherentes. Finalmente, se ha buscado ilustrar cómo es que la Población ha generado mecanismos que acentúan la fuerza centrípeta de ella, limitando la posibilidad de socialización de sus integrantes sobre la base de un contexto social mayor, y clausurando con fuerza su apertura. En ese sentido, cualquier intervención debiera asumir un rol correctivo desde una correctitud quasi-ontologizada, al modo como lo despliega la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del marco de protección interamericano.

Bibliografía

- Análisis de información nacional, ANIN. (25, February 2015). Copa Conyugal: Con facilidades para el sexo incentivan el deporte en Cárcel de Valparaíso. ANIN. Disponible en: <http://www.anin.cl/nota/1/4207/copa-conyugal-con-facilidades-para-sexo-incentivan-deporte-c%C3%A1rcel-valpara%C3%ADso>
- Austin, J. 1879, *Lectures on Jurisprudence, or The Philosophy of Positive Law*, two vols., R. Campbell (ed.), 4th edition, rev., London: John Murray; reprint, Bristol: Thoemmes Press, 2002.
- Basel III: international regulatory framework for banks. (n.d.). Retrieved April 15, 2019, disponible en <https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- Corte IDH, Caso González y otras (“Campo algodónero”) vs. México (sentencia, 16 de diciembre de 2009), excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas.
- DEMRE. Proceso de admisión 2018. (n.d.). Retrieved April 14, 2019, de: <https://resultadospsu.demre.cl/>
- Frege, G. (1948). Sense and Reference. *The Philosophical Review*, 57(3), 209. <https://doi.org/10.2307/2181485>
- Han, C. (2017). Experience: Being policed as condition of life. En D. Fassin (ed). *Writing the world of policing: the difference Ethnography makes*.
- Kripke, S. A. (1982). *Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition*. Boston, United States of America: Harvard University Press.
- Luhmann, N. (2007). *La sociedad de la sociedad*. Ciudad de México, México: Universidad Iberoamericana.
- Mañalich R, J.P. (2014). Omisión del garante e intervención delictivo: una reconstrucción desde la teoría de las normas. *Revista de derecho (Coquimbo)*, 21(2), 225-276. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000200007>
- Marx, K. (1990). *Capital: A Critique of Political Economy*. London, England: Penguin.
- Rousseau, J. J., & Gourevitch, V. (1997). *Rousseau: 'The Social Contract' and Other Later Political Writings*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Teubner, G. (1987). *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law*. Berlín, Alemania: De Gruyter.
- Tumin, M.N. (1968). *Social Stratification: Forms and Functions of Inequality (Foundations of Modern Sociology)*. Chicago, United States of America: Prentice Hall.

Tácticas y estrategias de integración y (auto) segregación en nuevos conjuntos de vivienda social. Reflexiones sobre las experiencias de construcción de comunidad post campamento en Chile

Christian Matus y Alvaro Ramoneda.

Pontificia Universidad Católica de Chile.

cumatus@uc.cl,

alvaro.ramoneda@gmail.com

Resumen

La presente ponencia busca aportar una mirada crítica sobre los procesos de construcción de barrio y comunidad en los nuevos conjuntos de vivienda dirigidos a familias provenientes de campamento, desarrollados por el Programa de Campamentos del MINVU. Esta se basa en los resultados de un estudio cualitativo de cuatro casos de nuevos barrios de radicación y relocalización. En este se implementaron entrevistas semi-estructuradas a pobladores/as provenientes y no provenientes de campamentos, focus group con habitantes de los nuevos conjuntos, recorridos con actores locales y mapeos participativos. Adicionalmente se revisaron dos estudios desarrollados por los autores, que plantean conceptos claves para orientar la reflexión sobre cómo mejorar la integración en los nuevos conjuntos. Los resultados permiten plantear que si bien existe un impacto positivo en la integración a nivel de vivienda y conexión con la ciudad se registra una baja en la vida comunitaria y vínculos barriales en los proyectos de relocalización, detectándose problemas de convivencia y prácticas de (auto) segregación entre vecinos. Se concluye que para abordar la problemática en los nuevos conjuntos de vivienda se debe potenciar el protagonismo de las y los pobladores en la gestión de su territorio y en la resolución de sus conflictos comunitarios.

Palabras clave: CAMPAMENTO – INTEGRACIÓN – ARRAIGO - SENTIDO DE COMUNIDAD - PARTICIPACIÓN

Introducción

La presente ponencia busca aportar una primera aproximación cualitativa al abordaje de los procesos de construcción de barrio y comunidad en los nuevos conjuntos de vivienda dirigidos a familias provenientes de campamento, desarrolladas como parte de la estrategia de intervención del Programa de Campamentos del MINVU. El análisis de los procesos de integración se basa en los resultados de la investigación “La vida después del campamento”³, desarrollado por la Dirección de Extensión y Servicios Externos (DESE), de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a partir de un llamado realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este estudio cualitativo de la experiencia de construcción barrial de cuatro conjuntos de vivienda para familias de campamentos se compara con los resultados y aprendizajes que plantean para el abordaje de la integración social barrial dos estudios previamente desarrollados por los autores. En primer lugar, el estudio “Vínculos socioespaciales en contextos de transformación urbana producida por catástrofes naturales”, en el contexto del Fondecyt N° 11121596, dirigido por el Dr. Héctor Berroeta. En segundo lugar, el estudio de investigación aplicada sobre la erradicación de la población Aurora en el contexto del conflicto del Puente Bicentenario en Concepción, desarrollado en el marco del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) entre 2014 y 2017.

A partir de estos aportes se desarrolla un análisis de las cuatro experiencias de generación de un nuevo entorno barrial en los conjuntos analizados, planteándose una primera reflexión que focaliza en la coexistencia de dinámicas de satisfacción y apego individual a la vivienda que conviven con el desarrollo de un débil tejido social y con prácticas que plantean la desarticulación de vínculos barriales y la generación de dinámicas de segregación entre diferentes grupos de familias que plantean interrogantes sobre la convivencia y cohesión social que se genera en los “nuevos barrios”.

1. Contextualización de la problemática: los asentamientos informales y su abordaje por la política pública en Chile y Latinoamérica

³ El estudio completo está disponible en <https://catalogo.minvu.cl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25016>

Los asentamientos populares surgen en Chile y Latinoamérica producto del acelerado proceso de urbanización que acontece entre las décadas del treinta y cincuenta del siglo XX (De Ramón, 1990). Como resultado de los procesos de migración del campo a la ciudad que se desarrollan en todo el continente, los sectores populares se apropian del espacio urbano de la periferia, estableciendo asentamientos informales o precarios, entendiendo estos como lugares conformados por viviendas y servicios inadecuados, no reconocidos y no incorporados a la ciudad (UN-Habitat, 2003), que forman parte de la denominada ciudad informal o ilegal (Hardoy y Satterthwaite, 1987).

Cabe señalar que en Latinoamérica los sectores populares siempre tuvieron un importante protagonismo en la construcción de ciudad a partir de prácticas espaciales contrapuestas al orden del espacio concebido (Lefebvre, 1991), propio de la planificación urbana. Así, el protagonismo popular se expresó en el uso y apropiación informal del espacio, dando pie a procesos de “producción social del habitat” (Romero, 2012) y desarrollo de un “urbanismo popular” (Conolly, 2013). Los sectores populares “construyeron ciudad” a través de diferentes estrategias de auto-producción de vivienda (Turner, 1977) y ocupación del espacio como las tomas de sitio, ocupaciones semi-legales e ilegales, aportando al proceso de urbanización de ciudades latinoamericanas como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Caracas, Lima, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de Chile.

En nuestro país, la expansión desenfrenada de la ciudad a partir de los treinta generó las condiciones para que surgieran habitantes de asentamientos precarios e informales, que se establecieron en “poblaciones callampas” (Espinoza, 1998), urbanizaciones precarias localizadas en terrenos cuya propiedad no era clara o correspondía a bienes nacionales de uso público, como las riberas de los ríos y canales de desagüe (De Ramón, 1990). Estos pobladores fueron los protagonistas de las primeras tomas de terrenos⁴, que se organizaron respondiendo al fuerte déficit de vivienda que existió en el Chile de los años sesenta en que más del 30 por ciento de las familias vivían en hogares considerados “irregulares”, sin normas sanitarias mínimas (CIDU, 1972). Las tomas posibilitaron el auge de los *pobladores como* movimiento urbano, que, a mediados del siglo XX, reclamó el derecho a la vivienda tomando

⁴ En primer lugar, la toma de Zañartu desarrollada en 1946, que da origen a la Legua Nueva (Garcés, 2002), y posteriormente la más conocida Toma de la Victoria (Cortés, 2014). Entre los cincuenta y setenta las tomas de terreno se multiplicarán especialmente en la zona sur capitalina, transformándose los pobladores en un organizado movimiento social (Garcés, 2002).

ilegalmente terrenos de la ciudad (Pérez, 2017). Posteriormente, en el contexto de Dictadura, los pobladores se transformaron en actores protagónicos de las jornadas de protesta nacional, liderando también procesos de asentamiento informal, a partir de tomas planificadas basadas en la auto-organización, siendo las más destacadas las tomas de los campamentos Silva Henríquez y Monseñor Fresno (Pérez, 1995).

En el mismo período los pobladores sufrieron las consecuencias de las primeras operaciones de relocalización forzada o erradicación en Santiago y Concepción (Morales, Levy, Aldunate & Rojas, 1990). La estrategia militar de erradicación de campamentos planteó un fuerte impacto social en los asentamientos de pobres urbanos afectando su nueva localización, el acceso al empleo; el incremento de los costos de traslado hacia y desde los lugares de trabajo; dificultades de acceso a la educación, salud y subsidios de la red social; y nuevas dimensiones de violencia e inseguridad que no existían en los campamentos (Rodríguez & Sugranyes, 2005). Las nuevas políticas urbanas inspiradas en principios neoliberales plantearon también la desregulación del mercado de suelo urbano (Sabattini, 2000) y una política social de vivienda en que el proceso de construcción se focalizaba en manos del sector privado con el Estado proporcionando subsidios sólo para los grupos de menores ingresos (Pérez, 2017). En ese marco los pobladores pasaron de ser visualizados como actores sociales revolucionarios (Castells, 1973) a ser vistos como agentes individuales receptores de subsidios para la adquisición de viviendas en el mercado privado (López-Morales, Flores & Orozco, 2018)

Siguiendo a Skewes (2005), las políticas de vivienda de la primera década de gobierno democrático, lejos de modificar esta situación dan continuidad a dicho modelo, fomentando el “éxodo masivo” desde los asentamientos irregulares a viviendas sociales, entendido como una transición hacia la modernidad. En ese marco, el paso del campamento a la vivienda social marcó la incorporación de los pobres urbanos a relaciones sociales mercantilizadas, dejando atrás su sociabilidad fundada en el valor de uso.

Posteriormente, ya en el dos mil, el fenómeno de los campamentos vuelve a emerger como un fenómeno relevante al diversificar sus patrones de desarrollo, visibilizándose nuevos asentamientos informales no sólo en Santiago, sino que también en regiones, en el contexto de una dinámica de relación diferente con la vivienda y la localización. Por un lado, como plantean Brain, Prieto & Sabatinni (2010), la experiencia de vivir en campamentos se sitúa

en una lógica de decisión que antes no existía. Se “elige vivir” en “campamentos” para mejorar la localización dentro de la ciudad y acceder a una vivienda formal en propiedad. Para Silva Lovera (2011) los campamentos de la primera década del nuevo siglo se caracterizarán por su marcada diferenciación geográfica, cultural y urbana, con grupos culturales longitudinalmente distribuidos y diferentes, que, si bien mantienen una concentración urbana fuertemente localizada en la capital, plantean una fuerte tendencia a diversificar su presencia en las metrópolis emergentes y en ciudades intermedias, capitales de región. Más contemporáneamente, para López-Morales, Flores & Orozco (2018), el incremento del número de hogares viviendo en campamentos en las principales ciudades chilenas tendrá que ver no sólo con un componente de hogares previamente allegados sino con familias que aumentan sus costos en gastos de vivienda y con una alta tasa de población migrante latinoamericana planteándose que existe un proceso de “campamentación” que haría que cualquier persona o familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad que afecte sus posibilidades de cubrir su necesidad de habitabilidad puede entrar o ingresar en situación de campamento (CIS-TECHO Chile, 2015).

Una conclusión que se puede plantear de la revisión de los últimos estudios sobre el tema tiene que ver con entender que el resurgimiento de campamentos en el país es producto también del desigual escenario de desarrollo urbano en donde conviven dinámicas de integración con una lógica cultural individualista que legitima la auto-segregación y los bajos niveles de convivencia social entre vecinos. La proyección de esta lógica cultural neoliberal que plantea débiles vínculos sociales a nivel de los nuevos conjuntos de vivienda puede entregar pistas para entender la problemática aún no abordada de qué tipo de barrio y comunidad construyen las actuales política de vivienda dirigidas a erradicar los campamentos (MINVU, 2018) existiendo un vacío de información y reflexión acerca de qué tipo de espacios y territorios se construyen como efecto de estas políticas, que este estudio quiere aportar a llenar.

2. Políticas urbanas para asentamientos informales en contexto de una ciudad desigual

Cabe constatar que en el contexto actual de discusión urbana se plantea un giro respecto a la forma en que habitualmente el urbanismo y la planificación urbana abordó los asentamientos informales. Reconociendo las fuertes desigualdades que genera el actual modelo de

desarrollo tanto desde las políticas locales como globales se empieza a plantear la necesidad de incorporar una mirada o enfoque de integración que incorpore y reconozca a los asentamientos urbanos como parte de la planificación de la ciudad. En ese marco, la integración social se consolida como un concepto clave del desarrollo deseado de las ciudades latinoamericanas, que se formaliza en la propuesta de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile (2013), y más recientemente en la agenda de Hábitat III (2016) y que también plantea a la integración como un valor deseable de aplicar a las políticas urbanas dirigidas a los asentamientos informales. Por un lado, la PNUD (2014) plantea que debe relevarse la integración social como mecanismo de gestión de los programas de vivienda, para revertir las actuales situaciones de segregación social urbana (Objetivo 1.2) y como orientación plantea “fortalecer y mejorar los programas para erradicación o radicación de campamentos y viviendas irregulares y provisionarias, para la reutilización de los terrenos desocupados, introduciendo plazos, recursos y medios apropiados para cada caso, de acuerdo a su diversidad y dificultad, velando al mismo tiempo porque no se generen nuevos campamentos”. (PNDU, 2014, p. 25). Por su parte, el texto final de la Conferencia Habitat III, asume como desafío hacer que los asentamientos informales se integren y formen parte de la ciudad, planteando el compromiso con una planificación que armonice el desarrollo y renovación de la ciudad con su inclusión: “Fomentaremos las ampliaciones urbanas y las construcciones de relleno planificadas, dando prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de las zonas urbanas, según sea necesario, incluida la mejora de los barrios marginales y los asentamientos informales” (Habitat III, 2016:29).

De modo de poder analizar y comprender la relación de los pobladores provenientes de campamento con sus nuevos entornos de barrio proponemos un marco provisorio de comprensión de sus procesos de adaptación e integración articulado en base a cuatro dimensiones presentes en los diferentes estudios que abordan en forma aplicada la problemática de la integración desde un enfoque socio-antropológico y psicológico ambiental. Abordaremos primero la integración como acción y práctica, relacionada al apego al lugar y el arraigo con el entorno. En segundo lugar, la integración como acción colectiva fundamentada en un sentido de comunidad. Una tercera entrada comprenderá la integración como capacidad de construcción y gestión del territorio, involucrando la participación; y, por

último, entenderemos a esta como un proceso vinculado a un mejor acceso a la ciudad a través de una “geografía de oportunidades”.

2.1 La integración como apego y arraigo con el entorno

En este primer nivel se considera la relación que el poblador construye con su lugar y territorio, y cómo se proyecta del campamento a la nueva vivienda. En función del afecto que se puede dar en la producción del hábitat y el territorio (Campos, Silva & Gaete, 2017), se debe incorporar al análisis la relación que puede existir entre las personas y su entorno, a partir del apego al lugar, término que remite a la formación de un vínculo emocional hacia los lugares por los individuos, debido a la función que pueden tener en sus vidas (Hidalgo & Hernández, 2001; Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace & Hess, 2007; Lewicka, 2011; Scannell & Gifford, 2010a; 2010b).

En función de la relación que las personas establecen con su entorno, entra en consideración también la articulación de mecanismos de arraigo con el nuevo espacio de vivienda y su entorno barrial. Se entiende así el cuidado, la protección y mantención diaria del territorio a partir de estos mecanismos de familiaridad (o filiación) con el territorio (Tuan, 1977, 2005, 2007). Los diferentes mecanismos de arraigo que pueden generar las familias que provienen de campamentos en la relación con sus nuevos conjuntos habitacionales, evidencias la apropiación, uso y construcción de identidad que pueden establecer con su territorio.

2.2 La integración como sentido de comunidad

En complemento con el punto anterior, se entiende que la integración a los nuevos conjuntos de vivienda puede ser entendida no sólo como una individual, sino también como acción colectiva, siendo un proceso de sociabilización que permite el reconocimiento como semejantes (Rinus, Martiniello et al. 2006). Se parte del supuesto de que, en contextos de transformación social y territorial, el sentido de comunidad se debe (re) constituir y preservar, para permitir la integración social, entendiendo que, a partir del desarrollo comunitario, se genera la percepción de pertenencia a un colectivo, que se basa en una historia e intereses compartidos (Sarason, 1974; McMillan & Chavis, 1986; Long & Perkins, 2003). Se reconoce, por tanto, que los pobladores pueden ser sujetos activos en la construcción social de su hábitat (Matus, 2017; Pino & Ojeda, 2013; Ganter, 2010). El sentido de comunidad

genera oportunidades de pertenencia a partir del desarrollo comunitario (McMillan y Chavis, 1986), siendo entonces los sujetos, parte de un colectivo más amplio (Sarason, 1974).

2.3 Participación en la construcción y gestión del territorio

El apego de lugar y el sentido de comunidad son importantes en la generación o no, de cuidado y gestión del nuevo territorio que configura el conjunto de vivienda. Si no hay una relación emocional positiva con los territorios, es difícil que sus habitantes participen con vecinos o de instituciones en la mejora de su entorno (Manzo & Perkins, 2006; Perkins & Long, 2002). La participación es, por tanto, una instancia que permite articular barrio constituyéndose en un espacio para racionalizar las interacciones entre personas y estructuras sociales, que conforman los territorios (Ramoneda & Jerez, 2018).

Para analizar las diferentes experiencias de construcción de comunidad en el nuevo espacio se debe considerar la participación en dos niveles: el primero, a partir de la pertenencia a entidades o asistencia a actividades (Perkins, Florin, Rich, Wandersman, & Chavis, 1990); y un segundo nivel que considera la capacidad de gestión y organización del territorio.

2.4 Acceso a una geografía de oportunidades

Finalmente, los pobladores de campamentos, en el contexto actual de las metrópolis, además de la mejora habitacional, también demandan acceso a la ciudad y a las oportunidades que ofrecen sus estructuras (Brain, Prieto & Sabattini, 2010; Domínguez, 2011). La noción de “geografía de oportunidades” (Galster & Killen, 1995), viene así a ser relevante, puesto que es compatible con los requerimientos de comunidades que requieren de mejor acceso a elementos que mejoren su calidad de vida. Sería, por tanto, un factor clave a considerar en los procesos de radicación y relocalización, siendo necesario la incorporación en estos de oportunidades económicas, laborales y recreacionales, que no se encuentran de forma homogénea en la ciudad. La decisión estratégica de familias pobres puede por tanto ser entendida a partir de la elección de la mejor localización del reasentamiento (Celhay y Sanhueza, 2011). A partir de ella, se podría dar el caso, por ejemplo, de desechar la nueva vivienda, permaneciendo en el asentamiento original, en función de que este último presente mejor geografía de oportunidades.

3. Revisión de casos preliminares: experiencias de reasentamiento y construcción de barrio post campamento

El paso desde el campamento a la vivienda social tiene varias aristas. Como se ha señalado, la transición puede ser influida y a la vez afectada por diferentes factores socioespaciales, como el apego, la identidad, el sentido de comunidad, la geografía de oportunidades, entre otros. Esta afectación será mayor o menor dependiendo de factores que se puedan dar durante el proceso y en función también de la metodología escogida para llevar a cabo este tránsito. Así también, la forma en que la comunidad gestione el nuevo conjunto habitacional es determinante en la mantención, constitución o reconstitución de sus vínculos socioespaciales.

Dentro de la metodología de intervención, que se aplica durante el proceso de cambio que se implementa desde el campamento a las nuevas viviendas, cuestiones como si se opta por la relocalización o radicación, el grado de participación que tenga la comunidad y la conservación o no de todos los miembros de ésta, pueden ser determinantes en cuanto a cómo se percibirá el proceso y los efectos sobre los factores socioespaciales.

Así una revisión de la experiencia de investigación desarrollada en torno a los casos de Chaitén y Constitución aportará a comprender la diferencia que existe entre la relocalización y la radicación en cuanto al desarrollo de apego, identidad y sentido de comunidad en las comunidades. El análisis del caso contrapuesto de la Población Aurora de Chile permitirá comprender, por ausencia, la relevancia que plantean la incorporación de un enfoque participativo en la radicación y relocalización de asentamientos informales.

3.1 Estudios de casos de relocalización en Chaitén y Constitución

Como parte de un estudio más amplio se aborda una evaluación cualitativa de los procesos de relocalización desarrollados en cuatro localidades sometidas a desastres siconaturales: Tocopilla, Dichato, Chaitén, y Constitución, siendo los dos últimos casos los más ilustrativos para entender los procesos de adaptación que plantea una relocalización.

Cabe señalar que Chaitén y Constitución fueron dos ciudades afectadas por problemáticas de distinto tipo. En 2008, Chaitén se evacuó debido a la erupción del volcán Chaitén, relocalizándose en Puerto Montt y Futaleufé 4.700 personas (Marchant, 2010, en Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015). En 2010, un terremoto y tsunami impactaron Constitución. Producto del terremoto, el conjunto habitacional Cerro O`Higgins tuvo que ser demolido,

puesto que resultó con daños en su infraestructura que no se pudieron reparar (Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015).

El proceso y metodologías que el Estado siguió tras las catástrofes fueron diferentes. En el caso de Chaitén se entregó un bono y el Estado adquirió la vivienda de cada familia. Con ese dinero las familias tuvieron que comprar nuevas viviendas en el mercado formal (Inostroza & Millaquen, comunicación personal, 2013, en Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015). Las familias se disgregaron en función de las oportunidades de compra o arriendo que tuvieron y cerca de 200 familias se ubicaron en Alerce, un sector residencial ubicado al norte de la ciudad de Puerto Montt. En tanto, en Constitución, tres años después del terremoto, se reconstruyó el conjunto habitacional Cerro O'Higgins. Los 142 habitantes pertenecientes a la comunidad de origen del barrio se volvieron a localizar allí (Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015).

Tanto en Chaitén como en Constitución se encuestó a 144 habitantes, a partir de una muestra no probabilística por conveniencia. Se estiman que los encuestados correspondían a casi la totalidad del universo desplazados viviendo Alerce en 2015. El promedio de edad fue de 45 años. En tanto Constitución se entrevistó a 80 personas, de un universo de 142 habitantes que presentaron un promedio de edad de 42.7 años. El total de participantes perdió su vivienda a consecuencia de los desastres (Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015).

Se adaptaron las escalas de Scannell y Gifford (2010b) para medir apego social y espacial, mediante respuestas tipo Likert (de 1 a 6). Se respondieron los diferentes ítems primero en relación al barrio de origen y luego al actual. Se adaptó la escala global de identidad de lugar, de Vidal, Valera y Perú (2010), tomada de Hernández, Hidalgo, Salazar y Hess (2007), con el fin de medir la identificación de lugar. Las respuestas también son Likert, respondiendo respecto al barrio de origen, al actual y a la ciudad (Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015).

Los habitantes de Chaitén que fueron relocalizados presentaron, dentro de la medición realizada, valores elevados en cuanto a satisfacción residencial. Sin embargo, la satisfacción con el barrio y los vecinos fue baja, al igual que sentido de comunidad y participación cívica, cuyo valor fue el más bajo de todos. El apego e identidad de lugar que los habitantes de Chaitén manifestaron respecto a su lugar de origen, en comparación al nuevo, demostró ser significativamente más alto, puntuando el lugar nuevo significativamente más bajo,

quedando de manifiesto que, con respecto al nuevo entorno, los *chaiteninos* no se sentían ni apegados, ni identificados (Berroeta, Ramoneda, Rodríguez, Di Masso & Vidal, 2015)

En Chaitén, a partir de la estrategia de relocalización escogida, en la cual los factores incidentes en la conformación socioespacial de apego y arraigo no fueron considerados, dio cuenta que "la pérdida de un lugar importante representa un cambio que afecta la experiencia de continuidad temporal, social y espacial en las personas" (Berroeta et. al., 2015, p.61).

En contraste con Chaitén, en Constitución, el mismo lugar donde estaban las antiguas viviendas acogió a las nuevas. Se conservó además la comunidad que residía allí. Los valores que se presentaron en Constitución contrastan también con Chaitén, puesto que, respecto a los mismos componentes de vínculos socioespaciales, en Constitución, en vez de bajar respecto a la nueva vivienda como en Chaitén, los valores suben. Es decir, en Constitución la comunidad manifestó tener mayor apego, identidad, sentido de comunidad y participación ívica por el nuevo conjunto residencial, que por el que fue destruido por el terremoto (Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015).

Que en Constitución la comunidad haya sido la misma en las viviendas originales y las nuevas, es relevante. La mantención de los vínculos socioespaciales confirma lo planteado por Sarason (1974, en Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015), en cuanto a que un quiebre en la red de relaciones de dependencia mutua, tuvo un profundo impacto en el sentido de comunidad. Así también, se constató que, "como plantea Gilchrist (2009), estas redes son la base del compromiso colectivo que permiten el efectivo desarrollo comunitario. Por tanto, mantener los vínculos comunitarios es un factor central a considerar en toda estrategia de desplazamiento o reconstrucción tras una catástrofe" (Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015, p. 1230).

El hecho de que la comunidad desplazada puntuara más bajo en el nuevo lugar respecto a los componentes de vínculos socioespaciales confirma el impacto negativo del desplazamiento de comunidades (Fried, 1963; Gibson, 2007, en Berroeta, Ramoneda & Opazo, 2015). Las diferentes formas de abordar el proceso a seguir con las comunidades, tuvo repercusión en los vínculos sociales y espaciales de los habitantes. En particular, en el caso de Chaitén, se centró la estrategia en la posible satisfacción con la vivienda, afectando positivamente los

vínculos socioespaciales, puesto que tal como plantean Berroeta, Ramoneda & Opazo (2015), una mayor la calidad de vida no se aseguraba sólo en función de la calidad de la vivienda.

3.2 Los estudios de caso del Plan Ribera Norte y la relocalización de la Población Aurora de Chile

Otra experiencia relevante de incorporar para abordar, esta vez desde una comprensión cualitativa, las diferentes variables que involucra la relocalización de asentamientos informales, la plantea el estudio de caso sobre la relocalización de la Población Aurora en Concepción desarrollado por Matus, Barraza el al. (2016) en el contexto del Centro de Desarrollo Urbano (CEDEUS-UDEC). El caso de estudio aborda a la Población Aurora de Chile asentamiento informal instalado en la Costanera del Bío Bío a fines de los años treinta que, ocupaba un área de 11 manzanas, en la que vivían un número aproximado de 3500 (MINVU, 2015). Este tipo de asentamiento tiene la particularidad de haber generado nuevos suelos urbanos mediante el relleno del río, proceso que dio lugar a tres poblaciones históricas: Pedro del Río, Aurora de Chile y Pedro de Valdivia Bajo. En los noventa, el sector es priorizado como foco para el desarrollo de un plan urbano emblemático: Rivera Norte -PRN, ejemplo pionero en Chile de aplicación temprana de un modelo de gestión público-privado, que se propuso como objetivos dar solución habitacional a cerca de 1500 familias que residían en el área; desarrollar un plan de renovación urbana que integrara el río con la ciudad; y promover la inversión inmobiliaria en el área (MINVU, 2001). En el marco del PRN, la población Aurora de Chile, constituye una “anomalía”, al decidir voluntariamente no participar de la propuesta de relocalización que planteaba el plan a partir de una propuesta de trabajo participativo con las familias que residían en el área, dirigido a que migraran a nuevos conjuntos de vivienda (Rojas & Villagrán, 2008). El estudio desarrollado permite constatar que posterior al Plan Ribera Norte en la Costanera se aplica una estrategia de renovación urbana no explicitada en un proyecto de planificación (Matus et al. 2016), que utilizando el terremoto como recurso de shock (Klein, 2007) para gatillar, a través de la construcción del Puente Bicentenario, la aceleración del proceso de renovación urbana pendiente, naturalizando la necesidad de que los aurorinos “sacrifiquen” su territorio por el bien común y desarrollo de la ciudad. El proceso de diálogo con la comunidad pos PRN está marcado por una trayectoria de vulneraciones a los pobladores, que trasciende los gobiernos de turno, donde destaca la clase política y la prensa local en un abordaje estigmatizador de violencia

simbólica (Janoschka & Sequera, 2014). En respuesta, la población comienza a organizarse para oponerse a la construcción del puente denunciando el actuar del Estado, desarrollando entre 2012 y 2014, un movimiento de fuerte resistencia al proyecto. Posteriormente, con el cambio de gobierno, los procesos sociales de resistencia dan paso a una estrategia de negociación, propuesta por el MINVU, que plantea solucionar el conflicto mediante la creación de un equipo territorial que diseña el denominado Plan Integral Aurora de Chile. El enfoque participativo que promueve este nuevo plan, a diferencia del ofertado por el PRN redujo la participación de la población a su organización en comités vivienda para su relocalización habitacional, dejando de lado la opción de que no se desplazaran en el espacio, y no incluyendo en los proyectos de radicación y relocalización los aspectos identitarios y simbólicos que le daban unidad como comunidad, promoviendo no solo el desplazamiento efectivo de un tercio de los pobladores para formar nuevos barrios, sino que plantea un desplazamiento indirecto que modifica de su estilo de vida y homogeniza su espacio residencial y público al patrón general de otros barrios ofertados a sectores medios. Es en el plano de los efectos socio-territoriales que plantea el cambio forzado de modo de vida, que se pueden vislumbrar los mayores impactos que generará la transformación de un territorio que favoreció durante más de ochenta años la sociabilidad y el desarrollo de estructuras familiares, disolviendo violentamente las fronteras territoriales y las articulaciones espaciales necesarias para dar vida a una población como la Aurora.

En ese sentido, los planes de renovación urbana adaptan y reconfiguran los instrumentos de intervención a los contextos y coyunturas que facilitan o dificultan sus resultados. Siguiendo lo anterior, el Plan Ribera Norte tuvo que adaptar su modelo de intervención ante la resistencia de los pobladores de dejar el área, modificando su estrategia de participación, de modo de integrar al proyecto a los pobladores que iban a ser desplazados. En el caso de Aurora de Chile a pesar de ser una experiencia más contemporánea se restringió más los niveles de participación en los proyectos de vivienda de radicación y relocalización.

4. Estudio de caso: los nuevos conjuntos de vivienda para familias de campamento

El estudio de caso central sobre el que basamos esta presentación fue desarrollado en 2018 por el DESE-PUC en el contexto de una consultoría solicitada vía licitación pública por el Programa de Campamentos del MINVU y estuvo orientado a comprender los procesos de

integración y adaptación de familias beneficiadas por el Programa de Campamentos, en sus tres líneas de intervención, que en la actualidad se encuentran viviendo en sus nuevas viviendas y/o barrios. En base a una muestra cualitativa representativa de cuatro regiones del norte, centro, y centro sur del país se planteó una investigación cualitativa de corte exploratorio que consideró la siguiente tipología de experiencias:

Tabla 1 Cuadro Resumen Muestra de Casos de Estudio por Región y Tipología

REGIÓN	PROYECTO HABITACIONAL	TIPOLOGÍA PROGRAMA	DE	ESTRATEGIA
Valparaíso	Altos de Humboldt	Relocalización de campamentos	57%	familias de
O'Higgins	Nueva las torres	Relocalización de campamento	100%	familias de
Atacama	La estrellita	Radicación con Proyecto Habitacional. 100% familias de campamento		
Región metropolitana	Renacer por un sueño	Relocalización de campamento	36%	familias de

Fuente: Elaboración Propia en base a información MINVU

Se realizó un proceso de levantamiento de información intensivo desarrollado durante un período de dos meses que integró cuatro técnicas de investigación cualitativa:

- 36 entrevistas semi-estructuradas a pobladores/as provenientes y no provenientes de campamentos. Abordando experiencias y percepciones de su residencia previa y proceso de cambio de vivienda.
- Se realizaron cuatro Focus Group, uno por caso de estudio, para entender la experiencia de residencia post campamento y relaciones al interior del nuevo barrio.
- Con el fin de evaluar los nuevos espacios de residencia, se realizaron cuatro observaciones y recorridos en terreno, guiados por actores locales, intentando dilucidar la utilización de los espacios y dinámicas en el interior de los barrios.

- Para recuperar las experiencias de organización y transformación, se realizaron cuatro mapeos participativos con habitantes de los nuevos conjuntos.

5. A medio camino entre la integración individual y la fragmentación de la comunidad y el barrio

Primero, cabe sostener que, independiente de la estrategia que se haya utilizado para el paso del campamento al nuevo conjunto habitacional y el contexto territorial, las familias son consistentes en demostrar que existe un cambio sustantivo en sus vidas. Los estándares de solución habitacional, así como la localización, influyen en la consolidación de un primer nivel de adaptación e integración básico. Sin embargo, para el desarrollo de una dinámica de integración social como acción colectiva dotada de un sentido de comunidad, que dé sostenibilidad al barrio en el tiempo, se requiere de acciones de participación y acompañamiento activo.

El análisis comparativo de los casos desarrollados muestra similitudes y particularidades, siguiendo al menos tres experiencias de relocalización una lógica similar de proceso que plantea satisfacción residencial y apego a la vivienda con bajo sentido de comunidad y débil capital social. Dicho análisis contrasta con La Estrellita en Copiapó, que obedece a una lógica de radicación, presentando mayor valoración por parte de sus habitantes en cuanto a integración, mantención de la comunidad, satisfacción con sus viviendas y arraigo, haciéndonos reflexionar sobre la relevancia que tiene en una intervención el generar una continuidad y no una ruptura en la dinámica de construcción social del espacio de los y las pobladores de asentamientos informales.

Ilustración 1 La Estrellita, Copiapó



Fuente: registro propio

Durante el estudio, se detectaron mecanismos de arraigo informal a partir de intervenciones, tanto personales como comunitarias a las viviendas y espacios públicos, que expresaban apego, identidad y apropiación. Las acciones más relevantes detectadas fueron las modificaciones físicas del ambiente. En el plano personal, las intervenciones se relacionaron a modificaciones en el interior de la vivienda, como también de las fachadas, y cambios de pisos, pintura, rejas, entre otros. Estas intervenciones eran motivadas por una necesidad de ampliar el espacio para una familia que se extendía (como la adición de una habitación cuando no alcanzan para todos los miembros de la familia), para mantener una continuidad con el nivel de vida y la relación con el espacio previamente desarrollada en el asentamiento (considerando que muchas familias, por ejemplo, tenían en el campamento viviendas más grandes), los deseos de mejora y expresión de mayor estatus, entre otros. Las modificaciones, no obedecían a un descontento con las viviendas, sino que eran expresión de una lógica individual, de los “nuevos propietarios”, que valora la obtención de la casa propia como un bien particular que se quiere siempre “mejorar”. En ese contexto, la condición de espacio de copropiedad, no es internalizada por ninguna de las experiencias abordadas por lo que el uso adecuado del espacio de cada familia en el conjunto es muchas veces obviado por los miembros de la comunidad en pos de satisfacer sus deseos individuales.

Por su parte, en el caso de las intervenciones comunitarias, los pobladores llegaban a acuerdo para la implementación de elementos de seguridad, modificación o gestiones de mantención sobre los espacios comunes, proyectos para construcción de sedes, entre otros. Tanto estas intervenciones comunitarias como las individuales, producen una apropiación sobre lo modificado. A pesar de ello, no se cuestiona que estas transformaciones pueden también tener repercusiones negativas en las dinámicas comunitarias, si no son acordadas en un marco normativo consensuado. Es fundamental, por tanto, el cómo se plantee el manejo respecto a estos aspectos dentro de la comunidad.

En línea con algunas de las conclusiones que se encontraron en los estudios anteriormente revisados durante el trabajo de campo fue posible constatar que quienes vivieron un proceso de relocalización tuvieron que volver a generar nuevos vínculos, tanto sociales como espaciales, mientras que las comunidades que vivieron un proceso de radicación mantuvieron en mayor medida el apego, identidad y apropiación.

La pérdida de los vínculos socioespaciales podría ser aminorada a través de la participación y acompañamiento en el proceso de paso del campamento a las viviendas sociales. Sin embargo, es necesario realizar mejoras en estos aspectos, puesto que hoy el seguimiento, vinculación y acompañamiento general, es visto por las comunidades como deficitario, al acabar prematuramente, no cumplir con los objetivos planteados, presentar interrupciones debido a cambio de profesionales o voluntarios, discrepancia con las expectativas, entre otros.

La participación y la posibilidad de incidencia sobre el proceso, está relacionada directamente con el proceso de acompañamiento que brinda la Entidad Patrocinante. Sin embargo, a pesar de que existió una buena evaluación sobre algunas instancias de participación, los nuevos habitantes no manifestaron haber recibido directrices o una capacitación que les permitiera orientar la convivencia en el nuevo territorio estando ausentes del trabajo de las entidades patrocinantes la promoción de la integración entre las familias de pobladores y no pobladores en los conjuntos mixtos, y el abordaje comunitario de temáticas como la adaptación a la nueva vida, la conservación del tejido social, y la generación -y traspaso- de competencias para la gestión y administración de sus nuevas viviendas y conjuntos habitacionales, entre otros.

Algunas de las acciones que fueron mejor evaluadas, se refieren a las soluciones acordadas para desarrollar el proyecto en un tiempo acotado, la elección de diseños habitacionales adecuados a las necesidades comunitarias, el seguimiento de las obras a través de visitas a terreno, la consulta respecto a ciertas alternativas pre-establecidas y las actividades de talleres, cumpliendo un importante rol en la generación de sentido de comunidad y apego

En términos generales, es importante señalar que la valoración entregada por las comunidades respecto al cambio que se ha producido en sus vidas a partir del paso a viviendas sociales, ha sido positiva, en particular en cuanto a la calidad de vida en función de sus nuevas viviendas y barrios. Los barrios se perciben como bien conectados a la ciudad. Tres de los cuatro casos apuntan a que existe una evaluación positiva de los estándares de las soluciones habitacionales y satisfacción con la localización, no obstante, esta contrasta con evidencias de una baja en la vida comunitaria y las relaciones sociales en los nuevos conjuntos.

Una problemática que emerge en la comparación de los casos de relocalización (Quilpué, Lo Espejo y San Francisco de Mostazal) tiene que ver con que las comunidades que vivían en campamento detectan, como una de sus principales dificultades: el uso y la gestión del espacio compartido. Existe una variación importante en la entrada a las viviendas sociales, puesto que prevalece, en gran parte de los casos, un intento de administración colectiva mediante reglas que se aplican para la convivencia y organización, las cuales no estaban contempladas en el campamento. La organización general y en particular el sistema de administración que se adopte, así como la metodología de construcción de éste, se han revelado como un elemento fundamental en la constitución del vínculo dentro del barrio. Esto se incrementa en los conjuntos habitacionales compuestos por familias tanto que provienen de campamento como que no. El enfoque que se da a la forma de trabajo, organización y acuerdo en cuanto a normativa, proyectos, etc., puede llevar tanto a la construcción de comunidad, como a un proceso de autosegregación como acontece en los casos de conjuntos mixtos (Quilpué y Lo Espejo), que reúnen a familias de campamento con familias que acceden por subsidio individual, incluso existiendo apego o identidad. Al respecto, se detectó que es importante, para poder soslayar posibles desacuerdos que, en el proceso de acompañamiento y las instancias de participación, se generen oportunidades no sólo para solucionar estas problemáticas, sino también para poder potenciar los componentes sociales presentes en las mecánicas del proceso.

Se debe contextualizar los impactos negativos que plantean los cambios espaciales para las familias de campamentos que viven experiencias de relocalización. En estos casos se visibiliza un proceso de cambio en las relaciones comunitarias constatándose la pérdida de las relaciones de encuentro y convivencia entre vecinos que existían antes en el campamento, lo que lleva a que las familias replieguen su vida social al núcleo familiar en el ámbito privado de las casas, restringiéndose la sociabilidad a vínculos con los vecinos adyacentes en casas y departamentos, principalmente con los que existe confianza y conocimiento previo.

La baja vida comunitaria y la escasa relación entre vecinos, potencia el desarrollo de prácticas individuales y disruptivas- de apropiación y arraigo espacial como las ampliaciones de vivienda, el uso individual del espacio público para estacionar autos, etc. Por otro lado, y en forma complementaria a lo anterior, en los casos de relocalizaciones mixtas se perciben prácticas de construcción de identidad por oposición y diferenciación entre un grupo y otro grupo de pobladores, estableciéndose segregación respecto de las familias que provienen de campamentos y las que no. En efecto, ya sea por el restringido espacio del conjunto (Mostazal) o por la complejidad de las intervenciones mixtas (de familias de campamentos con familias que no provienen de campamentos) como las de Quilpué y Lo Espejo, se tiende a generar procesos de segregación a la escala de barrio, que se plasman en un sentimiento de división de la comunidad en sectores o subgrupos y que reproducen asimetrías de organización; el sector de los organizados y de los menos organizados o diferencias de origen; “los de campamento” y “los de población”. Ejemplo evidente de esta diferenciación de la identidad de población, es el caso de Lo Espejo.

Ilustración 2 Altos de Humboldt, Quilpué



Fuente: registro propio

Cabe constatar que las acciones que la comunidad realiza son mayormente iniciativas de mujeres, quienes, en la mayoría de los casos, son las que lideran tanto las instancias formales de decisión (administraciones y comités), como las informales (a través de acciones como celebración de fechas importantes para la comunidad, la “ruta del té” que una vecina de Quilpué instauró para mantener y crear nuevas relaciones, entre otros).

Reflexiones finales: ¿Un giro metodológico? Acompañamiento y participación para la integración

Finalmente, los resultados del estudio plantean una necesidad de que se potencie el enfoque de intervención y metodologías de acompañamiento, así como el protagonismo que pueden ejercer las familias en la gestión de su territorio y en la resolución de sus conflictos comunitarios. Modelos como los revisados en el caso de Constitución y Chaitén, en que se implementa el sistema de vócher como una solución a la problemática habitacional, deben dar paso a intervenciones integrales, que articulen la integración, la geografía de oportunidades y el arraigo como ejes preponderante, generándose un giro desde la política pública que busca solamente la reducción del número de campamentos, a una que incorpore también la construcción de comunidad e integración de los barrios a la ciudad.

Es necesario entonces, incorporar un enfoque más sustantivo y menos funcional de la participación, en que se incluya a los habitantes desde el principio y que vislumbre un amplio espectro de factores en los que puedan incidir, tales como la ubicación de sus viviendas, participación en el diseño, construcción de normativa de funcionamiento, generación de proyectos, etc. De esta manera, se espera que exista también un traspaso de capacidades para habilitar al sujeto de intervención, para que se haga cargo en forma autónoma, de gestionar en el mediano y largo plazo, la convivencia en copropiedad, desarrollando habilidades y conocimientos prácticos para resolver conflictos y construir normas compartidas de convivencia que hoy no existen.

Bibliografía

- Berroeta, H., Ramoneda, A. & Opazo, L. (2015) Sentido de comunidad, participación y apego de lugar en comunidades desplazadas y no desplazadas post desastres: Chaitén y Constitución. *Universitas Psychologica*, 14(4), 1221-1234.
- Berroeta, H., Ramoneda, A., Rodríguez, V., Di Masso, A. & Vidal, T. (2015) Apego de Lugar, Identidad de Lugar, Sentido de Comunidad y Participación Cívica en personas desplazadas de la ciudad de Chaitén. *Magallania (Chile)*, 2015. Vol. 43(3):51-63.
- Brain, I., Prieto, J., & Sabatini, F. (2010). Vivir en campamentos: ¿camino hacia la vivienda formal o estrategia de localización para enfrentar la vulnerabilidad? *EURE* 36, (109). 11-141.
- Campos Medina, L., Silva Roquefort, R., & Gaete Reyes, M. (2017). El rol de las emociones y los afectos en la producción del hábitat y el territorio. *Revista INVI*, 32(91), 9-21.
- Castells, M (1973) Movimiento de pobladores y lucha de clases en Chile. *Revista EURE* 3 (7).
- Celhay, P. & Sanhueza, C. (2011) Location, location, location: labor outcomes in urban slums of Santiago-Chile. Instituto de Políticas Públicas UDP, 2011.
- CIDU (1972) Reivindicación urbana y lucha política: los campamentos de pobladores en Santiago de Chile, *EURE* N° 6:80. Equipo de Estudios Poblacionales.
- Conolly, P (2013) “La ciudad y el hábitat popular: paradigma latinoamericano”, 505-562 en Ramirez, B & Pradilla, E, *Teorías sobre la ciudad en América Latina, Volumen II*, Ediciones UAM, México.
- De Ramón, A (1990) La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile 1920-1970. Vol., XVII, N°50, pp. 5-17.
- Domínguez, P (2011) Campamentos, viviendas y acceso a la ciudad para los pobres, en *Revista CIS* 14 (2011) 1, 22 pp.
- Espinoza, V. (1998). Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987 *EURE* (Santiago), Santiago, v. 24, n. 72, sept. 1998.
- Galster, G. & Killen, S. (1995) The geography of metropolitan opportunity: A reconnaissance and conceptual framework. *Housing Policy Debate* 6 (1): 7-43.
- Ganter, R (2010) Escenas de la vida urbana en la Legua Emergencia: narcocultura y ambivalencias identitarias. Tesis Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Habitat III (2016) Declaración Final Conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano, Habitat III, Naciones Unidas.
- Hardoy, J & Satterwhaite, D (1987) La ciudad legal y la ciudad ilegal. Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Públicos y Sociales, Buenos Aires.
- Hernández, B., Hidalgo, M., Salazar-Laplace, M., & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. *Journal of Environmental Psychology*, 27(4), 310-319.
- Hidalgo, M., & Hernández, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 273-281.
- Janoshka, M. & Sequera, J (2014) Procesos de gentrificación y desplazamiento en América Latina, en *Desafíos metropolitanos. Un diálogo entre Europa y América Latina*, pp. 82-104. Catarata. Madrid.

- Klein, N (2007). *La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre*. Paidós.
- Lara, A & Enciso, G (2013) El giro afectivo en *Athenea Digital* - 13(3): 101-119.
- Lefebvre, H (1991) *The production of space*. Oxford. Blackwell, 1991.
- Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? *Journal of Environmental Psychology*, 31(3), 207-230.
- Long y Perkins (2003). Confirmatory Factor Analysis of The Sense of Community Index and Development of a Brief. *Journal of Community Psychology*, Vol. 31, No. 3.
- López-Morales, E., Flores Pineda, P., & Orozco Ramos, H. (2018). Inmigrantes en campamentos en Chile: ¿mecanismo de integración o efecto de exclusión? *Revista INVI*, 33(94), 159-185.
- Manzo, L., & Perkins, D. (2006). Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning. *Journal of Planning Literature*, 20(4), 335-350.
- Matus, C. (2017) Planificación participativa y urbanismo popular. Usos de la Memoria, la Identidad y el Patrimonio en Poblaciones Históricas de Santiago y Concepción en *Revista Planeo* N°51, IEUT, PUC.
- Matus, C., Barraza et. al (2016) Renovación urbana y gentrificación post catástrofe en Concepción: el caso de Aurora de Chile. *Revista de Urbanismo* N° 34, enero-junio. Departamento de Urbanismo-FAU, Universidad de Chile.
- McMillan, D., & Chavis, D. (1986). Sense of community: A definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14(1), 6-23.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2018) Bases técnicas y Administrativas Licitación “La vida después del campamento” en las regiones de Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015) Catastro de Población Aurora de Chile. Concepción.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011) Informe Catastro Nacional de Campamentos.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2010) El Programa Chile Barrios, de medida de emergencia política pública. Santiago.
- Pérez, M (2017) A new poblador is being born. Housing struggles in a gentrified area of Santiago, *Latin American Perspectives*, Mayo N° 214, Vol. 44 (3): 28-45.
- Pérez, M. A (1995) Almendro II: desde tus raíces ausentes hasta las voces de tus puertas. *Memorias del Campamento Raúl Silva Henríquez y de la Población Almendro II*, Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia UC, Santiago.
- Perkins, D. D., Florin, P., Rich, R. C., Wandersman, A., & Chavis, D. M. (1990). Participation and the social and physical environment of residential blocks: Crime and community context. *American Journal of Community Psychology*, 18(1), 83-115.
- Perkins, D., & Long, D. (2002). Neighborhood sense of community and social capital: A multi-level analysis. In A. T. Fisher, C. C. Sonn & B. J. Bishop (Eds.), *Psychological sense of community: Research, applications, and implications*. (pp. 291-318). New York, NY, US.
- Pino, A., & Ojeda, G. (2013). Ciudad y hábitat informal: Las tomas de terreno y la autoconstrucción en las quebradas de Valparaíso. *Revista INVI*, 28(78), 109-140.
- Ramonedá, A. & Jerez, P., (2018) Community, Participation and Urban Transformation. En Krebs, R., Egger, T., & Mashini, M. (2018) *Urban Design Lab Handbook*. Innovative processes for dialog-orientated urban transformation and practical approaches from Latin America and the Caribbean. En prensa.
- Rinus, P., Martiniello, M., Brey, E., Cachón, L., y Garcés, B (2006) “Procesos de integración y políticas (Locales): estado de la cuestión y algunas enseñanzas (Integration Processes and (Local) Policies: Status of the Issue Lessons to Be Learned)”. *Reis*, no 116: 123–56. <https://doi.org/10.2307/40184810>.
- Rodríguez, A & Sugranyes, A (2005) *Los con Techo*. Un desafío para la política habitacional, Santiago Chile, Ediciones SUR.
- Rojas, M. & Villagran, G. (2008). Procesos urbanos informales e intervención pública. El caso del Programa Ribera Norte. *Revista Bitácora*, 13(2), 133-150.
- Romero, G (2012) “La producción social del hábitat. Reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas” en Ortiz, E & Zárate, L (Compiladores) *Vivitos y coleando: 40 años trabajando por el hábitat popular en América Latina*; México, HIC América Latina-UAM.
- Sabatini, F (2000). Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación residencial. *EURE (Santiago)*, 26(77), 49-80. <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612000007700003>.
- Sarason, S. (1974) *The psychological sense of community: Prospects for a community psychology*. London, Reino Unido: Jossey-Bass.

- Scannell, L., & Gifford, R. (2010a). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1-10
- Scannell, L., & Gifford, R. (2010b). The relations between natural and civic place attachment and proenvironmental behavior. *Journal of Environmental Psychology*, 30(3), 289-297.
- Skewes, J. C. (2005) "De invasor a deudor: el éxodo desde los campamentos a las viviendas sociales en Chile" en Rodríguez, A & Sugranyes, A, *Los con techo, Un desafío para la política de vivienda social*, Ediciones SUR.
- Vidal, T., Valera, S., & Peró, M. (2010). Place attachment, place identity and residential mobility in undergraduate students. *Psychology*, 1, (3), 353-369.
- Tuan, Y-F (2007). *Topofilia*. España: Melusina.
- Tuan, Y-F (2005) *Cosmos y hogar. Un punto de vista cosmopolita*. 1°. Barcelona, España: Melusina, 2005.
- Tuan, Y-F (1977). *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Turner, J (1977) *Vivienda, todo el poder para los usuarios*, Madrid, España, Ed. Hermann Blume.
- UN-Habitat II (2003) *Slums of The World*. Documento de Trabajo.

Estrategias de pago de deudas en jóvenes profesionales y deudores de Santiago de Chile: tipologías a partir de un análisis de clases latentes

Lorena Pérez-Roa y María Constanza Ayala.

Trabajo Social, Universidad de Chile e Instituto de Sociología.

loperez@uchile.cl

mcayala@uc.cl

Resumen

En un contexto como el chileno caracterizado por la expansión del mercado crediticio por la masificación de los créditos estudiantiles como fórmula de acceso a la educación superior y de desprotección institucional frente al mercado del crédito, esta ponencia se propone explorar las estrategias de pago de deudas de jóvenes deudores de Santiago de Chile por medio de un análisis de clases latentes. Los resultados dan cuenta de tres perfiles de deudores en función de las estrategias de pago que movilizan para responder a sus compromisos financieros, a saber: estrategias múltiples, estrategias individualizadas y estrategias no financiarizadas. Las principales diferencias entre cada tipología refieren a los accesos y usos de los instrumentos financieros que los jóvenes activan para responder a sus deudas. Independientemente de las diferencias entre estos grupos, los resultados dan cuenta del uso generalizado de estrategias de planificación de gastos, de activación de las redes sociales y de generación de nuevas entradas económicas. Una caracterización clara de los perfiles de deudores según las estrategias de pago puede favorecer una aproximación más comprensiva para intervenir los problemas financieros de la población.

Palabras claves: ESTRATEGIA DE PAGO – DEUDAS – TIPOLOGIAS - JÓVENES ADULTOS

Llegar a estar en una situación de endeudamiento problemático es la consecuencia de una serie de acontecimientos que se inicia para muchos jóvenes chilenos cuando acceden a la educación superior. En Chile, como en otras sociedades occidentales, los altos costos que representa el acceso a la educación superior son sobrellevados principalmente por los jóvenes y sus familias. Si bien, según los datos de la Encuesta Financiera de Hogares (EFH, 2018)

sólo un 12,3% de los hogares chilenos tiene deuda educativa, esta se concentra principalmente en la generación de adultos jóvenes. Específicamente, en el tramo entre 25 y 29 años (27.82%) se encuentran los mayores porcentajes de tenencia de deudas educativa a nivel nacional.

Esta prevalencia de deuda educativa en jóvenes adultos puede comprenderse dada la masividad que durante sus casi 12 años de historia ha tenido el Crédito con Aval del Estado (CAE). El CAE es un sistema de crédito para financiar los estudios de educación superior creado en el año 2005 bajo la Ley 20.027. Este crédito es entregado por una institución financiera y garantizado por el Estado quien participa como aval hasta que el deudor haya pagado por completo su deuda. Pueden ser beneficiarios del CAE todo quien acredite mérito académico y que desee estudiar en una carrera en una institución de educación superior acreditada que formen parte de Sistema de Crédito con Garantía Estatal. La retribución del crédito comienza 18 meses después de que el beneficiario haya finalizado su carrera. El reembolso se realiza en cuotas a las que se le aplica un 2% de interés. El período de reembolso se fija en función del monto solicitado y puede extenderse hasta un plazo máximo de 20 años. Según los datos de la comisión Ingesa⁵, al 2017, 874.293 personas estudiaron con el CAE, del cual un 56,6% corresponde a créditos otorgados a mujeres y un 43,4% a hombres.

La evidencia sobre el comportamiento crediticio de la población universitaria señala que existiría una relación potencial entre las actitudes que los estudiantes tienen hacia el endeudamiento y las expectativas de su futuro laboral. Desde esta lógica, la deuda sería vista por los estudiantes como un mecanismo legítimo para acceder a la educación superior, en tanto el aumento de los ingresos una vez egresado del sistema superior debería permitir superar la deuda (Denegri et al., 2011). En el caso particular de Chile esta idea toma fuerza puesto que existe una percepción masificada de que la educación superior es un motor de movilidad social, por ende, un pilar para superar la pobreza y la desigualdad social (Urzúa, 2012). Sin embargo, y a pesar de que el CAE ha permitido a casi 900 mil personas acceder a la educación superior, las cifras muestran que un número no menor de estudiantes está enfrentando dificultades para pagar su crédito universitario. En efecto, a cifras del 2017, un 40,25% de los deudores se encontraba en mora, mientras que un 59,75% están con la deuda

⁵ Ver: <https://portal.ingresa.cl/estadisticas-y-estudios/estadisticas/>

al día, siendo los desertores quienes presentan mayor prevalencia de mora en el pago de la deuda (Fundación Sol, 2017). En este sentido, anteriores estudios han mostrado las dificultades que algunos jóvenes presentan para responder con la carga mensual del crédito estudiantil (Pérez-Roa, 2014; Pérez-Roa, 2018). Estas dificultades han movilizado a los propios jóvenes deudores quienes han conformado organizaciones como “Deuda Educativa”, quienes, desde el movimiento estudiantil del año 2011, se han organizado para exigir la condonación de la deuda educativa, el fin del DICOM educacional, eliminar la retención de impuestos y terminar con la bancarización del sistema educativo (Rojas, 2017).

Por otro lado, el acceso a la educación superior abre una serie de posibilidades de acceso a una vasta línea de servicios y productos financieros. Los bancos a través de alianzas con las instituciones de educación superior se instalan de manera transitoria o permanente en las instituciones de educación superior para ofrecer productos especialmente pensados para ellos.

En un contexto como el chileno caracterizado por la expansión del mercado crediticio (González 2015; Marambio 2018) por la masificación de los créditos estudiantiles como fórmula de acceso a la educación superior (Pérez-Roa 2014; González 2017) y de desprotección institucional frente al mercado del crédito, esta ponencia se propone explorar las estrategias de pago de deudas de jóvenes deudores de Santiago de Chile. Nuestro objetivo es examinar los perfiles de deudores en función de los tipos de estrategias que movilizan para poder responder a sus compromisos financieros.

A fin de responder a nuestro interés, esta ponencia se estructura a partir de tres apartados: en primer lugar, discutiremos sobre el endeudamiento juvenil y las estrategias de pago de deudas, para luego presentar el marco metodológico de nuestro estudio, y finalizaremos con los resultados y discusión de nuestros hallazgos. Los resultados dan cuenta de tres perfiles de deudores en función de las estrategias de pago que movilizan para responder a sus compromisos financieros, a saber: estrategias múltiples, estrategias individualizadas y estrategias no financiarizadas. Sus diferencias y similitudes serán profundizadas en el apartado de resultados.

Transitar al mundo adulto con deudas: el endeudamiento juvenil como problema

Las investigaciones sobre los procesos de endeudamiento en la población juvenil han estudiado los efectos de la deuda educativa en la trayectoria de los individuos en dos momentos temporales distintos: durante el proceso de estudios y una vez finalizado. Pensar el endeudamiento universitario como una inversión a futuro, implica asumir que los jóvenes deudores accederán a un trabajo cuya remuneración les permitirá pagar sus deudas. Sin embargo, los estudios centrados en los deudores egresados del sistema universitarios muestran que financiar un proyecto educativo a través del endeudamiento es un “experimento social” (Dwyer, et al., 2012) cuyos resultados son parcialmente conocidos. El acceso a la educación superior mediante el endeudamiento sería más bien “un arma de doble filo” ya que si bien permite disminuir la brecha entre los costos de la educación superior y las posibilidades reales de las familias de ingresos medios y bajos de financiar los estudios, es también un medio de financiamiento riesgoso, en tanto la adquisición excesiva de deudas puede limitar las oportunidades y opciones futuras de los jóvenes deudores (Bowen, Chingos y Mc Peterson, 2009; Leicht & Fitzgerald, 2006). Algunos estudios muestran que los estudiantes de primera generación de profesionales pertenecientes a las comunidades negras y latinas cuentan con menor capital financiero para tomar decisiones sobre el financiamiento de sus proyectos universitario (Mc Cabe y Jackson, 2016). El endeudamiento puede reducir las posibilidades de obtener un título y limitar las posibilidades reales de los jóvenes de responder a sus compromisos financieros (Dwyer et al., 2012, 2013). Problemas de índole personal, como la pérdida de empleo, el divorcio y las enfermedades, pueden ser más difíciles de afrontar para aquellos que tienen deudas importantes (Mc Cloud y Dwyer, 2011). Los jóvenes que financian sus estudios con créditos tienen menor patrimonio y mayores dificultades financieras que aquellos no deudores (Despart, 2016). Los impactos del aumento del endeudamiento son particularmente riesgosos en estudiantes de bajos ingresos y de minorías étnicas (Elliot, 2012; Kim, 2007). Así, mientras para los jóvenes de clases populares y medias el endeudamiento es la única manera de financiar sus metas de movilidad social, para aquellos de clases sociales privilegiadas, el acceso a crédito es solo una parte del repertorio de recursos de los que disponen (Dwyer, McCloud and Hodson, 2011).

Ahora bien, independientemente de las distintas acepciones y roles que se le otorga a la deuda (Seefeldt, 2015), pareciera que los jóvenes han normalizado la idea de que la deuda universitaria es una inversión “que vale la pena”. En un reciente estudio realizado en Reino Unido por Evans y Donnelly (2018) se observa cómo, incluso en contextos de precariedad, la deuda se piensa como algo necesario para obtener un título, aunque no sea garantía de encontrar un trabajo. Siguiendo los argumentos de Foucault (1973) expuestos en el trabajo de Danaher, Schirato y Webb (2000) los autores señalan que la idea de la deuda universitaria es una inversión que se ha instalado como una “verdad” discursiva. Esta idea sostiene que los principios organizativos detrás de un discurso se vuelven relativamente ocultos o inconscientes a lo largo del tiempo. Los autores argumentan que la producción discursiva de la deuda ha pertenecido en gran medida a las áreas disciplinares de la economía y los negocios. Estas disciplinas han construido una verdad sobre la deuda universitaria omitiendo o condenando las narrativas alternativas que le son incongruentes. Desde estos discursos economicistas la deuda universitaria sería entonces un tipo particular de deuda, libre de la carga negativa, socialmente aceptable y parte del proceso de “auto inversión” (Evans y Donnelly, 2018).

Estrategias de pago de deudas

Para los fines de esta investigación entendemos como estrategia de pago de deudas todas aquellas acciones planificadas y concertadas que los deudores activan para poder responder a sus compromisos financieros. Si bien, la evidencia sobre cómo los deudores responden al endeudamiento es relativamente reciente y focalizada principalmente en los sectores de menores ingresos y en mujeres, los estudios dan cuenta de una variedad de estrategias cuyas principales diferencias radican en el tipo de recursos que los deudores activan y en las justificaciones y prioridades que movilizan para justificar su uso.

Seefeldt (2015) en una investigación longitudinal sobre el uso de las deudas en los hogares de ingresos bajos y moderados en Estados Unidos, da cuenta como las familias acceden al crédito como una estrategia de *consumption smoothing* y de inversión. Usar la deuda para suavizar el consumo (*consumption smoothing*) les permite a las familias hacer malabares, mantener a los acreedores medianamente satisfechos y sostener un nivel de vida básico. Sin

embargo, el uso prolongado de esta estrategia puede implicar que las familias empiecen a acumular nuevas deudas, empeoren su situación financiera y presenten mayores dificultades para poder responder a sus compromisos financieros. Por otro lado, su trabajo observa cómo los créditos asumidos como una inversión –créditos hipotecarios/estudio- en familias de ingresos bajos, no habían aportado a las ganancias económicas esperadas. Esta falta de rentabilidad, a juicio de la autora, puede explicarse dada la desvalorización en los valores de las viviendas -para el caso de los créditos hipotecarios- y por la baja en el incremento salarial que los créditos estudiantiles les han reportado a las familias. Así, las deudas que tradicionalmente se consideran como una “inversión” terminaron dejando a las familias participantes más endeudadas.

En una investigación desarrollada con mujeres jefas de hogar de bajos ingresos Tash y Grenen (2014) observan dos tipos de estrategias de pago de deudas: las estrategias de asistencias y las individualizadas. Dentro de las estrategias de asistencia se encuentran: el uso de las redes sociales; la asistencia de las organizaciones sin fines de lucro; el uso de fondos gubernamentales. Como estrategias individualizadas, las autoras reconocen: *debt jugglin* o pagar el saldo de una tarjeta endeudándose con otra; ignorar o rechazar alguna deuda; el pagar a tiempo; la adquisición de un empleo para pagar deudas y el prescindir de las deudas. Las familias utilizan una variedad de estrategias, sin ser la capacidad de pago el único elemento explicativo de las estrategias utilizadas. Las estrategias de pago se basan, a juicio de las autoras, en las narrativas que las familias movilizan para comprender sus deudas. Las deudas que las mujeres entrevistadas consideraban que promovía la identidad de una persona financieramente responsable eran las que primero se pagaban, mientras que las deudas que se creían injustas se les restaba prioridad. Las decisiones financieras al interior de los hogares pobres dependen del contexto social en el cual se toman las decisiones y de los significados que los individuos les den a sus finanzas (Tash et al., 2018).

Metodología

Los datos que se presentan en este artículo se enmarcan en la primera fase del proyecto “la odisea de llegar a fin de mes: estrategias de pago de deudas de familias jóvenes de clases medias en Santiago y Concepción” financiado por el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica de Chile -FONDECYT de iniciación N°11150161-. Este proyecto busca analizar

las estrategias que los jóvenes de clases medias residentes en Santiago utilizan para responder a una experiencia de endeudamiento. Para ello y con el objeto de caracterizar las formas de endeudamiento y obligaciones crediticias de los jóvenes de clases medias residentes en Santiago, se aplicó una encuesta a través del servidor en línea *surveymonkey* (Bentley, et al., 2018). En términos de procedimiento, la encuesta fue enviada a las bases de datos a través del servidor *surveymonkey*, la que estuvo en línea desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre del 2016. El contenido del instrumento fue certificado por el comité de ética de la Universidad Alberto Hurtado. Para el acceso a la muestra nos apoyamos en las organizaciones de consumidores y deudores de Santiago y las bases de datos de la universidad patrocinante, además de ser difundida mediante nuestro sitio web (www.dedeudasypagos.cl) y en el fanpage de nuestra página de Facebook. La muestra final contó con 770 casos, de los cuales seleccionamos 575 personas, quienes contestaron los ítems asociados a la escala de estrategias de pago. La muestra se compone en su mayoría por mujeres, ubicados en el tramo de edad de 25 a 30 años, solteros, nivel educativo universitario y con ingresos entre \$1 y \$500.000 pesos chilenos⁶.

El cuestionario aplicado constó de 35 preguntas, en donde se incluyeron preguntas de caracterización sociodemográfica, situación laboral y familiar, ingresos, gastos, deudas, percepción de ingresos, deudas y futuro. Por último, se aplicó la escala de estrategias de pago, la cual fue desarrollada en el contexto del proyecto. Esta escala consta de 14 ítems con alternativas de respuesta dicotómicas (sí o no), la cual tiene como principal referencia la propuesta de Tash y Grener (2014).

Respecto a las técnicas de análisis, se aplicó un Latent Class Analysis (LCA), el cual nos permitió analizar la validez de la escala e identificar distintos tipos de comportamiento basados en las estrategias de pago de los encuestados (Oser, 2012). Con los resultados del LCA, buscaremos caracterizar las distintas tipologías generadas según dimensiones de interés: situación laboral, dependencias económicas, tipo de instrumentos financieros y tipos de deudas. Para esto utilizamos pruebas de hipótesis y estadísticos de tamaño efecto, según el nivel de medición de las variables analizadas. Cabe mencionar que, considerando que la

⁶ Tramos de ingresos está medido en peso chileno, 1USD=600 pesos chilenos aproximadamente.

presente investigación tiene un foco exploratorio y no busca realizar inferencias estadísticas, los tests de hipótesis están enfocados a evaluar las diferencias a niveles muestrales.

Resultados

Clases latentes sobre estrategias de pago de deudas

Basado en los resultados del cuestionario desarrollado para caracterizar las formas de endeudamiento y obligaciones crediticias de los jóvenes profesionales deudores de Santiago de Chile, se aplicó un análisis tipológico de clases latentes de estrategias de pago de deudas. Nuestros análisis dan cuenta de tres tipologías de pago de deudas (figura 1): las estrategias múltiples, no financiarizadas e individualizadas. Las diferencias entre ambos grupos refieren a los tipos de recursos que movilizan para poder responder a sus deudas. Así, mientras que los encuestados agrupados en estrategias individualizadas activan principalmente estrategias para las cuales no requieren del apoyo de terceros, los grupos de estrategias no financiarizadas y múltiples, por el contrario, si se apoyan en terceros, particularmente en su red familiar. Este resultado concuerda con las investigaciones desarrolladas en contextos latinoamericanos que dan cuenta de la relevancia de la familia en la transferencia de recursos económicos (Lomitz, 1994; Wilkis, 2010, 2014; Villaroel, 2009; Pérez-Roa, 2014; Han 2012). Las tres tipologías recurren a las familias ya sea solicitando dinero en efectivo u otros tipos de instrumentos financieros para obtener liquidez financiera. En efecto, “tener que pedir dinero a la familia por agobio económico” es un ítem presente con más de un 50 por ciento en los tres grupos. Para los jóvenes deudores chilenos la familia es uno de los primeros recursos que se activan en caso de presentar dificultades de pago de deudas.

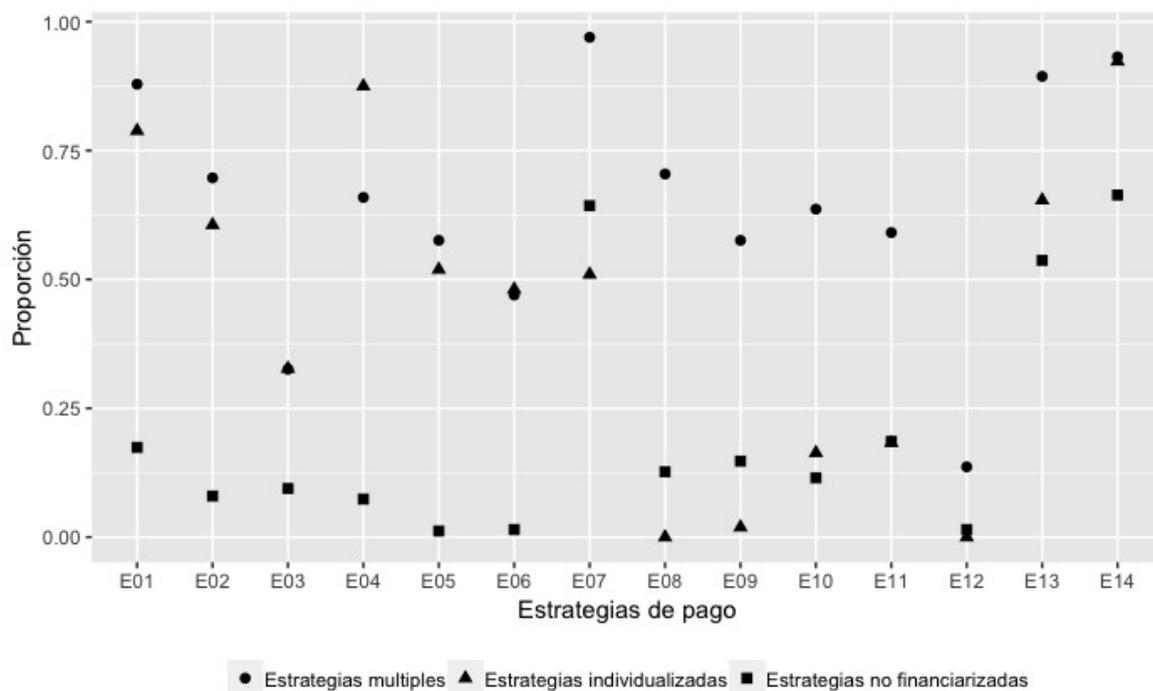
Del mismo modo que los jóvenes encuestados activan redes familiares para superar situaciones de apoyo, nuestro análisis observó que “hacer un presupuesto mensual para reducir los gastos” y “generar nuevas entradas económicas” son dos tipos de estrategias que todos los grupos activan con una prevalencia sobre un 60 por ciento. Estos resultados nos permitirían suponer que los jóvenes encuestados enfrentan dificultades económicas que exigen planificar sus comportamientos económicos futuros. Esta estrategia se subraya en los manuales de deudores como una de las más relevantes para poder enfrentar un endeudamiento problemático, en tanto permiten diagnosticar qué ítem presupuestario está causando el problema y qué gastos se pueden ajustar. Por ende, su alta presencia es coherente

con las acciones que se estiman los deudores deben hacer. Sin embargo, “generar nuevas entradas económicas” ítem particularmente presente en el grupo de estrategias múltiples, requiere, a nuestro juicio, mayor atención. La mayoría de nuestros jóvenes encuestados trabaja de manera dependiente y a tiempo completo, es decir 8 horas diarias, por ende, generar nuevas entradas económicas podría implicar una sobrecarga laboral. En efecto, en la fase cualitativa de este estudio observamos como la doble jornada de trabajo, trabajar los fines de semana y/o generar pequeños emprendimientos eran estrategias muy usadas por los jóvenes deudores para aumentar sus ingresos.

Otra similitud observada en el análisis tiene que ver con el peso de la deuda de estudios en todos los grupos. Este tipo de deuda tiene una presencia por sobre un 60 por ciento en los tres grupos estudiados. Confirmando así la prevalencia de la deuda educativa en los jóvenes que ingresaron al sistema educativo luego de la implementación del crédito con aval del Estado (CAE) en 2006. Ahora bien, lo interesante de observar son las diferencias entre los grupos con respecto a la morosidad de este tipo de deudas. Los encuestados del grupo “estrategias múltiples” son quienes presentaron una morosidad de un 63 por ciento, seguidos por “estrategias no financiarizadas” con un 58 por ciento y, por último, el grupo de “estrategias individualizadas” con un 34 por ciento. Según las cifras de la comisión ingresa el CAE al 2016 registro un 38,7 por ciento de morosidad (Fundación Sol, 2017). Nuestros datos muestran que la deuda universitaria es una tendencia en este grupo etario y que entre aquellas personas que presentan atrasos en el pago de sus deudas, la deuda educativa es una de las más importantes. Si bien, este estudio no busca explicar las razones de dicha morosidad, nuestros datos tensionan el supuesto de base del sistema de financiamiento universitario en Chile que sostiene que todo paso por la educación superior supone en sí mismo una rentabilidad económica y que, al menos teóricamente, no debiera traer problemas con su reembolso. Las cifras de nuestro estudio muestran que gran parte de nuestros encuestados están teniendo problemas para responder mes a mes con esa deuda. Otra posibilidad de análisis es suponer que la politización de las demandas de los deudores educacionales ha llevado a los jóvenes deudores hacia una visión más positiva y reivindicativa del no pago de las deudas (Stout, 2016). En el caso de Chile, esta perspectiva de análisis sería interesante de explorar dada la fuerza del movimiento estudiantil del año 2011 y del peso que han tenido

las organizaciones de deudores educacionales en la construcción de las reivindicaciones estudiantiles (Pérez-Roa, 2014; Rojas, 2017).

Figura 1. Clases latentes según Escala Estrategias de Pago (proporción de respuestas afirmativas)



Nota: Las etiquetas refieren a E1: “Tener que refinanciar los préstamos por cambio en situación económica”. E2: “Tener que refinanciar los préstamos por error en el cálculo de la carga”. E3: “Tener que solicitar al banco aumento de cupo de tarjeta de crédito”. E4: “Tener que solicitar un nuevo préstamo para refinanciar anteriores”. E5: “Tener que solicitar un nuevo préstamo con otra financiera para refinanciar otras deudas”. E6: “Tener que refinanciar los préstamos en uno solo”. E7: “Tener que pedir dinero prestado a la familia por agobio económico”. E8: “Tener que pedir a la familia que te preste cupo en las tarjetas bancarias”. E9: “Tener que pedir un anticipo en el trabajo”. E10: “Solicitar un aplazamiento del pago”. E11: “Vender o subastar bienes materiales”. E12: “Recurrir a prestamistas privados”. E13: “Generar nuevas entradas económicas”. E14: “Tener que hacer un presupuesto mensual para reducir gastos”. N=575. Fuente: Elaboración propia.

Análisis bivariado: situación laboral, dependencias económicas, tipos de instrumentos financieros y tipos de deudas que poseen

Para poder explorar con mayor detalle las características de cada una de las tipologías realizamos un análisis bivariado puntualizando en la situación laboral, dependencias económicas, instrumentos financieros y tipo de deudas activas y morosas, en tanto en dichas variables observamos mayores elementos diferenciadores entre grupos. En el caso de los encuestados agrupados en la clase “estrategias individuales”, observamos que en su gran mayoría (94,5 por ciento) trabajan de manera dependiente y tienen mayores ingresos proporcionalmente que los encuestados de los otros grupos. En este sentido, son un grupo que al menos teóricamente cuenta con mayores recursos económicos para enfrentar sus deudas. Esta mayor holgura económica puede explicar que para este grupo la deuda sea percibida como un problema que puede arreglarse a mediano plazo.

Por otro lado, la seguridad laboral, expresada en la relación contractual de los miembros de este grupo, los transforma en un grupo atractivo para las instituciones financieras. Esto es observable en la posesión y usos de los instrumentos financieros. En este grupo se encuentra los encuestados más bancarizados y con mayor posesión de instrumentos financieros tanto bancarios como no bancarios. Sus deudas activas y sus deudas atrasadas se concentran principalmente en las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. En este sentido, llama la atención el alto nivel de morosidad en las tarjetas de crédito no bancarias comparando con las deudas activas que en este ítem presentan. Del 42 por ciento que declaro estar moroso, un 55 por ciento lo está con las tarjetas de crédito no bancarias. Entendiendo la relevancia que tienen las tarjetas de crédito no bancarias en mercado chileno (Marambio, 2018) y las condiciones poco favorables en términos de tasas de interés y condiciones de pago de este tipo de tarjetas, sería interesante observar con mayor profundidad los usos que este grupo le da a estos instrumentos. Con respecto a las estrategias que activan para responder a sus deudas se detectaron 8 ítems por sobre un 50 por ciento de uso, destacando: “tener que hacer un presupuesto mensual para reducir los gastos” (92%); “pedir un nuevo préstamo para refinanciar anteriores” (88%); “tener que refinanciar los préstamos por cambio en la situación económica” (79%).

En la tipología de “estrategias no financiarizadas” se concentran los encuestados proporcionalmente más jóvenes y sin hijos. Al igual que el grupo de “estrategias múltiples” en este grupo los ingresos se concentran entre 1 y el millón de pesos (1.650\$USD aprox.) y es el grupo con mayor cantidad de trabajadores independientes (22 por ciento). En este grupo, la principal deuda es la universitaria (64%), aunque son el grupo con menor morosidad (33%). Pero aquellos que, si se encuentran en situación de morosidad, el 58 por ciento concentra deudas educacionales. Este grupo activa menos estrategias que los otros dos grupos, destacando con más de un 50 por ciento de respuesta: “tener que hacer un presupuesto mensual para reducir gastos”; “tener que pedir dinero prestado a la familia por agobio económico” y “generar nuevas entradas económicas”. Todas estas estrategias se activan fuera del sistema financiero, sin embargo, es un grupo fuertemente bancarizado. En términos de posesión de instrumentos financieros, el 63 por ciento tiene tarjeta bancaria, el 50 por ciento declara poseer tarjeta de crédito bancaria y el 58 por ciento tiene tarjeta de crédito no bancaria. Es decir, a pesar de estar dentro del sistema financiero, no ocupan dichos instrumentos como estrategia de pago de deudas. Estos resultados nos permiten suponer que el acceso a los instrumentos financieros no necesariamente implica que sean usados como estrategia de pago de deudas. Si bien, nuestro estudio no levanta información sobre las razones de no uso de los instrumentos de crédito podríamos suponer que es una estrategia de disminución de deudas o de “vivir con lo que se tiene”. En este sentido, en estudios anteriores (Pérez-Roa, 2014) observamos como las dificultades de pago de las deudas educativas provocan en algunos deudores un “rechazo a la banca” y un intento de desfinanciarización de la vida cotidiana.

Por último, la tipología de “estrategias múltiples” debe su nombre a que son el grupo que activa más estrategias y que utilizan distintos tipos de recursos en ellas. Este grupo presenta 11 ítem con más de un por 50 por ciento de respuestas, siendo las tres más recurrentes: “tener que pedir dinero prestado a la familia por agobio económico” (97 por ciento); “tener que hacer un presupuesto mensual para reducir gastos” (93 por ciento) y “tener que refinanciar los préstamos por cambio de la situación económica” (88 por ciento). La frecuencia de uso y cantidad de estrategias, nos permiten suponer que son el grupo que enfrenta mayores dificultades económicas. Desde la literatura económica, las familias son más vulnerables financieramente cuando atraviesan shock económico asociado a quiebras familiares, pérdidas

de empleo o problemas de salud. Sin embargo, en el caso de este grupo, el 84 por ciento son profesionales con empleos dependientes, pero son el grupo con los ingresos proporcionalmente más bajos. La insuficiencia de ingresos podría explicar estas dificultades financieras. En efecto, según la última encuesta de presupuestos familiares (INE, 2018) un profesional en la ciudad de Santiago gasta mensualmente más de \$200.000 (400\$UDS aprox.) de lo que ingresa. Es decir, para muchos profesionales su salario no le permite responder a sus necesidades básicas. En el caso de los encuestados de este grupo sus dificultades financieras se observan también en el alto porcentaje de morosidad (61%). Las deudas de este grupo se concentran principalmente en deudas educativas y las deudas con parientes y/o amigos, ambas por sobre el 60 por ciento. Por los datos recogidos podemos suponer que su situación podría explicarse por el peso de la deuda de estudios en relación a su salario y/o por las dependencias económicas. En este sentido, resulta interesante observar que el 51 por ciento de los encuestados de este grupo tiene hijos y el 72 por ciento tiene dependientes económicos fuera del hogar, es decir, apoyan económicamente a otras personas que no residen en el mismo techo. Sin embargo, a pesar de su morosidad y del repertorio ampliado de estrategias que este grupo declaró activar, son el grupo con menor posesión de instrumentos financieros con una media de 3 tarjetas por encuestado. Es más, la mayoría de ellos no tiene ni tarjetas bancarias, ni de crédito. Los encuestados agrupados en “estrategias múltiples” parecen representar a los jóvenes deudores del sistema educacional cuyos ingresos no le permiten cubrir sus necesidades, sus deudas y los requerimientos económicos asociados a sus dependencias económicas, razón por la cual recurren principalmente a sus redes familiares buscando apoyo económico.

Uno de los hallazgos de esta investigación refiere a las dependencias económicas. Entendiendo el peso que tienen las transferencias económicas de las familias y los vínculos de apoyo intergeneracional que entre los miembros de las familias se establecen, decidimos incorporar dentro del cuestionario la pregunta por las dependencias económicas dentro y fuera del hogar. Nuestros resultados dan cuenta de la presencia de dependencias económicas en los tres grupos estudiados. Los encuestados agrupados en “estrategias individualizadas” y los de “estrategias múltiples” son los que tienen proporcionalmente más hijos, por ende, son los que tienen mayores dependencias dentro del hogar. Sin embargo, cuando les preguntamos por las dependencias dentro y fuera del hogar los encuestados de ambas tipologías presentan

dependencias por sobre el 70 por ciento. En el caso de las “estrategias no financiarizadas”, un 57 por ciento declaro tener dependencias económicas dentro y fuera del hogar. Si bien no era el objeto de estudio caracterizar estas dependencias, si podemos suponer que éstas refieren a padres o personas mayores que son apoyados económicamente por los encuestados. Es relevante considerar que los padres de nuestros encuestados son parte de la primera generación que jubila bajo un nuevo régimen privado de pensiones. Este sistema ha implicado que la capacidad adquisitiva de los jubilados decrezca considerablemente. En Latinoamérica las familias son el punto de partida de toda red social de intercambio y de distribución económicas (Lomitz, 1998), por ende, es la institución que soporta los avatares económicos de sus miembros. En este sentido, quienes se encuentran activos en el mercado laboral transfieran recursos a aquellos que presentan mayores desventajas económicas. A pesar de que es sabido que las familias juegan ese rol, los nuevos contextos de precarización de las condiciones laborales de los jóvenes y el peso económico que para muchos jóvenes implica transitar al mundo adulto arrastrando importantes deudas educativas hacen que ese sostener económicamente a un tercero se vuelva cada vez más difícil.

Bibliografía

- Bentley, F. R., Daskalova, N., & White, B. (2017). Comparing the Reliability of Amazon Mechanical Turk and Survey Monkey to Traditional Market Research Surveys. *Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems - CHI EA '17*, 1092–1099.
- Bowen, W. G., Chingos, M. M., & McPherson, M. S. (2009). *Crossing the finish line: Completing college at America's public universities* (Vol. 52). New Jersey: Princeton University Press.
- Brannen, J. (2005). Mixing Methods: The Entry of Qualitative and Quantitative Approaches into the Research Process. *International Journal of Social Research Methodology* 8(3), 173–184.
- Danaher, G., Schirato, T., & Webb, J. (2000). *Understanding Foucault*. London: Sage Publications.
- Denegri, M., García, C., & González, N. (2011) Definición de bienestar subjetivo en adultos jóvenes profesionales chilenos. Un estudio con redes semánticas naturales. [Definition of subjective well-being in young Chilean professional adults. A study with natural semantic networks]. *CES Psicología* 8(1), 77-97.
- Dwyer, R. E., McCloud, L., & Hodson, R. (2012). Debt and graduation from American universities. *Social Forces*, 90(4), 1133-1155.
- Dwyer, R. E., McCloud, L., & Hodson, R. (2011). Youth debt, mastery, and self-esteem: Class-stratified effects of indebtedness on self-concept. *Social Science Research*, 40(3), 727-741.
- Banco Central de Chile (2018). Encuesta Financiera de Hogares 2017. [Household Financial Survey 2017]. Retrieved from: <https://www.efhweb.cl/>
- Evans, C., & Donnelly, M. (2018). Deterred by debt? Young people, schools and the escalating cost of UK higher education. *Journal of Youth Studies*, 21(9), 1-16.
- Han, C. (2012) *Life in Debt: Times of Care and Violence in Neoliberal Chile*. California: University of California Press.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2018). VIII Encuesta de Presupuestos Familiares. [VIII Survey of Family Budgets]. Retrieved from: <http://www.ine.cl/estadisticas/ingresos-y-gastos/epf>
- Kim, D. (2007). The effect of loans on students' degree attainment: Differences by student and institutional characteristics. *Harvard Educational Review*, 77, 64–100.

- Leicht, K., & Fitzgerald, S. T. (2006). *Postindustrial peasants: The illusion of middle-class prosperity*. New York: Worth Publishers.
- Lomnitz, L. (2004). Family, Networks and Academics, *Ethnos*, 69(1), 113-126.
- Marambio, A. (2018). Narratives of Social Mobility in the Post-Industrial Working Class and the Use of Credit in Chilean Households. *Revue de la Regulation*, 22.
- McCloud, L., & Dwyer, R. E. (2011). The fragile American: hardship and financial troubles in the 21st century. *The Sociological Quarterly*, 52(1), 13-35.
- Oser, J., Hooghe, M., & Marien, S. (2013). Is Online Participation Distinct from Offline Participation? A Latent Class Analysis of Participation Types and Their Stratification. *Political Research Quarterly*, 66(1), 91-101.
- Seefeldt, K. S. (2015). Constant Consumption Smoothing, Limited Investments, and Few Repayments: The Role of Debt in the Financial Lives of Economically Vulnerable Families. *Social Service Review*, 89(2): 263-300.
- Stout, S. (2016.) Indebted: Disciplining the moral valence of mortgage debt online. *Cultural Anthropology*, 31(1): 82-106.
- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras SBFI. (2017). Informe de endeudamiento en Chile 2017. [Indebtedness report in Chile 2017]. Retrieved from: <https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Publicaciones?indice=15.3&idPublicacion=451&idContenido=11891&idCategoria=2496>
- Tach, L & Sterbberg, G. (2014). “Robbing Peter to Pay Paul”: Economic and Cultural Explanations for How Lower-Income Families Manage Debt. *Social Problems*, 61(1): 1-21.
- Tach, L., Halpern-Meehan, S., Edin, K., & Amorim, M. (2018). “As Good as Money in the Bank”: Building a Personal Safety Net with the Earned Income Tax Credit. *Social Problems*, 65(1): 1-21.
- Urzúa, S. (2012). La rentabilidad de la educación superior en Chile: revisión de las bases de 30 años de políticas públicas. [The profitability of higher education in Chile: review of the bases of 30 years of public policies]. *Estudios Públicos*, 125: 1-52.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

La segregación ocupacional en el mercado laboral por razón de sexo. Un análisis del caso colombiano: 2007-2018

Nayssa Alejandra Marín y Lucy Victoria Ojeda

Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga/Colombia.

Uniciencia Bucaramanga.

nlmarin@uc.cl

lucyvictoria@outlook.com

Resumen

La ponencia se propone analizar la segregación ocupacional por sexo en el mercado laboral en Colombia con base en una comprensión teórico-conceptual del desarrollo humano, la segregación sexual del trabajo y la feminización del mercado laboral. Para ello, se utilizó la estadística descriptiva, a partir del procesamiento de los datos de personas ocupadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en los años que van del 2007 al 2018, y se aplicó el Índice de Disimilitud de Duncan, para mostrar el grado de segregación y, a su vez, el avance o retroceso que ha tenido lugar con el paso de los años. Entre los resultados principales se evidencia que el índice de Duncan llega a ser superior a 0,7 en algunos años, lo que representa una alta segregación; lo cual significa que en Colombia existen actividades económicas caracterizadas por mayor participación de las mujeres y actividades con mayor participación de los hombres. Adicionado a lo anterior, las actividades en las que la concentración de mujeres es mayor, tienen un promedio de ingresos laborales inferior a las actividades con concentración mayoritaria de hombres.

Palabras clave: MUJER – DISCRIMINACIÓN LABORAL - SEGREGACIÓN OCUPACIONAL - ÍNDICE DE DISIMILITUD - DESIGUALDAD DE GÉNERO.

Introducción

Las mujeres enfrentan un conjunto de desigualdades y obstáculos a su desarrollo en todas las esferas de la sociedad. En el mercado laboral, específicamente, debe enfrentar la segregación sexual, las barreras de acceso e inserción a los puestos de trabajo, la diferencia de oportunidades y recursos, la discriminación, la violencia, el desempleo, la poca representación en el diálogo social dentro de las empresas y los desequilibrios de poder que caracterizan las relaciones entre hombres y mujeres bajo un sistema heteropatriarcal sexista.

Así pues, la ponencia tiene como propósito principal analizar la segregación ocupacional por sexo en el mercado laboral en Colombia. Se parte desde la hipótesis de que existe desigualdad de género en el mercado laboral y que ésta se ve evidenciada en las áreas de ocupaciones en las que se desempeñan las mujeres en el país.

Tal objetivo implicó una comprensión teórico-conceptual del desarrollo humano, la segregación sexual del trabajo y la feminización del mercado laboral. Haciendo referencia a los derechos, libertades y oportunidades civiles básicas, enfocados en la discusión sobre el principio de la no-discriminación, los debates contemporáneos sobre la economía feminista y la forma en que la cultura impacta las actividades productivas y reproductivas de la sociedad.

Por otra parte, lo metodológico se extiende a una aproximación cuantitativa, en donde se utilizó la estadística descriptiva a partir del procesamiento de los datos de personas ocupadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en los años que van del 2007 al 2018. De esta forma, se aplicó el Índice de Disimilitud de Duncan, para mostrar el grado de segregación y, a su vez, el avance o retroceso que ha tenido lugar con el paso de los años. Para ello, se utilizó la actividad que declara el/la respondiente respecto a su trabajo principal. Las ramas de actividad económica que se utilizaron son establecidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) por secciones.

Por último, se presentan unas conclusiones que traen a colación los resultados obtenidos a la luz de la teoría expuesta en la primera sección, entendiendo que las construcciones sociales de roles de género impactan en la estructura económica de Colombia, manteniendo inequidades y segregación ocupacional.

La economía feminista y la segregación sexual en el trabajo

La segregación ocupacional se define como la existencia de ocupaciones, oficios o actividades que concentran trabajadores (as) de uno u otro sexo, y/o la casi inexistencia de hombres y mujeres ejecutando la misma labor y, por lo tanto, que no están en competición entre sí por los mismos empleos. (Hakim, 1991)

Hombres y mujeres se distribuyen consciente o inconscientemente las ocupaciones de desigual nivel, desempeñando tareas diferentes que usualmente confinan a las labores femeninas a los rangos más bajos del empleo, en cuanto a cualificación, prestigio y remuneración, lo cual repercute en las oportunidades de movilidad social, impidiendo que las mujeres alcancen los escalones más altos de la estructura social y ocupacional, reforzando así estereotipos de género que tienen como efecto la reproducción permanente de la misma problemática. (Bello & Sepúlveda, 2016, p. 16)

Esta distribución de ocupaciones no es algo que se realiza al azar, sino que obedece a un reparto sistémico de los trabajos basadas en estructuras socioeconómicas y políticas de roles de género. De esta forma, entre los trabajos masculinizados, cuanto mayor sea la recompensa económica, más será valorado; sin embargo, para el caso de los trabajos feminizados, el reconocimiento social es mayor cuanto menor sea el valor económico, pues bajo los parámetros de la feminidad, es más valioso si las labores son realizadas gratuitamente, por amor –por ejemplo, las labores del hogar o el sexo-.

Esta diferencia en las percepciones es uno de los tópicos que debate el feminismo, que es un movimiento de mujeres que enfatiza en la libertad, la agencia individual y colectiva, mas también es una posición teórica, ética y política que pretende desarmar las construcciones sociales de género que ligan a las mujeres con posiciones desventajosas frente a los hombres.

Así como los feminismos -que son muchos y han evolucionado a través de los años-, la economía feminista tampoco es una sola. Aunque existen diversos enfoques, es posible clasificarla mediante dos perspectivas: la ortodoxa, que trata de mantener el discurso neoclásico modificando la inclusión de las mujeres dentro de sus metodologías de análisis, y la heterodoxa, que considera que hay un problema de fondo que hay que solucionar desde el foco de la equidad social.

Entre las ortodoxas, el enfoque de la economía de género o de igualdad de oportunidades, considera que el problema es la aplicación de un método científico de corte machista, el cual permite la exclusión de las mujeres de los análisis del conjunto de datos, en otras palabras, lo que sugiere es desagregar los datos por sexo para así poder percibir las diferencias en el reparto de los trabajos y los recursos que requieran explicación.

Estos enfoques son los más utilizados, pues al ser más simples de incorporar, han sido incorporados en el discurso de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y son justificadas en términos de eficiencia, ya que una mayor utilización de recursos –en este caso, de la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo–, favorecería la producción y, por ende, aumentaría el bienestar de la sociedad. (Pérez, 2014)

La carencia de este enfoque radica en que se le otorga nula o poca importancia a los aspectos culturales, históricos y psicológicos de las relaciones humanas. En consecuencia, se aprecia la incorporación de aquellos asuntos en las estrategias, pero sin una transformación en las relaciones de poder, lo que termina siendo paños de agua tibia que no solucionan el problema de la discriminación. (Bello & Sepúlveda, 2016, p. 14)

Es por ello que es necesario “ponerse las gafas de género” y analizar la situación desde una posición sensible a las desigualdades, comprendiendo las relaciones económicas significativas que surgen en la producción y reproducción del ser humano y analizando los posibles paradigmas sexistas que sesgan las interrelaciones de las problemáticas con su verdadero origen.

Metodología

Para comprobar la hipótesis que se planteó este documento (la existencia de desigualdad en el mercado laboral colombiano por sexo, la cual puede ser explicada por la existencia de especialización por sexo en ciertos sectores de la economía), se tomaron los datos de la actividad que declara el/la respondiente respecto a su trabajo principal en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) desde el 2008 hasta el 2018 y con ellos se construyó el Índice de Disimilitud de Duncan.

El índice de Disimilitud de Duncan ((Duncan & Duncan, 1955) se obtiene de la expresión:

$$ID_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left| \frac{m_i}{M} - \frac{h_i}{H} \right|$$

En donde:

$\frac{m_i}{M}$ Es la proporción de mujeres ocupadas en el sector económico i respecto al total de mujeres ocupadas en el año k .

$\frac{h_i}{H}$ Es la proporción de hombres ocupados en el sector económico i respecto al total de hombres ocupados en el año k .

i = Sectores económicos de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) -adaptadas para Colombia por el DANE- a un nivel de desagregación 2. Tomando valores entre el 01 y el 99 de acuerdo a la categorización hecha por el DANE.

k = años incluidos en este estudio. Tomando valores entre el 2008 y el 2018.

El ID se moverá entre 0 y 1, siendo 0 ninguna disimilitud y 1 segregación total Aunque en algunos estudios se ha establecido que un índice entre 0 y 0,3 se considera baja segregación; entre 0,3 y 0,6 moderada, y de 0,7 y más, alta (Ministerio de Educación (Chile), 2012).

Sin embargo, existen algunas críticas a este indicador. Una de esas es su sensibilidad cuando se analizan muchas categorías, como en este caso, en donde se analizan 60 categorías relacionadas con la actividad económica, por eso, se aplicó el indicador para las 60 categorías y para los 17 macro sectores económicos que establece el CIIU.

Resultados y discusión

A continuación se presentará un breve contexto de la segregación ocupacional por sexo en Colombia, acompañado del índice de Duncan.

3.1 Contexto

En Colombia existe brecha entre la participación en el mercado laboral productivo entre los hombres y las mujeres. De acuerdo con el DANE, En el último trimestre móvil del año 2018, la brecha entre ambos sexos fue del 22.37%. No obstante, es notorio que este comportamiento entre el 2008 y el 2018, sólo ha variado en -3,24 puntos porcentuales.

Sumado a lo anterior, según estadísticas de la CEPAL expuestas en el Gráfico 1, la relación entre los salarios de los hombres y las mujeres que se insertan en el mercado laboral, es desventajosa, pues no existe una paridad del 100%. Aunque se observa que, en los últimos años, a mayor cantidad de años de instrucción de las mujeres, mejor relación de ingresos con los hombres, la cifra sigue estando entre 28 y 36 puntos porcentuales por debajo.

Gráfico 6

Relación del ingreso medio entre los sexos por años de instrucción

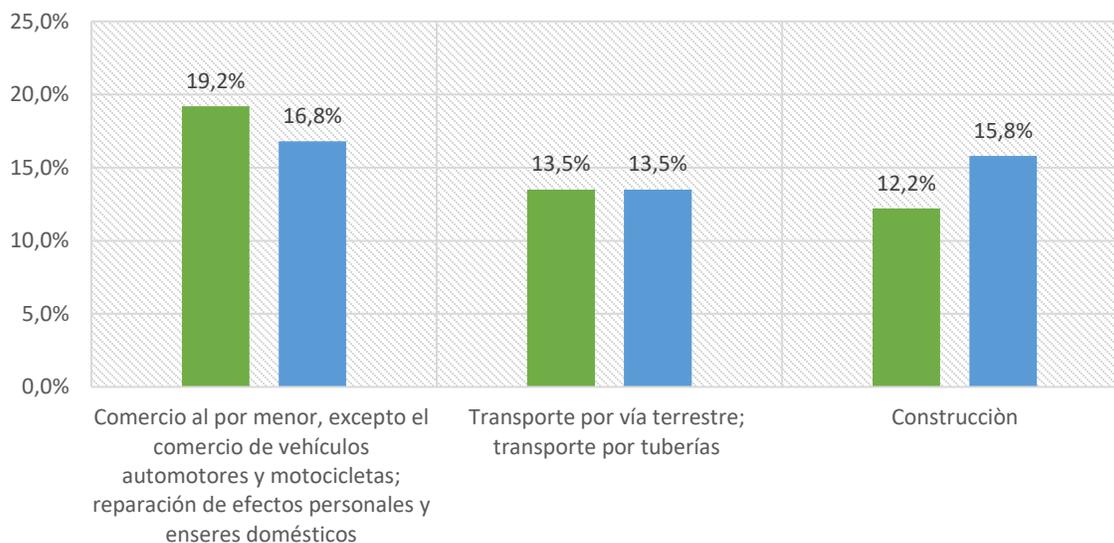


Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL

De acuerdo a los datos de la GEIH, las actividades en las que más se concentraban los hombres (respecto al total de hombres) en el 2008 eran: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos (19,2%), Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías (13,5%) y Construcción (12,2%). En el 2018 se mantuvieron las mismas actividades económicas, pero con porcentajes distintos.

Gráfico 7

Actividades con mayor concentración de hombres en el 2008 y 2018

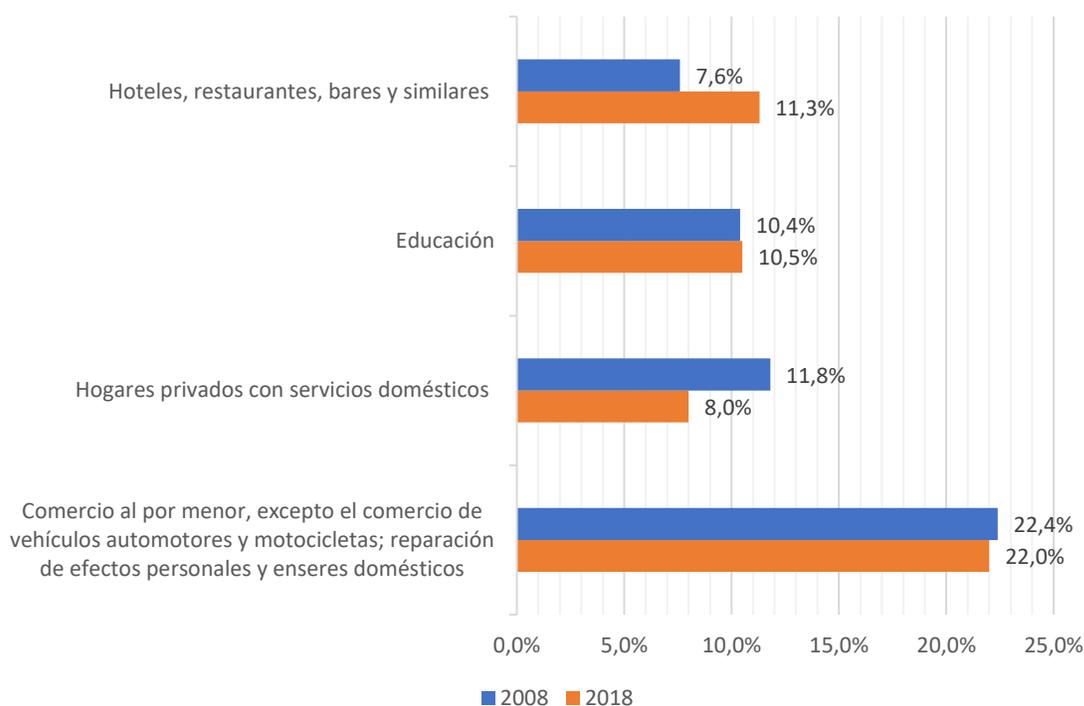


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

Con respecto a las mujeres, en el Gráfico 3 se puede apreciar que las actividades en las que más se concentraban las mujeres (respecto al total de mujeres) en el 2008 y 2018 eran: Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos; Hogares privados con servicios domésticos; Educación; Hoteles, restaurantes, bares y similares.

Gráfico 8

Actividades con mayor concentración de mujeres en el 2008 y 2018



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

Los Gráficos 2 y 3 nos muestran que, primero, en Colombia el comercio al por menor es la actividad en la que más trabajan los (as) colombianos (as), indistintamente de su sexo, sin embargo, esta es una de las actividades económicas que más contribuye a engruesar las cifras de informalidad laboral del país, dadas las condiciones precarias de su ejecución.

Por otro lado, es posible discernir que las actividades como cocinar, educar y las labores domésticas son comúnmente asociadas a las mujeres, dadas unas construcciones culturales de género en las que se cree que las mujeres están predispuestas genéticamente a realizar este tipo de actividades. De la misma forma, la construcción y el transporte son labores asociadas a la fuerza, resistencia y orientación, características usualmente asignadas a los hombres.

Estos imaginarios colectivos de roles de género son evidenciados nuevamente al constatar las actividades en las que existe mayor diferencia entre sexos; para los hombres se encuentran las siguientes:

- Extracción de carbón, carbón lignífico y Turba
- Explotación de minerales no metálicos
- Fabricación de productos elaborados de Metal, excepto maquinaria y equipo
- Construcción
- transporte por vía terrestre; transporte por Tuberías
- A la inversa, las actividades mayoritariamente femeninas fueron:
- Fabricación de productos textiles
- Fabricación de prendas de vestir; preparado Y teñido de pieles
- Servicios sociales y de salud
- Hogares privados con servicio doméstico
- Otras actividades de servicios⁷

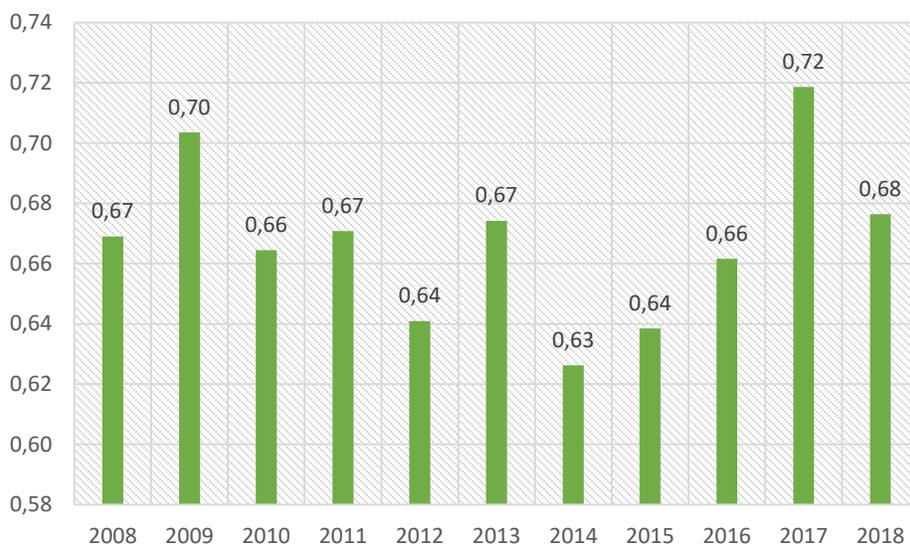
3.2 Índice de Duncan

Para Colombia entre el 2008 y el 2018 el índice de Duncan fue superior al 0,6 para las secciones enunciadas a continuación: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y Comunicaciones; Intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Servicios sociales y de salud; Otras actividades de servicios Comunitarios, sociales y personales; Hogares privados con servicio doméstico; Organizaciones y órganos Extraterritoriales.

⁷Incluye actividades económicas relacionadas con: Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco; peluquería y otros tratamientos de belleza; Pompas fúnebres y actividades conexas; otras actividades de servicios ncp.

Gráfico 9

índice de Duncan por secciones del CIU



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

El índice de Duncan fue incluso superior a 0,7 en algunos años, lo que representa una alta segregación y es coherente con lo presentado anteriormente, en la medida que existen en Colombia actividades económicas caracterizadas por mayor participación de las mujeres y actividades con mayor participación de los hombres.

Lo anterior es importante si se tiene en cuenta que las actividades en las que la concentración de mujeres es mayor, tienen de forma comparativa, un promedio de ingresos laborales inferior a las actividades con concentración mayoritaria de hombres, tal como se observa en la Tabla 1, pues mientras que una de las actividades masculinas llega a tener un promedio cercano a los mil dólares ⁸, la mayoritariamente femenina es apenas cercana a los 500⁹.

⁸ El Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia para el 2019 (sin contar auxilio de transporte) es de USD 276

⁹ La conversión a dólar utilizada de aquí en adelante, se obtuvo asumiendo una tasa de cambio de 3.000 pesos colombianos por cada dólar.

Tabla 2

Promedio de ingreso laboral por actividad económica predominante por sexo¹⁰

Hombres		Mujeres	
Extracción de carbón, carbón lignífero y Turba	USD 947	Servicios sociales y de salud	USD 470
Explotación de minerales no metálicos	USD 373	Hogares privados con servicio doméstico	USD 201
Construcción	USD 279	Otras actividades y servicios	USD 169
Transporte por vía terrestre; transporte por Tuberías	USD 261	Fabricación de prendas de vestir; preparado Y teñido de pieles	USD 165
Fabricación de productos elaborados de Metal, excepto maquinaria y equipo	USD 225	Fabricación de productos textiles	USD 117

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la GEIH - DANE.

Conclusiones

Es claro que existe una alta segregación por sexo en Colombia, en donde por actividades económicas se tienen diferencias significativas entre la participación de los hombres y las mujeres, tal y como lo mostró el Índice de Disimilitud de Duncan, entre el 2008 y el 2018 la segregación no ha sido inferior a 0,6.

La segregación por actividades económicas por sexo, puede influir en las desigualdades de ingresos por sexo latentes en el mercado de trabajo, pues mientras las actividades económicas con mayor participación de hombres perciben ingresos laborales promedio altas en

comparación con el Salario Mínimo Legal Vigente colombiano, las de las mujeres sólo llegan a duplicarle en el mejor de los casos.

Así pues, entre las recomendaciones es posible argüir que el Estado colombiano no puede conformarse sólo con aumentar las tasas de participación de las mujeres, pues existen problemas de fondo que siguen incidiendo en la desigualdad de la mujer y, por consiguiente, en su segregación laboral por razón de su género. La existencia de segregación y desigualdad por género en el mercado laboral refuerza estereotipos sexuales (algunas ocupaciones son hechas en su mayoría por mujeres y por ende hay un estereotipo); también contribuye a la menor remuneración salarial femenina (dado a que las áreas de actividad en la que se ocupan generalmente tiene promedios de salario más bajos respecto a las áreas en las que se ocupan los hombres), y a la instauración de barreras de entrada a las mujeres que desean ejercer una profesión diferente a las estereotipadas como femeninas (por ejemplo: los hombres en la explotación de minas y canteras, y las mujeres en la educación).

A su vez, todo ello desencadena efectos adversos para las mujeres en cuanto a movilidad social, pues debido a la reproducción de estos problemas estructurales de desigualdad de género, la posibilidad de ascenso social dentro de la misma generación y futuras es más difícil, aumentando la brecha social existente entre sexos.

La tarea pendiente entonces, está en buscar políticas que incentiven a la población femenina a especializarse en ocupaciones con mejores condiciones laborales, así como en procurar iniciativas gubernamentales que logren reducir el esfuerzo de la mujer en el trabajo no pagado y equilibren las responsabilidades entre hombres y mujeres en el hogar, la revisión a las normativas vigentes que promuevan la desigualdad en la inserción, por ejemplo, las licencias de maternidad y paternidad, así como en actividades culturales y pedagógicas que incidan en el cambio de paradigmas con respecto a las construcciones de género imperantes en la sociedad colombiana.

Bibliografía

- Bello, M., & Sepúlveda, P. (2016). Monografía para optar por el título de Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo. Segregación laboral por sexo en las grandes ramas de la actividad económica en Colombia 2008-2013. Bogotá: Universidad de la Salle.
- Duncan, O., & Duncan, B. (1955). A Methodological Analysis of Segregation Indexes. *American Sociological Review*, 2010-217.
- Esquivel, V. (2016). La economía feminista en América Latina. *Nueva Sociedad* No. 265 , 103-116.
- Hakim, C. (1991). etul slaves and self made women: Fact an fantasy in women´s work orientations. *European Sociological Review*. 7 (2), 101-121. Obtenido de <http://esr.oxfordjournals.org/content/7/2/101>
- Ministerio de Educación (Chile). (2012). Medidas de segregación escolar: discusión del caso chileno. Santiago de Chile: Ministerio de Educación. Obtenido de https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/A1N12_Segregacion.pdf
- Pérez, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños.
- Vásconez Rodríguez, A. (2017). Crecimiento económico y desigualdad de género: Análisis de panel para cinco países de América Latina. *Revista de la Cepal* No.122, 85-113.

MESA 8: BIENESTAR, POLÍTICA SOCIAL Y POBREZA

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Entre la creciente desigualdad, el bienestar cambio de rumbo. Notas analíticas comparativas sobre políticas sociales en Argentina, Uruguay y Chile

Patricia Elizabeth Scarponetti*

Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Sociales, UNC, Córdoba, Argentina.

pscarponetti@yahoo.com.ar

Resumen

En lo que va del siglo, la expansión del debate sobre las políticas sociales en la región convalidó cada vez más un destacado y transdisciplinario análisis, enmarcado en los agudos procesos de cambios sociales acaecidos en la Región. Su permanente controversia política, académica y técnica, emergió signado por transformaciones diversas y por el crecimiento sostenido de la desigualdad. Las transformaciones en el mercado laboral configuraron una nueva matriz societaria, caracterizada por el pasaje desde políticas sociales con eje en una protección social *contributiva* hacia políticas sociales *no contributivas*. Se abrió así el famoso *combate a la pobreza* auspiciado por organismos internacionales. Este viraje que eclipsara los modos previos de implementar políticas sociales en Uruguay, Chile y Argentina desde una matriz *estadocéntrica* hacia una *mercadoocéntrica*, fue implementado por gobiernos que, aún de diferente signo político, permite caracterizarlas como un modelo *híbrido*. Se propone presentar la dinámica del debate a partir de una comparación *transcontextual*, reconociendo a cada uno de los tres países como contexto de estudio; se entiende aquí dos niveles de contextos, por un lado, los cambios económicos internacionales, así como su impacto en cada uno de los países de referencia en términos de legitimidad política.

Palabras claves: BIENESTAR, DESARROLLO – CIUDADANÍA - PROTECCIÓN SOCIAL - DERECHOS SOCIALES.

Introducción

Las retóricas de las políticas sociales nos proveen de marcas de sentido tanto del porqué como del para qué, determinado la extensión de sus implementaciones y los modos de provisión del bienestar a las poblaciones de un determinado territorio. Sin embargo, no siempre se puede visualizar cómo es que sus contenidos se mantienen o reconfiguran. En sus sucesivas transiciones históricas y en las diferentes versiones de sus finalidades e implementaciones, si no nos detenemos a pensar porque a veces se apela al bienestar y otras a la protección social o al riesgo social, a los derechos de la ciudadanía o a los derechos sociales, no podremos observarlas o evaluarlas en el marco de su complejidad histórica acumulada. Sobre todo, en correlación con los límites que marcan el juego de la legitimidad política en cada uno de los países de referencia, de modo tal que posibilite captar un conjunto de dimensiones que prefiguran el debate sobre las políticas sociales.

En el devenir histórico de Uruguay, Chile y Argentina, dar cuenta de la problemática que acarrea la provisión de bienestar social en la conjunción entre democracia y capitalismo ha derivado hacia el tratamiento de dos cuestiones; si por un lado la discusión ha girado sobre los valores democráticos y las funciones del Estado respecto al mercado frente a las desiguales condiciones de origen de los ciudadanos de cada Estado-Nación, otro tipo de examen, fruto de sucesivas y complejas controversias sobre la relación entre capitalismo y Estado del Bienestar, encuentra su punto de inflexión en las tensiones entre la primacía de las transformaciones económicas por sobre las políticas. Si en el primer caso se privilegia los factores sociopolíticos como estructurador analítico, en la segunda línea de análisis se dirime que posibilidades les quedan a los Estados democráticos en el marco de la actual fase capitalista¹.

Las interrogaciones sobre el discurso político que sustenta los cambios semánticos que operan en las políticas sociales e inciden en sus implementaciones presenta varias vías de análisis; una de ellas es la explorada por Panizza (2002) en términos de hegemonía, en base a la recuperación del concepto gramsciano²; sin embargo, ha señalado el autor, un proyecto

¹ Un tratamiento más extenso véase en Scarponetti Patricia SCARPONETTI Patricia (2018) Políticas Sociales en el siglo XXI. Notas analíticas para observaciones comparativas entre Uruguay, Chile y Argentina. Serie *Working Papers*. INCASI.

² “Una propuesta política será verdaderamente hegemónica cuando aparece no solamente como la mejor sino como la única posible (...) Cuando un discurso se constituye en hegemónico él mismo se cristaliza en ciertos

político siempre contará con otros proyectos antagónicos amenazantes del propio, conformados en *espacios míticos persuasivos* de la posibilidad de otro orden social; *redescripciones* que posibilitan frente a eventos críticos que jaqueen el orden existente, cuestionar sus principios. En tal sentido emergen una serie de retóricas sobre el combate a la pobreza que en nombre de los derechos sociales y las desigualdades de origen opacan el sentido de las políticas sociales. Así se hipotetiza sobre la base documental aquí revisada, que más allá de las similitudes materiales de las reformas estatales introducidas, y en particular en la implementaciones vigentes de las políticas sociales en cada uno de los tres países, éstas son posibles según diversos niveles de legitimidad de acuerdo a un acervo político previo de sus culturas políticas.

Ambos tipos de conjunciones analíticas han derivado en intentos de analizar lo político y lo económico mediante modelizaciones que ponderan uno y otro acento de la discusión, lo cual nos insta a varios interrogantes medulares ¿Cuál es el parentesco entre políticas sociales y políticas económicas? ¿Pensadas desde una estrategia de desarrollo es posible todavía pensarlas articuladas en regímenes y estados de bienestar? ¿Son las políticas sociales un gasto o una inversión social? ¿Resulta posible sostener que la deriva hacia la atención de la pobreza y las vulnerabilidades eclipsen la exclusión social ya advertida en la región? ¿Qué sucede con los derechos sociales reconocidos a los trabajadores, así como los servicios y bienes sociales desmercantilizados respecto de la ciudadanía en su conjunto? Ante tal situación se propone a continuación un examen de algunas cuestiones que han guiado y guían el debate sobre las políticas sociales.

arreglos institucionales que le permiten adquirir consistencia en el presente y perpetuarse en el futuro, conformando los supuestos de una cultura política determinada". Panizza, Francisco "Discurso e instituciones en la reforma de la administración pública uruguaya", en Revista Uruguaya de Ciencia Política, núm. 13, 2002, pp. 59-93, véase p. 63.

Los estudios sobre políticas sociales y Regímenes de Bienestar

Sin duda la historización de modelos ha sido el enmarque de tipologías sobre el Estado y los regímenes de Bienestar en la región. Partiendo de aquella literatura extra regional de referencia, encontramos una definición acerca de qué es un Estado de Bienestar:

‘Un Estado de Bienestar es un Estado en qué el poder organizado es usado deliberadamente (a través de la política y la administración) en un esfuerzo para modificar el juego de las fuerzas de mercado en por lo menos tres direcciones – en primer lugar, para garantizar a individuos y familias un ingreso mínimo independientemente del valor de mercado de su trabajo o sus propiedades; en segundo lugar, para reducir el nivel de su inseguridad al permitir que los individuos y sus familias puedan enfrentarse a determinadas «contingencias sociales» (por ejemplo, enfermedades, vejez o desempleo) que de lo contrario conducen a crisis familiares o individuales; en tercer lugar, asegurando a todos los ciudadanos sin distinción de estatus o clase los estándares más elevados de acceso a un rango convenido de servicios sociales»³.

Si tratamos de extraer los elementos centrales del concepto vertido estamos ante una apreciación de las funciones del Estado sobre el mercado para asegurar los individuos y sus familias su reproducción social, más allá de los riesgos “naturales de la vida”, y de sostener su condición ciudadana frente al acceso de bienes colectivos. Es por estas razones que en los últimos años, los análisis practicados en la región refieren con mayor o menor grado de profundidad a la señera obra de Esping Andersen (2000). En base a una reconstrucción histórica de los modelos de regímenes de bienestar europeos ha partido de enunciar su construcción en un determinado tipo de asociación entre el Estado, el mercado y la familia. Como soporte de construcción de sus esquemas interpretativos, señala las relaciones que priman en diversos grados, de tres dimensiones nucleares: *mercantilización / desmercantilización* de los servicios sociales, lo cual significa observar cuál es *el grado en que el Estado de bienestar garantiza el derecho al acceso a un bien o servicio social,*

³ Guisepe Messina traduce la definición de Asa Briggs, «The Welfare State in Historical Perspective», en C. Pierson y F. G. Castles (coord.), *The Welfare State Reader*, Polity Press, Bristol, 2006, p. 18-31, En Mesina G. 2010, p. 293.

independientemente de la participación en el mercado. Subyace en esta dimensión cuáles serán los bienes y servicios sociales tendientes a ser proveídos por el Estado para perder de modo parcial o total su carácter de mercancía; los debates más comunes se enfrentan en torno a la educación y la salud. La segunda dimensión refiere al estadocentrismo / residualismo cuya comprensión alude a la relación público/privada en la previsión social, y al lugar que ocupa la dependencia del individuo respecto de la familia o, inversamente, al aumento de la capacidad individuales sobre los recursos económicos, independiente de las reciprocidades familiares o conyugales, cuya proyección hace un régimen de bienestar más familiarista o desfamiliarista; son estos elementos de la relación entre individuo y familia los que determinarán si estamos antes un modelo de tipo liberal residual, conservador corporativo y socialdemócrata, conducente a la estratificación social de las poblaciones⁴.

Revisados distintos diagnósticos, existe ya un amplio listado de análisis que ha tipificado y ordenado los sistemas de protección social, así como de los Estados de bienestar en la región; afirmación que sin embargo no desmerece las variaciones u corrimientos en los modos de tipificar dimensiones y relaciones con la finalidad de evaluar su pertinencia actual.

Varios son los autores que al tratar las tipologías recuperan el estudio pionero de Carmelo Mesa-Lago (2004), quién sostuvo que los países de la región compartían un proceso de convergencia hacia un mismo modelo de Estado de bienestar; hipótesis que le permitió demostrar que las diferencias observables en cada país se ajustaban más a “diferencias de grado”. Mesa-Lago muestra ‘la estratificación de la seguridad social’ en la región a partir de considerar la evolución de los sistemas de seguridad social según un modelo de agregación de categorías ocupacionales y cobertura de riesgos; parte de diversos factores entre los que se cuenta la presión por intereses de aquellos grupos sociales más poderosos, convergiendo hacia un modelo piramidal en el que los estratos más favorecidos gozaban de

⁴ Draibe y Riesco (2007) realizan algunas consideraciones sobre el tratamiento comparativo del Estado de bienestar diferenciando dos versiones, ya que si por un lado los primeros análisis se realizaron mediante conceptos generales y modelos formales o conceptos basados en la investigación empírica, al medir diferencias respecto de algunos pocos atributos genéricos elaborados como construcción ideal-típica, formal de restringida base empírica (como sería el caso del modelo de Timus), se oponen otros estudios que tienden a apoyarse en una extensa base empírica; tales como los de tipo *N-large studies* (series de estadísticas de tiempo y cortes transversales de gran número de países en los cuales la identificación se realiza en base a algunas variables generales para buscar diferencias de niveles de desarrollo respecto del continuo tradicional-moderno, rural-urbano o de otros semejantes). Op. Cit., p. 19.

mejores prestaciones sociales mientras que una amplia base de trabajadores informales con contribuciones insuficientes se encontraban totalmente desprotegidos. En el marco de su análisis, Mesa-Lago provee una primera tipología que permite agrupar a los países latinoamericanos según “*el periodo en que introdujeron sus sistemas de seguridad social, la amplitud de los programas sociales y el grado de cobertura de la población*”; la agregación o el peso de estos factores, deviene en *países pioneros, intermedios y tardíos*.⁵

El segundo modelo de bienestar y sus consecuentes políticas sociales más citado en la región, fue producido por Fernando Filgueira (1998, 2005)⁶ quien parte de tomar la tipología modélica de Andersen, e interpretara la extensión de los sistemas de prestaciones sociales en conexión al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones⁷. En base a este enunciado, se ubicaron a los tres países - Chile, Uruguay y Argentina- bajo un modelo bienetarista de *Universalismo Estratificado*. El eje fue referenciado en la inserción formal al mercado laboral, con altos grados de desmercantilización de bienes sociales y una fuerte estratificación de beneficios y condiciones de acceso a estos mecanismos. Dicha caracterización en términos de universalismo estratificado se corresponde con el tipo conservador-corporativo propuesto Esping-Andersen (2000). Como fuera ya indicado, estos países tuvieron un desarrollo temprano de sus sistemas de bienestar con una relativa extensión de los mecanismos de la seguridad social *a la mayor parte de la población*. El segundo grupo de países como México y Brasil, se encuadran en lo que reconocen como *Regímenes Dualísticos*, dada la heterogeneidad territorial y la baja intensidad democrática, variables conspirativas conducentes a menores niveles de protección social; una tercera tipología comprende a aquellos de *Regímenes Excluyentes* tales como algunos países

⁵ Mesina cita a Mesa Lago « Hay suficiente cosas en común en las prestaciones en materia de bienestar entre los países latinoamericanos que puede argumentarse que comparten un régimen de bienestar común [...] La articulación general de Estado, mercado y hogar muestra semejanzas considerables en América Latina», en Carmelo Mesa-Lago y Fabio Bertranou, Manual de economía de la seguridad social en América Latina, CLAEH, Montevideo, 1998:122. En Mesina G. M. 2010:2943.

⁶ Según Martínez Franzoni (2005) fue Fernando Filgueira (1998) el primero que acercó a Esping-Andersen a la realidad latinoamericana.

⁷ Sin embargo, como bien precisa Filgueira (1998) si bien el modelo permitió *un importante proceso de modernización social y económica, lo hizo, sin embargo, con sesgos sistemáticos en la distribución de los beneficios de dicho desarrollo*. El autor alude que fueron los sectores urbanos incorporados al trabajo formal quienes resultaron beneficiados; mientras que quienes estaban en la economía informal, sobre todo los trabajadores rurales y los empleados en el sector servicios, estuvieron *excluidos de estos sistemas de protección*.

centroamericanos, Bolivia y Ecuador que tuvieron escasa o nula redistribución social porque se consideraron como *sistemas elitistas y excluyentes de seguridad social* como resultado, del apoderamiento elitista del Estado que prosperó a evitar *la generación de bienes colectivos* tales como la educación y la salud.

En el mismo sentido del posicionamiento anterior, el análisis realizado por Alejandro Del Valle⁸ destaca que de la tipología realizada por Mesa Lago se puede inferir que en el primer grupo, *‘pionero-alto’*, se encuentran los tres países que tratamos de describir Uruguay, Argentina, Chile además de situar a Brasil, Cuba y Costa Rica; caracterizados por ser los primeros países en establecer durante el primer cuarto de siglo XX los sistemas de seguridad social en la región, y también porque en estos países se logró una extensión considerable de cobertura social de sus poblaciones, *relativamente más envejecida y con una esperanza de vida mayor*, en comparación a otros países de la región; sin embargo se observa asimismo que dichos *sistemas adolecían de estratificación, altos costos, déficit creciente y desequilibrio financiero*. En el análisis propuesto por Alejandro del Valle existe una línea argumental similar entre los trabajos de Filgueira y Barba Solano (2004) quién se refirió a los regímenes de bienestar, como *universalistas, duales y excluyentes*. En el primer tipo, universalistas, se incluye a los países de esta comparación Chile, Argentina, Uruguay y se agrega Costa Rica.

También sobre el trabajo de Filgueira, sientan la base de su hipótesis Andrenacci y Repetto (2006) en torno a *la relación entre política social y ciudadanía en América Latina*. Estos autores derivan la raíz explicativa de la especificidad latinoamericana hacia *dos cuestiones*; por un lado, *las modalidades, alcance e intensidad del avance de la economía capitalista en los diferentes países* mientras que, por el otro, *aducen al modo y la cronología en que el Estado latinoamericano gestiona la política social, a partir de la primera cuestión*. Observan que desde una perspectiva evolutiva los regímenes de bienestar en el continente, se caracterizan *“por la coexistencia de fuertes diferencias en la protección social, expresada en la convivencia entre regímenes de política social realmente existentes, productores de efectos sustantivos, con regímenes de política social de acceso diferencial y estratificado, con fuertes exclusiones según áreas geográficas y ámbitos sectoriales”*. Así la inclusión

⁸ Del Valle Alejandro (2010) “Comparando regímenes de bienestar en América Latina”.

social resulta *parcial y estratificada* compartida con una *exclusión social dura* reflejada en *los brutales indicadores de desigualdad de la región*. (...) por lo tanto los procesos de integración social son por ende *parciales y estratificados*. En tal sentido la política social es observada no tan solo como un *resultado* sino además como *productora incapaz de resolver las desigualdades estructurales que diera lugar a un tipo de ciudadanía restringida y muy desigual por sectores y territorios*. (Ibíd., p.11).⁹

Estas tipologías caracterizadoras de los regímenes de bienestar en la región devinieron transformadas por las políticas sociales implementadas durante las dos últimas décadas en América Latina, como políticas que transitaron desde un régimen de bienestar *conservador-informal* a otro *liberal-informal*; dicho cambio se produjo en base a “*la transformación del modelo sustitutivo de importaciones por un modelo orientado hacia el crecimiento del sector externo con la consecuencia del repliegue de las políticas públicas*”. Por tanto, el acercamiento en la región “*al régimen liberal del norte pero que, a diferencia de aquel, carece de programas focalizados sólidos*”, le permite sostener a Barrientos la tendencia general de transformación “*hacia un régimen liberal- informal en el continente*” (2004: 168).

Al margen de esta sumaria presentación del debate regional, interesa rescatar la reflexión brindada por Jessop sobre las modelizaciones realizadas en la región sobre la base del análisis de Esping Andersen. Deberíamos estar atentos a domesticar nuestra afición hacia la modelización en la medida que estas permitan seguir siendo modelos y no realidades. Valgan nuevamente las prevenciones del autor: *Una tercera fuente de problemas es la comprensible tendencia a la fetichización de las tipologías de Esping-Andersen (o de sus derivados) en los trabajos sobre cambios en los regímenes de bienestar. De esta forma, una gran parte de la investigación reciente se ha centrado en la cuestión de la convergencia o divergencia dentro de este patrón de regímenes de bienestar. Resulta interesante que en la actualidad*

⁹ Andrenacci y Repetto marcan la evolución de la política social mediante tres periodos históricos que caracterizando al primero en el marco de *expansión de la economía capitalista, la creación de un mercado de trabajo y de homogeneización sociocultural del Estado-nación*, denominando ***política social del Estado capitalista clásico***. Durante el segundo periodo, la política social *adquiere caracteres propios a la constitución del estatus de los asalariados y los mínimos universales de condiciones de vida garantizados por el denominado Estado Social y la denominan como política social del Estado social*. Finalmente argumentan que *la política social gestiona la flexibilización y precarización del empleo formal, la transformación de los seguros sociales y las instituciones universales en cuasimercados estratificados por ingresos, y la expansión de los dispositivos de detección de, intervención sobre, y neutralización de los conflictos provenientes de los grupos de riesgo; todos factores conducentes a considerarla como política social del Estado capitalista neoclásico*. *Ibíd.*, p. 17.

sea el régimen liberal el que con frecuencia sirva como banco de pruebas empírico respecto del cual medir los cambios, incluso si se conserva la socialdemocracia como ideal normativo. (Op. Cit., p. 55).

Bajo estas prevenciones que cuestionan como seguir considerando las definiciones del Estado de Bienestar realizadas por Andersen, a fines de los ochenta y observados los distintos modelos con sus consecuentes clasificaciones, tenemos que los tres países de referencia fueron clasificados como modelos bienetaristas de *Universalismo Estratificado (conservador-corporativo en Andersen)*, cuyo eje se referencia en la inserción formal al mercado laboral, con altos grados de desmercantilización de bienes sociales y una fuerte estratificación de beneficios y condiciones de acceso a estos mecanismos. Recalcando que estos tres países tuvieron también un desarrollo temprano de sus sistemas de bienestar, vale decir “pionero alto”, en comparación con otros países de la región, ponderado por otros autores como una tendencia en alza hacia el universalismo. Sin embargo, la política social es observada no tan solo como un *resultado* sino además como *productora incapaz de resolver las desigualdades estructurales* lo cual traducido al plano político resulta en una *ciudadanía restringida y muy desigual por sectores y territorios*. También se caracteriza las reformas de política social de la década de 1990 que se corresponden con las políticas de ajuste en el marco de un modelo de “Estado neoclásico”. Definidos como *protectivos y productivos* Argentina y Uruguay, esta tipología marca la única diferencia respecto a ubicar a Chile por separado en el primer grupo de regímenes, vale decir, tan solo *productivo*.

El cambio las políticas sociales tras las políticas de ajuste en la Región.

En el marco de ciertas ideas dominantes inscriptas en el debate del “Estado como problema”, Repetto examinó aquellas tendencias *fundamentalistas que reificaban la idea del Estado mínimo*, que se fomentara en la región por los organismos internacionales durante las dos últimas décadas del pasado siglo. Esta problemática definida como central en América Latina por el autor, alude al pendular vaivén de coaliciones gobernantes por la cual se confundió y confunde, *a propósito*, la cuestión estatal con las actuaciones de los partidos gobernantes. En este contexto, una nueva misión del Estado *reducido*, según este autor, (caracterizado como *mínimo* para la literatura en general) fue revisar los objetivos, así como el gasto en políticas

sociales y “sustituirlas por políticas sociales viables, de bajo costo, cuyo objetivo esencial (y limitación estratégica) fuese el “combate a la pobreza”.

Desde su perspectiva, Repetto trasladó la preocupación por la *condición institucional* de las políticas públicas ya que no sólo expresan la particular configuración de estructuras, funciones y procedimientos, que rigen los aparatos y organizaciones del Estado, sino que revelan además *la particular dinámica en que se desenvuelve la acción pública*. Al tratar de dar respuesta sobre a dónde se manifiesta la capacidad estatal, sugiere desagregar varios ámbitos de intervención estatal, *en los diversos niveles de áreas, políticas, programas y proyectos*, condicionados por el lugar que ocupan los países, dado su posicionamiento en el sistema político-económico internacional. En este sentido, el régimen político y su relación tanto con sectores socioeconómicos como con actores internacionales mediatizan la interacción política que supera la estructura organizacional *administrativa y los cuadros burocráticos*.¹⁰

Así un primer elemento común subyacente a las concepciones sobre política social en los países referidos guarda estrecha relación con el cambio transnacional económico que implicaron las políticas económicas de ajustes al virar desde el desarrollismo hacia el neoliberalismo de mercado. La marcada crisis de mediados de los años ochenta en paralelo a un cambio internacional de la economía estableció un consenso e actores nacionales y organismos multilaterales sobre la necesidad de reformas, entramadas entre diagnósticos y recomendaciones macroeconómicas, aludiendo a que *“las dificultades fiscales y el freno al desarrollo económico de los años ’80 se debían al fallido rol del Estado como agente central de asignación de recursos económicos y sociales”*(...) *Se decía (casi como credo) que el desarrollo económico, el que las reformas estructurales garantizarían, haría el resto de una tarea que ya no debía ser competencia de la política social y, por ende, de la intervención estatal”* mediante políticas, *diseñadas con formas de focalización extrema bajo la lógica de proyectos, debía amortiguar los impactos indeseados de la reconversión macroeconómica garantizando una gobernabilidad entendida como ausencia de conflicto abierto”* (Ibíd., pp. 12 - 13). En el mismo sentido, reconocen Andrenacci y Repetto que la responsabilidad de la

¹⁰ Repetto toma recaudo sobre tres cuestiones por lo cual considera necesario reflexionar sobre el sistema político y económico en la geopolítica internacional y así *“remarcar la profunda incidencia que tiene el entorno global y regional en que coexisten y compiten los países”*. En Repetto Fabián (2004:10 y 15.

crisis fiscal imputada “al agotamiento de un modelo desarrollista cepalino” de fuerte intervención estatal se impuso más allá de la “*sobrada evidencia acerca de la responsabilidad de los cambios en las estructuras y flujos de los mercados financieros internacionales en el desencadenamiento de la crisis*”. (2006:12).

La confluencia de ambos procesos, económicos y políticos, analizados por Midaglia y otros, supuso para los tres países del cono sur una “*pauta reformista centrada en contener el gasto público, mercantilizar aquellos servicios sociales rentables para los agentes privados y, en una versión moderada, ajustar o recalibrar las prestaciones que quedarían a cargo del Estado, revisando (...) el universo de beneficiarios y/o reconsiderando los formatos vigentes de gestión*”. Midaglia y otros (2010: 125).

Un primer nivel de discusión aparece marcado por las controversias respecto a la incidencia de ciertas modalidades de implementar políticas públicas que, bajo el auspicio de gobiernos neoliberales, durante la década de los noventa, pudieron recrearse en vistas a un pasado que lo permitía, en referencia, más claras a Argentina y Chile que a Uruguay. Si el giro internacional de fin de siglo resulta la causa eficiente del actual rumbo neoliberal se traduce en un punto del debate para varios autores, quienes se interrogan si estas medidas de ajuste y cambio de rumbo neoliberal se iniciaron en la última década de los noventa, o si por el contrario un antecedente de este rumbo político económico no comenzó antes, con las dictaduras militares, visibilizados en algunos debates para los casos de Argentina y Chile.

Tal como fuera planteado por Espinoza, Barozet y Méndez (2013)¹¹, la dictadura chilena comenzó la aplicación de políticas neoliberales en los años setenta mucho antes que Inglaterra o en Estados Unidos. Los autores remarcan “*Lo que se denominó «ajuste estructural» en los hechos desplazó el centro de gravedad de la economía desde el Estado hacia el mercado*”. Dos consecuencias se tradujeron de este nuevo planteo de desarrollo, ya que

¹¹El argumento que se esgrimía fue plantear como errónea la estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones; según los autores para los militares chilenos “*los mercados nacionales protegidos nunca brindarían un desarrollo sólido y la única forma de recuperar el equilibrio era dejar que el mercado funcionara en absoluta libertad*”. El programa económico del gobierno militar chileno se caracterizó *por la privatización masiva de la economía sobre todo respecto de las empresas públicas y del sistema de salud y educación*. Así la pérdida de salarios reales, el crecimiento de desempleo, la proscripción de sindicatos, el cambio de leyes laborales a favor de los empleadores, y entrega del sistema previsional a empresas privadas constituyeron reformas calificadas rupturistas en comparación con el *sistema anterior*. En Espinoza Vicente, Barozet Emmanuelle y Méndez M. Luisa (2013), p. 170.

si por un lado la *privatización* unida a la supresión de la representación política encontraba el modo de eliminar la responsabilidad política hacia los problemas ciudadanos, dejando a los individuos que éstos resolvieran *por y en el mercado*, por otro, se arrasaba cualquier signo de justicia social que se hubiere alcanzado con anterioridad, y que como resultado amplificó el *contraste del status ciudadano (...)* siendo *sus derechos sociales reemplazados por el poder de compra*". También Susana Sottoli (2000) suscribió este antecedente cuando señaló la excepción que constituye el caso chileno por la temprana introducción de reformas durante el gobierno del exdictador Augusto Pinochet. En sus propias palabras "*Muchos de los conceptos que guiaron dichas reformas pueden ser considerados antecedentes de las nuevas tendencias, que recién más tarde se observarían en el resto de los países de América Latina*"¹².

Para el caso argentino son varios los análisis que sostuvieron que la mayoría de las macro políticas económicas neoliberales fueron introducidas por el ministro de economía de la junta militar. Tal como lo describió Mario Rapoport, al revisar comparativamente los cambios económicos del año 1976, argumentó la destrucción del modelo previo y señaló: "*la desregulación financiera y la apertura indiscriminada de la economía, que afectó a la balanza comercial y a la cuenta corriente de la balanza de pagos; (...) se produjo un fuerte proceso de desindustrialización y reprimerización de la economía. (...) a principios de 1977 se implementó una reforma que ubicaría al sector financiero en una posición hegemónica en términos de absorción y asignación de recursos, mediante su liberalización, el alza de las tasas de interés y una mayor vinculación con los mercados internacionales*" (2007:8).

Otro nivel de discusión en el sur de América Latina enfrentó cuestiones respecto al *centralismo* estatal versus estrategias de *descentralización, privatización o desmercantilización* de ciertos y bienes o servicios públicos. Se generó entonces la discusión sobre el *universalismo y focalización*, conducente tanto a dirimir "el quiénes" configuran el universalismo o son sujetos de la focalización de programas o políticas sociales. Tal referencia implicó el deslizamiento de la discusión hacia los fondos fiscales desde cuales se aseguraba su provisión, o desde dónde operaría el Estado los procesos de redistribución de

¹² Sottoli Susana (2000) "La política social en América Latina bajo el signo de la economía de mercado y la democracia", nota 1, p. 19.

las políticas sociales. Estas nuevas implementaciones de la política social sucedían en correlación estrecha con los cambios, constitucionalizados en la mayoría de los países de la región, en referencia a la equidad de género y los derechos sociales.

A partir de la última década del siglo pasado pudo observarse el viraje de las políticas sociales en las estrategias y procesos de descentralización territorial, *desestatización* y *focalización*, señaladas por la mayoría de los autores con diversas consecuencias y valoraciones, según sea el país de referencia. Las tensiones generadas por los procesos de *descentralización*¹³ en el marco de la gestión de los servicios sociales, incluido el traspaso de *responsabilidad de financiamiento* a los distintos niveles jurisdiccionales en los cuales se desagrega el Estado, como son las regiones, provincias, municipios, localidades o comunas, que pueden caracterizarse por *capacidades fiscales, técnicas y políticas* diversas asume una *nueva reingeniería estatal* emergente de los diseños políticos neoliberales conocidas bajo la emblemática noción de reformas. Tal como tempranamente planteara Sottoli (2000, 2002) y con posterioridad describieran Midaglia, Castillo y Fuentes (2010), se aseguró primero con la creación de nuevos ministerios el tratamiento de la cuestión social. Así en los tres países de referencia, *una recreada institucionalidad* fue preparada para las emergentes consecuencias de las políticas de ajuste y en dicho marco prosperaron las resemantizaciones de las políticas sociales.¹⁴

¹³ Al hacer referencia a **la descentralización**, “cabe preguntarse sobre el tipo y calidad de las relaciones intergubernamentales, en tanto es evidente que se requieren mejorar las instancias y los mecanismos de coordinación en tres planos: a) lo jurisdiccional; b) lo sectorial a nivel nacional o subnacional y local en forma separada”; Ver Andrenacci y Repetto, op. Cit., p.14 y 19.

¹⁴Para el caso chileno “El Ministerio de Planificación y Cooperación -MIDEPLAN- se creó en 1990 a través de la Ley 18.989, en el período de la apertura democrática y bajo el gobierno de la Concertación a cargo del presidente Patricio Aylwin. Las principales funciones adjudicadas pueden resumirse en la elaboración de políticas, planes y programas de desarrollo de las regiones y armonización de las iniciativas del Estado para erradicar la pobreza y combatir el desempleo (Ley 18.989, art. 1º) En la última reestructura que sufrió el MIDEPLAN a través del Decreto 95 del año 2008, se establece que tiene funciones coordinadoras de las prestaciones sociales y que su población objetivo es aquella con índices de vulnerabilidad. Asimismo, en 2004, se crea el Sistema de Protección Chile, a ser desarrollado por el MIDEPLAN (a través del Art. 6º de la Ley 19.949)”. Para el caso argentino, el Ministerio de Desarrollo Social fue creado en 1999 durante el gobierno del Pte. De La Rúa mediante Decreto 438.92 (Ley de Ministerios, artículo 23 bis); de sus principales funciones destacan “la planificación, ejecución y seguimiento de las iniciativas en materia de asistencia social y la coordinación de todos los esfuerzos en materia social tanto nacional, regional como local”. El último de los ministerios creados es El Ministerio de Desarrollo Social uruguayo -MIDES- durante el primer gobierno de coalición de centroizquierda (Frente Amplio) en el año 2005 que cuenta en su estructura con una Dirección Nacional de Políticas Sociales que “preside al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales”. En Midaglia C., Castillo M. y Fuentes G. (2010:141- 145)

También Fabián Repetto y Guillermo Alonso (2004) habían descripto la lógicas de las reformas descentralizadoras de los servicios sociales producidas en Argentina durante los años noventa; bajo el enmarque argumentativo de una lógica *eficienticista* tanto de gestión de los servicios como del gasto fiscal, argumento que se solapaba en la posibilidad ampliar la participación democrática al eliminar la lejanía ciudadana con el Estado central. Así si observamos los distintos procesos de descentralización en la gestión de servicios y bienes sociales, en Argentina no solo se fomentó *una mayor fragmentación de la intervención estatal ante graves problemas sociales* sino que además derivó en un traspaso jurisdiccional o “*re-centralización*” al ámbito provincial, afectando a *la población argentina que recibe salud, educación, vivienda y alimentación en provincias diferentes*, a desiguales niveles en *cantidad, calidad, pertinencia y sostenibilidad de su oferta de política social*. (Ibíd., p. 42). Para el caso argentino este diagnóstico encuentra actual vigencia y a la fecha de estas consideraciones, resulta preocupante la nueva reingeniería que está sucediendo por la cual se ha reestructurado la cantidad de ministerios existentes en el marco de los acuerdos con el Banco Mundial. Reabsorbidos algunos, tal es el caso del Ministerio de salud en el de Desarrollo Social y el clásico Ministerio de Trabajo en el Ministerio Producción y magnificados otros, tal es el caso de un gran Ministerio de Desarrollo Social cuyo eje es la asistencia social tras la retórica del combate a la pobreza. Frente a estos hechos, puede hipotetizarse nuevos cambios en el rumbo de las políticas sociales que dejarían ser aquellas configuraciones.

En un documento previo Repetto (2004) también había señalado a la focalización como estrategia dominante que limitaba la concepción de la política social a la lucha contra la pobreza, en particular la extrema pobreza o indigencia. Este enfoque inspirado en la restricción de los recursos fiscales se fundamentó en las críticas formuladas a los servicios sociales de carácter universal, particularmente a la forma en que los recursos destinados a los mismos eran captados por los sectores medios y mejor organizados. En la agenda de reformas de la “institucionalidad social” emergieron con fuerza tres mecanismos de focalización: *individual, por grupo vulnerable o por ámbito territorial*.

Por su parte, también Ana Sojo (2007) entre otros autores, ya había descripto el desplazamiento conceptual de la estrategia de focalización suscripta en la década de los años 80. La crítica de la autora apuntaba a señalar el carácter reduccionista conceptual, así como

la importancia de sus consecuencias políticas en aquellas propuestas reformistas formuladas por algunos gobiernos de la región a instancias de organismos internacionales tales como el Banco Mundial. Estas reformas identificaban *sistemáticamente elementos negativos de los programas de alcance universal para apoyar el reemplazo del principio de universalidad por el de focalización. (...) el reduccionismo articulado desde una perspectiva global sobre política social* resultaba atractivo en su simpleza, *en aquel tiempo ortodoxo del ajuste estructural* (p.114).¹⁵ La autora consideraba la relevancia del tratamiento por *el giro hacia una focalización reduccionista* y mediante ejemplos de su aplicación, señaló el caso chileno: *“En la visión conservadora en América Latina, las políticas de focalización implantadas en Chile durante la dictadura militar se constituyeron en paradigmas de la política social. Hay que tener presente que tal concepción y experiencia se daban en uno de los países de la región donde el Estado de bienestar había logrado un desarrollo significativo hasta inicios de los años 1970 y que, por lo tanto, había requerido sendas reformas de los sectores sociales para las cuales la focalización cumplió un papel subordinado”*. (Sojo Ana, 2007:115).

La focalización como estrategia de las políticas sociales en curso, puede observarse actualmente en el instrumento diseñado como Ficha de Protección Social (FPS)¹⁶; del mismo modo en la lógica sistémica de la política social uruguaya que recoge información sobre *la vulnerabilidad de una familia o el riesgo de caer en pobreza*, lo cual permite determinar *el acceso a prestaciones o programas sociales* gubernamentales. De distinta manera se procede en Argentina por vía Asignación Universal por Hijo (AUH) surgida al calor del debate regional sobre las políticas de transferencia de ingreso condicionadas (TCM) que acumuló *per se* señalamientos diversos. Si bien el cúmulo de revisiones supera los marcos de esta presentación, debe sin embargo precisarse que la aludida política practicada en Argentina amplificó la base de la protección social clásica de los trabajadores formales hacia los

¹⁵ Por ejemplo, Franco propuso la focalización como instrumento, postulado y principio orientador fundamental de la política social, en reemplazo de las “políticas generales” y “tradicionales”, que tendían a ser de alto costo y bajo impacto en los sectores más afectados y habían fracasado en su intento de llegar a los pobres; estimaba que la focalización, por el contrario, permitía hacer un uso más racional de los recursos públicos En Sojo A., p. 115 y 117.

¹⁶ El MDS es el responsable de aplicar la Ficha de Protección Social (FPS), mientras que el levantamiento de las encuestas, la digitación, verificación y revisión de la información es tarea del municipio (Larrañaga et al., 2014). El formulario se estructura en 5 ámbitos, que cubren 21 tipos de recursos mediante 57 variables descriptivas. Para realizar el diagnóstico, la encuesta se dirige al miembro de la familia que firmó la carta de compromiso. Las respuestas dependen en exclusiva de la declaración del entrevistado y el gestor familiar no dispone de recursos para verificar y confirmar su veracidad. Véase Anexo en donde se describe el programa.

informales o desempleados, tomando como base las familias con hijos menores o discapacitados y con posterioridad agregó a las madres adolescentes.¹⁷

Valga como ejemplo el caso de la aplicación de políticas de transferencia de ingreso condicionadas (TCM) en los tres países de la región cuyo *parecido de familia* pondera sin embargo diferentes escalas de complejidad analítica, resultando a veces una homogenización forzada en diversos niveles de especificidades. Lo que puede observarse es el diferente impacto político logrado por estas implementaciones en cada uno de los tres países de referencia, en términos de su incorporación a un sistema de protección social integrado, al parecer logrado en Chile y en Uruguay más que en Argentina, no obstante reconocer que la posibilidad sistémica de la política social guarde relación con el tamaño y régimen político de cada uno de los países. Este comentario tampoco implica evaluar sino tan solo apunta a mantener el horizonte descriptivo inicial, marcando similitudes y diferencias de los cambios en las implementaciones de políticas sociales en los tres países.

La misma expansión de las asignaciones familiares fue realizada respecto del sistema de pensiones al ampliar la cobertura *no contributiva* a amplios sectores poblacionales para los casos de Argentina y Uruguay. Para Alonso y Di Costa (2011)¹⁸ la gestión kirchnerista de las políticas sociales mediante el “Plan de Inclusión Previsional” y la re-estatización de los fondos previsionales pudo plantear “*una reforma a la reforma*” de los años 90’s, caracterizada por *sucesivos aumentos de la jubilación mínima, ampliación de la cobertura* a través Plan de Inclusión Previsional (moratoria), la Ley de Opcionalidad (2007) y la Ley de Movilidad Jubilatoria¹⁹. Ambas políticas continúan vigentes, pero sin la articulación con

¹⁷ Tales “universalidades” han sido criticadas en diferentes circuitos de debate Abramovich (2002, 2006, 2009) y Pautassi (2010, 2012, 2013). Una crítica realizada por Horacio Etchichury (2015) ha sostenido la inviabilidad de considerar “universal” el reconocimiento de derechos sujeto a condicionalidades de salud y educación en las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo; bajo el argumento que no existen reconocimientos de derechos con condiciones. En tal sentido desde otro ángulo Garcés (2017) ha propuesto que a la par de intervención estatal, su implementación está mediada por “*el cumplimiento de obligaciones de los padres (...)* Siendo *derechos y deberes son generales para todos los ciudadanos, no hay “deberes y derechos diferenciados”*”; por lo cual resulta posible observar este tipo de implementaciones “*como un instrumento de regulación social, en el control del cumplimiento de los deberes paternos*”; tipo de regulación social estatal muy usado en los modelos escandinavos Garcés Laura E. (2017) “Las políticas de transferencia de ingresos condicionadas en América Latina: una mirada relacional de análisis”. *Socied. em Deb.* (Pelotas), v. 24, n. 1, p. 76-92, jan./abr. 2018. ISSN: 2317-0204, p. 77.

¹⁸ Los autores referencian los diversos tratamientos de la temática en Isuani y San Martino (1993), Alonso (2000), Rofman (2003), Cetrángolo y Grushka (2004), Barbeito y Lo Vuolo (1995), Bertranou, Grushka y Rofman (2001), Goldberg y Lo Vuolo (2005), y Mesa-Lago (2009).

¹⁹ La nacionalización de diciembre de 2008 (Ley 26425) modificó radicalmente la estructura del sistema, eliminando el régimen de capitalización y sustituyéndolo por un esquema de reparto. En 2007 se dicta Ley

otras políticas de educación, salud y previsión social que han sido desmanteladas, dejando de componer un sistema articulado de políticas públicas. En un gobierno de marcada ruptura con el anterior, que emulando a sus pares chilenos ha convertido al ciudadano en un cautivo del mercado si es que ya se encuentra en el mercado, o en un paria si es que no se encuentra en él. La diferencia en la proporcionalidad poblacional que a la que se dirige el combate a la pobreza en ambos países se ilustra por sí misma, y junto a esta también se visualiza la diferencia de consenso político articulado entre la concertación chilena y sus opositores. Es aquí en donde es posible diferenciar Estado de gobierno.

Para el caso chileno, Claudia Robles (2011) ha planteado que la reforma previsional aprobada en marzo de 2008 incorporó una serie de transformaciones y mecanismos al funcionamiento del sistema previsional con un énfasis especial en la articulación entre los componentes contributivo y no contributivo, en aras de sustentar *la equidad en el acceso a la protección social*. Fundada en “*un triple pilar en materia previsional compuesto por la capitalización individual obligatoria (pilar contributivo), el de ahorro previsional voluntario (APV) (pilar voluntario) y el sistema de pensiones solidarias (SPS) (pilar solidario)*”, argumenta la autora (Robles, 2011: 33). En la actualidad un murmullo recorre el debate político coyuntural en la región y parece indicar el viraje de los sistemas previsionales de los trabajadores formalizados en el mercado laboral hacia un sistema mixto público- privado como el chileno, al menos parece ser el rumbo próximo de los actuales gobiernos en los casos de Brasil y Argentina.

Derechos del cuidado Familia y Género

A mitad de la primera década de este siglo, los análisis sobre los regímenes de bienestar latinoamericanos tomaron un fuerte rumbo para incorporar la perspectiva de género y visibilizar de este modo el trabajo de reproducción social no remunerado del núcleo familiar; destacan en ese plano, los análisis pioneros realizados por Martínez Franzoni (2005, 2008), Sonia Draibe y Manuel Riesco (2006), Arraigada (2005) entre otros; con posterioridad se expandirán amplificando el campo. En dicho marco, Juan M. Cerdá (2018) señala que los

26222 propiciando *la posibilidad de volver al subsistema de reparto*. En 2008 mediante Ley 26417 se establece que los haberes del sistema de reparto serán ajustados dos veces por año, con base en la evolución de los salarios y la recaudación de recursos tributarios destinados al pago de prestaciones previsionales. Tal mecanismo se aplicó por primera vez en marzo de 2009, citado por Alonso y Di Vita, Alonso y Di Costa, 2011: 41- 42.

primeros estudios, partían desde la concepción de la “economía del cuidado” para criticar a la literatura existente sobre los “regímenes de bienestar” por un lado, mientras que cruzaban sus preocupaciones con otras temáticas tales como la perspectiva de género, infancias, familia y políticas sociales; por otro, indica este autor, es posible pensar en una doble ruptura ya que si en el marco de la concepción del trabajo se contemplaba a las tareas de cuidado dentro (o fuera) del hogar, por otro se daba paso a la preocupación feminista por la “organización social del cuidado”(Faur, 2014)²⁰. Para Martínez Franzoni, el foco pertinente precisa de investigar el trabajo no remunerado del núcleo familiar como característica regional de una tradicional división del trabajo por género; de este objetivo se desprende vislumbrar *el trabajo de cuidados* que suple las deficiencias y/o ausencias del sector público.²¹ La autora analiza dieciocho países de la región y toma como dimensiones de análisis el *acceso al mercado laboral e ingresos*, la *participación relativa de las familias*, las *políticas públicas y el mercado*; el *desempeño del régimen*, en el marco de *condiciones sociodemográficas y socioeconómicas*, factores todos que le permiten inferir cuatro regímenes de bienestar; caracterizado el primero como *productivista-informal* que contempla los casos de Argentina y Chile, un segundo *proteccionista-informal* en el cual agrupa a Brasil, Panamá, Uruguay, Costa Rica y México; un tercero de características *informal asistencial* en el que incluye a países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú y República Dominicana; y por último un cuarto grupo *altamente informal* en el cual ubica a Bolivia, Honduras, Nicaragua y Panamá.

²⁰ Cerdá presenta algunos de los trabajos que se pueden mencionar en este sentido son: Esquivel, Valeria (2011) Economía del cuidado en América Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. Panamá, Panamá: PNUD. Esquivel, V. (2012) “Cuidado, economía y agendas políticas: una mirada conceptual sobre la ‘organización social del cuidado’ en América Latina”; en La Economía Feminista desde América Latina: Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. Santo Domingo: ONU Mujeres; Faur, E. (2014) El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores; Marco Navarro, F. y Rodríguez Enríquez, C. (2010). Pasos hacia un marco conceptual sobre el cuidado. En: Montañó Virreira, C. y C. Calderón Magana (coords.) El cuidado en acción: Entre el derecho y el trabajo. Serie Cuadernos de la CEPAL. N° 94. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

²¹ Martínez Franzoni (2005,2007) parte de considerar como en los países de América Latina existe un grado alto en la frecuencia que hace imposible el acceso al mercado y a los servicios públicos de grandes grupos poblacionales, revelando las múltiples estrategias de carácter familiar o comunitario para dicha provisión. Entre las cuales se destacan la permanente combinación que realizan las mujeres entre el trabajo del cuidado de las familias y su participación en mercados laborales no regulados e informales como lo es la economía de servicios.

La complejidad del bienestar en el marco de las desigualdades sociales, en las cuales el cuidado es traducido en derechos sociales, permite plantear el cuidado como un campo de conocimiento, definido por tres elementos: tiempo y dinero para posibilitar el cuidado y servicios posibles del mismo. En un trabajo clásico sobre el área, Borderías, Carrasco y Torns presentaron la sutil diferencia terminológica en el empleo del término *cuidado* (*care*), respecto al uso del concepto *de servicios de cuidados, de servicios de atención o del trabajo de cuidados* (*que a veces se incluye en el trabajo doméstico familiar o trabajo de reproducción*). Pensando que el empleo de tan diferentes modos de aludir implica resaltar que *no necesariamente se alude al mismo proceso*, para lo cual proponen la precaución del uso del término *cuidado* que, si bien evita *la denominación de trabajo*, vuelve *más vulnerable su identificación con <la mística del cuidado>*.

Más allá de la tradicional distinción entre población económicamente activa e inactiva, en su análisis de la protección social en la región, Chechini destaca el sector poblacional “*dependiente*” dado que aun estando en edades productivas, no se encuentran insertos en el mercado laboral o están en condiciones de precarización laboral. Esta población “depende” entonces de los trabajadores insertos sea en sectores de media o alta productividad, para los cuales la familia o el Estado, necesitarían transferirles recursos para satisfacer su consumo; en base a ello distingue tres situaciones, asociadas al vínculo de las personas con el mercado de trabajo. A diferencia del planteo de Chechini, las autoras españolas, Borderías, Carrasco y Torns proponen en cambio que la invisibilidad del nexo refiere “*al desplazamiento de costes desde la producción capitalista hacia la esfera doméstica. Estos costes tienen que ver fundamentalmente con la reproducción de la fuerza de trabajo y el mantenimiento de la población*”. A la par sustentan, suplantando dependencia por *interdependencia* y no observar solo los cuidados materiales sino también aquel tiempo empleado en la formación y el acompañamiento subjetivo.²²

²² Borderías C., Carrasco C. y Torns T. (2011) plantean al respecto que Los servicios de cuidados o de atención, en general, hacen referencia a servicios públicos o trabajos mercantilizados; en cambio, el trabajo de cuidados se utiliza más para referirse a un trabajo que se realiza desde los hogares, orientados a las personas del hogar o de la familia y no remunerados monetariamente. (...) La idea de reproducción social incluye naturalmente la reproducción y subsistencia de toda la población y no solo de la fuerza de trabajo. Incluye particularmente aquella parte de la población habitualmente denominada como dependiente.(...) La dependencia humana -de mujeres y hombres- no es algo específico de determinados grupos de población, sino que es la representación de la vulnerabilidad de las personas.(...) De ahí que, más que la dicotomía independencia/dependencia, se debería sostener **la idea de interdependencia**, ya que todas las personas son social y humanamente

El diagnóstico realizado por quienes ha indagado acerca de los modelos de cuidado en la región afirman que en los Estados de bienestar en América Latina existe escasa “desmercantilización” y casi ninguna “desfamiliarización” ya que dichos regímenes de bienestar no solo combinan estratificaciones de clase sino de género, en términos de haberse constituido en base a un patrón de trabajo masculino proveedor y mujer reproductora y cuidadora. Según Martínez Franzoni (2005) se puede encontrar dos subgrupos dentro de los regímenes de estado de bienestar de proveedor único, por un lado, uno de corte más estatal como sería los casos de Uruguay y Costa Rica mientras que en un segundo grupo de corte más liberal se encontrarían los los casos de Argentina, Chile y México con *un desplazamiento desde el Estado hacia la prestación privada de servicios*.

En el marco de las políticas sociales actuales en Chile, la familia es ponderada en un rol de centralidad más que el género, a pesar de su incorporación en la reforma previsional tal como fuera planteado por Claudia Robles (2011); mientras que en Uruguay el género ha sido abordado con mayor especificidad, la tendencia parece sugerir que la perspectiva de género resulta ineludible en la configuración de las políticas en la región. En Argentina el debate sigue vigente en términos de polarizaciones entre la perspectiva de género y la familia, discutido originariamente por Laura Pautassi (2014) en referencia a la responsabilización de las madres receptoras de los beneficios de la asignación universal de sus hijos (AUH).

Como han apreciado Rubilar et al. (2017), la implementación de un sistema de protección social en Chile en lo que va del siglo, ha sido más bien un camino progresivo, y aún en desarrollo, transitando *desde una lógica subsidiaria y focalizada hacia una perspectiva universal; su énfasis en los derechos ha tenido como correlato un fuerte respaldo jurídico en el establecimiento de garantías mínimas para ámbitos de salud, trabajo, seguridad laboral, incapacidad y vejez*. Asimismo, las autoras en su análisis desde las relaciones entre protección social y ciudadanía describen que existen todavía *derechos económicos y sociales que aún no considerados en este esquema de protección, lo que se traduce en el desarrollo de una ciudadanía social incompleta o parcialmente garantizada*. Tal es el caso de la

interdependientes y requieren distintos cuidados según el momento del ciclo vital.(...) En determinados periodos las personas pueden ser más dependientes biológica o económicamente y requerir más cuidados emocionales. *Ibíd.*, pp. 71 y 53.

educación con una fuerte demanda social desde 2011, o el acceso a la vivienda. (Rubilar et. Al, 2017: 23-24).

Reflexiones finales

Se ha tratado de desplegar las múltiples proble/temáticas, analíticamente ponderadas según los diversos análisis, inseparables de los contextos históricos de sus emergencias. El amplio y renovado campo de debate se desprende de la extensión bibliográfica aun de aquella que no fuera consignada en estos antecedentes. En cada eje de análisis se han señalado los aportes más clásicos sin dejar de presentar novedosos desafíos que nos proponen alternativas fructíferas a los efectos de un necesario re-encuadre de las políticas sociales y los diagnósticos previos. En sus expresiones teóricas y distintos abordajes metodológicos, confluye una diversidad diagnóstica con matices técnicos y académicos que amplifica las posibilidades de discusión y potencian la capacidad de contribución para visibilizar alternativas posibles. Así, aunque el contexto sociopolítico y económico actual haya variado si las situaciones políticas y económicas se mantienen, nuevamente se tomarán los mismos cursos de acción política, implicando un desdibujamiento de los imaginarios sociopolíticos democráticos. Aún en sus especificidades en cada uno de los tres países, estas políticas se traman con condiciones de bienestar respecto de ciudadanas y ciudadanos que siguen teniendo un acceso diferenciado al mismo según las territorialidades asumidas, en referencia a los contrastes que a simple vista presentan las comunidades rurales o ciudades medianas y chicas, respecto de los grandes centros urbanos, y a la creciente desigualdad de estas respecto de sus zonas marginales o periféricas.

Asimismo no puede dejar de sostenerse lo enunciado por un conjunto mayoritario de autores sobre el cambio de rumbo de las políticas sociales de la región, desde sociedades salariales a sociedades en las cuales la condición salarial se torna esquivada respecto a importantes porcentajes poblacionales; las consecuentes diferenciaciones internas en cada país respecto de la dimensión urbano/rural como una macro dimensión que posiciona el alcance del bienestar en términos de la formalidad o informalidad de las inserciones laborales, la provisión de seguridad social y el avance de las cuestiones de género y cuidado. Esta precondition conduce a sostener la inviabilidad de enunciar políticas sociales sin reconocer los cambios de rumbo de proyectos político-económicos, cuyos ejes de ingreso-egreso fiscal han mutado respecto a lo que podría considerarse en ciclos previos “políticas económicas

keynesianas”. Y más aún, cuando en un marco de políticas neoliberales pro-mercado se augura la desmercantilización de servicios y principios redistributivos estatales en un ciclo expansivo, reestructurador del empleo público y privado, vía asistencia social para contener el orden social de las consecuencias de las políticas económicas, hoy aplicadas en el extremo sur de la región.

Reformas y Contrareformas de las políticas sociales durante lo que va de este siglo son convergentes con nuevas institucionalidades estatales, desafiadas por la actitud ciudadana que lucha por educación pública o mayor igualdad de género o en el marco de discursos políticos de amplificación de los derechos sociales, interpelan las actuales implementaciones acerca de la resemantización de las políticas sociales. Mientras esto acontece con alguna ganancia de las luchas ciudadanas, la marca de la focalización diseñada como sistema en el orden social chileno o como estrategia de sacar y poner a los beneficiarios argentinos de políticas sociales del ciclo político previo o en la dualización uruguaya observada por los analistas, muestran visiblemente el cambio de rumbo hacia otros planos de discusión que los sostenidos por la señera obra de Andersen, base de la mayoría de los análisis registrados en la Región. g

Este *racconto* de antecedentes tiene por finalidad pasar en un segundo momento a revisar el campo de los indicadores empíricos de las implementaciones de las políticas sociales; por ello cabría recuperar una vieja pregunta que realizara Fernanda Beigel (2006) sobre las teorías de la dependencia “¿vida, muerte o resurrección” en nuestro caso de cuál visión y/o conceptualización de las políticas sociales? En buena medida esta autora señalaba como finalidad de su ensayo la tarea “de desocultar la heterogeneidad de los aportes” para resituar una posible mirada retrospectiva y posicionar una prospectiva. Aludo en tal sentido a la diferente visión que se puede tener respecto del *pasado/futuro* de las políticas sociales implementadas en la región, sin un halo de misticismo universalista que oculte la *heterogeneidad interior del bienestar* en cada país, perdido a veces en los promedios estadísticos generales de ciertos análisis comparativos, así como en el uso de una retórica política que usa a los derechos sociales, el género o el cuidado para esconder la desigualdad de bienestar imperante. Es tal vez por esta razón, y tomando las consideraciones críticas

realizadas por Mesa Lago (2002) la necesidad de atender al clivaje micro, meso y macro necesario de resguardar en futuras pretensiones comparativas.

Bibliografía

- ABRAMOVICH, Víctor y PAUTASSI, Laura (comp.) (2010): *La medición de derechos en las políticas sociales*, Ediciones del Puerto, Buenos Aires.
- ANDRENACCI, Luciano y REPETTO, Fabián (2006) “Un camino para reducir la desigualdad y construir ciudadanía”; en MOLINA, Carlos Gerardo (editor): *Universalismo básico: hacia una nueva política social en América Latina*; Washington, BID-Planeta.
- ANTÍA Florencia (2012) ¿Hacia una moderación de la dualización? Reformas recientes de las políticas sociales en Chile y Uruguay. Trabajo presentado en el Cuarto Congreso Uruguayo de Ciencia Política, “La Ciencia Política desde el Sur”, Asociación Uruguaya de Ciencia Política, 14-16 de noviembre.
- BORDERÍAS Cristina, CARRASCO Cristina y TORNOS Teresa (2011) *El trabajo de cuidados: Antecedentes históricos y debates actuales*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- CERDÁ Juan Manuel (2018) “Empleo y Seguridad Social en Argentina. Una revisión de la bibliografía”. En Llovet I. y Scarponetti P. (2018) *Condiciones de vida en la Argentina contemporánea. Un estado del arte de su estudio desde la perspectiva de las ciencias sociales en los albores del siglo XXI (2000-2012)*. pp. 118-142
- CECCHINI, Simone, FILGUEIRA, Fernando y ROBLES, Claudia. (2014) *Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe. Una perspectiva comparada*. Serie Políticas Sociales N° 202. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CECCHINI Simone, VARGAS Luis Hernán (2014) Los desafíos de las nuevas políticas de desarrollo social en América Latina. REC, Revista de Economía Crítica, n°18, segundo semestre 2014, ISSN 2013-5254, pp. 113-135.
- DANANI, Claudia; HINTZE, Susana (2010) “Reformas y Contrarreformas de la Protección Social: la Seguridad Social en la Argentina en la Primera Década del Siglo”. En Revista Reflexión Política, vol. 12, núm. 24, diciembre, pp. 18-29 Colombia, Bucaramanga : <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11017129003>
- DEL VALLE Alejandro (2010) Comparando regímenes de bienestar en América Latina, pp.61-76 Published by CEDLA – Centre for Latin American Research and Documentation | Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, Amsterdam; ISSN 0924-0608; www.cedla.uva.nl
- ESPINOZA Vicente, BAROZET Emmanuelle, MÉNDEZ M. Luisa (2013) “Estratificación y movilización social bajo el modelo neoliberal: el caso de Chile”. En Revista Lavboratorio, N° 25, Año 14, ISSN 15156370, pp. 169-191.
- FILGUEIRA Fernando (1998). “El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: residualismo y ciudadanía estratificada”. En Roberts, Brian (coords) *Ciudadanía y política social*. San José: FLACSO/SSRC. (pp. 71- 116).
- FILGUEIRA Fernando, MOLINA Carlos G., PAPADÓPULOS Jorge y TOBAR Federico (2006) Universalismo básico: una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida. En Molina Carlos Gerardo, editor: *Universalismo básico Una nueva política social para América Latina* México: Banco Interamericano de Desarrollo y Planeta Washington, D.C. ISBN: 1597820342 pp. 25-55
- FILGUEIRA, Fernando, RODRÍGUEZ Federico, RAFANIELLO, Claudia, LIJTENSTEIN Sergio y ALEGRE Pablo (2005) Estructura de riesgo y arquitectura de protección social en el Uruguay actual: crónica de un divorcio anunciado por. Revista Prisma N° 21-UCU.
- GRASSI, Estela (2012) “La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea. Entre la novedad y la tradición”, en *e-l@tina.Revista electrónica de estudios latinoamericanos* [en línea], Vol. 10, n° 39, Buenos Aires, abril-junio, pp. 5-33. <http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/e-latina/>
- JESSOP Robert (2009) *El Futuro del Estado capitalista*. Madrid: La Catarata, revisión técnica de Juan Carlos Monedero.
- LARRAÑAGA Osvaldo, CONTRERAS Dante y CABEZAS Dante (2015) “Políticas contra la pobreza: de Chile Solidario al Ingreso Ético Familiar” Documento de Trabajo PNUD, Marzo.

- MARTINEZ FRANZONI, Juliana y SANCHEZ-ANCOCHEA, Diego (2013). La construcción de universalismo y sus contradicciones: Lecciones de los servicios de salud en Costa Rica, 1940-2011. *Rev. Urug. Cienc. Polít.* [online]. vol.22, pp. 55-74.
- MARTINEZ FRANZONI Juliana (2007) Regímenes de bienestar en América Latina. Madrid: Fundación Carolina ceALCI, Documento de Trabajo N°11.
- MESA LAGO Carmelo (2015) Reformas estructurales y Re-reformas de pensiones, y sus efectos en el bienestar social: el caso de Chile. En revista *Política y Sociedad* ISSN: 1130-8001 Vol. 52, Núm. 3, pp. 719-739.
- MIDAGLIA Carmen y ANTIA Florencia (2007) “La Izquierda en el gobierno: ¿Cambio o continuidad en las políticas de bienestar social?”. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* N°16. 2007. pp. 131-157. ISSN 0797 9789.
- MONTAÑO VIRREIRA C., CALDERON MAGAÑA C., coords. (2010) *El cuidado en acción: Entre el derecho y el trabajo*. Serie Cuadernos de la CEPAL. N° 94. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- MESSINA Giuseppe Manuel (2010) “El debate sobre los regímenes de bienestar de Europa a América Latina. Algunas sugerencias para el análisis del caso argentino”. En Rey Tristán, Eduardo; Calvo González, Patricia. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional, Sep., 2010, Santiago de Compostela, España. pp.2932-2952, 2010, Cursos e Congresos; 196. HAL Id: halshs-00532782 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00532782>.
- PANIZZA, Francisco "Discurso e instituciones en la reforma de la administración pública uruguaya", en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, núm. 13, 2002, pp. 59-93.
- RACZYNSKI, Dagmar y SERRANO CLAUDIA (2005) “Las políticas y estrategias de desarrollo social: aportes de los años 90 y desafíos futuros”, en P Meller (ed): *La paradoja aparente. Equidad y eficiencia: resolviendo el dilema*, Santiago: Taurus.
- RAPOPORT Mario (2007) Mitos, etapas y crisis en la economía argentina. Nación - Región - Provincia en Argentina, 2007, No. 1. Disponible en ffyl1.uncu.edu.ar
- REPETTO Fabián (2009, julio-diciembre). La historia reciente de la política social argentina: ¿es posible la redistribución? *Revista Serviço Social*, 12(1), 89-121. Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Serviço Social. Recuperado de: <https://periferiaactiva.files.wordpress.com/2014/06/repetto-2009-lahistoria-reciente-de-la-polc3adtica-social-argentina-es-posible-la-redistribuc3b3n.pdf>
- RUBILAR Gabriela y Olaya Grau M. (2017) Direcciones y derroteros de la Protección Social en Chile: Análisis del proceso de reconstrucción de una ciudadanía basada en derechos. *RUMBOS TS*, año XII, N° 15, 2017. ISSN ED. IMPRESA 0718- 4182 / ED. EN LÍNEA 0719-7721, pp. 11-37
- SALVIA Agustín et al. (2016) informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina, Serie Bicentenario (2010-2016), Año I (Salvia et al., 2016).
- SCARPONETTI Patricia (2018) Políticas Sociales en el siglo XXI. Notas analíticas para observaciones comparativas entre Uruguay, Chile y Argentina. Serie *Working Papers*. INCASI
- SOLDANO Daniela y ANDRENACCI Luciano (2006) Aproximación a las teorías de la política social a partir del caso argentino. En ANDRENACCI, Luciano (compilador): *Problemas de política social en la Argentina contemporánea*; Buenos Aires, UNGS-Editorial Prometeo, 2006.
- SOTTOLI Susana (2000) La política social en América Latina bajo el signo de la economía de mercado y la democracia. En *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 68, April 2000. Pp.3-221.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Políticas Públicas, Exclusión y Conformación de Identidades Colectivas

Sandra Raquel Avalos

Universidad Nacional de Quilmes
penelopeav1966@gmail.com

Introducción

Al abordar la cuestión de la vivienda urba

na no se puede dejar de lado la importancia que asumen las políticas públicas en la producción de hábitat informal. Considerando lo que plantea Zunino (2006), los cuerpos gubernamentales que intervienen sobre el espacio urbano están constituidos por una serie inestable de relaciones sociales, en un flujo constante de cambios en tanto cada parte despliega estrategias y tácticas para alcanzar sus propios fines. Es decir que, las relaciones sociales se encuentran en tensión en virtud de los fines que cada actor social desarrolle para satisfacer sus objetivos.

Pero hay que considerar que, los espacios habitados no siempre son elegidos por las personas. En ocasiones, lo que ocurre es que algunas personas se ven obligadas a migrar a lugares que finalmente pueden habitar, lugares a los que son expulsados por el propio Estado que, quizás sin planificarlo, les permite habitar en lugares residuales, sin condiciones urbanas adecuadas y, por tanto, poco aptos para ser habitados. Estos grupos excluidos se representan a sí mismos a partir de esta condición y, en las últimas décadas, han trabajado por sí mismos en visibilizar la problemática en la que viven y darle así, visibilidad a sus problemas.

Es entonces, en este proceso de habitar y construir una respuesta colectiva a los que los excluidos, van construyendo una identidad propia, singular.

Descripción del lugar objeto de estudio

El barrio de Villa Soldati está localizado en el sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Linda con el Riachuelo, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Toda ella es la zona más pobre de la ciudad. Hasta 1887, la zona que en la actualidad conforma el barrio de Villa Soldati formaba parte del partido provincial San José de Flores, que bajo la intendencia del

Dr. Eduardo Crespo, a través de la ley 2.089 de 1887, fue anexado junto con el de Belgrano al territorio de la ciudad. Gran parte de los terrenos formaban parte del "bañado del bajo Flores".

Se trata de un enclave localizado estratégicamente en la ciudad a poca distancia del centro metropolitano.

En el año 1908, José Soldati construyó las primeras casas de material en una zona hasta entonces deshabitada del antiguo Bañando de Flores e impulsó la inauguración de una nueva estación del ferrocarril Belgrano, que a partir de ese año comunicó a la flamante Villa Soldati con la ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento, que coincidió en Argentina con la fase de inmigración masiva, se fueron formando en este barrio comunidades de italianos, portugueses, españoles y armenios que no contaban con los recursos para acceder a las viviendas localizadas en zonas céntricas de la ciudad (Ferrera, C. 2006).

Los habitantes del barrio se agruparon tempranamente en una Sociedad de Fomento donde los inmigrantes, más allá de sus diversos orígenes, trabajaron en conjunto para conseguir mejoras. Así fue como entre 1915 y 1930, las calles adoquinadas y el alumbrado a kerosén fueron cambiando la fisonomía de Villa Soldati, donde ya funcionaba además la primera escuela municipal.

Durante la década del treinta, nuevas transformaciones siguieron a las mencionadas, cuando tuvo lugar el deterioro en las condiciones de vida en el campo y el inicio de la industrialización sustitutiva. Por lo tanto, se inició una fuerte corriente migratoria proveniente de las zonas rurales del país hacia los incipientes polos industriales ubicados en las principales ciudades (Torres, H. 1993). En este marco, Villa Soldati se fue consolidando como un típico barrio obrero de Buenos Aires, a medida que las fábricas y talleres atraieron nuevos pobladores.

Así se fue consolidando una fuerte identidad barrial entre los trabajadores que habitaban Villa Soldati; identidad de la que dan testimonio, por ejemplo, los numerosos clubes sociales y deportivos fundados entre las décadas del 30 y el 40. Durante esas décadas, también fueron frecuentes en las calles del barrio los corsos, murgas y bailes comunitarios (Ferrera, C. op. cit.). Sin embargo, este sentido de pertenencia se vio debilitado cuando se instaló en el barrio lo que muchos vecinos vivieron como un estigma negativo: en 1936 tuvo lugar en Soldati la

instalación del Vaciadero Municipal de Basura, en las tierras donde hasta ese momento había funcionado la Quinta del Molino, un espacio donde solía reunirse los domingos la colectividad española y donde, además, algunas familias cultivaban frutas y verduras.

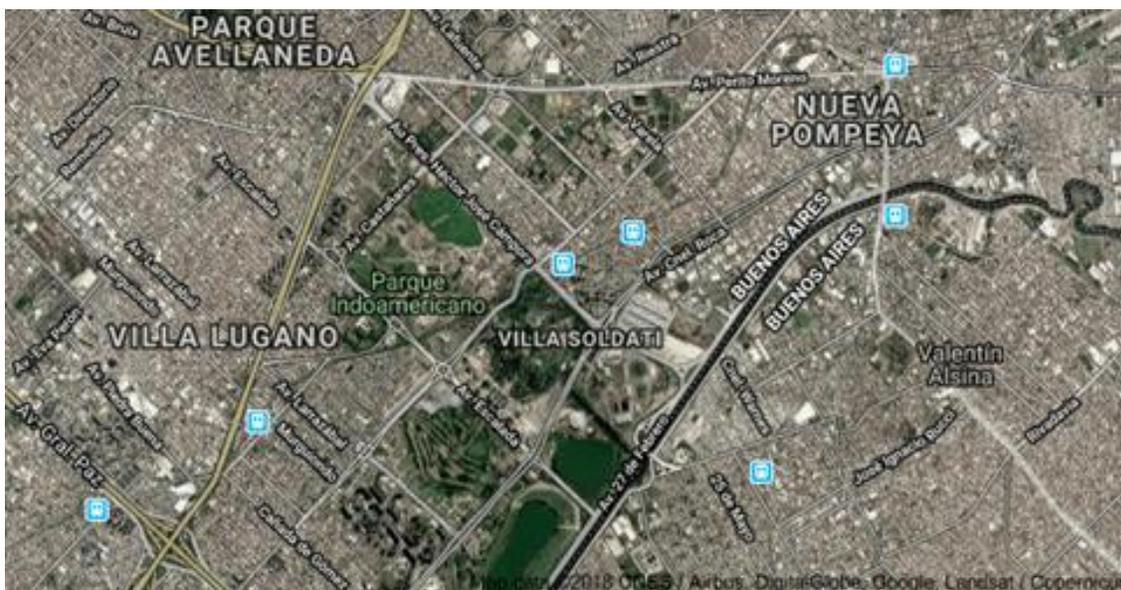
La implantación en el lugar de complejos habitacionales por parte del Estado, lejos de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, favoreció la atracción de asentamientos informales en los espacios vacantes alrededor. En este punto creo que los habitantes aceptaron la situación tal como plantea Rincón¹ (Rincón, 2006) “Los primeros habitantes desplegaron prácticas de organización y jerarquización del espacio, autorizando la ocupación de los recién llegados y permitiendo la emergencia de racionalidades normativas tácitas-sociales sustentadas en prácticas regulatorias comunitarias”.

La heterogeneidad característica del barrio, en el que convivían obreros y personal técnico de distinto nivel, dio lugar a la homogeneización impuesta por el complejo habitacional, por una parte, y los asentamientos informales que rápidamente se extendieron por la zona, por la otra parte. El área actualmente se encuentra totalmente aislada, cercada por enormes espacios verdes, complejos industriales, villas y asentamientos que la separan física y socialmente del resto de la ciudad. El uso es casi exclusivamente residencial, lindando con un sector industrial esta es la razón por la cual, al existir terrenos disponibles sin uso, estos son utilizados eventualmente con otros fines y esto es lo que ocurre ante situaciones de emergencia habitacional. Es a mi modo de ver entonces que se configuran relaciones con el Estado que son particulares. Tal como plantea decir de Rincón², (Rincón, 2006) prácticas colectivas territoriales que definen y concretan las relaciones entre estado y la sociedad en las transformaciones espaciales; esas relaciones se establecen, manifiestan, por un lado, que no son tan claras las fronteras que delimitan lo legal y lo ilegal: territorialidades legítimas y legales, legales pero no legítimas o ilegales y legitimadas socialmente generando reproducciones sociales de espacialidades ilegales estatales y espacialidades socialmente legalizadas. De esta forma, el estado interviene, pero aún no es clara la forma ni las

¹ Rincón Patiño, A. (2006): “Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: entre el territorio de la ley y la territorialidad de legalidades”, en Economía, sociedad y territorio, V. v, N° 20, El Colegio Mexiquense, México

² Rincón, Óp. citada

intencionalidades ocultas de dicha intervención. Es por ello que me parece necesario profundizar algunos aspectos.



Fuente: GoogleEarth

Planteando el origen de la situación villera.

Para comenzar, creo que en Villa Soldati es posible detectar esa lucha social de la que nos habla Ana Núñez³ (Núñez, 2011). Se trata de una lucha social enmascarada en políticas públicas que dan lugar a una génesis de la ilegalidad de la cual nos habla la autora. Si bien, al describir el proceso de evolución histórica a primera vista da la impresión de que existe simplemente un problema de exclusión social; a la luz del análisis de los autores queda claro que, detrás del proceso hay ciertas complejidades que permiten descubrir ciertas lógicas y razones particulares que explican la realidad territorial. Creo que la ilegalidad lleva como componente intrínseco la tensión territorial que no es uniforme en el territorio de Villa Soldati, en la realidad hay múltiples tensiones que dificultan el proceso identitario propio de un grupo social que comparte condiciones de vida. Por esta razón al identificar estas tensiones también identificamos los procesos de fragmentación territorial que, a primera vista no genera una identidad común en los habitantes del lugar.

³ Núñez, A. (2011): “Formas socio territoriales de apropiación del habitar y derecho al espacio diferencial”.

Lo que ocurre es que la dinámica de construcción territorial actual denominada por Santos⁴ (2002) reterritorialización, redescubrimiento del sentido de lugar y de la comunidad va configurándose en la medida que los procesos económicos y sociales llevan a algunos grupos sociales a la zona. Esta dinámica constante desarrolla una trama de relaciones con raíces históricas, configuraciones políticas e identidades que ejercen un papel todavía poco conocido en el propio desarrollo económico”⁵ (Abramovay 1998). Hay que considerar que la población desplazada es considerada como no activa económicamente a los fines de las estadísticas del Estado.

Considerando que, las villas surgen como un fenómeno de desplazamiento de personas que, se quedan sin trabajo, ya a principios de la década del '30. Estas personas ante la imposibilidad de continuar afrontando el pago de los inquilinatos que habitan ocupan un espacio en la Villa Desocupación en Palermo, actual villa 31. Este desplazamiento, que es consecuencia de un proceso de exclusión del mercado laboral, se constituye en un proceso de exclusión social. En este periodo los excluidos no son incorporados a la sociedad por diversas razones, una de las cuales obedece a que eran extranjeros sin trabajo por lo que, no solo no pueden pagar, sino que, al no hablar el idioma o hablarlo mal, son discriminados.

Luego de este primer asentamiento ilegal, el fenómeno de crecimiento de las villas miserias va a continuar en proceso de expansión a partir de la creciente oferta de trabajo en las principales ciudades del país. Esta es la razón por la cual las villas se siguen expandiendo entre 1956 y 1962 crecen un 25% y se originan 12 asentamientos nuevos. De esta forma, las políticas de corte liberal y son las que van llevando a la evolución de estos sujetos que, durante el proceso histórico se constituyen en el nivel de la estructura socioeconómica, (Romero: 2007)⁶. Estos factores influyen en principio en a la fragmentación propia de los grupos. A pesar de compartir condiciones de vida que en principio los identifican como grupo social, todos han sido desplazados. Una vez allí ubicados el territorio de las villas de Soldati, hay fuerzas en movimiento, que van transformando a los sujetos y brindándoles identidad.

⁴ SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2002.

⁵ ABRAMOVAY, R. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. In Seminário sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável, Fortaleza, novembro de 1998, Governo do Ceará, ME Política Fundiária, 1998.

⁶ Romero, L. (2007); “Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”. En Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires, Siglo XXI Ed.

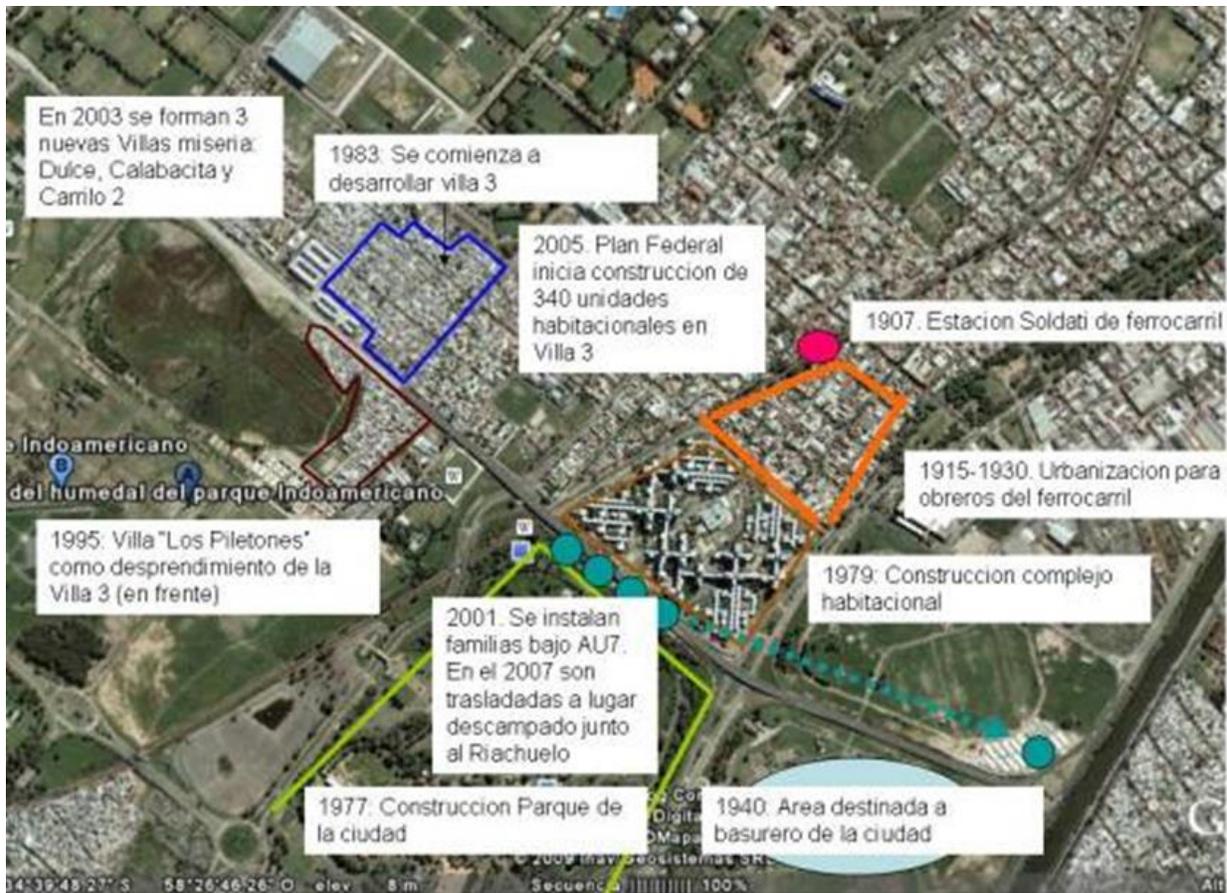
También podemos decir que estos procesos de urbanización se constituyen en procesos de transformación de algo que no es urbano en algo urbano⁷ (Erbiti, 2007).

Pero hay en este hecho un factor contradictorio en sí mismo: hay personas que conforman los grupos que ocupan tierras en asentamientos ilegales que tienen lazos con el Estado y esto dificulta la identificación de los grupos entre sí, ya que a pesar de algunos aspectos comunes con los habitantes del asentamiento sus acciones en pos de conseguir mejoras se presentan como fragmentadas e incompletas ya que tienen intereses contrapuestos con el resto de los habitantes y, en ocasiones reciben beneficios por ser punteros.

Durante el período 1976-1983 la problemática del crecimiento de Villas se agudiza y se presentan planes de erradicación y relocalización. Es en este proceso donde queda claro que erradicar tenía la función de expulsar sin relocalizar. Los pobladores deben así resistir los procesos de erradicación y encontrar la posibilidad de continuar habitando la ciudad que eligieron. El gobierno elige concentrar las poblaciones vulnerables en zonas contiguas, o, al menos no evitar que estas personas habiten tierras que luego son presentadas por las autoridades como parte de una planificación específica.

Para comenzar, se pueden observar los patrones de asentamiento históricos de estas familias desplazadas que necesitan seguir habitando en zonas de proximidad a la ciudad autónoma de Buenos Aires por razones laborales u otros aspectos que consideran relevantes para poder desarrollarse y sentirse ciudadanos plenos.

⁷ Erbiti, C. (2007): “Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del Siglo XX: Desafíos para la gestión del territorio”, Ponencia presentada en el IV Seminario de Ordenamiento Territorial: Ordenamiento Territorial y Problemáticas Urbanas.



Evolución de Soldati en Murillo op. citada⁸

Tal como queda claro en el proceso que se describe de asentamientos ilegales es necesario indagar sobre cuales determinantes del orden social estructuran el orden urbano que históricamente despoja y empuja a amplias fracciones sociales a “resolver” su reproducción social en territorios signados por condiciones deshumanizantes (Núñez, 2007).

A primera vista, si bien las familias no pueden más que sufrir el desplazamiento sin lograr imponer condiciones, no se perciben políticas del Estado para mitigar la situación de las mismas ni mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

Políticas Públicas y consecuencias, Fragmentación.

⁸ Murillo, Fernando. La Planificación Territorial y El Urbanismo Desde El Diálogo y La Participación (2010). FADU. UBA. http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo_bkp/geocritica2010/214.htm

La evolución política va conformando un tejido social fragmentado visible. Son estas políticas las que generan un proceso de desarrollo de asentamientos informales en Soldati, donde la segregación social es un hecho y la fragmentación espacial va a limitar la vida de las personas de Villa Soldati y sus alrededores. Si consideramos que el Estado invisibiliza y silencia territorialidades preexistentes y también aquellas las territorialidades que se conforman al interior del control territorial estatal, aquellas que podríamos identificar como fronteras internas. Al desconocer estas territorialidades, que suponen ciudadanías diferenciadas, se está discutiendo el carácter democrático y la justicia social de las políticas públicas de desarrollo que se diseñan.

En primera instancia, los habitantes de los asentamientos informales intentan afrontar las circunstancias de vida que les han sido impuestas a través de las políticas públicas. No obstante, el proceso histórico va a definir relaciones particulares entre estos habitantes. Considerando en principio que ellos no poseen la tenencia de la tierra se puede constatar que construyen relaciones sociales de intercambio, dependencia y subordinación, entendidas de la forma en que las plantea Roze⁹ (Roze, 2001), donde se puede ver al Estado como un conjunto dinámico, cambiante, y conflictivo de relaciones entre clases, en una determinada sociedad, que expresan la dominación bajo formas aparentes de consenso, y a los aparatos del Estado como la forma visible en que esta relación se materializa. Estas relaciones vienen estructuradas por el Estado con objetivos no conocidos por los actores claramente tal cómo planteamos en párrafos anteriores.

Quizás esto se pueda explicar dado que esta zona es lugar de políticas de modernización para que “la ciudad mire al Sur” por medio de una batería de políticas, programas y recetas como un urbanismo a la carta¹⁰. Aquí el rol del estado como impulsor de políticas es fundamental. Tal fue el caso particular en el que se buscó desarrollar un Polo Farmacéutico en la zona de Villa Soldati, lo cual preocupó y llevo a los vecinos a manifestar ante las autoridades su descontento ante la contaminación que dicho proyecto provocaría en el barrio. A pesar de esta situación, la fragmentación se constituye en una realidad difícil de afrontar dado que el

⁹ Roze, J. (2001): “Las ciudades y la acción sobre las ciudades”. Disponible en http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/39585/CONICET_Digital_Nro.226b8d0f-eb87-4a04-9594-fd1f1a360646_A.pdf?sequence=2

¹⁰ Delgadillo, V. (2014): “Teorías, políticas, programas y otras recetas urbanas para ciudades latinoamericanas”, en *Cadernos Metropoli*, Sao Paulo, V. 16, N° 31, pp. 89-111

estado sigue sin considerar las necesidades reales de la población de Villa Soldati. Esta población aun no ha podido identificarse con los otros habitantes del lugar, aun son individuos de un no lugar, solo son desplazados.

Es así como la urbanidad construye fronteras urbanas que van a cristalizar en el territorio en verdaderos guetos donde algunos pobladores ajenos al mismo son percibidos como intrusos y tratados como tales, generando así procesos internos de expulsión de personas que replican algunas situaciones que fueron vividas por los habitantes del lugar.

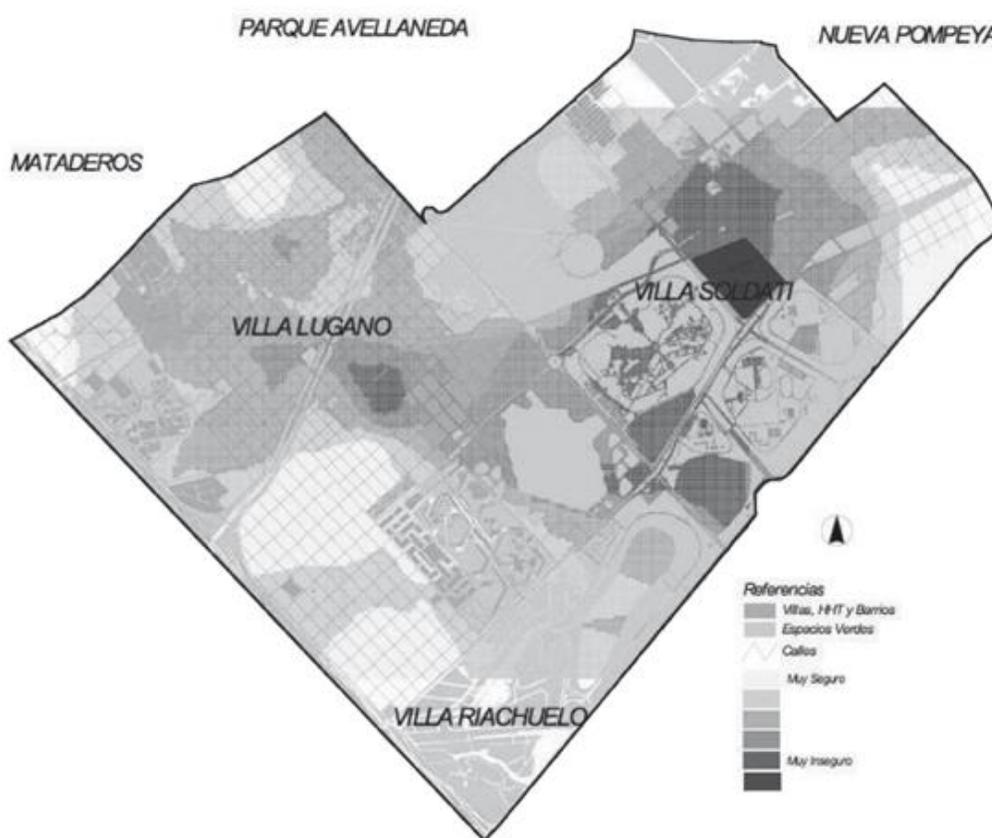
Estas fronteras se construyen incluso desde adentro, por las condiciones propias de habitabilidad: falta de servicios básicos, problemas de servicios de agua y tenencia ilegal de los terrenos en los que viven.

Ante esta situación Vecinos, organizaciones ambientales e instituciones de los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo denunciaron las terribles consecuencias que conlleva la instalación de la industria farmacéutica y sostuvieron que “Detrás de la promesa de desarrollo económico para la zona sur, el gobierno de la ciudad esconde no solo un gran negocio inmobiliario, sino el riesgo de una evidente contaminación”. Surge aquí una acción colectiva (Del Vento, 2010) incipiente que moviliza a los habitantes ante una situación crítica para sus vidas.

En primera instancia se constituyen tensiones territoriales en claro conflicto, dado que es el Estado que se impone sobre las relaciones entre los ciudadanos y no permite que se consolide el proceso de construcción de relaciones entre pares. Se puede visibilizar esta situación dado que no se concretan acciones colectivas que permitan cohesionar a la población y darles identidad y cultura local. No obstante, el Estado como actor relevante impone un proceso de segregación acallada (Carman: 2013)¹¹ el cual, inmerso detrás del proceso de inclusión, revela al set analizado las verdaderas intenciones por parte del Estado: impedir el acceso de estos grupos vulnerables a las viviendas o espacios habitables que ellos pretenden ya que, a pesar de estas políticas de cambio del perfil productivo de la zona de Villa Soldati, el Estado no trabaja de la misma forma para poder proporcionar a los habitantes condiciones de habitabilidad apropiadas. Estas condiciones deben garantizar al menos seguridad a los

¹¹ Carman, María; Vieira da Cunha, Neiva y Segura, Ramiro (2013); Segregación y diferencia en la ciudad. Quito: FLACSO, Sede Ecuador.

habitantes de la zona. Pero de acuerdo a un informe sobre políticas de seguridad esta comuna abarca un sector muy amplio y heterogéneo de la ciudad, que comprende barrios muy distintos entre sí y con muchas diferencias dentro de cada uno de ellos, involucrando al mismo tiempo a una pluralidad de formas de hábitat popular en las que la cuestión de la seguridad asume formas muy distintas. El barrio de Villa Soldati, y particularmente las zonas aledañas al Conjunto Urbano Soldati, son las que presentan los mayores niveles de sensación de inseguridad, tal como puede observarse en el mapa de la zona.¹²



Fuente: <http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/rt/printFriendly/626/1005>

¹² Raspall, T. Op. Cit.

Aquí es necesario considerar entonces un tema clave: ¿Qué ocurre con el “derecho a la ciudad”?¹³ (Lefevre,1968). Retomaré esta discusión en el próximo apartado donde haré hincapié en la importancia del colectivo social en la construcción de ciudad.

En este punto, me voy a apropiiar conceptos de Bourdieu, porque considero que en estos territorios a pesar de que no sean visibles para todos, existen luchas donde se ponen en juego diferentes aspectos uno de ello es considerar los diversos capitales con los que cuentan los ocupantes que van a condicionar su acceso a condiciones dignas de vivienda y por ello, se configuran estructuras espaciales que claramente expresan diferencias sociales (Bourdieu, 1993).

Fragmentación, segregación e Identidad Colectiva.

Cuando la sociedad experimenta movimientos, estos emergen y se expresan en la contradicción espacial que configuran, y de esta forma hacen observables las ficciones homogeneizantes ocultas en un proceso previo de expropiación, por lo que debería hablarse de miserias de la urbanización (Núñez, 2006). Es así como a través del proceso histórico se define en su devenir el proceso de fragmentación. De alguna forma, estas políticas fracturan a la sociedad, para establecer la barrera territorial entre grupos sociales. Estos movimientos sociales emergen, tal como plantea Núñez (2006), dejando ver al expresarse, la contradicción del espacio. Coincido con la autora que esto debería llamarse miserias de la urbanización. El caso particular de Barrio Soldati es su propia configuración la que dificulta un proceso de integración y prestación de servicios: pasillos estrechos entre las casas, hacinamiento de la población y falta de servicios públicos disponibles.

¹³ Lefèbvre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Ed. Península (edición original francesa Ed. Anthropos, 1968).



Considerando a Grimson¹⁴, existe un marco legislativo laxo y variable en el tiempo, que es necesario para producir y diría yo, reproducir estos procesos de fragmentación y segregación. De todas formas, de acuerdo a lo que plantea Sachs¹⁵ (Sachs2000) existe una idea de pluralidad de desarrollo territorial, que fortalece la idea de multiculturalismo. Es por ello que estas zonas carecen de identidad propia, y se encuentran en clara oposición a la cultura de la ciudad. Es así como la lógica del conflicto viene dada por la propia política que lo niega. Es por ello que el proceso de negociación -conflicto debería constituir un punto clave de las políticas de desarrollo sostenible.

¹⁴ Grimson, A. (2009); "Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización en la política de Buenos Aires". En Alejandro Grimson, M. Cecilia Ferraudí Curto y Ramiro Segura (Comps.) La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Buenos Aires. Prometeo.

¹⁵ Sachs, I., (2000). Caminhos para o desenvolvimento sustentável, Rio de Janeiro, Brasil, Garamond.

En Villa Soldati los espacios de negociación no suelen representar instancias superadoras de las problemáticas que sufren los habitantes de Soldati. Es aquí donde el Estado se presenta como impulsor de políticas sin establecer mecanismos de participación colectiva entre sociedad civil y el estado.

Es por ello que estos habitantes ven que las condiciones del habitar son inhumanas, precarias y complejas, estas relaciones implican violencias naturalizadas, violencia del estado que, en ocasiones, asigna funciones al territorio que los habitantes no validan, violencias urbanas que vienen dadas por el estilo de vida que obliga a los habitantes a no socializar (Núñez, 2010).

Pero de alguna manera, es a partir de la experiencia colectiva, que, considerando la agenda del estado y su cambio de rol, es que los habitantes al no ver respuestas a sus necesidades comienzan a empoderarse. Esto da lugar a procesos de construcción identitaria: este proceso genera que los habitantes se sientan parte de un todo a partir del cual construyen identidad. ¿Cómo fue posible este proceso? A partir de programas culturales donde el Estado en los barrios incentiva procesos culturales como Murga, Fotografía, coros y otros variados los habitantes comienzan a sentirse parte de algo que los representa y los convoca. Pero este proceso ya estaba en marcha, no es provocado instantáneamente. Históricamente al hacer ciudad, se construye la alteridad urbana: existe un nosotros urbano, conformado por quienes habitan en urbanizaciones formales y tienen acceso a condiciones de vida digna. Por otro lado, encontramos a los otros: aquellos que habitan donde pueden en las condiciones que sean posibles.

Si considero lo que Núñez (Núñez.2012) que la urbanización de la pobreza se nos presenta como una construcción social; una ficción homogeneizante de sujetos desposeídos que compartirían una proximidad clasificatoria identificada e identitaria estos grupos habrían claramente consolidado su identidad como grupo urbano. Pero, en realidad tal como

Esa totalidad social abierta y cambiante (Lefebvre, 1971; 2011)¹⁰, con sus clases, luchas y relaciones sociales, históricamente determinadas ya había comenzado a construir identidad donde, “los otros” tal como los ve la sociedad, comparten una condición de lugar, de vida y de experiencias.

Ahora, gracias al Estado, hay una construcción colectiva a partir de las expresiones artísticas que son dadas a conocer por el propio Estado. Este proceso artístico identitario genera un quiebre de la frontera: ahora todos son un colectivo social en un punto y “los otros” comienzan a poder tener una voz y cuando los habitantes de villa Soldati descubren que juntos pueden ser interlocutores válidos con el Estado. totalidad social abierta y cambiante (Lefebvre, 1971; 2011)¹⁰, con sus clases, luchas y relaciones sociales, históricamente determinadas.

El Proyecto Soldati Recicla y la resignificación de las relaciones con el Estado

Se puede ver en el urbanismo social como una regeneración de las administraciones públicas y creador de canales de comunicación que permitan interacción entre una sociedad y sus actores políticos. Así pues, el urbanismo social aparece como una posibilidad de transformación política y urbana (Montoya Restrepo 2014). ¿De qué manera se puede ir generando un movimiento de personas que tomen como suyo el territorio y se transformen en interlocutores y actores fundamentales del proceso transformador urbano?

Los talleres de arte en las villas se originan como una manera de visibilizar los problemas que los acompañan día a día en sus vidas. Es interesante tener en cuenta que los artistas no tienen conciencia de su condición de tales¹⁶. Es así como las herramientas que van adquiriendo a través del arte les van a permitir abordar sus problemáticas y darles quizás herramientas de reinserción social y además los constituyen en interlocutores válidos para poder discutir algunas políticas públicas con el Estado, es decir, se constituyen en actores¹⁷ (Di Virgilio,2015). Esto resulta en un empoderamiento de que les va a permitir abordar algunas problemáticas como es el caso de “Soldati Recicla¹⁸”.

¹⁶ <http://lanan.com.ar/fantasma-en-las-villas-los-artistas-no-saben-que-lo-son/Paz>, Luis. Fantasma: “en las villas, los artistas no saben que lo son”. 28/05/2010

¹⁷ Di Virgilio, M. Urbanizaciones de origen informal en Buenos Aires. Lógicas de producción de suelo urbano y acceso a la vivienda. Estud. demogr. urbanos [online]. 2015.

¹⁸ <https://www.puraciudad.com.ar/san-cristobal-asi-luce-la-estacion-de-subte-donde-los-vecinos-quieren-montar-un-museo/> Vecinos de Villa Soldati se organizan con arte y música contra la termovalorización en el sur. Boletín Pura Ciudad, 01/08/2018

El proyecto Soldati recicla surge como tal para expresar la disconformidad de los habitantes ante el proyecto de instalar una planta de incineración en Av. Gral. Paz y Roca, en el parque Ribera Sur. Esta propuesta surge a partir de la Ley Basura Cero que autoriza la quema de desechos con recupero energético sin contemplar las consecuencias medioambientales.

En este punto coincido con Castells¹⁹ (Castells, 1974) las consecuencias de estas políticas generan resistencias y las mismas se cristalizan en conflictos sociales urbanos. Este colectivo de Villa Soldati logra a través de la concientización que se impulsa según sus palabras en una Kermesse Ecológica, la búsqueda de soluciones concretas para las problemáticas que los rodean.

Conclusiones

La evolución territorial del Barrio de Soldati va construyendo a lo largo de la historia un proceso de exclusión territorial. Si bien el Gobierno local ha implementado mejoras que fueron acompañadas de políticas que, en general, corren detrás de los problemas. Queda en claro para los habitantes de las Villas que las soluciones van a tener que ser construidas por ellos mismos como colectivo social. Una de las herramientas que me pareció interesante de considerar fue la del arte como una manera de construir una identidad propia, local. No es la única, la población de Soldati y las villas que conforman el barrio van construyendo un cambio positivo en sus vidas acompañados de algunas políticas públicas. Creo que lo particular del arte villero es que brinda una identidad inconfundible.

Bibliografía

- Abramovay, R. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. In Seminário sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável, Fortaleza, novembro de 1998, Governo do Ceará, ME Política Fundiária, 1998.
- Bourdieu, P. "Efectos de lugar". En Bourdieu, P. (Director); La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2000.
- Carman, María; Vieira da Cunha, Neiva y Segura, Ramiro (2013); Segregación y diferencia en la ciudad. Quito: FLACSO, Sede Ecuador.
- Castells, Manuel (1974). Movimientos sociales urbanos. México: Siglo XXI Editores.
- Delgadillo, V. (2014): "Teorías, políticas, programas y otras recetas urbanas para ciudades latinoamericanas", en Cadernos Metropoli, Sao Paulo, V. 16, N° 31, pp. 89-111.
- <http://www.scielo.br/pdf/cm/v16n31/2236-9996-cm-16-31-0089.pdf>
- Del Vento Víctor (2010), Vecinos contra el Polo Farmacéutico. En Noticiario Sur: <http://www.noticiariosur.com.ar/titulos/destacados/vecinos-contra-el-polo-farmaceutico>

¹⁹ Castells, Manuel (1974). Movimientos sociales urbanos. México: Siglo XXI Editores.

- Di Virgilio, M. Urbanizaciones de origen informal en Buenos Aires. Lógicas de producción de suelo urbano y acceso a la vivienda. *Estud. demogr. urbanos* [online]. 2015, vol.30, n.3 , pp.651-690.
- Erbiti, C. (2007): “Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del Siglo XX: Desafíos para la gestión del territorio”, Ponencia presentada en el IV Seminario de Ordenamiento Territorial: Ordenamiento Territorial y Problemáticas Urbanas.
http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/problematika_urbana_1_.pdf
- Grimson, A. (2009); “Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización en la política de Buenos Aires”. En Alejandro Grimson, M. Cecilia Ferraudi Curto y Ramiro Segura (Comps.) La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Buenos Aires. Prometeo.
- Lefèbvre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Ed. Península (edición original francesa Ed. Anthropos, 1968).
- Lekerman, V. “Formas de habitar en una villa de emergencia: redes de relaciones y prácticas de urbanización”. *Revista Kula*, Num.2, 2000.
- Murillo, F. El "derecho a la ciudad": se construye con más obra pública o con mejor regulación del desarrollo urbano? La planificación territorial y el urbanismo desde el diálogo y la participación. Actas del XI Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Buenos Aires, 2-7 de mayo de 2010.
<http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/geocritica2010/214.htm>
- Montoya Restrepo, N. (2014): “El urbanismo social: las tácticas de un estado anfibio, en *Revista Bitácora Urbano Territorial*, vol. 24, núm. 1, enero-junio, 2014, pp. 1-14 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. **<http://www.redalyc.org/pdf/748/74830875017.pdf>**
- Núñez, A. (2011): “Formas socioterritoriales de apropiación del hábitat y derecho al espacio diferencial”, en *Territorios*, N° 24, Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 165-191.
- Paz, Luis. Fantasma: “en las villas, los artistas no saben que lo son”. 28/05/2010
<http://lanan.com.ar/fantasma-en-las-villas-los-artistas-no-saben-que-lo-son/>
- Raspall, Tomás (2012) El Plan Unidad Cinturón Sur. Impactos de una nueva política de seguridad en un gran conjunto urbano de la ciudad de Buenos Aires
- Rincón Patiño, A. (2006): “Racionalidades normativas y apropiación del territorio urbano: entre el territorio de la ley y la territorialidad de legalidades”, en *Economía, sociedad y territorio*, V. v, N° 20, El Colegio Mexiquense, México.
- Rodríguez, C. y Di Virgilio, M. (2011); “El caleidoscopio de las políticas habitacionales-territoriales”. En María Carla Rodríguez y María Mercedes Di Virgilio (org.); Producción social del hábitat, políticas públicas y desarrollo de organizaciones sociopolíticas. Buenos Aires, Prometeo
- Romero, L. (2007); “Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”. En Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires, Siglo XXI Ed.
- Roze, J. (2001): “Las ciudades y la acción sobre las ciudades”. Disponible en http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/39585/CONICET_Digital_Nro.226b8d0f-eb87-4a04-9594-fd1f1a360646_A.pdf?sequence=2
- Sachs, I., (2000). Caminhos para o desenvolvimento sustentável, Rio de Janeiro, Brasil, Garamond.
- Santos, Milton (2002) O dinheiro e o território. In: SANTOS, Milton; BECKER, Bertha; SILVA, Carlos Alberto Franco da; et alii. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense; Associação dos Geógrafos Brasileiros.
- Snitcofsky, Valeria. “Impactos Urbanos de la Gran Depresión: el caso de Villa Desocupación en la ciudad de Buenos Aires (1932-1935)”, en *Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura y Sociedad*, N° 15, noviembre 2013 (pp. 93-109).
<http://www.scielo.org.ar/pdf/cuba/v15n15/v15n15a05.pdf>
<https://www.puraciudad.com.ar/san-cristobal-asi-luce-la-estacion-de-subte-donde-los-vecinos-quieren-montar-un-museo/>
- Vecinos de Villa Soldati se organizan con arte y música contra la termovalorización en el sur. *Boletín Pura Ciudad*, 01/08/2018
- Zunino, H. 2006. Power Relations in Urban Decision-making: Neo-liberalism, ‘Techno-politicians’ and Authoritarian Redevelopment in Santiago, Chile. *Urban Studies* 43: 1825-1846.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Planificación y urbanización del barrio 31 y 31 bis

Rosana Karina Espejo

Universidad Nacional de Quilmes
rosanaespejo.re@gmail.com

Resumen

La urbanización de la Villa 31 y 31 bis, ha sido objeto de controversias y políticas públicas por parte de las autoridades; según Erbiti, los procesos de urbanización son series de transformaciones que se van generando a lo largo del tiempo, mediante las cuales algo que no lo era adquiere el carácter de urbano. El derrotero de los habitantes estuvo ligado a estas políticas, que en general ignoraron los derechos de los habitantes de esa Villa y los resultados negativos que se generaron ante dichos cambios. A pesar de las erráticas políticas en la actualidad hay un proceso de integración barrial que es el ordenamiento territorial como instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población, atisbos quizás de planificación e integración sociocultural de los vecinos a la ciudad en la que habitan.

Palabras clave: TERRITORIO - SUJETO SOCIAL – CIUDADANÍA - SEGMENTACIÓN.

Territorio en Disputa

El barrio 31 y 31 bis emerge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un lacolito, un área de construcciones irregulares, limitando por el oeste con las vías del ferrocarril San Martín y por playas de contenedores por sus otros extremos. Ocupa 28 hectáreas insertadas en las comunas I y II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Figura 1: Imagen aérea del Barrio 31 y 31 bis. Fuente

El barrio 31 surge en la década de 1930. En el contexto de la crisis mundial donde llegan a la Capital Federal migrantes tanto desde el exterior, predominantemente europeos y con la

sustitución de importaciones argentinos de las provincias en busca de trabajo. Estos grupos se asientan en tierras cercanas a dos grandes fuentes de trabajo de la época: el puerto y las terminales ferroviarias.

Fue prácticamente erradicado bajo la Dictadura del 1976 al 1983. Solo 43 familias resistieron el avance de las topadoras y formaron la llamada Comisión de Demandantes logrando que el Poder Judicial fallara a favor de su permanencia. Desde principios de la década del 1980 comenzó su repoblamiento con criterios de urbanización barrial. Desde entonces crece constantemente en número de habitantes y en densificación. Llegó a tener 25.000 habitantes a fines de la década del 70 y en el 2007 volvió a llegar a ese número, incrementándose en nuestros días a más de 40.000 habitantes. (Dirección General de Estadísticas y Censo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009).

Es un barrio producto de sus habitantes, ya que surge y se desarrolla carente de planificación y de asesoramiento profesional, en un proceso de producción de hábitat popular que se caracteriza por la adición de volúmenes, construidos como respuestas espontáneas a necesidades habitacionales dinámicas, que generan soluciones en etapas, condicionadas por los recursos de los que se dispone. En los últimos 10 años por el crecimiento poblacional ininterrumpido y la escasez de terrenos vacantes en el barrio 31, se produjo una gran densificación del tejido; los lotes totalmente construidos, obligaron a un marcado crecimiento vertical que suma graves problemas de ventilación e iluminación a los constructivos, de hacinamiento e infraestructura, las construcciones y escaleras invaden el espacio público, que como un organismo vivo cambia su límite y forma día a día. En la década de 1990 la construcción de la autopista Illia se constituye en una barrera física contundente que divide al barrio y da origen al barrio 31 bis, a pesar de esto ambas se leen como una totalidad y comparten aspectos de su identidad.

Se trata de un territorio en disputa. Lo que en esa época era un área de servicio de la Ciudad, hoy en día es un área central de nuestra capital, donde los desarrolladores inmobiliarios y sus eventuales socios en los gobiernos proyectan extraordinarios negocios para los cuales erradicar e impedir la urbanización de este barrio pasó a ser el objetivo principal. Derecho a la radicación y urbanización: En 2009 la Legislatura de la Ciudad Autónoma Buenos Aires sanciona la Ley 3343 que dispone la urbanización del barrio 31 y 31 bis, y organiza una Mesa

de Trabajo y Gestión participativa conformada por representantes de los gobiernos nacionales, de la ciudad, la universidad y los habitantes, que definió los lineamientos del proyecto de urbanización. Organización del barrio 31 o Barrio Carlos Mujica (como lo llaman sus habitantes) se subdivide en 9 barrios organizados en manzanas irregulares: Comunicaciones, YPF, Autopista, Inmigrantes, Güemes, Cristo Obrero, Ferroviario, Galpones, San Martín. Cada uno de ellos tiene su autonomía y sus Juntas Barriales. Existe además un Cuerpo de Delegados conformado por 122 delegados elegidos por manzana y un Consejo compuesto por 10 consejeros que representan a la totalidad del Barrio.

Nos encontramos con un “Crecimiento sin planificación urbana”, es decir, la planificación es la acción de elaborar y ejecutar un plan científicamente organizado y frecuentemente de gran complejidad y amplitud, para obtener un objetivo concreto. La planificación urbana es multidisciplinaria, debe contener los servicios viales, agua potable, cloacas y electricidad como infraestructura básica y estructuras de espacios destinados a servicios de salud pública, educación, seguridad y demás relaciones socio-ambientales. La cantidad de habitantes mínima para definir un ejido urbano es en la Argentina de 2000 hab. (Clasificación INDEC) Cuando se produce el fenómeno de dispersión y deslocalización hablamos de urbanizaciones difusas; pero cuando estas carecen de servicios básicos entramos en las urbanizaciones marginales: Asentamientos y villas en los cuales los servicios básicos son producto de extensiones marginales, no regulado, carentes de planificación, control y protocolos de seguridad. El barrio 31 y 31 bis tiene las características coincidentes con una urbanización marginal, donde los servicios básicos no tienen continuidad espacial, planificación funcional ni protocolos de seguridad establecidos. Ello puede explicarse porque se trata del más antiguo de la ciudad y por la velocidad de crecimiento del mismo. El último censo contabiliza 26.403 habitantes distribuidos en los barrios 31 y 31 bis. El número de hogares asciende a 7.950. (Dirección General de Estadísticas y Censo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009) La densidad poblacional es de 85.171 hab/km², cifra muy superior a 14.973 hab/km² promedio de la ciudad de Buenos Aires. La distribución dentro del barrio (ver mapa Habitantes por manzanas. Densidad de población. Censo 2010) nos indica la concentración mayor en el barrio 31 bis y en las cercanías con la traza de la autopista. Disminuyendo a medida que nos alejamos de las zonas de accesos a Retiro o Terminal de Ómnibus. (INDEC censo 2010). Las condiciones que sumergen a este barrio en territorios en disputa vienen

dadas por la estructura social del mismo entre otros aspectos, considerando por ejemplo que más del 50% de la población es de origen extranjero, mientras que solo el 29% es nativo de la ciudad. De la población extranjera la mitad es nacida en Paraguay, 30 % en Bolivia y menos del 20% en Perú. Esta configuración sociocultural dificulta la existencia de patrones culturales propios que le permitieran a la población una identidad propia, así como un proyecto propio de desarrollo local. Estos procesos configuran exclusión social entendiéndola no como un estado, sino como un proceso, que como tal debe ser enmarcado históricamente Castel (1997). Aspectos tales como la precariedad laboral, ausencia de sistemas de salud así como pobres soportes relacionales, van construyendo una zona de vulnerabilidad que aglomera a gran parte de la población del lugar.



Figura 2: Mapa abierto Villa 31 y 31 bis, fuente: Telam.

El habitante de la villa como sujeto social

La ciudad de Buenos Aires se presenta como fragmentada y altamente segmentada. El caso de las llamadas villas miserias presentan una alta densidad ya que las casas suelen edificarse en altura en pequeños espacios y aquí se plantea de la manera en que lo expresa Bourdieu¹ (Bourdieu, 2000) la lucha en el territorio donde cada uno de los sujetos asume un rol, compromisos y luchas. De esta manera queda planteada una necesaria alteridad, encontramos un nosotros y los otros. Grimson² (Grimson, 2009), lo plantea en términos de las implicancias simbólicas incluso en términos de civilización y barbarie”. Este concepto le confiere al habitante de la Villa una connotación negativa y con tildes moralistas desde la visión de la zona como una frontera. Estos sujetos se ven privados del derecho a la ciudad que plantea Jordi Borja³ (Borja, 2003), dado que se trata de un espacio político, allí se expresan voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto. El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, de salud, de educación, de vivienda y participación entre otros.

La construcción social villera se dificulta dado que numerosas narrativas circulan en la ciudad y fomentan la construcción del imaginario negativo del sujeto villero, historias de crímenes y delincuentes que se esconden en el lugar no hacen más que reafirmar la visión negativa del lugar y sus habitantes.

Estos sujetos sufren el menosprecio de los ciudadanos dado que son desposeídos de su derecho a decidir y ser consultados sobre los planes que se implementan en el espacio que habitan. No obstante, los planes anunciados en 2016 para urbanizar las villas 31 y 31 bis: el proyecto “Treinta y todos” propone la construcción de un polo educativo donde se ubicará la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, así como la realización de un “corredor verde” en reemplazo del tramo de la autopista Illia que cruza el barrio y un conjunto de obras de infraestructura básica que permitirán el acceso a iluminación, cloacas, desagües pluviales, cableado y pavimentación. Este es el inicio de la construcción de los sujetos villeros como

¹ Bourdieu, P. “Efectos de lugar”. En Bourdieu, P. (Director); La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2000.

² Grimson, A. (2009); “Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización en la política de Buenos Aires”. Buenos Aires. Prometeo.

³ Borja, Jordi, La Ciudad Conquistada, Alianza Ed., Barcelona, 2003

ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. A partir de este momento se quiebra el paradigma en el cual la precariedad de la vivienda parecía impregnarse en la calidad humana de sus ocupantes, impactando negativamente en sus sociabilidades e identidades (Merklen, 2005).⁴ Este hecho reconfigura las relaciones sociales y económicas del lugar. Es por esta razón que analizaremos los actores sociales y sus diversas relaciones con el territorio para poder comprender la evolución del territorio en disputa y reconocer los procesos que tienen lugar en el Barrio 31 y 31 bis.

De un barrio marginal a un polo gastronómico

El barrio 31 es una de las “villas” más antiguas de la ciudad y está ubicado en un lugar estratégico, sobre terrenos que han sido codiciados por desarrolladores urbanos y varias gestiones a cargo del Gobierno. Es por esta razón que hace unos años ya, el estado se ha comenzado a presentar como un actor destacado en la evolución del barrio. Dada esta situación, es posible visualizar los cambios a primera vista: de pasillos inseguros y poco saludables a calles claramente diferenciadas y casas pintadas, negocios de gastronomía y escuelas para los habitantes del lugar. Pero quizás detrás de estos beneficios es posible encontrar procesos ajenos a los habitantes del lugar que quizás con el paso del tiempo, lleven a cambios no deseados por los pobladores.

Es escenario de una múltiple y compleja trama de organizaciones sociales y comunitarias, con una densidad mucho mayor que otras villas de la ciudad. Estas organizaciones dejan entrever la complejidad de la problemática social que afecta a los habitantes del lugar. Esto se representa en tensiones existentes dado que, correspondería al Estado desarrollar estrategias de desarrollo en la zona de forma tal de atender necesidades y buscar el desarrollo sustentable del territorio. Uno de los problemas que se perciben en primer lugar es la incapacidad de los vecinos del barrio de distinguir las razones por las cuales se desarrollan obras de mejora en un área particular del territorio, pero no se busca mejorar aspectos necesarios en las zonas habitables en otro sector del mismo. Cambia el aspecto del barrio, hay instituciones de gobierno que se mudan al lugar, hay desarrollo comercial...pero la vida cotidiana de los habitantes sigue teniendo los mismos problemas que antes. Uno de estos problemas es el transporte en relación a los lugares de cercanía, en particular al propio barrio

⁴ Merklen, D. Pobres ciudadanos. Buenos Aires, Gorla (2005)

en el que se ubica: Retiro. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta a pesar de los cambios, la presencia del Estado y las persistentes comunicaciones del gobierno promoviendo el lugar es que los niveles de seguridad para quienes quieran transitar por el lugar son bajos, el delito está presente permanentemente.

Es por esta razón que resulta contradictorio el permanente estímulo al desarrollo de turismo en el Barrio. Esto ha generado un impulso a movilizar capitales hacia el barrio que, a primera vista podrían describirse como simples capitales aplicados a infraestructura. Quizás, analizando un poco más profundamente la situación sea posible explicar estos procesos como parte del proceso globalizador que lleva a los capitales de inversión a la búsqueda de nuevos territorios.

En los casos que esto ocurre inicialmente podemos identificar procesos de gentrificación en curso. Pero a primera vista, existe un proceso de empoderamiento de la población que ha podido desarrollar pequeños negocios que les permiten mejorar su nivel de vida a través del desarrollo del polo gastronómico llamado La Florida.



Figura 3: Polo gastronómica La Florida. Fuente Diario La Nación.

Aunque este proceso en primera instancia es beneficioso para el barrio en general, según plantean las autoridades lo cual hemos podido hablar con los habitantes del lugar, el mismo acarrea un proceso de fragmentación territorial y de las demandas de los pobladores del territorio en disputa y por otro lado la dilución de las articulaciones necesarias para obtener las mejoras que desean.

Desposesión, Desplazamiento, Gentrificación y Fragmentación

En este punto queda claro que el estado considera el territorio estudiado como un espacio a desarrollar: Es por ello que el estado regula y lleva adelante las tareas de reestructuración del territorio, y en el caso del Barrio 31 y 31 bis este proceso se lleva adelante de forma sutil, aunque en general, las organizaciones contribuyen a resaltar y visibilizar ciertas temáticas que hacen a las demandas y necesidades del barrio. Debido a las dimensiones del barrio 31 y su división en varios sectores o sub-barrios, han surgido organizaciones con el objetivo específico de visibilizar las demandas de algunos territorios en particular. En cuanto a los modos de representación, la gran extensión territorial del barrio, la división en varios sectores y la densidad poblacional, generan ciertas dificultades a la hora de centralizar los reclamos vecinales. Suele haber conflictos entre los distintos sectores que componen el barrio, por lo cual se han creado organizaciones específicas con el objetivo principal de inclusión de sus sectores. Se llevan adelante reclamos por el reconocimiento de los barrios, el acceso a servicios públicos como luz, agua, cloacas, limpieza, etc. Al no existir una Junta Vecinal, sino un sistema de consejeros y delegados por manzana, resulta complejo el poder articular las demandas e intereses vecinales con el fin de reclamar ante las instituciones estatales correspondientes. Sin embargo, muchos de los vecinos que ejercen las funciones de representación son referentes barriales responsables de alguna organizaciones sociales y políticas, por lo cual, ejercen muy frecuentemente este doble rol desde sus organizaciones y desde la representación vecinal, atendiendo no solo a la población beneficiaria de sus programas sino también las demandas y reclamos vecinales en general.

El reclamo histórico de los vecinos de todas las villas de la ciudad para la integración social y urbana de sus barrios había sido por primera vez reconocido normativamente a través de la ley N°148 en 1998. A pesar de la legislación existente, con la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno porteña en 2007, se realizaron varios anuncios sobre la erradicación del barrio 31 y 31 bis. Previamente, pocos días antes de la asunción del nuevo gobierno local en diciembre de ese año, habitantes del barrio habían firmado un convenio con la Organización Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) para iniciar obras de urbanización y mejoras del barrio 31. En esos años se formó en el barrio una mesa de trabajo que discutió y redactó el proyecto de urbanización del Barrio Padre Mugica que fue sancionado como la Ley 3.343 por la Legislatura Porteña en 2009, la cual se disponía a la

realización de un censo, la construcción de viviendas y la creación de la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización. En la nueva gestión del PRO, que se inicia con la asunción de Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno en diciembre de 2015, el tema de la urbanización e integración de las villas de la ciudad cobró un nuevo impulso. La gestión social del hábitat, como se la denomina oficialmente, busca mostrar la nueva sensibilidad social del partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde 2007. De esta manera, desde principios de 2016 se han hecho públicos diversos proyectos de obras en villas de la ciudad a través de anuncios oficiales de gobierno y reuniones con referentes barriales. Específicamente, en agosto de este año -durante la realización del trabajo de campo para este informe-, se oficializaron importantes proyectos de integración social y urbana de Villa 20 y el barrio 31 y 31 bis.

El estudio prevé la urbanización general del barrio 31 con la incorporación de servicios y espacios públicos, equipamiento urbano, infraestructura, tratamiento de los accesos, pavimentación de calles, plazas y espacios residuales, y la complementación del trazado vial existente mediante nuevas conexiones, la recuperación de la iglesia del padre Mugica con la creación de una plaza anexa, tratamiento paisajístico-ambiental general del área a lo largo de la autopista, nueva bajada de conexión de la autopista al puerto, reforestación general del área, iluminación pública, mobiliario urbano y señalización. El proyecto consiste en una Interface entre el barrio 31, la autopista y los terrenos del ferrocarril, materializada mediante la puesta en práctica de tres programas interconectados, configurando una Nueva Fachada Urbana como conexión con la ciudad: un Centro de Generación de Trabajo y Renta a ser implantado en los galpones existentes abandonados; una gran Explanada-Plaza Cívica funcionando como espacio de encuentro y para manifestaciones culturales y de esparcimiento; y un Centro Deportivo incluyendo gimnasio cubierto, campo de fútbol y piscinas deportivas. De esta forma, trabajo, recreación y deporte constituirán un nuevo nudo estructurante de la vida social de la comunidad, relevante también para el conjunto de las áreas vecinas. Las viviendas previstas para las relocalizaciones necesarias, que configuran el otro lado de la nueva Fachada Urbana sobre autopista, consideran un núcleo básico y previsión para la expansión futura a cargo de cada habitante, para la mitad de las unidades. Este núcleo básico es concebido como un portador de urbanidad y constituye parte

componente fundamental de la nueva aura buscada para el lugar, definiendo una nueva condición de habitabilidad y una nueva conectividad, positiva, con la ciudad.

Pero dentro de este proceso, se han estructurado cambios que buscan garantizar la rentabilidad de la inversión en el caso de que dichos cambios busquen obtener rentabilidad inmobiliaria. Para poder hacer más rentables dichas tierras se aseguran accesos y autopistas como se puede ver en el mapa inferior.

UN PROYECTO QUE BUSCA INTEGRAR

Una traza en estudio

Circularía entre la línea de viviendas de las villas 31 y 31 bis y el espacio verde donde está la Facultad de Derecho, la Plaza de las Naciones Unidas, el Centro de Exposiciones y el Parque Thays. La traza podría modificarse.

La traza actual

Allí se prevé que se construya en altura y sobre la estructura original un **corredor verde**. Es decir, un espacio abierto al público, para unir por otras vías a las villas 31 y 31 bis con el resto de la ciudad.

Villas 31 y 31 bis

La primera se originó por iniciativa del Estado y en el contexto de la crisis del año 1929. En aproximadamente 9000 viviendas construidas en altura habitan unas **13.000 familias**.

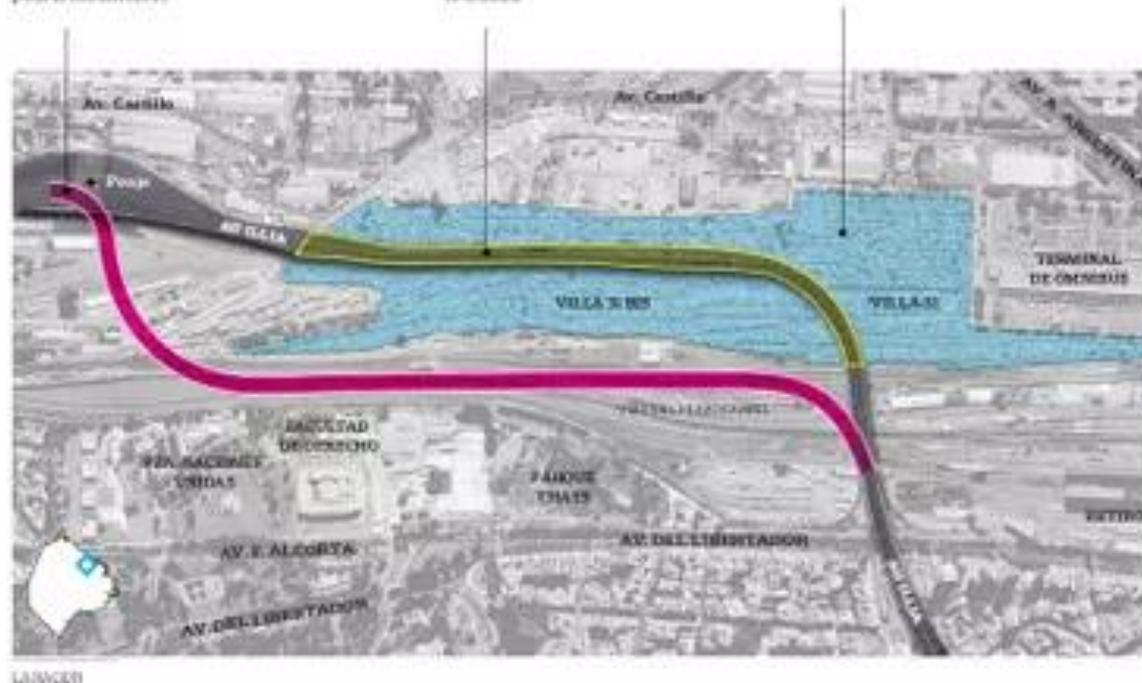


Figura 4: Fuente: Diario La Nación

Es posible decir que los habitantes sufren desposesión por desplazamientos en base a políticas estructuradas desde el Estado. Estas políticas intentaron buscar soluciones a los problemas de fragmentación territorial que se presentan en la zona de retiro en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de procesos de planificación territorial el Estado se logran procesos de

desarrollo local y de institucionalización necesarios en espacios donde la vulnerabilidad de la población era alta.

Quizás sea posible que estos procesos que llevaron a desestructurar la lógica territorial y social generen espacios de construcción ciudadana que permitan empoderar a los pobladores dado que hasta ahora los habitantes solo son receptores de mejoras, pero no son escuchados respecto de lo que piensan de ellas.

Ciudadanía Villera a modo de conclusión.

Cuando comenzamos este trabajo, solo había habitantes de un lugar con claras necesidades por los problemas de falta de servicios, o la precariedad de sus viviendas entre otros. La intervención del Estado a través de sus políticas de desarrollo territorial fue modificando el estatus de los ciudadanos de la Villa 31 y 31 bis. Ahora son pobladores de un barrio donde las instituciones se encuentran allí y pueden ser sujetos de derecho: realizan trámites sobre su propiedad, se encuentran documentados, se benefician de sistemas de salud y otros aspectos que han modificado el perfil sociocultural de la Villa. Aquí podemos considerar lo que dice Alonso sobre los estilos de vida que se constituyen en la materialización de las prácticas sociales de clase, que se concretan –como ya señalamos– en capital cultural (titulaciones y credenciales), capital social (conjunto de relaciones socialmente útiles) y capital simbólico (signos, rituales y prácticas de respetabilidad social) (Alonso 2005). Podemos decir entonces que se construye una nueva clase ciudadana.

En este proceso no solo se reconfiguro el barrio, sino que transformaron las personas que comienzan a ser sujetos de derecho, ellos son considerados habitantes del lugar y ya no solo son quienes usurparon el espacio. Dado que este fenómeno es un fenómeno en curso, los habitantes aun no pueden tener tan en claro lo que ocurre, todo es nuevo para ellos. Si pensamos que la ciudadanía es un ejercicio cotidiano que en la medida que va teniendo lugar se va mejorando a sí mismo, queda mucho por hacer. Pero lo importante es que hay un proceso de construcción ciudadana. Los habitantes van aprendiendo de que manera deben llevar adelante sus relaciones con el estado. De momento queda mucho más para investigar sobre el proceso de cambio en la fisonomía del barrio y parece apresurado aun hablar de un claro proceso gentrificador. De ser así este proceso tiene el poder de desvelar la dominación

de los poderosos detrás de la renovación urbana: el Estado, el capital inmobiliario, los bancos, en coalición con muchos arquitectos-urbanistas y, por supuesto, los medios de comunicación. Falta aún en este proceso de cambio que los ciudadanos del Barrio tengan conciencia de grupo y sean reconocidos por el estado e incluidos en su agenda. Queda aún camino para recorrer.

Bibliografía

- Alonso, L. E. 2005. "El estructuralismo genético y los estilos de vida: consumo, distinción y capital simbólico en la obra de Pierre Bourdieu".
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/LM-Alonso-consumo.PDF
- Borja, Jordi, La Ciudad Conquistada, Alianza Ed., Barcelona, 2003.
- Bourdieu, P. "Efectos de lugar". En Bourdieu, P. (director); La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2000.
- Castel, Robert (1997): La metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires: Paidós
- Cazella, A. A. (2005). Vantagens diferenciadoras e mediações de conflitos: desafios das políticas de desenvolvimento territorial, Seminário Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável). Brasília/DF, 23 a 25 de agosto, pp. 19.
- Diario La Nacion, Villa 31 desviarán un tramo de la Illia, 6 de Agosto de 2016.
- Dirección General de Estadística y Censos; (2001), (2010), Resultado del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en la Ciudad de Buenos Aires.
- Grimson, A. (2009); "Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización en la política de Buenos Aires". En Alejandro Grimson, M. Cecilia Ferraudi Curto y Ramiro Segura (Comps.) La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Buenos Aires. Prometeo.
- Jorge Arzate Salgado Alicia B. Gutiérrez Josefina Huamán (coord.) "Reproducción de la pobreza en América Latina. Relaciones sociales, poder y estructuras económicas." CLACSO, Buenos Aires, 2011.
- Merklen, D. Pobres ciudadanos. Buenos Aires, Gorla (2005)
- Rodríguez, C. y Di Virgilio, M. (2011); "El caleidoscopio de las políticas habitacionales-territoriales". En María Carla Rodríguez y María Mercedes Di Virgilio (org.); Producción social del hábitat, políticas públicas y desarrollo de organizaciones sociopolíticas. Buenos Aires, Prometeo.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Divulgación del concepto de corrupción en la coexistencia de formalidad e informalidad en un contexto de pobreza (el caso de cuatro municipios de la Araucanía)¹.

Diego Márquez Ossandón²
Universidad Católica de Temuco
marquezdiego89@gmail.com

El hablar de corrupción es un tema complejo de expresar sobre todo para los funcionarios municipales, ya que encuestas ciudadanas exponen que ahí se presenta este fenómeno de forma más frecuente. A partir de esa sensación conocer que entienden y divulgan sobre la corrupción estos funcionarios en un territorio como la Región de la Araucanía. Los principales resultados y conclusiones describen que ciertas prácticas sociales, además de ser un problema público acompañado con un discurso que rescata el contexto geográfico y social influyen en la descripción, la caracterizan en coexistencia a procesos formales/legales que cotidianamente deben realizar como funcionarios, entonces finalmente es entendida como pequeña y gran corrupción. El fin de esta investigación no pretende definir el concepto, más bien puede ser entendido como un aporte para su debate.

Palabras claves: CORRUPCIÓN – MUNICIPIOS - PRÁCTICAS.

¹ Estos son resultados parciales de una tesis de maestría. Se enmarcan dentro del proyecto Fondecyt 11170491: “Vínculos sociales y corrupción en el contexto público local la coexistencia de lo formal e informal” dirigido por Emilio Moya.

² Sociólogo UC Temuco/ Tesista de la maestría en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

1. Introducción

En la actualidad el fenómeno de la corrupción es una problemática que cada vez es más importante para los ciudadanos de América Latina. Diversas encuestas como LAPOP o LatinoBarómetro centran a este fenómeno dentro de los 3 problemas más importantes a ser resueltos por los respectivos gobiernos. Cerca del 80 % de los encuestados en América perciben que la corrupción es generalizada o muy generalizada en su país (Zechmeister, 2014). Además, en países como Brasil (80%), Chile (69%) y Colombia (66%), los ciudadanos dicen que no se ha progresado en la reducción de la corrupción pública, cerca de 62% promedio para el continente según Latinobarómetro³. Estos antecedentes demuestran que el combate a la corrupción es un tema de importancia para el continente ya que se atenta contra uno de los principios fundamentales del quehacer democrático: “la igualdad frente a la ley” (Rehren, 1998). Además, daña la relación directa que hay entre la ciudadanía y el gobierno, dando como resultado, gobiernos con poca confianza por parte de la ciudadanía, lo que constituye una fuerza desintegradora de las instituciones sociales, económicas y políticas de una sociedad (Rehren, 1998). En temas de evaluación de las políticas de transparencia en Chile, existe un punto débil: los gobiernos locales (municipios).

Si observamos las fiscalizaciones sobre transparencia activa (es la información que todo servicio público debe publicar en su página web y debe estar actualizada cada 30 días según ley 20.285), los niveles de cumplimiento municipal llegan al 70 % promedio en comparación a la administración central y empresas del Estado que cumplen promedios cercanos al 98% (CPLT, 2018)⁴. Los ciudadanos también tienen visiones negativas de la relación municipios-corrupción ya que según datos de Libertad & Desarrollo⁵, estos son evaluados como la institución pública con la mayor percepción de la corrupción, con un promedio de 6,7 (un máximo de 10). Además, según los hechos de corrupción recientes, cerca del 25 % de los funcionarios involucrados pertenecían a municipios y 10 de los últimos 18 hechos de corrupción conocidos, se relacionan a gobiernos locales.

³ Revisar informe de [Latinobarómetro 2017](#).

⁴ Revisar fiscalización en [Transparencia Activa a municipios 2018](#) de Consejo Para la Transparencia.

⁵ Revisar [Encuesta de Corrupción 2018](#) de Libertad y Desarrollo.

Esta investigación se centrará en la construcción y divulgación del concepto de corrupción de funcionarios municipales de cuatro municipios de la Araucanía. Los resultados exponen en primera instancia que existe una mirada legal, pero coexiste con prácticas y relaciones sociales tanto dentro de los municipios como fuera. Además, se pueden clasificar en pequeña y gran corrupción y es asociado a un problema público, ya que afecta a las instituciones más cercanas y necesarias para los ciudadanos.

2. Entendiendo la Corrupción

El ICHEM de la Universidad Autónoma de Chile realizó una encuesta el año 2012 sobre probidad y transparencia de autoridades municipales (Alcalde máxima autoridad y concejales miembros del Concejo Municipal). Los principales resultados indican que las áreas más vulnerables para cometer irregularidades son la Dirección de obras 53%, la Dirección de desarrollo comunitario 34% y la dirección de administración y finanzas con 23% (ICHEM, 2012)⁶.

La corrupción puede ser entendida desde dos posiciones: por una parte, aquellos que la observan como un hecho endémico, arraigado en la sociedad, que sólo se puede minimizar, pero no quitar (Klitgaard, 1992 en Orellana, 2004)⁷, mientras que, por otro lado, se encuentran los estudiosos que afirman que hay contextos en las que ésta no está presente, siendo un reto continuo lograr esta situación, conocida como probidad según Orellana. La existencia de corrupción en los organismos públicos trae consigo graves ineficiencias y problemas para la ciudadanía. Por una parte, se crean políticas públicas que son innecesarias, promoviendo, por tanto, un mayor gasto y pérdida de recursos estatales (Kaufmann, 2000).

Desde una mirada más política, este tipo de irregularidades deslegitima a las instituciones, merma la capacidad de influencia de los ciudadanos en los políticos y excluye a algunos sectores de la población en beneficio de los que pueden ser parte del juego clientelar (Echebarría, 2007), repercutiendo además, de manera negativa, en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones y por ende, en el sistema democrático (Warren,

⁶ Ver informe de [ICHEM 2012](#).

⁷ Orellana propone leer a Klitgaard (Controlando la Corrupción, 1992), ya que es de los clásicos sobre cómo afrontar este fenómeno, ya que como problema social jamás podrá ser erradicado, pero si puede ser cada vez más controlado.

2004). Desde el imaginario sociológico me gustaría tomar la perspectiva de (Barozet, 2006) y su análisis del valor histórico del “pituto” en Chile. Su propuesta expone que “en los miembros de la clase media chilena existe una práctica muy anclada, que se representa en el “intercambio de favores”, lo que trae como beneficio, la obtención de bienes y servicios mediante vínculos amistosos. El contexto histórico en donde empieza a surgir este tipo de solidaridad se ha adscrito al nacimiento de la clase media, pero la investigadora, hace hincapié en una evolución de esta práctica, por medio de las macro transformaciones sociales y económicas que sufrió Chile (Barozet, 2006: 3). Un elemento central que surge de esta investigación, es que es, un recurso o capital con el que cuenta la clase media. “El pituto”, compadrazgo o favor, según Barozet es una forma extremadamente analítica de la propuesta de Capital Social de (Bourdieu, 2011). Este” intercambio de favores o pituto” es una forma de reciprocidad entre individuos del mismo círculo o nivel social.

2.1 Corrupción como Práctica social

Una de las propuestas investigativas para entender la corrupción es a través de sus prácticas. Para (Sautu et al, 2004:83) se presentan dos criterios para definir una situación como corrupta: “legal y lego”. La primera, en términos prácticos, hace referencia al sistema legal (normativo), que fin al cabo impone sanciones. El lego hace referencia a las creencias y valores de la gente común, la cual no necesariamente o se relacionan con todos los que son definidos legalmente, o la inversa actos legales que pueden ser visualizados como corruptos”. Una propuesta sociológica de investigación propone que esa creencias y valores, serían parte de la cultura, es decir formas de relaciones y creencias de un contexto más específico (Elias, 1998) o también parte del habitus como resultado de la actuación de acuerdo a su origen y sus trayectorias sociales (Bourdieu, 1984). La valoración de la práctica también se conjuga con la definición que expresan los ciudadanos, ya que para éstos no existe un solo significado, éste posee multiplicidad de argumentaciones a partir de esas experiencias y sus relaciones. En referencia a la última (Moya & Dueñas, 2015) estudian las relaciones sociales en torno a la corrupción en municipios de Chile, principalmente concluyen que no sólo se obtienen provechos materiales o monetarios sino más bien integración social por la estrechez de este de tipo de vínculos, además de una serie de intercambio de favores. Para los investigadores se originan relaciones al interior de los municipios, basadas en vínculos

fuerzas (Granovetter, 1973)⁸ que generan un intercambio vertical de reciprocidad y lealtad, aspectos que para los estudios en Chile se vincularía al clientelismo político según (Rehren,1994). Por otro lado, las relaciones sociales con el exterior operan vínculos débiles, pero no sería sólo eso ya que también se hacen presentes los vínculos fuertes en la figura del tercero, por lo que estas relaciones coexisten en el ambiente local. Según estos autores “los vínculos cumplen un doble rol: por una parte, son fuente de integración social entre los individuos, pero, por otra, son utilizados como recursos para la consecución de ciertos fines, ya sean materiales o simbólicos” (Moya & Dueñas:26).

En una investigación sobre prácticas corruptas en Argentina, las entrevistas realizadas argumentaban que la definición de corrupción se describe como “violación de normas formales e informales, transgresión ética, la obtención desleal de beneficios o ventajas, el abuso de poder y el abuso de confianza” (Sautu et al, 2004:84). Los autores señalan que estos significados no son excluyentes, es decir coexisten en la misma perspectiva como se posibilitan las relaciones sociales en municipios en el caso de Chile.

En concordancia con las investigaciones anteriores, Jaris Mujica (2005) plantea que en los gobiernos locales del Perú, la corrupción se presenta como una práctica cotidiana que es posible encontrar en los espacios institucionales y en la vida diaria. El autor enfatiza que es un fenómeno social y a la vez una acción social. En un espacio político local (municipalidad) es posible entender cómo opera la lógica de la corrupción y cómo se vincula con la lógica de funcionamiento cotidiano de esta institución, aspectos que radicaría en relaciones entre funcionarios y ciudadanía, argumentando que el espacio público entre ciudadanía y gobierno local es un buen punto para investigar y entender prácticas de corrupción.

Las investigaciones sobre prácticas argumentan que ciertos componentes de valoración en el discurso van más allá de lo legalmente prescripto o proscrito, es decir, entender la corrupción desde lo lego se extiende más allá de lo legal (Sautu et al, 2004: Mujica, 2005). En principio se origina una tensión entre lo lego y legal, ya que el discurso argumentativo sobre este fenómeno pone en juego situaciones, culturales, sociales, relacionales y el contexto que se manifiestan en caracterizar como diversas las prácticas corruptas por los ciudadanos.

⁸ Revisar a Granovetter, M. (1973). La fuerza de los vínculos débiles. *Revista americana de Sociología*; vol 78, n° 6., 1360 - 1380. Especialmente pag 1363 sobre “vinculos fuertes”.

Este abanico de prácticas corruptas que pueden ser o estar en lo legal o ilegales, principalmente debilita los sistemas democráticos, Para (Warren,2004) la principal consecuencia es que vuelve más cínica a la gente en sus virtudes y acciones, lo que daría pie a ciertas prácticas, en la misma línea de la tensión entre buenas prácticas y malas prácticas en relación a un funcionario público estaría dado por el desarrollo socio económico del país o región , ya que según (Orces, 2009) los ciudadanos que viven en países socioeconómicamente desarrollados tienen menos probabilidad de ser víctimas de corrupción , por el contrario, los que viven en un contexto de sub-desarrollo tiene más probabilidad de ser víctimas. El desarrollo de prácticas de corrupción se define más allá de lo legal y tal como Sautu la describe, son beneficios de particulares en detrimento del orden social.

2.2 Corrupción como base social y territorial.

En la perspectiva de las prácticas, también se encuentran sujetos, relaciones y un territorio que puede ser significativo en la visualización de la corrupción. Una de estas propuestas nos sitúa en un barrio obrero de Buenos Aires, en donde según (Boniolo,2011) se categorizan prácticas corruptas por el discurso de sus habitantes, que, además están alejados de los centros y ámbitos visibles de la misma sociedad argentina. En otra discusión cercana (Lommitz,1996) presenta que en el espacio nacional de México, la ritualidad, rumores y la corrupción ha sido fundamentales en su formación.

En la descripción de Boniolo se hace un énfasis que es importante describir un contexto socio-histórico donde tienen lugar las relaciones sociales en donde se asientan las tramas de corrupción. Para (Galvez, 2014) el lugar donde se entran las relaciones sería una forma de apropiación del espacio, dando paso a un habitus territorial y su posterior disputa, en términos de Pierre Bourdieu, que para este caso sería en lo público. En el caso de México, esto se daría por el ritual, ya que para Lommitz así se formaron las comunidades políticas, en donde en primera instancia operan mecanismos de negociación y diálogo en esa comunidad nacional, posteriormente este ritual conforma alianzas en diversas colectividades, finalmente el rito conforma la esfera pública. En la discusión política de las relaciones (Vommaro & Combes, 2016) plantean que la amistad y el honor disponen las relaciones interpersonales, estas articulan los dos grados de la política local e inclusive nacional, paralelamente se origina una oposición ya que las relaciones de parientes vecinos y amigos son iguales , en contrariedad

se encuentra el de autoridad que se establece relacionamente entre el aparato gubernamental y la colectividad, ahí existen brechas que son cubiertas por relaciones de patronazgo.

El vínculo entre el habitus y el territorio, se da por un espacio social (Abstracto) según (Gálvez,2014) retomando conceptos de Pierre Bourdieu. El autor señala que se genera un territorio específico cuando la tensión y las relaciones de poder varían entre los diferentes grados de adquisición y acumulación de los capitales que los agentes poseen. En esa perspectiva el territorio no solo es físico también se explica de forma simbólica en donde se configura de forma colectiva social y deja de ser una categoría individual.

Retomando el trabajo de Boniolo, es importante en el estudio de las prácticas corruptas, pensar que el territorio es importante, sólo en ese espacio es factible poder observar el asentamiento de relaciones sociales y la coexistencia de procesos de dominación/subordinación que estos implican (Boniolo, 2011:288).

La autora señala que para los actores la corrupción ha permeado el entramado de relaciones sociales, que coexisten tanto en la que ellos participan personalmente como la de sus allegados y familias.

El discurso de los habitantes de este Barrio obrero bonaerense en referencia a la corrupción, se describe como algo más amplio que ciertas categorizaciones académicas e instituciones internacionales, es algo lego (Sautu, 2004). Los trabajadores del barrio ampliaron sus definiciones discursivas en referencia a las prácticas ya que estas se incluyen a las que suceden en el sector privado. En un segundo discurso esta definición se amplió a costumbres y prácticas, forma de cómo pudieron solucionar sus problemas y en el modo cómo enfrentarlo. En la práctica se explicita un abuso de poder y autoridad en el ejercicio del poder, desde otro. Se vuelve crucial para describir y comprender las prácticas corruptas, el territorio También éste conforma un espacio prefigurado en el que dejan su impronta los procesos de desigualdad social y reproducción de la pobreza (Boniolo, 2011:289).

2.3 Corrupción como problema público

El resurgimiento del estudio de la corrupción desde la década del 90 se ha originado, según el trabajo de Pereyra, por los movimientos anti-corrupción y las políticas de transparencia que han posicionado la corrupción como un problema público, es decir, el discurso y movimientos en contra de este flagelo nacen al posicionarlo como un “problema” sobre todo

desde el mundo económico con el principal argumento que daña la inversión, la economía, desregula la libre competencia, destruye la democracia, etc (Pereyra,2013).

Uno de los actos centrales que volvió a poner a la corrupción en el debate público fue a la OEA y su Convención Interamericana de 1996 con sede en Caracas (Venezuela). De la cual surgen la forma de categorizar ciertos actos de corrupción y forman un convencimiento “que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”(OEA,1996:1)⁹, Paralelamente un par de años antes (1993) se había fundado Transparencia Internacional, una institución no gubernamental (ong) que busca a través de un movimiento mundial lograr que los gobiernos, negocios, sociedad civil y que en las actividades cotidianas de las personas no exista corrupción (TI,2018). Un concepto que engloba hoy a este tipo de organizaciones es el de sociedad civil. Según Cohen & Arato, una definición operativa de este concepto apunta hacia una interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), en relación a las asociaciones (voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. “La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización” (Cohen & Arato, 2000:35). En la misma perspectiva este concepto surge según los autores desde occidente a la par de la democratización. El contexto social, político y jurídico en que se vuelve a posicionar la discusión de la corrupción es el de la democracia. La posición de Estados Unidos como potencia al desintegrarse la Unión Soviética a principios de los 90, según Atilio Borón (2012) supuso la victoria de un modelo capitalista con un discurso de libertad económica, democracia e integración en donde Latinoamérica que también venía de salir de una serie de Dictaduras cívico-militares también debía integrarse. Para Borón, la sumisión de Latinoamérica también pasa por la injerencia directa sobre todo en las políticas económicas y sociales, de instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, etc., ya que financiamientos, asesorías y políticas provienen de estas instituciones. El Banco Interamericano de Desarrollo en el subsector de “transparencia y lucha contra la corrupción” ha financiado cerca de 860 proyectos, siendo el subsector más financiado entre los 13

⁹ Revisar en detalle la [Convención contra la Corrupción](#).

programas que componen el área de reforma/modernización del Estado(iadb.org,2018)¹⁰. El Banco Mundial (BM.org,2019) desde el año 2010 tiene una línea de financiamiento a iniciativas de acceso a la información en diferentes países Paralelamente la ONG Transparencia Internacional¹¹ tiene como finalidad incidir en la reducción de la corrupción en temáticas como el sector privado, políticas públicas, pobreza y desarrollo, acceso a la información, educación y seguridad/defensa entre otros.

El gran aporte que realizó esta ONG es sin duda su Índice de Percepción de la Corrupción., El año 1995 se publicó el primero y calificó a los países más corruptos y a los menos corruptos, una medición que año tras año se realiza y que hasta su última edición mide a más de 180 países. Justamente ese índice sirvió como referente de la situación de la corrupción y visualizó a varios países de estas latitudes con una alta percepción de corrupción, lo que llevó a la creación de varios capítulos nacionales de TI, que impulsaron esta lucha contra la corrupción como una herramienta que sirve a la profundización de la democracia.

El desarrollo en gran medida de los movimientos anticorrupción (Pereyra, 2013), organismos internacionales y el discurso enfático que la corrupción atenta contra el desarrollo de las instituciones democráticas. materializaron cuerpos legales y la transformaron en problema público, hoy en día encuestas como LAPOP o Latino- Barómetro centran a este fenómeno dentro de los 3 problemas más importantes a ser resueltos por los respectivos gobiernos.

2.4 Metodología

2.4.1 Caracterización Regional.

La región de la Araucanía y su capital Temuco se ubican a 780 kms al sur de la ciudad de Santiago, Capital de Chile. El contexto de esta zona la hace particular para los fines de este trabajo según datos de la encuesta CASEN 2015. Por un lado, es la segunda región donde gran parte de su población vive en un contexto rural (28%) , además de tener municipios con más del 45 % de su población en situación de pobreza y cerca del 23% de su población está en situación de pobreza por ingresos . Si observamos en detalle, cerca del 53,6 % de su

¹⁰ Revisar página del [Banco Interamericano de Desarrollo.](#)

¹¹ Revisar [Transparencia Internacional.](#)

población rural laboralmente activa gana el sueldo mínimo de Chile en 2015 (\$241.000 pesos chilenos) o \$ 384 USD.

La investigación se centrará en la Región de La Araucanía de Chile. La situación de esta región es muy particular ya que además de concentrar los niveles de desocupación laboral, pobreza y promedio de salarios más bajos (Duran & Páez, 2015), tiene una particularidad bien notoria: es un terreno en donde residen individuos que se declaran ser parte de la etnia Mapuche por lo que agrega generalmente al debate la situación de la multiculturalidad que estadísticamente significa una situación aún más vulnerable en temas de trabajo, pobreza y salarios (Kremerman & Durán, 2017). Un dato concreto, cerca del 58,3 % de su población rural se identifica como Mapuche según Casen 2015, un contexto particular muy distinto a otras regiones. Referente a los municipios, hay datos que demuestran que en la región se concentran municipios donde la pobreza está entre el 35 y 48% de sus poblaciones, de las más altas del país a nivel local (Asociación de Municipalidades, 2015). Además de tener otros municipios con población rural sobre el 50 % y una dependencia del Fondo Común Municipal (aportes del Estado y otros municipios) sobre el 60% de sus presupuestos.

2.4.2 Comunas

2.4.3 Curarrehue

Esta comuna se ubica a 143 kilómetros de la capital Regional, Temuco. Su descripción socio-demográfica según SINIM- CASEN (2017) señala que tiene una población de 7491 habitantes, y que el 27% de estos son pobres. Las características institucionales de su municipio indican que el 36,7 de sus funcionarios tienen profesionalización, los cuales se dividen en 24 funcionarios de planta, 6 a contrata, 3 honorarios y 68 a honorarios por programas de ejecución. El gasto anual en personas es de \$ 1.093.925. La participación del FCM es alta ya que significan el 88,5 % (\$ 1.610.298) de los recursos en el total de ingresos municipales (\$2.203.908). Además, la SUBDERE traspasa cerca de \$ 664 millones por conceptos de programas y fondos.

2.4.4 Puerto Saavedra

Esta comuna se ubica a 85 kilómetros de la capital Regional, Temuco. Su descripción socio-demográfica según SINIM- CASEN (2017) señala que tiene una población de 12.706 personas en donde cerca del 43 % de su población es pobre. Las características institucionales nos señalan que cerca del 24% de sus funcionarios tiene profesionalización, los cuales se dividen en 28 funcionarios de planta, 22 a contrata, 4 honorarios y 105 a honorarios por programas de ejecución. El gasto anual en personal es de \$ 1.895.066. La participación del FCM es alta ya que significan el 91,04 % (\$ 3.056.658) de los recursos en el total de ingresos municipales (\$3.712.434), además la SUBDERE traspasa cerca de \$ 5.050 millones por conceptos de programas y fondos.

2.4.5 Collipulli

Esta comuna se ubica a 99 kilómetros de la capital Regional, Temuco. Su descripción socio-demográfica según SINIM- CASEN (2017) señala que tiene una población de 24.708 personas en donde cerca del 32 % de su población es pobre. Las características institucionales nos señalan que cerca del 30% de sus funcionarios tiene profesionalización, los cuales se dividen en 44 funcionarios de planta, 20 a contrata, 11 honorarios y 202 a honorarios por programas de ejecución. El gasto anual en personal es de \$ 2.232.016. La participación del FCM es alta ya que significan el 65,15 % (\$ 2.925.092) de los recursos en el total de ingresos municipales (\$5.099.723), además la SUBDERE traspasa cerca de \$ 3685 millones por conceptos de programas y fondos.

2.4.6 Lautaro

Esta comuna se ubica a 33 kilómetros de la capital Regional, Temuco. Su descripción socio-demográfica según SINIM- CASEN (2017) señala que tiene una población de 37.340 habitantes, el 30 % de su población es pobre. Las características institucionales nos señalan que cerca del 29% de sus funcionarios tiene profesionalización, los cuales se dividen en 58 funcionarios de planta, 32 a contrata, 7 honorarios y 154 a honorarios por programas de ejecución. El gasto anual en personal es de \$ 2.493.419. La participación del FCM es alta ya que significan el 56% (\$ 3.670.032) de los recursos en el total de ingresos municipales

(\$7.591.366), además la SUBDERE traspasa cerca de \$ 3084 millones por conceptos de programas y fondos.

Estrategia Metodológica	Diseño no experimental
Alcance de Investigación	Rasgos exploratorios y descriptivos
Diseño de cuestionario	Pauta de entrevista-semiestructurada
Estrategia muestral	No probabilística, estimada de Juicio.
Marco Muestral	32 municipios en la Región de la Araucanía
Muestra	Estudio de caso: 4 municipios.
Entrevistados	16 entrevistados
Perfil de entrevistados	<ul style="list-style-type: none"> 3- Directores de Control. 2- Directores de Secplan. 2-Jefes de Gabinete. 2- Directores de Obras. 1-Profesional de comunicaciones. 1- Profesional de Dideco. 1- Director de Finanzas. 1- Director de Unidad de Desarrollo Local. 1- Administrador Municipal. 1- Director de Personal. 1- Director de Unidad Jurídica.

2.5 Análisis y resultados

En general, el acercamiento al concepto de corrupción en funcionarios de estos 4 municipios es diversa. Si bien la vinculación legal aparece en el discurso por el hecho de ser funcionarios acerca de deberes y derechos en la función pública , existen argumentos distintos al hablar sobre corrupción , tiene que ver con experiencias y la información disponible en este tema , los casos regionales y nacionales de corrupción y la defensa a la labor del funcionario municipal Los relatos describen que coexisten aspectos lego y legales como define (Sautu et al, 2004) pero la conceptualización y los beneficios producidos son materiales, simbólicos, poder y protección.

2.5.1 La corrupción como práctica: legal vs lego.

La idea de que la corrupción es un delito funcionario se puede apreciar en el relato y argumento. Su condición de funcionario municipal algún grado de conocimiento se tiene sobre lo que es el: soborno, malversación, cohecho, fraude al fisco y la función pública entre otros. Al indagar más, ciertas situaciones políticas, paternalistas y asistencialistas se hacen presentes.

“Está claro el tema jurídico de cosas que no puedes hacer...mira tampoco hay mucha capacitación legal pero ya viviendo el mundo desde adentro (...) te topas con todo lo demás, acá es bien paternalista (..) Mi equipo es un brazo político del alcalde, estamos en terreno... Somos visibles... Entonces eso de la corrupción se cruza en delgada línea con el paternalismo o asistencialismo que es muy fuerte acá”. Entrevistado 1.

El argumento radica en que lo legal siempre ha estado. Uno como funcionario municipal debe comportarse en virtud de la función pública, pero paralelamente hay acciones y situaciones a lo que debes adaptarte, las salidas a terreno, la visibilidad en donde se concentran las prácticas cotidianas entre lo institucional y lo cotidiano. Según Mujica, son prácticas que se generan en torno al paternalismo y asistencialismo.

“Salir del marco de la legalidad, tengo que regirme bajo un contrato de trabajo... es salirse de estos parámetros, es todo tan pauteado”.

“A ver el tema del pituto, cruza el límite a veces no es ilegal pero si quien lo vea lo pueda ver de forma negativa y de ahí se podría asociar a la corrupción (por la negatividad) en el caso de que sea un familiar del Alcalde, pero otras veces no es ilegal pero carga con una negatividad social y política, (..) por ej ..acá nosotros tenemos trabajando en la municipalidad a la esposa de un CORE, al esposo de una alcaldesa vecina y así otros.” Entrevistado 2

La primera descripción entorno a la corrupción se relaciona a su labor de funcionario público, al comentar en el marco de la legalidad, eso parece estar claro sobre todo en la relación laboral, también paralelamente aparecen menciones a prácticas y relaciones, si bien por ley

no pueden contratar familiares directos ¹² hay formas de mantener esas prácticas como el pituto , que al ser más conocida la situación recibe una mayor negatividad desde los funcionarios , se presentan discursos a los vínculos fuertes (Granovetter en Moya & Dueñas,2015) es decir que dentro de los municipios se genera un intercambio vertical de reciprocidad y lealtad, para este caso en torno a un puesto de trabajo que en el discurso y análisis no está bien pero es la forma de cómo se hacen las cosas en un municipio. No son familiares directos, pero si de un entorno de amistad, militancia política o vínculo familiar.

"Que la corrupción es lo contrario de la probidad (...) es un sentido bien amplio, porque tú puedes ser corrupto por hacer un acto propio de corrupción o puede ser un corrupto indirecto, porque te hacen lesa..., ya que si la corrupción se da en un municipio es porque falta fiscalización, un vacío legal (...) a veces la gente no está capacitada para eso y eso pasa mucho en los municipios". Entrevistado 4

El relato apunta a que se vulnera la ley, originando una especie de debilitamiento del sistema público y de la confianza. Pero también existen prácticas por los mismos fallos del sistema sancionatorio, es decir este fenómeno tiene sentido por las deficiencias de lo legal que podrían afectar la democracia local como explica Rehren. También Warren señala que estas vulneraciones legales producen cierto cinismo en las acciones, entonces se pierden virtudes. El cómo se acciona la corrupción parece tener componentes particulares y no son generalizables.

"Es que hay diferentes tipos de corrupción (...), que alguien reciba horas extra y viáticos cuando en realidad no se han hecho va bordeando la legalidad. Por ejemplo :si yo aquí comenzará a llevarse las hojas de oficio, nadie me diría nada pero igual me estoy apropiando de insumos públicos..(...) otro ejemplo incluyen estafa, percibe económicamente valores, licitaciones truchas, pagos mal habidos otro caso sería(...) si yo en un momento determinado

¹² Revisar el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que se encuentran inhabilitados para ingresar a un órgano de la Administración del Estado quienes tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

tengo un llamado a concurso donde van a postular 20 personas, pero una de esas personas es la hija de mi vecino que no cumple con los requisitos y yo la contrato igual eso también es corrupción". Entrevistado 5

La descripción de la corrupción se hace notar a través de ciertas prácticas y éstas se imbrican entre la probidad administrativa, mecanismos de control, uso de recursos, vínculos fuertes, licitaciones arregladas y beneficios económicos, en eso radica la corrupción. Estas prácticas que son descritas como corruptas se mueven entre lo legal y lo ilegítimo

2.5.2 Corrupción como base social y territorial

En Chile son 345 municipios, dispersos a lo largo del todo el territorio nacional, el contexto socio-económico de sus habitantes, sus presupuestos además de las prácticas y relatos de sus funcionarios podrían influir en la descripción de la corrupción. Los relatos estarán orientados desde sus contextos.

Curarrehue

Descripción del relato de 3 funcionarios municipales:

"Es que a nivel nacional puede ser, pero acá no se da, porque acá uno hace el análisis, por ejemplo, las municipalidades en sí, porque Curarrehue tiene una planta de funcionarios muy chiquitita (...) no hay secretaria, no hay arquitecto, entonces no tengo como el panorama completo que existe en otras municipalidades". Entrevistado 6

"en municipios chicos como estos, es muy difícil que se dé, en cambio en los municipios más grandes, porque acá es una comuna tan chiquitita nos conocemos todos (...) esas cosas unas las ve en Santiago o Temuco donde hay plata, muchos funcionarios y empresas". Entrevistado 7

"Pasa por los municipios que tiene hartos ingresos, en sus arcas municipales, nosotros sobrevivimos, con el fondo común municipal, los ingresos en la comuna son muy pequeñas". Entrevistado 8.

Esta comuna geográficamente es la más alejada del centro del poder económico y político de la región, también es la más vulnerable según su caracterización. Los entrevistados relatan que, al conversar sobre corrupción, este es un fenómeno que ven lejano relacionado problemas que no se encuentran en el territorio que ellos administran. La descripción de este fenómeno se aprecia como algo relacionado a lo económico (dinero, presupuestos) y centros políticos y económicos relevantes, justamente donde se relaciona con las empresas. El discurso se caracteriza en torno a la realidad y prácticas que estos funcionarios tienen en el cotidiano, alejados del centro y visibilidad pública en palabras de Boniolo.

Puerto Saavedra

Este Municipio se encuentra en el grupo 3 de vulnerabilidad. A continuación, se revisan sus relatos:

"Y lo otro es por los casos de corrupción que han salido últimamente Viña del Mar, Iquique, alcalde, concejales todo, esos son casos grandes (..) ¡ ahí se ve la plata que hay!" Entrevistado 9

"No podemos hablar acá del gran empresariado o de un empresario potente, sólo negocios locales de vecino (...) cuando licita el MOP o Minvu aparecen una o dos empresas, tampoco son 10... no es una zona de interés". Entrevistado 10

"Con las platas, este alcalde ha hecho mucho, pero con plata de afuera porque nosotros pagamos los sueldos, el aseo y hasta ahí rajuñando hacemos otras cosas". Entrevistado 11

El relato de los funcionarios demuestra que de cierta forma el tema de la corrupción lo ven lejano, se empieza a nombrar a la empresa privada y su falta de interés en la comuna como una variable, no es una zona de interés económica. Los casos de corrupción moldean el relato y se asocian a municipios más grande y zonas de interés. En una lógica interna el ajustado presupuesto municipal no dejaría espacio para que prácticas específicas de corrupción sean comunes.

Collipulli

Los relatos de los funcionarios exponen:

“Ese fenómeno de corrupción como lo conocemos en la prensa no se da aquí, eso valores no se ven por estos lados”. Entrevistado 12

“Acá, el tema de las horas extras, los viáticos son las cosas que nos cuesta controlar y para mí, eso estaría dentro de la corrupción”. Entrevistado 13

La descripción del relato hace ver que se vuelve a repetir que existe una corrupción que en ese contexto no se da, según los entrevistados se asocia a valores y que se ve lejana paralelamente existía otra relacionada a falta de control y prácticas al interior del municipios referente a horas extras y viáticos.

Lautaro

Es el municipio en categorización 5, el más grande de lo estudiados y sus relatos exponen lo siguiente:

“Hay muchas comunas que nos tiene cierta envidia (...) cuando corp Araucanía compra ese terreno pegado a la ciudad, todos decían: ¡ noo parque industrial, contaminación, sin embargo nosotros acogimos el parque industrial, lo incorporamos al límite urbano, y le instalamos la luz como municipio, le dimos dos años de franquicia sin cobrarle los costos municipales, aunque ahí nosotros estábamos cometiendo un error, porque hay cosas que hay que hacerlas, pero así se ha instaurando más industrias, cercana a las dos mil personas empleadas”. Entrevistado 14

"Para nosotros, el tema público y privado es esencial". Entrevistado 14

“Nosotros con ciudadanía como con empresas privadas, por ejemplo, lo que hoy en día era una relación netamente privada, trece empresas llegaron para una licitación”. Entrevistado 5

En general los relatos apuntan a descripciones parecidas en torno a las prácticas y la condición económica de las comunas. El énfasis que se hace en esta comuna es que al hablar de corrupción si aparece como una variable la gran empresa privada. La existencia de un parque industrial entabla una relación distinta que no se ve en el relato de las otras comunas,

también en el discurso de la corrupción ya que la alianza pública/privada es importante para la cotidianidad.

2.5.3 La corrupción como problema público

El énfasis de esta investigación radica en la descripción de la corrupción desde la perspectiva de los funcionarios municipales, desde ese enfoque situamos a la corrupción como problema público, no sólo en el fin que esté arraigada en el sector público más bien está posicionada como un problema que daña la inversión, la economía, democracia y libre competencia, eso la traduce en un problema de interés según (Pereyra, 2013). El relato en torno a la corrupción deja entrever la importancia de este tema tanto para el mundo local, como nacional.

“como que en el público marca más, porque quizás en una empresa privada también existe esto de la corrupción, pero en la parte pública es donde está más marcado, afecta a todos”.
Entrevistado 15

Es decir, en su visión de funcionario la corrupción tiene una realidad en el servicio público, pero eso no quita que en sector privado estas cosas no pasen, es decir más allá que el impacto social y penal sea por los actos dentro de la esfera pública, el fenómeno es más complejo.

"para que pase el problema de la corrupción tiene que pasar el alcalde, los concejales, el director de administración y finanzas, el director de control, tesorero municipal, es mucha gente la que tiene que pasar (...) si hay licitación entran los privados". Entrevistado 16

La descripción del fenómeno también es colaborativo. Tienen que haber más de un funcionario, también se puede apreciar un vínculo político - administrativo, además si existe un vínculo contractual con privados de cierta forma el mercado público entra en una zona de corrupción, eso lo vuelve un problema.

"Entonces obviamente cuando hay casos puntuales o no tan puntuales empieza haber un tipo de cosmovisión social (...) Porque el municipio es como el servicio básico, el más cercano a la comunidad, al común de la gente" Entrevistado 9

La corrupción es un problema público ya que afecta a los municipios, como relata el entrevistado. Este es visto como servicio básico y el ente público más cercano a los ciudadanos, entonces cuando pasan cosas puntuales (casos de corrupción) este repercute en la confianza hacia sus funcionarios.

2.6 Conclusiones

En primera instancia, los resultados de este trabajo no son definitivos, son parciales dentro de un proceso de tesis. Pretenden abrir ciertas líneas de discusión para futuras investigaciones que presenten como objetivo entender cómo opera la corrupción, debatiendo sobre las variables expuestas aquí en pos de profundizar estas o nuevas líneas de investigación.

Una de las primeras conclusiones que se puede observar es que los procesos en la descripción de la corrupción no son excluyentes, es decir, prácticas corruptas en torno a lo legal/lego (Sautu et al, 2004), como también horas extras, viáticos, permisos de circulación licitaciones arregladas, pitutos laborales, soborno, fraude al fisco, malversación incluso clientelismo político y patronazgo coexisten en el ámbito municipal. La descripción legal de la corrupción aparece reiteradamente en el relato. Los entrevistados son funcionarios municipales y en mayor o menor medida manejan los conceptos de probidad administrativa, ciertos delitos asociados actos de corrupción, pero también se describen otras prácticas como vínculos fuertes que proveen integración social con el fin de lograr ciertos fines, para los casos estudiados radican en las redes de amistad para la consecución de opciones laborales en los municipios.

El relato también se desprende en el contexto desde que lo realizan, si bien todos están clasificados en grupos diferentes, 3 de ellos se encuentran geográficamente distantes del polo político-administrativo y económico de la región pero están insertos en la más vulnerable del país y desde ese relato surgen consideraciones interesantes de analizar, en primera instancia ven el problema de la corrupción de forma lejana, es decir lo que ellos

describen son casos que involucran grandes sumas de dinero o presupuestos en municipios más grandes, donde están involucrados los privados es decir zonas de interés económica. En los relatos también se expresa una lejanía de sus territorios de las zonas de interés que tiene la corrupción, entonces habría un discurso que en las realidades que ellos cotidianamente se relacionan eso no existiría, por estar alejados de los centros y ámbitos visibles de la misma sociedad en palabras de (Bonio, 2011). En la misma dirección también se describen ciertas prácticas que para ellos no tienen tanta negatividad, como el daño patrimonial o fraude, si bien en la conversación son categorizadas como corruptas no tendrían el perjuicio económico al patrimonio municipal. Por ende parecen tener más tolerancia tales como el uso del teléfono, materiales de oficina, vehículos municipales y horas extras, entre otros. Ocurriría a lo que (Ackerman, 2002) categoriza como pequeña y gran corrupción, la primera involucra a funcionarios públicos de bajo rango, en este caso municipales en un contexto de bajos presupuestos y un incentivo desde el exterior casi inexistente, la gran corrupción involucraría grandes sobornos, en altas esfera del gobierno. En el caso de Lautaro, es el municipio más grande y geográficamente más central con una zona de interés industrial importante, influye en el relato en post de que si existe un agente al exterior del municipio con el que se debe relacionar.

La corrupción es un problema público ya que si bien por su condición de funcionarios municipales asocian mayoritariamente este fenómeno a lo público, existen casos noticiosos de corrupción que involucran a municipios con empresas privadas en torno a licitaciones millonarias que ha sido fraudulentas que han determinado sanción penal a funcionarios, por lo que ha afectado la visión pública de estas instituciones negativamente. Por otro lado, los municipios son la primera instancia de encuentro entre el Estado y los ciudadanos, más aún en contextos más pequeños y aislados esta relación es más estrecha con los funcionarios por ende las situaciones tienen a sancionarse con mayor negatividad, también en el relato se menciona que la corrupción es asociativa, hay varias personas involucradas entonces si se descubre causa mayor impacto. En encuestas nacionales los municipios no cuentan con evaluaciones negativas, esto da paso para verlos como instituciones grises en donde la corrupción es latente, entonces podría dañar la inversión, la economía, afecta la libre competencia y la confianza en la democracia.

La corrupción es un fenómeno complejo que involucra diversos actores, prácticas, contextos y redes, pero también asociación. Para esta investigación habría tolerancia a ciertas prácticas corruptas y mayor negatividad asociada al beneficio económico.

Bibliografía

- Anticorrupción, O. (2004). *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Nuevos paradigmas para la prevención y combate de la corrupción en el escenario global*. Buenos Aires: Banco Mundial.
- Asociación de Municipalidades, C. (2015). *Municipalidades y diversidad*. Santiago: Amuch.
- Barozet, E. (2006). El valor histórico del pituto: clase media, integración y diferenciación en Chile. *Revista de sociología de la Universidad de Chile*, 66-96.
- Boniolo, P. (2011). *Las bases sociales y territoriales de la corrupción: Dominación y micro-resistencias en un barrio de la clase trabajadora en el Conurbano Bonaerense*. Buenos Aires: UBA.
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Buenos Aires: Siglo veintiuno.
- Boron, A. (2012). América Latina en la Geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Ediciones Luxenburg.
- CGR. (2013). www.anticorrupcion.cl. Obtenido de http://www.anticorrupcion.cl/web_site/appmanager/portal/main?_nfpb=true&_pageLabel=page_Glosar_NC
- Cohen, J & Arato, A. (2000). *Sociedad Civil y Teoría política*. Universidad Autónoma de Iztapalapa, Distrito Federal, México.
- CPLT. (2018). *8 Fiscalización de Transparencia activa a municipios*. Santiago de Chile: Consejo para la Transparencia.
- Duran, G., & Páez, A. (2015). *Desposesión Salarial en Chile : Panorama de los verdaderos sueldos usando la encuesta CASEN*. Santiago de Chile: Fundación Sol.
- Echebarría, Koldo (2007). *Corrupción: Un análisis de indicadores de Gobernabilidad*. IDB Publicaciones
- Galvez, M. (2014). El concepto de Habitus y su dimensión espacial: apuntes para un habitus territorial y regional, congreso postgrado en ciencias sociales México.
- Granovetter, M. (1973). La fuerza de los vínculos débiles. *Revista americana de Sociología; vol 78, n° 6.*, 1360 - 1380.
- ICHEM. (2012). *Encuesta sobre Transparencia y Probidad entre las Autoridades Municipales de Chile*. Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Chile.
- INE. (2015). *Compendio estadístico Región de la Araucanía*. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Estadísticas.
- Kaufmann, Daniel (2000). Corrupción y Reforma Institucional: El poder de la evidencia empírica, *Perspectivas*, 3 (2) 367-387.
- Klitgaard, R (1990). *Controlando la corrupción*, La Paz, Editorial Quipus.
- Kliksberg, B. (1999). Capital social y cultura, claves esenciales del desarrollo. *Revista de la Cepal* 69, 85-102.
- Kremerman, M., & Durán, G. (2017). *Los bajos salarios de Chile, Análisis de la Encuesta CASEN 2015*. Santiago de Chile: Fundación Sol.
- L&D. (2016). *Encuesta de Percepción de la corrupción 2016*. Santiago de Chile: Libertad y Desarrollo.
- Latinobarómetro. (2017). *Informe 2017*. Buenos Aires: Latinobarómetro.
- Luhmann, N. (2006). *La sociedad de la sociedad*. Ciudad de México: Herder.
- Lomnitz, C. (1996). Ritual, rumor y corrupción en la formación del espacio nacional en México. *Revista Mexicana de Sociología* 58.
- Monge, V. (2015). La codificación en el método de investigación de la Grounded theory o teoría fundamentada. *Innovaciones educativas*, 77-84.
- Moya, E., & Dueñas, G. (2015). Las relaciones sociales que posibilitan la corrupción en municipios: estudio de dos casos. *Transparencia & Sociedad*, 13-28.

- Mujica, J. (2005). Relaciones corruptas: poder, autoridad y corrupción en gobiernos locales. *XXVIII concurso de ensayos CLAD sobre reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública.*, 1-38.
- Navarro, F. (2008). *Responsabilidad Social Corporativa. Teoría y Práctica*. Madrid: ESIC.
- O'Donnell, G. (1993). Estado, democratización y ciudadanía. *Nueva Sociedad*, 1-25.
- Orellana, P. (2004). Probidad y corrupción en Chile. El punto de quiebre. Polis, Revista Latinoamericana, 1-33.
- Pereyra, S. (2013). *Política y Transparencia: La corrupción como problema público*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Rehren, A. (1998). *Corrupción & Gobierno*. Santiago de Chile: Fundación Libertad y Desarrollo.
- Rose- Ackerman, S. (2002). Grand corruption and the ethics of global business. *Journal of banking & finance*, Elsevier, vol. 26 (9), pag 1889-1918.
- Sautu, R. (comp.) (2004). *Catálogo de Prácticas corruptas: corrupción, confianza y democracia*. Buenos Aires: Lumiere.
- SUBDERE. (2005). *Tipología: Herramientas base para el reconocimiento de la diversidad comunal - municipal*. Santiago de Chile.
- Warren, M, (ed). (1999). *Democracy and trust*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Zechmeister, E. J. (2014). *La cultura política de la democracia en las Américas 2014: Gobernabilidad democrática en 10 años del Barómetro de las Américas*. Universidad de Vanderbilt: USAID.

Efectividad de las políticas públicas para combatir la desigualdad: el caso de Bolívar, Colombia

Cristian Camilo Rodríguez Olaya*

El Colegio de San Luis, A.C., México
c.rodriguezolaya@hotmail.com

La economía mundial ha presentado un crecimiento parcialmente sostenido desde la posguerra hasta la actualidad y el ingreso por persona, desde una perspectiva global, ha tenido también una mejora significativa. No obstante, en 2010, aproximadamente el 50% de la población del mundo permanecía en condiciones de pobreza (Larrea y Greene, 2015: 11-12).

El coeficiente de Gini¹ a nivel mundial aumentó de 0,51 en 1975, a 0,54 en 2011, teniendo su pico más alto en el año 2000, con un coeficiente de 0,57. Asimismo, para el año 2000 el 10% de las personas más ricas del mundo concentraban un poco más de la mitad del ingreso (54%) de la población a nivel global. Por su parte, la mitad de las personas más pobres del planeta tan solo alcanzaban el 8% del ingreso monetario (Larrea y Greene, 2015: 13). Estos datos anteriores hacen referencia a dos problemáticas globales: la pobreza y la desigualdad socioeconómica².

El Banco Mundial fijó durante varias décadas su atención en la pobreza absoluta³, ignorando la centralidad de la desigualdad y alguna concepción más amplia de la pobreza o no restringida al fenómeno monetario, como puede entenderse la pobreza multidimensional⁴. Y

* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y estudiante de Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas de El Colegio de San Luis, A.C. (México).

¹ El coeficiente de Gini es “un parámetro que mide el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso en una escala que va de 0 a 1, dependiendo del grado de concentración. De esta manera, un coeficiente de 0 sería indicativo de la inexistencia de desigualdad, en tanto que un parámetro de 1 significaría una total concentración de la riqueza” (García, Priego, Rebollo, 2018: 700).

² La desigualdad socioeconómica se puede asociar al concepto de inequidad, el cual “se restringe a aquellas desigualdades sociales que son injustas, innecesarias y evitables” (Larrea y Greene, 2015: 12-13).

³ La pobreza absoluta consiste en el número de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y se vincula a la pobreza monetaria. Igualmente, “la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios o no alimentarios) en un área geográfica determinada” (DANE, 2018: 3).

⁴ “El Índice de Pobreza Multidimensional- Global (IPM Global) es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros. El IPM refleja tanto la incidencia de la pobreza multidimensional (la proporción de personas en una

aunque tal organismo admitió que la pobreza no dependía exclusivamente del ingreso monetario, sí recalcó que el crecimiento económico era el principal instrumento para combatir la pobreza (World Bank, 1990).

En el informe más reciente sobre pobreza monetaria y multidimensional en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que el 26.9% del total de la población a nivel nacional se encuentra por debajo de la línea de pobreza y en el caso de la población rural y dispersa es el 36.0% (2018:5). En el caso de la pobreza extrema, el 7.4% del total de la población nacional se encuentra por debajo de esta línea y en la población rural y dispersa es el 15.4% (DANE, 2018a:9). De igual modo, el 17,0% de las personas del país están en situación de pobreza multidimensional, tasa que llega a 36.6% para la población rural y dispersa (DANE, 2018a: 13).

Ahora bien, el documento *Taking on Inequality* de 2016 del Banco Mundial ubica a Colombia como el cuarto país más desigual del mundo y el tercero de la región, después de Haití y Honduras (World Bank, 2016:84). Así mismo, el informe *La Radiografía de la desigualdad* de Oxfam señala que Colombia es el país más desigual de América respecto a la distribución de la tierra y subraya que desde 1984 hasta la fecha no ha dejado de incrementar exponencialmente su concentración (Guereña, 2017:13).

El coeficiente de Gini de Colombia se mantuvo desde 1994 hasta 2010 por encima de 0.54. No obstante, a partir de 2011 este índice ha disminuido en el país hasta alcanzar el coeficiente más bajo de los últimos 25 años en 2017, a saber, 0.508 (ver anexo 1)⁵. “Colombia es el tercer país entre las siete economías más grandes de la región que más ha reducido la desigualdad desde 2010” (Gaviria en DNP, 2016:3).

Por su parte, el Departamento de Bolívar no ha sido ajeno a este fenómeno, dado que el índice de Gini para 2002 era de 0.533, exactamente el mismo de 2009, aun cuando hubo una

población que son pobres multidimensionales), y su intensidad (el número promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo). Se puede utilizar para crear una imagen completa de las personas que viven en la pobreza, y permite hacer comparaciones tanto entre los países, las regiones y el mundo, y dentro de los países por grupo étnico, la ubicación urbana / rural, así como otras características de los hogares y de la comunidad” (Red de Pobreza Multidimensional-MPPN: 1).

⁵ Estos datos pueden corroborarse en I; Asimismo, puede revisarse la gráfica del índice de Gini del Banco Mundial: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2016&locations=CO&start=1992&view=chart> y en los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad>

variación permanente del índice en este periodo. Por el contrario, en 2010 el índice empezó a descender, ubicándose en 0.514 hasta llegar a un coeficiente en 2017 de 0.461 (DANE, 2018b: 11). Así las cosas, es menester indagar ¿por qué ha disminuido la desigualdad en el departamento de Bolívar (Montes de María) en los últimos años? ¿Cuál es la causa o las causas de tal descenso? ¿Las acciones de política pública en el departamento han contribuido a la disminución de la desigualdad?

En la década de 1990 en América se empieza a consolidar la concepción de atacar la pobreza con urgencia y de manera gubernamental debido a un significativo incremento de esta en la década de 1980. Ese cambio constituye un esfuerzo por superar la política de reducción de la inversión pública, especialmente la social, como resultado de grandes déficits fiscales estatales que dejó la crisis de la deuda de 1982. A esto se había sumado la disminución del “rol regulatorio y productor del Estado, ya que se reconocía al mercado una centralidad en la asignación de bienes y recursos. De esta forma, se promovió la privatización de los servicios sociales y se apostó por la descentralización” (Cecchini, 2017: 53).

Los Estados latinoamericanos implementaron, por lo tanto, una inversión social de emergencia –bastante limitada– y crearon diversos programas focalizados (en este periodo nacen los Programas de Transferencia Condicionada⁶). De manera más reciente, apunta Cecchini, los gobiernos democráticos de América Latina han avanzado en el papel del Estado para solventar las irregularidades del mercado; en el aumento de la inversión social; en la implementación de políticas integrales para superar la pobreza y en la ejecución de transferencias directas de ingresos financiadas por las rentas generales (2017: 53).

De manera más reciente en el caso colombiano el *Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014* estableció que en Colombia se realizarían esfuerzos para vincular el desarrollo económico con el desarrollo social (DNP, 2011a). Con esta finalidad, en 2011 se crea el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) cuyo objetivo es diseñar e implementar las políticas públicas, los programas generales y los proyectos para contribuir a la inclusión social y a la reconciliación del país.

⁶ “Los primeros Programas de Transferencia Condicionada arrancan en Brasil y México (1997), Ecuador y Honduras (1998), Colombia, Costa Rica y Nicaragua (2000). En 2013 operaban en 21 países con una cobertura de 30 millones de familias (unos 127 millones de personas, el 21,5% de la población total) a un costo cercano al 0,4% del producto interno bruto (PIB) de los países de América Latina y el Caribe” (Tassara, 2015, p. 326).

Así las cosas, puede decirse, a grandes rasgos, que existe cierto consenso respecto a la exigencia de combatir los niveles de la pobreza. En el caso de la desigualdad no ocurre lo mismo, dado que, siguiendo a Tim Anderson, “se estudia la desigualdad por una diversidad de razones: para identificar sus fuentes, sus consecuencias, el grado en que la desigualdad es deseable [...] Sin embargo, se presta poca atención a la objeción principal ante la desigualdad” (2015: 191). Algunos economistas, por ejemplo, argumentan que la desigualdad produce importantes incentivos que le otorgan un dinamismo muy fuerte a los mercados abiertos y competitivos⁷ (Anderson, 2015: 192).

El hecho de que la pobreza sí sea un tópico castigado consensuadamente por expertos y no suceda lo mismo con la desigualdad, no implica que las políticas públicas o los paliativos sobre la pobreza sean eficaces. De hecho, las cifras permiten evidenciar que los márgenes de la pobreza son muy altos, cuestión que es aún más delicada cuando, siguiendo a Larrea y Greene, “la producción mundial permite superar completamente la pobreza global” (2015: 12).

Por otro lado, como parte de la construcción del diseño de la investigación, se realizó una correlación, en términos porcentuales, entre la inversión económica en política social⁸ y la disminución del coeficiente de Gini por cada departamento⁹ entre los años 2011 y 2017 (ver anexo 4). Esto con el propósito de dar consistencia a la variable independiente del monto económico de las políticas.

⁷ “Varios influyentes economistas occidentales postularon que la pobreza importa, pero la desigualdad no sosteniendo que, mientras que la pobreza es un problema social que inhabilita, la desigualdad resulta funcional respecto a crear incentivos para participar en la sociedad mercantil [...] La desigualdad era un incentivo para participar en los mercados y (según la doctrina neoclásica), se decía que la distribución se determinaba de mejor manera en los mercados competitivos [...] Otras personas, desde centros de estudios corporativos (*think tanks*), sostienen la vieja idea liberal de que la libertad es más importante que la igualdad (Norberg [2005] en Anderson), abrevando la idea de que los intentos por regular la economía hacia una mayor igualdad son tiránicos” (Anderson, 2015: 194-195).

⁸ Los datos sobre la inversión en política social se extrajeron de los Planes Plurianuales de Inversiones 2011-2014 y 2015-2018. En el primero el porcentaje de inversión en política social –y en especial de políticas que hayan contribuido al descenso en el índice de Gini– se identificó con el ítem de “Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social” (DNP, 2011) y en el segundo con el ítem sobre “Movilidad Social” (DNP, 2015).

⁹ Es menester señalar que en la página oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadístico (DANE), únicamente existen datos sobre pobreza y desigualdad sobre 23 departamentos, y, por lo tanto, la correlación se realizó con estos datos. Véase: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad>

El ejercicio dio como resultado que con 16 departamentos seleccionados de manera no aleatoria (esto es el 70% de los departamentos analizados) el coeficiente de correlación fue significativo¹⁰, a saber, 0,7153163 (ver anexo 6). Por otro lado, el ejercicio con la totalidad de los departamentos analizados arroja una correlación muy débil. No obstante, ese 30% de los departamentos que no se habían contemplado antes no presentan gran regularidad entre sí ni están propiamente alineados a la tendencia nacional, por lo que se podrían tomar como casos de estudio especiales, empero, que no competen directamente a esta investigación.

El departamento de Bolívar dentro del que se ubica la subregión Montes de María, en efecto, es uno de los 16 departamentos que hacen parte del ejercicio de correlación que arrojó un significado positivo. En este departamento se invirtió alrededor del 44% de su presupuesto en política social y consiguió disminuir, en términos porcentuales, un 39% del coeficiente de Gini, siendo uno de los departamentos del país en que más clara se ve la relación entre presupuesto en política social y disminución de la desigualdad.

Asimismo, esta investigación también resulta pertinente en tanto el *Informe sobre Desigualdad Global 2018* del Laboratorio sobre la Desigualdad Global apunta que “la desigualdad se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del mundo” (WID, 2017:5). Por lo tanto, es imperativo comprender las causas del descenso de los últimos años de la desigualdad en Colombia y el papel en este fenómeno de las políticas públicas, para así poder replicar el análisis en otros departamentos e incluso en otros países con condiciones similares. Siguiendo a Tim Anderson, “la desigualdad debe ser una preocupación importante para la política pública” (2015: 194).

El marco teórico que se adopta en esta investigación es el neoinstitucionalismo sociológico. No obstante, antes de conceptualizarlo y justificar por qué su elección, es menester ahondar en el enfoque neoinstitucional –entendido desde una perspectiva más amplia–, así como en otros tipos que a él se vinculan. Johan Olsen y James March fueron quienes crearon el nombre del “nuevo institucionalismo” para referirse a un enfoque que considera que el papel de las instituciones es esencial en el desarrollo de las conductas individuales.

La conceptualización que estos autores proponen de las instituciones se distancia de la estructura formal de estas. “Las instituciones son tanto un factor de orden como de

¹⁰ Véase el anexo 5 sobre los niveles del coeficiente de correlación.

construcción de sentido para las acciones realizadas por los actores” (Roth, 2015: 95). El nuevo institucionalismo pretende analizar las condiciones en las que se producen y evolucionan las instituciones y la forma en que estas tienen influencia en la conducta de las personas tanto a nivel individual como colectivo.

Como se ha señalado, el neoinstitucionalismo tiene varios enfoques que son adecuados mencionar. Por una parte, el nuevo institucionalismo de elección racional presta atención a las preferencias de los actores desde un cálculo estratégico, cuestión que explica la permanencia de las instituciones a partir de la inclinación de los agentes hacia estas.

El argumento básico de los métodos basados en la elección racional es que la maximización del beneficio seguirá siendo la principal motivación de los individuos, pero que esos individuos pueden llegar a darse cuenta de que sus objetivos pueden ser alcanzados más eficazmente a través de la acción institucional y descubrir que su conducta es moldeada por las instituciones (Peters, 2003: 73).

Por otra parte, el enfoque del neoinstitucionalismo histórico se concentra su interés en la necesidad de concebir al Estado a partir de una mirada de largo plazo y revisando la relación entre conductas individuales e instituciones. El argumento fuerte de este enfoque señala que la herencia institucional y las prácticas políticas tradicionales se sobrepone a la acción pública. Así, quienes desarrollan este enfoque “prestan particular atención a las asimetrías de poder derivadas de acción y del desarrollo de las instituciones” (Roth, 2015: 98). Existen, de igual modo, otros enfoques que por cuestiones de espacio no voy a precisar, a saber, el neoinstitucionalismo internacional, el neoinstitucionalismo normativo, el neoinstitucionalismo empírico, entre otros.

Ahora bien, el nuevo institucionalismo sociológico se caracteriza por señalar que los procesos de políticas públicas implican un desarrollo de las instituciones, que pueden ser de caracteres formales o informales, de las que se espera que tengan influencia en la conducta de individuos o colectivos. En Latinoamérica se han implementado en países como Brasil, México o Colombia, políticas sociales que se fundamentan en este enfoque. En palabras del profesor André-Noel Roth:

El Estado ofrece un subsidio a la persona en la medida en que cumple con cierto comportamiento considerado como adecuado: mandar a los hijos a la escuela, pasar

un examen médico, etc. Se postula que el incentivo del subsidio (como instrumento de política) provocará el cumplimiento por parte de la persona de estos comportamientos considerados por la política como adecuados para evitar su exclusión del programa (Roth, 2015:100).

El concepto de política pública es relativamente reciente¹¹. No obstante, existen múltiples planteamientos del mismo, producto de enriquecedores debates académicos. Heclo y Wildavsky, por ejemplo, definen la política pública como “una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma” (Heclo y Wildavsky en Roth, 2018: 36); Dubnick sostiene que política pública es lo que un gobierno enuncia y las acciones que realiza respecto a determinada problemática (Roth, 2018: 36); Muller y Surel conceptualizan la política pública como “el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir, dispositivos político-administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos explícitos” (Roth, 2018:36-37).

De igual modo, Luis Aguilar Villanueva entiende las políticas públicas como “acciones de gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los realizan con eficacia” (Aguilar, 2012: 7); Deborah Stone, por su parte, manifiesta que la política pública constituye algo que las comunidades desean hacer en calidad de comunidades, lo que significa que la política pública no se restringe al espacio gubernamental y, al mismo tiempo, está más allá de lo privado (Roth, 2018: 37). Así las cosas, en esta investigación se entenderá el concepto de política pública conforme al planteamiento del profesor André-Noël Roth, a saber, como

un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática (2018:38).

Asimismo, esta concepción se enriquecerá a partir del planteamiento de política pública como respuesta a problemas sociales, esto es, como “la respuesta del sistema político-

¹¹ El término política pública “se introdujo en el lenguaje de las ciencias políticas y administrativas europeas en la década de 1970” (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone, 2008: 37).

administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable” (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone, 2008: 35). El punto de partida de una política pública es, por lo tanto, el entendimiento común de que hay un problema social y de que este puede ser solucionado.

Ahora bien, el análisis de la investigación se concentra en la efectividad de las políticas públicas, noción que será comprendida, siguiendo a Sabatier y Mazmanian, como la política que, en efecto, puede alcanzar de manera concreta sus objetivos. (Roth, 2018: 191). Estos mismos autores, igualmente, establecen las siguientes cinco condiciones de efectividad en la implementación de una política pública:

a) toda política debe sostenerse en una *teoría sólida*, dado que, “es preciso tener una teoría del cambio social que establece firmemente la causalidad entre el instrumento utilizado y los efectos deseados” (Roth, 2018: 191); *b)* una política debe tener una *ley* o decisión política que establezca de manera clara el proceso de implementación, los objetivos, recursos, entre otros elementos (Sabatier y Mazmanian, 1979: 487-494); *c)* *funcionarios* responsables, capacitados y comprometidos (Roth, 2018:193); *d)* es menester contar con *apoyo* social y político, sobre todo en el proceso de implementación de la política (Sabatier y Mazmanian, 1979: 495-499); y *e)* es conveniente un *entorno favorable* para la implementación de una política, “the program is not undermined by changing socioeconomic conditions” (Sabatier y Mazmanian, 1979: 500).

Con todo, analizar la efectividad de las políticas públicas respecto a la disminución de la desigualdad, implica abordar también este último concepto. Para ello, es conveniente realiza un acercamiento al debate de las teorías de la justicia, el cual se ha concentrado alrededor de la cuestión ¿igualdad de qué? En este, distintos académicos buscan formular alternativas para valorar la igualdad humana y, con ello, responder implícitamente a cuál es la forma más efectiva para combatir la desigualdad social y la pobreza. “Cada enfoque tiene su propia interpretación de lo que hemos venido llamando igualdad basal, la igualdad de alguna característica individual que se toma como básica de esa particular concepción de la justicia social y la ética política” (Sen, 2000: 149).

Las teorías de la justicia constituyen un campo académico cuyas contribuciones iniciales provinieron del utilitarismo y de John Rawls¹². La primera escuela planteó la necesidad de estimar de igual manera la utilidad, entendida como placer, para todas las personas. En este sentido, el utilitarismo sugiere la necesidad de formular políticas sociales cuyo foco sea la mayor generación de bienestar (utilidad) para el mayor número de personas posibles. “*Utilitarianism, in its central forms, recommends a choice of actions on the basis of consequences, and an assessment of consequences in terms of welfare*” (Sen, 2002: 4).

La teoría de la justicia de Rawls, por otro lado, formula la concepción de los bienes primarios¹³ como aquellos que una sociedad democrática debe garantizar a todas las personas si se quiere hablar de justicia. El propósito de Rawls, que en su momento fue bastante novedoso, consistió en partir de la necesidad de generar una igualdad de oportunidades para disminuir ampliamente las brechas de desigualdad social y no afectar las diferentes concepciones de vida buena que las personas tuvieran o quisieran perseguir (Rawls, 2013:117).

Philippe Van Parijs sostiene, por su parte, que, si se quiere llegar a una libertad real, esto es, la libertad y perseguir con éxito de poder elegir el tipo de vida alcanzar¹⁴, es necesaria una renta básica universal en tanto esta permite acceder a los recursos materiales que las personas requieren para alcanzar su bienestar (Parijs, 2001). Los anteriores enfoques, a excepción del utilitarismo, han sido criticados por Amartya Sen, dado que, según este economista, sus propuestas de bienes y recursos caen en cierto fetichismo. “Este fetichismo los lleva a preocuparse exclusivamente de ciertos bienes, con exclusión de lo que tales bienes implican sobre los distintos individuos” (Gargarella, 1999: 76-77).

¹² John Rawls abrió el camino teórico para toda una serie de postulados sobre teorías de la justicia. A tal punto que, cualquiera que pretenda intervenir en este diálogo académico debe conocer con cierta profundidad su obra. Véase: *Las teorías de la justicia después de Rawls*, Roberto Gargarella

¹³ En *Liberalismo Político* John Rawls manifiesta que “la lista básica de los bienes primarios tiene los siguientes cinco encabezados: a) los derechos y libertades básicas; b) la libertad de desplazamiento y la libre elección de ocupación en un marco de diversas oportunidades; c) los poderes y las prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica; d) ingresos y riqueza; y e) bases sociales de respeto a sí mismo” (2013: 177).

¹⁴ Martín Urquijo manifiesta, siguiendo a Van Parijs, que “la libertad real es la libertad para vivir como a una persona le puede gustar vivir, de ahí la importancia para establecer un poder de compra con independencia del trabajo realizado o su disposición hacia él, más aún, viviendo en sociedades capitalistas” (2007: 186).

Amartya Sen construye su teoría de la justicia, denominada el enfoque de las capacidades, advirtiendo la necesidad de valorar la diversidad funcional humana y, por lo tanto, de concentrarse más en las capacidades que las personas tienen para lograr algo que en los recursos con los que pueden contar para el mismo fin. Sen define las capacidades como “las libertades fundamentales de que disfruta [una persona] para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar” (2013:114). De este modo, es importante manifestar que si bien el enfoque de las capacidades ha sido nutrido por múltiples académicos¹⁵, Sen es pionero en definir la pobreza no en escasez de recursos económicos sino en privación de capacidades¹⁶.

En este sentido, Amartya Sen sostiene que la desigualdad debe ser conceptualizada como la disparidad entre individuos respecto al desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, existe desigualdad cuando un individuo no puede hacer uso de sus capacidades porque ciertas condiciones sociales, materiales, culturales, históricas afectan su libertad real, por ejemplo, porque nació pobre y no pudo ir a la escuela, porque nació mujer y tuvo que dedicarse a labores no académicas cuando no lo quería así, etc. (Sen, 2013: 120-122). Esta concepción de desigualdad de Amartya Sen se ha enriquecido y reorientado por autores como Göran Therborn, quien entiende la desigualdad como:

una violación de la dignidad humana porque niega la posibilidad de que todos los seres humanos desarrollen sus capacidades [...] De ahí que la desigualdad no sea solo una cuestión de billetera: es un ordenamiento sociocultural que (para la mayoría de nosotros) reduce nuestras capacidades para funcionar como seres humanos (2016: 9).

Bibliografía

- Anderson, T. (enero-abril 2015). ¿Por qué importa la desigualdad? Del economicismo a la integridad social. En: *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LX, (223), 191- 208.
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (2000). *Resolución 55/2. Declaración del Milenio*. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: <http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf> Consultado el 3 de noviembre de 2018.
- Asamblea General de Las Naciones Unidas. (2015). Resolución No. 70/1 *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: <https://undocs.org/es/A/RES/70/1> Consultado el 5 de noviembre de 2018.

¹⁵ Martha Nussbaum, por ejemplo, también elabora una propuesta sólida del enfoque de las capacidades. Véase: Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona: Editorial Paidós.

¹⁶ Este planteamiento de Amartya Sen ha propiciado una serie de estudios sobre la pobreza. Véase: Cortina, A (ed.). (2009). *Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen*. Madrid: Editorial Tecnos; Kuklys, W. (2005). *Amartya Sen's Capability Approach. Theoretical Insights and Empirical Applications*. Berlín: Editorial Springer.

- Consultado el 5 de noviembre de 2018.
- Cecchini, S. (2017). Sistemas de protección social en América Latina: realizar derechos y promover la inclusión. En: *Políticas de infancia y adolescencia ¿Camino a la equidad?* Durán Strauch, E., Torrado Pacheco, M. (comp.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Cepeda Espinosa, J. (2011). *Sentencia T-1064 de 2011*. Bogotá: Corte Constitucional de Colombia. Recuperado el <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1064-01.htm> Consultado el 5 de noviembre.
- Cifuentes Muñoz, E. (1998). *Sentencia SU-225 de 1998*. Bogotá: Corte Constitucional de Colombia. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU225-98.htm> Consultado el 4 de noviembre.
- Congreso de la República de Colombia-CRC. (2015). Ley 1753 de 2015, en: *Diario Oficial N° 49538*. Bogotá: Congreso de la República de Colombia. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html Consultado el 7 de noviembre de 2018.
- Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES. (2005). *CONPES Social 91. Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación-DNP. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2005/Conpes_0091_2005.pdf Consultado el 4 de noviembre de 2018.
- Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES. (2011). *Modificación a CONPES Social 91 del 14 de junio de 2005: “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015”*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación-DNP. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/social/140.pdf> Consultado el 4 de noviembre de 2018.
- Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES. (2018). *CONPES 3918 de 2018. Estrategias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación-DNP. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf> Consultado el 7 de noviembre de 2018.
- Constitución Política de Colombia- CPC. (1991). *Gaceta Constitucional No 116 de 20 de Julio de 1991*. Bogotá: Congreso de la República de Colombia.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2012). *Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2011*. Bogotá: DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/boletin_pobreza_2011.pdf Consultado el 28 de octubre de 2018.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2018a). *Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2017*. Bogotá: DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_17.pdf Consultado el 02 de noviembre de 2018.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2018b). *Pobreza Monetaria Bolívar 2017*. Bogotá: DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Bolivar_Pobreza_2017.pdf Consultado el 4 de octubre de 2018.
- Departamento Nacional de Planeación. (2011). *Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos*. Bogotá: DNP. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND20102014%20Tomo%20I%20CD.pdf> Consultado el 19 de septiembre de 2018.
- Departamento Nacional de Planeación-DNP. (2011). *Regionalización Plan Plurianual de Inversiones 2011-2014*. Bogotá: DNP. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Regionalizacion%20PND%202011-2014%20do%20Debate%20Abril%202013.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación-DNP. (2015). *Regionalización Plan Plurianual de Inversiones 2015-2018*. Bogotá: DNP. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Libro%20PPI%202015-18%20Definitivo%202018%20marzo%20-15.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación-DNP. (30 de marzo de 2016). *La desigualdad sí ha disminuido en Colombia*. Recuperado de: <https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-desigualdad-s%C3%AD-ha>

- disminuido en Colombia-DNP.aspx** Consultado el 06 de noviembre de 2018.
- Guereña, A. (2017). *Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia*. Bogotá: OXFAM. Recuperado de: https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf Consultado el 05 de noviembre de 2018.
- Knoema. (2017). *Colombia-índice de Gini*. Recuperado de: <https://knoema.es/atlas/Colombia/%C3%8Dndice-GINI> Consultado el 06 de noviembre de 2018.
- FUNICAR. (2015). *Sistematización de la experiencia de Colombia Responde en la zona de consolidación territorial de los Montes de María*. Cartagena de Indias: FUNICAR –Fundación Pro Cartagena–.
- Gargarella, R. (1999). *Las teorías de la justicia después de Rawls: un breve manual de filosofía política*. Barcelona: Editorial Paidós.
- García Rodríguez, J., Priego Hernández, O., Rebollo Meza, J. (2018). Globalización y crisis como factores condicionantes de pobreza, desigualdad y hambre en América Latina. En: *Desigualdad regional, pobreza y migración*. México, D.F: UNAM – Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C.
- Cortina, A (ed.). (2009). *Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Hecló, H y Wildavsky, A. (1974). *The Private Government of Public Money. Community and Policy inside British Politics*. Londres: Macmillan.
- Kuklys, W. (2005). *Amartya Sen's Capability Approach. Theoretical Insights and Empirical Applications*. Berlín: Editorial Springer.
- Larrea, C y Greene, N. (2015). De la lucha contra la pobreza a la superación de la codicia. En: *La Osadía de lo nuevo*. Alternativas de Política Económica. Quito, Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo, 11-59.
- Muñoz Rocha, C. (2015). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México: Oxford University Press México.
- Norberg, J. (2005). *In Defense of Global Capitalism*. Nueva Delhi, India: Liberty Institute.
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Organización de las Naciones Unidas. (2008). *Lista oficial de los indicadores de los ODM*. Nueva York: ONU. Recuperado de: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList2008_es.pdf Consultado el 4 de noviembre de 2018.
- Parijs, P. (2001). Una renta básica para todos. En: Raventós, D. (ed.) *La renta básica*. Barcelona: Ariel.
- Peters, G. (2003). *El nuevo institucionalismo*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. (2015). *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015*. Bogotá: PNUD. Recuperado de: <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-odsinformedoc-2015.pdf> Consultado el 5 de noviembre de 2018.
- Rawls, J. (2013). *Liberalismo político*. Madero Báez, S (trad.) México: FCE.
- Red de Pobreza Multidimensional. (2018). *Pobreza Multidimensional*. Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Recuperado de: <https://www.mppn.org/es/pobreza-multidimensional/por-que-el-ipm/> Consultado el 8 de octubre
- Roth, A. (2018). *Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Sabatier, P y Mazmanian, D. (1979). The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives. En: *Policy Science*, 5, 481-504.
- Sen, A. (2000). *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Sen, A. (2013). *Desarrollo y libertad*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Sen, A., Williams, B. (2002). Introduction: Utilitarianism and Beyond. En: *Utilitarianism and Beyond*. Sen, A., Williams, B (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1-20.
- Stiglitz, J. (2012). *El precio de la desigualdad*. Madrid: Taurus.
- Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C y Varone, F. (2008). *Análisis y gestión de políticas públicas*. Barcelona: Ariel.
- Tassara, C. (julio-diciembre 2015). Políticas públicas de protección social y lucha contra la pobreza en Colombia: logros y desafíos. En: *Papel político*, Vol, 20, Núm 2, 323-351.
- Therborn, G. (2016). *Los campos de exterminio de la desigualdad*. Ciudad de México: FCE.
- Urquijo Angarita, M. (2007). *El Enfoque de las capacidades de Amartya Sen: alcances y límites* (tesis

doctoral). Universidad de Valencia, España.

World Inequality Database-WID. (2017). *Informe sobre la desigualdad global 2018*. Recuperado de:
<https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf>

World Bank. (1990). *Poverty. World Development Report 1990*. Washington, D.C: Oxford University Press.

World Bank. (2016). *Taking on Inequality*. Washington, D.C: World Bank.

World Bank. (2017). *Gini Index Colombia*. Recuperado de:
<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2016&locations=CO&start1992&view=chart> Consultado el 06 de noviembre de 2018.

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Pobreza, seguridad alimentaria y políticas sociales en Argentina (2014-2018)

María Susana Ortale y Javier A. Santos

CIMeCS (IdIHCS-CONICET/UNLP)

CEREN (CIC/PBA)

susaortale@gmail.com

jsantos@fahce.unlp.edu.ar

Resumen

A partir de una sucinta descripción de la inseguridad alimentaria que en los últimos años caracteriza al contexto mundial y regional y atendiendo a los objetivos y metas de la Agenda 2030, presentaremos los resultados sobre inseguridad alimentaria que se desprenden de la Encuesta Nacional sobre Estructura Social (ENES). Ella formó parte del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC)¹. La ENES se realizó entre 2014 y 2015 y estuvo centrada en dimensiones estructurales de la heterogeneidad social, a saber: a) la estructura de clases, estratificación y movilidad social y b) las condiciones de vida de los hogares. Para el análisis de la inseguridad alimentaria, indagada a través de seis indicadores, consideramos variables que expresan desigualdades regionales, de clase, ingresos y jefatura del hogar, la percepción de programas de transferencia de ingresos (en este caso AUH) y la apreciación subjetiva sobre la suficiencia de ingresos en los hogares. Datos oficiales recientes permiten sostener la mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria vinculada a la crítica situación por la que atraviesa nuestro país.

Palabras clave: INSEGURIDAD ALIMENTARIA- ARGENTINA- DESIGUALDADES

¹ El PISAC es una iniciativa conjunta del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Sus objetivos centrales son: a) conocer estructuralmente la heterogeneidad de la sociedad argentina contemporánea en sus múltiples manifestaciones, y b) transferir los resultados a órganos competentes en el diseño e implementación de políticas públicas.

Introducción

El análisis que presentaremos se basa en diversos aspectos involucrados en la definición de seguridad alimentaria, la que ha sido incluida como objetivo en la Agenda 2030 y constituye una condición para el logro del derecho a la alimentación. Las situaciones de seguridad/inseguridad alimentaria se aprecian ya sea comparando los ingresos de los hogares con el umbral normativo de requerimientos nutricionales mínimos expresados en la línea de indigencia o bien a través de preguntas que indagan en las experiencias de hambre o disminución de consumo por razones económicas percibidas en los hogares².

A fin de contextualizar el análisis a presentar sobre la Encuesta Nacional de la Estructura Social (del Programa de Investigaciones de la Sociedad Argentina Contemporánea - ENES/PISAC-)³, recurrimos a presentar y analizar datos provenientes fuentes secundarias mundiales (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2018;) y para la región latinoamericana (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018).

Por otra parte, debido a la constatación, especialmente desde la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2010-2016 (Serie Bicentenario) del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Salvia, 2017) de que los ingresos no resultan suficientes para explicar la inseguridad alimentaria, nos proponemos presentar un análisis la distribución desigual de la inseguridad alimentaria en función de otras características de los hogares como la clase social, la presencia de niños en los hogares, el género del jefe/a de hogar y la apreciación sobre la suficiencia de ingresos.

Finalmente, exponemos datos oficiales más recientes que reflejan la mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria vinculada a la crítica situación por la que atraviesa nuestro país.

² La Encuesta de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Escala USDA) y luego la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad alimentaria (ELCSA) son las herramientas más utilizadas y es sobre esta última que se basa la utilizada en la ENES.

³ Tomamos la ENES/PISAC porque la información no ha sido analizada y porque permite su desagregación regional. Los datos sobre Inseguridad Alimentaria obtenidos por la Encuesta de la Deuda Social Argentina EDSA-ODSA tienen diferente alcance y sensibilidad (tiempos de referencia para captar la problemática) por lo que se limita la capacidad de comparación.

Seguridad Alimentaria y Objetivos de Desarrollo Sostenible

El marco internacional que sustenta el principio de seguridad alimentaria como condición que permite el logro del derecho a la alimentación, surge de diversas conferencias mundiales (FAO, 1974, 1996, 2002) que fueron reforzando y ampliando la definición inicial, centrada en el acceso y disponibilidad de alimentos. La misma involucra: a) la disponibilidad de alimentos; b) el acceso a los alimentos; c) la utilización; d) la estabilidad en el acceso.

Cabe decir que la inseguridad alimentaria contribuye tanto a la desnutrición como al sobrepeso y la obesidad, coexistiendo altas tasas de estas formas de malnutrición en muchos países.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 establecen el objetivo del “Hambre Cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

El ODS 2 persigue la erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición antes del 2030. Para ello, el conjunto de la población debe contar con alimentos nutritivos y en cantidades adecuadas a las necesidades de cada persona (ONU, 2016).

Sus metas son las siguientes:

Meta 1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. La misma se refiere a la carencia o privación de los alimentos, para lo cual, cuenta con dos indicadores que, en conjunto, permiten tener una mejor comprensión del fenómeno del hambre y de la inseguridad alimentaria. Ellos son a) la prevalencia de la subalimentación⁴ y b) la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave⁵.

⁴ Subalimentación: corresponde a la estimación de la proporción de personas del total de la población que no cuenta con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa, durante el periodo de referencia de un año.

⁵ La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave se calcula a partir de información recogida en encuestas realizadas directamente a personas adultas (15 años de edad o más). Este indicador refleja las dificultades para acceder a una alimentación adecuada basado en la experiencia, y el grado de severidad de la inseguridad alimentaria, por medio de las ocho preguntas del módulo de encuesta de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés). La encuesta realizada explora, entre otros ámbitos, si debido a la falta de dinero u otros recursos, el encuestado, ha estado preocupado respecto al hecho de contar

Meta 2. Poner fin a todas las formas de la malnutrición. Esta meta recoge a su vez aquellas convenidas en el 2012 en la Asamblea Mundial de Salud sobre malnutrición. Consta de dos indicadores referidos a niños/as menores de 5 años: a) la prevalencia del retraso en el crecimiento y b) la prevalencia de la malnutrición según tipo: emaciación y sobrepeso. Estos indicadores presentan un mayor grado de exigencia, ya que sobre ellos se deben rendir cuentas en 2025. Entre el 2010 y el 2025 el retraso del crecimiento (talla baja para la edad o desnutrición crónica) tiene que reducirse en un 40%. También deben alcanzarse tasas de emaciación (desnutrición aguda o bajo peso para la talla) inferiores al 5% y el sobrepeso infantil no debe aumentar (OMS, 2017).

La situación mundial (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, 2018) refleja datos para 2017, que indican un incremento del hambre en el mundo y una inversión de las tendencias tras un prolongado descenso. Se estima que en 2017 el número de personas subalimentadas aumentó hasta los 821 millones: alrededor de una de cada nueve personas en el mundo.

La obesidad en adultos se está agravando y más de uno de cada ocho (672 millones), son obesos.

En los menores de 5 años, pese a ciertos progresos en la reducción del retraso del crecimiento, los niveles seguían siendo elevados en 2017: casi 151 millones de niños menores de cinco años de todo el mundo, o más del 22%, estaban afectados por retraso del crecimiento. Asimismo, en los/as menores de cinco años, la emaciación continúa afectando a más de 51 millones de niños/as, quienes tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad y 38 millones de niños/as tienen sobrepeso.

Con relación a América Latina y el Caribe (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018), todos los países (incluyendo los que tienen altas tasas de incidencia de hambre) cuentan con una cantidad de alimentos suficientes para cubrir los requerimientos mínimos de calorías⁶. Ello no implica, sin embargo, que los países cuenten con la cantidad y diversidad de alimentos necesarios para garantizar una alimentación adecuada a su población. Las variables más

con la cantidad suficiente de comida, si se ha visto obligado a disminuir la calidad o la cantidad de los alimentos consumidos o si ha pasado días enteros sin comer (FAO, FIDA, OMS, WFP y UNICEF, 2017).

⁶ La disponibilidad alimentaria promedio para América Latina y el Caribe es de más de 3 000 kilocalorías al día por persona, una cifra que supera ampliamente los requerimientos mínimos energéticos de 1.866 kilocalorías/día.

relevantes para la seguridad alimentaria, que impactan directamente en las posibilidades de acceso a los alimentos, se vinculan con el mercado laboral, los niveles y la estabilidad de los ingresos y las tasas de inflación, especialmente la de alimentos.

El crecimiento económico registrado en la década pasada ha traído mejoras significativas en las condiciones de vida de la población. Se han registrado importantes reducciones en las tasas de pobreza y una disminución significativa del hambre en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Entre el 2002 y el 2008, América Latina y el Caribe experimentó un importante crecimiento económico (PIB creció 4% anual en promedio), un aumento de los ingresos medios, mejoras moderadas en la distribución de los ingresos, se registró una importante disminución de la pobreza y de la pobreza extrema y se logró una reducción del hambre (CEPAL, 2018)⁷. Entre 2002 y 2008, la subalimentación en América Latina y el Caribe disminuyó al mismo tiempo que la desigualdad, observándose la disminución más pronunciada del coeficiente Gini, periodo donde la prevalencia del hambre también mostró una importante reducción.

En el periodo del 2008 al 2014, de desaceleración económica (con una tasa promedio anual de crecimiento de 2%) la pobreza y el hambre continuaron disminuyendo y, según evidencia de la CEPAL (2018), los cambios distributivos tuvieron un mayor efecto sobre la reducción de la pobreza. Es decir, el cambio en los ingresos de los hogares más pobres lo explicaron, en mayor medida, las transferencias de ingresos.

Desde el 2014 se ha experimentado una contracción económica que ha resultado en un aumento de las tasas de pobreza, pobreza extrema y subalimentación.

Luego de una década de reducción sostenida, la pobreza pasó de un 28,5 % en el 2014 a un 30,7% en el 2017, lo que ha representado un aumento de 19 millones de personas afectadas (de las cuales 14 millones corresponden a pobreza extrema). Cabe decir que los aumentos recientes registrados en el promedio regional pueden explicarse principalmente por aumentos en los países de Sudamérica.

En 2017, la pobreza afecta a casi un tercio de la población y el 10% se encuentra en situación de extrema pobreza (CEPAL, 2018) y en promedio, el decil más rico de ALyC concentra

⁷ CEPAL (2018b) Panorama Social de América Latina 2017 Santiago de Chile

cerca del 38% de los ingresos en contraste con el 10% de la población más pobre que cuenta con el 1,3%.

Una comparación entre el monto del salario mínimo y la línea de la pobreza muestra las posibilidades que ofrece para satisfacer las necesidades del grupo familiar. En gran parte de los países de la región, el salario mínimo supera o se acerca mucho al equivalente a dos líneas de pobreza. Considerando que un hogar promedio en América Latina está integrado -en el quintil más pobre- por 4,5 personas, el salario mínimo no sería suficiente para satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar.

Los ODS en América Latina y el Caribe (ALyC)

Con relación a la meta 1 del ODS2, las estimaciones recientes sobre la subalimentación muestran un cambio de tendencia y una aceleración del aumento del hambre: entre 2015 y 2016 la subalimentación aumentó en cerca de 200.000 personas y entre 2016 y 2017 el aumento fue de 400.000 personas. No solo se está más lejos de lograr el objetivo hambre cero, sino que en los últimos años la distancia ha ido aumentando a una velocidad cada vez mayor.

Si bien la prevalencia de subalimentación en ALyC muestra un estancamiento desde 2014, manteniéndose en torno al 6,1% de la población, el número de personas se ha incrementado constantemente desde el 2014, pasando de 38,5 millones de personas a 39,3 millones en 2017.

A la vez, el indicador de inseguridad alimentaria grave⁸ se presentó -en el periodo 2015-2017, en el 6,9% de la población en Sudamérica y en el 10,3% en Mesoamérica, dando cuenta de un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria, que coincide con el deterioro de otros indicadores sociales.

El aumento de subalimentación y de inseguridad alimentaria grave se debe en gran parte a la situación en Sudamérica, en línea con las dificultades económicas y políticas que han enfrentado algunos países de la subregión.

⁸ El indicador de seguridad alimentaria grave refleja días completos sin alimentación, ya sea por la falta de dinero o de recursos para obtener alimentos. Se origina tras la aprobación de los ODS, por lo que solo se dispone de las mediciones correspondientes a dos periodos.

Con relación a la meta 2 del ODS 2, el retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años en ALyC registra una tendencia a la baja en las últimas décadas.

Según datos recientes de la OMS, en 2017 afectaba al 9,6% de los niños y niñas menores de 5 años, siendo su prevalencia del 7,5% en Sudamérica, 14,1% en Mesoamérica y 8% en el Caribe. Las proyecciones para el 2025 indican que ALyC está bien encaminada para cumplir la meta para este primer indicador. Pero pese a la reducción, aún afecta a una parte significativa de la población infantil.

El segundo indicador de esta meta corresponde a la malnutrición, que está compuesto por dos mediciones, una de ellas corresponde a la emaciación⁹.

Las últimas estimaciones realizadas por la OMS en 2017 muestran una prevalencia de 1,3% de niños/as emaciados en ALyC, inferior al 5% establecido en la meta. Por tanto, ALyC y las subregiones que la componen, han cumplido la exigencia establecida al 2025.

Respecto al sobrepeso, en 2017 se incrementó en comparación con los años anteriores, alcanzando al 7,3% de los niños y niñas menores de 5 años de ALyC, superando al promedio mundial (del 5,5%). En Sudamérica, el sobrepeso es mayor al de las otras dos subregiones, afectando al 7,7% de los niños y niñas.

En síntesis, ALyC se aleja del cumplimiento del objetivo de hambre cero (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018). El número de personas subalimentadas aumentó por tercer año consecutivo llegando al 6,1% de la población. De igual forma, la inseguridad alimentaria grave ha aumentado en 2017 en comparación con el año anterior, siendo una situación que afecta sobre todo a las mujeres en comparación con los hombres, brecha que se ha incrementado en los periodos de medición del indicador. El retraso en el crecimiento de los niños y las niñas mantiene su tendencia a la baja. Por el contrario, el sobrepeso infantil continúa aumentando y afecta al 7,3% de la población menor de 5 años, superando el promedio global. La obesidad en los adultos mantiene su tendencia al alza, afectando a más de una quinta parte de la población de América Latina y el Caribe y constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles.

⁹ La emaciación severa aumenta considerablemente el riesgo de muerte de un niño o niña en comparación con otro en situación normal (UNICEF, 2011).

La desigualdad característica de América Latina y el Caribe es elocuente en el caso del hambre y las distintas formas de malnutrición¹⁰.

Es importante mencionar que la inseguridad alimentaria suele afectar en mayor medida a las mujeres dando cuenta de las mayores limitaciones económicas que enfrentan ellas, en línea con otros indicadores sociales como la feminización de la pobreza.

En el trienio 2015-2017, en América Latina el 8,4% de las mujeres y el 6,9% de los hombres se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa: esto significa 19,2 millones de mujeres y 15,1 millones de hombres. En Sudamérica esta situación afecta al 7,8% (12,7 millones) de mujeres vs. 6,5% (10,1 millones) de hombres.

El retraso en el crecimiento, una de las mediciones que cuenta con mayor información disponible, presenta mayor prevalencia en hogares pobres, en zonas rurales y en la población indígena.

Respecto de los micronutrientes, en ALyC, una proporción significativa de las mujeres en edad fértil tiene anemia. Si bien desde 1990 su incidencia presenta una tendencia a la baja, durante la última década se ha estancado y se ha mantenido cercana al 22%.

En los quintiles inferiores la anemia suele presentar una mayor prevalencia al igual que otras deficiencias de micronutrientes (calcio, vitamina A y D).

Según las estimaciones de la OMS, el promedio del índice de masa corporal (IMC¹¹) para la población adulta en los países de ALyC, se encuentra sobre los niveles de sobrepeso. Esta situación es muy diferente a la registrada en 1980, cuando solo tres países presentaban un IMC promedio mayor a 25. Asimismo, la obesidad afecta en una mayor proporción a las mujeres: en 19 países su prevalencia en las mujeres supera en al menos 10 puntos porcentuales a la de los hombres.

¹⁰ De acuerdo al informe citado en la nota anterior, las zonas rurales en general, determinados territorios rezagados, las mujeres, las personas y hogares con menores ingresos, y los pueblos indígenas, enfrentan mayores niveles de exclusión del derecho a la alimentación y se encuentran en un riesgo muy alto de quedarse atrás en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 3.

¹¹ El IMC es una medida utilizada con frecuencia para medir el exceso de peso. Corresponde a la razón entre el peso (kg) de una persona y la altura al cuadrado(m²). Según la clasificación de la OMS, un IMC igual o mayor a 25 indica sobrepeso y un IMC mayor o igual a 30, obesidad.

La relación entre exceso de peso y nivel de ingresos no resulta tan lineal como en el caso de la desnutrición. La mayor disponibilidad y acceso a alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional y de menor costo que los alimentos frescos, explica el incremento del exceso de peso en los hogares con menores ingresos.

La inseguridad alimentaria en Argentina

En nuestro país, la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Bicentenario (2010-2016) del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA/UCA) así como el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), ofrecen informes de suma relevancia sobre inseguridad alimentaria. Aportando a dicha temática, también se encuentra la Encuesta Nacional sobre Estructura Social (ENES), llevada adelante por el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC)¹². La ENES, tuvo alcance urbano nacional y sus dominios de estimación fueron 8 regiones. Se realizó entre 2014 y 2015 y estuvo centrada en las dimensiones estructurales de la heterogeneidad social. Sus ejes de indagación fueron: a) la estructura de clases, estratificación y movilidad social y b) las condiciones de vida de los hogares (Maceira, 2015).

En línea con las preocupaciones internacionales sobre seguridad alimentaria, la ENES incorporó en su relevamiento una aproximación sintética a esta subdimensión, que sigue sugerencias conceptuales y metodológicas realizadas por la FAO. La unidad de análisis de esta subdimensión es el hogar (posibilitando un análisis discriminado para los menores presentes en el hogar, a partir de distintas unidades de observación). Asimismo, incorporó indicadores de protección social a través de programas específicos y políticas de transferencia directa de ingresos.

La ENES incluye un conjunto de preguntas para relevar seguridad alimentaria (tres referidas a adultos y tres a niños de 0 a 14 años) que han sido utilizadas en encuestas previas (Fiszbein y Giovagnoli, 2004, EDSA/ODSA 2010-2016). Las mismas refieren a situaciones de insuficiencia alimentaria por causas económicas percibidas por los hogares durante los 3

¹² El PISAC es una iniciativa conjunta del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Sus objetivos centrales son: a) conocer estructuralmente la heterogeneidad de la sociedad argentina contemporánea en sus múltiples manifestaciones, y b) transferir los resultados a órganos competentes en el diseño e implementación de políticas públicas.

meses previos al relevamiento; ellas se dirigen a medir la reducción involuntaria de la porción de comida o la supresión de alguna comida durante el período de referencia y la percepción de experiencias de hambre.

Antes de exponer los resultados que se desprenden de la ENES sobre inseguridad alimentaria, presentaremos algunos datos vinculados a las condiciones de acceso a los alimentos.

Condiciones de acceso a los alimentos

De manera sucinta, describiremos algunos resultados de variables¹³ relevadas por la ENES que son determinantes del acceso a la alimentación: clase social, ingresos, programas sociales, organizaciones o servicios de provisión de comida, complementando con la apreciación sobre la suficiencia de ingresos en los hogares.

La clase social de los hogares, establecida en función de la categoría ocupacional del jefe de hogar, muestra que poco más de la mitad de los hogares pertenece a la clase trabajadora.

Con relación a los ingresos, se observan fuertes disparidades regionales en la distribución decílica de ingresos. En los tres primeros se ubica el 15% de los hogares de GBA, cuadruplicando esa proporción los que corresponden a NEA y NOA. Entre esos extremos se ubican el 20% de los hogares de Patagonia, el 27% de la región pampeana, el 30% de la región Centro y el 42% de Cuyo.

El 19% de los hogares recibía AUH.

Respecto a la recepción de alimentos a través de planes o redes informales, en el último año casi el 9% de los hogares había recibido alimentos a través de estos circuitos. En ese conjunto, el Estado y las redes sociales aportaron alimentos en alrededor del 40% de hogares. Un 5% había recibido tarjetas para la compra en supermercados y los comedores escolares, usados por casi el 6%, duplicaron a otros comedores en la oferta de comidas.

Inseguridad Alimentaria: prevalencia regional y por grupos de edad.

Como puede observarse en la Tabla 1, las situaciones de inseguridad inciden más marcadamente en los adultos que en los niños. Las situaciones más frecuentes refieren a comer menos o dejar de comer (11,9% de los adultos) o a servir menos comida (8,7% de los

¹³ Por problemas de espacio no es posible incluir las tablas correspondientes.

niños), correspondiendo a sentir hambre el 5,2% y el 3,2% de unos y otros respectivamente. Tanto en el caso de los adultos como en los niños, la inseguridad alimentaria incide más marcadamente en las regiones del NEA y NOA mientras que los mejores resultados, debajo del promedio nacional, se presentan en GBA.

Tabla 1. Seguridad Alimentaria en Argentina

	Región							Total
	GBA (CABA y 24 partidos de Buenos Aires)	Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)	Pampeana (resto de Buenos Aires y La Pampa)	Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe)	NEA (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones)	NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Sgo del Estero, Tucumán)	Patagonia (Chubut, Neuquen, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego)	
Durante los últimos tres meses, ¿usted u otros adultos en su casa comieron menos o dejaron de comer en el desayuno, en el almuerzo o en la cena porque no tuvieron recursos para obtener más?	9.8	11.4	11.1	12.8	16.9	15.0	12.5	11.9
Durante los últimos tres meses, ¿tuvo usted hambre, pero no comió porque no tuvieron recursos para obtener la comida necesaria?	4.0	4.6	4.3	5.9	6.7	8.8	5.1	5.2
Durante los últimos tres meses, ¿dejó usted u otros adultos en su casa de comer por todo un día porque no tuvieron recursos para obtener comida?	2.2	2.2	3.2	3.2	4.2	5.7	3.0	3.1
Durante los últimos tres meses, ¿le sirvió menos comida a los niños/as en el desayuno, almuerzo o cena porque no tuvieron recursos para obtener alimentos?	7.8	9.4	9.2	9.6	12.1	14.3	6.3	8.7
Durante los últimos tres meses, ¿dejó/dejaron de comer los niños/as el desayuno, el almuerzo o la cena porque no tuvieron recursos para obtener más alimentos?	1.0	1.9	5.3	5.3	5.7	5.7	3.9	3.7
Durante los últimos tres meses, ¿ocurrió alguna vez que los niños/as tuvieran hambre, pero no les pudo dar comida?	2.0	2.3	3.5	4.4	4.3	4.3	2.6	3.2
Hogares con niños/as de 0-14 años	39.9	48.0	42.8	42.0	52.3	53.9	47.5	44.0

A partir de tales preguntas, elaboramos tres indicadores sintéticos que dan cuenta de la intensidad con que se presenta la inseguridad alimentaria:

- 1) Inseguridad Alimentaria leve: presencia de alguno de los 3 indicadores
- 2) Inseguridad Alimentaria moderada: presencia de 2 de los 3 indicadores
- 3) Inseguridad Alimentaria grave: presencia de los 3

Como se observa en la Tabla 2, desagregando el valor total en función de la intensidad, observamos un predominio de la inseguridad leve en ambos grupos. No obstante, llama la atención el valor de inseguridad alimentaria grave en niños, que duplica el valor de la moderada y alcanza similar valor a la de los adultos. También se destaca el valor que asume la inseguridad alimentaria grave en la región centro, el que casi duplica al promedio nacional.

A su vez, si bien la inseguridad alimentaria es más desfavorable en los adultos, la brecha entre adultos/niños en lo que respecta a la inseguridad alimentaria global, es menor en Cuyo y NOA y región Pampeana (entre 1 y 2 puntos de diferencia). En dichas regiones la situación de niños y adultos es similar; en las restantes varían entre 3 y 5 puntos.

Tabla 2. Intensidad de la Inseguridad Alimentaria

		GBA	Cuyo	Pampeana	Centro	NEA	NOA	Patagonia	Total
Intensidad de la Inseguridad Alimentaria - Adultos	Inseguridad alimentaria grave 3/3	1.6	1.4	2.5	2.7	3.3	4.4	2.4	2.4
	Inseguridad alimentaria moderada 2/3	2.7	3.6	2.1	3.2	3.4	4.7	2.9	3.0
	Inseguridad alimentaria leve 1/3	5.9	6.6	6.7	7.3	10.9	7.0	7.0	6.9
	Total	10.2	11.6	11.3	13.2	17.6	16.1	12.3	12.3
Intensidad de la Inseguridad Alimentaria - Niños	Inseguridad alimentaria grave 3/3	0.7	1.1	3.0	4.0	3.4	3.1	2.1	2.3
	Inseguridad alimentaria moderada 2/3	1.0	0.7	1.4	0.8	2.5	2.3	0.3	1.2
	Inseguridad alimentaria leve 1/3	3.3	8.4	5.3	4.4	6.3	9.2	5.0	5.2
	Total	5.0	10.2	9.7	9.2	12.2	14.6	7.4	8.7

Fuente: Elaboración propia en base a la (ENES) (PISAC). 2014-2015

Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos (PTC), apreciación sobre los ingresos del hogar e inseguridad alimentaria.

Asumimos que los hogares que reciben la AUH¹ (19%) expresan situaciones de vulnerabilidad y que son los que, pese a los ingresos que perciben a través de ella, presentan mayores dificultades para resolver la alimentación familiar. Esta asunción se sostiene al analizar la apreciación sobre la suficiencia de los ingresos del hogar. Cabe decir que a una minoría de hogares les alcanzaba y podía ahorrar (16.6%). Casi la mitad de los hogares percibía que, si bien los ingresos les alcanzaban para cubrir gastos, no podían ahorrar (47,8%) y a más de un tercio, no les alcanzaba (35,5%).

A su vez aquellos hogares con niños de 0-14 años son los que concentran la mayor proporción de aquellos que reconocen que los ingresos alcanzan, pero no pueden ahorrar (46,7%) o que los ingresos no alcanzan (42,7%). Solo el 10% de los que tienen niños de ese rango de edad tienen ingresos suficientes y pueden ahorrar.

Tal como aparece en la Tabla 3, más de la mitad de los hogares con AUH, perciben que los ingresos no les alcanzan para cubrir los gastos, más de 20 puntos por encima respecto de los que no tienen AUH.

¹ La Asignación Universal por Hijo (AUH) para la protección social de niños, niñas y adolescentes (Decreto 1602/2009) es un **seguro social** de **Argentina** que transfiere ingresos a hogares con jefes/as desocupados, que **trabajan empleados en negro** o que ganan menos del **salario mínimo, vital y móvil**, para cada hijo menor de 18 años o hijo discapacitado. La AUH extendió las **asignaciones familiares** a un sector excluido e impactó en el presupuesto familiar. Si bien no se trata de una política alimentaria, ha tenido efectos positivos sobre la capacidad de subsistencia económica de los hogares más pobres.

Tabla 3. Asignación Universal por Hijo según Apreciación sobre ingresos del hogar

	Apreciación sobre ingresos del hogar			Total
	Les alcanza y pueden ahorrar	Les alcanza, pero no pueden ahorrar	No les alcanza	
Recibe AUH	161393	843079	1121607	2126079
	7.6	39.7	52.8	100
	8.8	15.9	28.4	19.1
No recibe AUH	1676479	4467651	2833645	8977775
	18.7	49.8	31.6	100
	91.2	84.1	71.6	80.9
	1837872	5310730	3955252	11103854
Total	16.6	47.8	35.6	100
	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a la (ENES) (PISAC). 2014-2015

Analizando los indicadores de inseguridad alimentaria en función de variables referidas a la apreciación de los ingresos del hogar, se observa que en una proporción media del 84,5% de los hogares con inseguridad alimentaria, refiere que los ingresos no alcanzan, representando casi 50 puntos más que en la proporción global de hogares cuyos ingresos no alcanzan (35.6%). En los hogares con presencia de inseguridad alimentaria, en el 82% (en la que refiere a adultos) y en el 86% (en la que refiere a niños) afirman que los ingresos del hogar resultan insuficientes (no alcanzan).

Salvo en casos particulares, el comportamiento por regiones en la variable “apreciación sobre el ingreso” no se distancia del promedio nacional (Tabla 4).

Asumiendo también que la clase social es un fuerte marcador de desigualdades, analizamos la inseguridad alimentaria en función de la misma.

Dentro de los hogares que presentan algún tipo de inseguridad alimentaria, la participación de aquellos incluidos en la clase trabajadora no calificada está representada por un 49% en adultos y en un 61% en los niños.

Con relación a los ingresos, los hogares que presentan algún tipo de inseguridad alimentaria -en adultos- pertenecen en un 65,1% a los deciles 1 a 3 de ingresos; mientras que los que lo presentan en niños pertenecen en el 83,6 a los tres deciles inferiores de ingresos.

Respecto de los promedios nacionales referidos a inseguridad en adultos y niños/as, NEA y NOA tienen proporciones muy superiores mientras que en GBA se encuentran muy por debajo (menos de la mitad).

Respecto de las jefaturas de hogar, las femeninas representan un 46.1% en los hogares con Inseguridad alimentaria en adultos y un 43.3% en la de niños. En general, las proporciones de jefatura femenina se muestran mayores en los casos con mayor proporción de inseguridad alimentaria relativa.

Tabla 4. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ARGENTINA

	Región							Total
	GBA	Cuyo	Pampeana	Centro	NEA	NOA	Patagonia	
Durante los últimos tres meses, ¿usted u otros adultos en su casa comieron menos o dejaron de comer en el desayuno, en el almuerzo o en la cena porque no tuvieron recursos para obtener más?	9.8	11.4	11.1	12.8	16.9	15.0	12.5	11.9
Apreciación sobre los ingresos del hogar: no les alcanza	71.9	68.6	84.2	77.2	75.1	75.5	77.7	75.8
Grupos decílicos de ingreso total del hogar (imputado) per cápita (deciles 1,2 y 3)	38.1	72.3	61.4	59.7	80.6	80.8	36.8	58.0
PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman): Clase trabajadora no calificada	41.6	56.5	51.3	52.3	53.9	46.0	26.8	47.3
Hogar con PSH Mujer	41.0	36.3	41.5	49.7	41.6	47.1	46.7	43.8
Durante los últimos tres meses, ¿tuvo usted hambre, pero no comió porque no tuvieron recursos para obtener la comida necesaria?	4.0	4.6	4.3	5.9	6.7	8.8	5.1	5.2
Apreciación sobre los ingresos del hogar: no les alcanza	80.0	71.4	94.3	81.2	89.9	80.6	92.0	83.5
Grupos decílicos de ingreso total del hogar (imputado) per cápita (deciles 1,2 y 3)	49.5	78.5	67.8	63.5	91.3	91.2	57.5	68.0
PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman): Clase trabajadora no calificada	47.4	49.8	47.0	50.2	69.9	49.0	20.1	49.5
Hogar con PSH Mujer	48.9	31.4	48.3	47.7	48.4	54.0	39.1	47.8
Durante los últimos tres meses, ¿dejó usted u otros adultos en su casa de comer por todo un día porque no tuvieron recursos para obtener comida?	2.2	2.2	3.2	3.2	4.2	5.7	3.0	3.1
Apreciación sobre los ingresos del hogar: no les alcanza	90.9	88.0	85.7	92.2	84.7	76.8	87.6	88.6
Grupos decílicos de ingreso total del hogar (imputado) per cápita (deciles 1,2 y 3)	54.0	74.9	66.6	70.0	84.1	87.3	5.05	69.4
PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman): Clase trabajadora no calificada	37.9	46.3	46.1	63.8	78.3	46.6	37.4	50.4
Hogar con PSH Mujer	38.7	58.5	49.1	47.2	56.0	44.5	56.1	46.9
Durante los últimos tres meses, ¿le sirvió menos comida a los niños/as en el desayuno, almuerzo o cena porque no tuvieron recursos para obtener alimentos?	7.8	9.4	9.2	9.6	12.1	14.3	6.3	8.7
Apreciación sobre los ingresos del hogar: no les alcanza	86.4	71.8	73.0	94.1	90.6	84.3	90.3	85.0
Grupos decílicos de ingreso total del hogar (imputado) per cápita (deciles 1,2 y 3)	52.1	84.9	69.7	88.6	96.2	91.3	50.4	78.4
PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman): Clase trabajadora no calificada	44.2	82.5	55.1	57.6	71.7	67.7	34.8	59.3
Hogar con PSH Mujer	48.4	25.2	52.5	33.9	57.4	53.5	61.2	46.9
Durante los últimos tres meses, ¿dejó/dejaron de comer los niños/as el desayuno, el almuerzo o la	1.0	1.9	5.3	5.3	5.7	5.7	3.9	3.7

cena porque no tuvieron recursos para obtener más alimentos?									
Apreciación sobre los ingresos del hogar: no les alcanza	53.7	100	80.3	95.3	92.6	78.8	100	85.3	
Grupos decílicos de ingreso total del hogar (imputado) per cápita (deciles 1,2 y 3)	46.2	100.0	69.7	88.7	100.0	100.0	58.4	83.0	
PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman): Clase trabajadora no calificada	45.1	65.9	68.8	53.1	84.3	56.7	71.2	61.6	
Hogar con PSH Mujer	53.2	51.3	45.2	36.4	48.1	54.9	41.2	45.6	
Durante los últimos tres meses, ¿ocurrió alguna vez que los niños/as tuvieran hambre, pero no les pudo dar comida?	2.0	2.3	3.5	4.4	4.3	4.3	2.6	3.2	
Apreciación sobre los ingresos del hogar: no les alcanza	72.8	93.2	97.0	94.3	100	82.0	85.2	89.0	
Grupos decílicos de ingreso total del hogar (imputado) per cápita (deciles 1,2 y 3)	62.8	100.0	92.3	97.2	100.0	98.2	72.2	89.4	
PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman): Clase trabajadora no calificada	74.3	100	74.3	62.3	65.2	42.8	49.0	63.1	
Hogar con PSH Mujer	21.1	83.0	29.2	35.6	54.7	36.0	47.0	37.3	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	la	(ENES)	(PISAC).	20

Pobreza e indigencia. Información posterior a la ENES

Un conjunto de datos, abonados por el descontento social y las demandas públicas por problemas de acceso a los alimentos, permiten sostener que los indicadores de inseguridad alimentaria en nuestro país han empeorado respecto de los resultados desprendidos de la ENES.

Los datos de inflación (del 40,9% en 2016, del 24,8% en 2017 y de 47,6% en 2018 según el IPC/INDEC), han afectado fuertemente los precios de los alimentos. Según las variaciones interanuales, durante todo el 2018 el nivel general de precios vino mostrando una casi permanente suba: del 24,8% en diciembre de 2017 hasta el 51,3% en febrero 2019. Una variación de más del doble, si comparamos entre puntas. En este contexto, el subrubro Alimentos y bebidas muestra un comportamiento similar pero más sensible y una suba un tanto mayor: partiendo de una variación interanual - en diciembre de 2017- de 20,4% pasó a 58,3% en febrero de 2019. Una variación de casi el triple, si comparamos entre puntas.

El INDEC informa un marcado incremento de la pobreza y de la indigencia en el segundo semestre de 2018 respecto del semestre anterior.

	2° sem. 2016		1° sem. 2017		2° sem. 2017		1° sem. 2018		2° sem. 2018	
	Hogares	Población								
Pobreza	21.5	30.3	20.4	28.6	17.9	25.7	19.6	27.3	23.4	32.0
Indigencia	4.5	6.1	3.5	4.8	3.5	4.8	3.8	4.9	4.8	6.7

Fuente: INDEC (2019) Informes Técnicos vol. 3 n° 59. Condiciones de vida. Vol. 3, n° 4. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos Segundo semestre de 2018.

La misma fuente analiza las brechas de indigencia y de pobreza, dando cuenta de la magnitud de la insuficiencia de ingresos en los hogares indigentes y pobres.

Para el 2° semestre de 2018 la brecha monetaria entre el promedio de ingresos de los hogares indigentes¹ (\$6.116) respecto del valor de la canasta básica alimentaria promedio del hogar indigente (\$9.920). Los \$ 3.804 de déficit, representan una brecha porcentual promedio del 38,3%, lo que representa que los ingresos en promedio se encuentran 38,3% por debajo de la línea de indigencia.

Respecto a la brecha de pobreza para el mismo período, la diferencia entre el promedio de ingresos del hogar pobre² (\$14.872) y la canasta básica total correspondiente a ese hogar (\$ 24.357) es mayor. Los \$ 9.485 de diferencia representan una brecha porcentual promedio de los hogares pobres del 38,9 %.

En ambos casos, la brecha se incrementó respecto del 1° semestre de 2018 en 0,2 % y en 2,7% respectivamente.

Las variaciones interanuales (febrero 2018-febrero 2019) de la CBA y de la CBT resultaron del 59,1% y 57,2% respectivamente.

Otro dato que merece ser destacado refiere a la relación entre los valores de la LI y LP y el monto del salario mínimo vital y móvil (SMVM)³. La línea de indigencia en diciembre de 2018, para el GBA fue de \$3300 y el de la línea de pobreza de \$8250. Este monto representa

¹ Se estima que el tamaño promedio del hogar indigente es de 4,21 personas correspondiendo a un tamaño promedio en adulto equivalente de 3,34.

² Se estima que el tamaño promedio del hogar pobre es de 4,17 personas, correspondiendo a un tamaño promedio en adulto equivalente de 3,32.

³ El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo define el Salario Mínimo Vital, como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

más de las tres cuartas partes del SMVM, de \$10.700 entre septiembre y diciembre de 2018. En la misma línea cabe decir que el incremento del SMVM durante 2018 fue del 18% (\$9.500 a partir enero a \$11.300 a partir diciembre) más de dos veces y media inferior a la inflación. Con relación a la AUH, debido al diagnóstico de un 25,5% de niños/as no alcanzado por ninguna de las transferencias de dinero del Estado, el actual gobierno elaboró un plan de ampliación y universalización de la AUH entre 2016 y 2020: eliminación de las restricciones para ser beneficiario de la AUH a quienes percibían otros planes sociales nacionales o locales, inclusión de los hijos de monotributistas y empleados con contratos temporales, e impulsó la sanción de una ley de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los destinatarios de la AUH. En 2016 la cobertura se incrementó en un 6,5%. De acuerdo a un informe de SIEMPRO (2018) el monto estipulado por normativa (80%), cubría en el 1° trimestre de 2018 el 59% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para niño/as y adolescentes. En ese trimestre, en comparación con el trimestre anterior, la CBA aumentó un 6,3%, en una proporción mayor que el aumento de la AUH que fue del 5,7%. Tal desacople se ha intentado revertir en 2018 con bonos adicionales de \$1500 por hijo entregados a fines de diciembre y, a partir de marzo de 2019, incrementando el monto de \$1815 -vigente hasta febrero de 2019- a \$2.652 a partir de marzo 2019. De tal manera, se concentró en ese mes, el 46% de aumento de las cuatro subas anuales dispuestas por la ley de movilidad de ingresos jubilatorios y sociales.

Esta situación, junto a otros datos, fue señalada en septiembre de 2018 por Hilal Elver, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación; quien elevó al alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, un duro informe sobre la situación socioeconómica del país alertando que "en la Argentina casi cuatro millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria" e instó al gobierno a mejorar los programas sobre el tema. En el informe se observa, en términos del derecho a la alimentación, el modelo de desarrollo agrícola del país, basado en una producción comercial intensiva orientada a la exportación, siendo la soja y el maíz transgénicos sus principales productos. En tal sentido instó a nuestro país a atender la brecha existente entre la producción interna y el mercado de *comodities* donde queda desprotegido un amplio sector de la sociedad y cuestionó la decisión del Gobierno de dismantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar, medida que se dirige a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación.

Asimismo, señala que "los programas alimentarios del Gobierno no se ajustaron en función de la devaluación del peso", planteando la necesidad de reforzar el presupuesto en el futuro inmediato. Alerta también sobre un grave problema de alimentación en el país, dado que casi el 60% de los argentinos tienen exceso de peso.

Concluye que las políticas adoptadas en medio de una crisis económica que ya aumentó significativamente la pobreza intensificarán el impacto sobre el derecho a la alimentación en la Argentina.

Bibliografía

- CEPAL (2018) Panorama Social de América Latina 2017 Santiago de Chile
- FAO y OPS (2017) Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2016. Santiago de Chile: FAO. Obtenido de <http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf>
- FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS (2018) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. FAO, Roma.
- FAO, OPS, WFP y UNICEF (2018) Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2018. Santiago.
- Fiszbein, A. y Giovagnoli, P. (2004): "Hambre en la Argentina". Revista Desarrollo Económico, Vol. 43, N° 172. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social.
- Maceira, Verónica (2015) "Un abordaje teórico-metodológico para la investigación de la estructura, la movilidad social y las condiciones de vida: la propuesta ENES-PISAC". RELMECS, diciembre 2015, vol. 5 n° 2.
- OMS (2017) Monitoring Health in the Sustainable Development Goals: 2017 update. Nueva Delhi: OMS. Obtenido de <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258751/9789290226048-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- ONU (2016) Progresos en los ODS. Informe del Secretario general. Obtenido de ONU <https://undocs.org/es/E/2016/75>
- Salvia, Agustín (2017) "Pobreza extrema e inseguridad alimentaria en la Argentina urbana (2010-2016)". En Jornada "Seguridad Nutricional en Argentina" Sociedad Argentina de Nutrición (SAN); Buenos Aires. Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO). Reporte de monitoreo AUH-AUHD-AUE. 1° Trimestre de 2018. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/auh_final_1.pdf
- UNICEF (2011) La desnutrición infantil. Causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento. Madrid: UNICEF. Obtenido de https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Informe_La_desnutricion_infantil.pdf
- Wiggins, S. y Keats, S. (2015) The rising cost of a healthy diet. Changing relative prices of foods in high income and emerging economies. London: ODI. Obtenido de <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9580.pdf>

V Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina.

Clase media y corrupción: intersecciones entre la identidad de clase y la corrupción política

Fernando Toyos

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – Universidad de Buenos Aires (IEALC/UBA)
fertoyos.87@gmail.com

Resumen

En América Latina, la clase media como identidad se encuentra ampliamente extendida, lo cual pone de relieve la importancia de estudiar los comportamientos, opiniones y percepciones de los sectores que se identifican como tal. En el presente trabajo, utilizamos datos de un grupo focal llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires a fines de 2018, para analizar cómo la corrupción, como elemento discursivo, interviene en la construcción de un lugar de enunciación que implica una delimitación de los y las participantes respecto de otros actores. Este proceso es consistente con los rasgos de la *identidad de clase media*, según una corriente de estudios recientes.

Palabras clave: CLASE MEDIA – CORRUPCIÓN – AMÉRICA LATINA

Introducción

Los sectores medios en América Latina

Desde comienzos del siglo XXI se configuró en América Latina un mapa político cuyo carácter definitorio (progresista, posneoliberal, izquierdista, nacional popular, neopopulista, neodesarrollista o neoextractivista) fue y sigue siendo objeto de debates. Siguiendo a Thwaites Rey y Ouviña (2016), caracterizamos esta etapa como *ciclo de impugnación al neoliberalismo* (CINAL), para expresar su carácter fluido y en disputa, sus rasgos comunes -más allá de sus especificidades nacionales- y su potencialidad interpeladora hacia el conjunto de la región. Considerando la importante gravitación que los sectores medios tienen en la región; sus opiniones, representaciones, orientaciones, etc. requieren de un análisis sistemático. Como podemos observar en el Cuadro 1, existe en la región una identificación muy alta con la clase media, ya sea “a secas”, o agrupando a las identificaciones “clase media baja”, “clase media” y “clase media alta”:

Clase social autopercebida	2011	2013	2015	2017
Media	7506 38%	8920 40%	7914 40%	8254 43%
Media agrupada	14496 73%	16768 75%	14801 75%	14498 75%
Total	19728 100%	22236 100%	19653 100%	19374 100%

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro¹⁶⁷

La mera identificación con la clase media podría aducirse, no es suficiente para ser considerado parte de los sectores medios. Atentos a esa posible objeción, nos propusimos cruzar esta autopercepción con variables típicamente utilizadas para medir clases sociales. En primer lugar, consideramos la ocupación del entrevistado/a, pero encontramos que la misma está categorizada de un modo que nos resulta problemático, al presentar una categoría “Independiente/cuenta propia” que no permite discernir a los profesionales del resto del conjunto. De este modo, optamos por comparar el máximo nivel educativo alcanzado de aquellas personas que se autoperciben de clase media (a secas, únicamente) con el total de las personas encuestadas. Para que la información resulte legible, agrupamos las respuestas en una única categoría (secundario completo y más) que se muestra junto con el total.

Cuadro 2. Máximo nivel educativo alcanzado. Clase media (a secas) y total, según año.

Nivel educativo alcanzado	2011		2013		2015		2017	
	Clase media	Total						
Subtotal secundario completo o más	1778 (50%)	3553 (39%)	1581 (44%)	2942 (33%)	1516 (41%)	3057 (35%)	4316 (52%)	8421 (42%)
Total válidos	3564 (100%)	9191 (100%)	3630 (100%)	8893 (100%)	3701 (100%)	8850 (100%)	8253 (100%)	20201 (100%)

¹⁶⁷ “Los “grupos de estatus” fundados en un “estilo de vida” y en una “estilización de la vida” no son, como creía Max Weber, una especie diferente de grupo de clase, sino clase dominante *negada* o, si se quiere, sublimada y, por eso mismo, legitimada” (Bourdieu, 2007: 224).

¹⁶⁷ Las bases de datos de estas encuestas, así como informes y otros documentos, están disponibles en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro

De lo anterior podemos deducir dos cosas; en primer lugar, la existencia de una identificación de clase media, muy extendida en la región. En segundo lugar, que esta identidad, cuando se la cruza con una variable sociodemográfica –como el nivel educativo- tiene incidencia, es decir, recorta un grupo o conjunto de grupos específicos dentro de la población en general. Esto nos lleva a la discusión, que existe en el seno de los estudios sobre clases sociales, respecto del carácter de *clase* de la clase media. ¿Se trata de una *clase social*, con todo lo que ello implica; o resulta más preciso hablar de *capas* o *sectores*? Sin pretender, ni mucho menos, saldar esta discusión, utilizaremos el término *sectores medios* para aludir a grupos que comparten características sociodemográficas similares, que los ubican en fracciones relativamente privilegiadas de la clase trabajadora, siguiendo el desarrollo realizado por el sociólogo Adrián Piva (2009).

Metodología

Habida cuenta de la relevancia de estudiar las orientaciones, percepciones y opiniones de los sectores medios respecto de asuntos vinculados a la política, en el presente trabajo analizaremos – a partir de un grupo focal integrado por personas de ocupaciones típicamente consideradas de clase media- cómo la corrupción, caracterizada como *medio ilegítimo de ascenso social*, forma parte de la construcción discursiva de una identidad de clase media, atravesada por elementos raciales y morales. Es importante aclarar que este trabajo no busca analizar la corrupción como fenómeno en sí mismo, sino la forma en la que este elemento aparece en la construcción de un lugar de enunciación ubicado *en el medio* de otros actores.

El carácter de nuestro objeto nos sugiere la adopción de una estrategia de tipo cualitativo, caracterizada por poner el foco en procesos y significados que no están rigurosamente examinados o medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. No buscamos captar la realidad objetiva como algo dado, sino los significados que los actores le atribuyen a sus acciones y el discurso a través del cual lo explicitan. "Los investigadores cualitativos enfatizan la naturaleza socialmente construida de la realidad, la íntima relación entre el investigador y lo que es estudiado y los límites situacionales que moldean la indagación. Buscan respuestas a preguntas sobre cómo la experiencia social es creada y dotada de significado" (Denzin & Lincoln, 1994: 4).

La corrupción se ha constituido como problema público en la agenda de discusión argentina (Pereyra, 2013), las diferentes opiniones, percepciones y representaciones al respecto son construidas en la interacción social. En este sentido, consideramos que – a fin de aprehenderlas – es preciso disponer de una herramienta que nos permita captar, aunque sea de modo artificial, dicha interacción: “Las (ventajas) más importantes y características de esta técnica de *entrevista en grupo*, se condensan en el concepto de *interacción grupal*. La gran baza de los *grupos focalizados* o *de discusión* está en las posibilidades de exploración y generación de material cualitativo, derivadas no tanto de la presencia de un *entrevistador-moderador* sino del a presencia de varios entrevistados”. (Valles, 1999: 304).

El grupo fue reclutado a través de anuncios en la red social Facebook, y se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, en noviembre de 2018. Agradezco a su directora, Dra. Mabel Thwaites Rey, el haber puesto dicho lugar a disposición.

Análisis

El grupo

El grupo que aquí analizamos está compuesto por cinco personas – dos varones y tres mujeres - entre 30 y 56 años de edad, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se autoperciben como parte de la clase media. Dos participantes son comerciantes por cuenta propia, con nivel educativo secundario completo, mientras que los otros tres desarrollan ocupaciones de tipo profesional con estudios universitarios. Dos de los participantes son extranjeros que residen en Buenos Aires hace más de diez años. Considerando algunos de los enfoques más relevantes en el estudio de las clases sociales, podemos clasificar a nuestros participantes dentro de la clase de servicios –en el caso de él y las tres participantes con ocupación profesional – ocupando él y la restantes sendas *posiciones intermedias* en la estructura ocupacional (Goldthorpe y McKnight 2004). Cabe recordar que la clase de servicios, concepto tomado de Karl Renner por el sociólogo weberiano John Goldthorpe, supone una posición ocupacional caracterizada por un vínculo laboral en el que prima la *confianza*, lo cual iría en detrimento de la *explotación*, señalada por los autores marxistas como eje fundamental de las relaciones laborales bajo el capitalismo. Por otra parte, considerando el planteo que –desde el *neomarxismo*- hizo Erik Olin Wright (1983: 56-65), constatamos que nuestros entrevistados y entrevistadas coinciden con las *posiciones*

contradictorias de clase señaladas por el sociólogo norteamericano. Dichas *posiciones* comprenden tanto las posiciones de *directivos y supervisores* –que tienen *autoridad*, como los *propietarios*; pero, al igual que los *proletarios*, no son dueños de los medios de producción; los *asalariados semiautónomos* – que se asemejan a la *pequeña burguesía tradicional* en una mayor autonomía en el proceso productivo – y los *pequeños patronos*, que tienen *autoridad y capital* en pequeña escala. En este planteo, nuestros participantes podrían ubicarse en las posiciones contradictorias descritas, así como también –en el caso de Sandra, comerciante autónoma que no explota mano de obra- como parte de la pequeña burguesía. Todas estas posiciones, así como las que mencionamos al respecto de Goldthorpe, pueden englobarse dentro de las *clases o sectores medios*.

La relación entre clase media y corrupción ha sido estudiada desde estudios cualitativos que se esforzaron por reponer los significados que las personas de clase media le atribuyen a la corrupción cotidiana o micro (Sautu, 2004). Thwaites Rey se pregunta si la preocupación por esta problemática atraviesa realmente a la sociedad argentina o se concentra en “ciertos sectores medios urbanos” (Thwaites Rey, 1996: 4) mientras Sautu, Boniolo y Perugorría (2007) postularon la existencia de una *representación social de clase media* sobre la microcorrupción. Recuperando estos importantes aportes, nuestro trabajo pretende indagar la relación que la corrupción política –o gran corrupción- interviene en la construcción de una identificación de clase media, a la vez que es señalada como medio ilegítimo de ascenso social.

Como veremos más adelante, el grupo construyó –a lo largo de la conversación- un lugar de enunciación (un *nosotros/as*) a partir del cual se delimitó de otros sectores que ellos mismos ubicaron *por encima y por debajo* de sí mismos/as. Esto, consistentemente con el planteo de una corriente de trabajos sobre los *sectores medios*, constituye una identificación clasista que –partiendo de unas posiciones ocupacionales relativamente privilegiadas- se autopercibe como *clase media* apelando a criterios *raciales y morales* (Visacovsky y Garguin, 2009; Adamovsky, Visacovsky y Vargas, 2014).

Definiendo la corrupción: elementos y actores

Considerando que la problemática de la corrupción en Argentina se encuentra altamente partidizada, se tuvo en cuenta la orientación política de los participantes para formar grupos homogéneos en este sentido, para evitar la emergencia de posiciones irreconciliables que comprometan la viabilidad del grupo. El grupo que tomamos para la elaboración del presente trabajo está compuesto por participantes que manifestaron algún nivel de apoyo al gobierno de PRO/Cambiamos. En el análisis, la voz de los y las participantes aparecerá parafraseada y, alternativamente, se citarán párrafos de la desgravación. Es importante aclarar que, en este caso, los nombres de cada participante serán alterados para preservar el anonimato.

Luego de una breve presentación de cada participante, les pregunté qué apreciación tenían de la situación política en Argentina. Unánimemente calificaron a la misma de forma negativa, a lo que -como dinámica introductoria- les solicité que mencionen los problemas que identificaban dentro de la mentada coyuntura. La *corrupción* fue mencionada dentro de las primeras cinco respuestas, siendo considerada como una de las problemáticas más graves y relevantes, entre las cuales incluyeron a la “situación económica” – caracterizada como “inestable” - y la “inseguridad”. A la hora de definir qué entendían por corrupción, las respuestas incluyeron figuras delictivas – “mafia”, “hacer negocios turbios”, “no respetar las leyes” – junto con la referencia a una posición acomodada – “ese puesto” en el que se está “teniendo poder” – que es utilizada en provecho propio. Inmediata y espontáneamente emergieron referencias a actores considerados corruptos, ya sean figuras generales – “político argentino”- o personajes concretos como expresidentes – Carlos Saúl Menem (1989-1999) y Cristina Fernández (2007-2015) y dirigentes sindicales (Hugo Moyano, secretario general del sindicato de choferes de camiones de la Provincia de Buenos Aires):

Francis: Todo es una mierda...todo...para mí todo el sistema político está mal...está mal...organizado, está mal pensado...o sea, ¿quieres ganar dinero?: la política. Y esa es la verdad. Si yo...conozco varios casos que se empiezan adentro de la empresa a hacer... ehh...sindicalistas, empiezan a subir, y (...) terminan (...) en Punta Cana...

Sandra: ...y escúchame, Moyano no tiene...los hijos si son...todos los...capaz que lo bueno que hizo es que los hizo ir a estudiar a todos. Son abogados. Pero él, no terminó la primaria, yo creo...

Francis: Pero... ¿conocés el predio que tienen en camino de cintura? ... (Nicolás: “Esteban Echeverría”)...el...no es el predio...es (Sandra: “es toda la plata que tienen en el exterior, otro que tiene que ir preso...”) es una cosa inmensa...

Nicolás: Pero eso, la mayoría de los sindicatos son así...

Aquí podemos observar dos elementos interesantes. En primer lugar, “la política” y “el sindicalismo” –usados como sinónimos de corrupción- son identificados como medios para ascender socialmente, ascenso que es graficado con la referencia a “ganar dinero” y “terminar en Punta Cana”. Pero este ascenso no es considerado legítimo: inmediatamente se señala que Moyano “no terminó la primaria” como forma de impugnar la posición social que, al menos en el imaginario de la participante, ostenta el mentado dirigente sindical. Su posición, según Sandra, no corresponde a alguien de su nivel educativo, sino que está reservada a quienes poseen mayores credenciales educativas. El sociólogo weberiano Frank Parkin desarrolló el concepto de “cierre social excluyente” para definir el proceso según el cual un grupo determinado se apropia de un bien, privando a los demás grupos de acceso al mismo. Denomina “credencialismo” a una forma específica de este proceso, anclada en el monopolio de credenciales educativas (por ejemplo, los colegios profesionales que otorgan matrículas y las universidades que otorgan títulos) cuya posesión habilita el acceso a una fuente de ingresos (Parkin, 1984). Lo que señala Sandra al decir que Moyano “no terminó el primario” –independientemente de la veracidad o falsedad del dato- podría entenderse como la constatación de que el mecanismo descrito por Parkin no se verifica para el caso del camionero, lo cual es considerado anómalo. Las credenciales educativas, como analizó Bourdieu, son una de las formas del *capital cultural* en estado *objetivado* (Bourdieu, 1979), lo cual implica que poseer o no poseer títulos educativos de distintos niveles es comúnmente tomado como indicador del capital cultural de una persona, capital que –siguiendo la teoría de los campos del gran sociólogo francés – otorga el derecho a aspirar legítimamente a posiciones dominantes dentro de un campo determinado, además de poder *convertirse* de un tipo de capital – el cultural, en este caso- a otros, como el capital económico (Bourdieu, 1990).

El segundo elemento señalado como anómalo, el predio del sindicato, es un club deportivo para afiliados y afiliadas y sus familias¹⁶⁸. Cabe aclarar que no es extraño que haya sindicatos con instituciones de este tipo; el sindicato de trabajadores telefónicos¹⁶⁹ y el sindicato de docentes de educación primaria y media¹⁷⁰ - por mencionar dos casos de sindicatos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires - ofrecen prestaciones similares como parte de su política gremial. Para nuestros participantes, la existencia de esta institución, propiedad del sindicato, es señalada como anómala por su tamaño – considerado “inmenso” – y esta anomalía es inmediatamente asociada a una sospecha: ¿de dónde sale el dinero? Si bien, en este caso, un participante del grupo intervino en el sentido de disipar esta sospecha, se trata de un elemento que aparecerá recurrentemente a lo largo de la conversación, por ejemplo, aludiendo a ciertas negociaciones paritarias que eran consideradas excesivas:

María: ...Y no son sólo los docentes, son los docentes, los médicos, los administrativos (Mariano: “es todo”)...es todo...todos tienen un sueldo que debería ser mejor (Nadia asiente) pero no podés andar cortando...Sandra: Sí, una vida de locos, se zarpan...los camioneros pidieron el 40%...(Nadia: “los bancarios el 44%...”,Francis: “se lo dieron, eso es diferente, se lo dieron”, Sandra: “sí, pero, ¿no iban a hacer de nuevo un paro ahora?”, Francis: “no, no, ya está”, Nadia: “ya acordaron” (manos palmeando), Sandra: “¿40 por ciento? ¡Y cobraban como 60000 pesos!”, Nicolás: “es a marzo o a abril...”, Nadia: “y un bono a fin de año de 5000 pesos”, Francis: “...de 5000 pesos”, Sandra: “esos pasaron la inflación entonces”, Francis: “yo no sé para qué estudié si manejar es más fácil (palmea las manos y ríe)”).

Sandra: no, ¿sabés lo que pasa? Que los camioneros, es...es...es lo más importante que hay en la Argentina, yo creo... porque si no, no llega la verdura, no llega la mercadería, no llega nada.

Francis: ese es un problema, para mí, que nació en la época del turco, y nace con la destrucción del sistema ferroviario. Francis: ese es un problema, para mí, que nació en la época del turco, y nace con la destrucción del sistema ferroviario. (Sandra asiente). (...)

¹⁶⁸ <http://www.clubcamioneros.com.ar/ladeportiva/>

¹⁶⁹ <http://www.foetra.org.ar/sitio/actualidad/noticias-foetra/item/3813-el-club-telefonos-tiene-muchas-actividades-para-vos.html>

¹⁷⁰ <https://www.suteba.org.ar/recreo-del-tigre-225.html>

Francis: “los judiciales también” ... ¿quiénes? (Francis: “los judiciales”) los judiciales no tienen que cobrar 40, tienen que.....mi mamá, pobre, tiene la jubilación más baja (Francis: “todo el sistema judicial está en el 40, camioneros está en el 40”)... y no sé cómo es el sistema judicial...si no hacen nada (Risas) (...) Si no hacen nada. Es una...yo pondría “joda” (Francis ríe, todos ríen después) ¿Se puede? Una jodita.”

A partir de la queja por las movilizaciones y los paros, emerge la sospecha por los aumentos salariales pactados por los gremios de Camioneros y Judiciales. Se hace referencia a los salarios de estos trabajadores, considerados injustos en virtud, nuevamente, de que no poseen credenciales educativas adecuadas: a través de la frase “*para qué estudié*”, Francis señala, de manera humorística, que él no debería ganar menos –o lo mismo- que un trabajador que, en definitiva, realiza una tarea que “*es más fácil*” que la propia, como manejar un camión. Los altos salarios que perciben los camioneros -según los participantes- tienen un origen espurio, vinculado a la destrucción del sistema ferroviario, mientras que –en el caso de los judiciales- no se corresponden con la productividad de su trabajo. En ambos casos, el modo en el que los participantes comentan e intervienen sobre las oraciones de los otros –que intentamos ilustrar en la transcripción- y las risas que generan ciertos comentarios dan cuenta de un consenso grupal, en el que hay una voz discordante que permanece en minoría. Este desajuste entre los salarios, la productividad del trabajo –percibida por los participantes- y las credenciales educativas es ilustrada como “una joda”, es decir, un escenario caracterizado por el desorden, en el que las jerarquías establecidas se desdibujan.

Personificación: tipos ideales y delimitación

Luego de las definiciones, se les propuso a los participantes el juego de personificar la corrupción, es decir, imaginar qué rasgos fisonómicos presentaría, cómo se vestiría, cuántos años tendría, si tendría género, etc. El grupo coincidió en presentar dos estereotipos que, como las caras de una moneda, representarían las dos facetas de la corrupción. En primer lugar, se trataría de una persona vestida de una manera ostentosa, visiblemente rica, de alto capital cultural y experimentada:

M: Si, otra actividad que les propongo: si yo digo, “entra la corrupción”, la tenemos que personificar... ¿cómo es, ¿cómo está vestida...?

Sandra y Nadia: negro (risas)

M: ¿Qué más? ¿Qué más? Tienen que personificar.

Nicolás: Yo creo que de traje y corbata...va a parecer como que es una persona bien, pero... (Nadia asiente) por ejemplo, se me hace en la cabeza que...esa gente

(...)

Francis: Pero yo creo que...para mí la pregunta va como si uno imaginara... (Nadia: “Claro, si uno lo imagina...alguien con mucha experiencia”)...es un adulto, bien vestido, vestida...de hecho, te diría, elegante.

Nadia: Y con mucho discurso (todos asienten enfáticamente)...o sea, vos lo escuchás, o la escuchás, y decís ‘esta persona sabe de todo, se sacrifica’.

Sandra: y con un collar de perlas que nos pertenece a todos nosotros (risas).

María: los sindicalistas me transmiten corrupción, (Francis asiente enfáticamente) me los imagino unos viejos, gordos, con mucha panza (Nadia ríe) y no vestidos de traje y corbata.

Francis: Para mí esa es la contracara de...es corrupción igual, pero la otra versión

María: Es la versión bizarra... (Nadia ríe)

Francis: La versión bizarra de...o mal vestida (ríe)

Sandra: Y la primera cosa es...el político...y la otra cosa es el camionero, es otra cosa (Nadia: pero es corrupción igual)...si...

Francis: Si, pero...digamos, el sindicalista es como la contra del político, entre comillas, que por debajo son amigos (María: “son iguales”)...si el político está bien con el sindicalismo, el país está tranquilo...aunque estemos todos mal, y esa es la verdad (Sandra asiente).

Más allá de las referencias coyunturales, existe un consenso –evidenciado en la intervención articulada entre todos los y las participantes, exceptuando el que quedó en minoría- son dos tipos ideales de personificaciones de la corrupción. Los *tipos ideales*, concepto acuñado por Max Weber, son “construcciones mentales” realizadas a partir de “exagerar” rasgos de la realidad (Weber, 1904; citado en de Donato, 2007). Estos constructos, utilizados en sociología como herramienta de investigación, aparecen en la construcción colectiva que se desarrolla en el grupo focal como condensación de una serie de representaciones relativas a la corrupción.

¿Qué elementos se ponen en juego? La primera respuesta –al unísono- de dos participantes a la consigna que les planteé pone en juego un elemento racial. Mario Margulis, a través del concepto de *racialización de las relaciones de clase*, plantea que las alusiones corporales –como el epíteto “negro”- en el contexto argentino, puede aludir –antes que a una raza- a la figura de un otro que aparece subalternizado en términos corporales, culturales y de clase. “Las referencias vinculadas con el cuerpo: color de la piel, mestizaje, etc. se remontan a la colonia y a las teorías y prácticas instaladas durante el siglo pasado, constituidas en síntoma de inferioridad” (Margulis, 1999: 50). Esto se complementa con lo planteado por el historiador Enrique Garguin, según el cual la identidad de clase media se encuentra asociada a un imaginario racial:

Podríamos decir que fue la clase media quien encarnó la propia idea de nación durante buena parte del siglo XX. Y en ese sentido, también se racializa: la clase media –al igual que la Argentina– viene de los barcos, es europea y cosmopolita. Pero en sentido estricto, no había clase media distinta de la nación toda. A todo efecto práctico, no hubo clase media hasta que la irrupción disruptiva del peronismo puso en cuestión arraigadas creencias del imaginario colectivo porteño, abriendo una duradera cesura que se explicitará como clasista y racial de un modo indistinto e indisoluble. (Garguin, 2009: 88-89).

Estos dos trabajos forman parte de una amplia variedad de estudios que analizan la relación entre etnia y clase, entre los cuales podemos citar los de Ezequiel Adamovsky (2012), Pablo Dalle, (2016) y Aníbal Quijano (2000), entre otros.

Luego, se ve claramente la construcción del primer tipo ideal: vestida “de traje” y corbata, “elegante”, parece “una persona bien” y tiene “mucho discurso” –es decir- tiene un capital cultural

que los participantes reconocen como legítimo: al escucharla, dicen, parece que “sabe de todo”. Es interesante señalar como los rasgos positivos que presenta este tipo ideal, sin embargo, pertenecen al terreno de la *apariencia*. Parece “una persona bien”, pero no lo es, mientras que el “discurso” puede leerse como elocuencia pero también como capacidad de engaño. Inmediatamente después, una participante mujer pasa al segundo tipo ideal, al que el grupo caracteriza como “contracara” y “versión bizarra” del primero: explícitamente asociado a la figura del sindicalista –que atravesó el discurso grupal durante toda la conversación- se lo describe como “viejo” y “gordo”. Estos rasgos físicos, planteados desde una valoración negativa, nos permiten pensar –volviendo a Bourdieu- que la descripción de este cuerpo – como *cuerpo alienado*, por oposición al *cuerpo hegemónico* – junto a lo antedicho respecto de la identificación racial, ubican a este tipo ideal “bizarro” de la corrupción en una posición subalternizada respecto de los participantes. Esto equivale a decir que los y las participantes, en su construcción de este tipo ideal, están asumiendo una posición social que se ubica *por encima* del mentado constructo y *por debajo* del anterior. Los rasgos físicos, que constituyen “*sistemas sociales de clasificación que no son independientes de la distribución de las diferentes propiedades entre las clases sociales*” nos permiten –a través de las valoraciones que socialmente se le adjudican, localizar la posición social en términos de la clase en la que – correlativamente- se está ubicando al portador de dichos rasgos, puesto que “*las taxonomías al uso tienden a oponer, jerarquizándolas, las propiedades más frecuentes entre los que dominan (es decir, las más raras) y las más frecuentes entre los dominados*” (Bourdieu, 1986: 185).

Este posicionamiento fue construyéndose a lo largo de la conversación, puesto de manifiesto en términos de capital cultural, credenciales educativas, disposiciones morales (vinculadas a la caracterización de los sindicalistas a partir de figuras delictivas que tienen “plata afuera” y por ende, deben “ir presos”); para cristalizar –a partir del ejercicio de personificación que fue propuesto en el grupo- en un cuerpo racial y físicamente *ilegítimo*. La construcción en espejo de ambos tipos ideales nos permite pensar que, si el tipo ideal “bizarro” es ubicado *por debajo* de los participantes, el primer tipo ideal – con alto capital cultural y rasgos estéticos considerados legítimos – podría estar situado *por encima* de ellos. En primer lugar, porque el tipo ideal está vinculado a la dirigencia política (lo cual implica, de hecho, una *superioridad* en términos políticos): esto, planteado de forma explícita al final del extracto reproducido anteriormente, también se encuentra insinuado en los elementos coyunturales adjudicados a la tipificación (el collar de perlas es una alusión a la

expresidenta Cristina Fernández). Complementariamente, se hicieron referencias al poder adquisitivo de *ambos* tipos ideales – vive en barrios y vacaciona en lugares altamente exclusivos – caracterizándolos en una posición económica que sitúan por encima de ellos y ellas. Si bien los tipos ideales están diferenciados por rasgos corporales y capital cultural, en ambos casos se cuestiona la *legitimidad* de su posición, sospechando de la legitimidad de quién está *arriba* y negándola respecto de quien se encuentra abajo. Esta *doble delimitación* es consistente con lo descrito por el antropólogo Sergio Visacovsky, en su definición de clase media como *identidad*:

Las invocaciones al relato de origen de la clase media afirman una filiación mediante la cual se habrían transmitido valores que explicarían el éxito y el progreso. (...) Quienes invocan el relato podrían diferenciarse de aquellos que no poseen ni jamás poseerán las virtudes del trabajo y el esfuerzo como camino al éxito y al progreso: de un lado, y apelando a principios de diferenciación racista, aquellos sectores que no pueden alegar un origen europeo; del otro, quienes han tenido éxito en la vida mediante la corrupción, especialmente en el mundo de la política (Visacovsky, 2014: 2014).

En el último pasaje del extracto, aparece la distinción entre una alteridad (“ellos”) constituida por los dos tipos ideales corruptos. Este polo, compuesto por actores que los y las participantes ubican *por encima y por debajo* de sí mismos/as, es entendido como parte de una *relación antagónica* con ellos mismos: si ambas caras de la corrupción –“*el político*” y “*el sindicalismo*”- se ponen de acuerdo –“*están bien*”- el resto de la sociedad, enunciada universalmente (“*todos*”), sufrirá. Esta tensión que se manifiesta entre una sociedad que, a pesar de concebirse como una totalidad, se ve enfrentada a una parte de sí misma, nos remite a la idea ya citada de Garguin, de una *clase media* que se ve a sí misma como la nación toda.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo, concentramos nuestra mirada analítica en los siguientes elementos:

- La caracterización que los y las participantes hacen de la corrupción como un medio ilegítimo de ascenso social, al que oponen –como medio legítimo- el estudio y el esfuerzo.

- Asociado a lo anterior, los y las participantes ubican *por debajo* a los trabajadores sindicalizados y *sospechan* de la legitimidad de sus recursos económicos (predios sindicales). A la vez, algunas negociaciones salariales son consideradas excesivas.
- Estos elementos cristalizan en dos tipos ideales de la corrupción, “el/la político/a”, que se ubica *por encima* y “el sindicalista” –percibido como masculino- que es situado *por debajo*.

Hemos visto como, a lo largo de la conversación ocurrida en el marco de un grupo focal, un conjunto de personas con ocupaciones consideradas “de clase media” por distintas corrientes construyó un lugar de enunciación desde el cual se delimitó de otros grupos que ubicó *por encima* y *por debajo* de ellos y ellas, posicionándose a sí mismos/as *en el medio* y tachando de *corruptos* sus mecanismos de ascenso social. También pudimos observar cómo, en este proceso, intervienen factores morales y raciales, en el marco de los cuales *la corrupción* es señalada como un atributo de aquellos *otros/as*, que incluyen a dos *tipos ideales* que aluden a actores disímiles en varios sentidos, que nuestros participantes han ubicado en un mismo polo. El nivel socioeconómico no es lo único que vincula a estos dos tipos ideales, sino que, a continuación del anterior extracto, se señala que ambos comparten un vínculo considerado espurio: si bien se supone que los sindicalistas tienen que enfrentarse al gobierno (ser “la contra”), se identifica un acuerdo entre ambos que, en última instancia, atenta contra el bienestar general, contribuyendo a que “estemos todos mal”. Ante esto, podemos preguntarnos, ¿adónde reside la corrupción? Hemos visto que los participantes postularon una discordancia entre la posición económica de ciertos actores y las credenciales educativas que *deberían poseer* para aspirar a los mismos, pero no poseen. Este elemento, que parece atentar contra ciertas jerarquías, se enlaza con la sospecha que despierta el dinero – cuando está en manos de ciertos actores – y, finalmente, con el vínculo espurio que establecen con otros actores –distintos, pero igualmente corruptos- con los cuales, se supone, deberían enfrentarse. Qué relevancia tienen estos elementos a la hora de pensar el impacto de la corrupción en estos sectores constituye un interrogante a investigar; el propósito de este trabajo ha sido mostrar cómo la corrupción interviene como elemento discursivo de orden moral en la construcción discursiva de una delimitación respecto de alteridades construidas en el mismo proceso. Esta delimitación ubica a los y las participantes *en el medio*, y presenta rasgos que son consistentes con la *clase media como identidad*.

Respecto de la discusión en torno al estatus de clase –o no- de estos sectores, quisiéramos remitirnos –para finalizar- a planteo que el citado Wright desarrolló en una discusión similar respecto de otro sector: las franjas más vulnerabilizadas de la clase trabajadora, denominadas *precariado* (Wright, 2016). Para esto, realiza un análisis de los intereses de este segmento en tres niveles: como se ven afectados según cambia el modo de producción (capitalismo o socialismo), al que denomina *juego*, según la variante dentro del modo de producción capitalista (ej. un capitalismo de corte más keynesiano vs. uno más liberal) –denominado *las reglas*- y, finalmente, la multiplicidad de acciones (“*movimientos*”) que las clases pueden efectuar con un juego y unas reglas determinados. Hecho esto, Wright concluye que el precariado es una parte de la clase trabajadora en su conjunto. Si bien la realización de un análisis riguroso, tomando este modelo para utilizarlo con los sectores comúnmente denominados “clase media” excede los objetivos de este trabajo, planteamos que esa vía analítica podría contribuir al desarrollo del debate en cuestión.

Bibliografía

- Adamovsky, E. (2012). El color de la nación argentina. Conflictos y negociaciones por la definición de un ethnos nacional, de la crisis al Bicentenario. *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, 49, 343-364.
- Adamovsky, E., Visacovsky, S. E., y Vargas, P. B. (comps). (2014). *Clases medias. Nuevos enfoques desde la sociología, la antropología y la historia*. Buenos Aires: Ariel.
- Adamovsky, E. (2014). Clase media: problemas de aplicabilidad historiográfica de una categoría. En E. Adamovsky, S. E. Visacovsky, & P. B. Vargas (comps.), *Clases medias. Nuevos enfoques desde la sociología, la antropología y la historia*. Buenos Aires: Ariel.
- Bourdieu, P. (1979). Los tres estados del capital cultural. *Sociológica*, 5, 11-17.
- Bourdieu, P. (1986). Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo. En F. Alvarez-Uria y J. Varela (eds.), *Materiales de sociología crítica* (pp. 183-194). Madrid: Ediciones de la piqueta.
- Bourdieu, P. (1990). Algunas propiedades de los campos. En P. Bourdieu, *Sociología y cultura* (pp. 135-141). Ciudad de México: Grijalbo.
- Dalle, P. (2016). Origen étnico-nacional familiar y movilidad social. En *Movilidad social desde las clases populares. Un estudio sociológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1960-2013)* (pp. 187-219). Buenos Aires: IIGG-CLACSO/CICCUS.
- De Donato, X. (2007). El carácter de los tipos ideales weberianos y su relación con las ciencias naturales. *Diánoia*, 52(59), 151-177.
- Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. London: Sage.
- Garguin, E. (2009). "Los argentinos descendemos de los barcos". Articulación racial de la identidad de clase media en Argentina (1920-1960). En S. E. Visacovsky y E. Garguin (comps.), *Moralidades, economías e identidades de clase media*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Goldthorpe, J., y McKnight, A. (2004). *The economic basis of social class*. London: LSE.
- Margulis, M. (1999). La “racialización” de las relaciones de clase. En M. Margulis y M. Urresti, *La segregación negada: Cultura y discriminación social* (pp. 37-73). Buenos Aires: Biblos.
- Parkin, F. (1984). *Marxismo y teoría de clases. Una crítica burguesa*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Piva, A. (2014). La movilización antikirchnerista de «clase media». Entre la crisis de representación y la recomposición neo populista del consenso. *Revista Astrolabio*, 12, 394-421.
- Pereyra, S. (2013). *Política y transparencia. La corrupción como problema público*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder y Clasificación Social. *Journal of world-systems research*, 6(2), 342-386.

- Sautu, R. (2004). *Catálogo de prácticas corruptas*. Buenos Aires: Lumière.
- Thwaites Rey, M. (1996). Corrupción y ética política: Apuntes sobre un malestar contemporáneo. *DOXA*, 15, 4-19.
- Thwaites Rey, M., y Ouviña, H. (2016). Tensiones hegemónicas en la Argentina reciente. En L. Oliver, *Transformaciones recientes del estado integral en América Latina*. UNAM: La Biblioteca.
- Valles, M. (1999). Técnicas de conversación, narración (III): los grupos de discusión y otras técnicas afines. En *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis.
- Visacovsky, S. E., y Garguin, E. (comps.) (2009). *Moralidades, economías e identidades de clase media. Estudios históricos y etnográficos*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Visacovsky, S. E. (2014). Inmigración, virtudes genealógicas y los relatos de origen de la clase media argentina. En E. Adamovsky, S. E. Visacovsky, y P. B. Vargas (comps.), *Clases medias. Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología*. Buenos Aires: Ariel.
- Weber, M. (1988). Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. En *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Wright, E. O. (1983). *Clase, crisis y Estado*. Madrid: Siglo XXI.
- Wright, E. O. (2016). Is the precariat a class? *Global Labour Journal*, 7(2), 123-136.

MESA 10: SUBJETIVIDAD Y CLASE SOCIAL

Identidades en tránsito: procesos de movilidad socio-urbana y configuración identitaria en jóvenes de barrios excluidos de Santiago de Chile.¹⁷¹

Teresa Ropert, Dariela Sharim y Andrés Di Masso
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universitat de Barcelona
mtropert@gmail.com
dsharim@uc.cl
adimasso@ub.edu

Resumen

Considerando que la investigación internacional ha mostrado largamente la relevancia de los vínculos persona-lugar en términos de la definición de la identidad, los que coexisten con los ideales contemporáneos de movilidad social y espacial, resulta particularmente interesante pensar cómo se articula esta tensión pertenencia-movilidad en una ciudad altamente segregada como es Santiago de Chile. La presente investigación, enmarcada en una metodología que involucró diversas técnicas narrativas, emplazadas y móviles, tuvo como objetivo comprender los procesos identitarios de aquellos/as jóvenes que viven o han vivido en barrios considerados excluidos de Santiago y se encuentran en proceso de transición entre la escuela y el mundo laboral. Así, a partir de un análisis biográfico-narrativo de los datos, los resultados presentados permiten pensar que la identidad de los y las jóvenes que viven en barrios excluidos de Santiago se encuentra en una tensión permanente entre los vínculos afectivos con el lugar de origen, y los mandatos de movilidad socio-espacial. Aún más las identidades juveniles, en estos casos, parecen construirse permanentemente entre procesos de identificación-desidentificación, lo que revela que gran parte de la tensión entre pertenencia y movilidad está dada por procesos de estigma y exclusión social.

PALABRAS CLAVE: BARRIO EXCLUIDO - IDENTIDAD DE LUGAR - IDENTIDAD NARRATIVA - MANDATOS SOCIALES - MOVILIDAD SOCIO-ESPACIAL.

¹⁷¹ Agradecimientos: Beca Doctorado Nacional Conicyt Folio n°2115017, Patrocinio de CONICYT/FONDAP/15130009 Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de Chile (COES)

INTRODUCCIÓN

La nueva ciudad contemporánea: fluidez y movilidad

La ciudad contemporánea no sólo ha experimentado recientes procesos de dualización y segmentación, que dividen el territorio urbano entre paisajes de opulencia y concentraciones de precariedad económica y habitacional (Katzmann, 2009; Wacquant, 2001, 2007), sino que además un nuevo fenómeno de expansión de la ciudad ha sido denominado por algunos como un verdadero proceso de urbanización planetaria (Brenner, 2013). No sólo los espacios urbanos se expanden y hacen más difusos sus clásicos límites de ciudad industrial, sino que verdaderos procesos de desfronterización organizan hoy la competitividad económica y financiera (e.g. Brenner, 2013; Sassen, 2003; De Mattos, 2010). Así, durante las últimas décadas, la mayoría de las grandes ciudades del mundo han sido testigo de importantes transformaciones en la organización social y urbana del territorio. Progresivamente, la ciudad industrial de mediados del siglo XX ha sido reemplazada por una ciudad que conoce nuevas formas y paisajes debido a procesos de cambio sociopolítico y económico, trayendo lo que algunos autores han denominado la ciudad global (Machado-Bogus, 2008).

Sin duda, esto ha favorecido la competencia y precarización de los mercados laborales, dificultando la inserción laboral digna y rentable en una parte importante de la población que es, precisamente, aquella que ha accedido a menores niveles educacionales y que por ende se encuentra en una situación de acumulación de desventajas socioeconómicas (e.g. Ziccardi, 2008; Prevot-Shapira, 2005; Mingione & Oberti, 2003; Mingione, 1997). Esto ha traído consigo, entre otros efectos, el aumento de la violencia urbana, ahí donde se concentran poblaciones relegadas a las fallas de los canales democráticos de integración social, siendo este un problema bastante transversal y de profunda preocupación en la región latinoamericana (Briceño-León, 2007; Kruijt & Koonings, 2007, Rodgers, 1999). Aún más, las nuevas configuraciones urbanas conllevan un aumento de la importancia de la movilidad urbana para la integración social, puesto que las ciudades han perdido sus límites y se han expandido fuertemente, constituyendo manchas urbanas difusas, como es el caso del sistema urbano metropolitano de la capital chilena (De Mattos, et. al., 2014). Asimismo, numerosos estudios han sido destinados en los últimos años a comprender cómo la movilidad cotidiana en la ciudad de Santiago puede ser influida y reflejar procesos de exclusión social

complejos y multideterminados (e.g. Rodríguez, 2016; Jirón, et.al., 2013; Jirón, et.al., 2010; Jirón, 2007).

Considerando una definición amplia de la movilidad urbana, en tanto práctica que relaciona las representaciones y subjetividades de un individuo o grupo, con la accesibilidad material que ofrece la ciudad para sus desplazamientos (Gutiérrez, 2012), es fácil intuir que hoy la ciudad es vivida en gran parte desde las experiencias de movilidad. Además, la tendencia internacional hacia globalización permite percibir que los individuos son cada vez más sujetos móviles, que se cambian de residencia, viajan, se trasladan largas horas con el fin de integrarse a un trabajo, educarse o acceder a otras formas de vida social: el ideal del ciudadano del mundo, móvil y flexible, capaz de adaptarse a distintos contextos, parece ser un imaginario social cada vez más presente y realista. Con todo, esta experiencia de fluidez, de pérdida de límites y de movilidades idealizadas, parece traer consigo reconfiguraciones psicosociales que desafían la subjetividad, llevando a los sujetos a sentirse inseguros, a perder anclajes identitarios y a sentir la responsabilidad individual por sus propios destinos, de manera tajante y a veces incluso amenazante para su sentido vital (e.g. Rosa, 2012; Aubert, 2006; Lypovetsky, 2003; Bauman, 2003).

Psicología Ambiental, movilidad e identidad de lugar

El continuo de desarrollo teórico y empírico dentro de la Psicología Social de grupos va desde la investigación en categorización social y formación de prejuicios (e.g. Blascovich, Wyer, Swart & Kibler, 1997; Brown, 1995), hasta el estudio de las dinámicas grupales. Dentro de este marco, la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner (1986) fue originada en los años 70, trayendo el trabajo de numerosos investigadores que coinciden en la idea de que los individuos se definen a sí mismos en términos de su membresía en grupos sociales, y que la identificación grupal provoca un efecto de distintividad psicológica respecto de otros grupos y categorías sociales (Abrams & Hogg, 1988).

Tomando estos aportes de la investigación en Psicología Social, la Psicología Ambiental se definió en su origen como un campo de estudios que buscaba establecer relaciones teóricas y empíricas entre el individuo y el entorno construido, volviendo así la mirada hacia el significado de los

encuadres físicos que proveen el contexto para el comportamiento y la experiencia social compartida (Proshansky, 1976). Partiendo del supuesto de que existiría una integridad absoluta entre la persona y el encuadre físico en el que se enmarca su comportamiento, Proshansky, Fabian & Kaminoff (1983) definen la identidad de lugar como un subcomponente de la identidad personal caracterizada por las dimensiones del yo que definen al individuo en relación a su entorno físico, considerando patrones complejos de ideas, preferencias, creencias, sentimientos, valores, objetivos y tendencias comportamentales, conscientes e inconscientes. Con todo, el vínculo con el lugar no es sólo psicológico, sino a la vez social puesto que los lugares representan significados socialmente compartidos (Valera & Pol, 1994). Así, es importante señalar que la identidad social urbana incluye la idea de que la interacción entre individuos que comparten un determinado espacio urbano traerá adelante procesos identificatorios en función de los significados asociados con los lugares y compartidos entre vecinos y ciudadanos (Valera & Pol, 1994), lo que trae consigo el problema del estigma de lugar.

Ahora bien, considerando las nuevas configuraciones urbanas señaladas más arriba, y la importancia de la movilidad urbana como un mecanismo cada vez más presente de integración a la vida en la ciudad, algunos autores analizan específicamente la relación entre movilidad urbana y sentimiento de pertenencia, concluyendo que, si bien se podría intuir una oposición entre ambos en la experiencia de un individuo, muchas veces esta relación no resulta contradictoria en la experiencia individual (Gustafson, 2001, 2009), por lo que se hace necesario pensar la relación con el lugar como un proceso antes dinámico que estático (Lewicka, 2011). Con todo, la teoría de la identidad de lugar ha recibido críticas recientes por ser considerada muy centrada en los procesos individuales y tener poco desarrollo en cuanto a su articulación con procesos de orden societal más bien grupales y sociopolíticos, cuestionando incluso la importancia de incorporar más la dimensión política a la relación entre identidad y lugar (Di Masso, Vidal & Pol, 2008; Manzo, 2005).

En definitiva, desde esta nueva forma de vivir y comprender la ciudad como escenario móvil y globalizado, diversos investigadores especialmente interesados en las problemáticas de exclusión social contemporáneas han trabajado cuantiosamente en el análisis de la segregación urbana, especialmente en ciudades de Latinoamérica (e.g. Rasse, 2015; De Mattos, et.al., 2014; Sabatini, et.al., 2011; Katzman, 2009; Kruijt, 2008; Kruijt & Koonings, 2007; Sabatini, et.al., 2001;

Wacquant, 2001). De esta manera, las nuevas ciudades contemporáneas, particularmente aquellas segregadas que ofrecen marcos simbólicos desiguales en la relación persona-territorio, plantean nuevos desafíos a la investigación en Psicología Ambiental y procesos de vínculo identitario persona-lugar, invitando a considerar perspectivas innovadoras respecto de cómo se vive y performa la ciudad contemporánea en manos de sus habitantes (Di Masso, Castrechini & Valera, 2014; Di Masso & Castrechini, 2012).

Exclusión socioespacial y jóvenes en Chile

Las nuevas configuraciones de la ciudad posindustrial han llevado a una acentuación de procesos de polarización urbana (Katzman, 2009; Wacquant, 2001), lo que ha dificultado la inserción laboral de personas que viven en barrios segregados, especialmente cuando se trata de jóvenes, debido en parte al aumento en los tiempos de viaje (Sabatini, et. al., 2001). De hecho, bien se sabe que uno de los grupos sociales más afectados por las problemáticas citadas más arriba, asociadas con la desigualdad, la segregación urbana y la exclusión social, son los jóvenes, principales víctimas del desigual acceso al sistema educacional y laboral (e.g. Jurado de los Santos, et.al., 2015; Aparicio-Castillo, 2013; Gallart, 2001). Además, la poca claridad en la definición del concepto de juventud ha traído consigo una falta de adecuación de las políticas públicas para detectar sus necesidades específicas (e.g. Saravi & Makowski, 2011; Krauskopf, 2011). Aún más, considerando que la juventud atraviesa un período particularmente crítico entre el término de la formación educativa y el ingreso al mundo del trabajo (e.g. OIT, 2010; Jeria, 2009; Dávila León, 2002), es posible interrogarse respecto de cuáles son las tensiones y desafíos que tiene la transición a la adultez para aquellos que viven en barrios excluidos de Santiago de Chile, en función de la importancia del rol socializador que cumplen los entornos sociales directos para los/as jóvenes (e.g. Ruiz Florez, 2012; Álvarez, 2014; Ortega, 2014; Álvarez & Cavieres, 2016).

De esta manera, la juventud parecen ser un grupo clave para la comprensión de cómo se articulan estas dimensiones de la vida cotidiana contemporánea, en una ciudad especialmente segregada como es Santiago de Chile. Aún más, cuando se trata de pensar la relación entre los procesos de exclusión social, las experiencias de la movilidad cotidiana en la ciudad (Jirón, et. al., 2010; Jirón, 2007) y la integración de la propia historia, familia y grupos de pares, que puede generar códigos de interacción social que resulten contradictorios para la cultura hegemónica (Ortega, 2014). Sin

embargo, la pregunta por la construcción identitaria de los jóvenes, que viven en un escenario globalizado cada vez más móvil y difuso, donde los límites de lo que otrora era establecido como unitario parecen difuminarse, puede ser considerada controversial. Más aún, cuando esta identidad se halla vinculada con un lugar de origen estigmatizado, segregado y excluido socialmente, el desafío de articular una identidad que considere los lugares biográficos como anclajes identitarios, parece convivir con mandatos sociales que pregonan la inserción social por medio de la movilidad. Considerando lo anterior, ¿cómo mantener una identidad ligada con el barrio de residencia, si es que tal relación existe, cuando éste es un barrio excluido y estigmatizado, incluso indeseable, a ojos de la sociedad hegemónica? Un abordaje interesante y novedoso para responder a las preguntas planteadas puede utilizar el enfoque biográfico-narrativo para comprender la identidad, en la medida en que la culminación de una identidad narrativa en este momento de la vida parece contribuir a la construcción de identidades agénticas, capaces de reproducir a la vez que de cuestionar los mandatos sociales (e.g. Andrews, Kinnvall & Monroe, 2015; Hammack & Toolis, 2015; Hammack & Pilecki, 2014; Smorti, 2011).

MARCO DEL ESTUDIO

La juventud es un período de la vida ante todo definido como una transición (e.g. Goulart de Mendonça, 2007; Sepúlveda, 2013), y la importancia que constituye la conformación de una identidad en este momento de la vida parece contribuir a generar nuevas trayectorias individuales, capaces de reproducir a la vez que de cuestionar los mandatos sociales (e.g. Hammack & Toolis, 2015; Hammack & Pilecki, 2014; Andrews, Kinnvall & Monroe, 2015; Smorti, 2011). Con todo, la juventud atraviesa un período particularmente crítico entre el término de la formación educativa y el ingreso al mundo del trabajo (e.g. OIT, 2010; Jeria, 2009; Dávila León, 2002), es posible preguntarse qué ocurre con la relación entre el barrio y la ciudad en este período.

Si bien desde una perspectiva estricta de la movilidad social se podría suponer que los y las jóvenes que viven en barrios excluidos buscarán salir de estos y mejorar su calidad de vida, diversas investigaciones en la línea de la Psicología Ambiental han mostrado la mantención de sentimientos

de pertenencia y apego a lugar en los habitantes de contextos socio-territoriales desfavorecidos, precarios y/o estigmatizados (Kirkness, 2014; Jorgensen, 2010; Manzo, Kleit & Couch, 2008). A pesar de lo anterior, no existe aún evidencia respecto de cómo se da esta relación con el barrio entre los jóvenes que viven en contextos urbanos de exclusión, en particular, cuando se enfrentan a los distintos desafíos de la transición escuela-trabajo y, con ello, a los desafíos subjetivos propios de los procesos de integración y movilidad social. En este sentido, ¿cómo mantener una identidad ligada con el barrio de residencia, si es que tal relación existe, cuando el barrio de residencia es un barrio excluido y estigmatizado por la sociedad hegemónica?

La presente investigación se propone una mirada hacia las experiencias cotidianas en relación con la construcción de narrativas, tanto en el entorno directo de residencia de los jóvenes como en los trayectos de movilidad por la ciudad, en la medida en que se cree que ambas dimensiones están continuamente ligadas en el individuo, conformando su historia de vida y, con ello, su identidad. Así, el objetivo general de la investigación propuesta consiste en analizar cómo se articula la identidad de los jóvenes, en relación a los lugares que habitan cotidianamente (tanto barrio de residencia como lugares de movilidad), y comprender cómo se tensiona esta identidad durante la transición escuela-trabajo, en particular, cuando ésta implica moverse sistemáticamente fuera del barrio de residencia.

DISEÑO Y PARTICIPANTES

El diseño metodológico de la investigación fue de carácter explicativo-narrativo y se sitúa en lo que se considera el paradigma cualitativo de la investigación social. A partir de esto, se realizará un diseño basado en un número limitado de participantes que buscará un análisis sistemático de cada trayectoria individual, así como la comparación transversal de las trayectorias y la generación de posibles patrones y perfiles según los objetivos de la investigación, siguiendo los lineamientos del estudio de caso en investigación social (Stake, 1998). Además, teniendo en cuenta la necesaria advertencia de convertir la investigación cualitativa en una forma más de colonialismo o ejercicio de poder sobre grupos tan desconocidos como asimétricos (Denzin & Lincoln, 2005), interesa

especialmente la distinción que realiza Vasilachis de Gialdino (2009) al señalar la que la investigación cualitativa debe basarse en un genuino interés por conocer al otro, que será distinto del sujeto investigador existencialmente –es decir, tendrá una historia de vida diferente-, pero será igual esencialmente, por lo que la producción de datos debe fundamentarse en una relación simétrica, de tipo sujeto-sujeto.

De acuerdo con lo anterior, se desarrolló un diseño metodológico cualitativo que consideró un doble soporte epistemológico, incluyendo un enfoque biográfico-narrativo para abordar los procesos identitarios, a la vez que etnográfico, para considerar su relación con elementos socioespaciales del contexto urbano. A partir de lo anterior, se trabajó en la producción de datos por medio de cuatro encuentros, tres de los cuales fueron individuales y el último grupal, incluyendo técnicas como: la entrevista biográfica (Sharim, 2001), la entrevista caminando (Evans & Jones, 2011), la técnica del sombreado (Jirón, 2011), una cartografía participativa para definir los límites de lo que los y las jóvenes consideraban su barrio, y un grupo de discusión, en el cual se analizaron participativamente los primeros resultados transversales en conjunto con los participantes.

Respecto de los participantes, se incluyeron al menos un hombre y una mujer que hubiesen vivido la mayor parte de su vida en uno de los cuatro barrios seleccionados como excluidos, siguiendo los criterios de inclusión presentados en el Cuadro N°1, definidos según 1) elementos comunes, tales como: (a) un índice de pobreza urbana por comuna elevado, según lo desarrollado por Agostini, Brown & Góngora (2008), (b) la declaración de zona urbana prioritaria por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo [MINVU], debido a sus problemáticas socio-territoriales asociadas (MINVU, 2014-2018), y 2) criterios de variabilidad, considerando variables como: (c) la localización en el sistema urbano metropolitano de Santiago [SUMS], según la clasificación de De Mattos, y cols. (2014); (d) la orientación geográfica, que se considera una variable importante puesto que la ciudad de Santiago sigue patrones de segregación que han aumentado su grado de “malignidad” (Sabatini, et.al., 2001); (e) su presencia en la primera política pública urbana iniciada el año 2001 bajo el nombre de Barrio Seguro (SPD, 2013); y por último (f) un criterio metodológico que dice relación con el grado de experiencia previa de la tesista en cada barrio, que se incluyó como criterio por la importancia de variar el grado de familiaridad para maximizar las diferencias

en el proceso de conocimiento. La localización geográfica de los barrios se presenta en la Figura N°1.

La muestra final contó con un total de nueve participantes, de los cuales ocho participaron de los tres encuentros estipulados y uno sólo de dos encuentros, abandonando su participación antes del tercero. La muestra cuenta con cuatro mujeres y cinco hombres, de edades entre los 20 y los 27 años¹⁷² con una media de 24,22 años. El Cuadro N°2 presenta un resumen de los participantes consignando su edad, barrio de pertenencia, barrio de residencia actual, conformación actual de su hogar, y un resumen de su situación educativa/laboral.

Respecto del procedimiento de análisis, uno de los desafíos primordiales tuvo que ver con la articulación de datos de distinta modalidad (audiovisuales, visuales, narrativos, etnográficos, etc.), para lo cual se trabajó específicamente desde la noción de ‘ensamblaje de lugar’ desarrollada por Di Masso & Dixon (2015) que permite pensar la unidad semiótico-material como una unidad ontológica, epistemológica y metodológica. Luego de una primera fase de Análisis Temático (Braun & Clarke, 2006, 2013), se dio inicio a una fase de Análisis Biográfico-Narrativo, que buscó profundizar en los análisis de la primera etapa a través del estudio caso por caso, en clave biográfica y narrativa para discutir los procesos identitarios que desarrollaban los/as jóvenes en relación a su experiencia con los lugares biográficos y de tránsito. Además, se realizó un análisis transversal de las narrativas autobiográficas, el que involucró una mirada hacia los mandatos sociales que las circunscribían, o las denominadas narrativas maestras, mediante un procedimiento de muestreo de citas. Los resultados de este Análisis Biográfico-Narrativo son los que ocupan el centro de interés en el presente artículo, lo que se discuten en la siguiente sección.

¹⁷² Se consideraron las edades de los y las participantes al inicio de su participación en la investigación, lo que fue variando considerando que la producción de datos duró aproximadamente un año.

Cuadro N°1. Criterios de selección de ‘barrios excluidos’ en Santiago de Chile

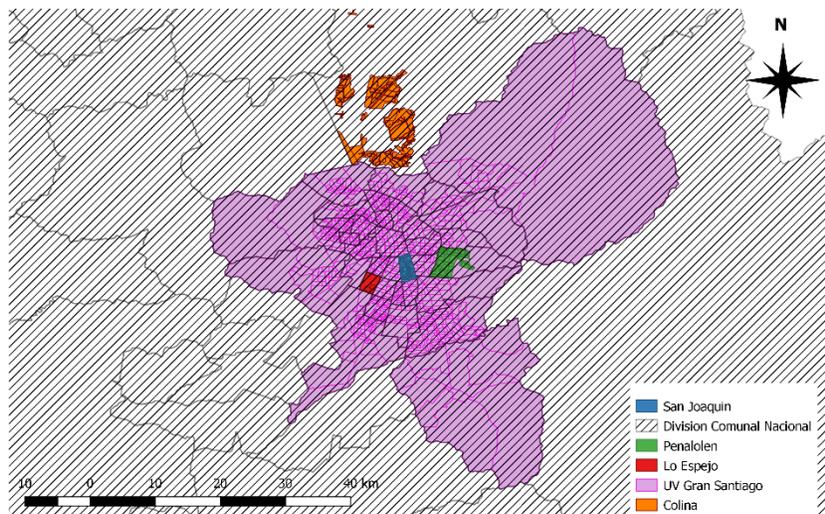
Comuna	Barrio	Criterio común		Máxima Variabilidad			
		Índice Pobreza	Zona Prioritaria	Localización SUMS	Orientación	Barrio Seguro	Experiencia investigadora
Colina	Los Robles	0,306	Sí	Fuera mancha urbana contigua	Norte	No	No
San Joaquín	La Legua	0,221	Sí	Dentro de A. Vespucio	Centro	Sí	Sí
Lo Espejo	José María Caro	0,229	Sí	Dentro de A. Vespucio	Sur-Poniente	Sí	No
Peñalolén	Lo Hermida	0,239	Sí	Fuera de A. Vespucio	Sur-Oriente	No	Sí

Elaboración propia basada en: De Mattos, Fuentes & Links (2014), Subsecretaría de Prevención del Delito (2013); Agostini, Brown & Góngora (2008); Sabatini, Cáceres & Cerda (2001).

Cuadro N°2. Resumen Participantes

Nombre	Edad	Barrio Pertenencia	Barrio actual	Con quién vive	Transición E-W
Andrea	20	Lo Hermida	Macul	Familia de origen	Trabajos esporádicos
Ester	23	Los Robles	Los Robles	Sola con hijo	Estudios universitarios y trabajo part-time
Farid	24	Los Robles	Los Robles	Familia de origen	Trabaja jornada completa con contrato
Bastían	27	Lo Hermida	Lo Hermida	Familia de origen	Profesional buscando trabajo hace un año
Bernardo	24	J. M. Caro	J. M. Caro	Familia de origen	En busca de trabajo hace un mes
Tomás	27	La Legua	San Miguel	Familia Pareja	Estudios universitarios y vende en Feria
Darinka	23	La Legua	San Miguel	Familia de origen	Estudios universitarios y trabajo part-time
Daniela	27	J. M. Caro	J. M. Caro	Familia de origen	Trabaja jornada completa en C. Comercial
Lautaro	23	J. M. Caro	J. M. Caro	Familia de origen	Trabaja jornada completa con contrato

Figura N° 1. Localización geográfica de comunas seleccionadas en el Gran Santiago



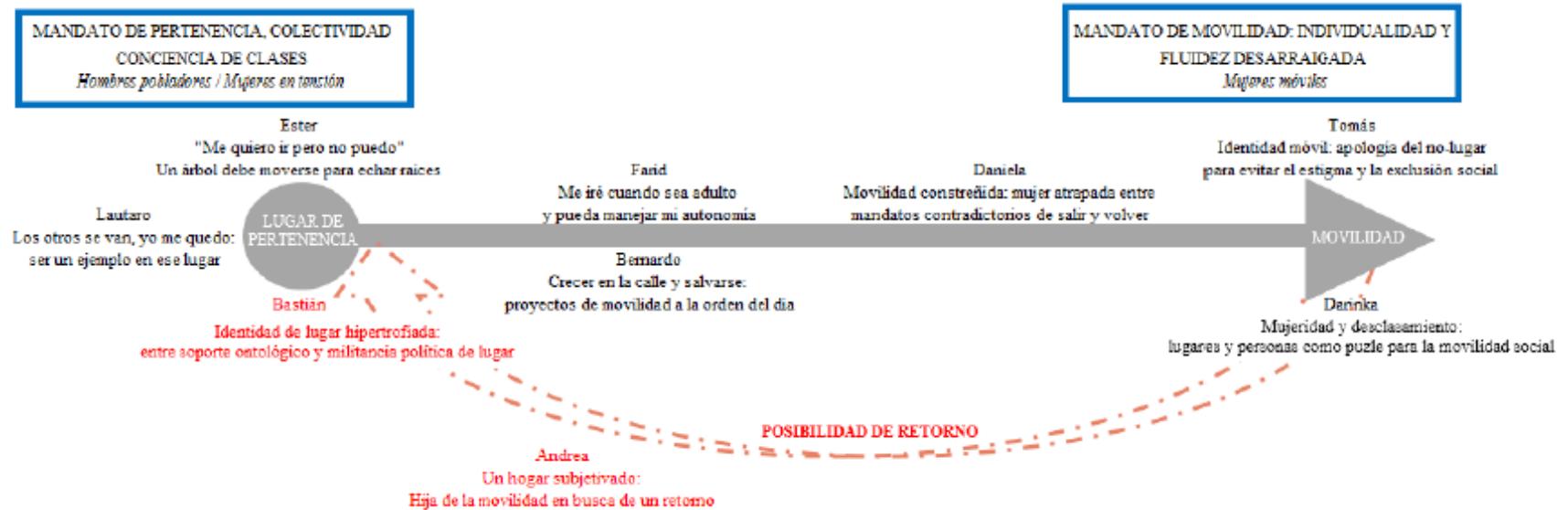
RESULTADOS

El Análisis Biográfico-Narrativo se compuso de tres etapas, la primera de ellas consistente en un análisis singular de cada relato inicialmente, caso por caso, que permitió reconstruir, profundizar y analizar interpretativamente los procesos de construcción identitaria para cada joven, mientras que la segunda etapa de análisis transversal buscó discutir los emergentes por caso a nivel comparativo entre casos (Sharim, 2001). Finalmente, en una tercera etapa se analizaron específicamente las narrativas maestras, o discursos en forma de mandatos y en voz de terceros que se incorporaban a las narrativas individuales, marcando las pautas familiares y sociales respecto de la trayectoria de movilidad social esperada.

Así, el procedimiento analítico seguido buscó hacer interactuar los procesos identitarios reconstruidos para cada joven con los ejes temáticos que atraviesan sus discursos individuales. El análisis singular se apoyó como material primordial de la transcripción del primer encuentro con cada joven, iluminado progresivamente con el material de los siguientes encuentros en movimiento (encuentros 2 y 3), mientras que las dos subsiguientes etapas se apoyaron en el muestreo de citas para respaldar las interpretaciones, así como en la comparación de materiales sintéticos del análisis singular, y finalizó con una articulación de los relatos en un marco o hilo conductor que tuvo como eje la relación pertenencia-movilidad y como fundamento la idea de la identidad como proceso performativo. Se presentan a continuación las principales discusiones emergidas del análisis transversal, considerando que esta se apoya en la etapa previa de análisis singular de casos, los que

fueron resumidos con un título por caso que sintetiza el hilo conductor de la interpretación analítica en clave biográfica y que se sintetizan en la Figura N°2.

Figura N°2. Identidades en tránsito: integración transversal de la transición identitaria entre la pertenencia a lugar y la movilidad socio-espacial



El lugar biográfico más allá de un apego ambivalente

En primer lugar, es importante destacar los distintos elementos que componen la relación con el lugar de origen, por definición un barrio excluido. De acuerdo a la investigación internacional en torno a la psicología ambiental, es posible observar la presencia de componentes comunes a los procesos de identidad y apego a lugar, tanto en términos de procesos psicológicos como la necesidad de continuidad biográfica y el sentimiento de familiaridad, y los sentimientos de apego afectivo-biográfico que significan el lugar como un sentirse en casa, un hogar, un lugar donde volver, como desde aspectos culturales como el vínculo transgeneracional con el barrio, incluso a pesar de la conciencia de sus características negativas (Lewicka, 2011; Droseltis & Vignoles, 2010). Bernardo señala textualmente, en esta línea: *“es mi comuna. A lo mejor no es la gran comuna y no tiene los grandes lujos, ¿cachai?, y no es la mejor tampoco, pero ahí tengo todos mis amigos po’, ahí está toda mi vida. Está el folclore, está lo que he armado yo, lo que te decía el otro día, que armé un grupo con amigos a la final, entonces está toda mi vida ahí, mi vida es Lo Espejo”* (Bernardo, E1, p. 268). Asimismo, coherente con la investigación que se ha realizado particularmente en contextos excluidos o desfavorecidos (Manzo, Kleit & Couch, 2008), los/as participantes dieron cuenta de la importancia de los lazos vecinales en sus relatos, a la vez que significaron el lugar tanto desde sus problemáticas como desde la negación de estas, lo que se constituye como un clásico ejemplo de procesos de apego ambivalente al lugar. *“Y lo beneficioso que, que tiene haber vivido acá es, por ejemplo, haber conocido la vida de barrio, ¿cachay?, todo lo que conlleva eso. El tema de las amistades que se crean aquí, ¿cachay? [...] Acá, como en estos sectores, se da eso del vecino, de estar ahí, ¿cachay? Del juntarse, por ejemplo, en la calle con los amigos”* (Tomás, E1, 26-32).

Sin embargo, algunos/as jóvenes de la muestra recuerdan las experiencias de infancia en la calle con la nostalgia de haber perdidos amigos/as y conocidos/as, justamente porque ellos habrían caído en los riesgos de la población, como la droga o la delincuencia, de los cuales los/as participantes habrían escapado gracias a estar resguardados/as de la calle, al mismo tiempo que siendo parte de ella: *“mi mamá era como, nos resguardaba harto en el tema de, de la droga, que estudiáramos, y nos metía a talleres y miles de cosas pa’ que no nos*

metiéramos en eso. Entonces después crecer y ver a tus amigos es super fome¹ po', verlos así como que van en la misma pará²'" (Darinka, E1, 464). Así, resulta interesante notar que la noción de ser resguardados/as en la casa para evitar los peligros de la calle, o bien que algún pasatiempo los/as salvó del destino fatalista de ser un joven en ese barrio y estar por ende asociado a delincuencia y narcotráfico, es algo que se repite entre distintos/as participantes: *"y ahí mi mamá ya después me entró. Definitivamente no me dejó salir más pa' la calle, se agarró³ con mi papá, le dijo que no me criaba más y me entraron, pero yo igual me arrancaba"* (Bernardo, E1, 150).

De esta manera la calle y el barrio se dibujan desde una contradicción: tanto el lugar de los recuerdos y los vínculos afectivos, como el lugar del que se tiene que escapar, simbólicamente, para no caer en sus peligros. Resulta interesante notar como distintos/as jóvenes mencionan en sus relatos el significado fuerte de salir y volver, lo que permite dar cuenta de la tensión que enfrentan entre el deseo -y el mandato- de salir del propio lugar, junto con la sensación de apego que se tiene con el lugar de origen, donde están sus vínculos, su infancia, sus historias autobiográficas. En este sentido, se trata más bien de una identidad de lugar desde el componente de la continuidad, es decir, del sentido de continuidad biográfico, incluso transgeneracional, como en el caso de Ester o Daniela, entre otros/as (Droseltis & Vignoles, 2010).

En este sentido, es interesante notar que uno de los temas transversales que emerge del análisis biográfico dice relación con los sentimientos de ambivalencia y la contradicción que se da en la experiencia del propio barrio para estos/as jóvenes. Así como se analizó a través del Análisis Temático, los distintos relatos dan cuenta de cómo conviven en la experiencia subjetiva tanto el registro de las problemáticas de violencia y peligrosidad del barrio, como los sentimientos afectivos de apego al barrio, elemento sin duda coherente con la literatura internacional que han concluido la persistencia de sentimientos de apego o pertenencia con el barrio de origen, a pesar de ser este un barrio desfavorecido o estigmatizado (Kirkness, 2014; Jorgensen, 2010; Manzo, et. al., 2008). De acuerdo con lo anterior, los resultados transversales del Análisis Biográfico vienen no sólo a dialogar con la literatura en el tema de

¹ Chilenismo referente a algo aburrido, mal evaluado, incluso deprimente.

² Abreviación de 'parada', referente a actitud.

³ Chilenismo referente a pelearse, tener un conflicto.

los vínculos persona-lugar en contextos desfavorecidos o excluidos, sino que además abre nuevas claves analíticas, en términos del peso identitario que toman estos lugares en algunos relatos autobiográficos.

Un lugar que tiene fuerza estructurante de la identidad

El análisis de las narrativas en clave biográfica permite a su vez profundizar respecto de la significación que tiene este lugar de vinculación afectiva para el proceso de construcción identitario. Respecto a esto, algunos elementos del análisis temático narrativo permiten notar que, en la mayoría de los participantes, aunque de manera más enfática en los hombres, la calle tiene un estatuto de significación potente, puesto que señalan haber pasado gran parte de su infancia en la calle, encontrando allí amigos y pasatiempos que recuerdan con nostalgia, incluso aludiendo en algunos casos a que se buscó en la calle un refugio emocional frente a los problemas que se vivían al interior de la casa: *“a mi esa huea’ [alcoholismo del padre] no me gustaba de mi casa, nunca me gustó, entonces andaba todo el día en la calle po’, ¿cachai?”* (Bastián, E1, 162). Por su parte, el caso de Andrea revela que su vinculación afectiva positiva con su barrio Lo Hermida, la que incluso la hace organizar un proyecto de retorno a vivir ahí considerando que su lugar de residencia actual está en otro barrio de mejores condiciones, es una vinculación donde barrio y casa van de la mano, donde el sentimiento de familiaridad y de sentir calidez en el hogar es aquel que organiza su relato y proyecto de retorno: *“aquí me siento como en mi casa, mi, mi, mi comuna, mi casa... Conozco todo, entonces me gusta más estar acá. Y, eso. Eso es lo que más me gusta de estar acá”* (Andrea, E1, 6). Incluso, llama la atención como el valor del hogar-barrio, en estos casos, parece tener un estatus identitario de bastante saliencia, siendo en muchos casos la forma en que estos/as jóvenes se presentan a sí mismos/as y organizan su relato identitario.

Asimismo, algunos casos muestran más claramente lo que en la literatura clásica sobre apego a lugar se ha denominado como la función de interioridad social, que refiere al sentimiento de reconocimiento social, de ser alguien en un contexto social determinado, ser conocido y reconocido por los demás en ese lugar (Rowles, 1983): particularmente llama la atención en casos como Farid, Bernardo, Lautaro y Bastián, que señalan explícitamente: *“conozco demasiada gente, por decirte, que conozco mucha gente, me conoce mucha gente... Yo te digo que aquí en Colina, el 70-80% de Colina me conoce”* (Farid, E1, 165); o *“yo me paraba*

aquí en Grecia y le decía “oye viejo, ¿me llevai’ pal’ paradero?”, “¿Y quién soy yo?”, “yo soy hijo del [Apodo Padre]”, “ah, ya, súbete”. Y me llevaban, pero yo te digo así la huea’ desde los siete años. Yo desde los siete años que sé andar solo en la calle” (Bastián, E1, 160).

Aún más, algunos jóvenes parecen construir narrativas que dan cuenta de una verdadera identidad de lugar hipertrofiada, de acuerdo con el análisis singular presentado en el apartado anterior, como es el caso de Bastián y Lautaro, jóvenes que se sienten particularmente identificados como pobladores y donde el lugar parece cumplir una función que excede al recuerdo autobiográfico: resulta casi en un estatuto de seguridad ontológica. Por ejemplo, en el relato reconstruido de Bastián se señala textualmente que *“mediado por la conciencia de clases y la exaltación de la identidad de lugar, Bastián se convierte así en un poblador militante casi como de antaño, con el mandato implícito de nunca salir de ahí sino de quedarse para transformar; porque estar ahí para él implica ser”* (Informe, p. 14), mientras que el cuaderno reflexivo de Lautaro se refiere *“la identidad de lugar en este caso tiene una operación casi simbiótica a la base y funciona al modo de una garantía identitaria fundante: todo ocurre en el mismo lugar, su lugar, que le provee identidad y anclaje”* (Informe, p. 27). Por su parte Andrea, una de los/as tres jóvenes que representan movilidad residencial en la muestra, da cuenta de un proyecto de retorno a su lugar de origen pues, en sus palabras: *“de verdad siento que no debería haberme ido de acá porque... Como que con mi abuela lo tengo todo. Si bien ahora vivo con la señora de mi papá y él, es una casa inmensa, es hermosa, tengo todo, todo, hasta tele con 3D, pero no me gusta estar ahí. Como que no me siento en casa”* (E1, p. 20).

En definitiva, el lugar de pertenencia se presenta para estos jóvenes, tanto desde la vinculación afectiva y los recuerdos positivos de haber tenido una infancia transcurrida principalmente en las calles y con amigos del barrio, a la vez que marcando las problemáticas de peligro y estigma asociadas al lugar. En este sentido, llama la atención la predominancia de narrativas maestras que parecen relevar la importancia de la individualidad, es decir, de las características personales que permiten salirse de las problemáticas de delincuencia y drogas en las que otros jóvenes del barrio han entrado. Resulta interesante, en este mismo sentido, que todos/as los/as jóvenes de la muestra refieren tener algún pasatiempo significativo que los habría literalmente *salvado* de estas problemáticas, al modo de una escapatoria: el baile, el skate, la intervención comunitaria, el arte, entre otros, parecen ser

gustos personales que cumplen a la vez la función de proteger a los/as jóvenes de la vida de barrio en su dimensión más perjudicial. Pero, al mismo tiempo, algunos casos se relacionan con el lugar como punto de anclaje subjetivo, como centro gravitacional de la identidad, en la medida en que, salvados/as de sus problemáticas por medio de estas escapatorias y pasatiempos, encuentran en el barrio relaciones afectivas que proveen de una seguridad ontológica que parece esquiva en las relaciones familiares o en la trayectoria biográfica, marcada por cambios de casa, inestabilidad familiar y/o experiencias de abandono que los/as llevan a buscar en el barrio o la casa la fuente de la estabilidad.

La movilidad: ¿solución al estigma de lugar, mandato familiar o emancipación subjetivada?

Por último, otro de los temas emergentes del análisis biográfico-narrativo dice relación con los significados de la movilidad que se cuelean en las historias de vida de los/as participantes. Al respecto, destacan tres dimensiones principales relacionadas con el significado de la movilidad, a saber: i) la movilidad que es significada como pérdida (de redes, de afectos, de recuerdos, del sentimiento de familiaridad por el ir hacia algo desconocido); ii) la movilidad como búsqueda personal, deseo de individuación que se lograría mediante abandonar la zona de confort, y que en algunos casos incluso llega a constituirse como una verdadera movilidad subjetivante; y iii) la movilidad como la encarnación en la propia historia del lugar de los otros, es decir, significar la movilidad desde los desafíos que implican relacionarse con otros distintos (hablar bien, vestirse diferente, tener un lenguaje apropiado, saber llegar de manera respetuosa, etc.), o bien apropiarse -más o menos conscientemente- del mandato familiar de movilidad social.

Partiendo por el tercer elemento de los citados, respecto de la dimensión estigmática del lugar, resulta interesante notar que los/as jóvenes hablan de experiencias vinculadas con el estigma de lugar, encarnado muchas veces en ellos/as mismos/as como representantes del territorio, cuando se encuentran en movilidades exploratorias, es decir, a través de micro-interacciones con personas de otros lugares de Santiago. En este sentido, varios/as jóvenes de la muestra desarrollan narrativas que rescatan el valor que tiene su lugar de pertenencia en términos de afirmación identitaria. Si bien las citas que recogen el estigma recibido por

vivir en tal barrio dan cuenta de la dificultad para integrarse socialmente cuando se vive ahí, cuando se señala “yo iba en la Básica cuando Los Robles... ¡Escándalo! (Risas) [¿Qué, te decían eso? ¿La gente se escandalizaba?] No tan explícito pero era como... ¡Ah, Los Robles! Y hasta el día de hoy po’. [...] ¡Ah, cuidado que soy Roblina! Porque... ¡de Los Robles po’! Los Robles, es flaité⁴ Los Robles” (Ester, E1, 201-205), el estigma aparece siempre en la voz de los otros de afuera y su integración al propio proceso identitario parece no ser siempre posible o, al menos, presentarse desde la contradicción afirmación-negación, es decir, relatando escenas de estigma a la vez que negando su relevancia en términos identitario-afectivos. Con todo, algunos/as jóvenes pueden incorporar esta ambivalencia contradictoria hacia sus proyectos de implicación subjetiva en el barrio, por ejemplo, a través de la posibilidad de intervenir el barrio para cambiarlo. De esta manera, la idea de la intervención social en el espacio para ayudar, cambiar, transformar las problemáticas del lugar parece operar aquí como una forma en que los/as participantes adoptan la mirada del otro desde el afuera de la población, y a partir de ello se empoderan para cambiarla desde adentro, en la voz del ‘soy distinto/a pero igual’: “quizás hacerlo [ejercer su profesión] también no sé, en la comuna de La Pintana, en comunas que igual tengan vulnerabilidad po’. [...] O sea no es tampoco por, por eeh segmentar a la, la población, pero eeh en realidad son la gente que igual necesita más ayuda po’” (Darinka, E1, p. 1308-1312).

En tercer lugar, es interesante notar que los/as jóvenes que desarrollan más cabalmente las narrativas de movilidad dan cuenta de procesos de movilidad constreñida, desclasamiento, y movilidad social que necesita retornar a su origen, siguiendo la línea de lo planteado por investigaciones recientes que plantean que las experiencias subjetivas de individuos que se mueven ascendentemente en la escala social tiene que ver con el conflicto de clases y el sentirse de ninguna parte, debiendo ofrecer cuentas a la clase de origen, así como sintiéndose fuera de su clase de destino (Castillo, 2016; Salinas & Riquelme, 2015). Así también, es interesante notar que en todos los casos las narrativas de movilidad estuvieron presentes en los relatos, no quedando claro en todos los casos el porqué de las ganas de salir del barrio: la idea de la movilidad geográfica aparece bajo la forma de la obiedad, vacía de significación

⁴ “Flaité” es la denominación en Chile para persona de nivel socioeconómico bajo. Frecuentemente puede encontrarse vinculado con actividades delictuales y con una actitud displicente, considerándose un concepto de carácter peyorativo.

subjetiva. Lo anterior permite pensar que, en algunos casos al menos, la movilidad socioespacial puede constituirse como un mandato social implícito, o bien explícito, que los/as jóvenes cuelan en sus relatos y se apropian, más o menos, desde sus propios proyectos identitarios.

CONCLUSIÓN

El lugar como fuente de seguridad ontológica

Lo relevante del presente análisis es que permite plantear que el lugar de pertenencia, en todos estos casos, se constituye a la vez como un espacio de significación biográfica, por los recuerdos que se asocian ahí y cómo la propia historia se ancla a estos territorios, como también una referencia simbólico-afectiva que provee de seguridad ontológica, ahí donde la identidad se ve amenazada por la movilidad. Considerando que se trata de lugares de origen que por definición son depositarios de estigma y exclusión social, resulta relevante y novedoso comprender hasta qué punto la necesidad de salir de ahí, por los mandatos de movilidad social y espacial propios de habitar en un espacio segregado, entra en contradicción profunda con la importancia que tienen estos lugares para muchos/as jóvenes que relatan, por ejemplo, haber encontrado sus principales redes afectivas en el espacio de la calle y la cotidianidad barrial.

Además, es posible hipotetizar que la fuerza identitaria con que opera el lugar, como fuente simbólica capaz de proveer seguridad existencial, es una característica dada por la extrema condensación de valores identitarios que se juegan en estos lugares biográficos: vivir en La Legua, la José María Caro, Los Robles o Lo Hermida, no es vivir en un lugar inocuo, y por ende sentirse apegado afectiva, biográfica y/o subjetivamente a estos lugares, conlleva una decisión subjetiva de fuerza identitaria estructurante, inapelable. Asimismo, querer salir de ahí, es también acceder a mandatos societales hegemónicos sobre lo deseable e indeseable en una sociedad, contestando o retomando la apología de la movilidad como método de integración social por excelencia, por lo que, más o menos incrustado en los discursos, estos/as jóvenes parecen obligados a tomar una posición respecto de dónde quieren vivir, posición que no es en ningún caso sólo individual sino que conlleva la condensación de mandatos sociales de carácter dilemático.

En definitiva, el lugar de pertenencia se presenta para estos jóvenes a la vez desde la vinculación afectiva y los recuerdos positivos de haber tenido una infancia transcurrida principalmente en las calles y con amigos del barrio, a la vez que marcando las problemáticas de peligro y estigma asociadas al lugar. A su vez, las narrativas de movilidad parecen girar en torno a la solución del estigma de lugar proyectado en una movilidad potencial que suspende la identidad de lugar estigmática, así como a un proceso de subjetivación autónomo que debe liberarse de los mandatos familiares y las voces de otros: aunque el resultado final cumpla con lo esperado familiarmente por los padres o la sociedad, los/as jóvenes deben contestarlo y apropiárselo, y la movilidad entonces se vuelve un tránsito de este tipo de proyecto de autonomía.

Referencias bibliográficas

- Abrams, D. & Hogg, M. (1988). *Social identifications: a social psychology of intergroup relations and group processes*. Ed. Routledge.
- Agostini, C.; Brown, P. y Góngora, D. (2008). Distribución espacial de la pobreza en Chile. *Estudios de Economía*, 35(1): 79–110. doi: 10.4067/S0718-52862008000100005.
- Álvarez, P. (2014). *Legua Emergencia: una historia de dignidad y lucha*. Ediciones Universidad Diego Portales, 1era Edición. Santiago, Chile.
- Álvarez, A. M. & Cavieres, H. (2016). El Castillo: territorios, sociedad y subjetividades de la espera. *Revista EURE*, 42(125): 155–174 [sin doi asignado].
- Andrews, M.; Kinnvall, C. & Monroe, K. (2015). Narratives of (in)security: Nationhood, culture, religion and gender. *Political Psychology*, 36(2): 141–150. doi: 10.1111/pops.12224.
- Aparicio-Castillo, P. Ch. (2013). Educar y trabajar en contextos de precariedad y desigualdad en América Latina. Jóvenes en debate. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11 (2): 527–546. doi: 10.11600/1692715x.1125121012
- Aubert, N. (2006). L'individu hypermoderne et ses pathologies. *L'Information Psychiatrique*, 82 (7): 605-610. [sin doi asignado]
- Bauman, Z. (2003). *City of fears, city of hopes*. London: Goldsmith College, University of London.
- Blascovich, J.; Wyer, N.; Swart, L. & Kibler, J. (1997). Racism and racial categorization. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(6): 1364-1372. [sin doi asignado]
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2): 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa
- Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2013). *Successful qualitative research. A practical guide for beginners*. London, UK.
- Brenner, N. (2013). Tesis sobre la urbanización planetaria. *Nueva Sociedad*, n° 243. [sin doi asignado]
- Brewer, M. (1999). The Psychology of Prejudice: Ingroup love or Outgroup hate? *Journal of Social Issues*, 55(3): 429-444. [sin doi asignado]
- Briceño-León, R. (2007). Violencia urbana en América Latina: un modelo sociológico de explicación. *Espacio Abierto*, 16 (3): 541–574. [sin doi asignado].
- Brown, R. (1995). Prejuicio. Su *Psicología Social*. Traducción María Soledad y Andrés Gómez. Ed. Alianza. Madrid.
- Castillo, M. (2016). Fronteras simbólicas y clases medias. Movilidad social en Chile. *Revista Perfiles Latinoamericanos*, 24 (48): pp. 213 – 241. doi: 10.18504/pl2448-009-2016
- Dávila León, O. (2002). Biografías y trayectorias juveniles. *Última Década*, 17: 97–116. [sin doi asignado]

- De Mattos, C. (2010). Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina. De la ciudad a lo urbano generalizado. *Revista de Geografía Norte Grande*, 47: 81–104. [sin doi asignado]
- De Mattos, C.; Fuentes, L. & Link, F. (2014). Tendencias recientes del crecimiento metropolitano en Santiago de Chile: ¿Hacia una nueva geografía urbana? *INVI*, 29 (91): 193–219. [sin doi asignado]
- Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). Introducción general. La investigación cualitativa como disciplina y como práctica. En N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.). *El campo de la investigación cualitativa*. Barcelona: Editorial Gedisa
- Di Masso, A. & Castrechini, A. (2012). Crítica imaginativa de la ciudad contemporánea. *Athenea Digital*, 12(1): 3-13. [sin doi asignado]
- Di Masso, A.; Castrechini, A. & Valera, S. (2014). Displacing xeno-racism: the discursive legitimation of native supremacy through everyday accounts of ‘urban insecurity’. *Discourse & Society*, 25 (3): 341-361. doi: 10.1177/0957926513519531
- Di Masso, A. & Dixon, J. (2015). More than words: place, discourse and the struggle over public space in Barcelona. *Qualitative Research in Psychology*, 12: 45-60. Doi: 10.1080/14780887.2014.958387
- Di Masso, A.; Vidal, T. & Pol, E. (2008). La construcción desplazada de los vínculos persona-lugar: una revisión teórica. *Anuario de Psicología*, 39(3): 371-385. [sin doi asignado]
- Droseltis, O. & Vignoles, V. (2010). Towards an integrative model of place identification: dimensionality and predictors of intrapersonal-level place preferences. *Journal of Environmental Psychology*, 30: 23-34. doi : 10.1016/j.jenvp.2009.05.006
- Evans, J. & Jones, P. (2011). The walking interview: methodology, mobility and place. *Applied Geography*, 31: 849-858. doi: 10.1016/j.apgeog.2010.09.005
- Flick, U.; von Kardoff, E. & Steinke, I. (2004). *A companion to qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage. California, EEUU.
- Gallart, M. A. (2001). Poverty, youth and training: a study on four countries in Latin America. *Compare*, vol. 31 (1): 113-128. doi: 10.1080/03057920020030199.
- Goulart de Mendonça, M. P. (2007). *Processo de Transição e Percepção de Aduldez: Análise Diferencial dos Marcadores Identitários em Jovens Estudantes e Trabalhadores*. Tesis para Obtención de Grado de Magíster en Psicología y Ciencias de la Educación, Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Porto, Brasil.
- Gustafson, P. (2001). Roots and routes. Exploring the relationship between place attachment and mobility. *Environment and Behavior*, 33(5): 667–686. [sin doi asignado]
- Gustafson, P. (2009). Mobility and territorial belonging. *Environment and Behavior*, 41 (4): 490–508. doi: 10.1177/0013916508314478
- Gutiérrez, A. (2012). ¿Qué es la movilidad? Elementos para (re) construir las definiciones básicas del campo del transporte. *Bitácora*, 21(2): 61–74. [sin doi asignado]
- Hammack, P. L. & Pilecki, A. (2014). Methodological approaches in political psychology: discourse and narrative. En: T. Capelos, H. Dekker, C. Kinnvall & P. Nerbitt-Larking (Eds.). *The palgrave handbook of global political psychology*, p. 79 – 98. New York: Palgrave Macmillan.
- Hammack, P.L. & Toolis, E. (2015). Identity, politics, and the cultural psychology of adolescence. En: L. Jensen (Ed.), *Oxford handbook of human development and culture*, Cap. 24: 396–409. New York: Oxford University Press.
- Jeria, M. (2009). Exploring quality of life during the transition from school to work in Chile. *Social Indicators Research*, 94: 319–342. doi: 10.1007/s11205-008-9425-2
- Jirón, P. (2007). Unravelling invisible inequalities in the city through urban daily mobility: the case of Santiago de Chile. *Swiss Journal of Sociology*, 33 (1): 45–68. [sin doi asignado]
- Jirón, P.; Lange, C. & Bertrand, M. (2010). Exclusión y desigualdad: retrato desde la movilidad cotidiana. *Revista INVI*, 25(68): 15–57. [sin doi asignado]
- Jirón, P. (2011). On becoming “la sombra/the shadow”. En: M. Buscher, J. Urry & K. Witchger (Eds.). *Mobile methods*. Ed. Routledge. Nueva York, EEUU.
- Jirón, P. & Mansilla, P. (2013). Atravesando la espesura de la ciudad: vida cotidiana y barreras de accesibilidad de los habitantes de la periferia urbana de Santiago de Chile. *Revista del Norte Grande*, 56: 53-74. [sin doi asignado]
- Jorgensen, A. (2010). The sense of belonging in new urban zones of transition. *Current Sociology*, 58(1): 3-23. doi: 10.1177/0011392109348542

- Jurado de los Santos, P.; Olmos Rueda, P. & Pérez Romero, A. (2015). Los jóvenes en situación de vulnerabilidad y los programas formativos de transición al mundo del trabajo. *Educación*, 51 (1): 211–224. doi: 10.5565/rev/educar.648
- Katzman, R. (2009). La dimensión espacial de la cohesión social en las grandes ciudades de América Latina. En: Seminario Regional CEPAL: Alcanzando convergencias en la medición de la cohesión social. Santiago de Chile.
- Kirkness, P. (2014). The cities strike back: restive responses to territorial taint in the French banlieues. *Environment and Planning A*, 46: 1281-1296. Doi: 10.1068/a45636
- Krauskopf, D. (2011). Enfoques y dimensiones para el desarrollo de indicadores de juventud orientados a su inclusión social y calidad de vida. *Última Década*, 34: 51–70. [sin doi asignado]
- Kruijt, D. y Koonings, K. (2007). Actores armados y ciudades fragmentadas. *Foreign Affairs (En Español)*, 7(2): 11-21. [sin doi asignado]
- Kruijt, D. (2008). Violencia y pobreza en América Latina: los actores armados. *Pensamiento Iberoamericano*, n°2: 55-70. [sin doi asignado]
- Lewicka, M. (2011). Place attachment: how far have we come in the last 40 years? *Journal of Environmental Psychology*, 31: 207-230. doi: 10.1016/j.jenvp.2010.10.001
- Lin Muñoz, T. (2012). Desarmar el laberinto. Violencia, estructura física e intervención en Legua Emergencia. Tesis presentada al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Arquitecto y grado académico de Magíster en Desarrollo Urbano. Santiago, Chile.
- Lypovetsky, G. (2003). *La era del vacío*. Ed. Anagrama. Barcelona, España.
- Machado Bogus, L. M. (2008). Urban segregation: A theoretical approach. In: 54th International Federation of Housing and Planning, v.1, p.1120-1135. Chicago: University of Illinois.
- Manzo, L. (2005). For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning. *Journal of Environmental Psychology*, 25: 67-86. doi : 10.1016/j.jenvp.2005.01.002
- Manzo, L.; Kleit, R. & Couch, D. (2008). “Mooving three times is like having your house on fire once”: the experience of place and impeding displacement among public housing residents. *Urban Studies*, 45 (9): 1855-1878. doi: 10.1177/0042098008093381
- Marcuse, P. (2001, Julio) Enclaves yes, ghettos, no: segregation and the state. Presentado en: “International Seminar on Segregation in the City”, Lincoln Institute of Land Policy. Conference Paper.
- McLean, K. & Syed, M. (2015). Personal, master, and alternative narratives: an integrative framework for understanding identity development in context. *Human Development*, 58 (6): 318 – 349. doi: 10.1159/000445817.
- Mingione, E. (1997). The current crisis of intensive work regimes and the question of social exclusion in industrialized countries. *Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung / Social Science Research Center Berlin, Discussion Paper FSI: 97-105*. Extraído de: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/44062/1/246405481.pdf>
- Mingione, E. & Oberti, M. (2003). The struggle against social exclusion at the local level. *European Journal of Spatial Development*, n°1. Extraído de: <http://www.sociologyofeurope.unifi.it/upload/sub/Presentazioni/Mingione%202.pdf>
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo [MINVU] (2014-2018). Zonas prioritarias 2014-2018. Extraído de: http://www.minvu.cl/opensite_20140214175813.aspx
- Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2010). Trabajo decente y juventud en América Latina. Proyecto Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (Prejal): 248 pág. Impreso en Perú.
- Ortega, T. (2014). Criminalización y concentración de la pobreza urbana en barrios segregados. Síntomas de guetización en La Pintana, Santiago de Chile. *Eure*, 40(120): 241–263. [sin doi asignado]
- Prevot-Schapiro, M. F. (2005). De l’usage de la fragmentation urbaine en Amérique Latine (vue de Buenos Aires). *Bulletin de l’Association de Géographes Français*, 82(4): 483–495. [sin doi asignado]
- Proshansky, H. (1976). Environmental psychology and the real world. *American Psychologist*: 303-310. [sin doi asignado]
- Proshansky, H.; Fabian, A. & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: physical world socialization of the self. *Journal of Environmental Psychology*, 3: 57-83. [sin doi asignado]
- Rasse, A. (2015). Juntos pero no revueltos. Procesos de integración social en fronteras residenciales entre hogares de distinto nivel socioeconómico. *Eure*, 41 (122).
- Rodgers, D. (1999). Youth Gangs and Violence in Latin America and The Caribbean: A literature survey. Latin American and Caribbean Region Sustainable Development Working Paper, n°4, The World Bank.

- Rodríguez, P. (2016). El debilitamiento de lo urbano en Santiago, Chile. *Revista Eure*, 42 (125): 61-79. [sin doi asignado]
- Rosa, H. (2012). *L'accélération*. Éditions La Découverte. Paris, France.
- Rowles, G. (1983). Place and personal identity in old age: observations from Appalachia. *Journal of Environmental Psychology*, 3: 299 – 313. [sin doi asignado]
- Ruiz Flores, J. C. (2012). Violencias en la periferia de Santiago. La población José María Caro. *INVI*, 26(74): 249–285. [sin doi asignado]
- Sabatini, F.; Cáceres, G. & Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las últimas tres décadas y posibles cursos de acción. *Revista EURE*, 27(82). doi: 10.4067/S0250-71612001008200002
- Sabatini, F.; Arenas, F. & Núñez, A. (2011). Identidades territoriales en Chile: entre la globalización y el regionalismo. *Scripta Nova*, vol. XV(370). Extraído de: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-379.htm>
- Salinas Ponce, V. & Riquelme Jirón, C. (2015). Experiencias y subjetividades de la movilidad social en Chile: mujeres profesionales provenientes de distintas clases sociales. *Persona y Sociedad*, vol. XXIX (3): 87 – 102. [sin doi asignado]
- Saravi, G. y Makowski, S. (2011). Social exclusion and subjectivity: Youth expressions in Latin America. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 16(2): 315–334. doi: 10.1111/j.1935-4940.2011.01160.x
- Sassen, S. (2003). Globalization or denationalization? *Review of International Political Economy*, 10 (1): 1-22 [Editor's Note]. [sin doi asignado]
- Sepúlveda, L. (2013). Juventud como transición: elementos conceptuales y perspectivas de investigación en el tiempo actual. *Última Década*, 39: 11-39. [sin doi asignado]
- Sharim, D. (2001). Los relatos de vida como herramienta para la investigación y formación clínica. *Revista Psykhé*, 10 (2): 71-76. [sin doi asignado]
- Smorti, A. (2011). Autobiographical memory and autobiographical narrative. What is the relationship? *Narrative Inquiry*, 21(2): 303–310. doi: 10.1075/ni.21.2.08smo1
- Stake, R. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata.
- Subsecretaría Prevención del Delito [SPD] (2013). *Compendio buenas prácticas en prevención del delito*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública [Chile]. Extraído de: <http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/Compendio%20Buenas%20Practicas%20VF.pdf>
- Tajfel, H. & Turner, J. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. En: Worchel, S. & Austin, W. (Eds.). *Psychology of Intergroup Relations*. Second Edition. The Nelson-Hall Series in Psychology. Nelson-Hall Publishers. Chicago, EEUU.
- Toolis, E. & Hammack, P. (2015). The lived experience of homeless youth: a narrative approach. *Qualitative Psychology*, 2 (1): 50 – 68. doi: 10.1037/qup0000019
- Valera, S. & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la Psicología Social y la Psicología Ambiental. *Anuario de Psicología*, n°64: 5-24. [sin doi asignado].
- Vasilachis de Gialdino, I. (2009). Los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la investigación cualitativa. *Forum: Qualitative Social Research*, 10(2), Art. 30. [sin doi asignado]
- Villarreal, J. (1997). *La exclusión social*. Grupo Editorial Norma. Buenos Aires, Argentina.
- Wacquant, L. (2001). *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Editorial Manantial. Buenos Aires, Argentina.
- Wacquant, L. (2007). *Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado*. Siglo XXI Editores, 1era Edición. Buenos Aires, Argentina.
- Ziccardi, A. (2008). Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI. En: Sader, E. (Ed.) y Ziccardi, A. (Comp.). *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI*. Siglo del Hombre Editores, Clacso-Crop. Bogotá, Colombia.

Indice de Autores/as

Antón, Mattioni y Granovsky ⁴
Carrascosa ¹⁸
González Cuatianquis ⁴²
Rey⁶²
Lecaro y Gorri ⁷³
Veliz Bravo⁹⁵
Marín y Ojeda¹¹⁸
Aban Tamayo¹³⁰
Pérez-Roa y Troncoso Pérez¹⁵²
Güémez ¹⁷²
Hiller, Aguinaga, Barrionuevo y Paris¹⁹³
Gutiérrez y Mansilla²¹⁵
Seissus ²³⁷
Carabaca Videla²⁵⁹
Sosa Marín²⁷⁷
Ilabaca y Corvalán²⁹⁶
Avalos y Espejo³¹⁵
Cortés Muñoz³²⁶
Matus y Ramoneda³⁴⁵
Hernán Saavedra ¡Error! Marcador no definido.
Pérez-Roa y Ayala³⁶⁸
Marín y Ojeda³⁸³
Scarponetti*³⁹⁷
Avalos⁴²¹
Espejo⁴³⁷
Márquez Ossandón⁴⁵⁰
Rodríguez Olaya*⁴⁷²
Ortale y Santos⁴⁸⁵
Toyos⁵⁰⁵
Ropert, Sharim y Di Masso⁵²²
